

EL GOBIERNO FORAL
DEL
SEÑORÍO DE VIZCAYA

EL
GOBIERNO Y RÉGIMEN FORAL

DEL
SEÑORÍO DE VIZCAYA

DESDE EL REINADO DE FELIPE SEGUNDO

HASTA LA MAYOR EDAD DE ISABEL SEGUNDA

FOR
DON FIDEL DE SAGARMÍNAGA

~~~~~  
**TOMO OCTAVO**  
~~~~~



BILBAO
TIPOGRAFÍA CATÓLICA DE JOSÉ DE ASTUY
CARRERA DE SANTIAGO NÚMERO 1
1892

A LA MEMORIA

DE MI HIJO PABLO, MI CARINOSO COMPAÑERO DURANTE MUCHOS
AÑOS, CONSAGRO ESTA OBRA, YA QUE NO PUGO AL SEÑOR PER-
MITIRLE QUE LA VIESE TERMINADA.

30 DE JUNIO DE 1892



EL GOBIERNO Y RÉGIMEN FORAL

DEL

SEÑORIO DE VIZCAYA

CAPÍTULO I



ACORDÓ la Diputación el 17 de Enero excitar el celo de todos los vizcaínos á que contribuyesen á remediar las desgracias ocurridas en Larrabezúa, donde se habían quemado veinte y cuatro casas, con los efectos, ganados y mieses que había en ellas.

Se celebró el 21 Regimiento general, con asistencia de los Padres de Provincia, para tratar del real decreto de 2 del corriente sobre el nuevo código de comercio, y de una real orden del 13, por la cual se rebajaba á las Provincias Vascongadas el número de hombres correspondiente á los reemplazos anteriores que hubiesen cubierto en metálico, disponiendo que cubran también el número que les falte, como se les concedió por real orden de 21 de Mayo de 1827, y que con respecto á la presente quinta completen por esta vez su contingente como mejor les parezca. Se acordó convocar in-

mediatamente á Junta general extraordinaria para tratar de ambos puntos.

La Junta general se reunió el 4 de Febrero, limitándose en su primera sesión á nombrar la comisión revisora de poderes.

Esta comisión presentó su dictamen el día siguiente, diciendo: que se hallaban en forma legal los poderes presentados; que por lo que respecta al concepto político de los representantes, encuentra que el Síndico de Bermeo ha sustituido el poder en Don Melitón de Bulucua, actual Alcalde de dicha Villa, el cual estando en Bayona de Francia á últimos de 1822, fué convocado por la Diputación de Vizcaya, que venía á restablecerse en este Señorío, con orden de la Regencia, para que se reuniese á ella como uno de los Síndicos, y no concurrió, por no comprometerse, según contestó, sin que tampoco fuese repuesto en su destino en 1823 cuando se repuso á las autoridades legítimas que cesaron en 1820; que encuentra también que Don Juan José María de Yandiola á quien confiere su poder la Villa de Lanestosa, en defecto de Don Silverio Luis de Usabel, carece de aptitud para sustituir al expresado Usabel, pues llegando el caso de tener que sustituirle recordaría la comisión lo que se informó respecto de Yandiola á las Juntas generales en Julio del año próximo pasado, añadiendo que recibe sueldo del Señorío por jubilación.

Aprobó la Junta el dictamen de la comisión, acordando que pasen á la misma los documentos de purificación presentados por Bulucua acerca de la nota que se le había puesto, como también los indicados por el Padre de Provincia Don Francisco Javier de Bátiz sobre el mismo asunto; y que hasta que informe nuevamente la comisión sobre ellos, pueda asistir Bulucua á la Junta sin voto.

Se leyó una real cédula dada el 2 de Enero, por la cual

se mandaba que en las Juntas, presididas por el Corregidor ó su Teniente, se tome conocimiento del código de comercio promulgado en 30 de Mayo de 1829, y que todos concurren en el Señorío «á cumplirla y ejecutarla, sin dar lugar á la menor contravención, ni pretextar incompatibilidad de Fueros, que no pueden verificarse en esta materia, para uniformar en todos mis Reinos y Señoríos este importante ramo de la legislación á fin de que tenga el debido cumplimiento en las Provincias Vascongadas, á las cuales mis gloriosos progenitores dieron, atendidos los tiempos, las ordenanzas de comercio que tuvieron por conveniente.»

Se leyeron también una carta orden del Consejo, remitiendo la real cédula para su cumplimiento, y una real orden, comunicada por el Ministerio de Hacienda el 29 de Enero al Diputado general del Señorío de Vizcaya, que es como sigue:

«He dado cuenta al Rey N. S. de un oficio que ha dirigido al Ministerio de mi cargo el Consulado de Bilbao, ya extinguido, en que manifestaba que habiéndole sido preciso escuchar la voz de la Diputación general de ese Señorío para poder observar las leyes comprendidas en el código de comercio sancionado por S. M. en 30 de Mayo de 1829; la Diputación en nada ha encontrado que poner reparo de cuanto contiene dicho código en su parte esencial ó fondo constitutivo, pues todo se halla en perfecta inteligencia con los Fueros del país, y que en lo que únicamente ha reconocido alguna pugna es en los puntos siguientes: 1.º En el de la formación de la matrícula de comercio que cree no puede practicarse en Vizcaya, cuyos Fueros habilitan por sí mismos á cuantos vizcaínos tienen capacidad legal para celebrar contratos, sin necesidad de ningún requisito previo. 2.º En el de las apelaciones á los tribunales que designa el código, pues considera que esto se halla en oposición con el Fuero

que gozan los vizcaínos de ser juzgados por sus Jueces propios. 3.º En el de la presidencia de la Junta de comercio mandada establecer en San Sebastián por real orden de 16 de Noviembre último, y no por el código. 4.º En el de las elecciones de comerciantes para servir los cargos del tribunal de comercio, que en su concepto deroga los usos forales en cuya virtud la elección de toda la Justicia del país compete á sus naturales; y habiéndose enterado de todo S. M., ha tenido á bien resolver: 1.º Que los artículos once y veinte y dos del código de comercio tengan su entero efecto en el territorio de Vizcaya como en todo lo demás del Reino, supuesto que no se opono á los Fueros del Señorío la formación de la matrícula que en dichos artículos se previene, ni es posible sin ella saber quiones son los verdaderos comerciantes que legítimamente pueden aspirar al goce de los privilegios y fuero particular que concede el código á los que siguen esta profesión. 2.º Que tengan igualmente el más exacto cumplimiento los artículos mil ciento ochenta y nueve, mil ciento noventa y mil ciento noventa y uno del citado código; los cuales, previniendo que los cargos de los tribunales de comercio han de desempeñarse en virtud de reales nombramientos, no hacen otra cosa que revocar una concesión gratuita de que gozaban los antiguos Consulados en virtud de las ordenanzas dadas por la autoridad real, cual era la de elegir por sí mismos los sujetos que habían de servir los expresados cargos, sin que en esta materia puedan alegarse los Fueros del Señorío, pues no hay en ellos una expresión relativa á tales oficios, que fueron desconocidos en la época de su otorgamiento. 3.º Que por ahora ejerzan las Diputaciones de las Provincias Vascongadas como delegados en ellas de la autoridad regia, y bajo la dependencia inmediata del Ministerio de mi cargo, todas las facultades, cargos y obligaciones que en el código se declaran ó impo-

nen á los Intendentes de las demás Provincias del Reino. 4.º Que subsistiendo la supresión de los juzgados de alzadas, vayan las apelaciones de los tribunales de comercio de las Provincias Vascongadas á los tribunales que según el régimen foral conocen de las apelaciones de los negocios comunes.»

Y desochoa la Junta de tomar una determinación madura sobre los particulares que abrazaban los documentos expresados, acordó nombrar una comisión compuesta de los Padres de Provincia presentes y de cuatro individuos por cada Merindad para que informase lo que tuviera por conveniente.

Quedó enterada la Junta en seguida de la real orden de 13 de Enero último, por la que se pretende que las Provincias Vascongadas y el Reino de Navarra satisfagan las cantidades de que están en descubierto por los contingentes que les tocaron para el reemplazo del ejército en 1818, 1819, 1824, y 1827, y el cupo en hombres que les corresponda en la quinta actual según lo tengan por conveniente; así como de la real orden que con fecha del 12 del mismo Enero ha recibido con posterioridad la Diputación, y en la que se piden á este Señorío doscientos setenta y un hombres para los veinte y cinco mil de que debe constar la presente quinta; acordando que pasen ambas órdenes á la comisión creada por el decreto precedente para que informe lo que se le ofrezca en esta materia.

La Junta oyó atentamente las tres sumisas representaciones que la Diputación general elevó á los pies del trono en 17 de Agosto, 4 y 7 de Diciembre del año último, por medio de sus Diputados especiales en Corte Don José María de Jusuó y Don Juan de Pértica, y acordó por unanimidad tributar á la Diputación general y á los Diputados en Corte las más atentas y expresivas gracias por el celo, tino

y esmero con que procedieron en el grave y delicado negocio á que se referían las exposiciones.

Estas exposiciones, escritas indudablemente por el Consultor Don Casimiro de Lotzaga, ofrecen grande interés para el conocimiento de la historia foral y económica de Vizcaya. Las dos primeras son textualmente como sigue:

«Señor.—El M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya, con el más profundo acatamiento expone á V. M.: haber llegado á su noticia que de real orden se han remitido en consulta á vuestro Consejo supremo de Hacienda varios expedientes formados por el Juez de contrabando de la Villa de Bilbao, á consecuencia de los desembarcos, ejecutados por orden de la Diputación general de este Señorío, de algunas legumbres extranjeras y de frutos coloniales españoles conducidos desde puertos extranjeros para sólo el consumo de los habitantes de Vizcaya.—Los Soberanos de Castilla, antes y después de la unión de este Señorío á su Corona, hicieron aprecio de los constantes y relevantes servicios de los vizcaínos, y los miraron como uno de sus más firmes baluartes. Sus Ministros, sus Consejeros y tribunales, teniendo también presentes los textos de la historia, la forma invariable del método particular del gobierno de Vizcaya, y las notables utilidades y ventajas que de él había aportado el general del Reino, lo consideraron marcado con el sello de una legitimidad indestructible, respetaron sus Fueros, y si alguna vez se vieron controvertir en la Corte y en los tribunales antes de este siglo propagador de novedades, fué para hacer declaraciones acerca de su genuina inteligencia, nunca para increpar la conducta de los Diputados, Síndicos y Consultores de Vizcaya, por haberse opuesto con el lenguaje respetuoso de la lealtad á las reales órdenes que creían opuestas á sus Fueros. ¹ Mientras que los puertos de la América es-

¹ Hay que confesar que esta aserción es demasiado absoluta.

pañola se hallaban generalmente cerrados para los extranjeros, no podían éstos conducir con ventaja á la Península los frutos de nuestras posesiones ultramarinas; lo que daba un gran incremento al comercio español poniéndole en estado, por la abundancia y moderado precio de sus frutos coloniales, de surtir á la metrópoli y concurrir con ganancia á los mercados extranjeros. Cuando la bandera española hacía respetar todos los derechos de la España sobre sus posesiones ultramarinas, y sin embargo de que los puertos habilitados de la Península rebosaban en frutos coloniales nacionales, preferentes por su calidad y proporcionado precio á los extranjeros, fué consignado solemnemente por la convención de 1727, «que por los puertos del Señorío de Vizcaya de aquí adelante para siempre puede introducirse francamente el cacao, azúcar, chocolate, vainillas y canela que sea menester para el consumo de todos sus habitantes, así de lo que de estos géneros viniese de América á Cádiz, como trayéndolos de cualesquiera dominios extranjeros.» Reconocido de una manera tan marcada respecto de Vizcaya el libre comercio de frutos coloniales, sin distinción de su origen y procedencia, parecía inconducente el tratar de investigar la acta de navegación promulgada para los mares de la América española, que estuvo vigente hasta la guerra de la Independencia. A regir en Vizcaya todas las restricciones comerciales adoptadas para la generalidad del Reino, hubiera sido más natural y arreglado el no convenir en la excepción de los frutos coloniales extranjeros, acordada el año de 1727, después de haberse retirado las aduanas á su contigua línea del Ebro, puesto que podía proveerse abundantemente de las inmensas y excelentes producciones de la América española. De manera que en las dos épocas de su obediencia y rebelión se pretende establecer respecto de Vizcaya dos reglas comerciales diame-

tralmente opuestas. En la primera época feliz, cuando los extranjeros no podían atracar sin un permiso especial á nuestras posesiones ultramarinas, se reconoció el derecho de Vizcaya para recibir en sus puertos buques extranjeros con frutos coloniales, sin distinción de su origen y procedencia. En la segunda desgraciada época de insurrección, en que por regla general se hallan habilitados por el Rey N. S. los extranjeros para comerciar directamente en todas las colonias españolas, y traer las producciones de ellas á la Península, se los quiere cerrar con una notable contradicción los puertos vascongados. Semejante interpretación se presenta con toda la apariencia de una verdadera derogación de la solemne convención de 1727, y es poco conforme á los principios generales de justicia, y á los de la política y de una bien entendida economía.—Los vizcaínos han traficado en todos los artículos admitidos á comercio por las leyes generales del Reino, gozando además de mayores franquezas que los de las Provincias contribuyentes, como que nunca se les ha disputado el que se provean directa y libremente para su consumo de toda especie de bastimentos, aunque algunos de ellos se hallan prohibidos en el resto de la Península, de los artículos estancados en las Provincias constituyentes, y de los frutos coloniales extranjeros, después de removidas las aduanas á la línea del Ebro en el siglo último; no habiéndoles negado el Consejo de Hacienda, en la consulta que evacuó con fecha de 30 de Julio de 1824, el derecho que tienen de surtirse para su consumo de los frutos coloniales nacionales, sin pagar los derechos establecidos en los puertos habilitados.—Por el real decreto de 29 de Febrero de 1828 se habilitan los buques extranjeros para que conduzcan directamente á la Península los frutos coloniales españoles. Esta soberana resolución bastaría por sí sola á dejar sin efecto el real decreto que respecto de las Provincias Vas-

congadas se expidió con fecha de 2 de Diciembre de 1824, en atención á que fué impulsado por la consulta que al efecto elevó en 30 del anterior Julio el supremo Consejo de Hacienda, apoyada esencialmente en que por las órdenes vigentes está prohibido hacer el comercio desde nuestras Américas á pueblos extranjeros, y desde éstos á aquellos dominios; que esta doctrina es tan constante y antigua, que ya en el artículo treinta y cinco del libre comercio de América del año de 1778 se previno, que durante la navegación de ida y vuelta no puedan las embarcaciones ó naves mercantiles hacer arribadas ó escalas voluntarias, y mucho menos arrimarse á embarcaciones extranjeras, bajo las penas impuestas en las leyes de Indias; que por real orden de 6 de Marzo de 1803 se prohibió igualmente por punto general á los extranjeros que careciesen de habilitación hacer el comercio de América, á nombre ni en representación de sus mujeres, padres ó hijos políticos españoles. Debía, pues, quedar sin efecto la expresada real orden de 2 de Diciembre de 1824, así como las demás que posteriormente se han expedido, repitiendo el cumplimiento de una soberana resolución, que ha caducado con el principio en que se fundaba de que los extranjeros no podían traficar en la América española ni conducir sus frutos á la Península. De todas maneras se incurriría en la notable contradicción de hacer al privilegiado de peor condición que al que no goza de iguales franquizas, y de continuar poniendo obstáculos á los vascongados para surtirse de frutas coloniales nacionales por la vía que les sea más útil, y resultará necesariamente el que consuman los frutos de las posesiones ultramarinas extranjeras, dándoles un fomento que debería refluir en favor de las españolas.—Todas estas consideraciones impelieron á la Diputación general de Vizcaya, á fijar la opinión de que con el principio en que se

apoyaba la referida consulta del Consejo de Hacienda habían caducado las reales órdenes especiales que á su consecuencia habían sido expedidas. Hubo pues una oposición dimanada de que la Diputación hallaba contrario á los axiomas generales y á los Fueros y franquezas vizcaínas lo que el Consejo de Hacienda contemplaba bajo un aspecto encontrado. Podrá acaso haber equivocaciones ó error en la inteligencia que ha dado la Diputación. Habráse acaso opuesto sin que mediaran razones muy sólidas para ello, aunque en su concepto eran convincentes; pero no por capricho ni con desdoro de la Majestad, y animada siempre del celo de las respectivas leyes, en cuya conservación estriba la lealtad, con el convencimiento pleno de que en su oposición adquiriría desagradados más que benevolencia y premios; correctivo el más indefectible del capricho y la ligereza.— Para la ilesa conservación de la especial legislación vizcaína, se ha tenido siempre de Fuero y costumbre inconcusa que cualquier real pragmática, cédula, orden, provisión ó despacho que se expidiesen en contrario sean obedecidas y no cumplidas, aunque haya segunda, tercera y más yusiones y sobrecartas. Todos los Señores y Soberanos de Vizcaya se han dignado mandar observar inviolablemente este requisito esencial, aun en los casos más urgentes y especiales.—Durante los calamitosos tiempos del siglo catorce nacen los bandos, se desencadenan las pasiones y triunfan los crímenes y los delitos, encubiertos con la máscara de virtudes militares, dejando asolado el país y dislocada la sociedad. He aquí el espantoso cuadro de Vizcaya, cuando para salir de tan ominoso estado contempló necesaria la concentración de sus habitantes en hermandades que fuesen apoyo y vigor de la inanimada justicia, logrando reprimir los crímenes y contener á los delincuentes.—En este estado, pues, de verdadera dislocación social recurrieron los viz-

caños á su Señor y Rey Don Enrique tercero, exponiendo que se cometían muchos delitos y que deseaban formar hermandad, porque el Fuero antiguo no bastaba para oscarmentar á los delincuentes. Tuvo á bien S. M. comisionar el 24 de Febrero de 1393 al doctor Gonzalo Moro, Oidor del Consejo de S. M., y primer Corregidor de Vizcaya, para formar ordenanzas sino bastaban las antiguas. El comisionado no lo cumplió, y los vizcaínos ocurrieron segunda vez al Rey instando por su hermandad general; el doctor Gonzalo Moro expuso que no las había formado por haberle requerido Juan Alonso de Mugica, Gonzalo Gómez de Butrón Mugica y Martín Sanchez de Leguizamón con una carta real, *en que se le mandaba que no hiciera la hermandad general si fuese contra el Fuero de Vizcaya, bien del país y mejor servicio del Rey*; que en su virtud había recibido cierta información y resultado ser contra el Fuero. El común de Vizcaya impugnó sólidamente aquellas contradicciones y pruebas de los parientes mayores del bando oñacino, y en su vista expidió S. M. nueva real cédula en el real sobre Gijón á 28 de Diciembre de 1393, mandando al mismo Gonzalo convocar las Anteiglesias y Villas á Junta general de Guernica, para saber de sus vocales si querían hermandad general, y caso de que la quisieran la formáse. Lo cumplió el Corregidor Gonzalo Moro; respondieron todos afirmativamente; entonces los encargó que diputasen dos hombres buenos de cada Merindad, uno de cada Vill y otro de cada solar, con cuyo acuerdo formaría las ordenanzas; se verificó como lo propuso; y habiéndolas formado, convocó á nueva Junta general; se leyeron en ella, y las aceptaron todos los vocales.—En la precedente narración histórica se halla desplegado el caracter de Vizcaya, el de sus Fueros, y la consideración que hacia ellos tenía su Señor. Así es que al pedirle los vizcaínos una cosa que

creían necesaria y urgente, accede el Rey su Señor, pero basta que una parte de ellos manifiesten que es contra sus Fueros para que decididamente se mande no hacer. El Corregidor no se disculpa con que la hermandad fuese contra el bien del país que la pedía, ni contra el servicio de S. M. que al efecto le comisionaba; tan solo se escuda con que algunos lo habían dado informaciones de que era contra Fuero, cuya aserción fué impugnada sólidamente por la mayoría de Vizcaya, insistiendo por la hermandad. Si el Señorío de Vizcaya no tenía por sí ningún derecho á la observancia de sus leyes y formas, bastaba el consultar su bien y el del estado en general. Sin embargo, lejos de eso el Monarca no quiere más que cerciorarse de la voluntad general del Señorío, y sin estar cierto de ella no consiente en acceder á lo pedido. La Junta general da el beneplácito, de acuerdo con los comisionados de su seno; se forman las ordenanzas; pero aun no basta; es monester que dichas ordenanzas vuelvan á nueva Junta general, se lean, se enteren de ellas, se conformen y las acepten sus vocales. ¿Puede darse prueba más clara de la convicción en que estaba el Gobierno de Su Majestad de la necesidad de la concurrencia de los vizcaínos en cuanto dijese relación á sus Fueros? Así del mismo modo les preguntaba su Señor Don Juan Núñez, cincuenta años antes, «en cómo habían de pasar con él ó con su Prestamero en razón de justicia». — En la escritura otorgada por los apoderados de las Villas de Vizcaya en el año 1356, para el caso en que reconocieran por Señor al Rey Don Pedro, pusieron por expresa condición que llegado el caso de reconocerle obedecerían sus cartas ó mandados seyendo guardados sus Fueros, usos, costumbres y privilegios. — En el año 1470 quedaron extinguidas las disensiones civiles de Vizcaya provenientes de los bandos de Oñez y Gamboa, y su misma extinción produjo el

germen de otras nuevas disensiones, no de unas familias con otras, como habían sido las primeras, sino de pueblos contra pueblos. Para influir en las deliberaciones de las Juntas generales habían procurado los banderizos alejar en cada pueblo la influencia de las familias del bando contrario para cargar con su representación, de donde provino la guerra de familias. Mas arreglados por la reconciliación los pueblos, cada cual al bando porque se había decidido, entraba en ambos un igual interés en reducir el número de pueblos votantes, para que la elección de sujetos en cada bando fuese más probable en favor suyo. Esto y la natural rivalidad entre los habitantes de los campos y los vecinos de las Villas y Ciudad, por la diversidad de profesiones, y caracteres y usos que de ellas dimanaban, produjo las nuevas disensiones entre la Tierra llana con las Villas y Ciudad, pretendiendo aquélla privar á éstas de la acción á elección de Diputados generales, mirándolas como una parte agregada en cierto modo de Vizcaya. Las obstinadas discusiones que de aquí dimanaron, formaron las segundas circunstancias políticas existentes á la expedición de las ordenanzas del licenciado Garci López de Chinchilla, á que subsiguieron por todo el siglo diez y seis, y parte del diez y siete encarnizadísimos pleitos, que terminaron por una escritura de concordia aprobada por la real cédula de 3 de Enero de 1633. Examínense, pues, las ordenanzas de Chinchilla con atención á estas circunstancias, y no se podrá, como se pretende, atacar con ellas el derecho que goza Vizcaya para el examen de las órdenes y mandamientos, por si se oponen á sus Fueros, franquezas, buenos usos y costumbres.—Las ordenanzas de Chinchilla no fueron ordenanzas del Señorío de Vizcaya, sino tan sólo de sus Villas y Ciudad. Para probar esta proposición, basta leer la real cédula que comprende dichas ordenanzas. Se ex-

pone en ellas el objeto de la misión del licenciado Chinchilla á Vizcaya, y entra diciendo «fué para què inquirese é se informase de algunas alteraciones, ayuntamientos de gentes, escándalos, monipodios é pasiones é desobedien-
cias á nuestros mandamientos, é resistencia contra algunos nuestros Jueces é oficiales, é otros excesos é atrevimientos fechos é cometidos por algunos Concejos, é oficiales é Merindades é personas singulares de las dichas Villas ó Ciudad é Tierra llana en nuestro deservicio, é en grande daño é turbación é desorden del dicho Condado, é para que procediese contra los que fallasen en culpa de las cosas susodichas á las penas establecidas por derecho é por las leyes é ordenamientos de nuestros Reinos, é las ejecutase en personas é bienes». Hasta aqui es general el objeto de la misión, porque se extiende á inquirir excesos y delitos cometidos, y castigar á sus perpetradores indistintamente, bien fuesen vecinos de las Villas y Ciudad ó habitantes de la Tierra llana.—Continúa expresando el objeto de la misión, y dice «é para que en nuestro nombre é por nuestra autoridad declarase algunos privilejos que las dichas Villas é Ciudad tenían de que algunos nen debidamente usaban, extendiéndolos más de lo que debían é en ellos se contenían, de que nacían é se seguían muchos de los dichos escándalos é alteraciones, é para que enmendase é revocase algunas ordenanzas injustas é malas, é males é dañosos usas é costumbres de que usan en deservicio de Dios é en deservicio nuestro». Aquí es ya particular y limitado á Ciudad y Villas el objeto de la misión, de modo que el licenciado Chinchilla carecía de facultades para entrometerse con el cuerpo general del Señorío en enmiendas ni revocaciones de ordenanzas, usos y costumbres, porque para este objeto las tenía circunscritas á solas las Villas y Ciudad.—La real cédula, refiriendo con la misma distinción lo que

obró el Comisionado regio, dice, «el cual dicho licenciado cumpliendo nuestro mandamiento fué á dicho Condado é hobo su información de las cosas susodichas é feyó ciertos procesos, é pronunció ciertas sentencias contra los que en ellas halló en culpas, condenando á unos en pena de muerte, á otros á destierro, é á otros á perdimiento de bienes é derribamiento de casas é otras penas pecuniarias para la guerra que Nos mandamos hacer contra los moros enemigos de nuestra santa Fe católica, é á otras diversas penas, é ejecutó algunas de las dichas sentencias, é hizo é cumplió otras cosas contenidas en las dichas nuestras cartas é poderes». Todas estas tan marcadas y detalladas operaciones del regio Comisionado, se atienen estricta y escrupulosamente á la primera parte de su misión, dirigida á la indagación de los delitos y castigo de los delinquentes.—Continuando la lectura de la misma real cédula, se encuentra detallado el desempeño de la segunda parte de la comisión, y que las facultades y operaciones del regio Comisionado estuvieron en cuanto á ella limitadas á las Villas y Ciudad, entre las cuales prosigue, «dió en nuestro nombre á *las dichas Villas é Ciudad* ciertas declaraciones é ordenanzas, las recibieron é juraron é prometieron de tener é guardar é cumplir dende en adelante». ¿Puede expresarse la cédula con más distinción y claridad? La escritura de declaraciones y ordenanzas apoya más y más la precitada distinción. Su otorgamiento sólo se verifica con las Villas y Ciudad. «En la noble Villa de Bilbao suso en la casa é cámara del Concejo que está en la plaza mayor de la dicha Villa á 22 del mes de Junio del año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo 1487, este dicho día estando ayuntados los Alcaldes, Fieles Regidores é otros oficiales é procuradores é vecinos *de las Villas é Ciudad de este noble é leal Condado é Señorío de Vizcaya con el muy virtuoso señor licenciado Garci López de Chin-*

chilla, Oidor de la Reina N. N. S. S. ó su Juez pesquisidor en las dichas Villas é Ciudad é Tierra llana del dicho Condado é Señorío de Vizcaya (el caracter de Juez pesquisidor era el que se extendía también á la Tierra llana), seyendo llamados por mandamiento de dicho señor licenciado, especialmente por la Villa de Bermeo, etc.» Va relatando los representantes de las Villas de Bermeo, Bilbao, Durango, Lequeitio, Ondárroa, Guernica, Plencia, Marquina, Guerricáiz, Ochandiano, Villaro, Elorrio, Ermua, Miravalles, Portugalete, Larrabezúa, Rigoitia, Balmaseda y de la Ciudad de Orduña, y luego continúa, «dijeron que por cuanto los grandes escándalos é alborotos é sediciones é monipodios é confederaciones é desobediencias á los mandamientos, é los otros excesos notoriamente acaecidos en este Condado de Vizcaya, Villas é Ciudad é Tierra llana, sobre que el dicho licenciado por mandado de los dichos Rey y Reina N. N. S. S. había venido á inquirir, saber la verdad é proceder é ejecutar la justicia contra los culpados en ellos, todo había procedido é se había fecho é cometido so color de la guarda é defensa *de algunos privilegios é ordenanzas é usos é costumbres que las dichas Villas é Ciudad decían tener*, porque se decía notoriamente que querían extender los dichos privilegios á muchos casos en que aun había lugar, é así arbitrian ¹ é usaban mal de ellos, é que algunas de dichas ordenanzas, usos é costumbres nin valían nin podían nin debían usar de ellas, é era muy necesario ó cumplidero al servicio de S. A. é al bien de todo el dicho Condado, de los vecinos é moradores de él declarar é limitar los dichos privilegios é ordenanzas é revocar é quitar é enmendar algunas de ellas é facer é ordenar otras de nuevo, como é según

¹ En la *Colección de cédulas*, etc., concernientes á las Provincias Vascongadas, se lee *arbitrian*.

é en los casos que de yuso en esta escritura será declarado». Tan solo hablan y fueron ayuntados para el otorgamiento de esta escritura el Comisionado regio y los representantes de las Villas y Ciudad, y sin que tan siquiera hagan la menor indicación de las leyes, Fueros, usos y costumbres del Señorío. Continúa la escritura expresando que «el dicho licenciado había visto é examinado los dichos privilegios é platicado largamente con todos los dichos Concejos é procuradores sobre ellos é sobre las otras cosas de suso mencionadas, é él con ellos en nombre de S. A. había otorgado é ellos en nombre *de las dichas* Villas é Ciudad con él asimismo habían otorgado é asentado lo que en todo se debía hacer é otorgar, asentar, prometer é jurar é suplicar á la Alteza de los dichos Rey é Reina N. N. S. S. Por ende dijeron que lo que habían asentado é otorgado é otorgaban é asentaban era la escritura é capitulación siguiente.»—Con lo relacionado de la escritura se demuestra la ninguna conexión que tuvo con el cuerpo general del Señorío, y que todo su texto fué únicamente circunscripto á las Villas y Ciudad. Todos sus artículos, la súplica con que los acompañaron la Ciudad y las Villas, y las declaraciones que á su consecuencia hicieron S. S. M. M., comprueban y ratifican lo mismo; pero para no molestar demasiado la soberana atención de V. M. se limitará vuestro fiel Señorío á insertar el siguiente párrafo de la real aprobación. «Por ende (dicen SS. MM.) entendiendo que lo en nuestro nombre é por nuestra autoridad é poder declarado é interpretado, é enmendado é revocado é ordenado é otorgado á las *dichas Villas é por ellas recibido* é jurado de tener é guardar é cumplir, según que en la escritura suso incorporada se contiene en uno con las dichas limitaciones é respuestas por Nos dadas, é todo ello según que de suso es contenido é justo é razonable é es conveniente remedio para las cosas

susodichas... aprobámoslo ó confirmámoslo é interponemos á ello é á cada una cosa é parte de ello nuestro real decreto é autoridad, é si menester es de nuevo lo otorgamos á *todas las dichas Villas é Ciudad* é á cada una de ellas... ni por las *dichas Villas é Ciudad ni por algunas de ellas general ni particularmente* pueda ser estatuido ni ordenado contra ello ni contra cosa alguna ni parte de ello en algún tiempo ni en alguna manera... é mandamos á las dichas nuestras Justicias é cada una de ellas en su lugar é jurisdicción que guarden é cumplan é fagan guardar é cumplir á *las dichas Villas é Ciudad* é á los vecinos é moradores de ellas... é mandamos á los del nuestro Consejo é al nuestro Presidente é Oidores de la nuestra audiencia é al dicho nuestro Juez de Vizcaya, que contra el tenor de lo susodicho no den ni libren ni pasen algunas nuestras cartas. Otrosi que los dichos nuestros Oidores é Juez de Vizcaya tomen en sí é tengan el traslado autorizado de esta nuestra carta con la escritura de suso incorporada, todo según de suso se contiene, por donde juzguen é libren los pleitos que ante ellos vinieren, é otro tanto fagan poner en el arca de las escrituras de la dicha nuestra audiencia para cuando menester sea. E otrosi mandamos *que cada un Concejo de las dichas Villas é Ciudad* pongan é tengan é guarden en el arca de sus privilegios una nuestra carta escritura original tal como está ó su traslado signado de escribano público, sacado con autoridad de nuestro Corregidor de Vizcaya, el cual mandamos que faga fe como el original porque lo en ella contenido pueda ser mejor cumplido é guardado en todo tiempo, é si lo quisieron por privilegio mandamos al nuestro Chanciller é á otro ú otros oficiales que están á la tabla de nuestros sellos que se los den; pasen é sellen.» ¹ No basta que toda la alocución de dicha real

¹ El texto del capitulado de Chinchilla que aquí se transcribe no concuerda rigurosamente algunas veces con el publicado poco antes por Don Tomás González, en la *Colección citada*.

cédula sea expresa y exclusivamente dirigida á las Villas y Ciudad, y ni por casualidad al Condado y Señorío, sino que se manda al Consejo, á la Audiencia, al Juez mayor, y á las Villas y Ciudad en general y particular, y á sus vecinos y moradores que la guarden y cumplan, y precisamente al cuerpo general del Señorío, á quien quiere suponerse por algunos que combaten las franquezas vizcaínas que va dirigida, no se toma en boca. Se manda archivar en la Audiencia, en el juzgado mayor y en cada una de las Villas y Ciudad, y no hay una ligera copia para el archivo y Condado del Señorío. Resulta, pues, probado por el contexto de la misma real cédula, que las ordenanzas de Chinchilla no fueron ordenanzas del Señorío de Vizcaya, sino tan solo de sus Villas y Ciudad en particular. Es por último una verdad clara y notoria que estas ordenanzas quedaron derogadas y anuladas por la misma voluntad soberana á instancia de las Villas y Ciudad que las ercaron. Su sola lectura convence de haber sido un capitulado formado de acuerdo del Comisionado regio y de los representantes de las Villas y Ciudad, en fuerza de las circunstancias, y que adquirió legitimidad á virtud de la aprobación del Soberano. Fué, pues, una ley de circunstancias cuyos efectos no correspondieron á las esperanzas que se habían concebido al extenderla. La especie de separación del cuerpo general del Señorío en que quedaron las Villas y Ciudad, lejos de extinguir los enconos entre ellas y la Tierra llana, que habían ocupado el lugar de los antiguos bandos, los exasperó por el contrario, como era natural en un mismo pueblo dividido en dos secciones distintas. Se concentró y avivó más el odio recíproco, padeció mucho el servicio de S. M., porque entre dos partes tan encontradas no podía verificarse la indispensable unión, y los tribunales superiores é inferiores se vieron fatigados en todo el siglo diez y seis y parte del diez y siete con porfiadas y

encarnizadas contiendas, hasta que cansados los mismos contendientes de un estado tan violento y destructor, pusieron fin en 1630 á sus odiosas é interminables disputas, por medio de una escritura de concordia que coordinando los diversos derechos cuestionados reunió á las Villas y Ciudad con el cuerpo general del Señorío. Elevada la escritura á S. M. recayó la real aprobación en 3 de Enero de 1633. Por esta escritura quedaron fuera de práctica y sin efecto alguno en las Villas y Ciudad las ordenanzas de Chihchilla; se extinguieron las Juntas de Villas y Ciudad que aquellas autorizaban; acudieron éstas sin interrupción á las Juntas de la Tierra llana, que por dichas ordenanzas les era estrechamente prohibido; y en fin quedaron enteramente anuladas en fuerza de nueva concordia. No sería difícil hacer ver que las ordenanzas de Chinchilla están en contradicción, no sólo con la precitada concordia, sino aun la legislación general del Reino, y que aun cuando por vía de hipótesis se mandasen practicar en las Villas y Ciudad de Vizcaya, para las que únicamente fueran formadas, sería imposible su uso sin una infinidad de trastornos y perjuicios, y sin volver á sumir á este vuestro fiel Señorío en los bandos, disensiones y rencores de que felizmente salió. Las ordenanzas de Chinchilla fueron leyes de circunstancias, y naturalmente fueron anuladas cuando cesaron aquéllas.—Es bien sensible á vuestro Señorío de Vizcaya el distraer la soberana atención de V. M.; pero ha sido indispensable el entrar en una explicación tan minuciosa de unas ordenanzas á las que se pretende dar una extensión que nunca tuvieron, y un valor del que carecen hace más de dos siglos. Ni es de extrañar que varios Magistrados hayan informado modernamente á Vuestra Majestad, reputandó como verdades los sofismas publicados por Don Juan Antonio Llorente en sus *Noticias históricas de las tres Provincias Vascongadas*, porque sobre-

cargados de negocios graves y urgentes, les ha faltado el tiempo necesario para analizar documentos antiguos, y descubrir la astucia con que truncando y suprimiendo textos, conjeturando aereos supuestos, echando mano de instrumentos recónditos y no antes vistos de otros, notados de siglos atrás por apócrifos, interpretando arbitrariamente y adulterando otros, tejió Lloronte una novela con la que quiso persuadir á España que sus historiadores más célebres ó se habían equivocado ó no habían sido bien entendidos; que los Monarcas y sus Ministros, Consejeros y tribunales habían estado por tanto tiempo en el error, y que por un ignominioso descuido en el cumplimiento de sus deberes se había dejado atribuir á los vascongados una independencia de los Reinos de Navarra y de Castilla, y á sus Fueros y leyes una legitimidad de origen, que nunca tuvieron.—Hay tales anomalías en las instituciones y costumbres vascongadas, que los que no han tenido ocasión de examinarlas á fondo, increpan algunas veces á sus autoridades forales por procedimientos arreglados á su especial legislación é inconcusa práctica.—Con el objeto de examinar si son ó no contrarios á los Fueros, se han presentado al uso de este Señorío todas las reales resoluciones, provisiones, exhortos y despachos dirigidos á su territorio, antes de ponerlos en ejecución, cuya práctica se ha observado constantemente desde los tiempos más remotos, aun en los casos de mayor reserva.—En el año 1718 llegó á este Señorío Don Tomás Melgarejo, Fiscal del Consejo real, con comisión especial y muy reservada para averiguar y castigar ciertos excesos; y antes de practicar diligencia alguna aquel docto y justificado Ministro, presentó al uso la comisión y los reales despachos, los cuales se cumplimentaron conforme á la ley tercera, título sexto de los Fueros.—Posteriormente en real cédula de 1732 se cometió al M. R. Arzobispo de Burgos la visita de ciertas

iglesias de patronato en Vizcaya, y habiendo pasado un notario á ponerla en ejecución, sin presentarla al uso, la Diputación libró comparendo contra él, y á consecuencia de la queja que aquel Prelado elevó á la superioridad, y después de un maduro examen, se expidió real orden en 15 de Septiembre del mismo año, advirtiéndole, entre otras cosas, que en cuanto á la presentación de las reales cédulas en el Señorío, observase la práctica, estilo y costumbre que había en él.—En otra real orden de 3 de Agosto de 1748 se explicó S. M. en términos que suponía se habrían manifestado las anteriores que cita para el uso, esperando ¹ ser éste preciso.—En 17 de Abril de 1752 se dignó mandar igualmente S. M. que se presentasen al uso, con arreglo á otras que cita, las reales cédulas, órdenes y reales despachos, para que exponiendo en su vista si se oponen ó no á los Fueros, se determinase lo que fuese de justicia y Fuero, reservando al Síndico del Señorío la apelación en caso de agravio.—Con arreglo á todos estos antecedentes que se tuvieron presentes en el Consejo de Hacienda, y conformándose S. M. con lo que expuso aquel supremo tribunal, se dignó mandar por real orden de 7 de Noviembre de 1787, que sin embargo de lo proveído en reales órdenes de primero de Octubre de 1776, 13 de Agosto y 19 de Noviembre de 1781 y 12 de Diciembre de 1786, se presentasen al uso del Señorío los despachos y requisitorias del Gobernador subdelegado de Vitoria, con arreglo al método y forma mandados observar en cuanto á las reales cédulas y provisiones, dejando sin efecto todo lo obrado en contrario.—Quedó de consiguiente derogada la real orden de 13 de Agosto de 1781, cuyo cumplimiento se repitió con fecha 25 de Febrero de 1824, sin haberse tenido presente que había quedado sin efecto en virtud de la soberana re-

¹ Acaso debe leerse «expresando.»

solución expedida con pleno conocimiento, y conformándose con la consulta elevada por el supremo Consejo de Hacienda.—El vasallo más desvalido ejecutoriendo el punto, cualquiera que sea, si obteniendo alguna real determinación logra el consuelo y premio de sus gastos y fatigas, no se le vuelve á molestar más sobre el asunto. Pero los negocios de vuestro Señorío jamás se acaban; siempre se le renuevan las especies ya decididas como si fuese la vez primera.—Por no penetrarse de que el uso foral es la forma más esencial del régimen de Vizcaya, y que su Diputación ejerce un conocimiento legal sobre cualquier contra Fuero, se quiere presentar, según noticias, como un atentado, el hecho de haber mandado desembarcar la Diputación, para el consumo de los habitantes de este Señorío, algunas logumbres extrajeras y frutos coloniales nacionales procedentes de puertos extranjeros.—Es un principio inconcuso que las leyes generales no derogan á las especiales, y se ha dignado V. M. declarar repetidas veces no ser su real ánimo que sus fieles Provincias Vascongadas sean privadas de los Fueros y franquizas que gozan. La libre introducción de vituallas para el consumo de Vizcaya, se halla expresamente consignada en el título treinta y tres de sus Fueros, y la de frutos coloniales, sin distinción de origen y procedencia, en la convención de 1727. La Diputación general de este Señorío se halla en la obligación de guardar y hacer guardar sus Fueros y franquizas, y es el Juez conservador nato de ellos. No debió de consiguiente prescindir, en su concepto, de hacer desembarcar unos frutos de que siempre han usado libremente los vizcaínos, valiéndose para la ejecución de sus miqueletes en el mismo concepto que cualquier Juez ordinario se vale de sus alguaciles, pues que no los tiene la Diputación.—Los comestibles, frutos coloniales, y los géneros estancados en las Provincias contribuyentes,

son los únicos artículos en que interviene la Diputación de este Señorío, dejando expedita la jurisdicción del Juez de contrabandos de Bilbao en los demás efectos prohibidos por las leyes generales del Reino. Ha ocurrido sin embargo un incidente cuya primera noticia puede haber dado lugar á persuadirse que la Diputación pretende mezclarse en hacer desembarcar los demás artículos prohibidos á comercio por los aranceles vigentes. Es el caso que entre las graves atenciones y negocios que durante la celebración de las últimas Juntas generales rodeaban á la Diputación de Vizcaya, accedió bajo un concepto equivocado á la instancia presentada por Don Pedro Agustín de la Puente y remitida por el Consulado de Bilbao, para que se mandase descargar treinta mil botellas vacías que desde Burdeos se condujeron en el quechemarin francés Le Belier. A luego de su regreso á Bilbao, instruida la Diputación general del concepto equivocado bajo el cual había mandado desembarcar las expresadas botellas, dió al Juez de contrabando la conducente explicación verbal sobre el error padecido involuntariamente, oficiándolo á continuación que tenía expedita su jurisdicción para proceder con arreglo á las leyes generales del Reino, que prohíben la introducción de botellas vacías extranjeras, en atención á que sólo deseaba conservar íntegramente la libre introducción para el consumo de Vizcaya, de los frutos coloniales, sin distinción de origen ni procedencia, de los artículos que estuviesen estancados en las Provincias contribuyentes, y de las vituallas consignadas en sus Fueros y convención, sin exralimitarse de lo que en ellos se ordena, ni mezclarse en contestaciones ó competencias indebidas, según resulta de la copia testimoniada que acompaña. Quedó, pues, reparada inmediatamente la involuntaria equivocación, habiendo hecho notificar la Diputación al introduc-

tor de las referidas botellas vacías extranjeras la reforma de su primer providencia, y que á su consecuencia quedaba sometido al juzgado de contrabandos, cuyo procedimiento prueba la buena fe con que se conduce la Diputación.—Sin embargo de que el primer Consultor de este Señorío no tuvo la menor intervención en las disposiciones tomadas por la Diputación general para hacer desembarcar los frutos coloniales nacionales procedentes de puertos extranjeros, ni las habas y botellas extranjeras, parece que se trata de acriminar su conducta porque al comunicarle vuestro Corregidor, según la práctica inconcusa de Vizcaya, la real orden de 17 de Diciembre de 1828, extendió su informe concluyendo con manifestar que en el ejercicio de las obligaciones que le imponía su destino, no podía prescindir de pedir el que obediéndose con el más profundo acatamiento la expresada real orden, se suspendiese su uso y cumplimiento por ser opuesta á los Fueros y á la solemne convención de 1727.—Si en el uso legítimo de la acción de exponer y pedir, no debe ser graduado de culpable el último vasallo, existen razones de mayor consideración en favor del primer Consultor de Vizcaya, de cuya censura y vigilancia depende en la mayor parte la conservación de los Fueros.—Tanto en el ejercicio de la acción de pedir la suspensión, después de rendir el homenaje de obediencia á la soberana resolución, como en entablar la apelación y reclamar en el tribunal de alzadas, de no haberse remitido el expediente por el inferior, obró arreglado á los principios de derecho, y con especialidad á la ley once, título veinte y nueve del Fuero de Vizcaya, y al método que previo el correspondiente instructivo, y á consulta del Consejo de Castilla, se ordenó acerca del uso foral por la real orden de 17 de Abril de 1752, y la cual fué ratificada á igual consulta del Consejo de Hacienda por la real orden expedida en 7 de Noviembre

de 1787.—A no observarse en este Señorío el método establecido hasta ahora, y si se ejecutasen las reales órdenes y cartas de los tribunales superiores, sin la previa inspección del Síndico y primer Consultor y sin los trámites del uso foral, producirían un trastorno irreparable, porque se comunican todas las circulares generales, y los Jueces y autoridades se empeñan en hacerlas extensivas á Vizcaya, sin tener noticia ó sin querer hacer aprecio de sus Fueros; y en consideración á todo lo expuesto—Suplica rendidamente á V. M. se digne mandar que no se haga novedad en la libre importación para el consumo de los habitantes de este Señorío, de las habas y demás legumbres extranjeras, y de los frutos de las colonias españolas procedentes de puertos extranjeros, y en todo caso, declarar que no han incurrido en el real desagrado de V. M. los Diputados generales de Vizcaya, por haber hecho desembarcar las expresadas legumbres y frutos coloniales, cuya introducción creen permitida por sus Fueros; y que el primer Consultor de este Señorío no se ha extralimitado de los deberes que le impone su destino, al entablar á nombre del Síndico en la forma prescripta é inconcusa los recursos legales sobre la suspensión del cumplimiento de la real orden de 17 de Diciembre de 1828, después de haberle prestado la debida obediencia».—Firman los Diputados Landecho y Jáuregui y el Secretario Soloeta Balzola.

«Señor.—El M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya, con el más profundo acatamiento, expone á V. M.: que ha llegado á entender de un modo, al parecer indudable, que conformándose V. M. con una consulta del «supremo Consejo de Hacienda, ha tenido á bien decretar pase á la Villa de Bilbao un Juez regio, nombrando al efecto á Don José Cavanillas de vuestro Consejo, que reasumiendo la jurisdicción real ordinaria y la del Juez de contrabandos, forme las

causas competentes á todos los que hayan intervenido en el desembarco de vituallas extranjeras y efectos coloniales españoles procedentes de puertos extranjeros.—No parece, Señor, causa suficiente para comisionar á un Juez regio la naturaleza de los expedientes que se creo motivaron la consulta del Consejo de Hacienda, porque V. M. tiene ya resueltos algunos con providencias particulares, y el Superintendente general de vuestra real Hacienda tiene declarado que no deben considerarse por defraudadores los introductores de estos efectos; tampoco lo requerían los procedimientos de la Diputación general de Vizcaya y de su primer Consultor, que se hallan claramente sincerados en la representación que elevó á V. M. en 17 de Agosto último, en la que se patentizan convincentemente los fundamentos legales de sus operaciones.—En estos días, Señor, de júbilo y alegría en toda la Nación, y en que V. M. dispensa gracias y honores, sólo á Vizcaya se le acibararía su gozo y placer con mandar un Juez regio que procesase á algunos, que tanto ellos como todo el país vizcaíno están firmemente persuadidos que no han delinquido, y se presentaría Vizcaya á la faz del mundo como culpable é inobediente, cuando sus altos renombres han sido siempre tes de constante fidelidad y acrisolada lealtad. En esta atención—Suplica rendidamente á V. M. se digne mandar no tenga efecto el nombramiento y misión del Juez regio, declarar que ni la Diputación general de Vizcaya ni su primer Consultor han merecido su real desagrado, ni que se han extralimitado de sus atribuciones; y en todo caso resolver se oiga en justicia á vuestro fiel Señorío de Vizcaya, sin hacer novedad en el interin sobre que le es permitida la introducción de vituallas extranjeras y de efectos coloniales españoles procedentes de puertos extranjeros, con arreglo á sus Fueros y estipulado del año de 1727. Así lo espera de la innata piedad

y justificación de V. M., cuya importante vida guarde el Cielo muchos y dilatados años, para el bien y felicidad de la Monarquía española». Siguen las mismas firmas.

Empieza la Diputación diciendo en la tercera representación, que aunque ya en 17 de Agosto último trató de las razones legales que justificaban su conducta en el asunto de la descarga de frutos coloniales, y la intervención del Síndico y primer Consultor en el uso de los reales despachos, la gravedad del mismo asunto exige que sea tratado más extensamente bajo el aspecto económico. El fomento del comercio vascongado no procede del perjuicio que causa al Estado sino de su buen sistema económico. Las Provincias Vascongadas desarrollaron con gran provecho ese sistema hace ya más de un siglo, posponiendo á su conservación las ventajas que entonces se esperaban del comercio directo con América, y extendieron sus relaciones á todo el globo mientras que el resto de la Nación, á pesar de la halagüeña perspectiva del oro mejicano, iba consumiéndose en sí mismo. --Los estipulados que se celebraron en 1727 son actos solemnes en que se concordaron los diversos derechos y pretensiones, después de muchos sucesos, deliberaciones y consultas, triunfando la justicia apoyada en la conveniencia recíproca. Se refieren en seguida muy circunstanciadamente los sucesos ocurridos en Vizcaya desde que se llevaron las aduanas á las costas y fronteras, en virtud del real decreto de 31 de Agosto de 1717, hasta la convención ó estipulado de 1727, y continúa después la representación del modo siguiente:

«Por este artículo primero del estipulado se conservó á Vizcaya, del mismo modo que á las otras dos Provincias Vascongadas, el libre tráfico que por sus Fueros gozaba; pero concretándolo al comercio europeo, y privándolas de la concurrencia directa al de las colonias españolas. Lejos,

pues, de conseguir ventaja alguna, se las obligó á una privación que en aquel tiempo era reputada por la más capital. Se ha querido, sin embargo, inculpar á los vascongados de haber logrado hacer derogar una prohibición tan saludable como la del cacao y azucar extranjeros, que al paso que disminuía la prepotencia del comercio extranjero sobre la Península, debía servir de un nuevo estímulo para fomentar la producción de nuestras colonias.—El examen de los antecedentes hace ver que no pueden recaer en buena fe estos cargos sobre las Provincias. Los Diputados de éstas hicieron ver al Ministro que por sus Fueros y leyes les correspondían dos cosas: libertad de derechos y tributos, y libertad de comprar, vender y recibir lo que se sujeta á compras y ventas, sin restricción de especies. Los frutos coloniales no estaban fuera de este caso. Los Fueros no especificaron los efectos que se podrían comprar, recibir y vender; hablaron generalmente de todo, y así marcaron, terminantemente la libertad absoluta, sin ninguna excepción ni limitación, y bajo este fundamento aún examinaron los Diputados la cuestión de si por no descubiertos estos frutos cuando se establecieron los Fueros, podía decirse no comprendidos en la generalidad. La solidez de las razones legales con que probaron estar comprendidos en la universalidad de la ley fué incontestable, y así en la extensión del artículo séptimo supuso de derecho la libertad de comerciar, cuando hablando de los decomisos que hagan los guardas en los confines de este Señorío, dice «porque siendo entonces clara la extracción no se falta á su libertad»; lo mismo se supone al principio del artículo primero. Esta libertad absoluta de comercio había sido el objeto de muchas representaciones de las Provincias Vascongadas, desde el establecimiento de aduanas en su costa, y la Junta expresamente creada por S. M. lo había ventilado particularmente, y había sido la única causa

de la restitución de las aduanas á los puertos antiguos. Porque ordenada y mandada ya anteriormente la libertad de derechos y tributos de los géneros que se introdujesen para el consumo del país, aun constituidas las aduanas en sus puertos, sola la obstrucción del libre comercio quedó por objeto de las quejas que motivaron los procedimientos hasta su remoción. Por lo demás los vascongados fueron los primeros á conocer y manifestar al Ministerio lo disonante y perjudicial de semejante disposición, haciéndole ver que con la libertad de comercio con las colonias españolas desaparecía el de las extranjeras. No fué, pues, culpa suya el que se adoptase una medida tan poco política y económica. Era bien fácil el ver que decidiéndose, como se decidió, á que las Provincias traficasen en frutos coloniales extranjeros, nada absolutamente perdía la real Hacienda en que traficasen en los nacionales, y ganaban éstos al paso que aquéllos perdían en consumo. Si se encontraba el obstáculo de que en los puertos vascongados no había aduanas para el resguardo de los reales derechos, una sencilla razón debía resolver la dificultad. No habilitándolas al comercio directo de la América española, las excluía del consumo de una gran parte de sus frutos; porque recibiendo del extranjero cuantos frutos coloniales necesitasen, no habían de ocurrir á Cádiz á proporcionárselos sobrecargados de derechos y costas, y si no habían de consumir de los adeudados, la misma cuenta tenía á la real Hacienda los consumiesen traídos directamente sin adeudar, con lo que también se aumentaba el consumo de los frutos coloniales españoles. Si se temía por ventura que se introdujesen fraudulentamente desde estas Provincias al interior del Reino, en el mismo caso se hallaban respecto de los extranjeros, los que por los tratados de paces estaban autorizados á traer los frutos españoles desde sus dominios.

El riesgo, pues, era el mismo, y de no permitirse á los vascongados el comercio directo con América, se hacía un mal notable á las colonias españolas. Mas los errores económicos de aquel tiempo se hallaban al menos apoyados con la exclusiva del comercio americano que el Gobierno sostenía. Pero no parecía creíble que en el día, cuando la bandera extranjera tremola en todos los puertos americanos, y se halla habilitada por reales órdenes á introducir en la Península frutos coloniales españoles directamente, y aun desde puertos extranjeros, mediante un mayor recargo, sólo á los vascongados quedo interdicta esta facultad.—Cuando los franceses, ingleses, portugueses y demás extranjeros se hallan habilitados para surtir á los Reinos de Castilla de frutos coloniales españoles, sólo en los puertos vascongados, contra el tenor de su especial estipulado, se manda reexportar y se reputa por un delito atentatorio á la Majestad el recibir frutos coloniales españoles en la misma bandera habilitada para la generalidad de todos los dominios españoles.—Habrà dado quizá ocasión á esta medida algún informe que exagera al infinito el contrabando que se hace por estas Provincias. No dirá vuestra fidel Vizcaya que deja de hacerse contrabando; el negar absolutamente su existencia sería chocar con los principios de la razón, pues que mientras el hombre encuentre un interés en el comercio ó trasporte ilícito, siempre lo habrá. Pero lo que se dirá es que no se verifica á fusilazos, como se ha supuesto, ni con la extensión que exageran los émulos de los Fueros vascongados.—Se pretende persuadir que la mayor parte de los efectos fraudulentamente existentes en España, no han podido introducirse sino por las Provincias Vascongadas, como si ellas fueran la única parte de la Nación, y todo el resto de su circuito estuviere en una perfecta seguridad. En tan inexacto y falso principio se fundó anteriormente el voto particular del

Ministro de Hacienda Don José Rodrigo para la subsistencia de las aduanas á la orilla del agua, y que fué tan sólidamente refutado por la Junta creada de real orden.—El contrabando sigue la proporción del interés que produce, calculados los capitales necesarios para facilitarlo, y el único medio de evitarlo es la disminución de este interés. Una de las cosas que alucinan, y alucinaron efectivamente al Ministro Don José Rodrigo para su voto particular, es el considerar que siendo estas Provincias un país libre, se formaban depósitos de efectos y espiaban la coyuntura de salvar la línea; pero esta es una equivocación, que debe deponerse al examinar con atención los principios en que se fundan las operaciones mercantiles. Casi nunca se verifica que el comerciante que trae los efectos á un país libre, los introduzca desde él á otro por vía de fraude, porque su interés estriba en el pronto despacho para continuar el giro rápido de su capital. Es cierto que para la cantidad que conduce forma su cálculo sobre la mayor ó menor salida ó despacho, y que en él se comprende lo que sale para internarse por contrabando; pero este no es su objeto, sino arreglar su pedido por la cantidad que calcula podrá vender. Ni es dudable tampoco que sea en él, sea en otra segunda mano, se formará un almacén adonde acuda el contrabandista á surtirse; más debe reflexionarse que los almacenes se han de verificar precisa y necesariamente, limitándose todos los esfuerzos del Gobierno con todas las diligencias más activas sólo á que muden de posición.—La misma época de la remoción de aduanas á la costa es una prueba demostrativa de esta verdad. Con el establecimiento de aduanas en estas Provincias se habían extinguido en ellas los almacenes de efectos sin adeudar, pero no se había adelantado más que mudar su posición en notorio detrimento del real erario. Se establecieron inmediatamente

considerables almacenes en Bayona de Francia y San Juan de Luz, desde cuyos puntos habían acrecido tanto las introducciones fraudulentas, que llegó el caso de tener que reforzar la línea con dos regimientos, cosa hasta entonces nunca vista en esta parte del Reino. Es evidente que el contrabando no se extinguirá por la mutación del local de los depósitos de efectos, y que éstos siempre existirán ó en los países libres del Reino, ó en los inmediatos de los extranjeros, y que el contrabando no cesará mientras resulten de él ganancias de consideración, y que el único medio de extinguirlo es el disminuir todo lo posible estas ganancias. — Por lo que hace al laborioso vascongado, mira con desprecio al que se entrega á la vida criminal de contrabandista, y no apareciendo que se ocupa en tan culpable ejercicio, se ha pretendido probar el contrabando que exageran, comparando el comercio de Bilbao con el de Santander. Mas la mayor prosperidad de Bilbao no consiste en manera alguna en el contrabando, sino en que el comercio y la industria huyen naturalmente de las trabas y de los obstáculos. La libertad de comercio hizo de los áridos arenales de la Holanda una Potencia respetable, y ha elevado á la isla de Cuba, en cortos años, á un grado de prosperidad cual no tuvo desde su descubrimiento. La misma libertad de comercio va haciendo á los Estados Unidos de América rivales y competidores del formidable poder británico, cuya colonia no há mucho eran. A la libertad de comercio acaba de confiar V. M. el cuidado de restituir á Cádiz la riqueza y prosperidad de que apenas conservaba sombra. — A esta libertad de comercio, tan sabia y antiquísimamente consignada y observada en los Fueros y prácticas de las Provincias Vascongadas, la deben su población, su cultura, su subsistencia. ¿Qué otros vínculos sujetaron al hombre al cultivo del estéril y escabroso terreno vascongado, en vez de las fértiles

campiñas eriales y abandonadas en otros países? ¿Qué otro riego prolífero ha podido transformar sus selvas, breñas y quebradas, propia mansión de sólo fieras, en variadas y deleitosas campiñas? Tras esta libertad ha venido el comercio á fijar en su recinto el mercado de los productos de la industria ajena, y á la sistemática conservación de esta libertad debe su misma existencia actual, no obstante el tenaz empeño con que de algunos años á esta parte se procura arrancarle su tráfico, y trasladarlo á otras regiones.—Vano é inútil es pretender trastornar las leyes que no entanaron del hombre; la libertad de comercio, do quiera que se halle, dará siempre impulso, acción y vida á la sociedad; las trabas y obstáculos la conducen más ó menos arrebatadamente á la languidez y al decaimiento. Aquí, y no en otra parte, hallarán los finos observadores la razón de la proporción de comercio entre Santander y Bilbao, y hallarán igualmente las diferencias de las Provincias á que pertenecen uno y otro puerto. Verán en las montañas de Santander terreno topográficamente igual al de Vizcaya y Guipúzcoa, pero generalmente más feraz, corresponder el número de muy poco más que cuatro individuos por vecino, cuando corresponden cinco entre los vascongados, y que éstos viven con desahogo y comodidad en sus clases, cuando los otros con estrechez y miseria.—Si como se ha querido suponer, el contrabando fuese la causa del fomento de los vascongados, y su introducción se verificase violenta y arteramente, produciría necesariamente los dos siguientes efectos. 1.º Cada vez que se anunciase prohibiciones ó recargos de géneros, serían momentos de júbilo general, por abrirse nuevos ramos de ganancia; y todo al contrario, lo que los vascongados celebran es la baja de derechos, la habilitación de efectos á comercio; no está, pues, en el contrabando su general interés. 2.º Las utilidades del contrabando se distribuirían más in-

mediatamente en los pueblos del confín con Castilla, en donde la anuencia, ayuda y cooperación de los habitantes era indispensable y necesaria para eludir y forzar el paso, y por el contrario se ve ser los más pobres.—El exceso del contrabando no proviene, pues, de los países vascongados ni de sus Fueros; no ciertamente; lo mismo sucedería, y aun peor, como sucede, por el confín de cualquier otro Estado; existirían las mismas causas y aun algunas otras más. Esta proposición no depende de meras conjeturas y raciocinios; se halla apoyada en la experiencia, y contra ella no hay réplica fundada. Podrá objetarse únicamente que no se adoptaron medidas exactas para asegurar los resultados; pero en la de que se hace referencia ni aun eso cabe lugar. Un empeño decidido agitaba hace un siglo al Ministerio, y á pesar de todo resultó, no lo que se deseaba, sino lo que debía resultar. Se ofreció entonces al Monarca que con la traslación de las aduanas á las costas y fronteras se obtendrían menores costos en el resguardo; menor contrabando; mayores productos en las rentas reales, y más confianza y buena fe en el comercio. Los efectos que produjo la traslación fueron bien diversos de los que se ofrecían; mayores costos en el resguardo; más contrabando; menores productos en las rentas reales, y la decadencia del comercio. Lo que acaeció entonces resultó por consecuencia de una línea difícil de guardarse; y no habiendo en esto variedad, resultaría lo propio siempre que permaneciesen las aduanas el tiempo suficiente á que perfeccionen los ensayos los contrabandistas, estrechen sus relaciones con los que en la vecina frontera de Francia se aplicasen al comercio ilícito, y aprendan este criminal oficio que felizmente es ahora desconocido por los vascongados.—Bastarán á probar esta aserción algunas reflexiones sobre el manejo y operaciones de los contrabandistas de mar y tierra, que cargan en el extranjero. El de

mar trae sus contrabandos hasta la puerta de la aduana, pero encerrados en bodega bajo escotillas, difiriendo la descarga hasta tantear la lealtad del resguardo. Si se resiste la probidad de los empleados, trasborda sus mercaderías prohibidas á buques ya registrados, ó las arroja á la playa, donde las reciben los contrabandistas terrestres. Así es que son muy raros los descaminos de mar, y los que apenas pueden verificarse sin la connivencia de algunos de los tripulantes. Goza de iguales medios ó ventajas el contrabandista de país extranjero; se acerca á la frontera con sus recuas, intenta sobornar á los empleados de aduana ó resguardo, ó acecha su debilidad ó descuidos; y sino logra asegurar la internación, muda de dirección á la presencia misma del resguardo, que no le puede aprehender ni seguir en territorio extranjero. Mas la circulación de los efectos importados de las Provincias Vascongadas, y su aproximación á los pueblos contribuyentes, consta de tales trabas, que el contrabandista no da un paso sin llevar sobre sí peligros inminentes; en su travesía por el territorio vascongado, las Justicias del tránsito igualmente que los naturales, se le convierten en aprehensores legítimamente autorizados; si pisados los límites de las aduanas quisiese retroceder, los resguardos de Cantabria pueden perseguirle hasta aprehenderle. En la línea del Ebro se reparan finalmente los descuidos que haya podido haber hasta aquel paso; y la dificultad de forzarle ó eludirle destruye la esperanza de los contrabandistas.---El que las costas son susceptibles de mayor contrabando que los rios ó montañas, lo prueba el incremento que tomó el comercio fraudulento los cinco años que en el siglo pasado estuvieron removidas las aduanas de la línea del Ebro; y para presentar el más pleno convencimiento de lo que sucede en las demás Provincias litorales, basta el recordar los datos oficiales que por el conducto del Ministe-

rio de Hacienda elevaron á V. M. los Diputados consulares en Agosto de 1816.—Exponía la Junta de Diputados consulares, que omitía en obsequio á la brevedad infinidad de hechos, y citaba solo los necesarios y más oportunos, los cuales confirmaban por desgracia que el contrabando marítimo, por medio de la plaza de Gibraltar, se hacía públicamente».

Se citan varios casos en comprobación de este aserto y se añade en seguida:

«Compárese el escandaloso cuadro de fraudes, que por la precedente narración ofrece la costa de Levante, con el corto contrabando que se hace por la línea del Ebro, y resultará ser exagerados los clamores de los que se empeñan en persuadir que las Provincias Vascongadas y sus Fueros fomentan el comercio ilícito.—El desengaño del Gobierno y la justicia del Monarca produjeron el estipulado de 1727; y al privar por su artículo primero á los vascongados del comercio directo de América, no se pensó ni resolvió restringirles el recibir los frutos coloniales, bien los condujesen desde Cádiz ó de cualquier puerto extranjero, y bajo cuya genuina inteligencia se ha obrado constantemente. Debíó, pues, quedar sorprendida la Diputación de Vizcaya al presentarla varios comerciantes reclamaciones apoyadas con la excitación del Consulado de la Villa de Bilbao, para que como autoridad conservadora de los Fueros hiciera que se continuasen recibiendo sin novedad los frutos coloniales españoles conducidos en bandera extranjera. No debió mantenerse pasiva á reclamaciones fundadas en la interpretación general que se había dado al estipulado, y sobre cuya inteligencia no le había sido comunicada resolución alguna soberana.—La jurisdicción del Juez de contrabandos se reduce á no permitir descargar, ó á decomisar los efectos cuya prohibición á comercio haya sido legalmente publicada

en Vizcaya, mas no á interpretar el estipulado de una manera opuesta á lo mismo que habia practicado su juzgado. Considerando además que la importación de frutos coloniales españoles se halla permitida en el Reino, y que habian sido conducidos y desembarcados igualmente en Vizcaya, con permiso del Juez de contrabandos, debió reputarse por una arbitrariedad suya el obrar en sentido enconrado, y creyó la Diputación deber autorizar la descarga, pero sin estrépito ni la violencia que se ha querido suponer. Una reflexión bastaría por sí sola á sincerar la conducta de la Diputación, y es la de no habérsele comunicado real orden alguna que interpretase el artículo primero del estipulado, ó que hiciese una singular declaración para Vizcaya de no ser permitido el conducir á sus puertos frutos coloniales españoles en bandera extranjera. Todas las leyes, y con especialidad las que prohiben á comercio cualesquiera frutos y efectos, deben comunicarse á las autoridades encargadas de mandárlas cumplir, publicar y circular. Es todavía más esencial este requisito en las Provincias aforadas ó que gozan de una peculiar legislación, porque cualesquiera que sean sus respectivas formas precede siempre una inspección, por ser un axioma de derecho que las reales órdenes generales no derogan á las especiales. De todas maneras, no puede hacerse cargo alguno á la Diputación de Vizcaya por no haber cumplido unas soberanas resoluciones, que han dejado de comunicársele por el orden y conducto que se le comunican las reales pragmáticas, cédulas y provisiones. Mas aun cuando se hubiese llenado el indispensable requisito de la comunicación directa, no podían tampoco publicarse en Vizcaya hasta que recayese el uso foral.—Se halla este vuestro fiel Señorío en la íntima persuasión, de que al elevar la Dirección general de rentas y el supremo Consejo de Hacienda sus consultas acerca de la importación de los frutos coloniales

españoles en bandera extranjera, y al proponerse anteriormente á V. M. el remedio de los abusos de real Hacienda, que suponen existir en las Provincias Vascongadas, no se han tenido presentes los graves antecedentes y meditados informes que precedieron á la formación del estipulado de 1727. Es por cierto bien desgraciada Vizcaya, pues que fueron infringidos sus Fueros con la traslación de aduanas en 1718, sin haberle oído ni precedido el correspondiente examen; y ahora se hace una declaración al parecer derogativa del capítulo primero del estipulado, sin oírla ni haber tomado en consideración los antecedentes de su formación, increpando la conducta de la Diputación general, porque ha dejado de cumplir reales órdenes que no han sido comunicadas ni publicadas en la forma ordinaria.—Muy de otra manera informó Don Manuel de Roda, aquel sabio Ministro que después fué del despacho de Gracia y Justicia, en el dictamen que de real orden se le pidió en 1742, para tomar resolución en la instancia de un recurso de este Señorío, y asegurarse de los fundamentos que podía tener para resistir las providencias dadas por el Ministerio para la observancia de las pragmáticas, decretos y órdenes expedidos sobre prohibición de góneros de ilícito comercio.—Decía en él que es constante que el Rey no debe derogar los privilegios, Fueros y derechos de inmunidad y franquezas de los vizcaínos, porque prescindiendo de la autoridad con que los establecieron con su sangre y valor, en tiempo de su libertad y antes de sujetarse á ningún Señor, bastaba el verlos confirmados después de la unión á la corona de Castilla, por todos los Reyes, por pacto especial con juramento en forma de contrato solemne, y por causas tan justas, y en remuneración de sus grandes servicios; añadía que las demás preguntas que la real orden contenía, respectivas al uso que los vizcaínos han hecho de los Fueros; qué adelantamientos y utilidad se han segui-

do y experimenta el Estado; qué servicios ha hecho el Señorío en las urgencias y cuidados de la Monarquía; qué interés recibe la real Hacienda de este cuerpo de vasallos; si son ó no contribuyentes de alguna parte de derechos, etc., etc., sobre tenerlos por inútiles para el fin á que se piden y empeño que se ha hecho, había mucho que decir, y que se podía convencer fácilmente que no hay Nación más útil al Estado ni que mayores servicios haya hecho á la Monarquía. Que el uso moderado y justo que han hecho de sus privilegios y libertades, ha redundado en beneficio público, siendo digna de admiración su constancia en la natural defensa de sus Fueros y leyes paccionadas con que se ha gobernado desde su origen con la mayor felicidad y gloria.—Igual calificación merecieron las leyes forales á los tres Fiscales de V. M. en el real y supremo Consejo de Castilla, al evacuar su informe acerca de si los nuevos impuestos ó arbitrios determinados en reales cédulas de 31 de Marzo, 26 de Junio y 2 de Julio de 1805 comprendían y debían ejecutarse en las Provincias Vascongadas y Reino de Navarra. Decían en él terminantemente que «sus Fueros son muy atendibles,» y que la posesión, uso y costumbre que según ellos tienen, acreditan y demuestran la conveniencia de no alterarlos; que basta atender al origen antiguo de dichos Fueros, que fueron unos pactos solemnes de las Provincias con S. M. en el acto de su incorporación; que las repetidas confirmaciones de todos los soberanos son bien notables; que sus Fueros no deben estimarse como meros privilegios, gracias de los Soberanos; que su concesión y goce dimanar de aquellos pactos solemnes otorgados que los elevan á dicha esfera superior á todos los privilegios, gracias y mercedes particulares de los Soberanos, y como tales son libres de las reservas y limitaciones á que éstos se hallan sujetos; que está convencida la utilidad y necesi-

dad de la guarda y observancia de ellos, como siempre lo han reconocido nuestros Soberanos hasta el día; que no conviene y es justo abstenerse de inducir alteraciones en estas Provincias, que con los Fueros han conservado su bienestar y contribuido al del Estado, como lo tienen confesado los Monarcas en todas épocas; que la observancia que han tenido los Fueros es el mejor intérprete de su verdadero espíritu; que ella conserva los derechos de las Provincias, y no ofende al resto del Reino ni al servicio de S. M.—El Gobierno paternal y justiciero de V. M. forma una célebre época en la historia, y vuestra fiel Vizcaya no ocupará en el recto y magnánimo corazón de V. M. un lugar inferior al que lo designó el inmortal Jefe de la augusta dinastía de Borbón en España, al expresar por su real decreto de 16 de Diciembre de 1722, «que atendiendo á lo que los naturales del Reino de Navarra, Señorío de Vizcaya y Provincias de Guipúzcoa y Alava tienen merecido en mi servicio por su especialísima felicidad y amor, y á que mi ánimo no ha sido ni será nunca perjudicarlos ni minorarles sus privilegios, exenciones y Fueros (como lo creí asegurar al mandar dejar libres á dichos naturales, por real orden de 31 de Diciembre de 1718, de toda contribución en los géneros, frutos y mercaderías de su uso y consumo), y pesando más en mi estimación confirmarles este concepto que cualesquiera intereses que pudiesen de lo contrario resultar en favor de mi real Hacienda; he resuelto que las aduanas que nuevamente se plantificaron en los puertos marítimos y fronteras respectivas al referido Reino de Navarra, Provincias y Señorío, se restituyan y reduzcan á los puntos y parajes interiores de tierra donde antes estaban establecidas.» Resolución loable y propia de un Monarca que tanto se distinguió en lo justiciero, y expresiones del más fino y paternal amor, dignas de la viva impresión que persevera

sellada y será eterna en los corazones de los vizcaínos, que no pudiendo glosarlas cual se merecen, se contentan con remitirlas á la atención que se les debe por de quien de son, por su contexto, y por el impulso y viveza con que brotan copiosos manantiales preservativos de los Fueros y franquizas vascongadas.—Yo soy REY sólo para *hacer la felicidad de mis pueblos*, decía el Señor DON FERNANDO SEXTO, y si V. M., heredero de su nombre, virtudes y Estados, no tuviera tan profundamente grabada en su corazón esta bellísima y preciosa máxima, ya há días que los vizcaínos, decaídos del estado de contento y satisfacción, gemirían en el fondo del luto y de la miseria. A sola la mano poderosa de V. M. son deudores de que no hayan producido más funestos efectos los obstinados ataques con que tan continuamente se les amenaza, y sola su soberana justificación ha podido contener en parte los golpes disfrazados con razones especiosas, con que sin ser oídos los interesados se forman expedientes y evacuan consultas, sin el conocimiento de los necesarios antecedentes, ó con el objeto de minar el antiquísimo y majestuoso edificio foral, y lograr con su ruina establecer el funesto sistema de nivelación; en cuya atención—Suplica á V. M. se digne declarar que, con arreglo al artículo primero del estipulado de 1727, pueden introducirse franca y libremente en Vizcaya, para el uso y consumo de sus naturales, los frutos coloniales españoles procedentes de puertos extranjeros, y acceder á las demás solicitudes entabladas por este vuestro fiel Señorío en su anterior representación de 17 de Agosio último. Firman esta exposición las mismas personas que las anteriores.

Acordó la Junta unánimemente tributar á la Diputación general y á los Diputados en Corte las más atentas y expresivas gracias por el celo, tino y esmero con que procedieron en tan grave y delicado negocio.

La comisión revisora de poderes expuso el 7: que después de haberse hecho cargo de los antecedentes de Don Melitón de Bulucua, que había sido ya purificado, no hallaba suficientes motivos para dejar de admitirle en la Junta general. Se acordó que se tuviera por decreto el informe de la comisión.

Iguales decretos recayeron sobre los informes de la comisión encargada de lo concerniente al código de comercio y al reemplazo del ejército. Se decía en el primer informe: que atendiendo á que por la primera declaración que contiene la real orden de 29 de Enero último, se presupone que la formación de la matrícula de comercio se contrae únicamente á saber quienes son los verdaderos comerciantes que legítimamente pueden aspirar al goce del Fuero particular que el código de comercio concede á los de su profesión, y persuadiéndose que por el establecimiento de esta matrícula no se exigirán derechos de patentes ni otro impuesto alguno; la comisión opinaba que se guardase y cumpliese en todas sus partes el código de comercio, con la expresada real orden de 29 de Enero.

En cuanto al reemplazo del ejército proponía la comisión que se elevasen al Rey sumisas exposiciones de acuerdo con las otras dos Provincias Vascongadas, tomándose al mismo tiempo todas las medidas que se estimen conducentes para la conservación de las leyes del Fuero del Señorío, en atención á que el Señorío cumplió con lo estipulado en 28 de Octubre de 1818.

La Junta dió las más expresivas gracias á los señores de la Diputación general por el celo con que manejaron los graves negocios que estaban á su cargo; y persuadiéndose que probablemente era esta la última vez que el Corregidor presida la Junta, no pudo menos de tomar en consideración el buen comportamiento de aquél durante el tiempo de su

magistratura, su integridad, moderación, prudencia y celo; autorizando, por lo tanto, á los Diputados generales para que coadyuven las pretensiones del Corregidor en el adelantamiento de su carrera, así por medio de recomendaciones como interviniendo con los gastos que fuesen necesarios.



CAPÍTULO II

Los días 11, 12 y 13 de Marzo se reunieron en Bilbao los comisionados de las tres Provincias Vascongadas, asistiendo por Vizcaya los dos Diputados generales, para tratar de la real orden expedida por el Ministerio de la Guerra en 13 de Enero último, sobre el reemplazo del ejército. Se acordó en estas conferencias elevar al Rey la representación siguiente:

«Vuestras MM. NN. y MM. LL. Provincias Vascongadas de Vizcaya, Alava y Guipúzcoa, congregadas por medio de sus Diputaciones según costumbre, P. A. L. R. P. de V. M., con el más profundo respeto hacen presente: que habiéndoseles comunicado por el Ministerio de la Guerra la real orden de 13 de Enero último respectiva al reemplazo del ejército acordado en 1818, 1819, 1824 y 1827, y extensiva también al último del presente año, se las ha visto siempre manifestar los más vehementes deseos de acreditar á V. M. su inextinguible amor y lealtad, aclamando las protestaciones más sinceras de su fiel adhesión, y renovando sus sacrosantos juramentos de vivir y morir por V. R. Persona. Estos han sido los ecos uniformes de la Junta general de Vizcaya reunida el 7 de Febrero último so el árbol de

Guernica; estos los de la Junta de Guipúzcoa en 25 del propio mes; estos los de la particular de Alava en el 13 del mismo; y en estas demostraciones constantes y uniformes de su fidelidad no han sido más que el órgano sincero de los afectos universales que dominan en toda la extensión de vuestro pueblo vascongado.—Estos sentimientos, que forman una segunda naturaleza en estos sumisos vasallos, son siempre inseparables de aquella confianza en la bondad soberana de V. M. que constituye los encantos de vuestro benéfico Gobierno, y este grato impulso las mueve á recurrir á vuestra paternal ternura, confiando se les permitirá exponer á V. M. aquello que juzgan convenir á vuestro real servicio y al bienestar de vuestros pueblos, aclarando al mismo tiempo algunos antecedentes que se presentan en cierta oscuridad en este negociado.—La lealtad acrisolada de vuestras Provincias Vascongadas ha dado constantemente á V. M., testimonios irrecusables de su cordial adhesión y sirviendo sin coto ni medida á V. M. en tiempo de peligros, han hecho aun fuera de ellos con la mayor espontaneidad esfuerzos numerarios para ocurrir á las urgencias de la Corona cuanto les ha permitido su posibilidad. V. M. acordó á últimos del año de 1817 para el reemplazo del ejército una quinta que se habla de verificar en los cuatro siguientes, y al mismo tiempo se ocupaba vuestra paternal solicitud en una expedición que restableciese el justo respeto de vuestro nombre en los dominios de Ultramar. El Consejo supremo de la Guerra comunicó á vuestras fieles Provincias Vascongadas un contingente determinado de hombres. Las Provincias hicieron presentes á V. M. las dificultades que ofrecían para esta contribución los Fueros, con que era la voluntad soberana de V. M. que se rigiesen estos pueblos; y deseando su lealtad auxiliar sus soberanos designios en la empresa de reducir al orden Provincias di-

sidentes, convinieron juntamente con el Reino de Navarra en suministrar diez millones de reales en letras pagaderas en 15 de Diciembre de 1818, y en iguales días de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre de 1819. «Estas letras fueron satisfechas íntegramente, habiendo intervenido en la cobranza las personas que se citan». Las quintas correspondientes á los años de 20 y 21 experimentaron la interrupción consiguiente á las desgraciadas ocurrencias de aquella infausta época, que si consiguió arrancar de vuestros fieles vascongados otros reemplazos acordados en el sistema revolucionario, vió al mismo tiempo en ellos el testimonio enérgico de su fidelidad á vuestro trono, armando en defensa de los derechos imprescriptibles de la soberanía numerosos batallones, que dando principio á una lucha extraordinariamente peligrosa y desigual, promovieron con su horóico ejemplo los esfuerzos de la lealtad de otras Provincias, hasta que al fin, con el auxilio de la Francia, obtuvieron dichosamente el más completo restablecimiento de vuestro legítimo Gobierno, y de las leyes sacrosantas con que V. M. y sus augustos predecesores han sabido hacer la felicidad de sus pueblos, sosteniendo la dignidad del trono sobre sus verdaderas bases y esenciales prerrogativas.—En los años de 24 y 27 acordó V. M. nuevos reemplazos en que también se distribuyó contingente á las Provincias Vascongadas por el supremo Consejo de la Guerra. Estas elevaron á V. M. su voz respetuosa, implorando de vuestra soberana justificación la conservación de unos Fueros á que eran debidos los grandiosos esfuerzos de su lealtad en la lucha últimamente terminada, así como los infinitos sacrificios y armamento en masa de la guerra de la Independencia, y otros repetidos incommensurables servicios de tiempos anteriores desde su incorporación á la Corona de Castilla. Las Provincias observaron en medio de su decadente situación la penuria

forzosa del erario, y recibiendo nuevos alientos de su lealtad ofrecieron á V. M., por su reverente exposición elevada desde esta misma Villa en 12 de Junio de 1824, siete millones de reales, impetrando al mismo tiempo las declaraciones oportunas de V. M. en la exención del servicio ordinario periódico del reemplazo, y en otras novedades que sin ventaja de vuestro real erario oprimían las fábricas ó industrias del país, con que estos naturales desde las estériles breñas y montes en que moran querían prepararse á nuevos servicios con que pudiesen dar á V. M. testimonios ulteriores de su amor, según su posibilidad, cuando las urgencias los reclamasen, como siempre lo habían practicado. De este donativo se han satisfecho cuatro millones, ciento cincuenta y nueve mil, doscientos ochenta reales de vellón, habiéndose las Provincias apresurado á entregarlos en momentos en que V. M. se dignó mostrar su real aprecio, considerando que nacían de un impulso enteramente espontaneo, que nunca se separará de la acrisolada lealtad de vuestras Provincias Vascongadas, mientras la conservación ilesa de sus Fueros, que esperan de la bondad soberana de V. M., las reponga en estado de poder hacerlo efectivo. Las Provincias han recibido en estas circunstancias la real orden de 13 de Enero, y al mismo tiempo que tienen la satisfacción de poder manifestar á V. M. hallarse enteramente cumplido el ofrecimiento aceptado y convenido en el año de 18, con ocasión de las cuatro quintas que se sirvió por aquel tiempo determinar V. M. para cuatro años distintos, observan con sentimiento que la exención que siempre han gozado con respecto al reemplazo del ejército, se hace desaparecer bajo de un principio igualmente extensivo á todos los demás ramos de su administración foral, que es la única que puede sostener la población de un suelo tan estéril, y que V. M. y sus augustos progenitores se han dignado confirmar

solemnemente.—Se les dice, Señor, que el bien general de la Monarquía y el particular de las mismas Provincias, así como los axiomas más sólidos de justicia, exigen que todas se atemperen é igualen para la prestación de un servicio que el sistema militar y político de la Europa ha hecho absolutamente necesario, fuesen cualesquiera las razones que en lo antiguo hubiese para preferir y autorizar otros medios de defensa, por cuya consideración es inoportuno cuanto se tiene expuesto sobre la observancia de los Fueros.—Este principio, igualmente acomodable á los demás puntos de su gobierno foral, lo esteriliza en todos sus fundamentos. Las Provincias se complacen en poder manifestar á V. M. que en el sistema actual de sus Fueros no son menos útiles á V. M. que las demás del Reino. Sienten tener que exponer á vuestra soberana bondad, que la esterilidad ingrata de su suelo las condena á no poder sostener de otra manera una población que V. M. se ha dignado siempre acoger bajo de su protección soberana. Es una condición dura con que las aflige el rigor insuperable de la naturaleza, y la experiencia de los siglos tiene acreditado que solamente á beneficio de sus Fueros pueden igualarse con la fecundidad territorial de otras Provincias, más favorecidas en todo lo respectivo á su subsistencia, y á los servicios que han prestado siempre á la Corona, de no menos importancia proporcionadamente que el resto de la Monarquía, como es fácil demostrar en el examen imparcial de la materia.—El sistema de nivelación absoluta ha sido la máxima preponderante del siglo; pero una experiencia funesta ha acreditado los vicios inherentes á esta teoría, y la sabiduría de los tronos, que ha sabido distinguir las justas modificaciones de la aplicación práctica, ha conocido que los pueblos para su gobierno y cooperación igual necesitan que la diferencia de las leyes y métodos de go-

bierno compense distinciones de la naturaleza y de su posición local, dando al mismo tiempo su justo valor á los antiguos usos é inveteradas costumbres que forman el carácter y recursos variados de sus habitantes.—La nivelación práctica equilibra las fuerzas por el medio esencial de las distinciones; la nivelación especulativa que prescindía de ellas desigualaba de hecho la suerte de los pueblos á quien ha cabido un suelo menos dadivoso.—Los Fueros en las Provincias constituyen el verdadero nivel práctico, y en la misma proporción en que se les fuera privando de ellos, lo que nunca pueden recelar de la bondad y justificación soberana de V. M., se les iría reduciendo á una situación progresivamente afflictiva con respecto á los pobladores de las Provincias fértiles.—El Gobierno de V. M. es paternal, es justo, es sabio. Vuestra bondad soberana, vuestra excelsa sabiduría, vuestra suprema justificación no permitirá que por una teoría inaplicable á las máximas sólidas de gobierno proclamadas por la legitimidad de los tronos, queden vuestras fieles Provincias Vascongadas fuera de los términos de una compensación que la naturaleza del terreno, sus afecciones heredadas, sus hábitos, sus métodos, costumbres y medios de vivir están reclamando, que estriban esencialmente en los Fueros que sostienen á sus naturales en estado de ser útiles á la Corona, y que no solamente por miramientos á las leyes antiguas, sino también por consideraciones de conveniencia común de la más sabia política les fueron siempre confirmados por sus augustos Soberanos y por la munificencia de V. M.—Las Provincias, Señor, conocen evidentemente sus servicios prestados desde antiguo, y los que pudieran prestar en lo sucesivo si se las mantuviese en el goce ileso de sus Fueros, y sienten que se las ponga en la imposibilidad de poderlo acreditar á V. M., con las novedades que en estos últimos tiempos han agravado

notabilísimamente su condición, comprimiendo su industria, sujetándolas en muchos ramos á la condición de los extranjeros, y privándolas de la protección y fomento de los demás vasallos de S. M., al mismo tiempo que para las cargas, y gravámenes, sin salvarlas de los suyos, se propende á nivelarlas con las Provincias fértiles, abundantes y más favorecidas de vuestros Reinos. En otro tiempo gozaron de la libre introducción de sus frutos y manufacturas. En las aproximaciones del año 20, contra la verdadera voluntad de V. M. se las consideró ya como extranjeras, y aun ahora, recientemente, se les imponen condiciones para el comercio marítimo que las privan del beneficio concedido por la bondad y sabiduría de V. M. á la bandera española.—Vuestras fieles y bien queridas Provincias Vascongadas experimentan el más grave dolor al exponer á V. M. este sensible cuadro de su penosa situación, y sólo las consuela la confianza de que V. M. las aprecia en su paternal corazón, y al fin sus atentas y reverentes exposiciones merecerán que vuestra bondad soberana les tienda su mano protectora, con la que fertilizando su aplicación y laboriosidad puedan vencer la crisis de su decadente estado, y suministrar á V. M. todos aquellos servicios voluntarios que su lealtad les inspira, y que realizarán á un mismo tiempo las notables ventajas de vuestro servicio, los proyectos del amor inextinguible de estos vuestros fieles vasallos, y la felicidad de unos pueblos situados en una zona miserable en la que han merecido siempre bien de vuestra beneficencia soberana.—Dígnese V. M. tender una mirada paternal sobre sus leales pueblos vascongados, recibiendo benigno la sumisa exposición de su acrisolada fidelidad, como lo esperan de V. M. todos sus naturales; on cuya virtud—Suplican reverentemente á V. M. se sirva mantenerlos en el goce de sus Fueros, especial y señaladamente en la exención del reemplazo, dándolos por cumplidos

en la cantidad que les correspondió en el ofrecimiento convenido á últimos de 1817 con el pago que tienen verificado de sus respectivos contingentes, romoviendo así bien las novedades introducidas desde antes del año de 20, con cuya consideración ofrecieron el nuevo donativo de 1824, y podrán prepararse á otros servicios igualmente espontáneos cuando las urgencias de la Corona lo exigieren.» Firman por Vizcaya los Diputados generales Landecho y Jáuregui.

A la supuesta esterilidad y pobreza de Vizcaya se daba en algún tiempo excesiva importancia al tratarse de la defensa de los Fueros. La verdad que este argumento que pudo ser plausible y oportuno algunas veces, era también en otras un arma de dos filos, fácil de manejarse contra nosotros, y tenía además el grave inconveniente de reducir á cosa tan variable y contingente como las manifestaciones de la riqueza pública los fundamentos de nuestras libertades, nacidas de muy distintas causas, desarrolladas por razones más bien políticas que meramente económicas, y que habrían de perder necesariamente su mayor virtud y consistencia si les faltaba el apoyo del derecho vizcaíno, que era su verdadera salvaguardia. La doctrina popular hondamente arraigada en el ánimo de nuestros mayores no era el concepto de su relativa pobreza, para eximirse de pechos y gabelas, sino su calidad de hombres libres, que no reconocían en lo humano superiores, que no estuviesen admitidos por el consentimiento común, por medio de un pacto solemne, el cual ligase no menos á los súbditos que á los Señores. Esta fué la doctrina que se sustentaba en Vizcaya durante la dinastía austriaca, y la que prevaleció también en los primeros reinados de la casa de Borbón, en tiempo de Hurtado de Amézaga, Fontecha y Borica y otros jurisconsultos y patricios cuya memoria debe guardarse con veneración y respeto.

Cuando las doctrinas absolutistas llegaron á prevalecer por completo en España sobre las ruinas de las antiguas libertades populares, y cuando las doctrinas constitucionales vinieron á consolidar la omnipotencia del Estado, confirmando la obra de las doctrinas absolutistas, unas y otras enemigas irreconciliables de lo que se ha denominado modernamente el particularismo, no siendo sino la verdadera, la única libertad política, como que es patrimonio heredado de abolengo por los pueblos, y no concesión de Reyes, ni invento de doctrinarios y jacobinos; se vió también en Vizcaya cierta tendencia, hija á no dudarlo de muy sana intención, á conciliar las doctrinas imperantes con nuestros intereses, aunque fuera necesario para ello olvidar algún tanto las bases de nuestros derechos forales, ó encubrirlos cautelosamente para que no hiriesen con demasiada violencia á los propagadores de aquellas doctrinas. Así se explican ciertos sucesos ocurridos en los tiempos modernos en Vizcaya, que de otra suerte serían inexplicables; pero tales temperamentos conciliativos ni producen á menudo los resultados que se buscan, ni son tampoco bastante eficaces para resolver satisfactoriamente las cuestiones más graves que se suscitan en el gobierno de los pueblos.

El primero de Abril se remitió al Señorío por carta orden del Consejo un «ejemplar autorizado de la real pragmática sanción, en fuerza de ley, por la que se manda observar perpétuamente la ley segunda, título quince, Partida segunda según la petición de las Cortes celebradas en Madrid el año 1789 relativa á la sucesión regular de la Corona de España, á fin de que lo haga publicar en esa capital en la forma acostumbrada para su observancia y cumplimiento, comunicándola á este efecto á las Justicias de su distrito.»

El 10 de dicho mes, la Diputación, de conformidad con el dictamen del Síndico Videá, asesorado del Consultor Loí-

zaga, acordó obedecer, guardar y cumplir la real pragmática sanción, «y mediante á que hoy mismo se la ha dado en esta Villa la publicidad necesaria, por orden del señor Corregidor presente, que con antelación recibió un ejemplar de ella, omítase la repetición de esta diligencia; más para que se verifique igualmente y con toda brevedad en los demás pueblos del Señorío, reimprimase y circúlese á ellos por vereda en la forma de costumbre.» Esta alteración en el orden de suceder á la Corona tal como se hallaba establecido desde el reinado de Felipe quinto, fué, según resulta, aceptada en Vizcaya, en el caso presente, sin reservas de ningún género, como cosa corriente y sencilla.

A pesar de haber propuesto el Síndico Echaburu, asesorado de Lotzaga, que se suspendiese el cumplimiento de una circular de la Dirección de propios y arbitrios sobre la sustanciación de las demandas que se entablen contra los fondos de este ramo, porque las disposiciones generales sobre propios y arbitrios no son extensivas á este Señorío, cuyos pueblos los manejan de una manera especial sin reconocer con arreglo á sus Fueros para el conocimiento de las demandas contenciosas otro tribunal de primera instancia que sus juzgados ordinarios y forales; con las apelaciones graduales que prescribe el mismo Fuero; mandó el Corregidor el 20, que se guardase y cumpliese lo dispuesto por la Dirección general, en cuanto sea compatible con los Fueros, franquezas, buenos usos y costumbres de este Señorío, y con el método particular con que se gobiernan sus pueblos en la administración municipal de los propios y arbitrios.

El 14 de Mayo pasó la Diputación una circular, en la que recordaba á las Justicias del Señorío, en vista de su indiferencia y omisión, el cumplimiento de las repetidas órdenes comunicadas á los pueblos, siendo la última de fecha de 30 de Septiembre de 1828, acerca de los mendigos fo-

rasteros y los del país, que tanta molestia y perjuicio causan en todas direcciones y puntos donde se los encuentra pordioseando, quizá muchos de ellos sin una verdadera necesidad de semejante auxilio, y sólo por entregarse á la ociosidad y vagancia á que están acostumbrados por una caridad mal entendida.

Se mandó el 17 en Diputación obedecer, guardar y cumplir la real cédula del 9, por lo que con motivo de haber entrado la Reina en el quinto mes de su embarazo, y debiendo rendir á Dios por este señalado favor la más humilde acción de gracias, ordenaba el Rey, que para ello se hagan rogativas públicas y secretas, suplicándole se sirva dispensar á la Reina un feliz alumbramiento, «y que cubra con el escudo de su Omnipotencia el fruto de nuestra venturosa unión, para que prosperen la Religión y el Estado», participándolo á la Junta, procuradores, caballeros, escuderos, etcótera, del Señorío «para que como tan fieles y amantes vasallos concurráis á este fin, haciendo rogativas públicas y secretas con la eficacia y veras que siempre lo habeis procurado y el caso presente pide, para que así como es universal el bien lo sean las manifestaciones del agradecimiento á la divina misericordia que lo concede.»

Con motivo de haberse recibido en concepto de *muy reservado* un oficio del Superintendente de policía, transmitiendo tres reales órdenes «dirigidas á dar conocimiento de las tramas que los revolucionarios españoles refugiados en Inglaterra y otros países extranjeros están maquinando», encargó la Diputación el primero de Junio á los Jueces encargados de policía que estén á la mira de cualquier acontecimiento que ocurra, y vigilen á «las» personas que por sus opiniones peligrosas ó por su espíritu inquieto inspiren recelos de abrigar ideas subversivas», especialmente á los forasteros, á los cuales se vigilará, «celando sus pasos ó in-

vestigando el objeto y calidad de sus relaciones», cuando proceden de los puntos donde residen los maquinadores.

Habiendo dirigido el 26 de Abril á la Diputación la Marquesa viuda de Villarías una instancia en la que pedía que se diese publicidad á un real decreto comunicado á la Diputación general en 6 de Agosto de 1827, por el que se declara que el Marqués de Villartas (ya difunto) «en nada debe haber decaído de la confianza que le dispensaba el país cuando le eligió por su Diputado general, ni causado la menor nota en su honradez y adhesión á la sagrada persona del Rey N. S. por los sucesos ocurridos en la noche del 29 de Septiembre de 1824»; acordó la Diputación el 11 de Junio que se imprimiesen y circularasen por vereda en la forma ordinaria la instancia de la Marquesa viuda con la soberana resolución de que en ella se hace mérito. Resulta que el Marqués de Villarías había recurrido al Rey, á consecuencia de un motín ocurrido en Bilbao el 29 de Septiembre de 1824, en el cual varios alborotadores le despojaron de su cargo de Diputado general, y que el Rey, á consulta del Consejo, dada el 16 de Junio de 1827, resolvió «que el expresado Marqués de Villarías, por los sucesos ocurridos en la noche del 29 de Septiembre de 1824, en nada debe haber decaído de la confianza que le dispensaba este país cuando le eligió por su Diputado general, ni causándole la menor nota en su honradez y adhesión á la sagrada persona del Rey N. S., á causa de que esa Diputación, prefiriendo las medidas de prudencia á las aventuradas y rígidas de un proceso cual parece deseaba el referido Marqués, lograse, como logró, sin el menor perjuicio ni nota de éste, restablecer la tranquilidad alterada por una indiscreción de los miqueletes encargados de sostenerla y no de perturbarla, en cuyos términos esa Diputación y el citado Marqués de Villarías quedan á cubierto de cualquier concepto equi-

vocado que se haya formado con motivo de los mencionados sucesos».

Encargó la Diputación el 16 á las Justicias del Señorío que hiciesen saber al público que había hasta setenta expósitos desde la edad de ocho años á la de catorce, que estaban á disposición de las personas que quisieran tomarlos, previos los requisitos de fianza y demás formalidades de costumbre.

«Aunque no es de esperar, atendida la lealtad vizcaína, que los revolucionarios aventuren un desembarco en las costas del Señorío, como toda precaución es oportuna, cuando media el importante objeto de conservar la seguridad pública» se dirigió la Diputación el 17 á los Jueces encargados de policía, previniéndoles que procuren «reanimar el buen espíritu de los paisanos armados, y disponer que en los días festivos continúen ejercitándose en el manejo del fusil, á fin de que se hallen adiestrados y prontos para acudir en defensa de cualquier punto amenazado, y rechazar las locas tentativas de los rebeldes, que con la máscara del bien, y bajo el velo de promesas halagüeñas, nos traen los funestos presentes de la guerra intestina y la desolación». Se les recomendaba también que no olvidasen los artículos séptimo, octavo, noveno y décimo del bando de policía de 14 de Diciembre de 1825, ni cuanto se les tiene ordenado acerca de la dación de partes, periódicos y urgentes, según la naturaleza de las ocurrencias que los motiven.

El mismo día, á consecuencia de las modificaciones hechas en la aplicación á Vizcaya del nuevo código de comercio, se recibió el juramento correspondiente á los individuos nombrados para formar el tribunal de comercio de Bilbao.

Reunido el Regimiento general, con asistencia de los Padres de Provincia, aprobó el 7 de Julio todo lo acordado

por la Diputación para obsequiar al Infante Don Francisco de Paula en su viaje al Señorío. La Diputación había convenido con el Ayuntamiento de Bilbao en que costeara éste la cuarta parte de los gastos que ocasionase la venida del Infante, exceptuando los de las corridas de toros, que serán de cuenta de la Villa, sin que por estas circunstancias presida la función los días que concurra S. A. á la casa de la Diputación para verlas.

Fué nombrado el 15 Diputado en Corte Don Pedro Novia de Salcedo, en virtud de una real orden en que se encargaba á las Provincias Vascongadas que enviasen comisionados para tratar del fomento del comercio y la agricultura sin menoscabo de los Fueros.

Enterada la Diputación general por la exposición que le presentaron varios propietarios de montes y ferrerías, y traficantes en el ramo del hierro, y por otras noticias fidedignas, de que se había empezado á introducir algunas clases de hierro extranjero con el principal objeto de naturalizarlo en el país vascongado para defraudar los derechos reales á su introducción en las Provincias contribuyentes, y arruinar con esta reprobada ventaja las fábricas vascongadas y las demás nacionales de hierro; y á fin de evitar en su origen tan culpable operación, y conservar el concepto que tan justamente gozan los fabricantes vizcaínos, incapaces en su generalidad de presentar manufacturas extranjeras como artefactos suyos, dictó el 21 algunas providencias para que el hierro extranjero que se introduzca en el Señorío no pueda confundirse con el que se elabora en su territorio.

El 4 de Agosto se dió el uso á la real cédula expedida el 12 de Julio anterior, por la que se manda observar el reglamento en ella inserto sobre las facultades del Consejo de Castilla, las del juzgado de imprenta, y las de los subdelegados de las Provincias en el importante ramo de impresio-

nes de libros; suspendiéndose el cumplimiento, en cuanto á la jurisdicción del juzgado de imprentas y de los subdelegados de las Provincias, porque con arreglo á las leyes primera y segunda, título séptimo de los Fueros, no pueden ser sacados los vizcaínos de su domicilio en ningún caso, aunque sea de Corto, excepto sobre el delito de alevé, traición, repto, crimen de falsa moneda ó falsedad de carta ó sello real, debiéndoseles otorgar las apelaciones por el orden gradual que prescribe el siguiente título vigésimo nono. Tampoco debe establecerse en Vizcaya juzgado de autoridad especial diversa de las designadas en sus Fueros. Así es que al comunicarse al Síndico para el uso foral el nombramiento de subdelegado de imprentas y librerías conferido al Corregidor con fecha de 11 de Septiembre de 1754, expuso que podía practicarse entendiéndose como incitativa de la jurisdicción ordinaria, que conforme á Fuero reside en el Corregidor, y con que las leyes del cuaderno vizcaíno, capítulos de unión, reales cartas ejecutorias, cédulas y decretos reales que el Señorío y sus pueblos tienen, quedasen en su fuerza y vigor, observándose puntualmente y sin alteración.

Noticiosa la Diputación general de que no obstante lo prevenido en el artículo cuarto de la orden circulada en 25 de Noviembre de 1825, continúan los gitanos cruzando impunemente por el territorio de este Señorío, exponiendo á sus habitantes á daños y molestias que podrían evitarse con mayor celo de parte de sus habitantes, reencargó á las Justicias el 9 el más exacto y puntual cumplimiento de lo que se prescribe en el citado artículo cuarto, y lo propio á los miqueletes del Señorío, á cuyo beneficio se destinan los efectos y dinero que se les encuentre á los gitanos aprehendidos y expulsados por ellos del suelo vizcaíno, en la inteligencia de que la Diputación no disimulará la menor omisión ni condescendencia en este importante encargo.

En vista de que si bien algunas Justicias han desplegado un celo recomendable en el cumplimiento de las órdenes circuladas para que se conserven limpias, corrientes y servibles las armas, cananas y municiones en los pueblos del Sofforfo, y que los paisanos armados se ejerciten los días festivos en el manejo del fusil, á los menos en las operaciones de carga y descarga con prontitud y acierto, otras Justicias no han sido tan exactas, ni han mirado con el mismo interés un asunto de tanta gravedad; resolvió la Diputación el 14, reencargar á los Ayuntamientos, que sin la menor dilación, y en el espacio que correrá hasta el 8 del próximo Septiembre, dispongan la habilitación de todas las armas que carezcan de alguna pieza útil, ó reclamen composición, activando al mismo tiempo la instrucción doctrinal de los armados para que adquieran aquel grado de destreza y aptitud indispensable.

Con motivo de una real orden comunicada el 6 acerca de los sucesos ocurridos en Burdeos el 30 de Julio, á consecuencia de haberse recibido allí la noticia de las nuevas ordenanzas reales sobre la suspensión de la libertad de imprenta, la disolución de las cámaras, etc.; refiriéndose, aunque con menos originalidad, iguales desastrosos acontecimientos de la Corte de Francia; se dirigió la Diputación á los pueblos el 16, reiterando eficazísimamente cuanto tenía ordenado para conservar á toda costa imperturbables el orden y la tranquilidad, poniendo tan preciosos dones á cubierto de las maquinaciones desorganizadoras de los enemigos de la felicidad pública y de la prosperidad del Reino. Se recomendaba á los encargados de la policía, puntualidad y exactitud en noticiar á la Diputación el menor movimiento que se note en los ánimos, para acordar las medidas más enérgicas encaminadas á atajar en su origen sus funestas consecuencias, fino y circunspección en sus providen-

cias para no desviar el buen espíritu público que reina en Vizcaya; ojo perspicaz sobre los pasos y relaciones de los forasteros que transiten ó permanezcan en sus jurisdicciones respectivas, y más especialmente sobre toda clase de personas sospechosas, son los objetos predilectos de tan interesante desvelo, si desean corresponder á la confianza dignamente depositada en su fidelidad.—La Diputación que conoce los sentimientos leales y pacíficos de la generalidad de los vizcaínos, vive persuadida que nunca desmentirán el brillante concepto que se han adquirido por sus virtudes; sin embargo, conviene que las autoridades procuren evitarles el contagio de sugestivas artificiosas, que propenden siempre á renovar días de amargura que lloró la España en una época reciente, alejándolos de los que bajo el velo del patriotismo siembran el germen de la discordia y conmueven las pasiones, comprometiendo á los incautos, para arribar al logro de sus fines particulares.

Teniéndose noticia de que el guerrillero Don Gaspar de Jáuregui (a) el Pastor y Don Joaquín de Pablo (a) Chapalangarra, emigrados en Francia, se hallaban últimamente en pueblos inmediatos á la frontera de Navarra, presumiéndose que con ánimo de introducirse en España, á perturbar la tranquilidad y subvertir el orden; previno la Diputación el 23 á los Juecos encargados de policía que estuviesen muy á la mira por si alguno de dichos sujetos llegase á su jurisdicción, para detenerle y dirigirle á Bilbao con las precauciones necesarias.

El primero de Septiembre se celebró Regimiento general con asistencia de los Padres de Provincia, á consecuencia de una real orden comunicada el 27 de Agosto, por la que se daba noticia de manejos revolucionarios en la frontera de Francia, encargando que se enviasen dos comisionados á la Corte para tratar de la adopción de algunas medi-

das militares, sin quebrantamiento de los Fueros. Acordó el Regimiento facultar á la Diputación para que nombrase los comisionados, y convocar á Juntas generales extraordinarias.

La Diputación nombró el 2 por tales comisionados al Diputado general Landecho y al Padre de Provincia Ansótegui.

Se acordó el 9, de conformidad con lo propuesto por el Síndico, imprimir y circular inmediatamente á todos los pueblos del Señorío, para su cumplimiento, una real cédula por la cual se mandaba que se hiciesen rogativas públicas y secretas con motivo de hallarse la Reina próxima á entrar en el noveno mes de su preñado.



CAPÍTULO III



La Junta general se congregó el 14 de Septiembre, presidida por Don Francisco Javier de Aranguen y Urrutia, Teniente general del Señorío en funciones del Corregidor, el cual pronunció un discurso, que tomado textualmente del cuaderno impreso de las actas, es como sigue:

SEÑORES.—La feliz reunión de V. S. S. hoy, so el arbol de Guernica, de esclarecida nombradía, va á hacer época en los anales; reunión digna de la mayor observación, ora en su causa, ora en su objeto, marcados una y otro en las páginas á cuya exposición seró, en encerradas respiraciones, concretadas en cuanto es dado á mi corta comprensión.

»En la grattsima del 27 de Agosto último, verá el congreso la resolución real, propia de la inexhausta benevolencia del Rey N. S., por la que se sirve ordenar que sin pérdida de tiempo pasen á la Corte dos comisionados, á fin de acordar los medios de defensa que deben emplearse en la frontera de Francia, desde este ilustre solar de Vizcaya hasta Cataluña, bajo bases conformes á sus Fueros, franquezas y privilegios, contra las vanas tentativas de los revolucionarios españoles refugiados en aquel Reino.

»Cada acento de la augusta página, SEÑORES, presenta puntos de sublime meditación acerca de la confianza que ha tenido á bien dispensar á Vizcaya la munificencia de nuestro Soberano, dignándose llamarla á tomar parte en un asunto que por su importancia ocupa en estos momentos el piélago de sabiduría y política de la Europa entera, dignándose S. M. repito ¿y bajo qué bases? tales que toda la lealtad y nobleza de los favorecidísimos vizcaínos, acompañadas de un eterno reconocimiento, podrán únicamente hacer que no raye en sobre-abundante la singular soberana bondad.

»Pasando á hablar de las demás, se hallará que en el momento que recibió la real página la Diputación general, se consagró á llenar sus deberes con todo el tino que la caracteriza; y habiendo oído con el mayor interés el dictamen del Regimiento general, con asistencia de los señores Padres de Provincia, se conformó muy de grado con él, suscribiendo desde aquel instante á cuanto este sabio congreso, con la madurez, calma, unión, unión, Señores! y rectitud de intención, á las que siempre por siempre ha concedido el Cielo el mejor suceso, y con especialidad en los grandiosos asuntos de la naturaleza del que nos ejercita, debiliterase circunspecto en obsequio del grande objeto.

»Así, pues, persuadido íntimamente, Señores, de que animados V. S. S. de los sentimientos de amor, fidelidad y obediencia impresos en sus corazones hacia sus adorados Reyes y Señores, que trae del seno materno todo vizcaíno, consumarán la obra noble y juiciosamente, consultando el mejor servicio de la Religión, única verdadera, y del trono, creo poder dar el más completo parabién á mis deseos y esperanzas.»

Nada se dice en el acta del efecto que produjo en el ánimo de los concurrentes el singular discurso del Corregidor; aunque es de presumir que fuese poco halagüeño, porque

no es costumbre contestar con el silencio más absoluto, como sucedió en este caso, á expresiones merecedoras de aprobación, cuando no de aplauso.

Se nombró después una comisión compuesta de los Padres de Provincia, y de dos individuos por cada Merindad, con el Corregidor, para que reconociese los poderes que se habían presentado.

Esta comisión dió su dictamen el día siguiente 15, diciendo que podían darse por bastantes todos los poderes, y por legítimos á los apoderados á cuyo favor se otorgan; pero que «la uniformidad en la extensión de poderes para Juntas evitaría algunas dudas sobre defectos de solemnidad y facilitaría su revisión, hallándose otorgados todos en escrituras impresas, con arreglo al modelo que se adoptase, y cuya formación convendría que V. S. encargase á la Diputación general, y que lo presente para su aprobación en las próximas Juntas generales ordinarias».

Se aprobó el informe de la comisión, en todas sus partes.

Enterada la Junta de la real orden que se comunicó á la Diputación por extraordinario el 27 de Agosto, en la cual se decía que conviniendo preservar la frontera «desde Vizcaya á Cataluña, por medio de algunos cuerpos de voluntarios disponibles, y prontos á acudir con rapidez á los puntos que puedan ser amenazados, quiere S. M. que V. I., sin pérdida de tiempo, envíe á esta Corte con sus poderes más amplios, dos comisionados, á fin de acordar los medios de defensa que deben emplearse, bajo bases conformes á sus Fueros y privilegios»; y enterada también de todo lo obrado, en su consecuencia, por la Diputación general, aprobó el nombramiento de comisionados especiales hecho en Landecho y Ansótegui, en virtud de lo resuelto por el Regimiento general, y creó una comisión compuesta de los Padres de Provincia y dos individuos por cada Merindad, con el Consultor,

para que con presencia de todos los antecedentes de la materia proponga á la Junta cuanto estime conducente.

No volvió la Junta á congregarse hasta el 17, por no haber podido presentar antes la comisión el informe de que estaba encargada. Lo presentó dicho día, exponiendo que «ha fijado su primer atención en que los vizcaínos se hallan exentos por sus Fueros de toda prestación forzosa para el servicio militar, fuera de los límites de Vizcaya, á no ir mandados personalmente por su Señor, pero que no por eso se ha desentendido este Señorío de hacer generosos esfuerzos en las crisis apuradas», porque «desde su feliz incorporación á la Corona de Castilla ha dado sobradas pruebas de que cuando lo exige la salvación de la Monarquía ó el decoro del Soberano empuña las armas con entusiasmo y decisión que le ha llenado siempre de gloria.—Tanto en la organización de los ejércitos como en el gobierno de los diversos Estados de que se compone una Monarquía pura, existen y deben existir países y cuerpos privilegiados, que gozando de exenciones y prerrogativas en los tiempos ordinarios, se hallan consagrados á distinguirse en los lances apurados y críticos, ó inmediatamente interesados en sostener al Gobierno y las antiguas instituciones. Las exenciones que gozan estos privilegiados, sobre ser fundadas en justicia, se hallan bien compensadas con las ventajas que produce una noble emulación.—Así es que nada puede arredrar á los vizcaínos cuando obran dentro del círculo de su peculiar legislación, al paso que su menor infracción los llena de celos y mortales congojas. En los desgraciados años de 1812 y 1820 tuvo V. I. la heroica firmeza de negarse abiertamente á jurar la llamada Constitución política de la Monarquía española, y los vizcaínos respondieron á los votos de sus leales y bizarros representantes jurando en el fondo de su corazón recobrar los Fueros que les

arrancó la revolución. Cumplieron como siempre su sagrada promesa, y después de una sangrienta y desventajosa lucha lograron llenar sus justos deseos. ¹ — En las recientes turbulencias que afligieron á Cataluña osaron algunos conspiradores extender sus ramificaciones al país vascongado, en cuyo territorio se vió alterada la tranquilidad por la facción al mando de Lausagarreta; pero los vizcaínos purgaron bien pronto de revolucionarios este Señorío.—La comisión abunda en la más plena convicción de que tendrán igual suerte cuantos pretendan excitar cualquier convulsión política en este suelo clásico de lealtad. Ningún esfuerzo, por extraordinario que sea, arredra á los fieles y constantes vizcaínos para repeler al enemigo que intentára hollar su territorio, y aunque se hallan exentos de sorvir fuera de Vizcaya, no siendo con su Señor, se han prestado espontáneamente en algunas circunstancias de gravedad, mientras su momentánea existencia.—Se persuade de consiguiente la comisión que debe V. I. autorizar á su Diputación general para que comunique las correspon-

¹ En tiempo y lugar oportuno se hicieron algunas reflexiones, que no se hallan enteramente de acuerdo con lo que aquí se asienta de una manera tan rotunda, fundadas en lo que se desprendía rectamente de los documentos que entonces se transcribieron. Conviene añadir ahora, á mayor abundamiento, que el primer firmante de este dictamen era Don Antonio Leonardo de Letona, el cual juró la Constitución de 1812 como Jefe político de Vizcaya, que fué dos veces en 1813 y 1820, aunque en este último año se apresuró á renunciar el empleo por razones personales, y no políticas, según consta también en un documento auténtico que se transcribió oportunamente. Si juró Letona á la vez otra cosa *en el fondo de su corazón*, como se insinúa en el dictamen, es circunstancia que no quita el menor valor al acto público á que se refiere el juramento mental, porque no había en este caso siquiera asomo de aquellas coacciones ó violencias que pueden excusar el que se preste con los labios un juramento que niega la conciencia.

dientes instrucciones á los Diputados especiales en Corte, á fin de que entre los medios de defensa interior de este Señorío, puedan manifestar que si lo exigiesen las circunstancias se prestará Vizcaya espontáneamente á que un número proporcionado de sus jóvenes solteros vaya á cubrir la próxima frontera de Francia durante el tiempo del actual peligro, formándose y organizándose el cuerpo destinado á este efecto por la Diputación general, por medios análogos á los adoptados anteriormente por las Juntas generales, con las modificaciones que estime convenientes, prefiriendo el realizarlo con voluntarios ó enganchados.---A fin de completar la organización del armamento actual de este Señorío, entiendo la comisión que las circunstancias actuales hacen indispensable el que la Diputación general ponga con urgencia en ejecución cuantas disposiciones comprende el reglamento circularizado por la misma Diputación general con fecha de 21 de Septiembre de 1827»; y que para ocurrir á cuantos gastos extraordinarios sobrevengan á consecuencia de la actual crisis, conviene que la Junta trasmita á la Diputación todas sus facultades.

Se acordó que se tuviese este informe por decreto.

Enterada la Junta de un oficio de los Diputados especiales en Corte, relativo á la misión de que están encargados, acordó que se les diesen las gracias por su celo y desinterés, y que la Diputación general les comuniqué las instrucciones competentes, en virtud de la autorización que se le ha conferido por el anterior decreto.

Se acordó también dar las gracias más expresivas á los individuos que componen la Diputación general por el acierto con que han desempeñado los negocios de su cargo.

El 23 de Septiembre hizo la Diputación los nombramientos de los Jefes de las seis secciones, y de los Comandantes de los tres batallones de cada sección, en que estaba divi-

dido el Señorío. Los Jefes de sección nombrados fueron Don Santiago de Unceta, vecino de Bilbao, Don Pedro Antonio de Ventades, de Munguía, Don José Francisco de Alzáa, de Marquina, el Marqués de Valdespina, de Ermua, Don José Ramón de Rotacche, de Ceánuri, y Don José Ramón de Urquijo, de Gordejuela.

El 4 y 5 de Octubre se juntaron en Vitoria los comisionados de las tres Provincias Vascongadas, asistiendo por Vizcaya el Padre de Provincia Don Serapio de la Hornaza y el Consultor Loizaga, con motivo de una real orden expedida el 21 de Septiembre, por la cual se excitaba á estas Provincias á que levantasen mil hombres á lo nrenos, ó suministrasen el dinero que se calcule necesario para el mantenimiento de igual número de soldados, con qué ocurrir á la defensa de la frontera amenazada por algunos emigrados españoles constituidos en rebelión contra el Gobierno del Rey. Se acordó en la primera de las dos conferencias celebradas poner á disposición del Gobierno cien mil reales mensuales, mientras duren las circunstancias extraordinarias que motivan este servicio. En la segunda conferencia se trató del prorrato de dicha cantidad; se tomaron por base el censo de población de 1791, y el reparto del donativo ofrecido á S. M. en 1824, con las reservas con que fué acordado. Tocaron á Vizcaya treinta y ocho mil, trescientos noventa y un reales y catorce maravedis mensuales.

La Diputación, en concepto de Capitán general de la fuerza armada de Vizcaya, nombró el primero de Octubre ayudantes de campo á Don José María de Jusué, Padre de Provincia, Don José María de Gortazar, teniente de los paisanos armados de Bilbao, Don Miguel de Ibaseta, vecino de Marquina y Don Antonio Ibáñez de Rentería, de Lequeitio.

Noticiosa la Diputación de que además de los fusiles repartidos por ella á los paisanos armados de los pueblos del

Señorío, existen muchos en poder de particulares, procedentes de la guerra de la Independencia y de la lucha contra los constitucionales, acordó el 11, entre otras providencias, que se anuncie á los fieles habitantes del Señorío que se compraran cuantos fusiles de propiedad particular se presenten por sus dueños, sea cual fuese el estado en que se encuentren, satisfaciendo inmediatamente su justo valor.

Después de oír confidencialmente el parecer de los Regidores y Padres de Provincia del Señorío, resolvió la Diputación el 16 pedir al comercio de Bilbao un préstamo de cincuenta mil duros al interés de cinco por ciento.

Se publicó el mismo día la alocución siguiente:

«VIZCAÍÑOS.—Un puñado de españoles, expulsados de su Patria, que después de haber vagado por varios países extranjeros, se han reunido en la frontera de Francia á hombres mercenarios é inmoralizados de muchas naciones, han osado invadir el Reino por la parte de Navarra, en número de seiscientos, con el temerario arrojo de mudar la forma de nuestro gobierno y sumirnos en un piélago de males. ¡Ilusos! ¿Querrían modelar acaso por sí propios á la masa de los leales españoles, que no respira más que fidelidad á su *Rey* y *Religión*, amor al orden y á la paz y una decisión constante en favor de la conservación de nuestras antiguas y venerandas instituciones, que han labrado la felicidad de la magnánima Nación española por espacio de tantos siglos? Pronto un espantoso desengaño les enseñará á juzgar con menos ligereza del caracter español. Activas y enérgicas disposiciones se han tomado en todas partes para oponer una eficaz resistencia á sus proyectos, y el exterminio de la facción será indudablemente el resultado que debemos esperar, si se atreve á medir sus fuerzas impotentes con las de los numerosos defensores de la Monarquía que se dirigen á su encuentro. A la primera noticia de la aparición de los

rebeldes, un movimiento simultáneo de patriotismo ha electrizado á los vizcaínos, y ya sus huestes realistas, anhelando el combate, caminan á la victoria. El buen orden, la subordinación y el entusiasmo que ha ostentado el brillante primer batallón de los paisanos armados de esta Villa, á su salida para Vergara, y el que anima á los individuos de las secciones tercera, cuarta y quinta, que deben incorporárseles allí, igualmente que al resto de los armados del Señorío y al de sus habitantes en general, no dejan temer que se aproxime á este país privilegiado de la lealtad el genio horroroso de la guerra civil. Sin embargo, en circunstancias críticas como las presentes, toda precaución es oportuna, y la provisión de la autoridad encargada de la conservación de la tranquilidad debe alejar hasta el más remoto peligro de perturbación. A este único fin se dirige el más exacto cumplimiento de las disposiciones siguientes:

»1.ª Las autoridades de los pueblos de este Señorío desplegarán el mayor celo para hacer que se mantenga entre sus habitantes la armonía, el orden y la unión, evitando con su prudencia todo motivo de discordia y alteración, á cuyo importante objeto no omitirán medio ni diligencia que se halle á su alcance.

»2.ª Las mismas autoridades se pondrán de acuerdo con los Jefes de los paisanos armados de sus jurisdicciones respectivas, en todo cuanto concierna á las medidas de seguridad de que se hallan encargadas por la Diputación.

»3.ª Los que tengan en su poder cualesquiera clases de armas blancas y de fuego, sin hallarse competentemente autorizados para su uso, las entregarán á la policía en el término de cuarenta y ocho horas de la publicación de esta orden, pena de proceder contra los que las ocultan con el rigor de las leyes.

»4.ª La Diputación espera de las personas que hubiesen

dado sospechas por sus opiniones, antes de ser amaestradas por la experiencia, que se comportarán en sus actos y conversaciones con la prudencia necesaria, para evitar la desagradable necesidad de tomar serias providencias».

Firman Aranguren, como Corregidor; Jáuregui y Urquijo, como Diputados, y Artífano, oficial mayor, como Secretario.

La Diputación general recibió la madrugada del 20 «un expreso del Jefe de la primera sección de los paisanos armados de Vizcaya, participando que á las ocho y media de la noche se le había entregado con toda urgencia un oficio del Capitán general de Guipúzcoa, previniéndole con la misma fecha, que hallándose aquella Provincia muy amenazada por los rebeldes, y no habiendo recibido el refuerzo que espera de un día á otro de dos batallones de cazadores provinciales de la Guardia real, es muy conveniente que interin llega dicha fuerza, pase á la Villa de Hernani con el primer batallón y quinientos hombres más. A la media hora le remitió la Diputación general con extraordinario la correspondiente orden, para que según lo había propuesto el mismo Jefe de sección, se pudiese en marcha inmediatamente con el primer batallón para la Villa de Hernani; que trasladase á la de Ermua los quinientos hombres situados en Elorrio, avanzando á este punto los de Durango, y encargándole que si efectivamente se verificase la invasión de los revolucionarios, podrá disponer que los quinientos hombres que por ahora se acantonan en Ermua sigan la misma marcha que el primer batallón, y se le reunan en el punto que les designen».

Considerando la Diputación que era llegado el caso previsto por la Junta general de 17 de Septiembre último, al decretar que si lo exigiesen las circunstancias se prestará Vizcaya á cubrir la frontera de Francia con un número proporcionado de jóvenes solteros, dispuso que en el término

perentorio de cuarenta y ocho horas se hiciese el alistamiento de todos los solteros, desde la edad de diez y ocho años hasta la de cuarenta, con las exenciones que se expresan, por razón de las ocupaciones ó profesión de los exceptuados; formándose con los alistados en los respectivos distritos tantas compañías como batallones hay en el Señorío, aun cuando resulte entre ellos alguna desproporción numérica.

Se dió el uso el 23 á la real cédula dirigida al Señorío el 15, por la cual se participaba el nacimiento de una Infanta, (que fué después la Reina Doña Isabel segunda.) Firmaban Aranguren, como Corregidor; Jáuregui y Urquijo, Diputados generales, y Soloeta Balzola, Secretario. El informe del Síndico Videca, asesorado de Lozaga es como sigue: «El Síndico ha visto la real cédula expedida en 15 del corriente, por la cual se digna el Rey participar para su satisfacción á este Señorío, que la REINA, su augusta esposa, dió á luz á las cuatro de la tarde del día 10 anterior una robusta Infanta, bendiciendo el Cielo de esta manera su venturosa unión, y colmando los ardientes deseos de todos sus vasallos, que suspiraban por la sucesión directa de la Corona, á fin de que se disponga que en todos los pueblos de Vizcaya se tribute al Señor la más rendida acción de gracias por tan inestimable beneficio, rogando al mismo tiempo por la salud de la REINA nuestra Señora, y que ampare con su divina omnipotencia el primer fruto del matrimonio de nuestros augustos Soberanos, y dice: que es de guardarse y cumplirse por vereda en la forma acostumbrada.»

Se dió también el uso el mismo día á una real orden, en la cual habiendo llegado á noticia del Rey «por conducto fidedigno que los revolucionarios han concebido el plan de valerse de máquinas infernales en forma de pliegos para deshacerse de las personas que les convenga, según trataron

de hacerlo con el General Egufá», se previene á todas las autoridades «que usen de la mayor precaución en la apertura de pliegos para evitar cualquiera catástrofe.»

Se autorizó el 25 al Síndico para que arrojase con los apoderados de la Junta de comercio el préstamo convenido de un millón ochocientos mil reales, al interés de tres por ciento, que hacían los comerciantes al Señorío.

De orden de la Diputación se publicó el 29 un parte del general en Jefe de las tropas de operaciones Don Manuel Llauder, fechado el 27 en Vera, comunicando la derrota de las fuerzas de Valdés, Leguía, López Baños, Butrón, Sánchez, Mancha y otros, en Echalar. Este parte venía por conducto del ayudante de campo de la Diputación de Vizcaya Don José María de Gortazar, que se hallaba en Tolosa, el cual añadía con referencia al Diputado de Guipúzcoa «que no pudiendo volver á Francia, Mina y el Pastor con ciento cincuenta hombres, resto de sus tropas, habían pasado al interior de aquella Provincia, en donde eran perseguidos en todas direcciones.»

El 15 de Octubre se comunicó de orden del Consejo al Señorío la real cédula de la misma fecha, en que se halla inserto el real decreto del 13, por el cual mandaba el Rey «que á su muy amada hija la Infanta Doña María Isabel Luisa se le hagan los honores como al Príncipe de Asturias, por ser su heredera y legítima sucesora á la Corona, mientras Dios no le conceda un hijo varón.» Pasada la real cédula al Síndico para su informe, lo evacuó el 26, diciendo que era de guardarse y cumplirse, y la Diputación mandó, en consecuencia el 30 que se reimprimiese y repartiese la real cédula por vereda á los pueblos del Señorío para los efectos á que se dirige.

El General de la división de operaciones de Guipúzcoa Don Alejandro González Villalobos publicó el 28 una orden

general, en la que decía «que los rebeldes, dos veces forzados á buscar refugio en país extranjero, han sido ya desarraigados é internados por las autoridades francesas; dos cabecillas, seguidos de un corto número de su facción, buscan una senda que pueda salvarlos del más justo castigo»; la guerra ha concluido en un día; y el General, después de dar las gracias á los Jefes, oficiales y tropa de su división, por su comportamiento, «no halla términos», añade, «con qué expresar dignamente mi admiración hacia los cuerpos urbanos de Alava, Vizcaya y Guipúzcoa, que separados de sus familias y ocupaciones tranquilas, han olvidado sus comodidades habituales para rivalizar con los soldados del Rey, acostumbrados á sufrir y vencer.»

La Diputación publicó á su vez el primero de Noviembre la alocución siguiente: «VIZCAINOS. Al primer anuncio de que los revolucionarios asomaban por la cumbre del Pirineo occidental, formásteis vuestras columnas, esperando impacientes la señal de marchar al enemigo. Envidiábais con noble emulación la suerte de vuestro brillante primer batallón, que acercándose al Bidasoa iba á medir sus armas con los temerarios que el genio de la discordia quería lanzar sobre la heroica España. Con un movimiento sabiamente combinado, y al que tan inmediatamente ha concurrido el primer batallón de Vizcaya, se ha concluido en un solo día la lucha provocada por seres desmoralizados que llenos de pavor se esconden en lo interior de la Francia.—Se regocija Vizcaya en sus bizarros hijos del primer batallón, que al valor y sufrimiento en las fatigas reúnen la subordinación y amor al orden. Han rivalizado igualmente los cuerpos de las secciones tercera, cuarta y quinta en ardor marcial y en disciplina durante su respectivo acantonamiento. Todos los demás paisanos armados se han prestado con el mismo espíritu y entusiasmo, pero no ha sido necesaria su concurrencia simul-

tánea.—Descansad, pues, bravos guerreros en el seno de vuestras familias, acompañando los sinceros votos de la fiel Vizcaya, y la gratitud de su Diputación general por la interesante cooperación que habeis prestado á destruir el germen de la guerra civil.—Acudid á los piés de los altares con la dulce emoción que inspira nuestra sacrosanta Religión, bendiciendo la Omnipotencia del Dios de los ejércitos, y dándole gracias en el solemne Te Deum que harán celebrar todos los pueblos de Vizcaya.»

El Ayuntamiento de Bilbao, por su parte, dirigió otra alocución el 4 al batallón de su vecindario que había regresado ya de Guipúzcoa, en la que, entre otras cosas, decía lo siguiente: «Habeis correspondido con la fe prometida al tiempo de alistaros en las armas realistas, que organizó el Ayuntamiento del año de veinte y tres, y que las corporaciones sucesivas han conservado y aumentado. Vive seguro el Ayuntamiento de vuestro ardiente espíritu contra la perfidia y la rebelión».

Se dió cuenta el 3 de una real orden, comunicada á los Diputados generales, en la que se previene que aunque Mina y el Pastor se hallan perseguidos en todas direcciones, «considerando S. M. como un servicio eminente la prisión de estos malvados prófugos, desea que V. S. S. por todos los medios que estén á su alcance inviten á los pueblos, caseríos, y á todos los habitantes de esa fidelísima Provincia á que contribuyan de la manera más eficaz á que se verifique, que se ofrezcan premios, y se expidan las más terminantes órdenes al efecto, del mismo modo que se dé á entender el ejemplar castigo que sufrirán irremisiblemente los que contra toda esperanza los protejan ó abriguen.»

En su vista, acordó la Diputación «que se circule inmediatamente á todos los pueblos de este Señorío con el objeto á que se dirige, ofreciendo, como ofrece, la Diputación ge-

neral, por vía de premio, uno de los mejores caseríos con sus correspondientes tierras por cada uno de los rebeldes Mina ó el Pastor á la persona que se los presente, vivos ó muertos, y si en combinación fuesen cogidos por varios individuos, la suma de cien mil reales de vellón en efectivo»; y encargar á las respectivas Justicias y Ayuntamientos den la publicidad necesaria á esta orden, para que tenga su debido cumplimiento por todos los fieles habitantes de esta jurisdicción.

Se dió el uso el 8 á dos reales cédulas, «concediendo por la primera indulto general á todos los reos capaces de él, exceptuando á los de los delitos que especifica; y por la segunda cincuenta y un mil maravedís del producto de penas de Cámara del Corregimiento, y no habiéndolos, de los demás maravedís de su cargo, aplicados para los presos por deudas en las cárceles del Señorío.» Concedióse este indulto, por «el importante beneficio y singular consuelo del feliz parto de la Reina... debido á la divina Providencia», siendo tan propio del paternal amor del Rey á sus vasallos «el dispensarles las gracias y alivios que permiten la equidad y la justicia.»

Se dió cuenta el 15 de una real orden por la que se accedía al regreso solicitado por la Diputación general de los Diputados en Corto del Señorío, por estar ya terminada su misión; añadiendo que S. M. «quiere que se haga pública en esa fidelísima Provincia su augusta benevolencia, y cuan dispuesto se halla su real ánimo á dispensarle su soberana protección, á que tan acreedora se hizo por sus relevantes servicios y acrisolada lealtad en todos tiempos, y muy particularmente en las presentes circunstancias de haber intentado una facción impía y rebelde hollar su suelo, profanar sus leyes y turbar su reposo».

El 9 de Diciembre se dió posesión en Regimiento general

del empleo de Corregidor del Señorío á Don Vicente de Sanahuja y Mey, con arreglo á la real orden de 15 de Septiembre de 1824, que disponía que no fuesen Corregidores de Vizcaya los Oidores de la Chancillería de Valladolid, por no distraerlos de su empleo.

Se habían concedido á Sanahuja los honores de Alcalde del crimen de la propia Chancillería. Sanahuja se dirigió con la misma fecha á los habitantes del Señorío en los términos siguientes:

«Al tomar posesión de este Corregimiento que la bondad del Rey N. S. (Q. D. G.) se ha dignado conferirme, siento todo el peso de las nuevas obligaciones que he contraído; si fuesen menos graves, sería más cumplida la satisfacción que tengo de vivir entre vosotros. Aunque decidido á obrar por los delicados principios que me han conducido siempre en el desempeño de la magistratura por espacio de tantos años, confío poco alcanzar lo que exigen estos borrascosos tiempos, en que el genio de la novedad y de la contradicción ha hecho á los hombres tan desconocidos como intratables. Entiendan todos á lo menos, que amigo del hombre de bien, sabré apreciarle, dándole á mi lado el lugar merecido por sus virtudes, al paso que vengador de los extravíos del delincuente, no podré menos de hacerle sentir la fuerza de las leyes que ha violado con sus excesos. Mal se me atribuiría por esto un placer en castigar delitos; mayor es la satisfacción que siempre he tenido en prevenirlos. A tan laudable fin me valdré, como he acostumbrado, del crédito, experiencia y luces de los prohombres de mi jurisdicción; apuraré los caminos de la prudencia, emplearé los consejos paternales y los medios de conciliación que juzgue oportunos; nada perdonaré en fin de cuanto conduzca á persuadirlos de mi disposición á todos los sacrificios que la paz haga indispensables, de que vengo entre vosotros como un amigo

que os habla con el corazón en la mano, y no como un espía sospechoso de vuestras operaciones; más como un instrumento de vuestra seguridad que como un Fiscal incómodo en medio de vuestros inocentes desahogos. Precísado á decidir en justicia, las leyes serán mi pauta y mi guía, y lo serán también vuestros respetables Fueros y privilegios, de que os ofrezco ser el primer defensor, no solamente por la obligación que me impone mi empleo, sino porque así lo merece vuestra constante acendrada fidelidad á vuestros Soberanos, y las últimas pruebas que de ella acabais de dar.»

El 11 de Diciembre se reunieron en Tolosa los comisionados de las Provincias Vascongadas. Asistían por Vizcaya el Padre de Provincia Don Serapio de la Hormaza y el Consultor Lotzaga. Acordóse en esta conferencia elevar al Rey la representación siguiente:

«SEÑOR.—Vuestras M. NN. y M. LL. Provincias Vascongadas de Guipúzcoa, Vizcaya y Alava, rebatidas ya de todo punto con el más decisivo escarmiento las tentativas revolucionarias de la frontera, han creído deber ofrecer nuevamente á V. M. el homenaje de sus sentimientos afectuosos y de su lealtad inextinguible. Reunidos sus comisionados especiales para transmitir á V. M. los sentimientos de esta general adhesión y amor á vuestra real Persona, cumplen con tanta más satisfacción con este dulce encargo, cuanto sus sacrificios en esta coyuntura delicada han sido enteramente espontáneos, nacidos en todos de las afecciones más íntimas del corazón, y connaturalizados con aquella fuerza de carácter que producen naturalmente las relaciones benéficas con el Soberano, cimentadas sólidamente sobre las leyes venerandas de vuestros mayores, y sobre un sistema de bondad paternal ejercitado siempre con constancia inalterable.—V. M. confió en las Provincias Vascongadas, y las Provincias Vascongadas han dado un testimonio público de

que V. M. las conoce perfectamente. V. M. sabe que sus vascongados le aman, y le sirven con fe purísima, con celo sin límites. Díguese V. M. conservar siempre en su real corazón esta verdad preciosa, con la que está esencialmente enlazada la felicidad de vuestras Provincias, que, á la manera que sellaron con su sangre su lealtad en las guerras y disturbios anteriores, han correspondido igualmente ahora á su vocación, y no desmentirán jamás su resolución imperturbable. V. M. sabe muy bien cuan desinteresados han sido estos servicios, y desearían no acompañarlos de súplica alguna, que pudiese denotar que había tenido la menor parte en ellos otro sentimiento que el del amor puro é inveterado á vuestra real Persona.—Las Provincias han propuesto en otras ocasiones á V. M. medidas de fomento; han solicitado remoción de trabas; han ocupado la atención soberana de V. M. con súplicas beneficiosas. Las Provincias observan la grave influencia que tienen en la prosperidad del país; se fundan en justicia. V. M. se ha dignado manifestar su soberano agrado por sus últimos servicios contra la agresión revolucionaria, de una manera tan eficaz, con expresiones tan personales, que podrían creerse en estado de reproducirlas, sin temor de molestar por ello á S. M.—Las Provincias, sin embargo de tan ventajosa ocasión, se abstienen de este paso. No quieren quitar á los afectos que han dictado sus sacrificios parte alguna de su mérito; y en el deber que anima á sus representantes de no abandonar á un total olvido la suerte del país, que tanto se ha distinguido por la defensa de su Rey, y por la paz de sus dominios, han creído poder desempeñarlo llamando su soberana atención hacia dos puntos de urgencia extraordinaria, reservando para otro tiempo ampliar sus respectivas súplicas.—El comercio de nuestras colonias se ejercita en el día por los extranjeros, con tales ventajas, en comparación de los vascongados, que

han excluido enteramente á éstos del que siempre han hecho en lo antiguo con la Provincia confinante de Navarra. Un comerciante francés tiene la libertad de introducir en el Reino de Navarra los efectos ultramarinos procedentes de nuestras colonias por los puertos de Burdeos y Bayona con los derechos ordinarios de tablas. Un vizcaíno, un guipuzcoano, un alavés, no puede ejercitarse en este tráfico, ni disfrutar de las utilidades que puede producir por los puertos de San Sebastián y Bilbao. Un vascongado que acaba de derramar su sangre y agotar su fortuna por la defensa de V. M., es de peor condición que un francés, que ha dado tal vez la suya por combatirle.—Este cuadro contristaré sin duda el real ánimo de V. M., y vuestras queridas Provincias Vascongadas suplican rendidamente se digne hacerlo desaparecer de la administración española, mandando que la introducción de géneros coloniales en Navarra pueda hacerse por los puertos de Bilbao y San Sebastián, del mismo modo que se hace por los de Burdeos y Bayona.—Esta disonancia proviene de que la situación de las colonias ha influido con una eficacia imprescindible en el comercio de aquella parte del mundo; ha sido indispensable modificar sus reglamentos, admitiendo en ellos á los extranjeros á la participación de este beneficio. Todo desaparece permitiendo á los vascongados el comercio libre de América, tanto en la exportación desde sus puertos, con el pago de derechos en vuestras reales aduanas á su introducción en las colonias, como en la importación de aquellas procedenelas, satisfaciendo los derechos en las de Cantabria al paso para las interiores del Reino, del modo que se practica con los demás efectos europeos.—El abatimiento del comercio ha llegado á tal extremo, que no pueden menos de implorar de V. M. la soberana protección que necesita para que pueda prepararse á nuevos sacrificios, si circunstancias calamitosas ó

temeridades ciegas reprodujesen en algún tiempo las escenas que acaba de presenciar V. M., y que ha visto tan felizmente terminadas.—Los depósitos establecidos últimamente para el comercio con las Provincias contribuyentes, causan trabas, estancan capitales, dificultan las operaciones sin ninguna ventaja de vuestros reales intereses. Es una novedad reciente, y no pueden menos de suplicar á V. M. se digne levantarla, reponiendo en esta parte al comercio en la práctica que siempre, desde tiempo inmemorial, se ha observado, sin ningún perjuicio del erario.—La industria del hierro forma en las Provincias Vascongadas la parte principal de su riqueza; se halla en un estado deplorable, y á punto de perecer con ruina general del país, si V. M. no extiende sobre este ramo su mano protectora. El interés que inspira esta riqueza en la masa general de habitantes, ha excluido por esta parte el hierro extranjero, proscrito por el voto general. Dígnese V. M. permitir al vascongado la libre introducción y circulación en las Provincias interiores, como producto nacional de absoluta necesidad en ellas.—Vuestras fieles Provincias Vascongadas esperan de la soberana bondad de V. M. lleve á bien la sumisa súplica de estas urgentísimas medidas, reservando para otro tiempo el examen de otras muchas sobre que podría cimentarse la buena suerte de estas Provincias desfallecidas, ó íntegramente sacrificadas al servicio de vuestra real Persona. Así lo esperan de la soberana bondad de V. M., á quien guarde y conserve Dios largos y dilatados años».

1831 Se pasó el 17 de Enero una circular á los Ayuntamientos y curas párrocos, excitando el celo y la caridad de todos los vizcaínos para que contribuyan á remediar las desgracias ocurridas en Larrabezúa, donde en una noche fueron presa de las llamas veinte y cuatro casas, con todos los efectos, ganados y mieses de sus habitantes.

Se acordó el 12 de Febrero que en todo el Señorío se mida el carbón raserado, incluyendo el cordón ó borde del cesto, que es como resultaba que se medía en la mayor parte de las ferrerías, según los informes tomados en virtud de lo dispuesto por la Junta general en 18 de Julio de 1829.

El 30 de Marzo se pasó una circular á los Jueces encargados de policía, especialmente en los puertos y alledaños, encargándoles que redoblasen su vigilancia para la conservación del orden, é impedir que busquen abrigo ó apoyo los revolucionarios en estas montañas.



CAPÍTULO IV

CONCLUIDO el llamamiento y entregados los poderes so el árbol de Guernica el 5 de Julio, expuso el Síndico Videa que el 9 de Diciembre último se dió posesión en Regimiento general del empleo de Corregidor del Señorío á Don Vicente Sanahuja, previa fianza y demás requisitos necesarios, con calidad de que en las primeras Juntas generales habla de ratificar el juramento que entonces prestó, conforme á lo acordado en Junta general el 24 de Julio de 1748, y que dentro de dos meses haría constar legitimamente ser de linaje caballero, noble hidalgo. Sanahuja presentó en su consecuencia los documentos por donde haría constar estas cualidades, y examinados y dados por legítimos, ratificó en la forma de costumbre el juramento que tenía prestado de guardar, cumplir y observar inviolablemente los Fueros, franquezas, libertades, exenciones, prerrogativas, buenos usos y costumbres de este Señorío, sin ir contra ellos en manera alguna, ni permitir su contravención.

Después de esto, reunidos ya los concurrentes á la Junta dentro de la iglesia de la Antigua, pronunció el Corregidor el discurso siguiente:

«NOBLES VIZCAÍÑOS.—Con la franqueza propia de mi natural carácter, que me lisonjeo sea ya bastante conocida, por inspirar la confianza que deseo, manifestaré que cuando el Rey nuestro Señor se dignó nombrarme Corregidor de este M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya, recibí una de las mayores satisfacciones que cuento en la vida. Tenía la más ventajosa idea de este ilustre solar; por lo que hasta el día he visto hallo que muy justamente ha merecido tanta nombradía; y sólo me resta ahora presenciar la dignidad y moderación con que en sus Juntas generales se trata y discute para deliberar y acordar al fin lo que más conviene.—He ratificado solemnemente el juramento prestado en 9 de Diciembre último; y pueden V. S. S., señores de la Diputación, Padres de Provincia y dignos representantes de los pueblos, estar bien seguros de que interín sea siempre el objeto principal el bien general y mejor servicio de S. M., que tantas gracias tiene dispensadas á la lealtad de los vizcaínos, me considerará el primero en la obligación de sostener vuestros respetables Fueros.»

La Junta dió expresivas gracias al Corregidor por la satisfactoria manifestación contenida en su discurso.

Se nombró en seguida la comisión revisora de poderes compuesta de dos individuos por cada Merindad y el Consultor, y otra compuesta de los Padres de Provincia con el mismo Consultor para que examinasen los poderes de la comisión revisora.

Ambas comisiones presentaron sus informes el 6, resultando que todos los poderes presentados se hallaban revestidos de los requisitos legales necesarios, sin que ninguna de las personas comprendidas en los poderes adolezca de tacha política.

Se nombraron comisiones compuestas de un individuo por Merindad para el examen de las cuentas del tesorero

general del Señorío, y para reconocer los memoriales que se presenten á la Junta.

Se aprobó todo lo obrado por la Diputación general con motivo del tránsito del Infante Don Francisco de Paula, su augusta esposa y sus hijos, para su recibimiento, dando las gracias á la Diputación por su esmero y acertadas disposiciones.

Enterada la Junta del expediente formado á consecuencia de la real orden de 27 de Agosto del año último, por la cual se mandaba que la Diputación general de este Señorío enviase dos Diputados á la Corte para acordar los medios de defensa que deberían emplearse, bajo bases conformes á los Fueros y privilegios de Vizcaya, contra las tentativas de los revolucionarios refugiados en Francia; y aprobando todas las operaciones practicadas en esta materia, tanto por la Diputación general como por Don Romualdo de Landecho y Don Antonio María de Ansótegui, en calidad de Diputados á Corte, les dió las más expresivas gracias por el celo y acierto con que han procedido para el mejor servicio de S. M. y del país.

Hallándose aún pendiente la sumisa representación que hicieron al Rey los comisionados de las tres Provincias Vascongadas en 11 de Diciembre último, recordando los sacrificios hechos por ellas, y pidiendo que se quitasen las trabas que tienen los vascongados en su industria y comercio; se nombró una comisión compuesta de un individuo por Merindad y de los que componen la comisión permanente para la mejora de la fabricación del hierro, que asisten á este congreso, á fin de que con presencia de todos los antecedentes de este asunto, proponga á la Junta cuanto estime conveniente.

Se aprobó el 7 lo obrado por la Diputación con motivo de la invasión de los revolucionarios en Octubre del año

último, tributando á los que la componían en aquella época las más expresivas gracias, igualmente que á las autoridades, Jefes, oficiales y paisanos armados del Señorío.

En atención á que por la declaración judicial que ha recaído á instancia de Bilbao, se restringe, respecto del consumo en su recinto, el arbitrio del vino blanco de Castilla á la categoría y cantidad del impuesto que se recaude sobre el vino clarete de Rioja; se acordó que se haga extensivo este mismo concepto á los demás pueblos de Vizcaya, desde primero de Enero de 1832, suspendiendo el progreso del expediente; y en cuanto al modo y forma de reintegrar á los pueblos, que continúen contribuyendo hasta fines de este año con el recargo de ocho reales en cántara de vino blanco, se autorizó ampliamente á la Diputación para que verifique el dividendo en los términos que estime más justos y equitativos.

Para examinar la conducta política de un Padre de Provincia, que por primera vez se había presentado en la Junta, así como la de otros Padres de Provincia que quisiesen asistir á las Juntas sucesivas, haciendo extensivo su informe á si debe gozar de los honores de tal Padre de Provincia el que momentáneamente hubiese tomado posesión del cargo de Diputado, siendo tercero, sin el consentimiento del segundo, y sin que tampoco estuviese enfermo ni ausente del Señorío; se nombró el 8 una comisión compuesta de los Padres de Provincia hábiles, y de un individuo por Merindad con el Consultor.

Se nombró asimismo otra comisión compuesta de dos individuos por Merindad para informar á la Junta lo que crea oportuno acerca del pago de la prorrata de los setenta mil reales por las Anteiglesias de la Merindad de Durango, y las Villas de este nombre, Ochandiano y Ermua. Todos los pueblos citados no concurrieren al nombramiento, en reser-

va de su derecho, sin embargo de haber sido invitados.

Después de haber discutido largamente si compete á la Diputación ó á los Ayuntamientos respectivos, el nombrar los Jefes y oficiales de los paisanos armados, y la expedición de sus títulos; se acordó el 9 que pasase este punto á una comisión compuesta de tres individuos por Merindad y el Consultor para que proponga á la Junta general la resolución de las dudas presentadas por la Diputación, y de todas las demás que puedan ofrecerse.

Se pasó á informe de esta misma comisión el expediente instruido en virtud de la real orden de 31 de Julio del año último, para que los voluntarios realistas de las tres Provincias Vascongadas, cualquiera que sea su denominación, pié y estado en que actualmente se hallen, ó puedan existir en lo sucesivo, queden bajo el mando superior del Capitán general, y Gobernadores de las plazas y Jefes militares respectivos, en los mismos términos que se encuentran los demás del Reino.

Se aprobaron el 11 de Julio las cuentas del tesorero general del Señorío; de conformidad con lo propuesto por la comisión respectiva.

Se nombró una comisión compuesta de un individuo por Merindad para que exponga lo que cerca conveniente sobre el nombramiento de Prior del tribunal del comercio de Bilbao hecho en Don Pedro Pascual de Uhagón, y el expediente relativo al código de comercio.

Se dieron las más expresivas gracias á la Diputación general por lo obrado en el expediente sobre el reemplazo del ejército, autorizándole para que continúe sus diligencias hasta conseguir el intento á que se aspira.

Se aprobó el aumento de dotación de las cátedras de la universidad de Oñate, así como el convenio otorgado entre el Señorío y Bilbao acerca de la cantidad que debe satisfac-

cer esta Villa por el aguardiente, ron y demás espíritus de su consumo.

Considerando que habían cesado las causas que impelieron en 1829 á poner en administración el derecho sobre el aguardiente y demás espíritus de su clase, se acordó sacarlo á remate desde primero de Enero próximo.

En vista del expediente formado en la Diputación general, á consecuencia de una solicitud del Ayuntamiento de Durango para que se le satisfaga el importe de dos mil ciento veinte y cuatro marcos, que entregó en plata labrada en 1795 para los gastos de la guerra con la República francesa; se autorizó el 12 á la misma Diputación, para que reconociendo los comprobantes que se hallen en poder de los pueblos ó fábricas de las iglesias, liquide el respectivo importe de las expresadas alhajas de plata, puesto que no existe razón alguna de ellas en la contaduría del Señorío, y proponga á la próxima Junta general ordinaria el medio que le parezca suficiente para la extinción progresiva y cómoda de esta deuda.

Se leyó el informe de la comisión relativa al pago de la prorrata de los setenta mil reales por la Merindad de Durango y las Villas de este nombre, Ochandiano y Ermua. Dice la comisión: que «á no mediar derechos y contratos pendientes, y poderse disponer libremente de todos los arbitrios y portazgos de los diversos caminos, sería fácil formar un sistema general con cuya adopción desaparecería la desigualdad con que actualmente contribuyen los pueblos situados en diferentes rutas;» que la comisión «se ha ensayado en formar varios cálculos comparativos, y el modo de proceder á una nivelación respectiva aproximadamente entre todos los pueblos, sin hacer alteraciones que ofendan esencialmente á la escala de prelación acordada para la apertura de nuevos caminos por el decreto de Junta general cele-

brada en 17 de Julio de 1818, y dejando á los prestamistas de las respectivas empresas las necesarias seguridades, ó procediendo á redimir los capitales de la asociación de la ruta de Bilbao á Durango, sino se conformase en amalgamarse con otros accionistas, según lo exija la nueva planta que se adoptase»; que no puede hacerse todo esto en corto tiempo, y sin conferenciar con los representantes de las diversas empresas de caminos, por lo que parece indispensable, á fin de «llenar tan grandioso objeto, la creación de una comisión permanente, que después de conferenciar con los representantes de las diversas empresas de caminos, proponga á la Diputación cuanto estime conveniente, con arreglo á las bases referidas, para que aquélla resuelva y ponga en ejecución lo resuelto, previa la competente real autorización,» trasmitiéndosele al efecto por la Junta todas sus facultades, y sin que deje de cumplirse la real provisión del Consejo de Castilla de 21 de Marzo último, expedida á instancia de la Merindad de Durango, y de las Villas de este nombre, Ochandiano y Ermua, sino se puede lograr el que se nivelen los pueblos de las diversas rutas de caminos.

La Junta, aprobando en todas sus partes el informe precedente, nombró la comisión permanente que en él se proponía, compuesta de un individuo por Merindad, asociados con el Padre de Provincia Don Pedro Novia de Salcedo y el Consultor Lozaga; declarando que los comisionados de los pueblos situados en las diversas rutas marcadas por el decreto de la Junta general de 17 de Julio de 1818, deberán ser oídos por la comisión permanente del mismo modo que los representantes de empresas de los caminos que se hallan construídos. Los apoderados de Bilbao reservaron su derecho para que no parase perjuicio á su constituyente.

Se dió cuenta el 13 del expediente formado á consecuencia de la reclamación de Guipúzcoa sobre el pago de los

veinte y cinco maravedís en quintal de vena que se extraiga de los minerales de este Señorío para laserrerías de aquella Provincia; y la Junta ratificó su decreto de 16 de Julio de 1829 sobre la materia.

No teniendo, á bien la Junta acceder á la pretensión de los escribanos del número de Bilbao sobre que se les asigne cierta cantidad al año por las causas de oficio que se les encomiendan por el tribunal de justicia, autorizó á la Diputación general, para que aumentando á los Secretarios de justicia de turno el sueldo que considere conveniente por este nuevo trabajo, les encomiende todas las causas de oficio correspondientes á los pueblos del Infanzonado del Señorío sobre los delitos especiales que conoce su tribunal criminal extraordinario.

Tomando en consideración lo expuesto verbalmente por el apoderado de Arrieta, acerca de la exacción excesiva de derechos, tanto en las escrituras de remates, cuanto en las de obras de caminos; se acordó que los escribanos que las autóricen exijan en lo sucesivo tan sólo los derechos que se prescriben en el arancel vigente; y para evitar dudas respecto á los derechos que deben exigir los Secretarios de justicia por la extensión de las escrituras de romate que se hagan por el Señorío, se dispuso que la Diputación, unida con el Consultor, arregle los derechos que deben percibir dichos Secretarios por la razón expresada, sin perjuicio de que interin esto no se verifique no se haga novedad.

Se enteró la Junta con satisfacción por un oficio del Jefe de la tercera sección de los paisanos armados del Señorío, de que habían cesado los rumores esparcidos en muchos pueblos, de que en la línea divisoria de Guipúzcoa y Vizcaya apareció alguna gente armada sospechosa.

Se enteró la Junta del expediente formado por la Diputación sobre la aprobación y nombramiento de arquitectos,

maestros de obras y peritos agrimensores, y expedición de sus títulos por el Señorío para el ejercicio de sus respectivas funciones, en cuya posesión ha estado inconcusamente hasta que por real cédula de 9 de Julio de 1828, se concedió exclusivamente esta facultad á la real Academia de nobles artes de San Fernando, ó á sus delegados, así como de lo representado á S. M. por la Diputación en 16 de Noviembre de 1829 y de la real orden de 10 de Abril del año último.

También se enteró de haberse desestimado por el supremo Consejo de Castilla la reclamación del Señorío sobre varios capítulos de la ordenanza de Dima, y de la jurisdicción ordinaria que en lo civil se había concedido á su Fiel.

Se dió cuenta el 14 del expediente formado en virtud de reclamaciones de varios pueblos del Señorío, para que se remueva á otro punto la cadena del camino de Bilbao á Bermeo, establecida en el punto de Santo Domingo, jurisdicción de Begaña; y se acordó en votación nominal que continuase la Diputación general sus gestiones para la remoción de dicha cadena. Los apoderados de la Villa de Munguía protestaron todos los daños, gastos y perjuicios que puedan sobrevenir á su constituyente con el acuerdo que acababa de tomarse respecto á dicha cadena; y que no le pare perjuicio lo obrado por la Diputación en el particular, por cuanto se estableció la cadena por orden del supremo Consejo de Castilla, con informe del Corregidor, la Diputación y el Fiscal del mismo Consejo. Se adhirieron los apoderados de otros veinte y dos pueblos, entre ellos Bilbao y Bermeo, á la protesta de los de la Villa de Munguía.

En vista del reglamento de las oficinas y dependencias del Señorío, que se formó por la Diputación, en virtud del encargo conferido por la Junta general en 18 de Julio de 1829, se acordó crear una comisión compuesta de dos individuos por cada Merindad, para que oyendo á los Diputados

generales, y teniendo á la vista todos los memoriales referentes á dicho reglamento, informe al Congreso cuanto le parezca conveniente sobre el particular.

Se dió cuenta el 15 del informe de la comisión creada el 6 para tratar del fomento de la industria del hierro. La comisión se lamentaba de que los impuestos que se exigen en las Provincias contribuyentes «hacen decaer con ruinoso rapidez la concurrencia del hierro vascongado en los mercados públicos, ó imposibilitan su competencia con el extranjero.» —Para remover tan perniciosas trabas, elevaron al Rey las tres Provincias Vascongadas una enérgica exposición que aun se halla pendiente, y conviene que la Diputación, de acuerdo con las otras Provincias, ó por sí sola, se esfuerce en lograr su pronto y buen éxito por cuantos medios le sean posibles. Deben adoptarse por ahora, de lo que propone la comisión permanente relativa á este ramo, las disposiciones siguientes:

1.^a Imprimir á la mayor brevedad, á expensas del Señorío, las memorias trabajadas por Don Francisco Antonio de Echanobe, y depositar en la secretaría los modelos de madera que ha hecho ejecutar, dando facilidades para examinarlos y copiarlos á cuantos lo deseen.

2.^a Recomendar al Alcalde de billetteros que cuide especialmente de que las venas, mientras esperan el embarque, se coloquen en sitios adonde no alcancen las mareas.

3.^a Ofrecer un premio de mil reales, dando de término hasta el primero de Agosto, al autor de la memoria que más satisfaga sobre los vegetales de uso conocido y copioso para alimento del hombre, ó de los animales de su servicio, ó como primeras materias de la industria, que no se cultiven en Vizcaya, y que pudieran alimentarse en ella.

4.^a Ofrecer igualmente un premio de cuatro mil reales á cada agricultor que en 1837 presente aclimatados vegeta-

les que no se cultiven en Vizcaya, y que tengan despacho seguro, ó lo menos muy probable, para alimento del hombre ó de los animales domésticos, ó para usos de la industria.

Aprobó la Junta este dictamen en todas sus partes, autorizando á la Diputación para que del producto de los veinte y cinco maravedís impuestos á cada quintal de vena que se extrae del Señorío destine la cantidad que considere necesaria para la reposición del camino de las veneras de Triano. Los apoderados de Durango y Yurreta reservaron la última parte del decreto de la Junta.

Se mandó que quedase en su fuerza y vigor lo decretado por la Junta general en 17 de Julio de 1816, para evitar los excesos que cometen los forasteros en las veneras de hierro.

Enterada la Junta del expediente formado por la Diputación, con motivo de la competencia suscitada entre el Alcalde del Fuero de la Merindad de Uribe y el ordinario de la Villa de Plencia, y que decidió el Juez mayor en favor de este último, sobre el hallazgo de una percha que las olas del mar arrojaron á los arenales de la Antoiglesia de Baquio, y del memorial presentado á esta Junta por el Alcalde del Fuero, solicitando que el Síndico del Señorío salga á la defensa de los derechos infanzones; ordenó que dicho Alcalde use de su derecho en el tribunal competente.

Se leyeron los documentos siguientes:

«La comisión encargada en decreto de 8 del corriente de examinar la conducta política del Padre de Provincia que en aquel día entró por primera vez en esta Junta general; la de otros también Padres de Provincia que gustasen ó pretendiesen asistir á las sucesivas, y finalmente, de extender su informe á si aquél debe gozar de los honores de tal, puesto que tomó posesión de Diputado, siendo tercero, sin el consentimiento del segundo, y sin que tampoco estuviese en-

fermo ni ausente del Señorío; ha tomado en consideración el memorial presentado á V. I. por Don Serapio de la Hormaza con fecha del 10, y ha acordado pasar á la comisión los documentos y papeles que se le han franqueado para ilustrarla, y últimamente todos los conocimientos que han estado á su alcance para desempeñar tan delicado encargo, y ha hallado, después de los más imparciales informes, lo que va á poner en la alta consideración de V. I. — Siente la comisión tener que llamar ante todas cosas su atención hacia ciertas expresiones que contiene el memorial de Hormaza; pero cree deberlo hacer así en desempeño de su encargo, porque á la verdad ellas parece que hieren el honor de la comisión en una parte, y en otra el de V. I., sentándose, como se hace, que la proposición hecha por un señor apoderado se apoyó con acaloramiento por otros que no tienen por objeto el servicio de la patria ni de la justicia, y añadiendo se abstiene de asistir personalmente á este ilustre congreso por evitar la repetición de escandalosas escenas, con otras que resultan del mismo. — Encuentra también, que en tiempo del abolido sistema constitucional fué individuo de la compañía titulada sagrada, ó de ancianos de la Villa de Bilbao; que con este conocimiento uno de los Síndicos procuradores de este ilustre solar en 1829, al ser propuesto Hormaza para Diputado general, expuso (según se aseguró por el mismo) no podía convenir en que se encantarase, refiriéndose en apoyo á cierta real orden; que habiéndose oído sobre el particular al señor primer Consultor, acordó el señor Presidente se le encantara-se, y el mismo Síndico, según que también aseguró él, indicó cierta protesta que no le fué admitida, por lo que pidió se le proveyese de testimonio, advirtiéndole á uno de los que le sucedía en el destino que recogién-dole hiciese el correspondiente uso de él; que según contestación pasada á

la comisión por los señores actuales Diputados generales con fecha del día de ayer, que acompañaba, por una orden superior de 8 de Noviembre de 1824, se declaró servicio recomendable el que hizo la compañía de ancianos de la Villa de Bilbao, aunque no la ha tenido á la vista; que según carta orden del real y supremo Consejo de Castilla, su fecha 16 de Enero de 1826, para que se cumpliese y ejecutase la real resolución dada conforme al parecer de aquel supremo tribunal, y publicada en el pleno con fecha de 9 del mismo mes, se mandó proceder á la elección de Prior y Cónsules de la noble Villa de Bilbao, precaviendo que asistiesen á ella sujetos marcados de adictos al abolido sistema revolucionario, la misma que, previo informe del Síndico procurador de este Señorío dado con acuerdo de su primer Consultor, se mandó guardar y cumplir con fecha 19 del mismo mes y año; y en su observancia se ejecutó la elección de Prior y Cónsules, sin que en ella tuviesen voz activa ni pasiva los individuos de las milicias nacional, sagrada ó de ancianos, auxiliar, ni de cualquiera otra que se hubiese conocido bajo cualquiera denominación, como ni tampoco los sujetos de marcada adhesión al sistema constitucional, para lo que de mandato del señor Don Esteban de Asta, Comisionado regio, al paso que atendía muy particularmente á que no se turbase la tranquilidad pública, pasó el Ayuntamiento de aquella Villa listas expresivas y separadas de cada cuerpo, encabezando con la denominación de «sagrada ó ancianos» la en que se halla comprenso el Don Serapio. Todo consta así del testimonio dado de mandato del mismo Comisionado regio al ilustre Consulado de la noble Villa de Bilbao, que la comisión ha tenido á la vista para este informe, mandado franquear por el señor Presidente al archivero de él. Que la posesión tomada por el propio Don Serapio, como Diputado tercero de este Señorío, tuvo

efecto en tiempo que el primero se hallaba indispuerto; más sin que se contase con el segundo, que existía dentro del Señorío, sin imposibilidad física que le prohibiese desempeñar sus funciones, aunque parece la tomó por la premura del tiempo que no permitía pasarle aviso, según V. I. lo oyó exponer así á los señores actuales Diputados generales; y finalmente que á virtud de esta posesión ejerció funciones de Diputado general en dos épocas, siendo la primera de un sólo día, y la segunda de cinco ó seis, aunque para esta última precedió aviso pasado al segundo Diputado, que aunque se hallaba dentro del Señorío se excusó á asistir, mediante el agravio que en su concepto se le había hecho. no contando con él en aquélla.—Por lo que hace á los demás Padres de Provincia, que gustasen asistir á las actuales y sucesivas Juntas generales, observa la comisión que la denominación de Padre de Provincia es un distintivo característico de haber sido Diputado general en ejercicio, y gozado de voto consultivo en los Regimientos y Juntas generales de este Señorío. Todos los que hasta el día tienen este honorífico dictado merecen, en sentido de la comisión, la confianza pública, á excepción de un cortísimo número. Para venir en conocimiento de aquéllos, y dejar segregados éstos, halla la comisión que podía establecerse la regla siguiente.—Se reconocen como Padres de Provincia en ejercicio todos aquellos que constantemente, y sin interrupción, han recibido en concepto de tales toda clase de circulares de la Diputación general de este Señorío, desde el año de 1823 hasta el de 1827, y los que desde el mismo año han sido Diputados generales con ejercicio, ó hubiesen sido llamados á ocupar el puesto de Diputados generales en la memorable época del referido año 23. Para venir en conocimiento de los comprendidos en ella, convendrá que en el caso de que V. I. creyese acertado adoptar esta medida, se

anoten á continuación del decreto que recaiga los nombres y apellidos de los que deban serlo. Los que no se incluyan no deben, en concepto de la comisión, continuar en el goce de la denominación y prerrogativa de Padres de Provincia. Con vista de aquellos antecedentes, relatados con la mayor imparcialidad, y sin embargo de esta opinión que ha formado la comisión, V. I. resolverá como siempre lo más justo y conveniente».

«....Don Serapio Luis de la Hormaza, caballero maestrante de la real de Valencia, Padre de Provincia de este Señorío de Vizcaya, y vecino propietario de la noble Villa de Bilbao, con el debido respeto á V. I. expone: que le causó la mayor sorpresa la sesión del día de ayer, en que graduándose de sospechosa su conducta política observada durante el gobierno constitucional, se le quiso mirar como indigno del asiento de Padre de Provincia que ocupaba, cuando el día anterior se acordó en su ausencia el decreto más honorífico, dándole gracias por los servicios recientemente prestados al país en comisiones importantes y de singular confianza. Creyó sin embargo que los efectos serían muy momentáneos y de ninguna consecuencia, persuadiéndose que el caballero Corregidor, Juez letrado, y Presidente de este respetable congreso, sofocaría en su nacimiento una moción tan ilegal, dirigida á renovar el examen de una conducta calificada ya, anteriormente en términos hábiles; pero ha visto con imponderable sentimiento que admitida á discusión, después de haber excitado la indignación de la Junta con asertos los más voluntariosos y ajenos de verdad, se remitió á una comisión, comprendiendo en ella al mismo que aventuró la proposición con otros que la apoyaron con acaloramiento animados de los mismos sentimientos, que no tienen por objeto ciertamente el servicio de la patria ni la justicia. Mas, para confusión de los que anteponen sus

miras particulares ó intereses privados á todas las demás consideraciones y virtudes, y para gobierno de la Junta general, debe hacer presente á sus dignos constituyentes Don Serapio Luis de la Hormaza, que la memoria no alcanza su origen en Vizcaya, cuenta entre sus ascendientes muchos Diputados generales de este noble Señorío que prestaron distinguidos servicios al país, y la sangre de ellos corre por sus venas pura y sin haberla mancillado con acción alguna incompatible con sus principios y delicadeza. En la época desgraciada del sistema llamado constitucional, lejos de dar causa de recelar de su conducta política, dió pruebas ciertas y constantes de su patriotismo nada común, y de su amor y fidelidad al Príncipe Soberano que dignamente nos gobierna, de que son testigos, entre otros muchos, algunos que merecen la confianza de S. M. cerca de su real Persona; se negó siempre á llevar las armas de la revolución, resistiendo con firmeza las amenazas de los que se las ofrecían; y si por razones justas, ó quizá insuperables, tomó parte en la compañía de los ancianos, su conducta fué irreprochable bajo de todos aspectos, y este cuerpo, destinado á conservar el orden público, lejos de ser criminal, mereció la aprobación y las gracias, no sólo de la Villa de Bilbao, sino del mismo supremo Gobierno. En suma, Don Serapio Luis de la Hormaza nunca se desvió de la senda de la virtud; no obtuvo ni solicitó empleos, destinos, ni honores en aquella época de triste recuerdo, ni por un solo momento perteneció á cuerpo alguno que no haya merecido la aprobación del Soberano y de todos los buenos españoles; y con todos estos conocimientos le votaron para Diputado general de Vizcaya en las últimas elecciones. Salió tercero en suerte; ha ejercido las funciones de primero, y tiene un derecho indisputable á ocupar un asiento entre los Padres de Provincia de este Señorío. Tal es la posesión en que se

halla, y nadie, sin violencia, puede despojarle de ella, ni suspenderle en el goce y ejercicio de sus derechos por un solo instante, á no ser por nuevas causas ó hechos posteriores, ó por los tribunales competentes de justicia, después de haberle oído y vencido legalmente. Las funciones de la Junta en este particular terminaron con la elección y la admisión á ella del exponente; nada hay en su conducta pasada ni presente que le haga indigno ó desmerecedor á lo que goza; pero cuando se dudara de esto, no tocaría el examen á la Junta sino á los tribunales, y en ellos, si alguno le llamase, hará ver á todo el mundo Don Serapio Luis de la Hormaza cual fué su conducta política en tiempo del sistema llamado constitucional, antes y después. Esos mismos que le han acusado tan inficuamente no sostendrían sin duda lo que él está pronto á sostener, y en fin, si esta misma Junta admite en su seno tal vez á quienes han hecho oficios que no pueden merecer la aprobación que la conducta del exponente, ó han llevado armas de otro modo que él en tiempo de la llamada Constitución, ó que no pueden ofrecer á la patria los méritos y las cualidades, tanto propias como de sus antepasados, ¿por qué razón de justicia ni de conveniencia pública podría ser despojado ó privado él, ni suspendido un solo instante? El exponente invoca, Ilmo. Señor, la observancia de las leyes y la soberana voluntad, el cumplimiento de sus decretos y reales órdenes vigentes y expresas del asunto; y espera de su rectitud que se dignará atender á sus instancias, evitando justas quejas y recursos á la superioridad, que serían indispensables de otra suerte.—Suplica á V. I. rendidamente se digne tomar en consideración estas observaciones y acordar con arreglo á ellas, manteniendo y conservando al exponente en el goce de sus derechos, y como tal en la posesión del asiento de Padre de Provincia de este Señorío. que legalmente le corres-

ponde; y que en defecto se le provea de testimonio para los recursos convenientes, á cuyo fin, y para la observancia y ejecución de las soberanas intenciones, hace también los requerimientos más urbanos y la petición oportuna al señor Presidente por este sumiso memorial, absteniéndose, por ahora, de la personal asistencia por evitar la repetición de escandalosas escenas».

«La comisión encargada de la calificación de algunos señores Padres de Provincia, ha tomado en conocimiento la exposición de Don Serapio Luis de la Hormaza, en la cual se supone que existen algunas reales declaraciones sobre la naturaleza y calificación política de la compañía de ancianos de Bilbao durante el gobierno revolucionario.—Deseando, pues, la comisión proporcionarse los medios de cerciorarse del verdadero espíritu de las referidas declaraciones, se dirige á V. S. S. con la confianza de que, si no mediase algún inconveniente que no prevee, se sirvan mandar franquearla por un momento el expediente que sobre el particular existiese, en la secretaría de policía, ó darle las noticias que estime conducentes». Este oficio iba dirigido á los Diputados y lo firmaba por la comisión Don Antonio Leonardo de Letona el 13 de Julio.

«La Diputación no se considera autorizada para manifestar expedientes de policía; mas puede asegurar en satisfacción á lo que se sirve V. S. pedirle en papel de ayer por encargo de la comisión de la calificación de algunos señores Padres de Provincia, y á consecuencia de la exposición del señor Don Serapio Luis de la Hormaza, que por una orden superior de 8 de Noviembre de 1824, se declaró por un servicio recomendable el que hizo la compañía de ancianos de Bilbao, y muy laudable el objeto de su compromiso, acordando al mismo tiempo que los individuos que pertenecieron á la enunciada compañía de ancianos, por este sólo hecho

no infunden sospecha alguna, y por consiguiente exentos de ser clasificados entre los batallones y compañías sagradas; cuya superior declaración fué confirmada por otra de 3 de Enero siguiente.» Esta contestación de los Diputados á Letona está fechada el 14

Después de una detenida discusión, acordó la Junta que la Diputación general consultase con el Rey para que se digne declarar si los individuos que en tiempo de la Constitución pertenecieron á la compañía llamada de ancianos ó sagrada en la Villa de Bilbao están habilitados para obtener los empleos públicos, reales, provinciales y municipales.

En seguida la Junta general tomó en conocimiento, que no pudiéndose llegar á resolver por S. M. antes de las próximas elecciones la consulta que se había dispuesto elevar á sus reales pies, debería disponerse lo conveniente entretanto; y habiéndose alargado la discusión, se suspendió para continuarla el día siguiente.

Bastaba en otros tiempos, antes de que la desdichada política moderna corrompiese las costumbres de los vizcaínos, que las personas que habían incurrido en las censuras del Señorío por quebrantamiento del Fuero, quisieran sincerarse de su conducta, para que fuesen acogidas con el más amplio y generoso perdón, como se ha visto en repetidas ocasiones; no secedía así ahora; los resentimientos é intereses políticos buscaban, por el contrario, cualquier motivo ó pretexto para perpetuar la venganza, y mantener los rencores, por más que no faltasen afortunadamente espíritus levantados que miraran las cosas de otro modo.

Al darse cuenta el 16 de los acuerdos del día anterior, expuso uno de los apoderados si había lugar á protestarlos, sin embargo de lo resuelto sobre este punto por la Junta general en 15 de Julio de 1829; y no habiendo conformidad de opiniones, se procedió á votar el punto, resultando que

por ochenta y seis votos contra veinte y dos, se declaró que hay lugar á protestar el día inmediato al en que se verifiquen los acuerdos, antes de hallarse éstos rubricados por los señores de la Diputación general. Quedó resuelto en su consecuencia que se entendiese derogado el decreto de 15 de Julio de 1829, en cuanto se oponga á lo acordado este día.

Los apoderados de Lequeitio y Elorrio se adhirieron, en virtud del decreto precedente, á la protesta causada el día anterior por los apoderados de Durango y Yurreta respecto á la inversión del producto de los veinte y cinco maravedís destinados para la reposición del camino de las veneras de Triano.

Tomando en seguida en consideración la Junta el que no pudiéndose llegar á resolver por S. M. antes de las próximas elecciones la exposición que se había dispuesto dirigirla, para que declarase si los individuos que en tiempo de la Constitución pertenecieron á la compañía llamada de ancianos ó sagrada en la Villa de Bilbao están habilitados para obtener los empleos públicos, reales, provinciales y municipales; se resolvió, después de una detenida discusión, que mediante lo crítico de las actuales circunstancias no pueda optar ni ser admitido á dichos empleos ningún individuo perteneciente al cuerpo referido y demás compuestos de voluntarios, cualquiera que sea su denominación en aquella época, así como tampoco ninguno marcado por constitucional exaltado en todo el recinto del Señorío, y si sobre ello se suscitase alguna cuestión la resistan los señores Síndicos en los tribunales competentes. Protestaron este decreto los apoderados de Lequeitio, Ibarranguelua y Bermeo.

Se dió cuenta del expediente formado en la Diputación general, á consecuencia de haber sido nombrado por el real

Acuerdo de la Chancillería de Valladolid su Alcalde del crimen Don Francisco Sáinz Pardo, Comisionado regio en las tres Provincias Vascongadas, en virtud de la real orden de 18 de Abril último; y se aprobó todo lo obrado sobre este particular por la Diputación, autorizándole para que continúe sus gestiones, y manifestándole la gratitud del Señorío para el acierto con que se condujo.

Se leyó el 17 el informe evacuado por la comisión creada el 11, á consecuencia del nombramiento de Prior del tribunal de comercio de Bilbao, hecho por S. M. en Don Pedro Pascual de Uhagon, sin haber sido propuesto para este empleo, con arreglo á lo prescrito en el artículo mil ciento noventa del código de comercio. La comisión expone que en el nombramiento de Uhagón no se ha observado dicho artículo ni el siguiente; y que aunque se manifestaron á S. M. respetuosamente los fundamentos que concurren en Uhagón para no ser investido con aquel honorífico empleo, se le dió posesión de él, por ser así la voluntad expresa del Rey. La comisión considera en tal estado, sin meterse á sondear las razones que pudieron influir en el real ánimo para que el no propuesto fuese el predilecto, que se puede autorizar á la Diputación para que continúe las gestiones oportunas, á fin de que en lo sucesivo no se desvirtúe lo decretado por la Junta de Merindades en 3 de Mayo de 1793, que se halla sancionado por el supremo Consejo, ni se depriman los artículos del código comercial adoptado por el Señorío en todas sus partes, según propuso en 7 de Febrero de 1830 la comisión creada en la Junta general extraordinaria de 5 del mismo mes, con las declaraciones que contiene la real orden de 29 de Enero de 1830. La comisión cree que debe procurarse el remedio para lo futuro, pues que por hoy está ya causado el mal, y considera «que las exposiciones de Uhagón son solamente especiosidades de

ningún valor, porque si en parte adolecen de inexactitudes como la de ser vizcaíno, aun siendo noble según sienta, pues que tan sólo el haber nacido en este territorio sin las dos generaciones precedentes por línea del padre, según la ley diez y seis, título primero de los Fueros, no constituye vizcainía, cuanto menos originaria, la gracia especial de la carta de naturaleza que viene alegando no es capaz como mero privilegio de echar por tierra los Fueros generales de V. L., que como leyes paccionadas no admiten las restricciones que los privilegios siempre odiosos por derecho.» Dichas exposiciones se fundan también en parte en la certificación expedida á 21 de Octubre de 1823 por el Secretario de Cámara más antiguo del Consejo de Castilla, que la comisión considera inadmisibile, «porque se produce sin el requisito foral, al cabo de cerca de ocho años que Uhagón la ha conservado en su poder, porque la gracia que se le dispensó fué sin audiencia y consentimiento de V. L., y porque sobre ella se halla recurso pendiente, como lo da de sí el mismo documento.—Por esto, pues, la comisión, no considerando aceptables las indicaciones de Uhagón, se contrae á uno de los particulares relativos al código de comercio.»—Parece que el Juez mayor, en caso dealzada, da por de ningún efecto las providencias de los Jueces intermedios que por elección de los apelantes han conocido de sus pleitos en segunda instancia; lo que es tanto como privar á los territoriales de la autoridad competente según Fuero y derecho, así como á las partes agraviadas de la libre elección del tribunal. La comisión ha llegado á entender que la Diputación general ha dado algún paso sobre este particular, á fin de que el Juez mayor preste sus explicaciones acerca del sentido en que entiende la cuarta aclaración de la expresada real orden de 29 de Enero, sin que hasta ahora se haya servido dispensarlas, pero siempre

será conveniente se le excite, para que de este modo no se paralice el uso de los derechos de los interesados, ni se vean privados los Jueces territoriales de la potestad que les compete por alguna errónea interpretación de aquel Magistrado; que se deberá, por lo tanto, autorizar para ello á la Diputación, y para que llegado el caso haga cuantos recursos estime oportunos, con objeto de mantener al Señorío en la plenitud de sus prerrogativas expresamente salvadas en la citada real orden de 29 de Enero.—La comisión se abstiene de toda otra observación sobre los artículos del código; confiando en que el Señorío, que lo ha aceptado, previstos los casos, anticipará el remedio cuanto fuese dable para atajar el daño.

La Junta acordó que se tuviese por decreto el informe precedente. Protestó el apoderado de los tres Concejos de Somorrostro, en cuanto se negaba á Uhagón la vizcainía, no obstante haber presentado la certificación que en 21 de Octubre de 1823 se le expidió por el Secretario de Cámara del Consejo de Castilla.

Se enteró seguidamente la Junta del informe de la mayoría de la comisión que se nombró el 9, con motivo de las dudas suscitadas sobre la ejecución de varias disposiciones del reglamento de los paisanos armados del Señorío. Las disposiciones principales que contiene este informe son como sigue:

Que se hagan por la Diputación los nombramientos de Jefes de sección ó brigada.

Que los Ayuntamientos elijan los Comandantes y oficiales de la fuerza armada de su respectiva jurisdicción, que se hallen adornados de las cualidades necesarias.

Que cuando se trate de los Jefes y oficiales correspondientes á batallones ó compañías que se componen de paisanos de diversos pueblos, se procederá á la elección por

los comisionados de los respectivos Ayuntamientos, bajo la presidencia del Juez local del pueblo que designe la Diputación.

El dictamen de la memoria de la minoría, conviniendo en un todo con los particulares que comprende el de la mayoría, añade que conviene además que se restablezca la comisión permanente denominada de armamento, compuesta de los mismos individuos que la formaban, ó de los que fueren del agrado de la Junta, para que auxilien á la Diputación general, y resuelvan de acuerdo con ella cuantas dudas se ofreciesen.

Algunos individuos de la mayoría de la comisión presentaron una proposición, diciendo «que no contemplan conveniente ni necesario el nombramiento ó renovación de comisión alguna permanente de armamento, debiendo en su concepto dejarse á la discreción y autoridad de la Diputación general el resolver y hacer los arreglos que se estimasen conducentes, en desempeño de las atribuciones de Capitán general de Vizcaya, que le competen privativa y exclusivamente».

Se aprobaron sucesivamente los once capítulos que comprendía el dictamen de la mayoría de la comisión; con la circunstancia de que si hubiese empate en los nombramientos de Jefes y oficiales, que deben hacerse por los comisionados de diversos pueblos, se ha de decidir por la persona que presida el acto; debiendo los Alcaldes ó Fieles dar parte á la Diputación general de las vacantes de Jefes y oficiales que ocurriesen y de su reemplazo, dentro del término de ocho días, sin seguir el conducto de los Jefes de sección; y entendiéndose que las exenciones de servicio de los Jefes y oficiales que hayan cumplido cuarenta años, serán concedidas ó denegadas por los Ayuntamientos respectivos, y en caso de agravio por la Diputación general. También se dis-

puso que los cabos de escuadra debían saber leer y escribir, en cuanto sea posible, y que los agraviados por alguna pena correccional que se les hubiese impuesto, podrán acudir á la Diputación general para que ésta resuelva definitivamente lo que convenga, y si entretanto ocurriese algún caso que merezca mayor consideración, se dirija el reglamento para conseguir la real aprobación, sin perjuicio de que desde luego se observen sus disposiciones para el mejor servicio.

Los apoderados de los tres Concejos, Bilbao y Bermeo, protestaron por diversas causas algunas de las disposiciones aprobadas.

Habiéndose solicitado una aclaratoria acerca de la clasificación de los paisanos obligados al servicio, tanto los terrestres como los marítimos, acordó la Junta general autorizar á la Diputación para que determine lo conveniente. El representante de Plencia «reservó hacer uso de las acciones que competen á su constituyente respecto de los mareantes, cuyos cuerpos deben ser formados de los de su clase y destinados para la defensa de los puertos, sin mezclarlos ni hacerlos dependientes del servicio terrestre». Se adhirieron á esta reserva los apoderados de Mundaca é Ibaranguelua.

Se aprobó lo resuelto por la Diputación respecto de que los Ayuntamientos entendiesen en primera instancia en las exenciones que reclamaban los armados, y la misma Diputación en reclamación de agravio, hasta tanto que la Junta general resolviera lo que fuese por conveniente sobre esta materia.

Aprobóse igualmente el informe de la misma comisión de armamento sobre la real orden que dispone que los voluntarios realistas han de estar bajo el mando del Capitán general de Guipúzcoa y de los Jefes militares respectivos. Proponía la comisión que la Diputación «continúe soste-

niendo con el celo que hasta ahora los derechos y franquizas de Vizcaya, á fin de que no se le repunte sometida á la Capitanía general de Guipúzcoa bajo concepto ni sentido alguno».

Teniendo la Junta en consideración la gran constancia y sufrimiento de los Jefes de la primera sección ó brigada Don Ignacio de Unceta y Don Pedro Novia de Salcedo, Padre de Provincia y Comandante del primer batallón de la misma brigada, en su expedición contra los españoles refugiados en Francia, acordó manifestar á dichos señores la gratitud del país por sus distinguidos servicios.

Se declaró, á propuesta de uno de los apoderados, que corresponde á los Ayuntamientos respectivos el nombramiento de los alguaciles para el servicio interior de los pueblos, y su remoción con causa ó sin ella. Los apoderados de Elorrio expusieron que había costumbre inconcusa en aquella Villa de que el Alcalde nombrase el alguacil, y que por lo mismo protestaban este decreto. Se adhirieron á la protesta los apoderados de Dima y Guecho.

Se acordó el 18, á propuesta de los apoderados de los pueblos que fueron de las Enoartaciones, encargar muy particularmente á la Diputación que haga reunir inmediatamente los comisionados que se nombraron para el arreglo del plan benefical de dichos pueblos, y les exija que en el término de dos meses evacuen su cometido; y que si alguno de los comisionados se excusase con cualquier pretexto, se proceda á su reemplazo, presentando dicho plan, después de concluído, sin pérdida de tiempo, á la aprobación de la Cámara de S. M. para que se ponga en uso.

Se mandó reimprimir y circular las actas de las Juntas de Merindades celebradas en Agosto de 1799, por haber desaparecido del archivo de algunos pueblos del Señorío, de resultas de las últimas guerras.

Se encargó particularmente á la Diputación que con toda brevedad elevase al Rey la exposición acordada el día 15, sobre el concepto político en que deben ser tenidos los individuos que pertenecieron á la compañía de ancianos ó sagrada.

Se dió cuenta del informe evacuado por la comisión creada el 14 del corriente para que expusiese cuanto tuviera por conveniente acerca del reglamento de las oficinas y dependencias del Señorío, que había acordado la Diputación en 19 de Diciembre de 1829 llevar á efecto en todas sus partes desde primero de Enero siguiente, á calidad de someterlo á la aprobación de la primera Junta general. Consta este reglamento de ciento sesenta artículos, distribuidos en diez y siete capítulos. El personal que en él se fija consiste en Secretario de gobierno, contador, tesorero, cuatro oficiales de la secretaría de gobierno, el primero de los cuales desempeñará la secretaría de policía, un oficial del archivo, uno de la contaduría, dos de la secretaría de policía, dos porteros de la secretaría de gobierno y uno de la de policía.

Proponía la comisión que se aprobase dicho reglamento, con los aditamentos, explicaciones ó aclaraciones siguientes.

En los domingos y fiestas de ambos preceptos asistirá tan sólo un oficial, por turno riguroso, á la secretaría de gobierno, en todas las horas designadas en el reglamento, á no ser que la Diputación hallase necesaria la asistencia de dos ó más.

El Secretario de gobierno gozará del sueldo anual de quince mil reales, siendo de su cargo el cumplimiento exacto de todas las obligaciones que se le designen por el reglamento.

La plaza de oficial primero de gobierno, á que está anejo el empleo de Secretario de policía, gozará por ambos car-

gos el sueldo anual de diez mil quinientos reales, mientras lo desempeñe un mismo individuo; más llegado el caso de separarse los cargos, quedará reducido el sueldo anual á nueve mil reales.

Queda fuera de escala para el ascenso el destino de oficial primero de gobierno y Secretario de policía, correspondiendo su nombramiento á la Junta general; mas no podrá extenderse esto con los empleados actuales en dicha oficina, sino con los que entrasen en ella en lo sucesivo.

El oficial segundo de gobierno gozará del sueldo anual de ocho mil reales; el oficial tercero del de siete mil, y el cuarto del de seis mil quinientos.

Atendiendo á que en la actualidad se hallan las oficinas de gobierno muy recargadas de negocios, y teniendo en consideración los méritos y servicios del Comandante de la partida de miqueletes Don Celestino de Arribíflaga, cree la comisión que se le puede nombrar oficial auxiliar por el tiempo que la Diputación general lo contemple necesario; pero bien sea que conserve dicho empleo hasta que haya una vacante de oficial de aquellas oficinas, ó que cese en él por no considerarse necesario que continúe, entrará á ocupar la primera vacante, y colocado que sea en ella, se entenderá en su vigor el ascenso, que demarca el artículo ciento diez y ocho del reglamento, de los oficiales de policía á oficiales de la secretaría de gobierno.

Se señalarán á Arribíflaga mil quinientos reales anuales de sobresueldo, por el destino de oficial auxiliar, que desempeñará en las horas que prescribe el reglamento, no hallándose ocupado en el empleo de Comandante de miqueletes.

Los oficiales de las respectivas dependencias podrán gozar del recesit de quince días cada año, con conocimiento y licencia de los Diputados.

Se autorizará á la Diputación, para que valiéndose de la

persona ó personas que merezcan su confianza, y teniendo en consideración los méritos que hayan contraído, proceda desde luego al arreglo del archivo manual de San Nicolás de Bari, dando por este trabajo la retribución que considere conveniente de los fondos de la tesorería, y dejando el cuidado de dicho archivo á cargo del sujeto que en la actualidad lo obtiene; reservándose la Junta hacer el nombramiento de archivero, ó encargado del mismo archivo, en las próximas Juntas generales, y permaneciendo ínterin las cosas en el ser y estado en que se encuentran.

El oficial de la contaduría general gozará el sueldo anual de siete mil reales.

La fianza que preste el tesorero antes de entrar en el ejercicio de su cargo, se entenderá en bienes raíces libres, á satisfacción de la Diputación general.

Sin embargo de que es de cuenta del tesorero general el pago del salario de los dependientes que necesite; teniendo en consideración los méritos y servicios del actual oficial de aquel ramo Don Vicente de Sarachu, se le mantiene en su puesto con el sueldo de cinco mil reales al año, que disfrutará durante la vida del tesorero que hoy se halla en ejercicio, y de sus sucesores, quedando reducido el sueldo de éstos á quince mil reales, y pesando exclusivamente sobre ellos la responsabilidad impuesta por el mismo reglamento, á calidad de que el nombramiento de Sarachu se ha de entender sin ejemplar, y que después de sus días se ha de cumplir el artículo ochenta y nueve del citado reglamento.

El oficial primero de policía gozará del sueldo anual de cinco mil quinientos reales, y el segundo el de cinco mil.

El establecimiento del Mente pfo, de que trata el capítulo diez y siete del reglamento, es justo y arreglado según el dictamen de la comisión; pero debe entenderse con la expresa condición de que los fondos procedentes de los descuen-

tos no hayan de ingresar en la caja general del Señorío, y sin que ni la Junta ni la Diputación general tengan intervención alguna en este ramo, debiendo considerarse el tesorero como mero depositario de los caudales que en el concepto expresado se reciban.

En atención á que quedan suficientemente dotadas las plazas de los empleados que comprende el reglamento, no se admitirá reclamación alguna sobre aumento de sueldo, gratificación ni sobre prest para los empleados, sus viudas é hijos, ni tampoco se concederá en lo sucesivo opción á destino de futura sucesión.

Acordó la Junta por unanimidad que se llevase á ejecución el reglamento con las modificaciones propuestas por la comisión.

Se enteró la Junta en seguida de varios memoriales que acompañaban al reglamento, y previo el correspondiente examen de los méritos contraídos por los pretendientes, de sus circunstancias é idoneidad, y de los diferentes objetos á que tendían sus solicitudes, resolvió en cada caso particular lo que estimó más justo y conveniente.

Se tomó en consideración, á propuesta de uno de los apoderados, el largo y costoso viaje que había hecho el Corregidor para venir á Vizcaya y siendo además muy limitado el sueldo que gozaba, y digno de estimación su buen comportamiento, se acordó autorizar á la Diputación para que le manifieste el reconocimiento del Señorío de la manera que tenga por más acertada, y coadyuve sus pretensiones en el adelantamiento de su carrera con la competente recomendación á S. M. Los apoderados de Balmaseda hicieron su reserva sobre este acuerdo.

Se dió cuenta del expediente relativo á los procedimientos de los carabineros de costas y fronteras; y habiéndose tomado en consideración el expediente formado por el

Alcalde de Orduña, á consecuencia de haber sido decomisado un carro de pieles, y los oficios desatentos del Jefe de carabineros, con la moción hecha á su consecuencia por uno de los apoderados de aquella Ciudad; se acordó dejar á la discreción de la Diputación general, el que tanto en el expediente referido como en los demás que se formasen en cualquier otro pueblo sobre procedimientos irregulares de los empleados ó dependientes de rentas reales mandase pagar de la tesorería general las costas procesales, cuando lo estime útil y conveniente al interés común de Vizcaya.

Aprobó la Junta la pensión de tres reales diarios, concedida por la Diputación á la viuda de Francisco Antonio de Isasi, muerto desgraciadamente en Navarra, á consecuencia de las extraordinarias fatigas que tuvo que soportar, como individuo del primer batallón de los paisanos armados de este Señorío; entendiéndose que cesará este socorro siempre que la interesada obtuviese otra asignación del Gobierno.

En vista de la exposición presentada por los Síndicos y Secretarios de justicia del Señorío para que se restablezcan el arbitrio de dos reales en fanega de castaña que se embarque para fuera del Señorío, y el derecho, que según costumbre corresponde á los exponentes, de una onza de oro por cada licencia de embarque que se expida, ó que en defecto se les indemnice del quebranto que han experimentado en sus intereses por aquella supresión; se acordó, que sin que sirva de ejemplo para lo sucesivo, ni se restablezcan el arbitrio y derecho expresados, se satisfaga por la Diputación, tanto á los Síndicos y Secretarios reclamantes, como á los que lo fueron en el bienio de 1827 á 1829, que se hallan en igual caso, las cantidades en que con arreglo al número de licencias expedidas durante los cuatro años les juzgase la Diputación perjudicados por la razón indicada.

Se autorizó á la Diputación para que resuelva lo que tenga por conveniente respecto á la exposición presentada por el cabildo eclesiástico de Arrigorriaga, solicitando la nulidad de la escritura otorgada en 20 de Mayo de 1825 sobre los diezmos con que debe contribuir al Señorío como patrono de la iglesia parroquial, por los perjuicios que de ello se le siguen al cabildo.

Accediendo á lo solicitado por la comunidad de religiosas franciscas del convento de Santa Clara de Guernica, mandó la Junta que se le provea de un testimonio, en que se declare que la nueva casa construida para habitación de su vicario, en lugar de la derribada frente del convento de orden del Señorío, aunque costeada por él, pertenece en toda propiedad á dicha comunidad, sin que el Señorío tenga en ella parte alguna, ni pueda reclamar las cantidades que ha invertido en su construcción, por haberla verificado en indemnización de la demolida para ornato del nuevo archivo y salón de Juntas.

Se acordó que pasase á la Diputación la solicitud presentada por la Anteiglesia de Abando, por la que haciendo mérito de las cuestiones suscitadas entre ella y la Villa de Bilbao sobre competencia de jurisdicción en el barrio de Castrejana, implora las providencias confluente para que se la defienda en el goce y posesión de sus legítimos derechos y prerrogativas, con arreglo á las leyes octava del título primero, novena del título segundo, y primera del título treinta de los Fueros; á fin de que el Síndico del Señorío salga á la causa, si hubiese motivo para ello, en defensa de las franquezas que pertenecen á los infanzones de este ilustre solar, y que en iguales circunstancias se haga extensiva esta cooperación á todos los pueblos del Infanzonado. Protestaron los apoderados de las Villas, Ciudad y Encartaciones.

En vista de un memorial de los escribanos numerales de la Merindad de Uribe, quejándose de que otros escribanos, á pretexto de que no los hay con residencia fija en algunos pueblos de la Merindad, se ingieren á ejercer su oficio indistintamente en cualquiera de ellos, contra lo que se ordena sobre el particular en la ley primera, título sexto del Fuero; acordó la Junta que la Diputación haga observar cuanto previene el reglamento vigente sobre la materia.

Teniendo en consideración los méritos contraídos por Don Domingo de Gandarias, escribano numeral de la Merindad de Busturía, se le autorizó para que renuncie en favor de su yerno la numería que ejerce, sin embargo de lo que prescribe el reglamento sobre supresión de numerías. Protestó esta resolución el apoderado de Lanquíniz.

No se accedió á la solicitud de Don José María de Inunciaga, natural de Durango, para que se le habilite con la numería que ejerció su padre en la Merindad de aquel nombre, por ser una de los numerías que deben suprimirse conforme al reglamento.

En vista de las exposiciones presentadas por las Anteiglesias de Derio, Lezama, Fica, Meñaca y Zamudio, recomendando el buen proceder de su secretario Don Carlos Francisco de Zubiaga para que se le dé en arriendo una de las numerías tanteadas por el Señorío, en atención á que siendo ya escribano real no se contradice el espíritu del reglamento, que tiende á evitar el número de escribanos; acordó la Junta concederle dicha gracia, sin que sirva de ejemplar, y á calidad de que fije su residencia en el pueblo que le designe la Diputación, y de que quedará suprimida esta numería al fallecimiento de Zubiaga. Protestaron esta resolución los apoderados de la Villa y de la Anteiglesia de Munguía.

Declaró la Junta, que tanto Don Juan Bautista de Aran-

cibia, vecino de Lequeitio, que ha solicitado que se le habilite para defenderse, sin necesidad de valerse de procurador, en un expediente que sigue en el tribunal del Alcalde del Fuero de la Merindad de Busturia como todos los demás que se hallen en su caso, pueden defenderse en causas propias en los tribunales inferiores del Señorío, sin necesidad de otorgar poder á procurador alguno; pero con la circunstancia de que los escribanos ante quienes sigan tales pleitos, no exigirán por cada notificación que se haga más que los dos reales prescritos en el arancel vigente.

Se mandó pasar á la Diputación, para la resolución que estime conveniente, una solicitud de la Anteiglesia de Galdácano sobre que se le cedan los diezmos de dicha Anteiglesia y la de Bedia, que corresponden al Señorío como patrono, á fin de construir con su producto una nueva iglesia parroquial, mediante á que se halla cerrada hace años la matriz, por amenazar ruina.

En vista de un memorial presentado por los apoderados de la Anteiglesia de Amoroto, pidiendo que el Teniente general del Señorío se inhiba del conocimiento del expediente formado en su tribunal sobre concesión de un terreno común para construir una casería; acordó la Junta que en lo sucesivo se introduzcan semejantes pretensiones en la Diputación general, para que, siendo posible, se consiga la decisión gubernativamente, y se eviten cuestiones judiciales, quedando á cada interesado su derecho á salvo para que use de él donde le convenga, sino se conforma con la determinación que se dicte. Se tomó con este motivo en consideración lo prescrito en el capítulo quinto de la ordenanza de Montes, formada por el Señorío en 1752, respecto de que el Corregidor otienda en todos los negocios contenciosos que se susciten en la materia; y teniendo presente la real orden publicada por el Consejo de Castilla en 30 de Septiembre

de 1806, y los perjuicios que se causan á los pueblos y particulares del Señorío, obligándolos á entablar sus acciones en el tribunal del mismo Corregidor, distante muchas leguas de la mayor parte de los pueblos del mismo Señorío, en cuyo recinto hay Jueces realengos que conocen en primera instancia de cualesquiera clase de asuntos; se decretó que la Diputación general, en representación de la Junta, haga cuantos recursos estime oportunos para conseguir que el Rey y el Consejo declaren que el expresado capítulo de la ordenanza es extensivo á todos los Jueces reales del Señorío, que conocen de asuntos civiles y criminales en primera instancia.

Se pasó á la Diputación, para que determine lo que juzgue oportuno, una solicitud de la Villa de Larrabezua en la que, en atención á los terribles efectos del incendio de la noche del 30 de Diciembre último, pide que se le exima de entregar el importe de los arbitrios sobre vinos, y la prorrate de los impuestos sobre caminos, dejándolos á beneficio de la misma Villa.

En vista de un memorial de la Anteiglesia de Busturia, en que solicita que ningún médico se oponga á que el cirujano romancista Don Gaspar de Bulucua recete á los enfermos el uso de medicamentos internos; determinó la Junta que la Diputación entable en el Gobierno de S. M. las reclamaciones correspondientes para que los cirujanos romancistas puedan recetar dichos medicamentos en los pueblos en donde no haya médico ó cirujano latino.

Se mandó que pasasen á la Diputación varios memoriales que se presentaron, con reclamaciones referentes á servicios prestados por particulares durante la guerra de la Independencia y la lucha con los constitucionales, para que procediéndose al arreglo de las cantidades que legítimamente tengan que haber los reclamantes, proponga la Dipu-

tación á las próximas Juntas ordinarias los medios que juzgue más oportunos para la satisfacción de esta deuda.

Se mandó que pasase también á la Diputación, para la determinación conveniente, un memorial presentado á nombre de la Anteiglesia de Arbácegui, solicitando que se le autorice para imponer una contribución á la propiedad, á fin de reintegrar á las ermitas de su jurisdicción de los bienes y tierras que les pertenecen y se enajenaron en 1810 para satisfacer las contribuciones que impuso á dicho pueblo el Gobierno intruso.

Igual resolución recayó sobre un memorial en que se pedía que el Señorío tomase bajo su protección al hijo de un paisano armado, cuyo padre falleció en la expedición á Navarra contra los revolucionarios.

Enterada la Junta de la exposición de la Anteiglesia de Cenarruza, en la que pide que se aclare si las deudas procedentes de contribuciones y suministros deben satisfacerse por toda la propiedad de vecinos y forasteros, ó solamente por la de vecinos; decidió que el pago de las obligaciones que gravitan sobre dicha Anteiglesia, procedentes de contribuciones directas y de suministros, exceptuando los bagajes, propios, espías, guías y alojamientos, corresponde á toda la propiedad territorial, tanto de vecinos como de forasteros; entendiéndose que el reparto se ha de hacer con intervención de la Diputación general, y que han de pagar dos terceras partes los propietarios, y la otra los colonos de las respectivas fincas, y la cantidad total que corresponda á cada una de ellas los dueños que las manejan por sí mismos. El apoderado de Gordejuela protestó este acuerdo, en atención á que los pueblos no tienen facultades para imponer arbitrios de esta naturaleza; y se adhirieron á la protesta los apoderados de otros veinte y nueve pueblos. También protestó el apoderado de Orozco el acuerdo en cuanto

se oponga á la carta de unión de aquel Valle al Señorío.

Resolvió la Junta que pasase á la Diputación con urgencia un memorial del Concojo de Zalla, quejándose de cierta alcabala impuesta por la Villa de Balmaseda para cubrir el cupo que le corresponde en las obras del camino carretil de Castro á Bercedo, contraviniendo á la libertad de comprar y vender que gozan los vizcaínos; á fin de que el Síndico del Señorío siga la instancia, y haga cumplir prontamente la orden de suspensión de la exacción que ha motivado la queja de Zalla.

No tuvo la Junta por conveniente acceder á la solicitud de los cabildos eclesiástico y secular de Echávarri, para que en atención al estado ruinoso en que se halla el edificio de la iglesia parroquial, costee el Señorío, como patrón de ella, un nuevo templo en el centro del pueblo.

Considerando que en el limitado espacio de tiempo en que se halla reunida la Junta no pueden adquirirse los datos necesarios para resolver con cierto la multitud de exposiciones que se presentan; se acordó que en lo sucesivo no se admita pretensión alguna, de cualquier clase que fuese, y que los que tengan que hacer alguna reclamación la dirijan oportunamente á la Diputación, la cual ha de resolverla, siempre que estime que le compete la resolución, ó la reservará para la primera Junta general ordinaria que se celebre, después de instruir el expediente que corresponde.

Impulsada la Junta del deseo de que se economice todo lo posible en los gastos del Señorío, dispuso que se suprimiesen los refrescos que se sirven á los individuos de las diversas comisiones que se nombran durante las Juntas.

Al procederse al sorteo de los pueblos electores protestaron los apoderados de Bermeo, por cuanto no podía entrar en suerte Don Serapio de la Hormaza, en virtud de lo decretado el 16 por la Junta.

Fueron elegidos primeros Diputados, Síndicos y Secretarios de Justicia, respectivamente, Don Pedro Antonio de Ventades y Don José Ramón de Rotaeche, Don Manuel Emeterio de Eguía y Don Angel de Pujana, Don Francisco Plácido de Orbeta y Don Luis Antonio de Urráburu.

Fué protestado por los Síndicos el nombramiento de Don Francisco de Zabálburu y Lejarza para Regidor electo, en atención á que tenían indicios de que dicho señor Zabálburu había pertenecido á la compañía sagrada ó de ancianos, creada en la Villa de Bilbao en la época de la Constitución. Con esta reserva fué admitido, á calidad de negársele la posesión en el caso de ser cierta aquella circunstancia.





CAPÍTULO V



or circular de la Diputación de 13 de Septiembre se dijo á los pueblos lo siguiente:

«A solicitud de las once Anteiglesias de que se compone la Merindad de Durango, la Villa de este nombre y las de Ermua y Ochandiano, para que se las exonerase del pago de la prorrata de los setenta mil reales aplicados por traslación al camino de Durango á Bermeo, y del medio real en verga de aguardiente con que contribuían, mediante á que sostienen á su costa privativamente las carreteras de Urquiola y Ermua; se declaró por el supremo Consejo de Castilla en 16 de Marzo de 1829, que las citadas Anteiglesias y Villas no debían contribuir á los arbitrios generales del Señorío destinados ó trasladados á costear los gastos de la abertura del camino de Durango á Bermeo, ni otros que se impongan ó se subroguen á ellos con igual objeto, mientras no se nivelen con ellos los demás del país en el pago, y tome á su cargo el cuerpo general los capitales y réditos que pesan sobre los primeros, dejando sin efecto en esta parte los acuerdos de las Juntas generales del mes de Julio de 1827, y absteniéndose de molestarlos por esta razón.

«Instruida la Junta de la providencia que antecede en su

sesión de 18 de Julio de 1829, acordó, que quedando suprimida para lo sucesivo la prorrata de los setenta mil reales, la tesorería general del Señorío satisficiera anualmente la citada cantidad á la empresa del camino de Durango á Bermeo, á reserva de aplicar el mismo contingente á los demás de Vizcaya, por el orden gradual establecido cuando se extinguieron los caudales invertidos en aquél.

»No habiéndose conformado los pueblos reclamantes con esta determinación, acudieron de nuevo al Consejo pidiendo que á los citados pueblos se les satisficiera ó abonase el cupo que les correspondía en los setenta mil reales destinados para el camino de Durango á Bermeo, y que el descuento ó rebaja ordenada por esta Diputación á los pueblos acreedores en la nivelación, no se entendiese con aquéllos, si no que se les entregase por entero; y por auto de dicho supremo tribunal, recaído á su consecuencia en 14 de Marzo de este año, se acordó, que se observase en todas sus partes la providencia del mismo Consejo de 16 de Marzo de 1829, sin interpretaciones que se dirigiesen á eludir su cumplimiento, quedando sin efecto el decreto de la Junta general de este Señorío de 18 de Julio de dicho mes, y lo dispuesto por su Diputación, en cuanto se opongan á lo mandado por la citada provincia, librándose á este fin la correspondiente real provisión, y también para que la Diputación verificase á prorrata entre los pueblos del Señorío la exacción de los setenta mil reales anuales aplicados á caminos, por los años que hubiese dejado de hacerlo, sin comprender á las once Anteiglesias ni á las Villas sus consortes en los repartimientos que ejecute, reintegrando con su importe á la caja general del Señorío de las cantidades que haya extraído de ella, y entregando á las referidas Anteiglesias y Villas las que se les hubiesen descontado por razón de atrasos y arbitrios destinados á la construcción de caminos. Presentada esta real

provisión al uso del Fuero, el Síndico del Señorío, con acuerdo del primer Consultor, fué de opinión que se cumpliera, sin perjuicio de los Fueros y franquezas.

»Habiéndose, pues, insistido por la representación de dichas Anteiglesias y Villas en la pronta ejecución de los extremos que abraza esta providencia, ó impulsada la Diputación por las repetidas quejas que han recaído sobre su realización en el tribunal del señor Corregidor, hubo de proceder al arreglo y liquidación de los reintegros prevenidos por la real provisión citada». Sigue la designación de la cantidad que corresponde á cada pueblo, y el encargo de que á la mayor brevedad posible ingrese dicha cantidad en la tesorería del Señorío.

Se reencargó el 4 de Octubre el puntual cumplimiento de todas las disposiciones que contienen las circulares de 25 de Noviembre de 1825 y 30 de Septiembre de 1828 sobre la mendicidad, previniendo que la Diputación general comisionará escribanos, que á costa de las Justicias omisas tomen razón del número de mendigos que han salido de cada pueblo, adonde han sido enviados, los que quedan en los pueblos de su respectiva naturaleza ó vecindad, y los motivos que justifican el que imploran la caridad públicamente.

Se dió el uso el 10 á una real orden por la que se disponía que cesase Don Serapio de la Hormaza «en el empleo y ejercicio de Diputado de la Provincia.» Firmaba el dictamen con el que se conformó la Diputación el Síndico Eguía, asesorado por Don José Nicolás de Torres, con motivo de haberse excusado los dos Consultores de intervenir en este asunto. En el decreto de conformidad, decía la Diputación que «ansiosa de los felices resultados en favor de los naturales del Señorío, se apresura con la mayor satisfacción á insertar á continuación de los decretos de Juntas generales dicha real orden; de ella aparece el amor de S. M. para con

los vizcaínos leales, y benéfico acogimiento que ha tenido el decreto de la Junta general del día 16 de Julio último, hecho después de oídas las opiniones en contrario de los dos Consultores en aquella acta, la que protestaron solamente tres apoderados».

Se reunió el 21 el Regimiento general, con asistencia de los Padres de Provincia, para tratar de un oficio de la Diputación de Guipúzcoa; en vista del cual se acordó, que la Diputación entendiéndose con las Provincias hermanas, hiciese las gestiones oportunas para la conservación de los Fueros y libertades del Señorío. También se acordó: que se continuase gestionando para igual fin respecto al contingente de hombres pedido para el reemplazo del ejército; el modo en que se habría de proceder al nombramiento de los individuos de la Junta permanente de caminos; autorizar á la Diputación para calificar las tachas legales puestas al segundo Diputado del bando ofiacion Don Juan Bautista de Anitua; que la Diputación presente en las primeras Juntas generales un reglamento sobre las cualidades y circunstancias que deberán tener las personas que se elijan para formar parte del Gobierno universal del Señorío, y otro sobre el régimen que se ha de observar en las Juntas generales; y que los Ayuntamientos se atengan en los nombramientos de oficiales de los paisanos armados á lo que preceptúa el artículo treinta y tres del reglamento de su razón.

El 7 de Noviembre se mandó sacar á remate, por todo el año de 1832, el producto de los arbitrios destinados á las atenciones generales del Señorío, en quinientos ochenta y nueve mil, novecientos seis reales.

Tomó posesión el 15 de su cargo el Regidor del Señorío Don Francisco de Zabálburu, con arreglo á lo mandado por el Juez mayor de Vizcaya, protestando el Síndico por las razones que tiene expuestas en el tribunal de justicia, con-

siguientemente á lo acordado por la Junta general en 16 de Julio último.

El 9 de Diciembre se dirigió la Diputación á los pueblos con la circular siguiente:

«Para consolidar el reposo, y lograr la confianza de los habitantes de este fidelísimo Señorío hacia sus Magistrados locales, es indispensable alejar de los oficios de Justicia y Regimiento á los genios desorganizadores que no gustan ni producen sino proyectos turbulentos, y se alimentan de ideas alarmantes. Los verdaderos sostenes del bien público estrictan en la conservación de las conveniencias locales, de los hábitos que estas conveniencias han hecho contraer, y de las leyes donde los antiguos usos han producido y dado á conocer las ventajas mucho antes que aquellas fuesen promulgadas.

»Las leyes y las costumbres bajo las cuales goza tranquilamente Vizcaya de su existencia foral, forman su más bella propiedad. Para continuar gozando dulcemente de tan precioso y antiquísimo patrimonio, ha creído la Diputación general deber excitar el patriótico celo de los Ayuntamientos de este Señorío, á fin de que en las elecciones de los oficios concejiles procedan con el más escrupuloso examen á nombrar personas identificadas con los principios, sentimientos y hábitos de la generalidad de los vizcaínos, y sin ninguna de las tachas legales y políticas marcadas por las resoluciones soberanas y decreto de Junta general del día 16 de Julio último.

»Para que los electores se hallen bien penetrados de la delicadeza y tino con que deben proceder, se les leerá todos los años esta circular por los respectivos secretarios de Ayuntamiento en el acto de reunirse para realizar sus propuestas de nombramiento.»

1832 Se acordó el 20 de Febrero dar el uso á la real cédula de 31

de Enero, por la que se encargaba al Señorío que tributase á Dios las más rondidas gracias por el nacimiento de la Infanta María Luisa Fernanda, ocurrido el día anterior, pidiendo al mismo tiempo á su divina Majestad por la salud de la Reina, y que ampare con su omnipotencia el fruto del regio matrimonio.

El 28 de Febrero presentó su informe sobre un proyecto de iguala ó nivelación entre todos los pueblos contribuyentes á caminos la comisión creada al efecto por la Junta general en 12 de Julio del año último. Los caminos que entran en este proyecto son: el de Bilbao ó Pancorbo por Orduña; el de Bilbao á Durango; los de Durango á Vitoria y Vergara por Ochandiano y Ermua; el de Durango á Bermeo, con su ramal á Elanchobe y Ea, haciendo en él un corte ó travesía desde Zugastieta ó Zornoza por los gastos é incomodidades que causa su tránsito por el alto de Muniqueta; el de Bilbao á Bermeo; el camino de Plencia, que se incorporará al abierto á Bermeo; el de Bilbao á Burgos por Balmaseda; el que desde Areta se dirige á Vitoria por Orozco; el de Lequeitio á Durango con su ramal á Ondárroa; el de la Merindad de Arratia; el de Elorrio; y el de las veneras de Somorrostro á la lengua del agua, con sus ramales para el embarque de vena. Acompañan al plan el estado de las obligaciones, gastos y recursos y el importe de los arbitrios sobre el vino, aguardiente, sal y vena, que corresponderá pagar á los pueblos según las clasificaciones que se hacen. Este proyecto se pasó á los pueblos el 20 de Marzo, para que nombrasen poder habientes que bajo la presidencia del delegado que designe la Diputación informen lo que le parezca, reuniéndose los pueblos por grupos, según la ruta en que están interesados.

Resolvió la Diputación el 23 de Marzo tomar un millón de reales á cuatro por ciento de interés, para construir la

casa en donde han de ponerse las oficinas del Señorío, según lo dispuesto por la Junta general en 17 de Julio de 1829.

El 26 se acordó circular á los pueblos el modelo á que deberían arreglarse en el otorgamiento de los poderes para su representación en las Juntas generales.

El 31 se publicó la alocución siguiente:

«La debida atención á las ocupaciones del campo, el rigor de la estación, y las indisposiciones generales, aunque no graves, que han reinado en el invierno que termina, han detenido á los Diputados generales para no exhortar á los paisanos armados de Vizcaya á la prosecución de los ejercicios doctrinales, indispensables á todo el que como leal vizcaíno desea estar pronto y preparado, en todo evento, á llenar su esencial deber en la defensa de su Religión, de su Rey y de su Patria. Entra ya un tiempo, que como más benigno y á propósito, ofrece mejor y más cómoda ceyuntura á la adquisición de una instrucción militar, que ponga al armamento vizcaíno en aptitud de corresponder á la esperanza que siempre tuvo el país en su fidelidad y esfuerzo; y no se creerían los Diputados generales dignos de los destinos que ocupan, si por todos los medios que están á su alcance no procuraran excitar el celo y amor al país de los que con las armas en la mano se miran especialmente consagrados por nuestro antiguo Fuero á la conservación del orden interior, del respeto exterior de nuestro territorio y de las leyes que felizmente rigen.

»Objeto tan caro y precioso á un corazón leal, exige por su naturaleza un continuado y asiduo empeño de ponerse en situación de corresponder á sus grandiosas miras. La apatía y la indolencia hacen en cierta manera inútil la fidelidad, y esta virtud inherente á los pechos verdaderamente vizcaínos, descansa como en su elemento en aquella afectuosa actividad con que el leal se afana en la adquisición de me-

dios y conocimientos de aparecer y manifestarse tal, cuando las circunstancias lo invoquen. El que á éstas espera para adquirirlos, ó sume sus nobles sentimientos en un estado de nulidad vergonzosamente indisculpable, ó manifiesta su poca correspondencia á las exigencias de la Patria, que le esperaba pronto y preparado.

»PAISANOS ARMADOS DE VIZCAYA: La instrucción y la subordinación militar es vuestro esencial elemento, si habeis de responder á la voz del Fuero y del país, que os puso las armas en la mano; mas no penseis, no, adquirirlas sino con la práctica y con el hábito del orden. La instrucción militar es propiamente llamada ejercicio, esto es, continua repetición de actos, y la continua repetición de actos de orden forma también el hábito de la subordinación.

»Verdad es que no son extraños á nuestro suelo privilegiado los inapreciables beneficios de la paz, de que carece una porción de la Europa. Mas ¿quién garantizará su duración en este siglo de convulsiones y de continuos trastornos, sino los esfuerzos de la fidelidad armada, que do quiera que asoma su hórrida cabeza el genio maléfico de la discordia y la revolución, acude presurosa, llena de constancia y heroismo, á humillar su soberbia y ahorrojarle en su frenesí?

»De aquí la imperiosa necesidad de no aflojar en las medidas de precaución, y de vivir siempre alerta y preparados para preservar al país del germen contagioso de la innovación y del desorden, que propagado por sus satélites en toda la extensión del globo, ha vertido raudales de sangre, y ha desquiciado la máquina política de las naciones, sumiendo en el espanto y la desventura á los pueblos que, desprevenidos contra sus asechanzas, ó demasiado dóciles á su pernicioso influjo, le abrieron incautamente su seno.

»No escuchéis, pues, las pórpidas sugerencias de los que

del estado presente y precario de las cosas, deducen consecuencias de apatía y abandono de las armas; miradlos más bien por semejantes insinuaciones, como los encubiertos apóstoles de la perfidia y de la traición, acreedores por lo mismo á darlos á conocer á la autoridad para el condigno castigo.

»El vizcaíno, desde su cuna misma, es consagrado á la defensa de su Rey, de su suelo y de sus venerandas leyes; sus armas son el más seguro apoyo del orden y de la tranquilidad, y sólo á quien desconoce su naturaleza, fuera dado entregarse en los brazos de la indolencia y apatía, cuando le llama el cumplimiento de su primer deber.

»PAISANOS ARMADOS DE VIZCAYA: Cada cual en su clase y en su grado, dedicaos con nuevo ardor á completar la instrucción y subordinación militar, virtudes que hicieron sublime el mérito de vuestros mayores, y sostuvieron gloriosa la memoria de su país natal. Los Diputados generales que pusisteis á vuestro frente, esperan con confianza que se redoblará vuestro empeño en instruiros y subordinaros, de manera que en cualesquiera aciagas circunstancias, la autoridad y los perturbadores cuenten en el número de armados el de una tropa permanente y activa. Conocen mucho el excelente espíritu vizcaíno, y no dudan que ninguno que se precie de serlo, dé el más leve motivo de usar con él de otros medios que la voz paternal y afectuosa de sus Diputados. La lealtad ha sido, es y será la virtud indeleble de Vizcaya, y ningún buen vizcaíno puede dejar de prestarse con ardor á lo que sus Diputados generales les manifiestan indispensable y necesario á la seguridad de su Religión, de su Rey y de su Patria; la dulce confianza que han concebido en este punto, les hace anhelar por el momento en que un ligero desahogo de las ocupaciones que se han acomodado á su atención, les permita ver confirmada por sí mismos en una

revista personal que tienen proyectada; no dejéis, pues, por efecto de tibieza, ilusorias tan lisonjeras esperanzas.

»Esta manifestación sincera de los sentimientos que animan á los Diputados, os será trasmitida por el órgano de vuestros Jefes respectivos, según lo prescribe el reglamento».

El mismo día se dirigió la Diputación á los Ayuntamientos en estos términos:

«Al remitir á V. S. los Diputados generales la alocución que dirigen á los paisanos, exhortándoles á la continuación de los ejercicios doctrinales suspensos durante el invierno, y de que dependen la instrucción y subordinación necesarias al bueno y perfecto uso de las armas que la Patria puso en sus manos, cuentan como uno de sus más eficaces auxilios la cooperación de los Ayuntamientos y autoridades de los pueblos de Vizcaya. No dejará de haber genios altivos, ó poco sufridos, que destruyen sus buenas cualidades con una natural predisposición á la falta de obediencia y subordinación; falta que, aunque en cosas muy tenues, es sumamente trascendental en los que se hallan con las armas en la mano. Los Diputados desean evitar este escollo; quieren que los armados de Vizcaya, á la par de bravos y leales, se muestren instruidos y obedientes; dignos, en una palabra, de la confianza que el país deposita en ellos, y los Ayuntamientos y las autoridades locales son los que con su cooperación deben eficazísimamente ayudar á que se cumplan sus ardientes votos. Por tanto, mandan á V. S., que en obsequio del bien general, aplique todo su activo celo, y preste su auxilio y ayuda á los Jefes y oficiales de los respectivos cuerpos, para la puntual asistencia á los ejercicios doctrinales, y la exacta subordinación que en ellos, y en cuanto concierne al servicio debe regir, inculcando siempre, y con oportunidad, á sus habitantes la inapreciable máxima de

que el armado no puede altercar, ni desobedecer á su inmediato Jefe, sin destruir completamente la subordinación; que su primero y esencial deber es la obediencia más exacta á cuanto se les mande en el punto de servicio; y que cuando las órdenes que tengan que cumplir las creyesen injustas ó gravosas, lo hagan presente con moderación, recurriendo en queja al superior, si el tiempo diese lugar á ello, y si no lo diese, después de obedecidas y cumplidas, para obtener la justa reparación del agravio que se les haya podido irrogar.

»Los Diputados, deseando adquirir un conocimiento pleno de que á la adjunta alocución se ha dado la mayor publicidad, exigen de V. S. que, reuniéndose según costumbre en el primer día festivo, hagan que el secretario la lea en voz inteligible, y que en el término de quince días remita el mismo á la secretaría un testimonio de haberse cumplimentado este decreto».

Firman ambos documentos los Diputados Ventades y Rotache y el secretario Soloeta Balzola.

Este mes y el siguiente se hicieron varias prevenciones acerca del cólera morbo, cuya invasión se temía. Se mandó también el 9 de Abril que se hiciese un solemne novenario en la iglesia de Santiago, para implorar del Todopoderoso el que preservase á Vizcaya de aquel azote, y se encargó á los pueblos que hiciesen rogativas públicas con el mismo objeto.

El 18 de Abril se ajustó una transacción con los propietarios de los terrenos ocupados por el canal que empezó á abrirse en la vega de Abando por cuenta del cuerpo general del Señorío.

Se dió el uso el 21 por el Corregidor, de conformidad con lo propuesto por el Síndico á una carta orden de la Dirección general de propios y arbitrios del Reino, comunicando

la real orden expedida en 4 del corriente, por la cual se mandaba que á los pueblos de las Provincias Vascongadas se los releve del pago de lo que adeuden por derechos de reconocimiento y liquidación de cuentas y despacho de expedientes de propios, certificaciones ó informes de oficio, toma de razón de provisiones y comunicación de órdenes, hasta el año de 1823, y que desde el año de 1824 se continúe en exigir cuantos derechos les correspondan, tanto por liquidaciones como por el despacho de expedientes, en el modo y forma que se practicó anteriormente, exceptuándose á la Ciudad de San Sebastián, á la cual no se le exigirá derecho por cuentas y expedientes hasta que S. M. tenga á bien mandar otra cosa. El Síndico Eguía expuso en su informe, con acuerdo del primer Consultor, que los pueblos de Vizcaya, á excepción de algunas de las Villas erigidas en su territorio por el Señor, no han reconocido, ni tenido en tiempo alguno para dirección, gobierno y distribución económica de sus propios y arbitrios más reglamento que el que ellos se han impuesto voluntariamente, ni otro tribunal de revisión de cuentas que el del Teniente general para las Anteiglesias y el del Corregidor para las Villas; que cuando ocurre alguna disputa sobre las referidas cuentas, son Jueces natos de apelación el Corregidor y los Diputados generales y el Juez mayor que reside en la Chancillería de Valladolid, y para suplicación la Sala mayor de Vizcaya, todo con arreglo á las leyes diez y nueve y veinte, título primero, primera y siguientes del título veinte y nueve, y cuarta, título treinta y tres de los Fueros; que bajo este concepto, y limitándose solamente á las Villas y Ciudad que han acostumbrado remitir sus cuentas, y pedir la aprobación de sus reglamentos en la Dirección general de propios y arbitrios, y sin que los derechos que se les exijan por el despacho de los expedientes, provisiones y co-

municaciones de órdenes tengan el caracter de contribución, puede usarse y cumplirse la real orden comunicada.

En oficio del día 23 participó Don Francisco Sáinz Pardo desde San Sebastián al Señorío, que en virtud de real orden expedida el 30 de Marzo mandando que se retiren á sus respectivos tribunales los Comisionados regios que se nombraron para entender en las causas de Estado, quedaba extinguido el tribunal del propio Sáinz Pardo en el Señorío, en cuanto á las nuevas causas de dicha clase que ocurran, y reintegradas las Justicias ordinarias en esta parte de su jurisdicción que se les había desmembrado, y limitado la de Sáinz Pardo á sustanciar y determinar las pendientes.

El 15 de Mayo se dió el uso á la real cédula de 28 de Abril, aboliendo para siempre el suplicio de horca, que se ha de sustituir con el de garrote, «entendiéndose», decía el Síndico en su informe, «que todo vizcaíno que incurriese en la pena de muerte debe ser ejecutado en el garrote noble destinado para la clase de hijosdalgo, por ser nobles solariegos todos los naturales y originarios de este Señorío.»

Se autorizó el 26 de Junio al Síndico para otorgar la escritura de compra del terreno donde iba á edificarse la casa de la Diputación.

Con fecha 2 de Julio se dijo por la Diputación á las Justicias del Señorío, con carácter de «muy reservado» lo siguiente:

«Los anarquistas que no desperdician coyuntura alguna para llevar á cabo sus proyectos de un desórden general, parece probable que con motivo de la expedición que el ex-Emperador del Brasil ha preparado para hacer un desembarco en las costas de Portugal, aventuren alguna nueva tentativa, ora en el interior del Reino, ora por el exterior, contando con el impotente apoyo de los emigrados en Francia.

»Si bien la experiencia nos ha acreditado con repetidos

ejemplares, que son vanos todos los esfuerzos de los revolucionarios para derrocar el altar y el trono, y establecer el imperio del caos y del terror, y que cuantos se intenten en lo sucesivo con un fin tan desorganizador y detestable, se estrellarán en la fidelidad nunca desmentida, y en la decisión de la masa general de los españoles, prontos siempre á defender con su propia sangre la sacrosanta Religión de sus mayores, y las venerandas instituciones políticas que de muchos siglos á esta parte están labrando su felicidad social, y son los mejores garantes del reposo público; no obstante, las autoridades encargadas de velar por la inalterable conservación de tan preciosos objetos, no corresponderían dignamente á la confianza depositada en ellas, sino previniesen con medidas de vigilancia y precaución hasta la más remota posibilidad de perturbación. A este intento, y cumpliendo con lo que se ha prescrito por orden expresa del Soberano, tanto á la Diputación general que ejerce la policía, cuanto al Corregidor su Presidente; ambas autoridades de común conformidad han acordado lo que sigue:

»Artículo 1.º Todas las Justicias de este Señorío, bajo su más estrecha responsabilidad personal, vigilarán incesantemente sobre la conducta política de los habitantes de sus jurisdicciones respectivas, y en especial de aquellos que por su situación política ó por su conducta anterior diesen motivo de sospecha; y procurarán reanimar el espíritu público por cuantos medios se hallen á su alcance.

»Art. 2.º Dichas Justicias darán parte exacto y puntual á la Diputación en los tiempos y según se tiene ordenado por las circulares de policía, de cualquiera ocurrencia que interese á la tranquilidad pública y á la seguridad general y particular, expresando el sentido político en que se hallen los habitantes de su jurisdicción, y todo cuanto diga relación con la marcha del espíritu público.

»Art. 3.º Se les recomienda muy eficazmente el mayor esmero en la exacción, reconocimiento y refrendación de los pasaportes de los que lleguen ó transiten por sus jurisdicciones, ejecutando en su caso cuanto sobre la materia prescriben las órdenes ó instrucciones circuladas.

»Art. 4.º Las Justicias de los pueblos de la costa de este Señorío tendrán un especial cuidado en observar si se presenta alguna embarcación que inspire sospecha, ya porque conduzca gente armada desconocida, ó ya porque en sus maniobras demuestre ideas de hostilizar el país, en cuyo caso cumplirán con la mayor actividad cuanto se les tiene prescrito por la circular de 17 de Marzo de 1826, en lo que hoy sea aplicable al objeto de esta medida.

»Art. 5.º A todo pasajero que arribe por mar á cualquiera punto de este Señorío, procedente de país extranjero, deberán obligarle á presentarse á la Diputación, para visar su pasaporte, si lo trae en regla, ó tomar con él las medidas que reclame la informalidad de aquel documento, ú otra circunstancia especial que se note en el individuo, digna de proceder contra él.

»Art. 6.º Toda reunión sospechosa, ya por el sitio y modo con que se verifique, ó ya por la calidad de las personas que concurran á ella, exige una atención predilecta por parte de la autoridad; en consecuencia, la Justicia en cuya jurisdicción se verifique aquélla, deberá dar inmediatamente aviso á la Diputación, sin perjuicio de adoptar con tiempo las medidas de prudencia que le sugiera su celo para evitarla, ó á lo menos para atajar sus efectos, si llevan una tendencia contraria al orden establecido y á la legitimidad.

»Art. 7.º Tanto el Corregidor como la Diputación cooperarán ardientemente á la ejecución y estricta observancia de las disposiciones contenidas en esta circular, y serán inexorables en aplicar el condigno castigo, con todo el rigor de

la ley, á las Justicias que se manifestasen apáticas ó poco celosas en el cumplimiento de lo que por ellas se les ordena.»

El 14 de Agosto provoyó el Corregidor un auto, de conformidad con el dictamen que se pone á continuación del Síndico Pujana, asesorado por el Consultor Loízaga, mandando que con inserción de él se dé cuenta de esta providencia al Director general de propios y arbitrios del Reino para los fines que estime conducentes.

«El Síndico ha visto la circular que antecede de la Dirección general de propios y arbitrios del Reino, comunicando la real orden expedida en 23 de Noviembre de 1830, por la cual tuvo á bien S. M. mandar que se sobresea en los expedientes contenciosos sobre la nulidad de las ventas de fincas de propios y comunes, ejecutadas por los pueblos en las dos épocas de la guerra de la Independencia y Gobierno llamado constitucional, mediante hallarse encargada la expresada Dirección general de formar el expediente general de que trata el párrafo diez y seis, artículo sexto, capítulo primero de la real instrucción de 13 de Octubre de 1828, y dice: que todos los montes, usas y ejidos de Vizcaya son de los hijosdalgo y pueblos de este Señorío, sin que pueda el Señor mandar hacer Villa ni darle término alguno, que no se haga en los de los hijosdalgo y pueblos, por cuya razón se estableció en la ley octava del título primero de los Fueros que no puede el Señor mandar hacer Villa sino estando en la Junta de Guernica, y consintiendo en ello todos los vizcaínos. Consiguiente á esta ley observada inconcusamente, se hallan los pueblos de Vizcaya en el uso y goce de vender los propios en pública subasta cuantas veces contemplen necesaria su enajenación, precedida la información de utilidad, y competente aprobación de sus autoridades locales, sin intervención de la contaduría general de propios

y arbitrios, ni otro requisito alguno. Se han reputado constantemente por legítimas semejantes enajenaciones, pero como durante la invasión de los ejércitos franceses se hubiesen otorgado algunas de estas compras ventas con conocidos vicios legales, se acordó por la Junta general de 6 de Septiembre de 1814, que los pueblos han tenido y tienen libertad de vender y enajenar, con la formalidad debida, los bienes raíces comunes concejiles, y que si por las enajenaciones que se hubiesen otorgado se consideran algunos con derecho á reclamaciones, las propongan en los competentes tribunales, y que en lo sucesivo podrán continuar con esta libertad, arreglándose á las formalidades debidas. Obedeciéndose, pues, con el más profundo acatamiento la circular comunicada, es de suspenderse su uso y cumplimiento en Vizcaya, en cuanto pueda contraerse á privar á los pueblos de este Señorío del uso y goce en que se hallan de vender los propios concejiles en pública subasta cuantas veces contemplen necesaria su enajenación, con la previa información de utilidad y competente aprobación de la autoridad local.»

Se dió el uso el 20 á un oficio de la Universidad de Oñate, participando que el Rey ha resuelto que permanezcan cerrados los establecimientos públicos literarios, y comunicando las disposiciones acordadas en su cumplimiento por la Inspección general de instrucción pública para los exámenes del presente curso privado, y para la matrícula del futuro.

El 24 de Septiembre se mandó cumplir la real orden del 17, por la que con motivo de haberse administrado al Rey el santo Viático, á las doce y media del día, se encargaba que se hiciesen rogativas públicas en todas las iglesias de sus dominios, á fin de implorar de la divina Misericordia el beneficio de la mejoría y conservación de su importante salud.

El mismo día se dió posesión del empleo de Teniente general del Señorío á Don Francisco de Paula Grande.

El 15 de Octubre se mandó reimprimir y circular, «sin pórddida de tiempo, á los pueblos de este Señorío, en la forma ordinaria», de acuerdo con lo informado por el Síndico, la circular del supremo Consejo de Castilla, «comunicando el real decreto expedido en 6 del corriente, por el cual, teniendo en consideración el Rey el retraso que sufren los negocios del Estado, por la indisposición de su salud, que no permite á S. M. dedicarse á ellos con la intención que desea y exige el bien de sus pueblos, que la divina Providencia ha confiado á su cargo, viene en habilitar para el despacho á la Reina nuestra Señora, su muy cara y amada esposa, por el tiempo de su enfermedad, de la que confía en Dios verse en breve restablecido».

El mismo día se mandó cumplir la real orden del 9, comunicada el 10 por el Gobernador del supremo Consejo, encargando «que para tributar al Todopoderoso la más rendida acción de gracias por haber librado al Rey nuestro Señor del peligro de que ha estado amenazada su interesante y preciosa vida, se cante en todas las iglesias del Reino un solemne Te Deum, con asistencia de todas las autoridades civiles y eclesiásticas.»

Se acordó el 28 guardar y cumplir la real cédula del 20, en que se inserta el real decreto del 15, por el cual la Reina Doña María Cristina, habilitada para el despacho de todos los negocios del Estado durante la enfermedad de su augusto esposo, concede en su real nombre «y conforme en todo con su voluntad la amnistía más general y completa de cuantas hasta el presente han dispensado los Reyes, á todos los que han sido perseguidos hasta ahora como reos de Estado, cualquiera que sea el nombre con que se hubiesen distinguido y señalado, exceptuando de este rasgo

benéfico, bien á pesar mío,» dice la Reina, «los que tuvieron la desgracia de votar la destitución del Rey en Sevilla, y los que han acaudillado fuerza armada contra su soberanía.»

Se dió también el uso el 2 de Noviembre á las dos reales cédulas de 26 del mes anterior, libradas por la Reina, con motivo del cumpleaños de su excelsa hija primogénita, sobre el indulto de los reos de delitos comunes, con las excepciones que se expresan.

El 28 de Octubre pasó Don Manuel Llauder, Virrey de Navarra y Capitán general de Guipúzcoa, un oficio á la Diputación general del Señorío, pidiéndole noticias sobre la alteración de la tranquilidad pública ocurrida en Bilbao los días 24 y 25 del mismo mes; pues no podía prescindir Llauder de que se mantuviese el orden, y de hacer que se guarde el respeto debido á las órdenes del Soberano en la demarcación de la Capitanía general.

Contestáronle los Diputados generales, diciéndole que abundaban en los mismos propósitos de mantener el orden y el acatamiento á las soberanas resoluciones, y que sino bastaba para ello la fuerza armada de naturales de que dispone la Diputación, acudiría al Capitán general de una Provincia confinante como es Llauder, pidiéndole auxilio. No tiene V. E., le decían, otro carácter respecto de Vizcaya, por no hallarse comprendido el territorio de este Señorío en la Capitanía general de Guipúzcoa, como repetidas veces se ha manifestado con sólidos fundamentos, y es forzoso reproducir ahora por el sentido con que se explica V. E. en su oficio de 28 de Octubre último.—Fuera de esta cuestión jurisdiccional, puede contar S. E. con la Diputación general para los fines expresados en cualquier mando que desempeñe, así como para que le participe cuanto pueda serle interesante en el puesto que ocupa. Por lo demás, puede estar S. E. seguro de que se conservará el mejor orden en Vizca-

ya, habiéndose dado cuenta á la Superintendencia general de policia de algunas voces nocturnas y sin consecuencia, prorrumpidas por dos cortos pelotones de jóvenes embriagados.

Replicó Llauder que le satisfacía lo que le escribe la Diputación sobre la supuesta alteración del orden en Bilbao. Veo también, añade, que V. S. continúa queriendo desconocer las soberanas disposiciones que ponen el mando superior militar de las tres Provincias Vascongadas bajo el del Capitán general de Guipúzcoa, cuyo destino debo á la piedad del Rey N. S. Es sensible esta inconformidad de parte de V. S., mucho más cuando las reales declaraciones de 1816 y de 1830 son terminantes y positivas, y tan conformes con la observancia y respeto á los Fueros y leyes de ese país, que sería por parte de V. S. la más deliberada infracción á los mismos el pretender sostener una fuerza armada numerosa, como la que existe en virtud del real permiso para ello, al paso que desconocióse la condición precisa con que el Soberano ha permitido este armamento. Por esto espera que V. S. rectifique en esta parte su concepto, en armonía con las leyes de ese país, y los derechos del Soberano, estando, como debe estar, persuadida esa Diputación por mi constante conducta, que ha tenido lugar de observar, que mi fiel respeto á las unas y al otro será siempre inmutable, por lo que la Diputación no debe dudar que mi conducta por muchas razones se arreglará en un todo, sin consideración alguna, al exacto y puntual cumplimiento de las citadas soberanas disposiciones, siempre que fuese necesario para la seguridad del distrito militar de mi mando, en que está comprendido el Señorío.

Se mandó el 24 de Noviembre guardar y cumplir el real decreto de 15 del corriente, comunicado por el Gobernador del Consejo, que más que decreto es un verdadero mani-

fiesto que la Reina Doña María Cristina dirige á los españoles, explicando su conducta desde el 6 de Octubre, en que fué llamada á tomar parte en el gobierno de la Monarquía. Este documento termina con los párrafos siguientes:

«Sí; el magnífico cuadro en que he visto vuestros sollozos, vuestras lágrimas, y vuestras manos alzadas al Cielo rogando por la salud del Rey, ha interesado mi ternura hasta el extremo de no sosegar sin obtener las señaladas providencias que se han publicado, las que se anunciarán, y las que se han creído capaces de cicatrizar las llagas, que debidas á causas externas han debilitado el cuerpo del Estado. He tenido, no lo negaré, parte en estas saludables medidas, mas ellas en el fondo no son más; son sustancialmente del Rey; por consiguiente, cuando la Nación celebra la justificación que brilla en ellas; cuando los hombres sabios y prudentes las bendicen; cuando los huérfanos y viudas se deshacen en alabanzas de la mano que los acoge y remedia; cuando todos besan la tabla que los ha salvado del naufragio en que iban á perecer; no es fácil creer que llegase á tanto la obcecación de algunos pocos, que desentendiéndose de tamaños beneficios posterguen el bien que palpan á las quimóricas esperanzas de porvenires inciertos. Pero ¿y qué esperanza pueden ser éstas? ¿Podrá sin un crimen atroz pensarse en ellas? ¿Y quién ha de pensar? ¿Quién habrá tan osado que no tema que un Rey, que acaba de perdonar los desafueros de la debilidad, no empuñe la espada de la justicia para castigar con severidad los crímenes de la meditación? ¿Quién habrá tan audaz que se crea superior á la ley? Esta castiga sin pasión, atiende á la enormidad del delito, no á las personas; no repara en jerarquías sino para envilecer las acciones. Cuanto los hombres más deben á la sociedad, tanto más ésta detesta á los que rompen los nudos

con que la están ligados; y son algunos tan fuertes, que horroriza el solo imaginar que haya quienes se abandonen á despreciarlos. Sí, españoles; leed en vuestros antiguos códigos; leed las leyes de los godos; leed los concilios desde el de Coyanza; leed aquellos monumentos de vuestra gloria, de vuestra heredada nobleza y de vuestra fidelidad; y vereis las promesas más solemnes, los juramentos más sagrados, las execraciones más terribles y las deprecaciones más tiernas y más afectuosas sobre la salud de los Reyes, sobre su conservación, y por fin las maldiciones más horribles sobre los que atentan al quebrantamiento de unas obligaciones las más consoladoras y las más sagradas; pero sabed que si alguno se negase á estas maternales y pacíficas amonestaciones, sino concurriese con todo esfuerzo á que surtan el objeto á que se dirigen, caerá sobre su cuello la cuchilla ya levantada, soan cuales fuesen el conspirador y sus cómplices, entendiéndose tales los que olvidados de la naturaleza de su ser osaren aclamar, ó seducir á los incautos para que aclamasen, otro linaje de gobierno que no sea la Monarquía sola y pura, bajo la dulce égida de su legítimo Soberano, el muy alto, muy excelso y muy poderoso Rey el Señor Don Fernando VII, mi augusto esposo, como la heredó de sus mayores.»

El 30 de Noviembre se congregó el Regimiento general para dar posesión del empleo de Corregidor del Señorío á Don Juan Modesto de la Mota, Oidor de la Chancillería de Valladolid. En este nombramiento se suprimió el formulario acostumbrado en casos iguales, y no se fijó tampoco el tiempo de la duración del empleo, como se hacía antes, y como se hizo recientemente al nombrar á Grande Teniente general del Señorío.

Se acordó el 14 de Enero que acudiese el Síndico al tri-1833
bunal de justicia, proponiendo la nulidad del nombramiento

de Don Juan Bautista de Anitua, como segundo Diputado del bando oñacino, después de oída la opinión de varios letrados y de otros caballeros, porque resultaba que Anitua había tenido participación en remates de abastos públicos.

De acuerdo con el informe del Síndico, asesorado del Consultor primero, se resolvió el 15 guardar y cumplir la real cédula del Consejo del 4, por la cual se manda guardar la declaración del Rey, leída el 31 de Diciembre anterior, en presencia de gran número de personas calificadas, dando por nulo el decreto que se le arrancó por sorpresa en los momentos más graves de su enfermedad, por el que se derogaba la pragmática sanción de 29 de Marzo de 1830 sobre la sucesión regular á la Corona de España.

En vista de la exposición que elevó al Rey la Diputación en 24 de Agosto del año último, acerca del plan de iguala de los caminos del Señorío, se expidió el 4 de Febrero de este año una real orden, comunicada por el Ministro de Fomento, que es como sigue:

«El Rey N. S. se ha servido acceder á la petición que esa Diputación dirigió al Ministerio de Estado en 24 de Agosto del año próximo pasado, solicitando se igualen todos los pueblos de esa Provincia en el pago de los arbitrios destinados á obras de caminos, y para ello se imponga en general el derecho de cincuenta y seis maravedís en cántara de vino foráneo de pasto común, veinte y ocho en cántara de vino del país, y sesenta y ocho en verga de aguardiente, en los pueblos situados en carretera, y la cuarta parte en los que se hallen fuera de ruta. También se ha servido S. M. aprobar el reglamento que incluía V. S. para la aplicación de los citados arbitrios, haciendo extensivo á todos los caminos el arancel que rige para los portazgos establecidos de Bilbao á Pancorbo».

La Diputación general decretó en su virtud el 20 que se

guardase y cumpliase dicha real orden, imprimiéndola con el informe evacuado por la comisión permanente de caminos, los estados que acompañó, y la representación elevada el 24 de Agosto del año último; y que para proceder á la ejecución y cumplimiento de lo mandado, todos los pueblos del Señorío, á excepción de los de la Merindad de Durango y las Villas de su distrito, Bermeo, Balmaseda y Orozco, de conformidad con el reglamento aprobado, remitan á la secretaría de la Diputación, para el 30 del próximo Marzo, noticia de sus respectivos consumos en vino foráneo, chacolí y aguardiente, acreditándola, en cuanto fuese posible, con los productos quinquenales de arbitrios que tengan sobre los mismos ramos, en arriendo ó administración, ó con otras noticias parciales de su producción y extracción; manifestando al propio tiempo su deseo de encabezarse alzada, con las propuestas y condiciones necesarias al efecto, con arreglo á lo prescrito en los artículos tercero y cuarto del reglamento.

Comunicados al Síndico Pujana por acuerdo de la Diputación general el 7 de Marzo «los ejemplares impresos del testimonio de las actas de Cortes de 1789 sobre el restablecimiento de la antigua ley y costumbre inmemorial en la sucesión en la Corona de España, y de los dictámenes dados sobre este punto, cuyos documentos produjeron la real pragmática sanción de 29 de Marzo de 1830»; informó diciendo «que es de guardarse y cumplirse y circularse por vereda á todos los pueblos de este Señorío, en la forma acostumbrada.»

El decreto que dió la Diputación, en vista del informe del Síndico, asesorado por Loizaga, es como sigue: «Guárdese y cúmplase como lo dico el Síndico en su informe; reimprimase y circúlese á los pueblos de este Señorío en la forma acostumbrada, depositándose la real orden original

que antecede, y el ejemplar rubricado de las actas de Cortes de 1789, sobre el restablecimiento de la antigua ley y costumbre inmemorial en la sucesión directa á la Corona de España, en el archivo general de la Antigua de Guernica, y reservándose dos copias íntegras certificadas para el archivo provisional de San Nicolás de Bari de Bilbao y el de gobierno de la Diputación general».

Con oficio de 16 de Febrero pasó á la Diputación el segundo Cabo de Navarra, por ausencia de Llauder, un ejemplar de dicho testimonio, para que en el caso de que no se haya recibido directamente en el Señorío, se disponga su publicación y lectura, ya porque los documentos que comprende el ejemplar «son muy conformes con las leyes y Fueros de que goza ese benemérito Señorío, y ya por lo mucho que interesa á la paz y felicidad del Estado la sanción de una ley tan autorizada y razonable y tan antigua, y por el esmero con que debe apreciarse y respetarse una solemne declaración que lleva consigo la justicia, y que tiene por objeto los derechos del Rey y su legítima descendencia».

Se reunieron en Vitoria los comisionados de las tres Provincias Vascongadas los días 21, 22 y 23 de Marzo. Asistieron por Vizcaya los Padres de Provincia Don Antonio María de Ansótegui y Don José María de Jusué. En estas conferencias se acordó elevar al Rey la representación siguiente:

«SEÑOR: Vuestras MM. NN. y MM. LL. Provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, por medio de sus especiales comisionados reunidos según costumbre, P. A. L. R. de V. M. con el más profundo respeto hacen presente: que convencidas por la experiencia de muchos siglos de la imposibilidad de mantener su población en estas ásperas y desabridas montañas, sin el régimen foral que ha formado

las costumbres más caras del país, nutrido su aplicación, y alentado su industria, han mirado siempre con estremecimiento cuantas novedades pudieran perjudicar ó causar alguna alteración á sus Fueros, considerándolas como ruinosas á su población, funestas á su tranquilidad, y ofensivas á vuestro real servicio.—Uno de los proyectos que más han adelantado su irrupción ha sido, Señor, el de la habilitación del puerto de San Sebastián para el comercio de América. Concebido tal vez por el supremo Gobierno de V. M., y adoptado sin duda por vuestra muy cara y adorada esposa, la Reina nuestra Señora, con el designio de dar protección al comercio, que ha sido una de sus más constantes solicitudes en la época para siempre memorable de su mando maternal, se ha envuelto en el real decreto de 14 de Noviembre último, con condiciones que subvierten notoriamente los Fueros, derraman alarmas, combaten multiplicados intereses, oprimen el comercio general del país, y han puesto en inquieta agitación los ánimos de los naturales, á quienes sólo sostiene la confianza de que el corazón benéfico de V. M., nunca dará abrigo á disposiciones de consecuencias tan graves y peligrosas para sus leales y adictos vascongados, ni la ilustración y prudencia de su Gobierno querrá proponerlas.—La habilitación del puerto de San Sebastián ha entrado en la idea de unos pocos individuos de aquel comercio, que han creído tal vez alcanzar algún interés momentáneo con limitar las negociaciones de este ramo á sólo el punto de su domicilio, aunque obstruyendo y esterilizando todo el resto de las Provincias; y la circunstancia de ser promovida por habitantes del país, ha podido sorprender las benéficas intenciones de vuestro Gobierno, creyendo medida de fomento la que es en la realidad de ruina y desolación. El comercio de géneros coloniales, reducido á un verdadero monopolio en favor de San Sebastián, podría, si

fuese posible poner en ejecución el 14 de Noviembre en todas sus partes, proporcionar la evacuación de algunos pocos almacenes en las primeras semanas, al favor de la parálisis general, que experimentaría este ramo en todos los demás puntos y pueblos de las Provincias; más una especulación particular de esta naturaleza no puede servir de estímulo á los proyectos de adelantamiento que se conciben en el magnánimo corazón de V. M. para quien ni el mezquino fruto de algunos días puede prevalecer sobre el interés de los siglos, ni un pequeño lucro individual sobre las inmensas subsistencias de las masas.—Las Provincias, Señor, tienen propuesto á V. M. el único medio de fomentar en su distrito este artículo de comercio, y no pueden concebir cómo algunos habitantes de San Sebastián lo han contrariado, sustituyéndole una medida ruinosa, que en las tres Provincias se mira ya con cierta especie de sobresalto, tanto por causar una herida directa á sus Fueros, como por establecer en este artículo un monopolio que compromete los recursos de infinitas familias.—Las Provincias, Señor, en sus reverentes exposiciones de 14 de Enero de 1829 y 11 de Diciembre de 1830, propusieron á V. M. desde las Villas de Mondragón y Tolosa el único medio de alentar este tráfico, que más que otro alguno ha recibido las orueles impresiones de las revoluciones del siglo. El concilia las ventajas del país, y sin perjudicar en lo más mínimo á los ingresos de vuestro real erario, le constituye en estado de hacer una útil competencia al comercio extranjero, que en el día por los graves trastornos de nuestras relaciones con las colonias de Ultramar, se ha puesto en una situación ventajosa respecto de estos vuestros leales vasallos.—Las Provincias no han solicitado de V. M. más que ponerse al nivel de los extranjeros. Sólo han pedido para Bilbao y San Sebastián la condición de que gozan Burdeos y Bayona; han

pretendido que vuestro manto real acoja á los vascongados con el mismo favor con que se ha visto en caso de dispensar á los franceses.—Esta medida es la única que puede sostenerlos en estado de hacer una competencia útil al comercio extranjero; ningún perjuicio ocasiona á los intereses de V. M.; y ni puede reemplazarse con la habilitación del puerto de San Sebastián, impracticable en los términos en que se ha concebido, ni en las benéficas reglas de administración puede dejar de ser eficazmente recomendado, ni sufre impugnación sincera de buena voluntad.—El país por Fuero es libre en sus consumos, y se surte del extranjero sin ningún gravamen, así como el Reino de Navarra con el moderado derecho de tablas, consistente en una pequeña cantidad en carga. En vez de traer de Bayona, ó por su conducto, estos artículos, ¿qué daño, y á quién puede resultar de que se los proporcione por Bilbao y San Sebastián? Las leyes del comercio de América han variado esencialmente por causa de los gravísimos trastornos de aquel continente. Cuando su comercio era exclusivo en España, Bilbao y San Sebastián gozaban de este favor, de que carecía el extranjero, y las combinaciones de este ramo de Hacienda estaban sujetas á cálculos de distinta categoría. Las guerras y la revolución general del globo han mudado por necesidad la dirección de este tráfico; han habilitado á los extranjeros para ejercerlo directamente, al paso que han obstruído notablemente las vías de la metrópoli; y las consecuencias de esta diferente situación ejercen influencias decisivas en la cuestión de que se trata. Las Provincias Vascongadas las están palpando; y de esta convicción y desgraciada experiencia han dimanado las propuestas y solicitudes de progreso, que tienen anteriormente elevadas á Vuestra Majestad.—Las Provincias imploran en su comercio con las colonias la libertad de importación y exportación

que se dispensa á los extranjeros, satisfaciendo en la exportación los correspondientes derechos en vuestras reales aduanas de las colonias, y permitiendo introducir en los puertos de San Sebastián y Bilbao los frutos de aquellos países, á calidad de pagar los debidos impuestos en las aduanas de Cantabria, en el acto de su introducción en las Provincias interiores de la Monarquía.—Este es el último remedio contra los males que aquejan á las Provincias en este ramo; éste es el solo alivio de su comercio colonial; éste el que dispararía en gran parte la ventajosa posición del extranjero; el que daría á la marina mercante un impulso utilísimo; el que aumentaría hasta cierto punto los ingresos de vuestra real Hacienda, por las economías de la introducción en el interior, que contribuirían á la extensión de los consumos; y el que acrecentaría el entusiasmo de los vascongados en favor de vuestra real Persona, hasta el punto de sentir no haber podido hasta ahora derramar más sangre en su defensa; en medio de la constancia, del amor y lealtad sistemática de sus naturales, llevaría su resolución hasta el extremo de erigirse en templo de asilo contra toda posible tendencia de desorganización social, con que este siglo turbulento ha parecido empeñarse en ensangrentar su historia, necesitándose cada vez más prudencia en los directores de los destinos de los pueblos, y más preparación y fuerza de heroísmo en sus leales vasallos.—Dígnese V. M. consolidar esta grande obra, aceptando esta verdadera medida de progreso, y desechando la habilitación de San Sebastián, inverificable, funesta y repelida por el espíritu público del país, que sería sumamente lastimoso debilitarse, ó acaso pervertirse por este medio. Las Provincias podrían así prepararse á mayores servicios, y el justo y templado Gobierno de V. M. llevaría indudablemente con tan benéfico decreto la impresión de la verdadera y sólida

sabiduría, y derramaría sobre sus pueblos esperanzas sin límites. Las Provincias, Señor, no pueden en las cortas cláusulas de este papel dar á las funestas consecuencias de la habilitación en los términos en que se ha concebido, ni á los efectos felices del comercio libre, según se ha propuesto, toda la explicación y desenvolvimiento de que son ambos puntos susceptibles, tanto en sus relaciones económicas como en las políticas; pero la suprema ilustración y sabiduría de V. M. los comprenderá completamente, y quedará sin duda convencido de que sola la emulación ó falso cálculo puede contradecirlos. Las Provincias recurrentes, sin embargo, reservan dar mayor extensión á sus ideas en la audiencia que se les conceda, y piden reverentemente á V. M. para el caso de que desde ahora, y sin ulteriores explicaciones, no tuviese á bien desechar el proyecto de habilitación, estableciendo en su lugar el libre concurso en la forma insinuada. En esta atención—Suplican rendidamente á V. M. se digne dispensar á sus leales Provincias Vascongadas la protección que necesitan para consagrar nuevos servicios en obsequio de vuestra Corona, suspendiendo los efectos de la habilitación del puerto de San Sebastián, según se proyecta, como un contrafuero ominoso, y estableciendo en su lugar el comercio libre con las colonias, con la calidad de pagar los derechos de los géneros que se exportan en aquellas vuestras reales aduanas, y los de los frutos que se importan desde ellas en estas de Cantabria, á su ingreso en las contribuyentes, oyendo en todo caso á las Provincias sobre el punto de habilitación, si V. M. lo creyese todavía necesario. Así lo esperan de la soberana bondad de V. M., cuya preciosa vida conserve el Cielo los muchos años que esta Monarquía necesita». ¹

¹ La habilitación contra la cual reclaman los comisionados de las tres Provincias quedó en suspenso por aquel tiempo. Véase lo que sobre las

Al mismo tiempo dirigieron los exponentes otra instancia mucho más corta, pero con iguales razones, al Ministro de Estado, Presidente del Consejo de Ministros.

El Teniente general Grande, en funciones de Corregidor, dió un auto el 27, mandando circular una real orden del 16, dada por el Ministerio de Fomento, en vista de una exposición del Ayuntamiento de Cenicero, solicitando que se cumpla en el Señorío la real orden de 30 de Julio de 1816, recordada en otra de 5 de Febrero de 1831, sobre el libre tráfico y comercio de vinos. El Síndico Pujama decía en el informe que presentó acerca de este asunto, con acuerdo de Loizaga: que en la mayor parte de los pueblos situados sobre la costa de Vizcaya; á las dos márgenes del río Ibaizábal, en su curso desde la Anteiglesia de Begofia inclusive hasta su desembocadura y en el territorio de las Encartaciones, Balmaseda y Orduña, se prohíbe, bajo la denominación de cierra ó viedo, la introducción ó venta del vino foráneo hasta que se consuma el de su respectiva cosecha, en virtud de lo acordado por la Junta general celebrada so el arbol de Guernica en 3 de Julio de 1738, y de peculiares institutos ú ordenanzas municipales, algunas de las cuales se ha mandado observar, según tiene entendido el Síndico, por providencias judiciales y real carta ejecutoria. Parece, pues, indispensable el que se oiga instructivamente á todos los pueblos que tienen establecida la expresada cierra ó viedo del vino foráneo, y formado que sea el competente expediente, se sirva V. S. mandar pasarlo á las próximas Juntas generales de este Señorío, á fin de que con él pleno conocimiento de los antecedentes, y consultando el espíritu y letra de la ley cuarta, título treinta y tres de los Fueros,

diferencias de la Junta de Guipúzcoa con San Sebastián sobre asuntos mercantiles escribió Don Nicalás de Soraluca en el Tomo II de su *Historia general de Guipúzcoa*.

acuerde elevar á S. M. la representación que estimo conducente. El auto está dado de conformidad con el dictamen del Síndico.

El 22 de Abril declaró la Diputación, de conformidad con lo expuesto por el Síndico, con motivo de una real orden de 26 de Marzo anterior, sobre uso de armas, que á todo vizcaíno, por su originaria calidad de noble, compete el uso de armas de caza y de adorno de su persona; que el uso de las armas de guerra corresponde á los individuos de los cuerpos de paisanos armados, como cuerpos legales y encargados por el país, en virtud de sus Fueros, usós y costumbres, de la conservación del orden público y defensa del territorio; y que ni unos ni otros pueden hacer uso de las armas absolutamente prohibidas por las leyes; las cuales, así como las de guerra que obren en poder de personas no autorizadas para su uso con la licencia necesaria, deberán entregarse en Bilbao en la secretaría de policía, y en los demás pueblos del Señorío á los Jueces respectivos encargados del ramo en ellos, en el término de ocho días señalados por el bando que se publica, bajo las penas impuestas por el mismo á los contraventores.

En una real orden comunicada por la Superintendencia de policía, á que se dió el uso el 23, sobre la averiguación del paradero de Don Edmundo Shelly se dice que se ha sabido que un tal Olózaga, á quien como amnistiado se ha expedido también pasaporte por la Embajada de S. M. en París, número 476 para Madrid, está en relaciones con el partido llamado carlista.

El segundo Cabo de Navarra trasladó á la Diputación el 24 una real orden de 6 de Febrero último, por la que se separaba la Capitanía general de Guipúzcoa del Virreinato de Navarra, al cual se había unido en 26 de Octubre de 1830, volviendo á quedar independiente como estaba antes.

Don Federico Castañón, Comandante general de Guipúzcoa, quedaba encargado de esta Capitanía general.

El 7 de Mayo se dirigió el nuevo Capitán general de Guipúzcoa desde San Sebastián á la Diputación del Señorío, en un oficio en que dice que respeta y acata los Fueros y privilegios que dignamente goza «el Señorío, confirmados por el Rey N. S. y sus augustos predecesores, y concedidos por méritos de antigüedad y heróicos servicios de muy allende,» y se anuncia á la representación de Vizcaya como Comandante general de Guipúzcoa. El objeto principal del oficio es inculcar el reconocimiento de la Princesa Doña María Isabel como heredera de la Corona, «siendo las bases de nuestra existencia política el señorío y la soberanía concedida por Dios á la familia reinante,» y bajo estos principios confia Castañón en tener el auxilio de la Diputación, «en cualquier caso en que los enemigos del reposo, y tal vez de nuestro Rey y Señor osasen disponer en las tinieblas trabajos subversivos, ó de otra manera seducir incautos á la vagancia del pensar y al crimen, que aun cuando nulos é insignificantes en sus resultados, harán tibia mi superior autoridad sino pudiese en juego las órdenes repetidas de que estoy autorizado, y los muchos elementos para ejecutarlas, y destruir cualquiera opinión contraria á los principios expuestos, por reservados que se procuren hacer tamaños extravíos.» Vuelve á extenderse luego en las consideraciones sobre la ayuda que espera de la Diputación para mantener el orden, en beneficio de los intereses públicos, conciliando el mejor servicio del Rey y el no ofender las prerrogativas y Fueros, que tan dignamente goza este Señorío.

Castañón remitió el 11 varios ejemplares de una alocución que dirigía á los habitantes de las Provincias Vascongadas. Empieza diciendo que «los Fueros, privilegios y exenciones que justamente poséis, forman la historia de

vuestros continuos esclarecidos servicios á los Soberanos, y el argumento más fuerte del distinguido carácter de lealtad y fidelidad con que siempre os habéis señalado». Asegura que la aplicación y cultura de los vascongados los aleja de los errores que pueden llevar á opiniones contrarias al Rey y al Estado, y que hará todo lo necesario para proteger haciendas y personas, puesto de acuerdo con las respectivas Diputaciones, y «haré uso de las importantes facultades con que me hallo revestido para el caso necesario, y no despreciaré tampoco cualquier otro medio que se me proporcione al efecto, no siendo el de las delaciones anónimas, y otros de su clase, los cuales, como arriesgados, rara vez útiles, y los más atentorios contra la inocencia, quedan enteramente proscritos en mi distrito. Los malos solos podrán temer; pero ¡ay de ellos! ¡el golpe temible de la ley caerá irremisiblemente sobre su cabeza!» Espera que todos los nobles y leales habitantes escucharán sus consejos, «siendo ahora, como en otros tiempos, modelo y ejemplo de acrisolada fidelidad.»

La conducta de Castañón se ajustaba, sin duda, á las instrucciones que tenía recibidas del Gobierno, pues no mucho tiempo antes, en 7 de Abril, el Ministro de la Guerra explicaba á los Capitanes generales el programa del Gobierno en estos términos: «derechos de la soberanía en su plenitud para que el poder real tenga toda la fuerza necesaria para hacer el bien; derechos de sucesión asegurados á la descendencia legítima y directa del Rey nuestro Señor, en conformidad de las antiguas leyes y usos de la nación; á derecha ó izquierda de esta línea no hay más que abismos, y en los que derrumben en ellos á los españoles no se debe ver sino enemigos de la Patria.»¹ Ya en este

¹ *Historia de la vida y reinado de Fernando VII de España*. Tomo III. Página 392.

tiempo se hallaba el Infante Don Carlos en Portugal, y se había negado á jurar á Doña María Isabel por Princesa de Asturias, en aquella memorable correspondencia que siguió con el Rey su hermano; advertíanse por todas partes señales de inquietud y malestar; para nadie era dudoso, que al fallecimiento del Monarca reinante, á más tardar, sobrevendrían en España gravísimos y trascendentales acontecimientos.





CAPÍTULO VI

El 4 de Julio se congregaron las últimas Juntas generales que han deliberado en Vizcaya bajo la plenitud del régimen foral. Ratificó en ellas Don Juan Modesto de la Mota el juramento que tenía prestado el 30 de Noviembre del año último, y exhibió asimismo el documento que justificaba sus cualidades de caballero noble hijodalgo, como lo había prometido al tomar posesión del Corregimiento.

Dentro de la iglesia de la Antigua, y después de haber ocupado los vocales de la Junta sus respectivos asientos, pronunció el Corregidor el discurso siguiente.

«Habiéndome agraciado la piedad del Rey nuestro Señor (Q. D. G.) con el Corregimiento de este M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya, vengo por primera vez á presidir sus Juntas generales, cuya memoria y la del árbol de Guernica, bajo el cual se celebran, son tan antiguas como la historia misma del país vascongado.

»El juramento que presté al tomar posesión de mi destino y acabo de ratificar, de guardar y hacer guardar sus Fueros y privilegios, franquezas y libertades, buenos usos y costumbres, es tan análogo á los sentimientos de mi corazón

que nadie debe temer que por mi parte deje de observarse estricta y religiosamente. Los naturales de este ilustre suelo cuentan además con que hallarán en mí un fiel dispensador de la justicia, un seguro apoyo del honor y de la virtud, y un protector celoso de cuanto sea útil á su industria, y conduzca á su bienestar general y particular.

»Encargado especialmente por S. M. para conservar la unión y la paz, sin las cuales no podría prosperar el Señorío, miro como uno de mis primeros deberes el cuidar de que por ningún título se turben; y me lisonjeo con la fundada esperanza de que jamás llegará el caso de haber de desplegar los recursos de la autoridad, que S. M. se ha dignado depositar en mis manos, para mantener inalterables el orden y la pública tranquilidad.

»V. S. S. señores Padres de Provincia, y señores apoderados, que han merecido la confianza de los pueblos á quienes representan, son los que pueden y deben cooperar con su ejemplo y conducta, con sus razones y discursos, y no dudo que cooperarán eficazmente, á que se logren mis buenos deseos, que no son otros sino los que animan á todo vizcaíno amante de la felicidad de su país.

»Yo me complazco con la anticipada satisfacción de que las presentes Juntas corresponderán á la idea que tengo formada de semejantes reuniones, en que los pueblos de una Provincia privilegiada, hermanados por unas mismas leyes, deben armoniosamente tratar de sus intereses comunes.

»Espero, pues, que á la discusión de los puntos propuestos en la convocatoria que he circulado por vereda, y á la de los demás que se ofrezcan durante las actuales sesiones, asistirá el espíritu conciliador de moderación, propio de todo cuerpo circunspecto y deliberante; y que la ciega pasión, la parcialidad injusta y el interés personal no profana-

rán con los ecos de sus nefandas voces el recinto de este santuario venerable.

»De este modo, los decretos que en él se acuerden saldrán arreglados á equidad, se dirigirán al mejor servicio de ambas Majestades divina y humana, redundarán en utilidad y beneficio de este noble solar, V. S. S. habrán cumplido dignamente con su misión, y será para mí sumamente satisfactorio el cargo de la presidencia, que tengo el honor de desempeñar á nombre de nuestro augusto Monarca, cuya real munificencia es tan generosa para Vizcaya como debe ser acendrada y grande la lealtad y gratitud de todos sus hijos y moradores».

Se tradujo verbalmente al idioma vascongado este discurso para completa inteligencia de los que no poseyesen el habla castellana, y se mandó imprimirlo y repartirlo á los apoderados, dando gracias al Corregidor por la sincera y grata manifestación que hace en él de sus sentimientos en favor del país.

Se nombraron en seguida la comisión revisora de poderes, compuesta de dos individuos por cada Merindad, y otra comisión, compuesta de los Padres de Provincia y el Consultor para que examine los poderes de aquéllos.

Se leyeron el 5 los informes de ambas comisiones, y un voto particular presentado por escrito por uno de los señores que componen la primera de ellas.

La comisión revisora proponía: que no se admitiesen más que dos personas en los poderes de Pedernales, Mugica, Urdúliz y Górliz, que venían otorgados en favor de tres; que se admita por esta vez á los apoderados que hayan sido nombrados por dos ó más pueblos, y conserven uno de los poderes, sustituyendo los demás, por no perjudicar á los pueblos, dejándolos sin representación por un hecho independiente de su voluntad, pero que la persona nombrada por

dos ó más pueblos, deberá aceptar en lo sucesivo el nombramiento que más le convenga, en cuanto llegue á su noticia; que en cuanto al poder conferido por los tres Concejos de Somorrostro en 23 de Junio, y renovado el 29, sobre que hay recurso pendiente ante el Corregidor, la comisión no se halla en estado de poder examinar el fondo de la cuestión judicial, ni le compete el calificar los procedimientos de tribunales, pero teniendo entendido que fué otorgado el segundo poder, después de haberse suscitado competencia por el Alcalde de los tres Concejos, entiende que no puede surtir efecto alguno este segundo poder, mientras no sea dirimida la competencia por el Juez mayor de Vizcaya.

El autor del voto particular, Don Manuel José de Epalza, disenta de sus colegas, en cuanto á la admisión de los poderes sustituidos, por esta vez, fundándose en que no es la Junta general causante de los perjuicios que se irroguen á los pueblos por quedar sin representación hasta el otorgamiento de nuevos poderes, y proponía que se declarasen nulas tales sustituciones, como hechas por personas, ó inhábiles para transcribir las facultades que recibieron, ó por el contrario inhábiles para recibir las que transmitieron. También disenta Epalza de la mayoría de la comisión, en cuanto á los poderes de los tres Concejos, creyendo que se debían declarar insuficientes ambos, dejando á los Concejos la facultad de enviar á la Junta general su representante legalmente elegido.

La comisión calificativa de los poderes de los individuos que componían la comisión revisora, expuso: que no podía reputar por ilegal ó ineficaz el poder otorgado por la Antieclesia de Abando á favor de Don Francisco Antonio de Gana, á pesar de la reclamación de uno de los Fieles; que aunque el apoderado de Galdames Don Juan José María de Yandiola, goza sueldo del Señorío, no se halla en el caso de

tener que responder de sus operaciones como funcionario público de Vizcaya, por ser un primer Consultor jubilado, y le reputa por consiguiente por legítimo apoderado, lo mismo que á Gana y á los demás individuos que componen la comisión de revisión general de los poderes.

La Junta, después de una madura y detenida discusión, acordó que prescindiendo de las razones en que se funda el voto particular, se tengan por decretos los informes de ambas comisiones. Los apoderados de Portugaleta y de Ibárruri protestaron este decreto en cuanto á la aprobación del primer poder y á la nulidad del segundo, otorgados por los tres Concejos de Somorrostro, y en cuanto á la declaración de la validez de las sustituciones hechas por sujetos que reunieron varios poderes.

Suscitadas en seguida algunas dudas sobre el modo con que los pueblos de Pedernales, Mugica, Urdúliz y Górliz deberán hacer la nueva designación de los que han de continuar representándolos en estas Juntas, por la cláusula informal que contienen sus poderes de autorizar á tres personas, en lugar de una ó dos que señala la convocatoria; «y habiéndose prolongado con demasía la discusión que promovió en la Junta este incidente»; el Corregidor, «con el deseo de cortarla de una vez, y considerando como un acto de mera deferencia la circunstancia propuesta por la comisión, para que los dos de los tres apoderados de dichos pueblos, que se presentaron los primeros en la Junta, continuasen concurriendo á ella; declaró nulos y de ningún valor los expresados poderes, mediante el vicio legal de que adolecen; y mandó que reuniéndose desde luego los Ayuntamientos respectivos procediesen á la elección de una ó dos personas de su confianza que los representen, conforme lo prescribe la convocatoria».

Don José Gregorio de Landaburu renunció el poder que

se le había conferido por Miravalles, y optó por representar á Amoroto, por donde fué también nombrado.

Se procedió después á la lectura de los dos proyectos de reglamento formados por la Diputación, en virtud de acuerdo del Regimiento general, que estaban comprendidos en la convocatoria, concerniente el primero al régimen interior de las Juntas generales, y el segundo al modo y forma de hacerse las elecciones de los individuos del Gobierno universal del Señorío, cuyo tenor es el siguiente:

«ILUSTRÍSIMO SEÑOR. La Diputación general presenta á la deliberación de V. I. el proyecto de reglamento interior de las Juntas generales de Vizcaya, que se acordó formar por el Regimiento general celebrado en 21 de Octubre de 1831. El origen del congreso vizcaíno y las reglas tradicionales sobre su convocación y el método de su reunión, se pierden en la oscuridad de los tiempos. Al través de los siglos se ha trasmitido de una en otra generación este derecho consuetudinario, y servirá de monumento escrito, si mereciese la aprobación de V. I.

»Artículo 1.º Las Juntas generales ordinarias de Vizcaya se celebran cada dos años en el árbol de Guernica, quedando á la discreción de la Diputación general el designar el día para su reunión desde primero de Enero hasta 15 de Julio del año bienal.

»Art. 2.º La Diputación general acuerda por una acta la convocación para las Juntas generales ordinarias, y los puntos que han de someterse á su deliberación, expidiéndose la circular por el señor Corregidor á todos los pueblos de voto en Juntas.

»Art. 3.º El Regimiento general, que se compone de todos los individuos de la Diputación general, de los Regidores y Padres de Provincia, acuerda la convocación de las Juntas generales extraordinarias, designa el día de su re-

unión so el árbol de Guernica, y los puntos especiales que motivan su celebración, expidiéndose la circular á todos los pueblos de voto en Juntas por el señor Corregidor.

» Art. 4.º Las foligresías erigidas modernamente en pueblos independientes, y tres de las Anteiglesias de la Merindad de Durango, no tienen voto ni concurren á las Juntas generales.

» Art. 5.º Cada uno de los demás pueblos de Vizcaya es representado en las Juntas generales por uno, ó cuando más por dos apoderados, y sin que entrambos tengan más que un solo voto.

» Art. 6.º Con la convocatoria se remitirán á cada pueblo de voto en Juntas dos ejemplares impresos de poderes, y en los cuales se extenderá la escritura matriz, y la primer copia del poder otorgado por el Ayuntamiento á favor del uno ó dos apoderados que nombrase para Juntas.

» Art. 7.º Para ser apoderado en Juntas generales se requiere la edad de veinte y cinco años cumplidos, ser natural de este Señorío y de oriundez vizcaíno, ó avecindado en alguno de los pueblos de Vizcaya, habiendo hecho constar previamente en debida forma su limpieza de sangre y nobleza.

» Art. 8.º Los empleados y dependientes del cuerpo universal de Vizcaya, que gocen sueldo, no pueden representar á pueblo alguno en las Juntas generales.

» Art. 9.º Ningún apoderado puede reunir la representación de dos ó más pueblos en las Juntas generales, y elegirá el único poder á que debe limitarse, sin poder sustituir ni hacer uso alguno del otro poder.

» Art. 10. Los apoderados harán la entrega de sus poderes á la Diputación general en el solío de piedra sillería situado á campo raso so el árbol de Guernica, por el orden de antigüedad en que hasta ahora lo han ejecutado y se anota á continuación.

• Mundaca, Pedernales, Busturia, Murueta, Forua, Luno, Mugica, Arrieta, Mendata, Arrazua, Ajánguiz, Ereño, Ibaranguelua, Arteaga, Cortézubi, Nachitua, Ispaster, Bedarona, Murélagua, Nabárniz, Guizaburuaga, Amoroto, Mendaja, Berriatua, Cenarruza, Arbácegui, Jemefn, Echevarría, Amorebieta, Echano, Ibárruri, Gorocica, Baracaldo, Abando, Densto, Begofia, Echévarri, Galdácano, Arrigorriaga, Arrancudiaga, Lezama, Zamudio, Lujua, Sondica, Erandio, Lejona, Guecho, Berango, Sopelana, Urdúliz, Barrica, Górliz, Lemóniz, Gatica, Lauquéniz, Maruri, Morga, Munguía (Anteiglesia), Gámiz, Fica, Baquio, Frúniz, Meñaca, Lemona, Yurre, Castillo y Elejabeitia, Ceánuri, Dima, Santo Tomás de Olabarrieta, Aránzazu, Ubidea, Derio, Bermeo, Bilbao, Durango, Orduña, Lequeitio, Guernica, Balmaseda, Plencia, Portugalete, Marquina, Ondárroa, Ermua, Elorrio, Villaro, Munguía (Villa), Larrabezua, Miravalles, Guericáiz, Rigoitia, Ochandiano, Lanestosa, Gordejuela, Carranza, tres Concejos, cuatro Concejos, Güesios, Trucios, Galdames, Sopuerta, Arcentales, (vienen luego ocho Anteiglesias de la Merindad de Durango, en blanco), el Valle de Orozco.

• Art. 11. Al fallecimiento del Rey nuestro Señor se convocará la Junta general, la cual concurrirá en cuerpo á las reales exequias fúnebre en la iglesia parroquial de Santa María de la Villa de Guernica, y el inmediato día á la proclamación so el árbol de Guernica, alzándose el pendón, y anunciándose al nuevo Señor de Vizcaya por el Stádico en turno de este Señorío.

• Art. 12. Los señores Corregidores, que concurren por primera vez á presidir las Juntas generales, ratificarán en el mismo solio so el árbol de Guernica, antes del acto de la entrega de poderes, el juramento prestado al tomar posesión, prometiendo guardar, cumplir y observar inviolablemente los Fueros, franquezas, libertades, exenciones, prerrogati-

vas, buenos usos y costumbres de este Señorío de Vizcaya, sin ir contra ellos en manera alguna, ni permitir su contravención.

»Art. 13. Concluida que sea la entrega de poderes, se celebrará una misa rezada, así como en todos los demás días que que duren las sesiones de Juntas, en el altar que existe á la testera del antiguo salón de la Antigua de Guernica, concurriendo la Diputación general y los apoderados de los pueblos.

»Art. 14. Después de misa saldrán todos los concurrentes, y colocada la Diputación general á la puerta principal del salón, llamará el Secretario de gobierno por el expresado orden de antigüedad á todos los pueblos de voto en Juntas, y cuyos apoderados entrarán según les fuere llamando,

»Art. 15. La Diputación general se sentará en la presidencia.

»Art. 16. Los primeros asientos de distinción de los dos costados inmediatos á la mesa de la presidencia, son destinados para los Padres de Provincia y Consultores.

»Art. 17. Los apoderados de los pueblos ocupan sin prelación alguna los demás asientos en que gusten colocarse, según fueren entrando.

»Art. 18. La Diputación general concurrirá con vestido de ceremonia á las Juntas generales.

»Art. 19. Los Padres de Provincia, Consultores y apoderados usarán del traje que gusten.

»Art. 20. El corredor superior del salón queda abierto para el público durante la celebración de Juntas generales.

»Art. 21. Las sesiones de Juntas generales principian á las nueve de la mañana, y continúan por cuatro horas, mientras hubiere puntos en discusión ó expedientes pendientes.

»Art. 22. Vizcaya tiene dos clases de divisiones: la primera, que es puramente electoral, para nombramiento en cada bienio de señores Diputados generales, Regidores, Síndicos y Secretarios de justicia, consta de los dos bandos ofiicino y gamboino, á los que se hallan incorporados por mitad todos los pueblos de este Señorío. La segunda clase es política, bajo la denominación de Merindades, las que han ejercido en las Juntas generales el derecho de nombrar las comisiones.

»Art. 23. Reunidos los apoderados de los pueblos dentro del salón, se procederá en la primera sesión á convocarlos por Merindades, según el orden de las siguientes nueve divisiones políticas de Vizcaya.

»Uribe, Busturia, Arratia y Bedia, Marquina, Zornoza, Villas y Ciudad, Encartaciones, Durango y Orozco.

»Art. 24. Los apoderados de los pueblos que componen cada una de las expresadas nueve divisiones políticas de este Señorío, se retirarán inmediatamente á las piezas contiguas al salón, y nombrarán un individuo por Merindad para la formación de la comisión de poderes.

»Art. 25. Los Padres de Provincia que concurriesen á las Juntas, y no estuviesen comprendidos en la comisión acordada por el precedente artículo, calificarán la legítima representación de los individuos de la de revisión general de poderes.

»Art. 26. Con la publicación del nombramiento por Merindades de los nueve individuos, que han de componer la comisión de poderes, se levantará la sesión del primer día.

»Art. 27. Por el mismo orden de Merindades se procederá al nombramiento de la comisión de revisión de cuentas, á luego de instalada en el inmediato día la Junta general, y al de cuantas comisiones se acuerde nombrar en la misma ó siguientes sesiones.

»Art. 28. La Diputación general designa el local y la hora para la reunión de las respectivas comisiones.

»Art. 29. Las comisiones pueden pedir á la contaduría, tesorería y secretaría de gobierno los antecedentes que estimen oportunos, y llamar cuando tuvieren por conveniente al primer Consultor para oír su dictamen.

»Art. 30. Los individuos de comisiones, que no se conformaren con el voto de la mayoría, deberán suscribir el informe de ella, ó presentar otro por escrito, fundando su opinión particular.

»Art. 31. La comisión de revisión de poderes presentará su informe al abrirse la segunda sesión, y los apoderados de los pueblos entrarán en la deliberación, y aprobarán todos los poderes ó rechazarán los que estimen tachables, por las reglas prescritas en los artículos quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno.

»Art. 32. Con la declaración de ser bastantes todos ó las dos tercias partes de los poderes, y legítimos los apoderados, á cuya favor se hallen otorgados, quedará instalada la Junta general.

»Art. 33. La Junta general principiará y seguirá las discusiones por el orden designado en la convocatoria, y abrirá siempre la sesión con la lectura del acta del día anterior, la cual, después de aprobada, deberá rubricarse por los señores Corregidor, Diputados generales y Síndicos, y autorizarse por el Secretario de gobierno.

»Art. 34. Después de haber deliberado y acordado sobre los puntos de convocatoria, tomarán en consideración las Juntas generales ordinarias los expedientes y negocios que presentase la Diputación general, y también examinarán y resolverán las proposiciones que hiciesen los apoderados, si las hubiesen admitido á discusión.

»Art. 35. No se dará cuenta en las Juntas generales de

reclamación ó exposición alguna de pueblos corporaciones ó particulares, que no haya sido presentada á su deliberación por la Diputación general, después de formado el correspondiente expediente instructivo.

»Art. 36. Se dará principio, tanto en la lectura de expedientes, como en los discursos, en idioma castellano, y se continuará en el vascongado, hasta que todos los apoderados queden suficientemente enterados de los asuntos que se ventilen.

»Art. 37. En las discusiones no se interrumpirá al que estuviere hablando, sino para rectificar en breves palabras algún hecho, ó llamarle al orden, si se extraviase notablemente de la cuestión, ó faltase á los principios de urbanidad ó decoro público.

»Art. 38. Cuando dos ó más apoderados quisiesen tomar á un mismo tiempo la palabra, designará el señor Presidente el orden gradual en que hayan de hablar.

»Art. 39. Los Padres de Provincia que concurriesen sin poder, tomarán la parte que gusten en las discusiones, para ilustrar con sus conocimientos á la Junta general, pero sin derecho á votar ni protestar las resoluciones.

»Art. 40. Concurrirá el primer Consultor á todas las sesiones de Juntas generales para dar noticia de todos los antecedentes y manifestar su opinión en los asuntos sobre que fuese preguntado, y siempre que advirtiese que se propone alguna cosa opuesta á los Fueros y reglamentos especiales del Señorío.

»Art. 41. El segundo Consultor concurrirá también á las sesiones para las que fuese llamado por orden especial de la Junta general.

»Art. 42. Concluída la discusión del punto en cuestión, se procederá en seguida á la resolución, y pareciendo dudosa la pluralidad, por excitación de cualquier apoderado,

mandará el señor Presidente proceder á la votación, y poner por escrito en idioma castellano y vascongado las proposiciones ó preguntas sobre que ha de recaer.

»Art. 43. Para la votación serán llamados los apoderados, por el orden de antigüedad de sus pueblos, á la mesa de presidencia, donde en voz que pueda ser oída de todos los individuos de la Diputación general, leerá el Secretario las proposiciones ó preguntas á cada apoderado, dándole las explicaciones que pidiere para su mayor inteligencia.

»Art. 44. Cuando discordaren los dos apoderados de un mismo pueblo, queda ineficaz y ahogado su voto.

»Art. 45. Concluída que sea la votación, leerá su resultado el señor Presidente, formando acuerdo lo que hubiere votado la mayoría.

»Art. 46. Los apoderados que hubieren votado contra lo acordado, tienen derecho de protestar hasta que se rubrique el acta, pero no se les admitirá exposición alguna por escrito, en que expliquen ó funden su protesta.

»Art. 47. Al procederse á la lectura del acta del día anterior, no se permitirá abrir discusión sobre revocación, restricción ó ampliación de lo acordado, limitándose tan sólo á examinar la inexactitud de la redacción ó la impropiedad del lenguaje.

»Art. 48. Durante la celebración de las Juntas generales ordinarias estarán de manifiesto las cuentas del tesorero general de este Señorío, no sólo para la comisión de revisión, á la cual compete informar sobre ellas, sino también para cuantos apoderados quieran examinarlas.

»Art. 49. Compete exclusivamente á la Junta general el nombrar en las vacantes, á pluralidad absoluta de votos, los empleos de Consultores, Secretario y archivero de gobierno, contador, tesorero, y todas las plazas de oficiales de gobierno, contaduría y demás oficinas, cuyos sueldos se pagan por

la tesorería general del Señorío, conservándose la escala prescrita por el reglamento de oficinas.

»Art. 50. Es igualmente privativo de la Junta general el comisionar, á pluralidad absoluta de votos, al individuo que por su inmediato domicilio y amor al país quiera encargarse, como hasta ahora, de tener en su poder las llaves y velar por la custodia y conservación de los documentos que obran en el archivo general de la Antigua de Guernica.

»Art. 51. Resueltos que sean todos los puntos designados en la convocatoria, y los expedientes y proposiciones que hubiesen sido admitidos á discusión, se procederá á sacar, por suerte rigurosa, tres pueblos del bando oñacino, y otros tres del gamboíno, con cuyo acto quedan disueltas las Juntas generales ordinarias, pero sin que se levante la sesión hasta que se halle extendida, y sea aprobada y rubricada el acta del último día.

»Art. 52. Con la resolución del último punto de convocatoria quedan disueltas las Juntas generales extraordinarias, siguiendo en el orden de su reunión, deliberaciones, comisiones y votaciones el mismo método que en las ordinarias.»

«ILUSTRÍSIMO SEÑOR: La Diputación general presenta á la deliberación de V. I. el proyecto de reglamento de elecciones para el Gobierno universal de este M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya, que se acordó formar por el Regimiento general celebrado en 21 de Octubre de 1831; tanto en el método de elegir como en las cualidades y circunstancias que deben reunir las personas elegibles, se ha procurado atemperarse á la práctica vigente, elevando á derecho escrito lo que ha consagrado el uso, si mereciese la aprobación de V. I. el siguiente proyecto:

»Artículo 1.º El derecho electoral para el nombramiento de Diputados generales, Regidores, Síndicos y Secretarios

de justicia de Vizcaya, compete por iguales partes á sus dos bandos oñacino y gamboíno.

»Art. 2.º Los pueblos que componen el bando oñacino son los siguientes:

»Mundaca, Axpe de Busturia, Forua, Lano, Ugarte de Mugica, Libano de Arrieta, Ispaster, Bedarona, Murélagu, Navárniz, Guizaburuaga, Mendeja, Cenarruza, Jemofa, Ibárruri, Gorocica, Deusto, Lezama, Sondica, Lujua, Erandio, Lejona, Guecho, Berango, Sopelana, Urdúliz, Barrica, Górliz, Lemóniz, Gatica, Lauquíniz, Maruri, Basigo de Baquio, Morga, Fica, Frúniz, Meñaca, Mendata, Bermeo, Bilbao, Lequeitio, Plencia, Portugalete, Rigoitia, Ermua, Guerricáiz, Gordejuela, Güeñes, tres Concejos, Arcentales, Galdames. (Vienen luego cuatro Anteiglesias de la Merindad de Durango en blanco.)

»Art. 3.º Los pueblos que componen el bando gamboíno son los siguientes:

»Pedernales, Arrazua, Cortózubi, Amoroto, Berriatúa, Arbácegui, San Andrés de Echevarría, Amorebieta, Echano, Abando, San Esteban de Echevarri, Galdácano, Lemona, Arrigorriaga, Zamudio, Arrancudiaga, Munguía (Anteiglesia), Gámiz, Yurre, Aránzazu, Ibarranguelua, Gautégui de Arteaga, Castillo y Elejabeitia, Ceánuri, Dima, Santo Tomás de Olabarrieta, Ubidea, Murueta, Ajánguiz, Nachitua, Baracaldo, Begoña, Ereño, Derio, Durango, Orduña, Marquina, Balmaseda, Ondárroa, Elorrio, Villaro, Villa de Munguía, Miravalles, Ochandiano, Larrabezúa, Guernica, Lanestosa, cuatro Concejos, Carranza, Trucíos, Zalla, Sopuerta, (otras cuatro Anteiglesias de la Merindad de Durango en blanco), Orozco.

»Art. 4.º Los Diputados generales, Regidores, Síndicos y Secretarios de justicia se renuevan en su totalidad cada dos años el día 31 de Julio.

»Art. 5.º Las Juntas generales ordinarias que se convoquen en el año bienal (desde primero de Enero hasta el mes de Julio inclusive) procederán el último día de sus sesiones á sacar, por suerte rigurosa, tres pueblos electores del bando oñacino y otros tres del gamboino.

»Art. 6.º En los apoderados de los seis pueblos que hubiesen salido en suerte, queda refundido todo el derecho electoral de sus respectivos bandos para el nombramiento de Diputados generales, Regidores, Síndicos y Secretarios de justicia.

»Art. 7.º Los apoderados de los pueblos electores podrán llevar al acta secreta de la elección un socio por cada pueblo, á fin de que sin participar del derecho electoral los instruyan sobre la calidad de las personas elegibles. Se retirarán á continuación todos los electores del bando oñacino con sus socios á una pieza inmediata reservada, donde después de conferenciar recíprocamente formarán sus respectivas listas, y entrarán en el salón á presentarlas en la mesa de la presidencia.

»Art. 8.º Con el acto del sorteo quedan disueltas las Juntas generales ordinarias, y los apoderados de los seis pueblos electores se reunirán la misma tarde en el salón de Juntas en sesión secreta, bajo la presidencia de la Diputación general, y hora que se les designe.

»Art. 9.º Verificado el sorteo de los pueblos electores, no puede ser revocado el poder de los que respectivamente hubiesen representado en el acto del encantamiento.

»Art. 10. Antes de proceder á la propuesta de candidatos, prestarán por su orden los electores representantes de los bandos oñacino y gamboino el juramento de hacer fiel y legalmente la elección en personas idóneas y capaces, que celen y cuiden del bien universal de este Señorío, y de la íntegra conservación de sus Fueros, franquezas, libertades,

exenciones, prerrogativas, buenos usos y costumbres, sin que para ello los mueva pasión ni interés alguno diverso del procomunal de Vizcaya.

»Art. 11. Leída la lista de elegibles para Diputados generales, y no oponiéndoseles tacha que se repute legítima, por el señor Corregidor Presidente, se pondrán los nombres de los candidatos dentro de bolas de una exacta igualdad, y colocándolas en un cántaro cerrado, se voltearán á presencia de la Diputación general y electores, leyéndose por el señor Presidente los nombres contenidos en las cédulas que fuesen saliendo.

»Art. 12. Por el mismo orden se procederá á la formación de listas, encantaramiento y sorteo para Regidores, Síndicos y Secretarios de justicia del bando oñacino.

»Art. 13. Concluída que sea la elección del bando oñacino, se procederá en igual forma por los electores del bando gamboíno á la formación de listas, encantaramiento y sorteo para igual número de Diputados generales, Regidores, Síndicos y Secretarios de justicia.

»Art. 14. Los candidatos que habiendo sido propuestos por el bando oñacino quedasen encantarados, sin haberles tocado extracción alguna, no podrán ser boqueados por el bando gamboíno.

»Art. 15. La elección ha de recaer en tres Diputados generales, tres Síndicos, y tres Secretarios de justicia por cada bando, entrando sólo en ejercicio el que en cada clase hubiese salido el primero en suerte, y quedando los otros dos de suplentes suyos por el orden de extracción.

»Art. 16. Los representantes de cada pueblo elector proponen á dos individuos elegibles para cada una de las tres clases de Diputados generales, Síndicos y Secretarios de justicia, ó un solo candidato en dos cédulas ó suerte duplicada.

«Art. 17. Se nombrarán también por cada bando tres Regidores electos y otros tres en suerte.

»Art. 18. Cada pueblo elector nombra sin suerte un Regidor que se llama electo, y tres individuos para encantarlos, quedando de Regidores los tres primeros que salgan de los nueve sorteados.

»Art. 19. Los apoderados de cada pueblo elector no pueden votarse á sí mismos, ni el uno al otro coapoderado, pero podrán ser propuestos ó boqueados por los representantes de los otros pueblos electores.

»Art. 20. Se prohíbe el proponer y elegir para los empleos de Diputado general, Regidor y Síndico á los que se hallen comprendidos en cualquiera de los casos siguientes:

»1.º Los menores de veinte y cinco años.

»2.º Los que no son naturales de este Señorío.

»3.º Los que no siendo vizcaínos originarios hayan dejado de acreditar su limpieza de sangre y nobleza.

»4.º Los que no se hallan domiciliados en Vizcaya.

»5.º Los que hayan ejercido ó ejerzan algún oficio mecánico.

»6.º Los que vendan por menor, ó hayan vendido seis años antes del sorteo toda clase de géneros ó mercaderías, que no sean de sus rentas, cosecha ó fabricación.

»7.º Los que habiendo concursado hubiesen pedido quita ó baja de sus deudas, hasta que hayan reintegrado en su totalidad á todos sus acreedores.

»8.º Los que tengan cualesquiera de las tachas designadas, ó que se designaren por las leyes para la opción á los oficios municipales.

»Art. 21. En consideración á la alta dignidad de los Diputados generales, y á la costumbre que se ha observado hasta ahora de elegirlos entre los principales propietarios, no podrá ser propuesto para Diputado general quien no po-

sea ó usufructúe fincas radicantes dentro de Vizcaya, que cuando menos le produzcan doce mil reales de renta anual.

»Art. 22. No pueden volver á ser elegidos los Diputados generales hasta que pasen dos años de intermedio ó hueco, y los Regidores, Síndicos y Secretarios de justicia deberán tener también el mismo hueco para volver á ser elegidos»

Resolvió la Junta que se nombrase una comisión compuesta de los Padres de Provincia, de dos individuos por cada Merindad y del primer Consultor, á fin de que oyendo para mayor ilustración á los Diputados generales, expusiese su opinión acerca de dichos proyectos, quedando éstos entretanto de manifiesto en la secretaría, por si alguno de los apoderados quisiera examinarlos.

Después de haberse leído y aprobado el acta de la sesión anterior, ordenó el Corregidor el 6, que los representantes de los cuatro pueblos, cuyos poderes habia declarado nulos, cesasen de asistir á la Junta, en concepto de tales apoderados.

Se procedió, á excitación del Síndico, al nombramiento de una comisión compuesta de dos individuos por cada Merindad para el examen de las cuentas correspondientes al bienio que iba á terminar, presentadas por el tesorero del Señorío, y relativas á las cantidades que en este periodo han ingresado en la caja general de su cargo, y á los fondos concernientes al establecimiento de niños expósitos; quedando dichas cuentas de manifiesto en poder del contador general para que las vean los apoderados que quieran verlas, hasta que la comisión evacue su cometido.

Acordó después la Junta que el contador general presente un estado individual y expresivo de los que habiendo administrado caudales del Señorío, como funcionarios suyos, no hayan producido aun sus cuentas, y de los que por cual-

quier clase de arriendo ó contrato estuviesen en descubier- to de alguna cantidad en favor del Señorío; y que se someta dicho estado al examen de la comisión nombrada para revisar las cuentas.

Declaró la Junta que Don Luis Gonzaga de Uriarte reu- ña las cualidades necesarias para asistir á ella como apo- derado sustituto de Larrabezúa, no obstante haberse decla- rado por el real Acuerdo de la Chancillería de Valladolid que el citado Uriarte no reunía las cualidades necesarias para ser Regidor capitular de Bilbao.

Se dió cuenta del expediente instruido á consecuencia de la resolución del supremo Consejo, sobre que se considere en su fuerza y vigor, respecto á este Señorío, la real cédula de 14 de Mayo de 1789, en que se prohíbe la fundación de mayorazgos, aunque sea por vía de agregación ó de mejora de tercio y quinto, sin que preceda para ello real licencia; y penetrada la Junta de la gravedad y trascendencia de este negocio, del que pende la suerte de un considerable núme- ro de familias del Infanzonado, acordó que se nombrase una comisión compuesta de los Padres de Provincia, el primer Consultor y dos individuos por cada Merindad, á fin de que proponga á la Junta lo que sobre este importante asunto juzgue conveniente.

Se dió principio á la lectura del expediente relativo á lo obrado en cumplimiento del acuerdo de la Junta general de 12 de Julio de 1831, sobre construcción de caminos, y ni- velación é iguala aproximativa de lo que los pueblos deben contribuir al efecto, respetando las contratas de las asocia- ciones formadas en las rutas anteriormente ejecutadas; pero se suspendió la lectura, por considerar el Corregidor que no podría concluir en esta sesión sin dilatarla demasiado.

Se leyó el 7 el informe siguiente:

«La comisión encargada de examinar los dos proyectos

de reglamento interior y de elecciones, presentados á la deliberación de V. I. por la Diputación general, se ha complacido en reconocer la exactitud y precisión con que se halla redactado el derecho político consuetudinario de Vizcaya, y en el cual brilla la prudente sabiduría de nuestros gloriosos progenitores. La generalidad de ambos reglamentos es invariable, por contener las leyes no escritas, observadas inconcusamente desde la más remota antigüedad, y tan sólo en algunas de las disposiciones, sobre las que no ha sido tan uniforme la práctica, conviene en concepto de la comisión hacer las reformas y adiciones que contienen los siguientes artículos, que si mereciesen la aprobación de V. I. deberán reemplazar á los propuestos con igual numeración por la Diputación general.

»**REGLAMENTO INTERIOR.** Art. 7.º Para ser apoderado en Juntas generales se requiere la edad de veinte y cinco años cumplidos, ser natural ú oriundo del Señorío, y vecino ó propietario del pueblo que le otorgase el poder; habiendo hecho constar previamente su limpieza de sangre y nobleza, en el caso de no ser originario de Vizcaya. Quedan abolidas las sustituciones, hallándose autorizados los Ayuntamientos para nombrar igual número de suplentes, que puedan ocurrir á las enfermedades ó ausencias de los propietarios, y reuniendo aquéllos las cualidades prescritas en este artículo.

»**REGLAMENTO DE ELECCIONES.** Art. 7.º Según fueren saliendo en suerte los electores, se retirarán á una pieza reservada al objeto, pudiendo acompañarlos tanto en ella como en el acto secreto de la elección un socio por cada pueblo, á fin de que sin participar del derecho electoral les instruyan sobre la calidad de las personas elegibles.

»**Art. 8.º** Con el acto del sorteo quedan disueltas las Juntas generales ordinarias, y los apoderados de los seis

pueblos electores se reunirán dentro de un breve intervalo en el salón de Juntas, bajo la presidencia de la Diputación general, y á puerta cerrada procederán á la elección.

»Art. 21. En consideración á la alta dignidad de los Diputados generales, y á la costumbre que se ha observado hasta ahora de elegirlos entre los principales propietarios, no podrá ser propuesto para Diputado general quien no posea ó usufructúe cuarenta y cinco mil ducados de capital en fincas radicantes dentro de Vizcaya, bien sean libres ó vinculadas.

»Art. 22. No pueden volver á ser elegidos los Diputados generales hasta que pasen cuatro años de intermedio ó hueco, y los Regidores, Síndicos y Secretarios de justicia hasta que hayan pasado dos años.

»La comisión se persuade que ambos reglamentos deben regir desde el acto de su aprobación por V. I., y sin que respecto de los apoderados que se hallan ya reconocidos por legítimos hasta el día de hoy pueda darse fuerza retroactiva á los artículos séptimo y octavo del reglamento interior»....

Se promovió una larga discusión, en la que hubo divergencia de opiniones sobre la necesidad ú oportunidad de reducir á escrito el derecho público consuetudinario de este Señorío; y el Corregidor, en su vista, «declaró que necesitaba tomarse el tiempo necesario para cerciorarse de si algunas de las disposiciones comprendidas en ambos reglamentos se hallan en oposición con los Fueros, buenos usos y costumbres de Vizcaya, ó con las regalías del Rey, reservándose hacer uso de las facult. des que le competen como ejecutor de las leyes en este Señorío».

Los apoderados de Ibárruri y de Portugalete dijeron el 8, que reservaban el derecho que pueda competir á las comunidades que representan para que no les pare perjuicio el uso de la declaración del Corregidor, consignada al final

del acta de la sesión anterior, no obstante haberse satisfecho la Junta con las explicaciones que hizo el Corregidor acerca del particular. Los Síndicos causaron la correspondiente contra reserva.

Se dió fin á la lectura del expediente relativo al plan de iguala y nivelación de los arbitrios para la construcción y conservación de caminos, y se leyeron también las exposiciones presentadas por varios pueblos y asociaciones á la comisión permanente de caminos, creada por decreto de la Junta general de 12 de Julio de 1831.

Habiéndose empezado á discutir el 9 dicho expediente, un apoderado indicó que convendría para conciliar, si era posible, los intereses y deseos encontrados que median en este negocio, sin prescindir del cumplimiento de la real orden por la que se aprueba el plan de iguala, el nombramiento de una comisión, que con pleno conocimiento de todos los antecedentes propusiera á la Junta los medios más oportunos al efecto. El Corregidor, «animado de iguales intenciones, y en atención á que la naturaleza de la cuestión no presentaba todavía oportunidad para el nombramiento de comisión, manifestó que quedaría suspensa esta discusión hasta el día de mañana, á fin de que en el entretanto, reuniéndose á conferenciar privadamente los apoderados de los pueblos que discordasen entre sí en ideas é intereses sobre la materia, procurasen avenirse, y propusieran en otra sesión un acomodamiento armonioso y recíprocamente satisfactorio».

Se nombraron dos comisiones, compuestas, la primera de los letrados concurrentes á la Junta, para examinar jurídicamente la naturaleza de la obligación que contrajo el Señorío por el decreto de la Junta general de 8 de Agosto de 1794, respecto á la exacción forzosá de la plata de las iglesias; y la segunda de dos individuos por cada Merindad, á

fin de que, teniendo á la vista las observaciones emitidas por varios apoderados, la propuesta de los arbitrios hecha por la Diputación para el reintegro del producto de dicha plata, y lo suministrado por varios particulares durante las guerras de la Independencia y de la Constitución, los demás antecedentes que hay en la materia, y las solicitudes que tengan analogía con ella, exponga á la Junta cuanto estime justo y conveniente.

Enterada la Junta del oficio dirigido á la Diputación por la real Junta de fomento de la riqueza del Reino, pidiendo la remisión de todos los expedientes, planos y noticias que existan sobre reducción á cultivo de un terreno erial entre Guernica, Forua, Murueta, Busturia, Pedernales, Cortózubi y Arteaga, y apertura de un canal, exponiendo al mismo tiempo las causas de no haberse llevado ya á cabo dicho proyecto, y las condiciones que convendría poner, si se encarga de él una empresa particular; acordó que vuelva el oficio á la Diputación, á fin de que oyendo ésta á los pueblos interesados, y á los demás del Señorío que quieran hacer sus exposiciones, y con vista de los antecedentes que se tendrán de manifiesto en la secretaría de gobierno, instruya el expediente que corresponde sobre la utilidad ó perjuicio que podría resultar de la apertura del canal, y la reducción á cultivo del citado terreno; pero entendiéndose que no se ejecutará el canal proyectado á costa de los propios y arbitrios del Señorío, ni se creará por éste arbitrio alguno al efecto.

Quedó enterada la Junta del estado actual de la reclamación entablada por Don Carlos Francisco de Zubiaga, notario de Reinos, y agraciado por el decreto de la Junta general de 18 de Julio de 1831 con el arriendo de una de las numerías tanteadas en la Merindad de Uribe, así como del de otra solicitud de la viuda de Don José Domingo de Ga-

biola, escribano numerario que fué de la Villa de Marquina; y tomando en consideración las solicitudes presentadas por varios sujetos que aspiran á ejercer el oficio de escribano, no obstante lo resuelto por la Junta general en cuanto á la reducción de las numerías del Señorío, resolvió que se nombrase una comisión compuesta de un individuo por cada Merindad y del Consultor primero, á fin de que, con vista de dichas solicitudes, y de otras concernientes á procuradores que obran en la secretaría, proponga á la Junta lo que crea conveniente sobre ellas, y sobre las medidas que estime adaptables para llevar á ejecución en todas sus partes el decreto de Junta general de 17 de Mayo de 1824 sobre reducción de numerías, y lo acordado en 16 de Julio de 1829, en razón al recogimiento y depósito de los documentos pertenecientes á las que se tanteasen.

Después de leída el acta del día anterior, reservó el 10 el apoderado de Guernica el derecho que compete á su representante para reclamar contra el decreto relativo al canal, en cuanto se declara, que bajo ningún concepto podrá abrirse á costa del Señorío. Se adhirió á esta reserva el apoderado de Mundaca.

Habiendo continuado la discusión pendiente acerca del plan de iguala y nivelación de arbitrios para la apertura y conservación de caminos; observando el Corregidor Presidente que la cuestión tomaba un giro que no podía ofrecer probabilidad de un resultado satisfactorio, y atendiendo además á las reclamaciones que le hicieron varios apoderados para que se llevase á ejecución inmediatamente la real orden obtenida á nombre del Señorío, por la cual se aprueba dicho plan, expuso que no suspendió la discusión el día anterior con otro objeto que el de dar lugar á que por medios armoniosos se arreglasen, si era posible, los distintos intereses, pero que pues estaban los ánimos muy distantes

de avenirse, declaraba por concluida la discusión, y que se debía cumplimentar, como está mandado, la indicada resolución soberana.

Acordó la Junta que se tuviese por decreto el dictamen de la comisión encargada de informar acerca del expediente relativo á la prohibición de fundar mayorazgos. Proponía la comisión que se autorizase á la Diputación, para que haciendo reunir los datos muy oportunos, y aun indispensables, concernientes á esta materia, que deben existir en los archivos y escribanías, y oyendo á los Consultores y á otros letrados del país de conocida ciencia, promueva los recursos que estime convenientes hasta conseguir el más favorable resultado por cuantos medios estén á su alcance.

Teniéndose noticia de que la Provincia de Alava había obtenido una real orden en razón á la permuta de vinculaciones; y convencida la Junta de la utilidad y conveniencia de que aquella medida se hiciese extensiva á Vizcaya, encomendó á la Diputación el encargo de que practicase las gestiones conducentes para la consecución de igual gracia.

Expuso el 11 uno de los apoderados de Bilbao, al concluirse la lectura del acta de la sesión del día anterior, que según había llegado á entender, la comisión encargada del examen de los arbitrios propuestos para el reintegro del importe de la plata recogida de las iglesias en 1795, y de los servicios particulares prestados en las dos últimas guerras, no se contemplaba autorizada para tomar en consideración la observación que hizo el exponente acerca del abono de los suministros prestados á las tropas constitucionales; y la Junta, en vista del apoyo que otros apoderados dieron á esta indicación, acordó que la tuviese presente la citada comisión, y haga de ella en su informe el mérito que estime conveniente.

No es de extrañar que esta indicación, que fué desechada

por otras Juntas, aunque no faltó quienes la apoyasen, como se vió á su tiempo, se aceptara ahora con tanta facilidad, si se considera que asistían á las presentes Juntas, en virtud de la amnistía concedida por la Reina Doña Cristina, no pocos apoderados que antes no habían sido admitidos con motivo de sus antecedentes políticos.

Se aprobaron las cuentas presentadas por el tesorero del Señorío, correspondientes á la caja general de su cargo y al establecimiento de niños expósitos, y se acordó recomendar á la Diputación que haga que ingresen en la tesorería las cantidades que resultan de alcance contra los sujetos que han administrado fondos del Señorío, de conformidad con lo propuesto por la comisión nombrada el 6 del corriente para informar sobre estos puntos.

A propuesta de algunos de los individuos de dicha comisión, resolvió la Junta, que se proceda al nombramiento de una comisión permanente compuesta de los Padres de Provincia, el primer Consultor, y dos individuos por cada Merindad, que examinando los recursos y las obligaciones del Señorío, forme un presupuesto general y un plan de administración de todos los fondos, á fin de fijar los gastos precisos y eventuales, y conseguir alguna economía, aliviando en todo lo posible los gravámenes que pesan sobre los pueblos del Señorío.

Se enteró la Junta de las diligencias practicadas para el rescate y adquisición de los trescientos ocho yales, que fueron extraídos en 1810 de poder del tesorero del Señorío Don Luis de Labayen, y del buen estado que presentaba el asunto, y ordenó que se diesen las debidas gracias á Don Domingo Eulogio de la Torre por la eficacia con que se condujo en el desempeño de esta comisión, y que en nombre del Señorío se hiciese, tanto al mismo señor Torre, á pesar de la repugnancia que manifestó, como á las demás personas

que hubiesen intervenido en favor de la reclamación de los vales, la manifestación de reconocimiento que la Diputación juzgue conveniente.

Se enteró la Junta de la real provisión librada por el supremo Consejo en 18 de Octubre de 1831, á petición de los hermanos Don Guillermo, Don Pedro Pascual, Don Francisco y Don Manuel de Uhagón, naturales de Bilbao, confirmando en todo y por todo, bajo de ciertas conminaciones y multas, la expedida en 9 de Julio de 1817, por la que se declaró que dichos hermanos no debían ser comprendidos en el acuerdo de la Junta de Morindades de 3 de Mayo de 1793, en el que se determinó que los franceses y sus descendientes por línea paterna quedasen privados de asistir á los Ayuntamientos y obtener oficios de república, siempre que no acreditasen ser naturales del Señorío por sí, sus padres y abuelos paternos en continua residencia en España; mandándose además en la susodicha provisión de 18 de Octubre de 1831, que los hermanos Uhagón fuesen admitidos inmediatamente, sin excusa ni pretexto alguno, al goce y disfrute de los empleos de república de paz y guerra, exenciones y prerrogativas que les corresponden, como á todos los demás vecinos concejantes, hijosdalgo y naturales de este Señorío.

El Síndico Egüía había informado en 31 de Octubre del mismo año 1831, que no se opone á los Fueros de Vizcaya el que sin embargo de lo acordado por su Junta de Morindades de 3 de Mayo de 1793, que mereció la aprobación de S. A., queden habilitados por la real provisión comunicada los hijos de Don Guillermo Uhagón Hodotegui para obtener los oficios de república, á que por sus cualidades legales y políticas puedan optar en este Señorío, sin que les obste la circunstancia de haber sido su padre natural y originario del Reino de Francia. El Corregidor Sanahuja mandó, en

vista del informe del Síndico, que se cumpliese y guardase en todas sus partes la real provisión mencionada. ¹

A excitación de un apoderado se dió cuenta del expediente relativo á las tachas que en las Juntas de 1831 se alegaron contra Don Serapio de la Hormaza, para no considerarle en goce de las prerrogativas de Padre de Provincia; y después de una detenida discusión sobre este particular, y la genuina inteligencia de lo mandado en la real orden de 30 de Septiembre de aquel año, se declaró á Hormaza, á mayor abundamiento, por Padre de Provincia del Señorío, debiendo entrar como tal para lo sucesivo en el disfrute de los honores y preeminencias que le corresponden. ²

Tratóse por incidencia con este motivo del concepto en que debía considerarse á Don Juan Bautista de Anitua, segundo Diputado del bando oñacino, en atención á las tachas que se le pusieron judicialmente; y la Junta enterada de que este asunto pendía en los tribunales, acordó que interin no se venciese á Anitua en juicio contradictorio, debía gozar de las prerrogativas de Padre de Provincia.

Al tiempo de leerse el acta del día anterior, uno de los apoderados dijo el 12 que protestaba el decreto relativo á Hormaza, mediante que la real orden por la que se le declaró suspenso en el ejercicio de los derechos de Padre de Provincia, no estaba fundada en las tachas políticas que se

¹ Los méritos y circunstancias que justificaban esta determinación del Consejo constan minuciosamente en la real provisión de 18 de Octubre de 1831 que se imprimió á continuación de las actas de las Juntas generales de 1833, para circularla á todos los pueblos del Señorío, en cumplimiento de lo ordenado por el Consejo.

² Ni podía hacerse otra cosa, pues que era apoderado en estas Juntas el que se retiró hasta la Coruña desde Bilbao en 1823, al frente de los milicianos voluntarios, cuando los constitucionales tuvieron que abandonar aquella Villa.

le atribuyeron, sino en el insanable vicio de nulidad de que adolecía la posesión que tomó como tercer Diputado, hallándose en aptitud de desempeñar este destino el segundo de su bando, y sin su consentimiento. Los Síndicos contraprotéstaron, como de costumbre, á nombre de la Junta.

Acordó la Junta que se tuviese por decreto el informe de la comisión de letrados respecto á la exacción forzosa de la plata de las iglesias del Señorío. Opinaban los letrados que el Señorío no se obligó por los decretos de 8 de Agosto y 30 de Noviembre de 1794 más que á la devolución del valor intrínseco de las alhajas destinadas á la defensa de la Religión, del Rey y de la Patria, y no al pago de interés alguno. Los apoderados de Elorrio y Durango protestaron en nombre de sus constituyentes.

Se dió cuenta de una real orden transmitida por el Ministerio de Fomento al Corregidor del Señorío, por la que se mandó que se promoviese la circulación en este Señorío de las disposiciones soberanas de 30 de Julio de 1816 y 5 de Febrero de 1831 acerca del libre comercio y tráfico de vino, y del expediente formado á su consecuencia para averiguar el origen de la cierra ó viedo de la venta del vino foráneo, que se observa en algunos pueblos del Señorío, mientras se consume su respectiva cosecha de chacolí; y se acordó que la Diputación obre según estime más conveniente con la circunspección que exige asunto tan grave. Los apoderados de Bilbao protestaron este decreto para que no pare perjuicio á su constituyente, que tiene pendiente cierta demanda con la cofradía de San Gregorio acerca de la cierra ó viedo del vino foráneo en su jurisdicción.

Se enteró la Junta del expediente relativo á la habilitación de los puertos de Bilbao y San Sebastián para el libre comercio con América, y de los esfuerzos de las Diputaciones de las tres Provincias Vascongadas para evitar que se

lleve á ejecución este proyecto; y acordó tributar las debidas gracias á la Diputación general y á los comisionados del Señorío, que conferenciaron en Vitoria sobre este importante asunto con los de las otras dos hermanas, encargando muy eficazmente á la Diputación que continúe con igual energía y actividad que hasta aquí en los pasos que haya que dar en lo sucesivo con dicho objeto.

Quedó enterada la Junta de que el puerto de Elanchobe se había segregado de los otros dos barrios con los cuales formaba hasta ahora la Anteiglesia de Ibarranguelua, constituyéndose en pueblo separado ó independiente, con su Juez local, como las demás Anteiglesias del Señorío, y de las disposiciones acordadas á su instancia por la Diputación para dirigirle las veredas y demás órdenes, en concepto de tal Anteiglesia separada.

Se tomaron en consideración la solicitud de Elanchobe y las de las Anteiglesias de Basauri y Bedia, para que se les concediese voz y voto en las Juntas generales, así como las reclamaciones verbales que hicieron varios apoderados de las Merindades de Durango, Arratia y Bedia, en favor de algunos pueblos que no gozan de aquella prerrogativa; y se acordó que la comisión permanente creada el día anterior para la formación de un presupuesto general económico, proponga en las próximas Juntas ordinarias lo que en esta razón considere justo y conveniente, oyendo á las Anteiglesias que carecen de voto en Juntas y á la Merindad de Durango.

Se dió cuenta de las disposiciones acordadas por la Diputación, á consecuencia de la aparición del cólera morbo en París, y de las reclamaciones entabladas por Guipúzcoa para que Alava y Vizcaya le indemnizen en parte de los gastos que ha tenido con motivo del cordón sanitario que se estableció en la frontera de Francia; y se dispuso que la

Diputación general, de acuerdo con la de Alava, practique las diligencias conducentes para que se las exonere de la satisfacción de dicha parte de gastos, que deben considerarse como una carga local de Guipúzcoa, que no es aplicable á las otras dos Provincias hermanas.

Habiéndose suscitado en seguida una discusión prolongada sobre los gastos que originan en los puertos las medidas que se toman para preservar al territorio del Señorío de la invasión del cólera morbo, se resolvió nombrar una comisión especial, que procurando ponerse de acuerdo con la Junta superior de Sanidad del Señorío, medite y lleve á ejecución cuantas providencias le sugiera su celo, á fin de que si desgraciadamente se aproxima la epidemia, se procure liberrar al país de sus funestos estragos, quedando autorizada, mientras duren las circunstancias que así lo exijan, para discurrir los arbitrios extraordinarios que tengan analogía con los que actualmente recauda la Sanidad, sin tocar á los generales y ordinarios del Señorío, que sean indispensables para subvenir á los gastos que se ofrezcan con este motivo; y considerando que el Corregidor, que es al mismo tiempo Presidente de la Junta superior de Sanidad, contribuirá con el celo que le caracteriza á la conservación de la salud, sin perjudicar los intereses del Señorío, le invitó la Junta á que propusiese los sujetos que por sus luces y amor al país contemplase más adecuados para desempeñar la comisión expresada. El Corregidor se ofreció con gusto á presentar en la sesión del día siguiente lista nominal de las personas que en su concepto sean capaces de llenar un encargo tan delicado.

Correspondiendo á la confianza que había merecido á la Junta, presentó el Corregidor el 13 la lista prometida de los sujetos que deberían componer la Junta especial de salubridad. Eran estos Don Romualdo de Landecho, Don Mar-

tín León de Jáuregui, Don José Gregorio de Landaburu, Don Mariano de Eguita, Don Diego de Mugártegui, Don Fernando Adán de Yarza, Don Manuel de Abarrátegui, Don Ambrosio de Goicoechea y el primer Consultor Lofzaga. La Junta se conformó con la propuesta del Corregidor.

Penetrada la Junta de que se evitarían muchos males restringiendo la facultad de sustituir los poderes, acordó que en lo sucesivo no se admita apoderado alguno que no sea vecino ó propietario del pueblo á quien represente, y que para atajar los inconvenientes de que por enfermedad ó ausencia del apoderado de un pueblo, quede éste sin representación en Junta, podrá nombrarse al mismo tiempo uno ó dos suplentes que reúnan iguales cualidades que el apoderado en propiedad; quedando abolidas enteramente las sustituciones. Protestó este decreto uno de los apoderados de Galdames.

La comisión encargada de examinar el proyecto de reintegro del importe de la plata, que entregaron las iglesias del Señorío en 1795, y del de los suministros, bagajes y servicios prestados por particulares en las guerras de la Independencia y la Constitución, propuso lo siguiente.

1.º Que para el pago de lo que se deba en ambos conceptos se apliquen todos los años ciento cincuenta mil reales del rendimiento de los arbitrios extraordinarios de la caja general del Señorío.

2.º Que se reparta anualmente dicha cantidad por la Diputación general, en proporción rigurosa del capital que se liquidase, en los términos que se expresarán más abajo, desde primero de Enero de 1834.

3.º Que no se comprendan entre los servicios y suministros, bajo ningún concepto, los que aunque hayan sido prestados por personas particulares, se incluyeron y liquidaron en la nivelación general de lo suministrado por los

pueblos de este Señorío.

4.º Que no devenguen interés ó rédito alguno los capitales procedentes de la plata de las iglesias recaudada en 1795, según declaró la Junta el día anterior, ni tampoco los suministros, bagajes y servicios prestados por personas particulares en las guerras de la Independencia y la Constitución.

5.º Que se apliquen los ciento cincuenta mil reales exclusivamente al pago de los capitales procedentes de la plata labrada de las iglesias, y de los suministros y servicios hechos por personas particulares, hasta que se hayan amortizado dichos capitales.

6.º Que se señale el término de tres meses contados desde que se publique este decreto para que se justifiquen ó rectifiquen, según el caso, los estados de la plata entregada por los pueblos, y la justificación se haga presentando en la contaduría los libros originales de las fábricas ó de las comunidades.

7.º Que se proceda por la contaduría á la liquidación de los servicios prestados por los pueblos á las tropas constitucionales, bajo las mismas bases que se fijaron en el reglamento formado por la comisión nombrada en la Junta general de 19 de Julio de 1818, y que se presente á las próximas Juntas generales ordinarias.

8.º Que la Diputación, oyendo al Presidente que fué de la Junta de armamento de las tres Provincias Vascongadas, clasifique los servicios prestados por los tripulantes de las trincaduras, como públicos ó particulares.

Se leyó después el voto particular del individuo de la comisión Don José Antonio de Areitio, el cual se conformaba con el dictamen presentado, menos en la parte negativa de los intereses de la plata de las iglesias.

Acordó la Junta que se tuviera por decreto el informe de

la comisión en general. Los apoderados de Busturia y Zalla hicieron la correspondiente reserva, para que á sus constituyentes no parase perjuicio el no haber acreditado ni reclamado el abono de las cantidades que entregaron en compensación de la plata de las iglesias, que rescataron en aquella época; y los de Orozco, Güeñes y Lequeitio causaron igual reserva, en cuanto á lo resuelto sobre el modo de practicarse la liquidación, reconocimiento y clasificación de los servicios de guerra.

Se resolvió que se comprendiese á Don Juan Antonio de Zarrabe, vecino de Mugica, en la liquidación de servicios particulares, por considerar justa su reclamación de que se le abonasen los nueve mil reales de perjuicios que tuvo, á consecuencia de haber acogido en su casa á diez y siete desertores polacos en la guerra de la Independencia.

Se leyó el informe de la comisión nombrada para proponer los medios de llevar á ejecución el reglamento de 1824 sobre reducción de numerías, y lo que fuese conveniente determinar respecto de las solicitudes de varios escribanos y procuradores, y de otros que aspiraban á estos oficios.

Proponía la comisión: que la Diputación general mande formar inventarios exactos y bien circunstanciados de todas las escrituras y demás documentos y expedientes de que conste cada una de las numerías tanteadas por el Síndico del Señorío, y de las que en lo sucesivo tanteare, poniendo inmediatamente en segura custodia todos los papeles; que las Justicias locales respectivas den cuenta, en el término de veinte días, de las numerías que hayan vacado en sus jurisdicciones, y de las que fueren vacando, hasta que se haya efectuado la reducción prescrita en el reglamento de 27 de Mayo de 1824; que las numerías tanteadas se arrienden por la Diputación á los escribanos que regenten otras numerías, al rédito anual de dos y medio por ciento del ca-

pital que se hubiese invertido en el tanteo; que los escribanos y procuradores que se hallaban en posesión de sus oficios en 27 de Mayo de 1824, queden habilitados para renunciarlos ó permutarlos, en el término improrrogable de un año, contado desde esta fecha, y pasado el cual no se admitirá solicitud alguna sobre semejantes renunciaciones ó permutas; que aun cuando las permutas se propongan dentro del término prescrito, no serán admitidas respecto de las numerías, sin previo consentimiento de los pueblos á que se hallen adscritas; que se declare que tiene el carácter de renuncia á favor de José Ramón Fresnedo la habilitación que le concedió la Diputación para ejercer el oficio de procurador del Teniente general de Vizcaya, por el estado de enajenamiento en que se halla su padre; que la Diputación conceda la habilitación respectiva, y otorgue el arriendo de las numerías tanteadas, que solicitan los escribanos que actualmente ejercen otras de la Villa y Merindad de Durango, durante sus vidas; que se declare opuesta á reglamento la solicitud de la Villa de Plencia, y que la de los escribanos residentes en Guernica no es procedente, como opuesta á los derechos de propiedad; que en el caso de que corresponda á este Señorío el nombramiento para la escribanía del Concejo de Güeñes, se halla facultada la Junta general para hacer la gracia de la futura que solicita Don Aniceto de Palacios; que no quedando arbitrio de aumentar el número de procuradores del juzgado del Corregimiento, puede la Junta general acordar lo que estime conveniente acerca de la segunda parte del memorial de Don Melchor de Ibarguen, en que solicita una pensión.

El apoderado de Orduña Don Manuel María de Piñera, uno de los individuos de la comisión, presentó voto particular, conformándose con el dictamen presentado, menos en cuanto á que se extienda á su constituyente lo que se es-

tablece sobre poner en custodia las numerías tanteadas, y dar razón de las que se hallan sin tantear, porque no puede excusarse de reservar los derechos que en este punto competen á Orduña, como lo hizo en 1824, al decretarse la reducción de escribanos del Señorío.

Acordó la Junta que seoviese por decreto el informe de la comisión, concediendo á Don Aniceto de Palacios la gracia que ha solicitado, en el caso de que corresponda al Señorío el nombramiento para la escribanía de Güeñes á que aspira, cuando quede vacante. Los apoderados de Orduña reservaron su derecho, mediante el real privilegio que tiene la Ciudad. El de Derio se reservó también el derecho que compete á su constituyente, y el de Portugalete se adhirió á esta reserva.

Se acordó después que la Diputación emplee á Don Melchor de Ibarguén en el arreglo y formación de índices de los papeles pertenecientes á las numerías que se han tanteado, asignándole por este trabajo la remuneración correspondiente, y que se le pensione ó coloque por la Diputación, cuando cese Ibarguén en el encargo que ahora se le encomienda.

Al leerse el acta de la sesión del día anterior, hicieron el 14 los apoderados de Dima y Villaro la reserva competente contra lo que establece el decreto relativo á los curiales, en cuanto á los escribanos y procuradores que se hallaban en posesión de sus oficios en 27 de Mayo de 1824, y los de Plencia se reservaron también su derecho para hacer los recursos competentes, porque no se había accedido á su solicitud de que subsistiesen las dos numerías que hay en aquella Villa, no obstante lo acordado en Juntas generales en 1824.

Los apoderados de Cenarruza, Portugalete, Lezama, Murélagu, Deusto, Górliz, Guecho, cuatro Concejos, Berango,

Sopuerta, Arrieta y Guizaburuaga protestaron el acuerdo relativo á la restricción de poderes y á la abolición de sustituciones para Juntas.

Dió conocimiento la Diputación de que por real orden de 5 del corriente se anunciaba que el Infante Don Francisco de Paula iba á salir con su familia para San Sebastián, adonde llegaría el 19; y la Junta, complaciéndose por tan grata noticia, autorizó por unanimidad á la Diputación para que en el caso de que el Infante y su familia honren con su presencia al Señorío, disponga los festejos y obsequios correspondientes á la alta jerarquía y al respeto y veneración que se merece tan elevados personajes.

«En seguida uno de los señores apoderados del Concejo de Galdames, ¹ llamó la atención de la Junta sobre la oportunidad de que en nombre de todo el Señorío se felicitase al Rey nuestro Señor en los términos más atentos y expresivos, manifestando la dulce satisfacción que con el milagroso restablecimiento de su preciosa salud había sucedido á la ansiedad y zozobra con que los fieles vizcaínos le miraron al borde del sepulcro; por la acertada determinación de confiar, durante su enfermedad, á la Reina su muy amada esposa las riendas del gobierno, que supo manejarlas con tanta sabiduría y previsión; y por fin, por la augusta ceremonia de la jura de la Princesa heredera del trono de España, con la que se afianza el derecho de la sucesión directa de su célebre dinastía; y la Junta, después de haber escuchado con placer la exposición del señor Corregidor Presidente, relativa á que, como órgano directo del Gobierno de S. M., elevaría á su real conocimiento, con mucho gusto suyo, los leales y acendrados sentimientos que siempre

¹ Eran estos Don Juan José Maria de Yandiola y Don Manuel Santos de Golluri.

animan á los vizcaínos hacia su Rey y Señor y su real familia, acordó por unanimidad que desde luego se disponga y se dirija á los piés del trono la correspondiente representación con el laudable objeto indicado, y que en ella se exprese que no ha sido posible hacerlo antes, por esperar á que se reúna el país, para demostrar á S. M. el buen espíritu y la fidelidad nunca desmentida que caracteriza á todos sus naturales».

Se acordó recomendar muy eficazmente á la Diputación general, que por cuantos medios estén á su alcance procure preservar al país de los males que se irrogan á la industria vizcaína con la introducción del hierro extranjero, y que para el mayor acierto de las medidas que adopte con tan interesante objeto, pueda cualquier vizcaíno acercarse á la misma Diputación á ilustrarla con sus luces y conocimientos en la materia.

Se acordó también:

Autorizar á la Diputación para que disponga que la galería destinada al público en el salón de sesiones, se distribuya y arregle por asientos y gradorías, á fin de que los espectadores puedan estar en ella con más comodidad y desahogo que hasta aquí.

Nombrar una comisión permanente auxilioria de la Diputación, y que se ocupe en los medios de mejorar la agricultura, que ha de componerse de los individuos existentes en el Señorío que pertenecieron á la Sociedad vascongadas de amigos del país, y de Don Manuel de Abarrátegui, Don Diego de Mugartegui, Don Juan José María de Yandiola, Don Martín León de Jáuregui, Don Juan Ramón de Arana, Don Mariano de Eguita, Don Casimiro de Loizaga, y los demás señores que tenga á bien nombrar en lo sucesivo la Diputación, para que con arreglo á las instrucciones ó estatutos que formase la misma, y de acuerdo con ella se

ocupe en todo lo concerniente á este ramo.

Que pasen á la comisión permanente á que corresponden la solicitud de los apoderados de Orduña sobre los dispendios que causó á aquella Ciudad el acuartelamiento de las tropas que estuvieron últimamente en ella, y cualesquiera otras solicitudes de igual naturaleza respecto de servicios prestados durante el presente bienio, para que en el caso de que haya ejemplares de haberse abonado por el Señorío cantidades de la misma procedencia, califique la comisión dichas reclamaciones, y se satisfagan de la caja del Señorío, considerándolas legítimas, proponiendo á las primeras Juntas ordinarias una regla general acerca del modo y forma en que deban hacerse los abonos de esta clase de servicios. Protestaron este acuerdo los apoderados de Bilbao porque no se extiende el abono de los gastos de acuartelamiento á los ocasionados antes del bienio actual. Los apoderados de Durango, Echano, Guernica, Elorrio, Baracaldo, Lequeitio y Ermua se adhirieron á la protesta de los de Bilbao.

Cometer á la comisión auxiliatoria de agricultura el encargo de proponer medidas para evitar los daños que causan en los pastos de este Señorío los rebaños del ganado lanar de fuera de él.

Encargar á la Diputación que continúe sus gestiones hasta conseguir de S. M. que las apelaciones correspondientes á los asuntos mercantiles, entablados en los tribunales de este Señorío, sigan los mismos trámites que en las demandas civiles, con arreglo á lo que prescribe la real orden de 29 de Enero 1830.

Que se observe lo dispuesto por la Junta general en 18 de Julio de 1831 respecto á la venta de vino y demás abastos en pueblos limítrofes, en vista de la queja que dieron los apoderados de Arrieta sobre los perjuicios que causan á su comunidad las ventas que se hacen en las casas

de la jurisdicción de la Villa de Munguía, situadas en el centro de aquella Anteglesia.

Autorizar á la Diputación para que se continúe la construcción de la nueva casa destinada á las oficinas y dependencias del Señorío.

Quedó enterada la Junta de que se denegaron las solicitudes elevadas para que se condonase al cirujano Don Gaspar de Bulucua la multa de cincuenta ducados que se le impuso por haber propinado medicamentos de uso interno, y para que se autorizase á los cirujanos romancistas de los pueblos donde no hubiese médico titular ó cirujano latino para recetar medicamentos interiores en los casos urgentes.

Se acordó el 15:

Que habiendo sido suprimidas las sustituciones de poderes, debían quedar igualmente sin efecto las revocaciones de ellas que se hiciesen.

Que se excite al Teniente general de Guernica á que declare ineficaz un bando que ha dirigido á los Fieles del Infanzonado, respecto á las disposiciones administrativas que abraza, por ser peculiares de las atribuciones que exclusivamente competen á las autoridades locales de los pueblos, y que en lo sucesivo procure dicho Teniente no extralimitarse de sus facultades puramente contenciosas, economizando en lo posible el costo de los veredas que expida, para no gravar demasiado á los pueblos.

Que se excite también al mismo Teniente para que antes de mandar reparar los caminos reales de los pueblos, con arreglo á la ley décima del título treinta y cinco de los Fueros, oiga las razones que tuviesen que exponer las autoridades locales sobre la genuina inteligencia de la referida ley foral.

Que pase á la comisión permanente de economía, para la determinación que correspondá, la exposición de los apode-

rados de los cuatro Concejos de Somorrostro, por la que solicitan que se abonen á su constituyente en lo sucesivo el quebranto que experimentan en el precio de las raciones de pan que suministran, como pueblo de etapa, á las tropas que transiten por aquel punto, y los dispendios que ocasiona este servicio, ó se le exima de él.

Que pase á la misma comisión otra exposición de dichos apoderados, con la pretensión de que del producto del impuesto de la vena se destine la suma necesaria para la reposición de un camino minero, según se decretó por la Junta general en 1831, respecto al camino que baja desde el monte de Triano al puente de Galindo, en los tres Concejos.

Que pase á la comisión permanente de agricultura una solicitud de la Anteiglesia de Meñaca sobre los perjuicios que causa el ganado caballar en los sembríos de los terrenos bajos y en las yerbas destinadas para el pasto del ganado vacuno.

Que se lleve á ejecución el camino de Bilbao á Plencia, siempre que cubiertos los presupuestos de los demás caminos hubiese fondos en la caja, excedentes de cien mil reales, y que lo que pase de esta cantidad se aplique á la construcción de dicho camino, con más el dinero que resulte de las amortizaciones sucesivas. Los apoderados de Bilbao y Bermeo se reservaron el derecho que competía á sus constituyentes en contra de esta resolución, y se adhirieron á la reserva los apoderados de otros cincuenta y tres pueblos.

Nombrar archivero del Señorío en Bilbao á Don Francisco de Mendía, Padre de Provincia, en consideración á sus méritos y servicios, y á la circunstancia de que hasta ahora ha desempeñado aquel destino un Padre de Provincia, á calidad de que la Diputación general designe el sueldo que deberá disfrutar, tomando por base el señalado al oficial del

archivo por el reglamento de oficinas. Habían solicitado este destino Mendía y el oficial del mismo archivo.

Subir á doce mil reales anuales el sueldo del vice ecónomo del establecimiento de expósitos Don Benito Gregorio de Otero, en atención á los méritos que ha contraído en el desempeño de su destino durante los muchos años que lo ejerce; pero con la condición expresa de que el que le suceda en el destino no gozará más que los nueve mil quinientos reales asignados por la Diputación general.

Aprobar la asignación de setecientos ducados anuales, aplicados por la Diputación á los Secretarios de justicia sobre el sueldo que disfrutaban hasta ahora, por la ocupación extraordinaria que tienen en las causas de oficio correspondientes á los pueblos del Infanzonado, formadas por el Corregidor, y en las que con su voto remiten los Jueces ordinarios al tribunal criminal extraordinario del Señorío; y autorizar á la misma Diputación, para que en el caso de que el Secretario de justicia no pueda atender á dichas causas, y considere aquélla conveniente el nombramiento de un escribano que se ocupe exclusivamente en la formación de los referidos procesos criminales, haga la designación de un sujeto hábil, capaz y activo que se encargue de esta comisión, al cual se aplicarán entonces los setecientos ducados anuales que se señalan por este trabajo á los Secretarios de justicia. Los apoderados de Bilbao é Ibárruri protestaron la segunda parte de este decreto.

Aprobar el aumento de sueldo concedido por la Diputación al procurador de pobres del Señorío, quedando fijado dicho sueldo para lo sucesivo en setecientos setenta reales, en lugar de los quinientos que se daban antes.

Desestimar la pretensión de los Síndicos y Secretarios de justicia de que se les indemnice de la caja general el perjuicio que han tenido en sus intereses con la supresión del

impuesto que se cobraba á la castaña que se extraía por mar.

Que continúen en sus puestos los oficiales supernumerarios de policía hasta que se los coloque en las primeras vacantes que ocurran de empleos fijos.

Que se prefiera á los cabos é individuos de la partida de miquelotes, en igualdad de circunstancias, para colocarlos en los destinos de celadores, porteros y demás de esta clase que vacaron.

Pasar á la Diputación los memoriales de varios de los oficiales militares del Señorío en que solicitan ser colocados en destinos análogos á sus circunstancias, y que se les señale entre tanto sobre la caja del Señorío algún diario ó pensión con qué atender á su subsistencia; á fin de que con arreglo á los méritos, graduaciones y circunstancias de cada uno de ellos acuerde la Diputación lo que estime conveniente.

Que se continúe satisfaciendo á Don Gil de Aresti la pensión que le asignó la Junta general en 1814 por haber quedado imposibilitado en la guerra de la Independencia, y que se le abonen los atrasos de su pensión desde el año 1823, en que dejó de percibirla.

Desestimar la solicitud de Don Santiago de Gorocica de que se le indemnicen de la caja del Señorío los tres mil seiscientos reales y tres maravedís que dejó de percibir como rematante del derecho del vino blanco consumido en Abando y Deusto en 1830.

Pasar con recomendación á la Diputación la solicitud de Don José Ignacio de Egurola en que pide que se le indemnice por vía de gracia de los perjuicios que tuvo en las obras que por encargo de la misma Diputación mandó hacer para la habilitación de la artillería de los fortines del Señorío.

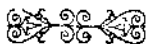
Pasar igualmente á la Diputación varias instancias en que se piden socorros ó destinos.

Que la Diputación renueve sus gestiones para conseguir que la cadena establecida en el alto de Santo Domingo, en el camino de Bilbao á Bermeo, se traslade á otro punto menos gravoso á los habitantes de los pueblos comarcanos, y que con más frecuencia atraviesan aquella cadena.

Se dieron las gracias al Corregidor y á los Diputados y Síndicos por la actividad, celo y exactitud con que han dirigido los negocios del Señorío.

Se confirmó el nombramiento de archivero general del Señorío, hecho por la Diputación en favor de Don Julián de Loizaga, con la dotación y las atribuciones que tuvo su hermano el Padre de Provincia Don José María de Loizaga, que con tanto celo y esmero desempeñó hasta su fallecimiento aquel destino.

Fueron elegidos primeros Diputados, Síndicos y Secretarios de justicia, respectivamente, en la forma acostumbrada, Don Pedro Pascual de Uhagón y Don Fernando de Zabala, Don Francisco Javier de Elexpuru y Don Francisco de Garraizabal, Don Miguel de Arauco y Don Francisco María de Vildósola.



CAPÍTULO VII



A[ntes] noticia del fallecimiento de Fernando séptimo, ocurrida en Madrid la tarde del 29 de Septiembre, se recibió en Bilbao á las dos y cuarto de la mañana del 2 de Octubre por un expreso dirigido por el Diputado general de Alava al Diputado del Señorío Don Pedro Pascual de Uhagón.¹

Aquel mismo día la fuerza armada realista, desobedeciendo las órdenes de la Diputación, se reunió en diferentes puntos de la Villa, con manifiesta intención de proclamar Rey de España al Infante Don Carlos. El día siguiente 3 de Octubre fué invadida por un tropel de gente la casa de la Diputación, viéndose obligados á huir por los tejados el Corregidor y el Diputado Uhagón, y á ocultarse durante algunos días, hasta que vigilados ya muy de cerca se entregaron al fin á sus enemigos. El día 3 hubo que lamentar, por desgracia, la muerte á mano airada de Don Cándido de Arécha-

¹ Así lo dice éste en el informe que con fecha de 28 de Mayo de 1834 presentó al Comisario regio que vino al Señorío, refiriéndole todo lo que le sucedió al mismo Uhagón desde el día expresado hasta que pudo regresar á Bilbao el 28 de Noviembre.

ga, sujeto muy estimado en Bilbao, y hermano político del Diputado Uhagón.

Proclamóse solemnemente el 4 á Don Carlos y se constituyó la Diputación general revolucionaria, con el Marqués de Valdespina por Corregidor, Don Francisco Javier de Bátiz y Don Fernando de Zabala Diputados, y Don Vicente de Iturzaeta Síndico. Bátiz no formaba parte del Gobierno universal del Señorío que se eligió en 1833. Había salido segundo Diputado por el bando gamboíno en las Juntas generales de 1827. Iturzaeta era segundo Síndico del bando ofaíno.¹

El alzamiento de Octubre de 1833 tuvo un carácter esencialmente realista, en el sentido que en aquel tiempo se daba á esta palabra. Así resulta de los términos en que se dirigió al país la Diputación revolucionaria. Para poner aun más de manifiesto el espíritu del alzamiento, publicó el Padre Negrete, del orden de San Francisco, con fecha 7 de Octubre, un folleto en el que se hace caso omiso por completo de los Fueros y de los intereses particulares de Vizcaya. El Padre Negrete termina su obra con estas palabras, que concretan el espíritu del alzamiento de un modo cumplido. «Volemos á alistarnos bajo el pendón sagrado de la Religión y la lealtad, que tiene siempre por protector al Dios de los ejércitos, y no dudemos que coronará nuestros comunes esfuerzos, dándonos bajo del imperio de nuestro virtuoso

¹ El partido carlista tuvo también su Diputación general durante toda la guerra civil, aunque no reunió las Juntas generales. Después de Bátiz y Zabala desempeñaron el cargo de Diputados los presbíteros Moguel y Landaia, y en los últimos tiempos de la guerra, la Diputación, establecida en Durango, se componía de Don José Ramón de Rotache y Don José Ramón de Urquijo como Diputados.

Monarca, Carlos V de Borbón, un reinado que nos haga olvidar todos nuestros males pasados. La lucha á que somos llamados es la más justa que ha visto el mundo. —Mas no; si como es nuestro deber corremos todos apresurados á las armas, tendremos el consuelo de que no habrá que pelear. El espanto y la cobardía son por disposición del Cielo compañeros inseparables de todos los que obran el mal; la defensa de una causa injusta (y más tanto como la presente, y contra un Rey) jamás deja de ir precedida del terror; esto hará que detenidos nuestros enemigos, á vista de nuestra noble y santa decisión, desistan de sus criminales intentos. De esto modo salvaremos sin sangre nuestra Religión, nuestro Rey, nuestro Padre, á la triste y seducida Reina con sus tiernas hijas, y los libramos también á ellos mismos de las inmensas desgracias que su traición haría venir sobre su cabeza y sobre las de sus infelices familias. —A las armas, pues, españoles todos; imitemos intrépidos para tener parte en estos bienes el heroico ejemplo que acaba de darnos la M. N. Villa de Bilbao y todo el Señorío de Vizcaya, que apenas recibieron la triste noticia de la muerte de nuestro amado Rey el Señor Don Fernando VIII, que en gloria esté, saliendo espontáneamente al campo como si cada uno hubiese sido avisado por un ángel, proclamaron denodados al extrañado Rey por quien suspiraban, gritando unánimes con un entusiasmo que es imposible describir: *Viva la Religión, Viva Carlos V, Rey de las Españas.* ¡Honor, gloria y alabanza eterna á tan dignos españoles! ¡Bendiciones sin fin á tan singulares héroes, que desconociendo el temor, y arrostrando impávidos los terribles peligros á que se exponían saliendo solos á la lid, rodeados de enemigos y sin poder ser socorridos de nadie, abrieron á la Nación senda tan gloriosa! Gritemos con ellos: **VIVA LA RELIGIÓN: VIVA NUESTRO LEGÍTIMO SOBERANO EL SEÑOR DON CARLOS V DE BORBÓN, Y**

HUYA PARA SIEMPRE DE NUESTRO SUELO LA IMPIEDAD Y LA PER-
FIDIA.»¹

Los carlistas trataron de organizar sus tropas, y exigieron gruesas cantidades para este fin; pero tuvieron que retirarse de Bilbao al aproximarse las tropas del Gobierno, mandadas por Sarsfield, que entraron en aquella Villa el 25 de Noviembre. Se reunieron el mismo día el Corregidor Mota, el Síndico Don Francisco Javier de Elexpuru y el Consultor Loízaga, y declararon que el primer Diputado del bando gamboino Don Fernando de Zabala se hallaba destituido de su magistratura por haberse puesto al frente de los sublevados, y que para reinstalar la Diputación, «que había sido disuelta y atrozmente ultrajada por los sublevados, durante los cincuenta y dos días de su anárquica dominación», se averiguase el paradero del primer Diputado por el bando oñacino Don Pedro Pascual de Uhagón, y se llamase al segundo del gamboino, Don Mariano de Eguiá, residente en Bilbao. Eguiá se presentó en seguida.

¹ *Demostración del incontestable derecho que el Señor Don Carlos de Borbón tiene al trono de España.* Lleva la fecha de 7 de Octubre de 1873 y la firma de *El Restaurador* sin pie de imprenta. En 1837 se imprimió en Bilbao, en la imprenta de Depont, otro folleto, escrito por Don Antonio María de Bárcena y Mendieta, Magistrado honorario de la Audiencia de Burgos, interinamente Auditor de guerra del ejército de operaciones del Norte, y Corregidor de Vizcaya, con el título siguiente: *Refutación al folleto publicado en Bilbao por el llamado Restaurador en 7 de Octubre de 1833, en que se propuso la demostración del incontestable derecho que el Señor Don Carlos de Borbón tiene al trono de España.* Asegura Bárcena que la refutación estaba escrita en Noviembre del mismo año 1833.

No quiere decir esto ciertamente que los carlistas y los cristinos vizcaínos, no entendiesen generalmente, aquéllos que con Don Carlos por Rey se aseguraban los Fueros, y los otros que el Gobierno de la Reina respetaría nuestras leyes si el país no le hostilizaba, y que era grave imprudencia, cuando menos, el proceder de diferente modo.

El 26 dió la Diputación, firmando solamente Egufá como Diputado, de acuerdo con el general Sarsfield, una proclama de indulto para los que se presentasen en el término de quince días.

El 28 se agregó Uhagón á la Diputación; y después de conferenciar con el General en jefe del ejército del Norte Valdés, que había llegado á Bilbao, se dispuso la publicación de una nueva proclama en castellano y vascuence, en la que, entre otras cosas, se decía á los vizcaínos lo que sigue: «Al empuñar las armas os hicieron creer que de esta resolución pendía la conservación de los venerandos Fueros de Vizcaya, cuando sólo depende de vuestra pronta y entera sumisión á nuestra Señora y Soberana Isabel segunda.»

El 30 de Noviembre se dirigió la Diputación á la Reina Gobernadora, haciendo una extensa relación del alzamiento carlista, y atribuyéndolo á unos treinta seglares, y al clero secular y regular, pero más especialmente á la comunidad de San Francisco, que había elaborado más de dos millones de cartuchos. En vista de que los sublevados habían dejado exhaustas las cajas del Señorío, acordó la Diputación pedir á la Junta de comercio para atender á los gastos urgentes un millón de reales, que se proponía pagar aumentando los derechos sobre el tabaco.

El primero de Diciembre pasaron los Diputados generales á los pueblos una circular, trasladando un oficio del Conde Armildez de Toledo, que había quedado de Comandante general, en el que se amenaza con entregar á una comisión militar á los que no entregasen las armas que tuviesen. La Diputación encarga á las Justicias el cumplimiento de lo mandado para que cesen «los efectos de esta desastrosa lucha.»

El 2 publicó el General en jefe una proclama á los habitantes de las Provincias Vascongadas, fechada en Durango,

en la que previene que serán pasados por las armas los que después de haberse acogido al indulto se pasen de nuevo á la facción; los que continúen incitando á la rebelión; los que no entreguen las armas ó efectos de guerra que tengan, ó no denuncien el sitio donde los hay, si lo saben; los que difundan papeles subversivos; y las Justicias, que por miedo infundado no recojan las armas, ó permitan sacar gente á los cabecillas, y dejen que anden libremente, y se intercepten los correos, pudiendo evitarlo.

Se acordó el 4 pedir á la Junta de comercio el millón de reales que se necesitaba, porque no era fácil encontrarlo en la plaza de otro modo. Comunicó este día el Corregidor á la Diputación la lista de los empleados destituidos por rebeldes y desafectos.

Se contestó el 7 á la real cédula en que la Reina Gobernadora encargaba que se hiciesen los funerales por el alma del Rey difunto, que se convocarían por este fin las Juntas generales cuando lo permitiesen las circunstancias.

A excitación del Conde Armildez de Toledo, se resolvió levantar una fuerza de doscientos ó trescientos hombres, para cuya organización se nombró una Junta de armamento, en la que representaban á la Diputación Don Antonio de Arana, Don Gabriel de Orbeagozo y Don Miguel de Larraza, y á la autoridad militar Don José Fermín Conget y Don Jacinto de Romarate. Se señalaron seis reales diarios de haber á los soldados de este cuerpo; siete á los cabos y cornetas; ocho á los sargentos segundos, y nueve á los primeros. La edad fijada para el alistamiento era entre diez y siete y cuarenta años.

Al transmitir la Diputación el 11 á los pueblos un oficio del Comandante general, imponiendo mil duros de multa á la Villa de Ochandiano, por haberse interceptado en ella un correo, y conminando con igual castigo á los pueblos donde

ocurriesen tales interceptaciones, les decía: «patentes son los beneficios que este país ha recogido con la prosencia de las tropas de la Reina nuestra Señora, pues á ellas debe Vizcaya la restitución de su juventud, arrancada violentamente á las armas, la conservación de sus bienes, y la dispersión de los revoltosos, los cuales ó fugitivos, ó ocultos, y todos despavoridos, buscan su precaria existencia al apoyo de nuevos delitos. Sepárense, pues, los sumisos vizcaínos de nueva complicidad, y las Justicias redoblen su celo para que la conducta ulterior de unos y otros nos exima á todos de los gravámenes y castigos que de otra manera recaerán sobre los que se hiciesen delincuentes.»

Se pasó el mismo día una circular, incluyendo un oficio del Comandante general, en el que se prohíbe la venta y tráfico de pólvora y municiones de guerra, se hacen prevenciones sobre la venta de armas por los armeros, y sobre la entrega de las armas que se ha mandado recoger y depositar.

En otra circular expedida el 13, y firmada por el Secretario de policía Don Francisco María de Vildósola, se insertaba un oficio del mismo Comandante general, en que dico á la Diputación, que el plazo para el indulto debo entenderse desde que se haya publicado ósto en cada pueblo, y que se halla autorizado por el General en jefe, como resulta del oficio que trasmite á la Diputación, para ampliar el indulto de la vida á todos los que se arrepintiesen de haber tomado las armas, sin exceptuar á nadie, ni aun á Don Fernando de Zabala y Don Simón de la Torre, y demás que estén puestos á la cabeza de los facciosos, siempre que den pruebas positivas de arrepentimiento, y contribuyan á que los que los siguen vuelvan á sus casas.

La Diputación general de Vizcaya se dirigió al Obispo de Calahorra, quejándose de la parte que tomaba el clero en la

sublevación carlista. La contestación del Prelado, fechada el 19, es como sigue: «He visto con sentimiento el oficio que V. S. se sirva dirigirme sin fecha, aunque es del presente mes de Diciembre, que recibo en este correo, en el que me manifiesta la justa queja que tiene de que el clero, tanto secular como regular de su territorio, no preste todavía la cooperación que era de esperarse de su sagrado carácter para la completa pacificación del Señorío, y que continúan algunos eclesiásticos atizando entre los pacíficos habitantes el fuego de la discordia, y provocándolos á otra nueva rebelión.—Debo creer á una corporación tan respetable como la de V. S., y por lo mismo me ha sido la noticia más dolorosa, pues desde mi llegada al Obispado tenía los mejores informes del todo el clero, especialmente del de esa Villa de Bilbao.—Con esta misma fecha oficio, por medio de mi secretario de Cámara á ese mi Vicario eclesiástico, y á otros donde pueda temerse no esté todavía extinguido del todo el fuego de la discordia, para que tomando nociones de cada uno de los eclesiásticos de sus respectivos distritos, les hagan entender por todos los medios posibles sus deberes como sacerdotes y como vasallos de un Gobierno legítimo, cual es el de nuestra inocente y legítima Reina; y que si no obedeciesen á sus insinuaciones, me lo avisen á la mayor brevedad, para tomar yo las providencias que crea oportunas.—He tomado este género de disposición, porque crea V. S. que se necesita en el día mucho tino para colmar las pasiones, y se persuadirá de esto al saber, que después de haber comprometido mi secretaría y familiares, enviando sólo con un sobre papeles subversivos, estoy recibiendo continuamente anónimos contra mi persona, y el último es de sello de Madrid, insultándome y llenándome de diatribas y amenazas por la sencilla exposición que con fecha 15 de Noviembre hice á nuestra Reina.—Conozca V. S. cuan sensible es á un

Obispo ver deprimida, no su persona, que es lo menos, sino su autoridad y dignidad, y que lejos de servir su voz para atraer la paz y la concordia, sirva para atizar más y más la tea de la desunión. Hago á V. S. esta insinuación, para que con su justa y prudente discreción se penetre de mi lastimosa situación.—El Dios de las Misericordias nos conceda aquella paz que necesitamos, y por la que tanto anhela mi corazón, como se lo pido continuamente en mis oraciones.»

Se celebró el 16 Regimiento general, con asistencia de los Padres de Provincia Don Joaquín de Ugarte, Don Manuel María de Aldecoa, Don Romualdo de Landeche, Don Serapio de la Hormaza y Don José María de Gortazar, acordándose, entre otras cosas, pedir á S. M. la confirmación de los Fueros, y que en su día venga á jurarlos la Reina Doña Isabel segunda.¹

¹ Aunque el General Castañón había publicado un bando en Tolosa el 30 de Noviembre, suspendiendo «los Fueros y privilegios de que disfrutaban las Provincias de Vizcaya y Alava, en consecuencia de la declaración en estado de guerra, y reasumidas y dependientes de mi autoridad todas las que existan en dichas Provincias en todos los ramos de gobierno y administración, hasta la soberana resolución de S. M. la Reina nuestra Señora, exceptuando la de Guipúzcoa en la parte que está encomendada á su Diputación legítima», este bando no tuvo en realidad distinta aplicación en Guipúzcoa que en las otras Provincias, menos en cuanto á que se permitió la reunión de Juntas generales en Guipúzcoa en Julio del año siguiente de 1834 mientras que respecto de Vizcaya se declaró por real orden comunicada por Burgos, á la sazón Ministro de Fomento, en Enero del mismo año, que no se estimaba «conveniente la convocación de la Junta general» en el estado en que el país se hallaba, sin que la autorizase con presencia de todas las circunstancias el General en Jefe del ejército. El bando de Castañón, muy imprudente sin duda en aquellas circunstancias, no parece que tuviese, por lo demás, otro alcance que el de dejar en suspenso los efectos de las leyes forales que pudiesen entorpecer la acción de la autoridad militar, según de sus propias palabras se deduce.

El 23 fué nombrado comisionado en Corte el Consultor Don Casimiro de Loizaga.

Se pasó el 24 la circular siguiente, firmada por el Corregidor, los Diputados Uhagón y Eguiá, y el secretario de policía Vildósola:

«Se hace reprehensible y digna de castigo la omisión que las Justicias de los pueblos del Señorío observan en la remisión de partes acerca de la aparición de facciosos y sus operaciones, siendo así que son notorias muchas ocurrencias de que V. no ha dado noticia alguna, sin embargo de haber tenido efecto en los términos de su jurisdicción; y para que en adelante no se vea esta Diputación en el caso de imponer á V. las multas y castigo á que le hará responsable, si continuase en igual apatía, le ordeno que en todo caso en que los facciosos se presenten á la vista de ese pueblo, ó llegase á noticia de V. que transiten por otro cualquiera, procure V. averiguar su número y los cabecillas que los acaudillan, dando aviso con la mayor antelación posible, y por los medios más seguros, á fin de que con este conocimiento puedan tomarse medidas eficaces para su exterminio. Los mismos avisos deberán igualmente participarse cuando pasen tropas de la REINA nuestra Señora, así como sobre las personas que no se hubiesen acogido al indulto, ó hubiesen vuelto á la facción después de indultadas, pasando á esta Diputación una razón nominal de ellas, y de los medios de fortuna que se les conozcan ó consideren.

»La Vizcaya feliz con sus Fueros, expone diariamente la suerte futura cuanto más difiera su sumisión á la REINA nuestra Señora Doña ISABEL II, y la Diputación, que sólo tiene por objeto conservar la permanencia de aquellas leyes, tan justamente veneradas, mal puede ofrecer á los vizcaínos un punto de salvación, si ellos por su parte no concurren á restablecer el orden y la tranquilidad pública, disipando

las bandas de rebeldes que infestan el país, negándoles todo auxilio, y huyendo de él las como de una langosta exterminadora. Religión, paz y Fueros es lo que la augusta ISABEL II ofrece en cambio de nuestra sumisión, y vandalismo, desórden, despotismo y anarquía es lo que ofrecen Zabala y sus secuaces.

»Hágalo V. así conocer á todos los habitantes de esa jurisdicción, interesándolos á que cooperen con eficacia para que este suelo recobre la calma de que están interesados en privarle los caudillos que capitanean la facción, porque así esperan esquivarse de las penas que necesariamente recaerán sobre ellos.»

El 25 fué nombrado Secretario de gobierno Don Francisco de Hormaeche, que era Regidor del Señorío, para sustituir á Soloeta Balzola, que se hallaba enfermo.

Se hizo saber á los pueblos el 27: que habiéndose sacado á remate los arbitrios ordinarios del Señorío, quedaron sin rematarse los de los correspondientes á varios partidos por falta de licitadores; que precisada la Diputación á cubrir sus gastos ordinarios, y los extraordinarios que piden las actuales deplorables circunstancias, no puede menos de realizar las cantidades presupuestas; para lo cual se ha dispuesto que los pueblos que componen cada uno de los partidos no arrendados, queden encabezados por el valor aproximado de sus consumos, y que pongan en tesorería la cantidad que les corresponde, en dos plazos, á su riesgo, por mitad, para el 30 de Junio y el 31 del año próximo venidero. Se autoriza á los Ayuntamientos encabezados, para que por los medios que mejor les parezcan recauden los arbitrios correspondientes al Señorío sobre los vinos de pasto común y generosos, aceite y vinagre, que se consuman en su respectiva jurisdicción. Los pueblos que tengan que reclamar alguna rectificación por inexactitudes cometidas respecto á

lo que les corresponde por el encabezamiento, por haberse hecho la distribución con urgencia, y con falta de datos positivos, podrán reclamar con las escrituras fehacientes de los últimos remates ó arriendos, cargándose las diferencias á los pueblos que resultaron favorecidos, porque debe hacerse efectiva la cantidad repartida, y dichas escrituras han de presentarse antes del 31 de Enero, para que se hagan á tiempo las óperaciones consiguientes á la reclamación.

Se nombró el 30 una Junta de subsistencias, compuesta de Don Romualdo de Landecho, Presidente, Don Serapio de la Hormaza, Don Angel Martínez, Don Francisco de Jane, Don José Pantaleón de Aguirre, Don Santiago de Ingunza y Don Diego Martínez de Tejada.

Se mandó el 4 de Enero entregar ochocientos reales al 1834 postillón portador del convenio que hizo el agente consular francés en San Sebastián con los carlistas para que se pusiese en libertad al Corregidor Mota y al Diputado Uhagón. Se mandó también abonar mil doscientos reales para las obras del fuerte de San Francisco, aunque consignando que este pago no era de la incumbencia de la Diputación, pero que se hacía por no desagradar al Comandante general.

Se acordó que desde el día 17 saliese á luz el Boletín oficial de Vizcaya en los términos que se explican en el prospecto que se circuló al efecto. Fundábase la Diputación para tomar este acuerdo, en que de real orden estaba encargado que haya Boletines oficiales en los pueblos donde residen las autoridades superiores de cada Provincia, y en que consideraba que ha de producir muchas ventajas á Vizcaya la publicación de un periódico, que supla hasta cierto punto á la vereda á que han estado acostumbrados los habitantes del Señorío, contribuya á rectificar el deplorable extravío de la opinión pública, y facilite la circulación de todos los mandatos superiores. Se dice en el prospecto que el Bole-

tín contendrá, además de la parte oficial, artículos destinados á rectificar la opinión extraviada, á la industria, artes, comercio, agricultura y letras y á dar noticia de los inventos y de las obras recomendables, pero que no se insertará nada que pueda zaherir á autoridades ni á particulares. Se publicará los martes y viernes en casa de Don Nicolás Delmas.

Con motivo de las amenazas de los carlistas de incendiar fincas, mandó el Corregidor el 6, de acuerdo con el Comandante general, que todos los edificios que fuesen incendiados se reparasen á costa de los que han pertenecido á alguno de los diez y ocho batallones armados del Señorío, durante la rebelión, y los que se hubiesen incorporado después á la banda de los facciosos, con arreglo á la proporción establecida en la circular en que así se previene. Responderán de lo que toque pagar á cada batallón todos sus individuos; los padres de los armados solteros pagarán por sus hijos. Se indemnizarán también á costa de los paisanos armados los daños que se hiciesen á los propietarios en los campos. Se exceptuaba de esta responsabilidad á los que tomaron las armas en defensa de la Reina, aun cuando hubiesen pertenecido antes á los batallones realistas.

La Junta de subsistencias creada el 30 de Diciembre último, propuso á la Diputación el 9 de Enero, que no permitiendo el tiempo ni las circunstancias formar una estadística para guardar la posible igualdad entre los pueblos en los servicios y suministros que se hagan á las tropas de la Reina, no hay otro arbitrio que tomar por base del dividendo la estadística territorial formada en 1823, aunque contiene algunos agravios comparando unos pueblos con otros. Partiendo de este dato, la Junta dividía el país en nueve distritos, cuyas cabezas eran Bilbao, Portugalete, Balmaseda, Orduña, Villaro, Durango, Marquina, Guernica y Munguía; y

opinaba que la Diputación podía autorizar á los pueblos á que para los servicios y suministros hechos á las tropas hasta ahora, y los que se hagan en todo el año 1834, echen mano de sus propios, é impongan sobre todos los artículos de consumo los recargos que estimen convenientes; y que si no les bastan estos recursos, puedan echar derramas vecinales y de propiedad, á un mismo tiempo y por mitades, graduando para las primoras á los vecinos y residentes con arreglo á sus medios de fortuna. Proponía también la Junta el reglamento para dichos servicios y suministros, en virtud del cual se creaban Juntas de partido que cuidasen de todo lo concerniente á este ramo.

La Diputación general, haciéndose cargo de que en la triste situación en que actualmente se halla este país sería tal vez imposible arreglar el servicio del ejército de un modo más acabado y perfecto, aprobó el 15 en todas sus partes el plan de la comisión de subsistencias, y mandó que se imprimiera y circulara por todos los pueblos del Señorío para que tuviese cumplido efecto. También acordó dar las gracias á los individuos de dicha comisión por la constancia y el celo con que desempeñaron su primer trabajo, y encargar á las Justicias de las cabozas de partido que convoquen inmediatamente á las Justicias de los pueblos de que cada uno se compone, para que de concierto, y sujetándose á lo prescrito en el dictamen de la Junta de subsistencias, se organice el método más fácil, sencillo y equitativo de subvenir con toda celeridad á las necesidades de las tropas, que han venido á restituir la paz á nuestros hogares, y el dominio á las leyes holladas tantas voces por los execrables autores de las presentes calamidades.

Se dió el uso el 10 á una real orden de 30 de Diciembre anterior, por la que se aprueba con ciertas condiciones el proyecto presentado por Don Juan José de Yandiola, como

representantes de varios pueblos, para abrir el camino de Bilbao á Balmaseda, y otro que desde Baracaldo y Somorrostro, con un ramal á Portugalote y otro á Galdames, vaya á enlazarse en Sopuerta con el de Castro á Borcedo, valiéndose solamente de los arbitrios aprobados, con exclusión del impuesto sobre el chacolí. Proponía el Síndico que se diese el uso, con que los pueblos empresarios costeen las obras con sus recursos propios y el rendimiento de los portazgos que se establezcan, sin privar á los demás pueblos de lo que les corresponda en cualquier impuesto general del Señorío.

Mandó el Corregidor el 17, que en el término de ocho días se cortasen por el pié los jarales y bortales, por cuenta de sus dueños, en la distancia de seiscientos pies de la cintería de las carreteras, y descepándose los jarales y bortales en el término de otros treinta días, de manera que no pueda repoblarse el bosque, y transiten los caminantes sin recelo alguno.

El mismo día nombró la Diputación á Don Gregorio de Lezama Leguizamón y al Teniente Coronel retirado Don Antonio de Arriaga, para que representasen á Vizcaya en el Cuartel general, de acuerdo con los deseos del General en jefe.

Pasó el 21 la Diputación una circular, en que anuncia que se empleará con preferencia en las obras públicas á los mozos que se refugien en los pueblos guarnecidos por las tropas de la Reina, socorriéndose entre tanto á los que fuesen hijos de artesanos ó colonos, con ración y albergue.

El 24 se publicó un bando, de acuerdo con el General en jefe, con el objeto de proteger á los mozos que abandonasen las filas carlistas, y señalándoles una gratificación por el fusil, la canana y los cartuchos con que se presentaren. El mes de Marzo siguiente se acordó pasar tres reales diarios á los mozos presentados.

Encargó la Diputación el 4 de Febrero á la Junta de subsistencias que discurriera los medios de arbitrar doscientos mil reales mensuales que necesitaba, procurando imponerlos con igualdad, sobre todo á las clases que no hubieran sido gravadas por los rebeldes.

Se congregó el Regimiento general el 22, con asistencia del Corregidor, el Diputado Uhagón, el Síndico Elexpuru, siete Padres de Provincia, cinco Regidores, y el Secretario habilitado Hormaeche. Dióse cuenta de un oficio de Don Mariano de Eguía, en el quo dice, que no permitiéndole el estado de su salud concurrir á las sesiones de la Diputación, era indispensable que se tratase de reemplazarle hasta que pueda concurrir de nuevo.

Reconocieron los asistentes que era necesario que se fijase por las Juntas generales la regla para reemplazar por su orden á los Diputados, Regidores, Síndicos y Secretarios de Justicia; pero siendo urgente el reemplazo de Eguía, único Diputado con aptitud legal del bando gamboíno, acordaron, como medida provisional, hasta que aquéllas se reuniesen, que los Regidores electos y en suerte, por el orden gradual de sus nombramientos, supliesen á los Diputados del bando respectivo. Y como resultaba que los dos primeros Regidores electos, que eran el Conde de Vallehermoso y Don Manuel María de Murga se hallaban ausentes, y el tercero, Don Guillermo de Uhagón, tenía el obstáculo de ser su hermano Diputado en ejercicio, se trasmitió su derecho al primer Regidor en suerte Don Florancio de Lecanda, el cual juró en la forma acostumbrada, aunque protestando que entablaría la correspondiente reclamación por la ilegalidad con que en su concepto se procedió al reputarle por suplente del Diputado general.

Se acordó el 25 poner en conocimiento del Ayuntamiento de Bilbao y de la Junta de comercio, que era indispensable

imponer nuevas cargas, con arreglo á lo propuesto por la Junta de subsistencias.

Se pasó el 26 una circular á los pueblos, encargándoles que contribuyesen con los cupos que les habian sido repartidos por las respectivas Juntas de subsistencias, y autorizando á los Alcaldes de las cabezas de partido para expedir apremios á costa de los morosos.

El primero de Marzo se reunieron en la Diputación los Vicarios eclesiásticos de Vizcaya y los representantes de varios conventos, para tratar de los medios de cubrir una contribución de ochenta mil reales mensuales que se iba á imponer al clero.

Se trató el 5 con los comisionados de la Junta de comercio de arbitrar recursos por medio de un préstamo, que habría de reintegrarse con un impuesto sobre el comercio y los consumos.

Se dirigió el 7, de acuerdo con el Comandante general, que era á la sazón Don Baldomero Espartero una allocución al país excitándole á la paz.

Se acordó el 11, que además de los veinte mil reales entregados al Corregidor Mota en recompensa de los servicios que había prestado á Vizcaya y á la causa foral, se le entregasen otros seis mil, según se acostumbraba en tales casos, con motivo del viaje que iba á hacer para tomar posesión de una plaza de Alcalde de Casa y Corte.

El 12 se dió el uso, en Diputación á que asistían el Teniente general Don Francisco de Paula Granda, en funciones de Corregidor, y Uhagón y Lecanda, como Diputados en ejercicio, y de acuerdo con el dictamen del Síndico Elexpuru, asesorado de Don Juan José María de Yandiola, á una real orden comunicada por el Ministerio de Gracia y Justicia en 27 de Enero, en la que con motivo de la proximidad de la cuaresma se excitaba á los Prelados del

clero secular y regular, á que bajo su responsabilidad tomasen las medidas preventivas más enérgicas para impedir que se extravíe la opinión de los fieles en el púlpito y en el confesonario, y se enerve el sagrado principio de la obediencia al Gobierno legítimo.

En iguales términos se dió también el uso el mismo día, sin perjuicio de los Fueros y franquezas del Señorío, á otra real orden de primero del corriente, en la cual, fundándose en los gastos enormes que ocasiona la sublevación que affige á esta Provincia, se autoriza á la Diputación para que practique los recargos que juzgue conducentes al importante fin de conseguir una pacificación completa, comprendiendo en ellos á los eclesiásticos, con arreglo á la disposición literal de la ley sexta, título tercero, libro primero de la Novísima Recopilación, que les declara obligados en costa que se haga para velar y guardar la Villa en tiempo de menester.

Se juntaron el 13 los representantes de los patronos de las iglesias del Señorío, que fueron convocados el 4, para proceder al reparto de una contribución que se consideró preciso imponerles, pues que era justo que en tan críticas y apuradas circunstancias ayudasen á llevar el peso de las cargas públicas que gravita sobre las demás clases de una manera que apenas pueden resistir. Los representantes nombraron una comisión que hiciese el reparto del cuatro por ciento del producto de los patronatos.

Se dió el uso el 15 á la real cédula, por la cual se uniforman los tribunales superiores, y se manda observar la nueva división y distribución de los mismos, creándose las reales Audiencias de Burgos (á la cual corresponderá Vizcaya) y Albacete. El Síndico, asesorado por Yandiola, no hallaba reparo en que se cumpliese dicha cédula, siempre que conserve este Señorío el número y jerarquía de juzgado y tribunales que hasta ahora ha tenido y

tiene con arreglo á sus Fueros, tanto en su distrito como fuera de él.

Se aprobó el 19 el reglamento para la exacción del impuesto de veinte y cinco maravedís en quintal de vena que se extraiga por mar ó tierra del Señorío, y el 20 se dictaron varias reglas para facilitar los suministros á las tropas.

Se acordó el 25 elevar una exposición á la Reina, pidiendo el envío de refuerzos con qué contener á las facciones, que habían tenido la osadía de atacar á Portugalete, Bilbao y Orduña los días 20 y 21 del corriente.

Por real orden de 11 de Febrero se dispuso que fuese Don José Alonso, Ministro supernumerario de la Audiencia de Madrid, «con el carácter de Comisario regio y Corregidor de Bilbao á esta Villa, y con el objeto de inquirir lo que juzgue conveniente sobre los delitos de conspiración é infidencia de cualquiera clase, proceder á la formación de causa contra sus autores y cómplices, á quienes impondrá con arreglo á las leyes penas prontas y ejemplares, pasando antes de su ejecución un tanto de las sentencias que pronuncie al Comandante general de las armas del Señorío, quien dentro de un breve término responderá quedar enterado, ó expondrá en contestación si hubiese algún inconveniente de llevarlas á efecto, en cuyo caso se elevará el asunto á conocimiento de S. M. para la resolución oportuna; siendo también la voluntad soberana que dicho Comisario proponga las medidas que estime convenientes para conseguir el restablecimiento del orden, la omnímoda sumisión á las autoridades y la pacificación de los pueblos de Vizcaya». El Síndico Eloxpuru propuso, con acuerdo de Yandíola, que se usase y cumpliese dicha real orden siempre que proceda Alonso «en el ejercicio de sus funciones con arreglo á las leyes consignadas en los Fueros de este M. M. y M. L. Señorío de Vizcaya, confirmadas por S. M. el Señor

Don Fernando VII y por sus augustos predecesores del modo más solemne, y guardando el orden y jerarquía de los tribunales establecidos por el mismo código, dejando siempre ilesas las libertades y franquezas de este país.» Alonso tomó posesión de su destino el 31 de Marzo.

Se dió el uso el mismo día 31 á otra real orden del 2 comunicada á la Diputación como Subdelegado principal del Señorío de Vizcaya, en la que se manda que el ramo de policía en las Provincias Vascongadas y Navarra se ponga exclusivamente á cargo de los Comisarios regios nombrados ó que se nombrasen. Dijo el Síndico en su informe: que no hallaba reparo en que se trasladase el ramo de policía al Comisario regio mientras duren las circunstancias que han motivado la referida real orden, porque el Corregidor y Comisario es Presidente de la Diputación, á cargo de la cual ha corrido este ramo.

Alonso dirigió el 5 de Abril la alocución siguiente:

«HABITANTES DEL SEÑORÍO DE VIZCAYA:

»Ya estoy entre vosotros. Vengo á proteger á los buenos; á perseguir y castigar á los malos; mi misión por lo tanto sólo debe ser terrible para éstos.

»Los leales, los decididos por la justa causa de nuestra angelical Soberana la REINA nuestra Señora Doña ISABEL II, y los que se distinguen por sus servicios, encontrarán en mí un admirador de sus virtudes y de su lealtad; yo las haré conocer de nuestra augusta Reina Gobernadora, cuya alma grande y generosa no las oirá sin aprecio, ni dejará sin recompensa.

»Los habitantes pacíficos que sólo se ocupen en las especulaciones de su comercio, en las tareas de sus talleres, en el honroso cultivo de los campos, y en el ejercicio de una industria lícita y laudable; en fin, todos los hombres de bien y sumisos á las leyes, hallarán en mí un protector de-

cidido de la seguridad de sus personas y fortunas, á las que no permitiré que nadie impunemente ataque.

» Los rebeldes, los que se atrevan á minar el trono y los derechos indestructibles de la aurora radiante de nuestra ventura, los que favorezcan á esas hordas de asesinos de su misma patria, los que de cualquier modo intenten subvertir el orden, no encontrarán sino la severidad de la ley, el rigor de la justicia, la prisión, la deportación, y el suplicio, á que ellos mismos quieren conducirse.

» Mi corazón sufrirá cuando me vea en el caso de castigar; pero ni mi deber ni mi conocida firmeza como Juez, cedorán jamás á mi compasión y sensibilidad como hombre. Tal será mi comportamiento en el desempeño de las facultades extraordinarias, que no se me han conferido por pura ostentación y aparato.

» Como Corregidor me hallareis siempre dispuesto á administrar cumplida justicia, sin conocer la parcialidad ni la prevención. Respetaré vuestras leyes; y ellas y no yo serán las que decidan vuestras diferencias.

» La policía no será una palabra vacía de sentido para el malo, ni molesta ó incómoda para el bueno. Descubrirá á aquél, aunque se esconda en las entrañas de la tierra; y todo para castigarlo por la seguridad del Estado y de las personas y propiedad de los buenos.

» Infatigable en el trabajo, nada omitiré para llenar tan graves deberes, ni descansaré tampoco, ni decaerá mi constancia hasta que vea cumplidos los interesantes objetos de mi honrosa misión; hasta que restablecida la paz, y con ella las mejoras administrativas trazadas por la ilustración eminente de la excelsa Madre de nuestra augusta Soberana, vea caminar este Señorío al alto grado de prosperidad y esplendor á que la actividad y aplicación de sus habitantes lo tienen destinado.

»Excusadme, vizcaínos, con vuestra conducta la precisión de imponer castigos; deseched para ello las maquinaciones de los malos; llamad y atraed á vuestros hijos y á vuestros parientes y amigos, que seducidos ó extraviados se hallen en las filas de la rebelión; libradlos así de las infamias de la execración pública, y de la justa nota de asesinos de su patria, de ladrones de sus mismos hermanos, y de indignos del nombre vizcaíno. Así se llenarán más cumplidamente los anhelos maternales de la excelsa cuanto piadosa Reina Gobernadora; así, haciendo innecesaria la severidad de mi inflexible deber, me quedará sólo el agradable y lisonjero de procurar vuestro bien, y el de este país privilegiado y digno de la suerte más venturosa.»

El ramo de literatura, que puedo llamarse gubernamental, porque en él se comprenden las alocuciones, circulares y proclamas de autoridades, penetradas de la magnitud de su propia importancia, es, á no dudarlo, el más enojoso y árido de todos; pero no es posible desatenderlo, sin privar á la posteridad de un cuadro generalmente exacto en que se retratan el carácter y los propósitos de los que se han creído obligados á emplear las armas de la persuasión y el consejo respecto de los pueblos que puso en sus manos la fortuna.

Publicó el Comisario regio el 6 un bando, en el que manda que no se ausente persona alguna de Bilbao sin carta de seguridad, y sin pasaporte si es para más de seis leguas de distancia, y que las que vengan al mercado han de traer una licencia, que se concederá en vista de un atestado de la Justicia y del cura párroco de los pueblos respectivos.

Se acordó el mismo día reclamar de la Hacienda militar el reintegro de las cantidades que se le habían adelantado, y proceder al embargo de los bienes del contador Labayen, sus dependientes y fiadores, hasta que se reintegrase el Señorío del descubierto que había en las cajas.

Se hizo el 13 un convenio con los representantes del comercio para el anticipo y reintegro de un millón de reales, y en Regimiento general celebrado el 17, se acordó levantar un empréstito de dos millones, encargando á los Padres de Provincia Murga, Aldecoa y Landecho que estudiasen los medios de llevarlo á cabo.

Resolvió la Diputación el 29 armar dos lanchas cañoneras para la defensa de la costa y crear brigadas fijas para el servicio del ejército.

A consecuencia de haber parecido al Comisario regio que era poco decoroso recibir los emolumentos que por la firma pagaban los litigantes á los Corregidores, acordó la Diputación el 2 de Mayo asignarle la cantidad de tres mil reales mensuales en este concepto, y que el escribano Don Benito de Ansuátegui quedase encargado de recaudar los emolumentos.

Tuvo que aplazarse el 5, por falta de fondos, el pago de un plazo de la cantidad tomada para las obras de la nueva casa de la Diputación.

El 7 pasó el Comisario regio la circular siguiente á las Justicias del Señorío.

«Los perturbadores del orden público, lo son ordinariamente también del de las familias; procuran envolver en sus crímenes á todos cuantos les es posible, y prevaleciéndose de su fuerza y de la ventaja que ésta les da sobre los pueblos y sus inermes habitantes, sacan de éstos los defensores de sus extravíos, de su desobediencia y de sus delitos.—No tienen otro objeto esas órdenes circuladas estos días á los pueblos por los Jefes de la escandalosa rebelión, que llevar apresuradamente este Señorío á su ruina y desolación; buscar en los solteros desde diez y seis á cuarenta años ciegos instrumentos y sostenedores de sus atentados y de su precaria existencia; envolverlos en su ruina; y desde luego dejar

los talleres sin brazos, los campos sin cultivadores, los padres sin el auxilio de los hijos, las viudas sin los que les proporcionan su sustento; en una palabra, desoladas las familias, desiertos los pueblos, y restituidos los campos al estado salvaje de la naturaleza. —Estos mismos males, como si todavía no fuesen bastante poderosos para destruir este malhadado país, producen otros que les son consiguientes por necesidad. Al paso que se apartan del trabajo tantas personas que con él proporcionaban la abundancia, creaban y aumentaban la riqueza de este país, obstruyen para mucho tiempo los manantiales de ésta, arrebatan el fruto de la aplicación y de los sudores de muchos años, aniquilan y consumen no sólo los caudales públicos sino también los de los particulares. —Los rebeldes han de comer, carecen de orden y arreglo económico, y consumen por lo mismo más que lo que necesitan; cuanto mayor su número, tanto mayores las exacciones y los pedidos. Las tropas de la Reina nuestra Señora, destinadas á su persecución, á pesar del orden rígido que se observa en sus suministros, tienen que vivir sobre el país, como es justo y merecido; si el número de sus contrarios se aumenta, se aumentará también el suyo, y no tardará mucho en verificarse, y de esta suerte también lo que los pueblos hayan de contribuir. —¿Y no se desgastarán éstos de que la duración de esta guerra ha de consumir su ruina y la de sus habitantes? ¿Y creerán todavía á las quiméricas esperanzas con que procuran alucinarlos los únicos autores de sus males, viendo prácticamente que por ellos sufren exacciones, que no habrían sin ellos conocido; que por ellos aquí parece el padre, allá el hijo, en otra parte el marido, en otra el hermano; y de consiguiente que por ellos el país se destruye, se cubren de luto y de desolación las familias, y desaparece su riqueza y el patrimonio que debieran haber legado á sus hijos? —¿Y habrá

pueblos, y habrá habitantes que quieran suicidarse de esta suerte y asesinar á su misma Patria y á sus propias familias? Tales serán los que obedezcan las órdenes circuladas por los rebeldes para la requisición de los mozos solteros, y tomar esas armas parricidas destinadas al exterminio de sí mismos y á la desolación de sus fortunas, y á ejecutar y consumir los más horrendos delitos.—No se sincerarán jamás con el temor ni con la violencia. Tienen medios para disipar el primero, y también para rechazar la segunda. Viéndose está que dos, tres ó seis rebeldes circulan esas órdenes de exterminio. ¿Habrá pueblo que no pueda aprehenderlos con ventaja y seguridad? No lo hacen porque no quieren. Si fuerzas considerables hubiesen de ejecutar aquellas órdenes ¡cuan lenta y difícilmente podrían lograrlo! Y si atacasen un pueblo, protegidos serían si lo pidiesen, ó sólo con dar aviso, por las tropas de la REINA nuestra Señora.—Más interesadas que ellos mismos, las autoridades que gobiernan en nombre de S. M. Doña ISABEL II, todavía más solícitas del bien y de evitar los males de este desgraciado país, se han dedicado á procurar á los mismos llamados á la muerte un medio de evitarla, y de no ser culpables ejecutores de su propio exterminio y del de su Patria. ¿Quiéren ó no ser soldados? Si lo primero, en las filas de la legitimidad, en las banderas de aquella inocente REINA hallarán, en vez de las privaciones, padecimientos y desnudez de las de la rebelión, excelente vestuario, seis reales diarios y otras comodidades, y armas, no ya para comprometer, sino para defender su existencia, no para destruir sino para conservar su Patria, sus hogares y sus bienes.—¿No quieren ser soldados? Vengan también á esta Villa, donde hallarán trabajo honesto procurado por mí para ganar decorosamente su sustento. Huyan en ambos casos de esos pueblos, cuyos Alcaldes ó Fieles quieren conducirlos á su

perdición, llevándolos á las filas rebeldes; de esos padres, que miran con fría indiferencia, cuando no comprometen ellos mismos á sus hijos; huyan, y recójanse entre nosotros, que si los que pertenecieron á la facción y se arrepienten hallan la mejor acogida, mejor derecho tienen los que no lleguen á pertenecer á aquélla á todas las consideraciones de las autoridades de esta Villa.—Para contener los males que causaría la obediencia y cumplimiento de las órdenes referidas de los rebeldes, y proporcionar á los pueblos y á los habitantes todos de este Señorío las conocidas ventajas que les deben resultar de evadirse de ellas; siguiendo el benéfico espíritu del Gobierno maternal de S. M. la Reina Gobernadora de estos Reinos, ordeno y mando lo siguiente:

»1.º En ningún pueblo de este Señorío se obedecerán ni cumplirán las órdenes de los rebeldes, sin ser apremiados á ello por la presencia de su fuerza, en el concepto de que cualquier Alcalde ó Fiel Regidor, que con sólo un oficio se prestase á la obediencia de aquéllas, será castigado con la multa de doscientos ducados, y además con las penas personales á que según las circunstancias pudiese resultar acreedor.—2.º Prohíbese á los mismos Alcaldes, Fieles Regidores y curas párrocos dar á los rebeldes las listas ó relaciones de los mozos aptos para las armas; y cualquiera que las diese, sin ser obligado por la fuerza, sufrirá las penas señaladas en el artículo anterior.—3.º Los que obligaren á los mozos á ir á las filas rebeldes, sufrirán las graves penas á que según el resultado de la causa que se les formará se hiciesen acreedores.—4.º Los Alcaldes, Fieles Regidores y curas párrocos quedan constituidos en la obligación de advertir á los mozos de edad de diez y siete á cuarenta años, que si quieren servir de soldados serán admitidos en los cuerpos del ejército de S. M. la REINA nuestra Señora, ó en el de cazadores de este Señorío, con el haber de seis reales

diarios, si fuese en este último; y sino quisiesen servir, serán admitidos en esta Villa á trabajar en las obras dispuestas con este objeto, ganando un jornal regular y de costumbre.—5.º Además de la advertencia de que trata el artículo anterior, será de la obligación de los Alcaldes y Fieles Regidores, bajo las más graves penas, hacer saber esta circular y darle toda la publicidad necesaria para que llegue á noticia de los interesados, y puedan á su virtud evadirse por los medios propuestos de la desgraciada suerte que les espera, si acuden ó van á las filas de los facciosos, y remitirán testimonio de haberlo cumplido.—6.º Los que siendo de la clase de simples soldados en la facción, abandonen las filas de ésta, y se me presenten con las armas, serán ocupados en las obras de esta Villa, en los términos expresados en el artículo cuarto.

»Y mando á todos los Alcaldes, Fieles Regidores y curas párrocos cumplan lo que queda prevenido; en el concepto que de lo contrario procederé contra cualquiera que resulte criminal ó omiso con el mayor rigor y la más severa inflexibilidad; y para que les conste, y nadie alegue ignorancia, se circule inmediatamente á todas las Justicias de este Señorío, é inserte en el Boletín oficial del mismo.»





CAPÍTULO VIII



El primero de Junio fueron llamados á la Diputación los letrados Don Juan José María de Yandiola y Don Santiago de Bernaola para que diesen su dictamen sobre la convocatoria del Estamento de Procuradores, con arreglo al Estatuto real; y opinaron, que en atención á la gravedad del asunto, y no pudiendo reunirse las Juntas generales, se reuniese el Regimiento general, y que si el Comisario regio se negaba á convocarlo, lo hiciese la Diputación, facultada para ello por la práctica constante, y según reales disposiciones que se hallan en el archivo del Señorío; ofreciéndose los dos letrados á dar su dictamen por escrito, como lo hicieron, aunque sin incluir lo que habían dicho respecto al Comisario regio.

En vista de las dificultades con que tropezaba por parte del Comisario, acordó la Diputación el 4 elevar á la Reina Gobernadora un recurso, pidiendo que se sujetasen las disposiciones superiores al pase foral, de que prescindía aquél, pues solamente exhibió el decreto de su nombramiento. En este recurso hacía presente la Diputación que los Comisarios habían respetado el pase desde Don Antonio Melgarejo en 1718.

Se dió cuenta el 6 de un oficio del Comisario regio, transmitiendo la real orden por la cual se comunicaba á los Gobernadores civiles el Estatuto real, y el decreto para las elecciones de Procuradores, expedido el 20 de Mayo, y de otro oficio del mismo Comisario en que pedía á la Diputación que le señalase la ley ó documento en cuya virtud se hubiese de convocar al Regimiento general para tratar de dicha materia, pues nada encontraba sobre ello en el Fuero, y que se le enviase una nota de los Padres de Provincia y Regidores del Señorío, con expresión de las señas de sus respectivos domicilios.

La Diputación contestó á ambos oficios, por su orden, de acuerdo con los letrados, como sigue:

«La comunicación que V. S. hace á esta Diputación en oficio de este día de un ejemplar de los reales decretos de S. M. la Reina Gobernadora de fecha de 4 de Abril y 20 de Mayo último, con el Estatuto real y convocación de Cortes y ley de elecciones de Procuradores, carece del requisito prescrito por la ley once, título primero de los Fueros de Vizcaya, sin que en artículo alguno de aquellas sabias determinaciones se ordene por S. M. que hayan de ser desatendidos, ni la Diputación haya sido avisada de que correspondan al privativo ejercicio de V. S. las atribuciones de Gobernador civil, que en este Señorío corresponden colectivamente á V. S. con la Diputación, según la forma establecida hasta el día, y la costumbre inconcusa de todos los tiempos.—Faltaría, pues, á su deber la Diputación, si dejase de reiterar á V. S. el contexto de su oficio de 20 del próximo pasado acerca de que los decretos que V. S. remite en copia se trasladen originales ó rubricados por los señores Secretarios del despacho, y exponga el Síndico lo que juzgue conveniente á su observancia, pues de otro modo se podrán engendrar dificultades y repugnancias que la suprema pe-

netración de S. M. no podrá menos de considerar dignas de algún aprecio, entretanto que su soberana justicia conserve, como ha conservado hasta aquí, á los leales de Vizcaya la esperanza de no haber desmerecido su gracia. — En este concepto, pues, la Diputación se ve precisada á no infringir sus juramentos, que igualmente están unidos á su fidelidad bien acreditada al trono y derechos de la Reina nuestra Señora Doña Isabel segunda, como á la subsistencia de unas leyes, cuya observancia le está especialmente recomendada, y se abstendrá por consecuencia de tomar parte alguna en su publicación y cumplimiento, quedando las resultas de cuanto suceda al sólo cargo de V. S., que se atribuye el conocimiento único de este negocio, demasiado importante para que en ninguna época aparezca desnudo de las formalidades solemnes que debèn hacerle convincentemente eficaz, y no impuesto con la violencia ó arbitrariedad, contra lo que expresamente dice el real decreto de convocación, y el de 24 de Mayo que V. S. trasmite igualmente en copia en las palabras del artículo octavo.»

«Los documentos y provisiones reales en que se funda la indicción de la Diputación para reunir la Junta de Regimiento y la general del Señorío so el árbol de Guernica, existen en el archivo general de dicha Villa de Guernica, así como la privativa de los Diputados para abrir los pliegos que vienen dirigidos á la corporación, y V. S. conoce que no es fácil que puedan enviársele en este momento. A favor de la posesión legal en que se halla la Diputación para usar de aquellas atribuciones, está la práctica no desmentida de varios siglos, siendo aun reciente el Regimiento último que V. S. mismo presidió para la aprobación del empréstito contratado con el comercio de esta Villa, no debiéndose negar que á la Diputación, como encargada del Gobierno general del Señorío, toca tomar en consideración los negocios públi-

cos, y someterlos á mejor consejo para su más acertada deliberación, explorando á este efecto las opiniones de los hombres que el país designa para formar su Gobierno universal.—La lista adjunta de los actuales señores Regidores y Padres de Provincia instruirá á V. S. de su nombre y vecindad, y la Diputación espera que en su vista acuerde V. S. lo que juzgue oportuno, advertido que la Diputación ha separado en sus últimas convocatorias á las personas que se sabe por notoriedad que participaron en más ó en menos del Gobierno revolucionario, ó se filiaron en sus batallones». La lista de Regidores y Padres de Provincia, con las exclusiones indicadas por la Diputación, comprendía ocho de los primeros y un Síndico y veinte y uno de los segundos. Firmaban ambos oficios Uhagón y Lecanda como Diputados generales y el Secretario habilitado Hormaeche.

La Diputación recibió el 7 los dos oficios siguientes del Comisario regio:

«Si he comunicado á la Diputación un ejemplar no rubricado del Estatuto real y reales decretos de convocatoria y elecciones de Procuradores á Cortes, es porque en esta forma se me han remitido y mandado cumplir, de orden de S. M. la Reina Gobernadora.—Prescindo de si ha sido ó no avisada, y de si lo ha debido ó no ser la Diputación, de que corresponden á mi privativo ejercicio las atribuciones de Gobernador civil; ¹ ello es cierto, y sabe la Diputación, que no como su Presidente, sino como Comisario regio, me está encomendada la promulgación del Estatuto y decretos referidos; y de consiguiente, no sé de donde la Diputación pueda sacar que colectivamente con la misma deba corres-

¹ Este es el nombre que se dió á los Subdelegados de Fomento cuando se estableció el Ministerio del Interior, en lugar del de Fomento por real decreto de 13 de Marzo de 1834.

ponderme el ejercicio de ésta ni de ninguna otra atribución, que en la misma manera se me encargue.—Estoy muy distante de atribuirme más ni otro conocimiento que el que se ha servido darme S. M. la Reina Gobernadora, y arreglado como pienso que voy á él, no temo la amenaza de responsabilidad y de resultas, que tan friamente me hace la Diputación, y que en todo caso me servirá de gobierno».

«Dije á V. S., y repito, que me era necesario ver la ley, reglamento, ú otro semejante documento, en que está consignada á favor de V. S. la indicción de la Junta de Regimiento. Por lo mismo que no conozco esa práctica, ó posesión de siglos que V. S. invoca, es absolutamente indispensable alguno de aquellos documentos, sin que pueda excusarle el Regimiento celebrado bajo mi presidencia para tratar del empréstito, porque se convocó contando con mi autoridad, y la interpuse con la limitación de que fuese para ese sólo objeto y no otro, como V. S. sabe, y esto prueba contra la intención de V. S.—Si los individuos que V. S. me dice haber separado en sus últimas convocatorias, no están comprendidos, como me parece, en la lista que se ha servido remitirme, espero tendrá á bien manifestarme quiénes sean, si Padres de Provincia ó Regidores, y cuál la causa respectiva de su separación».

La Diputación, después de oír á los letrados, y de acuerdo con ellos, dispuso contestar al Comisario regio en estos términos en los oficios siguientes:

«La Diputación no sabe, como V. S. dice en su oficio, que le está cometido privativamente á V. S. por S. M. el encargo de poner en cumplimiento el Estatuto real, convocación de Cortes y ley de elecciones, con inhibición de la Diputación, porque no ha tenido más comunicación de estos documentos que la que V. S. le trasmite; y en ella no encuentra explicada la diferencia en que V. S. se coloca de Comisa-

rio regio y de Corregidor para eludir en un concepto lo que por otro pueda alcanzarle. La comisión regia de V. S., según la real orden de 11 de Febrero, está toda reducida á negocios de infidencia, sin que haya una sola proposición que le autorice á exceder de ellos; y la Diputación, que en lealtad, adhesión y constancia para defender los derechos del trono de nuestra excelsa Reina Doña Isabel segunda (Q. D. G.) no cede á persona alguna, no se considera expuesta á ser envuelta en casos que tongan referencia con su comisión. El punto en que estriba la presente cuestión es del ramo gubernativo y político, que tiene marcado por la ley y la costumbre el modo de ponerse en práctica, y se hace indispensable que se cumplan hoy como se han cumplido siempre, ó que la Diputación cese de hecho en funciones de que S. M. no la ha privado.—En este concepto reitera su oficio anterior de ayer, y protesta contra la ilegalidad con que parece está dispuesta la publicación, así como contra todo lo que se intente depresivo de los Fueros y derechos que goza este Señorío, que posee con justicia, y al apoyo de sus leyes, que V. S. juró guardar al instalarse en el ejercicio de su destino».

«La Diputación repite á V. S. lo que le tiene dicho ayer respondiendo al oficio que acaba de recibir con fecha de hoy.—Si V. S. se propone limitar las atribuciones que indisputable y legalmente ejerce la Diputación desde tiempo inmemorial, á V. S. le corresponde oponer las facultades que le hayan investido de tan extensa autoridad; pues no teniéndola como Corregidor, ni tampoco como Comisario regio en la real orden que V. S. exhibió de 11 de Febrero último, para alterar el gobierno de este Señorío, ni derogar sus usos, no puede la Diputación someterse á reconocer como suficiente la delicadeza que V. S. manifiesta para consentir el acto de Junta de Regimiento y Padres de Provin-

cia, que tiene acordado celebrar, y desea se verifique con la mayor brevedad. En esta inteligencia, y á fin de que en ningún tiempo pueda decirse que existan motivos de excisión ni de mala inteligencia entre V. S. y la Diputación, espóra que se sirva V. S. señalar día muy próximo para dicha Junta, concurriendo si creyese oportuno á una sesión previa con la Diputación, en que pueda instruirse de los antecedentes de este asunto, que no intenta ocultar, pero que está prohibido sacar de sus archivos. En oficio separado instruirá á V. S. la Diputación de los Padres de Provincia y Regidores, á quienes ha suspendido convocar después de su reinstalación y de los motivos que para ello ha tenido»...

Acordó al mismo tiempo la Diputación, de conformidad con lo propuesto por los letrados, que se hiciese un recurso á la Reina, en queja del Comisario regio. Esforzóse en este recurso la Diputación en demostrar que la conducta del Comisario daba armas á los enemigos de la dinastía para suponer que eran ciertos sus vaticinios sobre la pérdida de los Fueros con el nuevo reinado, pagándose de este modo los sacrificios de los leales, y concluía suplicando á la Reina «se digne mandar que se presenten al uso, como ha estado en práctica desde tiempo inmemorial, las reales órdenes, provisiones, ejecutorias, etc.; que no se introduzca ninguna alteración ni novedad en el régimen y administración de este Señorío, hasta que restablecida en él la ansiada paz, y reunidas las Juntas generales, puedan tomar el debido conocimiento de las materias que tengan inmediato contacto con sus leyes particulares; y que el Comisario regio y Corregidor se limite á las atribuciones que le están prescritas por real orden de 11 de Febrero último, sin arrogarse el ejercicio de las que pertenecen al cuerpo colectivo de la Diputación, de que es Presidente, teniendo para con ella los miramientos correspondientes á una corporación

tan popular y respetable, que á nadie cedo, ni en amor á su inocente Reina y Señora Doña Isabel segunda, ni en entereza y dignidad para cumplir sus obligaciones»...

En sesión celebrada el mismo día por la Diputación, con asistencia del Corregidor, se acordó jubilar á Soloeta Balzola, en vista de que no se presentaba por causa de su enfermedad, y nombrar Secretario en propiedad á Don Francisco de Hormacche.

Temerosa la Diputación de que hubiesen sido interceptados por los carlistas los recursos anteriores, los reprodujo el día 10. Decía en la nueva exposición que elevó á la Reina con este motivo, que el Comisario regio «ha querido hasta disputar á la Diputación la facultad de convocar Regimiento general sin anuencia suya, como si la práctica de que se halla en posesión constante hace más de tres siglos, y repetidas reales órdenes y provisiones, no bastasen á autorizar á los dos Diputados para reunir Regimiento general, cuando juzgasen que así convenía á los intereses de este Señorío. Si el poder de la Diputación quisiese reducirse poco á poco, como se intenta al parecer, á la sola y odiosa prerrogativa de imponer cargas insoportables á los desolados pueblos de Vizcaya, y exigir las sin piedad, valdría más que cesase de existir».

Se acordó el 11, con asistencia del Corregidor reducir á dos reales diarios el socorro que se daba á los emigrados en Bilbao.

Llamó el mismo día la Diputación á Yandiola y Bernaola, á fin de oír su opinión sobre un oficio del Comisario regio en que fijaba las once de la mañana del 12 para conferenciar con los Diputados, en el convencimiento de que éstos asentarían á que era necesaria la asistencia del Corregidor para resolver que se convocase el Regimiento. La Diputación contestó al Corregidor en estos términos. «Sin que se

hubiese convencido la Diputación general en conferencia de ayer, de que sea necesaria la asistencia de V. S. para juzgar sobre los casos que requieren la reunión de Junta de Regimiento, se conformó á que para tomar este punto en consideración en la ocasión actual, se verificase una sesión especial á que V. S. ofreció concurrir, y desde luego, vistas las ocupaciones que rodean á V. S. para verificarla en el día de hoy, tendrá efecto en el de mañana á las once en punto; pero si por igual ú otro motivo no le fuese dable asistir, no podrá menos la Diputación de pasar á deliberar lo que juzgue conveniente.»

Se volvió á llamar el 12 á los letrados, en vista de un oficio del Corregidor que decía así: «No habiendo tenido otro objeto la sesión de ayer que fijar las atribuciones de V. S. S. y las mías, respecto á quien corresponde si habrá necesidad de convocar el Regimiento de este Señorío, porque en cuanto á la convocatoria no hay duda que me corresponde, según los documentos manifestados por V. S. S., habría sido enteramente infructuosa aquella sesión si se hubiese limitado á sólo decidir la cuestión para el caso presente; y yo nunca podré pasar por esto, sino se fija de un modo constante para lo sucesivo.—Volveremos por lo mismo mañana á la cuestión, y la Diputación podrá tener dispuestos los documentos que la decidan, y nos pongan de acuerdo en este punto esencial y previo; en la inteligencia de que no creo se determinará á pasar adelante en nada, sin que se aclaren sus atribuciones y las mías, como Corregidor y Presidente de la misma corporación, porque si ésta es celosa en conservar las suyas, no lo seré yo menos, ni me estará ocioso en conservar las mías.»

La Diputación, de acuerdo siempre con los letrados, contestó al Corregidor como sigue: «En los oficios de V. S. á la Diputación, y en las respuestas de ésta, resulta que la con-

ferencia de anteayer se celebró para manifestar á V. S. algunos de los antecedentes que tenía á mano la Diputación acerca de la indicción de Regimientos generales, y no con el solo objeto de fijar, como V. S. lo dice en fecha de ayer, las atribuciones de V. S. y de esta Diputación respecto á quien corresponde acordar si habrá necesidad de convocarlo, pues nunca ha podido hallarse este punto, en sentir de la Diputación, sujeto á duda ni controversia, porque es claro como la luz del mediodía, y V. S. se habrá convencido sin duda, de que la Diputación con su Presidente lo puede acordar, como lo pueden acordar también solos los dos Diputados cuando aquél opone alguna dificultad.—Las atribuciones del señor Corregidor y Diputados se hallan fijadas por una práctica no alterada de muchos siglos, que trae su origen de la costumbre sancionada por reales órdenes y provisiones, y no comprenden que en cuanto á ellas pueda V. S. ser Juez y parte al mismo tiempo, ni que porque otras ocupaciones ó causas que no alcancen los Diputados le impidan asistir á la Diputación, se alargue indefinidamente la decisión de negocios de que acaso puede depender la suerte de una Provincia entera. La Diputación tuvo preparados los documentos que V. S. deseaba reconocer, por un efecto de su amistosa complacencia hacia V. S.; pero V. S. tiene bastante discernimiento para conocer que si á cada cuestión, duda ó incidente, hubiesen de revolverse los antiguos archivos y examinar los papeles que en ellos se custodian, perderían V. S. y la Diputación un tiempo que en las circunstancias actuales es muy precioso, y debe consagrarse al servicio de la patria y de la causa de la Reina nuestra Señora Doña Isabel segunda.—Espera, pues, la Diputación que en respuesta se servirá á V. S. decir si concurrirá á las once de esta mañana á una sesión en que se tratará de la convocación del Regimiento general.»

El Corregidor asistió por fin, y se acordó convocar á Regimiento general para el 21, con el objeto de oír su dictamen sobre la conducta que debería seguirse en orden á la promulgación del Estatuto real y á la ley de elecciones de Procuradores.

La Diputación elevó otro recurso á la Reina Gobernadora el 14, suplicando se accediese á lo que tenía solicitado el 7.

Se acordó el 20 pedir al comercio trescientos mil reales á cuenta de los quinientos mil que debería entregar, según convenio, el mes de Septiembre, descontándose los intereses correspondientes.

Congregado el Regimiento general, con asistencia de los Padres de Provincia Murga, Aldacoa, Ugarte, Landecho, Gortázar, Abaroa y Anitua, y los letrados que hacían de Consultores, se dió cuenta por la Diputación de las diferencias con el Comisario regio, y de los recursos elevados á S. M. sobre la necesidad de sujetar al uso foral el Estatuto y la ley de elecciones; y el Regimiento, aprobando por completo la conducta de la Diputación, acordó que continuase sus gestiones legales con el tino y acierto que hasta ahora, para conseguir del Gobierno el pleno goce de los Fueros, buenos usos, franquezas y libertades del Señorío.

Se trató asimismo del proyecto de empréstito de dos millones, que se había encargado redactar á una comisión de Padres de Provincia, el cual fué aprobado, debiendo someterlo á la real aprobación.

Se reunió la Diputación el 25 para oír la lectura de dos oficios del Comisario regio. Trasmítase en el primero una real orden comunicada el 17 por el Secretario del despacho de lo Interior, Moscoso de Altamira, en la que se dice: que «por la naturaleza misma de estas leyes fundamentales (el Estatuto real y la ley de elecciones), no puedan estar sujetas á examen de ninguna especie», y que no procede sujetarlas

al uso foral; que las Diputaciones, unidas con los concejales que componen la Junta electoral, deben hacer la designación de los mayores pudientes, con arreglo al decreto de elecciones; que acudan al acto los Regidores del Señorío, citándose á los que se hallan en Madrid, pero sin necesidad de aguardar su venida, así como á los que se hallan en sitio ocupado por los rebeldes, no estando en sus filas ó procesados; que el Corregidor no tendrá voto; que por el mero hecho de ser desafecto, no estando procesado ni en las filas de los rebeldes, no se impedirá á ninguno de los mayores pudientes tomar parte en la elección. Resulta que estas resoluciones se tomaron el 15 en Consejo de Ministros.

En el otro oficio del Comisario regio se traslada una real orden de igual fecha que la anterior del mismo Ministro, desestimando los tres recursos que hizo la Diputación para que se sujetasen las disposiciones soberanas al uso foral, y mandando que se esté á lo resuelto sobre el particular el 15 por el Consejo de Ministros; siendo la voluntad de la Reina «que la Diputación omita este género de reclamaciones, que pueden retardar la ejecución de tan útiles como saludables medidas.»

La Diputación, en vista de estas comunicaciones, acordó invitar al Comisario regio á que convocase nuevamente al Regimiento general, á quien competía conocer del grave asunto pendiente.

En sesión celebrada el 26, con asistencia del Comisario regio se acordó convocar al Regimiento para el mismo día á las cuatro de la tarde, aunque el Comisario expuso que no consideraba necesario reunirle.

Después de hacerse cargo el Regimiento general, al que asistieron los Padres de Provincia, que antes se nombraron, del estado de la cuestión pendiente, acordó que la Diputación reprodujese sus recursos á la Reina.

Se dió cuenta también de un oficio del Comisario regio diciendo, que promulgado ya solemnemente el Estatuto real, procedía que aquella misma tarde se reuniesen los Diputados y los Regidores del Señorío con los concejales designados por el Ayuntamiento de Bilbao, que eran Don Pablo de Epalza y Don Francisco de Gaminde y el Síndico don Eulogio de Larrínaga, para hacer la designación de mayores pudientes que han de intervenir en las elecciones.

El Regimiento resolvió que se contestase en estos términos:

«No se considera esta Diputación autorizada para intervenir en actos que sean contrarios á los Fueros del Señorío, que se han confiado á su custodia; los ha jurado observar, y no han sido derogados por el benéfico Gobierno de la Reina nuestra Señora. Sus augustos predecesores no han negado á sus Diputados generales el que pudiesen consultar al país reunido en Juntas los asuntos de gravedad y las reales órdenes que pudiesen estar en pugna con los mismos Fueros. Así es que entre otras muchas ocasiones, en los años de 1812 y 1820, antes que se estableciese en Vizcaya la Constitución de Cádiz, se reunió la Junta general, en la cual los Diputados pudieron descargarse de la responsabilidad que pesaba sobre ellos como guardadores de la Constitución peculiar del país. Los Diputados generales de aquellas dos épocas hallaron expedito el camino de salvarse de todo compromiso, pudiendo reunir Junta general á la cual diesen conocimiento del asunto; y no juzgan los actuales haber desmerecido tanto la gracia de S. M. la Reina Gobernadora, ni haber dado tan pocas pruebas de lealtad, obediencia y adhesión al Gobierno de su excelsa hija, que crean que Su Majestad, bien informada, rehuse el que antes de proceder á introducir reformas importantes, puedan reunir el país en Junta general y darle cuenta de ellas.—Insisten por lo mis-

mo los Diputados generales en la necesidad de que para el mejor servicio de la Reina nuestra Señora, bien de este Señorío, y salvar su honor y conciencia, es indispensable que antes que se establezcan el Estatuto real y reales decretos consiguientes, se celebre Junta general en que se trate de tan importante materia. Y en otro caso protestan cualquier acto á que se los obligue á concurrir para poner en ejecución las órdenes que no estuviesen revestidas de los requisitos de Fuero; y para que de todo cuanto se haga contrario á él no pare perjuicio al Señorío de Vizcaya, á sus pueblos y moradores, reservan asimismo al Señorío el derecho de elevar á la real Persona de S. M. los sumisos recursos que sean más convenientes...

A las nueve y media de la noche recibió la Diputación un oficio del Comisario regio, en el cual, después de sentar que la conducta de esta corporación era infracción y desobediencia manifiesta de las soberanas resoluciones de S. M., se le ordena que convoque á los Regidores para el día siguiente á las ocho de la mañana, á fin de proceder á la designación de los mayores pudientes; imponiendo en otro caso la multa de dos mil duros á cada una de las personas que debiendo asistir no acudan, sin causa legítima para ello, sin perjuicio de acordar otras providencias que aseguren la puntual obediencia de las órdenes superiores. El Comisario regio añade que los concejales de Bilbao serán citados sin conminación alguna, porque consta su obediencia.

La Diputación, en vista de conminación tan severa, en que se hallaban comprendidos todos los miembros del Regimiento residentes en Bilbao, creyó llegado el caso previsto en su oficio último al Comisario regio, de someterse por evitar las vejaciones consiguientes á la conminación, y acordó citar á los Regidores como se le mandaba, y comunicarlo al Comisario defendiendo en breves palabras su conducta.

Con este motivo, la Diputación elevó el 28 á la Reina Gobernadora la exposición siguiente:

«SEÑORA. La Diputación general del Señorío de Vizcaya, postrada á los R. P. de V. M., con el más sumiso acatamiento expone: que tal vez los informes siniestros ó inexactos de este Comisario regio y Corregidor han podido influir para que no fuesen oídos sus ardientes votos, inspirados por el deseo más puro de la felicidad del país y de la nación magnánima que V. M. gobierna con tanta clemencia como sabiduría, á pesar de la acendrada lealtad que la Diputación ha demostrado en circunstancias harto peligrosas, y del indudable amor, de que ha dado tan relevantes pruebas, al trono excelso de la tierna hija de V. M. ¿Y podría de otro modo la piedad de la más benéfica y generosa de las Reinas desestimar las observaciones comedidas de la Diputación? ¿Podría desairarla negándose á comunicarle directamente sus disposiciones soberanas, como lo han hecho siempre los Monarcas poderosos que se han sentado bajo el solio esclarecido de Doña Isabel segunda? ¿Podría rehusarle V. M. el prestar sus augustos oídos á su voz respetuosa, cuando esperaba encontrar consuelo á sus tribulaciones en vuestro corazón bondadoso é indulgente? Señora; el pase á que según los Fueros de Vizcaya deben presentarse todas las órdenes de cualquiera naturaleza que sean, y cualquiera que sea el conducto por donde vengán dirigidas, no es una censura de las mismas órdenes, como por ventura lo ha comprendido el Comisario regio y Corregidor, pues todas son acatadas en este Señorío con el mayor respeto. Se reduce á que con vista de ellas diga el Síndico, con acuerdo del Consultor, si están ó no en armonía con la legislación particular de este país, en cuyo último caso, reverenciándolas como es debido, se recurre á S. M. con mesuradas y humildes súplicas, á fin de que se digne modificarlas de ma-

nera que no alteren sus Fueros, buenos usos y costumbres, franquezas y libertades. Todos los Reyes de España y Señores de Vizcaya, desde la cuna de la Monarquía, se han conformado con esta ley, y aun han mandado expresamente en ocasiones repetidas que sea inviolablemente observada, como el escudo titular del código vizcaíno. El mismo Don Fernando el séptimo (q. e. e. g.), esposo augusto de V. M., observó con suma complacencia hallándose en esta Villa, que sus reales decretos dados en la misma relativos á este Señorío se trasladaban á su Síndico procurador general. ¿Y los poderes del Comisario regio y Corregidor, por muy extensos que sean, habrán de considerarse superiores á los de los Reyes, mayores que los del excelso origen de que se derivan? Por otra parte, ni ha sabido la Diputación que el Comisario regio tuviese como tal más facultades que la de entender en todo lo concerniente á delitos de infidencia, pues no resultan otras de la real orden de 11 último, que pasó también, con pleno conocimiento suyo, como era de Fuero, al Síndico, según se ve por el ejemplar impreso que acompaña con el número primero. Acaso habrá traído instrucciones que por ser desconocidas han podido dar lugar á alguna errada inteligencia; pero la corporación, que si ha de cumplir con sus deberes y observar la religión del juramento, está obligada á defender las instituciones preciosas fiadas á su vigilancia, como la primera y más sagrada de sus obligaciones, sin traspasar los límites en ellas señalados, no puede menos de acudir solícita y confiada á la Persona poderosa y angusta, que si estima sus raciocinios reverentes, remediará los resultados de la precipitación y demasías de los que en su real nombre toman resoluciones, que se hallan en oposición abierta con las antiguas leyes que rigen en este Señorío, que ni han sido derogadas ni restringidas, ni ha mandado S. M. suspender siquiera por un momento.—Si, pues, la

Diputación no obrase como le dicta su conciencia, como entiende que debe obrar para ser consecuente, y servir con toda fidelidad y de la manera que más conviene en su concepto á la sagrada causa de Doña Isabel segunda, se haría indigna del aprecio que varias veces ha tenido V. M. la benevolencia de manifestarle, y ha sido la más grata recompensa de sus afanes y trabajos en la difícil época presente. —En esta íntima persuasión se ha atrevido á importunar á V. M., y aunque hasta ahora no haya logrado inclinar al parecer su real ánimo á que accediese á sus solicitudes, las reproduce en confianza, porque espera que al fin las escuchará con benignidad y acogerá favorablemente, sin embargo de que el Comisario regio y Corregidor ha promulgado el Estatuto real y la ley de elecciones, sin llenar con estas importantísimas disposiciones de V. M. los requisitos que debían darles validez en este país. Ni la Diputación podía considerarlas eficaces, subsistiendo los Fueros en su vigor y fuerza, ni podría tampoco intervenir en un acto para proceder al cual habría sido preciso arrancar la piedra en que principalmente se sustenta el edificio de las leyes de Vizcaya. Tan penetrado estuvo el benomérito pueblo de Bilbao de las razones que asistían á la Diputación para comportarse como se comportó, y de que faltaban las indispensables formalidades de costumbre á la publicación de unas leyes de tan alto interés para todos, que se miró aquella solemnidad con una indiferencia fría, tanto más de notar, cuanto que en el día en que fué proclamada nuestra adorada Reina y Señora Doña Isabel segunda llegaron á tal extremo el entusiasmo y júbilo universales, que ni se pueden explicar, ni dejaron duda de que los buenos vizcaínos son sincera y fervorosamente adictos á su causa incontrastable. —Señora: la Diputación se lamenta amargamente de ver que vuestro Comisario regio y Corregidor, apoyándose en

órdenes que dice se le han comunicado, haya puesto inconsiderada mano en el fundamento de los Fueros de este Señorío para derrocarlos; Fueros respetados por tantos siglos y confirmados por tantos Monarcas poderosos, indolentemente escritos en el corazón de los vizcaínos, y que han constituido hasta ahora su bienestar y ventura. Todavía se lamenta más al contemplar que este Magistrado, valiéndose de los medios más violentos, haya querido obligar á la Diputación á que ella misma sirviese de instrumento para destruir unas instituciones cuya conservación le está encomendada.—A las cinco y media de la tarde del día 26 del corriente recibió la Diputación el oficio que acompaña en copia con el número dos, en que decía que era indispensable que para las seis de la propia tarde reuniese su Regimiento general, y convocase á los dos Regidores y al Studico procurador del Ayuntamiento de Bilbao, á cuya hora había de asistir él mismo para proceder á la designación de los más pudientes. La Diputación, que con objeto bien diferente estaba reunida desde las cuatro de la tarde, con solos aquellos de sus Regidores que se hallaban en esta Villa, y con algunos Padres de Provincia, no pudo menos de mirar una disposición tan arrebatada sino como un golpe de sorpresa premeditado muy de antemano, pues que si el Comisario regio y Corregidor se hubiese conducido de buena fe, pudo haber oficiado á la Diputación luego que recibió las reales órdenes en cuya virtud aseguraba que estaba obrando, y darle el tiempo necesario para su deliberación. Indudablemente se propuso sorprender á la Diputación, y obligarla á que en el corto término de media hora se prestase á cumplimentar su precepto, infringiendo las leyes del Fuero, ó que manifestase su oposición, quizá con la torcida idea de pintarla á los ojos de V. M. como criminal. ¿Qué partido había de adoptar la Diputación en el apurado conflicto en

que vuestro Comisario regio y Corregidor la ponía? El que han tomado siempre las Diputaciones en ocasiones análogas, y le contestó como resulta de la copia número tres, que no se consideraba autorizada para intervenir en actos contrarios á los Fueros del Señorío cuya custodia se le había confiado, había jurado guardar, y no se habían derogado por V. M., é hizo la protesta y reserva consiguiente de elevar á V. M. este humilde recurso como en iguales casos se ha acostumbrado, sin que la majestad del trono se haya dado por ofendida; siendo una prueba evidente de esta verdad el que merced á la real benignidad y munificencia vemos subsistentes estos Fueros, á posar de los repetidos ataques de sus enemigos, sobreviviendo á las vicisitudes que han sufrido casi todos los tronos y legislaciones conocidas.—Pero sordo á todas las razones de la Diputación, conminó á sus individuos y á los del Regimiento general, con cuyo acuerdo se le dió la respuesta de que se ha hecho mérito, con una multa de dos mil duros á cada uno, y con otros rigores sino cumplan inmediatamente lo mandado en su oficio anterior, como observará V. M. por la copia número cuatro. Viéndose, pues, la Diputación precisada á ceder por evitar vejaciones, le contestó lo que resulta de la copia número cinco.—De este modo consiguió que ayer á las ocho de la mañana se celebrase la junta electoral para designación de los mayores pudientes, procediendo en esto tan precipitada é ilegalmente como en los pasos antecedentes, porque no concedió el tiempo necesario para que pudiesen concurrir varios individuos del Regimiento general que viven en diferentes pueblos del Señorío, y debieran ser convocados con arreglo á la real consulta que en copia trasmitió á la Diputación.—Mientras ésta se ve rodeada de los acerbos disgustos de que hace relación, ha sabido que más feliz la Provincia de Guipúzcoa está celebrando tranquilamente su Junta general

para tratar del Estatuto real y reales decretos subsiguientes.¹ Su Diputación goza del privilegio de proceder legalmente en una materia de tan alta importancia, mientras que la de Vizcaya se ha visto forzada por vuestro Comisario regio y Corregidor á separarse de la marcha que hubiera seguido sino por sus conminaciones y amenazas. Pudiera ser aun, que haya tratado de pintar á los ojos de V. M. como sospechosa la conducta observada por la Diputación, cuyos individuos no ceden en lealtad y amor á la justa causa de Isabel segunda, ni al mismo Comisario regio, ni á súbdito alguno de la Monarquía. Durante la promulgación del Estatuto real en esta Villa, se notó que varias patrullas fuertes cruzaban las calles, y como no había el menor recelo de que pudiese turbarse la tranquilidad pública, esta medida llamó la atención de las personas sensatas. La Diputación se abstiene de interpretarla; pero no puede menos de decir que habría sido más conducente se hubiese adoptado por la noche, en que algunos cortos grupos de gente baja é inconsiderada vagaban por el pueblo, gritando impúneamente *viva la libertad*, *viva la Constitución*, y alternaban con estos gritos mueras

¹ La Junta general de Guipúzcoa, reunida en Tolosa, aprobó el 2 de Julio, á pluralidad de votos, el informe ó descargo de la mayoría de la comisión nombrada al efecto, reducido á «declarar en uso en Guipúzcoa el Estatuto real, sin perjuicio de los Fueros de esta M. N. y M. L. Provincia, entendiéndose, como entiende ella, que el poder que llevan sus Procuradores á las Cortes generales del Reino, con arreglo á la fórmula general estampada en el artículo cuarenta de la ley electoral, no embebe ni se entienda comprender el de votarse por ellos sobre proyecto de ley ó proposición de petición contraria á las originarias libertades, franquicias y exenciones é instituciones forales de Guipúzcoa, como fundamentales en esta.» La representación de San Sebastián y las de Tolosa y Guetaria presentaron votos particulares, encaminado el de la primera á la admisión del Estatuto real y de la ley de elecciones, sin restricción alguna, y á su admisión con algunas reservas, en realidad insignificantes, el de las otras dos.

ominosos.—La Diputación pidió rendidamente á V. M. que se dignase suspender en este Señorío las innovaciones que tuviesen contacto con su peculiar legislación hasta que pudiese dar cuenta de ellas en Junta general del país. Y lo que consiguió del mismo Napoleón, cuando en 1808 dictó á la Península su Constitución, á pesar de que estaba acostumbrado á sujetar toda la Europa á su voluntad irresistible, ¿no tendrá muy fundada esperanza de alcanzar de la virtuosa, clemente é inmortal Reina Gobernadora de las Españas? Si en otros dos casos análogos ocurridos en los años de 1812 y 1820 les fué dado á los que componían la Diputación de este suelo estéril y fragoso convocar á los apoderados de todos sus pueblos en Junta general, para descargarse de la gravísima responsabilidad que de otro modo habría pesado sobre ellos; si ahora mismo se les ha concedido esta facultad inapreciable á los de la Provincia de Guipúzcoa, ¿le será denegada á los individuos de la actual Diputación de Vizcaya? ¿Serán tan poco afortunados que la celestial Cristina, que en donde quiera que ha visto españoles afligidos ha tendido en su auxilio su mano compasiva, los desampare en tan amargo conflicto? No cree, Señora, esta Diputación, haber dado ningún motivo para desmerecer el aprecio de V. M., porque siempre se ha prestado docilmente á obedecer sus preceptos soberanos, y se ha pronunciado con enérgica constancia por los derechos legítimos de la inocente Doña Isabel segunda, consagrándose sin vacilación á defenderlos de los ataques de sus inicuos enemigos, con todos los esfuerzos y sacrificios que han estado á su alcance. ¿Su conducta sin mancha y la bondad excelsa de V. M. la alientan todavía y le dan ánimo para distraer vuestra atención soberana.—Suplicando sumisamente á V. M. se digne declarar que no ha decaído de su gracia la Diputación, y mandar que en cuanto se restablezca la calma suspirada en este país, se

le permita reunir á los apoderados de los pueblos de Vizcaya en Junta general, y dar cuenta en ella así de sus procedimientos como de las soberanas disposiciones de V. M., que en algo puedan alterar el régimen foral que se fió al patriótico celo de la Diputación, la cual se comprometió á observarle ostrictamente y á sostenerlo con los más solemnes juramentos».

El 6 de Julio elevó la Diputación una exposición á la Reina, pidiendo el anticipo de un millón de reales, porque eran infructuosos todos sus esfuerzos para encontrar dinero en el país, exhausto y esquilado ya. Se habían fortificado los alrededores de Bilbao, proporcionado al ejército los auxilios necesarios, formado tres compañías completas de cazadores de Isabel segunda, armado tres trincaduras, con cerca de cien tripulantes, suministrado veinte y seis mil pares de zapatos, satisfecho los gastos del parque y costeados los propios y espías. Afeaba la Diputación el carácter suspicaz y la conducta del Comisario regio, que propendía á privar á la Diputación de su prestigio. «Fácilmente se convencerá V. M.», decía, «de que la Diputación no puede ni debe seguir más adelante en sus funciones mientras no se le provea de fondos, y se le restituyan las facultades de que ha sido privada. Y si V. M. juzga que tal vez podrá suplir con ventaja la falta de la Diputación, no tienen los miembros que la componen tanto apego al mando que se separen de él con sentimiento, pues en las presentes circunstancias, por donde quiera que se le mire, sólo ofrece amargos sinsabores». También se queja la Diputación de que se adelanta poco en la pacificación del país, á pesar del valor de las tropas y la pericia de los caudillos, y concluye pidiendo que se le facilite el millón, «y se le restituya á la plenitud de sus atribuciones económico administrativas ó se la exonere de sus funciones».

Hizo otra exposición el mismo día, quejándose de que no ingresara en sus arcas el importe de las multas que se imponían, distrayéndolas de su destino, que era la reparación de caminos, con arreglo á la real cédula de 19 de Enero de 1778 y á la ley tercera, título veinte y siete de los Fueros; siendo justo que ya que los gastos de policía estaban á cargo de la Diputación, percibiese la misma el importe de las multas, incluyendo las que exige la autoridad militar.

En Diputación formada por Don Juan Bautista de Anitua y Don Mariano de Egüa como Diputados, se dió cuenta el 7 de un oficio de Don Pedro Pascual de Uhagón, en el que participaba su ausencia para atender al cuidado de su salud, y explicaba el estado actual de los créditos cuya enajenación se le había encomendado.

El General en jefe del ejército del Norte Don José Ramón de Rodil dirigió el 9 una proclama á los navarros y vascongados, brindando con la paz y la clemencia, aunque le sobran fuerzas para domar la rebelión, y ofreciendo que serán tratados con benignidad é indulgencia todos los que manifiesten que han sido engañados, apresurándose á entregarse con sus armas, ó dando cualquiera otra prueba de sincero arrepentimiento.

Acordó la Diputación el 15 que se negociase, por medio del agente general del Señorío Don Gabriel José de Aizquibal, una lámina de la real caja de amortización, importante un millón seiscientos ochenta y cuatro mil, ochocientos cincuenta y dos reales y veinte y seis maravedís, para atender á las obligaciones más urgentes.

Con motivo de nuevas diferencias suscitadas por el Comisario regio, se elevó á la Reina el 27 una exposición del tenor siguiente:

«SEÑORA.—No habiendo sido al parecer acogidas por V. M. las súplicas de esta fiel Diputación, con la benevo-

lencia que se prometía de la excelsa bondad que distingue el carácter de V. M., y contristada sobremanera por el temor de haber desmerecido por siniestros informes vuestro soberano aprecio, se habría abstenido de elevar nuevamente su voz á los augustos oídos de V. M., si la falsa y crítica posición en que se halla no la pusiese en la estrecha obligación de acudir respetuosamente á solicitar de la previsión conciliadora y sabia de V. M. algún remedio á los males que afligen á este desventurado país, y á los conflictos frecuentes que rodean á su Diputación, por las causas que va á indicar con la imparcial veracidad de que jamás se ha separado ni un instante.—Desde que vuestro Comisario y Corregidor tomó posesión de su destino, notó en él la Diputación cierta tendencia á arrogarse facultades, que ni estaban en armonía con las atribuciones que V. M. le señaló en real orden de 11 de Febrero, ni con las leyes y costumbres de este Señorío. Pero hubo de callar la Diputación, juzgando que sus advertencias y reflexiones mesuradas bastarían á hacerle cambiar de conducta, puesto que habiendo merecido la confianza de V. M., no parecía probable que dejase de adoptar lo que más convenía al mejor servicio de la causa de vuestra amada hija la Reina nuestra Señora. Sin embargo, se ha visto la Diputación harto dolorosamente engañada en sus esperanzas, y no cumpliría con su deber sino pusiese en conocimiento de V. M. clara y desapasionadamente los irregulares procedimientos de este Magistrado.—Tal vez por ser en demasía celoso del servicio público, y por comprender de otro modo que la Diputación los medios más adecuados de llenarle con acierto, ha abrazado por sí solo todos los ramos económicos, administrativos, políticos y judiciales, y los ha querido desempeñar sin otro auxilio que el de sus propias fuerzas. Y aunque la Diputación no le niegue talentos ó instrucción,

¿hay por ventura hombre tan privilegiado, que trasladado repentinamente á un país, cuyos hábitos, leyes y lengua le son desconocidos, pueda gobernar y dirigir todos los diversos ramos de administración en circunstancias tan espinosas, cuando la llama de la guerra civil arde voraz en su recinto entero? Por más que la Diputación quisiese prescindir de reclamar la parte que le toca en la dirección de los negocios de Vizcaya, la paralización que en ellos se advierte, los considerables daños que se irrogan á los habitantes de este suelo, condenado á sufrir tantas calamidades juntas, el disgusto que produce el ver vilipendiada su autoridad tutelar, la obligarían á recurrir á la piedad benéfica de V. M., creyendo firmemente que la sagrada causa de vuestra augusta hija estaba interesada en que inmediatamente se corrigiesen abusos que podrían producir funestos resultados.—De los documentos que acompañan en copia, se infiere claramente que nada exagera la Diputación. En el expediente número primero relativo á la cárcel, observará V. M., que sin embargo de la escasez de recursos ya se habían habilitado en tiempo del Corregidor Don Juan Modesto de la Mota algunas piezas en el convento de la Cruz, en donde fueron custodiados varios presos políticos. Después se desahogó la cárcel, y aquéllas se destinaron á cuartel de cazadores de Isabel segunda, porque no estaban en sitio á propósito para prisión. A poco de haber llegado á esta Villa el Comisario regio, ofició á la Diputación atribuyéndose el mérito de haber notado el primero los defectos de la cárcel provincial, é indicando para sustituirla el mismo edificio que antes se consideró poco ventajoso al intento. Sin embargo, la Diputación se allanó á pagar los gastos necesarios en aquel punto ó en otro que ofreciese menores inconvenientes, pues no pudo menos de reconocer los males que podrían originarse á la salud pública de tener los

presos hacinados en una cárcel de insuficiente capacidad para las presentes circunstancias. Y aunque el Comisario regio dice haber allanado todas las dificultades, V. M. observará que ocupado con la idea de erigir un edificio de nueva planta, inejecutable en la actualidad por mil poderosísimas razones, y que le estaba encomendado á la Diputación por las Juntas generales, pero que dejó para ocasión de más quietud y prosperidad, ha abandonado los medios sencillos de desembarazar el antiguo, quizá porque sus inmensas ocupaciones le privan del tiempo necesario para despachar las causas con la rapidoz que era de desear.— Temeroso sin duda de la responsabilidad que pesa sobre él, ha querido descargarla en la Diputación, valiéndose del frívolo prétexto de no haber ésta nombrado escribano de las causas criminales.— La Diputación le demostró hasta la evidencia que esta imputación carecía de fundamento y de verdad, con el estilo más suave y templado que puede usar una corporación herida con sobrada ligereza en lo más vivo de su honor, y se ha quejado de la falta de decoro con que está dictado su oficio de 6 del corriente, como si le estuviera vedado á la Diputación el rechazar, sin faltar á la urbanidad, suposiciones calumniosas que mancillan altamente su bien acrisolada conducta. V. M. juzgará en vista del expediente número dos quien ha faltado al decoro; si el Comisario regio en afirmar que las escandalosas dilaciones que sufren las causas criminales provienen de no haber nombrado escribano la Diputación, ó ésta en probar que es otro y bien distinto el motivo de hallarse aquéllas entorpecidas. Además, por la última réplica harto impropia, destemplada y llena de inexactitudes, verá V. M. el tono de que se vale el Comisario regio, que nunca ha sido igualado en aspereza y altanería por los Generales de Napoleón, cuando eran nuestros enemigos encarnizados y vinieron como conquistadores.

—El expediente número tres lleva por cabeza la circular de la Diputación de 15 de Enero último, por la cual organizó las Juntas de subsistencias para atender á las de las tropas de la hija excelsa de V. M. No sabe la Diputación qué puntos de contacto puedan tener los suministros con la comisión regia, pero ello es cierto que se ha atribuido, despreciando sus fundadas y repetidas reclamaciones, el conocimiento de esta materia puramente administrativa al Comisario regio, diciendo que le correspondía como tal, y cometiendo al propio tiempo la inconsecuencia de oficiar en 12 del corriente acerca de la misma como Corregidor del Señorío. A virtud de las reiteradas gestiones de la Diputación, ofició en 17 del propio mes lo que resulta en la copia última del expediente enunciado número tres. La Diputación ha creído no deber contestarle sin dar primero cuenta á V. M., que no podrá menos de notar las aseveraciones aventuradas que contiene aquel documento en que habla de un modo tan ajeno á su propio convencimiento, pues ni una sola vez se han quejado los Jefes de las tropas de la Reina nuestra Señora de falta de subsistencias, como lo podrá informar el Comandante general, ni la Diputación ha querido ni quiere nunca apadrihar otra cosa que la justicia.

—La Diputación, Señora, se lisonjearía infinito de poder tributar merecidos elogios al Comisario regio; pero su obligación como protectora de los desgraciados y fieles habitantes de Vizcaya, y como sinceramente consagrada á sostener los incontrastables derechos de la tierna é inocente Reina Doña Isabel segunda, la pone en la estrecha precisión de pintar á V. M. los graves daños que ha ocasionado su comportamiento, y los más grandes daños que todavía puede ocasionar á la causa pública.—Su modo de desempeñar la policía produce vejaciones infructuosas; pues habiendo prohibido la pequeña extracción de correjeles y

suelas de esta Villa para que no puedan calzarse los facciosos, ha dado lugar á que éstos, por vía de represalia, impidan la entrada en ella de bastimentos, con notable menoscabo de sus habitantes, que los tienen que pagar á muy subidos precios. ¿Y no debía prohibir con la misma razón, para evitar que los rebeldes se vistiesen y abrigasen la salida de lienzo, paños y otros efectos mercantiles? Sin duda alguna; y no alcanza la Diputación por qué los comerciantes de estos artículos han de gozar de un privilegio que se les niega á los que trafican en cueros; pero sí comprendo que estas medidas inútiles para hacer que triunfe la buena causa, y perjudiciales al mismo tiempo á los individuos particulares, no deben adoptarse nunca. Los Jefes militares, que cuando la policía se hallaba á cargo de la Diputación, tenían partes frecuentes y exactos de los movimientos de los facciosos, se quejan ahora de la oscuridad en que se hallan, á pesar de que la Diputación procura instruirlos de todas las ocurrencias de que adquiere conocimiento por sus relaciones y por un sujeto sagaz encargado al efecto. Ni puede ser de otra manera. Ocupado el Comisario regio en tantos objetos á la vez, y mirando por ventura con más abinco los de pura ostentación y aparato, ni recibe á personas distinguidas del país que le participarían noticias apreciables, ni puede formar idea exacta de su verdadero estado, alejándose del trato de los que habrían de informarle de él con sumo gusto. Clérigos instruidos, Padres de Provincia, que han merecido y merecen señaladas muestras de aprecio de las demás autoridades civiles y militares, Secretarios de la Diputación que se le han presentado con urgentes comunicaciones, han sido muchísimas veces despedidos de su habitación, sin darles oídos, mientras ha sabido emplear preciosos y largos ratos en cosas de poca entidad. Así es que ha logrado desviar á todos de su inaccesible trato.—La

cárcel se llena de presos, porque tampoco puede despachar sus causas con la conveniente celeridad; él mismo lo reconoce, aunque quisiera culpar de esta falta á la Diputación, que nada tiene que ver con la administración de justicia; y más de una vez ha tenido cuatro ó cinco semanas sepultados reos políticos en los calabozos sin tomarles sus primeras declaraciones. Este modo de obrar, el tono altivo y dominante con que interpone su autoridad, á la cual quisiera tal vez hacerla ilimitada y despótica, la falta de tino en las medidas políticas que ha puesto en planta, la separación que ha hecho sin justo motivo de algunos de los empleados que tenía la Diputación en la policía, el nombramiento de otros allegados suyos extraños á este país, que ni conocen su lengua particular, ni los hábitos de sus moradores, y á los cuales habrá de pagar el Señorío, sin intervenir en su nombramiento, y sin que sean naturales de él, como lo mandan sus leyes, han producido un descontento que es disculpable por el origen de que nace. También se han aumentado considerablemente los dispendios en esta época de ruinas y desastres, sin que se haya visto ni la mejora del espíritu de los vizcaínos extraviados, que estaban acostumbrados á mirar con respeto, confianza y afecto á la Diputación, que ahora es tratada con cierta especie de desprecio, ni se ha conseguido ninguna ventaja sólida para lograr la pronta pacificación de este Señorío con la venida del Comisario regio, de que se esperaban frutos lisonjeros.—La Diputación, pues, recurre sumisamente á V. M., persuadida á que su esclarecida sabiduría sabrá aplicar el oportuno remedio á las demasías del Comisario regio. La situación en que se encuentra es seguramente lamentable. Usurpándola aquel Magistrado todas sus atribuciones tutelares, quiere dejarla reducida á pagar su asignación y las de los que trabajan en sus oficinas, á proveer al ejército de lo que ha menester, y á

exigir contribuciones insoportables á los pueblos. Si no fuera el Gobierno de V. M. tan justo como ilustrado, pensaría acaso la Diputación que el Comisario regio tenía facultad de apremiarla hasta el extremo deplorable de abandonar el servicio público, pero ¿cabe el ordenarlo en el bondadoso cuanto magnánimo corazón de V. M.? La Diputación, Señora, ni desea que sus regalías sean mayores que las que legítimamente le pertenecen, ni menos quisiera seguir representando los intereses de este destrozado país si hubiese perdido la confianza augusta de V. M.; por lo mismo—Suplica rendidamente á V. M. que se digno, ó exonerar á los miembros que la componen de sus funciones respectivas, ó mandar que el Comisario regio no usurpe sus facultades económico administrativas, ni proceda con tanta ligereza como falta de circunspección, do tino y miramiento con una corporación cuyo principal conato se ha cifrado en sostener con todo el lleno de sus fuerzas el trono bienhechor de la más inocente y adorada de las Reinas; que en la remoción de empleados, y particularmente en los nombramientos de los que hayan de sucederlos, cuente con el sufragio de la Diputación, que es quien los paga y debe intervenir en ellos, con arreglo á las instituciones de este país, que subsisten aun; y en fin, que V. M., tomando en consideración lo expuesto por la Diputación en fecha 28 de Junio y 6 de Julio últimos se digne resolver favorablemente acerca de aquellas solicitudes». Firman como Diputados Anitua y Egüa.

El 20 de Agosto la Diputación, con asistencia del Corregidor, acordó imponer dos reales por fanega de sal, para hacer frente á sus apremiantes necesidades.



CAPÍTULO IX

No contribuía menos la autoridad militar, por su parte, que el Comisario regio, á que viviese en continua zozobra la Diputación general del Señorío. El Gobernador de la plaza de Bilbao, Don Miguel de Arechavala, encargó á la Diputación el 3 de Septiembre que sin excusa alguna continuase proveyendo de calzado á las tropas. Contestóle la Diputación: que había tomado por su cuenta interinamente esta provisión, pero que le era imposible continuarla por falta de recursos; que lo había hecho ya presente á tiempo; y que si no se escuchaban sus razones, se vería en la necesidad de disolver el cuerpo de cazadores y desarmar las trincaduras.

Con este motivo acordó elevar una exposición á la Reina, en la que se dice: que el General Valdés le impuso la carga de suministrar cinco mil pares de zapatos todos los meses desde Enero último, aceptada interinamente por la Diputación; que en 22 del mismo mes solicitó por conducto del Ministerio de Fomento que se la eximiese de tan exorbitante exacción, y en extremo desproporcionada á sus mezquinos recursos, apenas suficientes para las demás car-

gas que pesaban sobre ella; que no habiendo merecido constatación alguna, siguió como mejor pudo con la provisión del calzado, esperando que la guerra que nos aniquila tuviese pronto y feliz término; que como la guerra se prolonga y están agotados los recursos de la Diputación, pidió á S. M. en 27 de Julio que se la relevara de aquel costoso servicio; que desde entonces han mediado los oficios, de que da cuenta, con la autoridad militar; que la Diputación que auxilió con mano generosa á los valientes defensores de la Reina, mientras tuvo medios para socorrerlos, aun dejando abandonadas otras deudas sagradas de su privativa obligación, no se encuentra ya en el caso de vencer imposibles y satisfacer las continuas reclamaciones de las autoridades militares, viéndose desconceptuada, sin acción sobre los pueblos agobiados de este Señorín, careciendo de arbitrios y de crédito para reunir fondos, y abrumada de crecidas deudas. Por otra parte el Comisario regio ha exigido violentamente, sin contar con la Diputación, único cuerpo autorizado por real orden de primero de Marzo último á hacer repartos directos, una cuantiosa contribución á los comerciantes de Bilbao tenidos por carlistas, la cual excede, al parecer, del siete por ciento de los capitales que se les han calculado; aumentando así la decadencia mercantil de la plaza de Bilbao, que sigue en una especie de bloqueo ruinoso. La Diputación pedía que por estas consideraciones se la eximiese del suministro de zapatos.

Se leyó el 28 una real orden, comunicada el 15 por el Ministro de Gracia y Justicia, reducida á decir á la Diputación, que necesitando su eficaz cooperación y apoyo el Comisario regio para poner término á la guerra civil, espera la Reina Gobernadora que prestará todos los auxilios que estén á su alcance para las urgencias de la pacificación. A esta real orden tan lacónica como indeterminada, contes-

tó la Diputación, por conducto de los Procuradores á Cortes de Vizcaya con la exposición siguiente:

«SEÑORA. La Diputación general del Señorío de Vizcaya ha recibido la real orden comunicada por el Ministro de Gracia y Justicia con fecha 15 del corriente, por la cual se digna V. M. excitar su lealtad y celo á que siendo tan necesaria la cooperación y apoyo de esta Diputación al Comisario regio de Vizcaya, para contribuir eficazmente á poner término á la desoladora guerra que aflige al país, preste en las actuales circunstancias todos los auxilios que estén á su alcance para las urgencias y necesidades de la pacificación.—Desde que fué reinstalada la Diputación general de este Señorío, al ser ocupada la Villa de Bilbao por las tropas de la Reina nuestra Señora, desplegó todo el vigor que puede inspirar la lealtad más acendrada y el deseo de la propia conservación. Exhaustas las cajas públicas, por haberse apoderado de todos sus fondos los rebeldes, después de haber arrancado con violencia cerca de tres millones de reales á los capitalistas de Bilbao, tuvo que vencer obstáculos que parecían insuperables para principiar á dar frente á las exigencias del servicio militar. La confianza y entusiasmo que supo inspirar la Diputación á los leales, ha ido superando todas las dificultades hasta un grado que parece increíble, atendida la penuria que produce una guerra tan desoladora.—Rotos los diques de la subordinación por hallarse ocupada por la facción la generalidad del país, ha quedado obstruida la recaudación de los arbitrios ó contribuciones ordinarias, y sumidos en la miseria los habitantes pacíficos por las enormes exacciones de la fuerza armada. Sin embargo de tan deplorable situación, se arrojó la Diputación á crear y sostener á sus expensas un cuerpo de más de trescientos cazadores vizcaínos de Isabel segunda, y á equipar y armar tres trincaduras, en cuya for-

mación y manutención, y construir las fortificaciones exteriores de la Villa de Bilbao, lleva gastados un millón, ciento veinte y tres mil, cuatrocientos ochenta y nueve reales— Observando con profundo sentimiento que las operaciones militares no presentaban resultado tan ventajoso como se esperaba de la decisión, valor y disciplina de las tropas de S. M. la Reina nuestra Señora, se persuadió que el embarazo de los bagajes podía haber ocasionado la lentitud de las marchas, y á fin de dar mayor movilidad, formó la Diputación y sostiene á sus expensas, para el servicio de la división acantonada en su territorio, una brigada de setenta y dos acémilas, veinte y cuatro mozos y dos capataces montados que cuestan en cinco meses ciento diez y seis mil, ciento veinte y siete reales. Ha satisfecho además la Diputación hasta esta fecha la cantidad de quinientos sesenta y ocho mil quinientos noventa reales, por treinta y dos mil trescientos ochenta y cuatro pares de zapatos, que ha entregado á las tropas que operan en este Señorío, y la suma de ciento sesenta y seis mil, ochocientos setenta y nueve reales, en anticipación de gastos de parque, espionaje y otras atenciones militares. Tampoco bajan de setenta y dos mil reales las cantidades que ha entregado la Diputación al Comisario regio, por su sueldo y el de los empleados que ha nombrado para el desempeño de su oficina de policía. Pueden calcularse en catorce á diez y seis mil raciones completas de pan, carne y vino las que contribuyen los pueblos de Vizcaya diariamente, tanto á las tropas de la Reina nuestra Señora como á los rebeldes, aproximándose á cuatro reales el precio de la azumbre de vino, y siendo de mucha entidad los piensos ó el forraje y el combustible. Además ha suplido los muy crecidos gastos que han ocasionado las fortificaciones de Bermeo, Portugalete, Lequeitio, Guernica, Durango, Zorpoza, Ochandiano, Balmaseda, Orduña y las exteriores

de Bilbao. Por no hallarse liquidados ni ser posible liquidar por ahora todos estos suministros y servicios, no se aventuró la Diputación á fijar su valor; pero la sabiduría de V. M. no desconocerá que son enormes las sumas que representan.—Bien convencido el Consejo de señores Ministros que de continuar exigiéndose tan exorbitantes servicios, seguiría necesariamente la miseria y desesperación de los pueblos del país desolado por la guerra civil, se sirvió acordar en sesión de 20 de Mayo último que se facilitasen por el real tesoro á las Diputaciones de las Provincias Vascongadas, en clase de anticipación, desde primero de Julio próximo, las cantidades que adelanten, sin perjuicio de que en el entretanto continúen contribuyendo con las necesarias para las gratificaciones y sobresueldos, que actualmente se abonan á las tropas destinadas á la pacificación de estas Provincias, declarando que los bienes ó intereses de los cabezas y principales autores de la guerra civil queden responsables y especialmente aplicados al reintegro de los gastos ocasionados por los abonos extraordinarios que se hacen á las tropas. Mas esta resolución, de que tiene noticia confidencial la Diputación, no le ha sido comunicada, ni hasta ahora se le ha facilitado cantidad alguna por el real tesoro, ni se le ha reintegrado de parte alguna de las inmensas anticipaciones que tiene hechas al ejército.—Sin contar, pues, con más de un millón doscientos mil reales que cuestan las obligaciones ordinarias de este Señorío, la exorbitante suma de catorce á diez y seis mil raciones diarias de pan, carne y vino, las fortificaciones de varios pueblos, y los forrajes y combustibles, lleva invertida la Diputación general la cantidad de dos millones, cuarenta y siete mil, ochenta y cinco reales en sostener los cazadores vizcaínes de Isabel segunda, tres trincaduras, el calzao y brigada de la tropa, parque, espionaje y otras atenciones militares, las fortificaciones

exteriores de la Villa de Bilbao y los sueldos del Comisario regio y su oficina de policía, sin que las retribuciones y multas de este ramo se destinen á ninguno de los servicios que cubre la Diputación, ni tenga ésta conocimiento de su aplicación.—Para penetrarse de la enormidad de estos servicios, basta fijar la consideración, en que además de hallarse paralizada toda la industria y comercio de Vizcaya por la guerra civil, y estar actualmente invadido su territorio del cólera morbo asiático, se limitan todas las rentas líquidas de su propiedad particular á cuatro millones, ciento setenta y cinco mil, sesenta reales, según la estadística territorial formada en el año 1823.—Nadie más interesado que la Diputación general, en que á cualquier coste y sacrificio se logre la pacificación de su territorio. No ha omitido ni omitirá medio alguno de cuantos se hallan á su alcance para conseguirlo; pero se persuade haber agotado la esfera de la posibilidad, y que de exigir mayores sacrificios á este desventurado país, quedará sumido en la más espantosa miseria, ó inutilizado para servir al Estado en lo sucesivo; en cuya atención—Suplica rendidamente á V. M. se digne acoger con benevolencia los esfuerzos de lealtad y celo de la Diputación general de Vizcaya, mandar expedir las órdenes conducentes, para que con arreglo á lo acordado por el Consejo de los señores Ministros en 20 de Mayo último, se faciliten inmediatamente por el real tesoro las cantidades que tiene adelantadas desde primero de Julio de este año en abonos extraordinarios, y ordenar igualmente que la Intendencia de ejército reintegre sin demora cuantos suministros ordinarios han sido anticipados y se anticiparen por la Diputación y pueblos de este Señorío»...

«En el salón de la casa nueva secretaría ¹ de este M. N. y

¹ Consta por primera vez esta circunstancia en las actas de los acuerdos de la Diputación.

M. L. Señorío de Vizcaya, sita en la Villa de Bilbao, á 4 de Octubre de 1834, reunidos en la forma acostumbrada los señores Comisario regio y Corregidor Don José Alonso, los Diputados generales Don Mariano de Eguía y Don Juan Bautista de Anitua, el Síndico procurador Don Francisco de Garaizabal, y el Consultor Don Casimiro de Lotzaga, conmigo el secretario de Gobierno (Hormaeche), se comenzó á tratar de la real orden que trascibió en 17 de Septiembre próximo pasado el señor Comisario regio y Corregidor, para aumentar hasta el número de mil plazas el cuerpo de cazadores de Isabel segunda; y habiendo los señores Diputados manifestado la imposibilidad de sostenerlas en la situación en que el país se hallaba, á pesar de sus ardientes deseos de aumentar aquella fuerza hasta las mil plazas y aun más, y de cooperar á su pacificación y al pronto triunfo de la causa de la Reina nuestra Señora, el señor Comisario regio se levantó exasperado, sin duda porque cuando su Señoría dijo en la discusión que las raciones de carno y vino que se suministraban á las tropas de S. M. se abonaban por la Hacienda militar, le interrumpió el Consultor para demostrarle que se hallaba en un concepto equivocado, y alzando la voz con bastante fuerza dijo entre otras cosas: *v. m. s. están escatimando los recursos á las tropas de la Reina nuestra Señora para que los tengan mayores los facciosos*, y sin aguardar respuesta alguna salió del salón, añadiendo que no volvería á poner en él los pies. Considerándose los Diputados altamente ofendidos por este singular modo de proceder, acordaron dirigirle el siguiente oficio, haciendo dimisión de sus destinos:

«La Diputación general del Señorío de Vizcaya, desde el instante en que fué reinstalada en sus funciones por la entrada victoriosa de las tropas de S. M. la Reina nuestra Señora en esta Villa, se consagró á su servicio sin reserva y

»con el más vivo entusiasmo. La excelsa Reina Gobernadora, que ha sabido apreciar sus esfuerzos y sacrificios, se ha dignado darle las gracias repetidas veces; pero á pesar de todo, por una fatalidad que no pueden concebir los individuos que componen esta corporación, que han prestado además servicios personales de no pequeño valor é importancia, han sido tratados en presencia de V. S. mismo por el señor Comandante general de este Señorío de un modo bien poco decoroso y comedido, pues hasta se los comparó con los facciosos, y se los amenazó con que serían fusilados. Para colmo de disgustos y de dolor, V. S. en la conferencia de hoy, olvidándose de toda consideración y miramiento, y de la confianza á que su no mancillada conducta les hacía acreedores, los ha culpado injustamente de las desgracias que sufre este país, y de la prolongación en él de la guerra civil, en cuya pronta conclusión se hallan hartos interesados, pues de otro modo se verían demasiado comprometidas sus haciendas y vidas. A esto solamente han dado lugar las reflexiones que se han hecho para probar que las nuevas cargas que habrán de pesar sobre el país, si se trata de aumentar hasta mil plazas el cuerpo de cazadores vizcaínos, no podían responder de que se realizaran, sin embargo que ansiaban este aumento, y aun otro mayor, y se allanaban con gusto á presentar todos los datos estadísticos necesarios para hacer un reparto. Tal vez el objeto de V. S. en vilipendiar á los Diputados nace, ó de la poca confianza que le inspiran, ó del deseo de que abandonen sus puestos, y no pueden menos de hacer desde el momento la más solemne dejación de sus destinos, que no les han ofrecido hasta ahora más que sinsabores, tanto más amargos y tristes cuanto menos merecidos.

«Además juzgaron conveniente elevar, á S. M. la Reina Gobernadora, por el conducto del Ministro de Gracia y

Justicia» la exposición documentada que abajo se inserta, pidiendo su exoneración por considerarse altamente injuriados y ofendidos por el tratamiento indecoroso ó injusto que les dió el día 15 del próximo pasado el señor Comandante general de este Señorío, como por la conducta inexplicable que en la sesión de hoy ha tenido con ellos el señor Comisario regio y Corregidor, de quien ha recibido no merecidos ultrajes.

«SEÑORA.—Al elevar á los augustos oídos de V. M. por última vez su voz, no serán los Diputados generales del Señorío de Vizcaya menos veraces y francos que lo han sido en ocasiones anteriores. Los Diputados, Señora, no obstante las constantes angustias en que se han visto envueltos desde que fueron restituidos á sus legítimas funciones, no han querido abandonar cobardemente sus deberes. Ni el temor del incendio con que han sido amenazadas sus fincas por la rabia feroz de los facciosos, ni el de los desastres consiguientes á una guerra civil conducida con el frenesí más ciego, ni el de la peste que ha hecho y está haciendo tantos estragos en este país, condenado á sufrir juntas todas las plagas que pueden afligir á la especie humana, ha sido bastante poderoso para que dejaran sus puestos. Sostentan en ellos la lisonjera esperanza de ser útiles á la causa de la hija excelsa de V. M. Pero la acrisolada lealtad que han manifestado los Diputados de Vizcaya, y los servicios importantes que han sabido prestar, si bien han merecido ser acogidos por V. M. con benevolencia, no han tenido igual galardón de parte de las autoridades civil y militar, que representan en este Señorío á la adorada Doña Isabel segunda. Para que asociados á las beneméritas tropas de la Reina nuestra Señora limpiasen este país de facciosos, creó la Diputación un cuerpo de cazadores vizcaínos, de cuya organización y arreglo ha cuidado una Junta llamada de

»armamento, compuesta de sujetos dignos de toda confianza
»nombrados por el Conde Armildez de Toledo y la Diputa-
»ción. Esta Junta ha corrido con los pagos de todos los gas-
»tos que ocasiona el cuerpo, y la Diputación le ha suminis-
»trado cuantos fondos ha necesitado hasta ahora, sin que
»mientras ha estado en Bilbao y sus inmediaciones hubiese
»sufrido el menor atraso. Ocupados los cazadores en guar-
»necer á Eibar, pueblo de Guipúzcoa, por el espacio de cer-
»ca de dos meses, y cerradas las comunicaciones con aquel
»pueblo, no fué posible ajustar cuentas con los cazadores,
»aunque fueron puntualmente satisfechas todas sus libran-
»zas, y aun se les envió dinero cuando lo pidieron. Traslada-
»dos luego á Lequeitio sin que hubiesen reclamado anterior-
»mente nada, se los socorrió con cosa de treinta mil reales
»vellón, é ignorando el estado en que se hallaban las cuen-
»tas, se vió la Diputación con el oficio número primero del
»Comandante Don Bernardo de Echaluze. La Diputación
»puso su contenido en conocimiento de la Junta de arma-
»mento, y ésta avisó á Echaluze que pasara la cuenta de las
»distribuciones, á fin de que se supiese el haber de los caza-
»dores para enviárselo inmediatamente por mar. Echaluze
»dirigió, en lugar de ejecutar lo que le indicaba la Jun-
»ta, el oficio número dos por medio del Gobernador de
»esta Villa. Y el Comandante general, que cuando se reci-
»bió, que era el día 15 del próximo pasado, se hallaba
»con su división acampado en Begofia, Anteiglesia in-
»mediata á esta Villa, avisó á los Diputados que comparé-
»ciesen ante él. El día 15, Señora, era acaso el más triste
»de cuantos han visto los habitantes de Bilbao. La víspera
»se desarrolló el cólera morbo de una manera aterradora,
»y todavía seguía este feroz azote arrebatando víctimas con
»igual furor. No obstante, hubieron de ir los Diputados en
»compañía del Comisario regio, heridos por los rayos de un

»sol abrasador, y atravesando por multitud de cadáveres que
»se llevaban á sepultar por el mismo camino, á presentarse
»al Comandante general. Lejos estaban de imaginarse que
»serían tratados por él de un modo tan torpe y brutal, y más
»lejos todavía de creer que serían comparados, sin ningún
»miramiento, con los foragidos que han causado en este país
»tantos destrozos; pero, Señora, se adelantó hasta amenazar-
»los con que serían fusilados, sin haberles oído, sin poder
»echarles en cara otra falta que el no tener todos los recur-
»sos que en esta época difícil son necesarios.—La Diputación
»tal vez habría callado este acontecimiento, que honra tan
»poco los adelantos políticos de un General, y que es mengua
»de quien debe reservar la entereza y el valor para combatir
»á los enemigos, no para hollar á autoridades pacíficas y
»amigas, sin cuyo auxilio habría sufrido por ventura reveses
»que hubieran deslustrado, más sus operaciones. Pero es-
»taba reservado al Comisario regio el repetir escenas seme-
»jantes, dolorosas á la par que funestas, y estaba reservado á
»los actuales Diputados el apurar la copa amarga del sufri-
»miento.—El Comisario regio ofició á la Diputación en 17
»del próximo pasado lo que resulta del número tres. Esta le
»contestó lo que observará V. M. por el número cuatro. Re-
»produciendo su anterior oficio envió el número cinco, al
»cual contestó la Diputación con el número seis. En fin se
»conformó en concurrir á la sala de sesiones de la misma
»Diputación en 24 del propio mes, según consta del número
»siete, y no se presentó hasta ayer mañana. En esta sesión
»extraña, inconcebible para la Diputación, trató á los Dipu-
»tados con una altanería adusta y desabrida propia sólo de
»un bajá; no quiso ni prestar oídos á sus razones sólidas y
»templadas, ni detenerse un momento después de haberlos
»injurinado con feos denuestos ajenos del carácter de un Ma-
»gistrado, como si ellos protegiesen á los rebeldes, y pudie-

»sen estar interesados en la ruina de Vizcaya, y en la suya
»propia y la de sus familias. Los Diputados juzgaron, pues,
»que se hallaban precisados á remitirle, como lo hicieron, el
»número ocho. Inútil les parece (¿y para qué lo necesitan si
»conoce V. M. sus verdaderos sentimientos, y los conocen
»todos los adictos á la causa de Doña Isabel segunda?) dete-
»nerse á hacer una apología de su conducta acrisolada y pura,
»de su nunca desmentida lealtad. Satisfechos con el testimo-
»nio de sus conciencias, solamente aspiran á que V. M. se
»digne declarar, como lo piden con el más sumiso acatamien-
»to, que han llenado cumplidamente sus deberes, y á que les
»admita la renuncia de unos destinos que no pueden seguir
»desempeñando, porque han sido tratados con desprecio y
»vilipendio por autoridades, que en su concepto se hallaban
»en obligación de honrarlos y protegerlos»...

El 6 se dió cuenta en Diputación de un oficio del Corregidor fechado el 5, que es como sigue: «He recibido el oficio de V. S. S. de ayer por consecuencia de la sesión celebrada en su mañana. En su contestación nada dió acerca de la ocurrencia que V. S. S. refieren con el señor General Espartero á mi presencia; observaré únicamente que por sus resultados apareció un hecho cierto y muy capital. V. S. S. se apresuraron á remitir cuarenta mil reales al Comandante del batallón de cazadores, y al día siguiente, á virtud de mis instancias, les proporcioné yo á V. S. S., y remitieron también sin dilación al mismo Comandante, otros cuarenta mil reales. Infero de aquí que se le debían crecidas sumas para el pago de aquél cuerpo; y este atraso era precisamente el fundamento de la sublevación de algunos soldados, que pudo comprometer la seguridad de las armas de la Reina nuestra Señora y de un punto tan importante. Por lo que toca á la ocurrencia conmigo en la sesión de ayer, se conoce que V. S. S. buscan, como siempre, medios de cohonestar

su negativa á todo servicio extraordinario; y no hallando ninguno plausible, han recurrido á una equivocación, que no puede ser más que voluntaria. Yo ni me olvidé de consideración alguna, ni vilipendié á la Diputación. Las contestaciones fueron con el Consultor; la Diputación á todo calló y lo tendría dispuesto anticipadamente porque así le convenía; y yo ni atacué la persona de aquél sino por interrumpirme cuando hablaba, ni las de V. S. S., ni menos su autoridad; sólo lo hice á las reflexiones y evasiones con que como he observado, siempre se trata de huir de todo esfuerzo extraordinario, y que lleve una manifiesta decisión. Ya dijo á V. S. S. el señor General Espartero cómo fué y por qué el dar á V. S. S. las gracias el Gobierno por sus servicios; y yo añadiré que cuando éstos no han pasado de ordinarios, ni llegado á los que podían y debían exigirse de un país que ha provocado esta lucha devastadora y de escándalo, esta expresión de gracias prueba cuando más la excesiva bondad de la Reina Gobernadora. En conclusión, es una cavilosidad calumniosa sentar que yo me haya propuesto en la sesión de ayer hacer á V. S. S. dejar sus destinos; mal podía tener tal objeto mi presentación entre V. S. S., cuando yo resistí como innecesaria en mis anteriores oficios esta reunión, y si me presté á ella, fué sólo porque jamás se tomase apoyo artificiosamente para escudarse de la negativa al servicio. V. S. S. hacen dejación de sus destinos; yo por ahora nada puedo resolver; las consecuencias de esta resolución serán á cargo y responsabilidad de V. S. S. mientras no estén autorizados para separarse.»

«Pocos esfuerzos costará á los Diputados», contestaron éstos al Comisario regio, «la justificación de su conducta en el suceso que V. S. refiere en su oficio de 5 de Octubre con el señor General Espartero, y no les costará mayores demostrar la inexactitud de los hechos que V. S. sienta

como positivos para explicar su origen. Afortunadamente, ha corrido con todo lo relativo al cuerpo de cazadores una Junta de armamento, á la cual ha provisto siempre la Diputación de cuantos fondos ha pedido, y esta Junta, compuesta de sujetos apreciables y dignos de entera confianza, (era su Presidente hasta que fué nombrado Procurador á Cortes el Brigadier de la real Armada Don Jacinto de Romarate) dirá si los Diputados han dado ó no motivo al lance desagradable de los cazadores, y si ha consistido en no haber su Jefe presentado las cuentas oportunamente, y en hallarse cerradas las comunicaciones con el pueblo de Eibar, que no pertenece á este Señorío, en donde estuvieron mucho tiempo de guarnición, ó en la morosidad de los Diputados para remesar los caudales. Los cuarenta mil reales que se mandaron á Lequeitio, á consecuencia de la violenta ó inaudita amenaza que nos hizo el señor Espartero de fusilarnos, fueron también por mano de la Junta de armamento; y de los otros cuarenta mil reales, que V. S. dice nos proporcionó, y anticipó la Junta de comercio para en cuenta de mayor suma que debía entregar á la Diputación á fines del próximo pasado, se enviaron por la misma Junta de armamento treinta mil; y á pesar de que por haber sido relevados los cazadores de la guarnición de Lequeitio para cuando pudo llegar la trincadura que les llevaba aquel socorro, no los percibieron, según lo hemos sabido después, ni se han quejado de que se les debiese cantidad alguna en los últimos días en que han estado en la proximidad de esta Villa, ni han reclamado el menor auxilio; prueba de que las sumas que á la sazón alcababan no era tan grandes como V. S. infiere bien gratuitamente. *Por lo que toca, dice V. S., á la ocurrencia conmigo en la sesión de ayer, se conoce que V. S. S. buscan, como siempre, medios de cohonestar su negativa á todo servicio extraordinario.* ¡Los Diputados negar-

se á todo servicio extraordinario! ¡y lo asegura bajo su firma el Presidente de la Diputación! Bien de otro modo han juzgado los que han visto los inmensos y notorios sacrificios, que han hecho en nombre de los leales á quienes representan, en favor de la causa de la Reina nuestra Señora; y V. S., á quien deberían constar con mayor evidencia, si se hubiese tomado el ligero trabajo de examinarlos, no habría estampado aquella cláusula injuriosa. Algún día, que no está lejos, fallará la opinión pública, y decidirá con presencia de datos irrecusables si la Diputación ha prestado ó no servicios extraordinarios, y si V. S. ó los Diputados, que nunca han esperado medrar, han procedido con desinterés, con pureza y con verdad. — *Yo no me olvido*, prosigue V. S., *de consideración alguna, ni vilipendio á la Diputación.* ¿No es olvidar lo la consideración, no es vilipendiar, no es llevar el ultraje hasta un extremo que no se puede resistir por ninguna alma elevada y generosa, el echar en cara á los Diputados, como V. S. lo hizo á grito herido, faltando á la urbanidad y al decoro, *que están escatimando recursos á las tropas de la Reina nuestra Señora para que los tengan mayores los facciosos?* Estas expresiones oímos nosotros de boca de V. S., sin haber desplegado nuestros labios más que para rectificar un hecho; las oyeron todos los que se hallaban en el salón; las oyeron los porteros; las oyeron los oficiales de la secretaría; las oyeron finalmente hasta gentes que por casualidad vinieron á las oficinas al despacho de sus negocios; tan destemplado era el tono con que V. S. las pronunciaba. Si los Diputados callaron á todo, fué porque V. S. salió precipitadamente sin detenerse á escuchar respuesta alguna, diciendo á voces que no volvería á poner sus piés en la sala de la Diputación. — De todo este acontecimiento quiero V. S. culpar al Consultor porque le interrumpió. Ni pudo menos de hacerlo sin faltar á su obligación, cuando V. S. sostuvo que

la carne y el vino que se suministran por este país á las tropas de nuestra adorada Soberana se abonan á los pueblos por la real Hacienda, para deshacer este error bien notable en que V. S. incurrió.—Tampoco es más exacto y cierto que *siempre se trata de huir de todo esfuerzo extraordinario y que lleve una manifiesta decisión*. Los servicios que voluntariamente se han prestado por la Diputación sin excitación de nadie, los conoce la excelsa Reina Gobernadora igualmente que sus Ministros y la nación entera, ó importan muchísimos miles de pesos, y aun antes que el señor Espartero y V. S. pisasen el suelo de Vizcaya mereció de ella repetidas y muy lisonjeras gracias, por conductos muy puros que acaso ignora V. S. todavía. Mas aún prescindiendo de esto, ¿necesitan las posteriores del sello de la sanción de V. S. y del General Espartero para ser válidas? ¿Tiene V. S. por ventura la facultad de interpretarlas á su antojo? Si los Diputados fuesen capaces de olvidar los injustos donuestos que V. S. les prodigó en el momento en que, ofendido el amor propio de V. S. por haberle replicado cuando se obstinó en sostener un error, quiso desahogarse á su costa, no podrían dejar de rechazar con la más viva indignación el siniestro sentido con que V. S. parece que quiere culparlos de esta lucha devastadora y de escándalo, como podría hacerlo con los mismos Diputados rebeldes si los tuviese encerrados en una cárcel. Los legítimos Diputados de Vizcaya han deplorado y deplorarán eternamente los desastres que ocasiona esta guerra fratricida, y han desecado y desean con ansia remediarlos ó disminuirlos, porque tienen un interés harto más grande y directo que V. S., pues son vizcaínos y sinceramente adictos á la causa de Doña Isabel segunda. Toda su fortuna, su existencia misma está identificada con el triunfo de ella y con la existencia de Vizcaya, y al paso que V. S. que vé equivocadamente el origen de

esta discordia sangrienta en el exceso de riqueza y población que disfrutaba el Señorío, le miraría tal vez con serenidad reducido á escombros humeantes, cubierto de cadáveres de leales y traidores heridos por la misma cuchilla, los Diputados derramarían sobre ellos lágrimas acerbas, y se lamentarían del extravío de sus paisanos incautos, seducidos por el ciego fanatismo, y exasperados por las medidas desacertadas de quienes, con más prudencia y tino, habrían podido quizá atraerlos á sus deberes. La Diputación no ha cesado de indicar á S. M. con la franqueza que le distingue los medios más eficaces de extinguir la presente rebelión, cuya voraz intensidad nunca ha tratado de disimular, y ha visto con dolor cumplirse todos sus tristes y anticipados vaticinios. —Supuesto que V. S. que ha contribuido, aumentando nuestros disgustos, á que hiciéramos dejación de nuestros destinos, no tiene por conveniente aceptarla, aguardaremos á que S. M. la Reina Gobernadora, á quien hemos elevado la exposición conducente, se digne resolver lo que juzgue oportuno. A nada aspiramos más ahincadamente que á volver al retiro de la vida privada; y así como mientras ocupemos los puestos de Diputados defenderemos con todas nuestras escasas facultades los intereses de los que se han pronunciado por los derechos indisputables de la tierna é idolatrada Doña Isabel segunda, que componen lo más granado y rico del Señorío y llevan todas las cargas, así contribuiremos también en la clase de simples particulares á sostenerlos con el mayor placer en proporción á nuestros medios.»

Los Diputados generales elevaron el 8 á la Reina otra exposición, pintando con vivos colores la situación en que se hallaban. Piden «que se les conceda volver á la vida privada para llorar calamidades que ni han provocado ni podido disminuir... Los Diputados no pueden seguir en sus

destinos, porque han recibido ultrajes, porque han sido atropellados por el General y por el Comisario regio, y porque privados de sus facultades se hallan expuestos al escarnio y ludibrio de todos. No pueden continuar, porque agotados todos los recursos del país, sin fuerza ni prestigio para hacer el bien, sin que se les permita obrar, sin carácter ni medios para hacerse obedecer, se solicita de ellos en todos los apuros auxilios que no les es dable prestar; se los culpa de errores que no han podido cometer, pues están reducidos á la nulidad más extraña, y finalmente, se hallan en contradicción con las leyes mismas que los han colocado en los puestos que ocupan, y se los trata como á verdaderos criminales. Tiempo há, Señora, que rogaron á V. M. que se dignase exonerarlos de sus destinos, porque previeron todos los disgustos á que los exponía su suerte desgraciada. Suplican, pues, á V. M. con el más respetuoso acatamiento, que tenga la bondad de admitirles benignamente la renuncia que hicieron de sus destinos y la reproducen, declarando para su satisfacción que han llenado cumplidamente sus deberes.»

Se acordó el 17, en Diputación á que asistió el Corregidor, que el Regidor electo Don Gil de Ugarte entrase á reemplazar al Diputado en ejercicio Anitua, que se hallaba enfermo, en virtud de lo resuelto en Regimiento general el 22 de Febrero último.

Se encargó el 22 al Secretario de justicia Vildósola, que mediante una gratificación pusiese en orden el archivo, que se hallaba muy desarreglado.

Se dió cuenta el 4 de Noviembre en sesión á que asistieron como Diputados Egua y Anitua de una real orden de 22 del mes próximo pasado, comunicada por el Ministro de Gracia y Justicia Garelly, en la cual, desentendiéndose por completo de la renuncia presentada por los Diputados, se los

excitaba á que dejasen á un lado diferencias que perjudicaban al servicio público, y atendiesen á la necesidad urgente de completar el armamento de las mil plazas de cazadores de Vizcaya, y se ordena, «que en el caso de que no se haya impuesto la contribución que ha sido objeto de las contestaciones, á consecuencia de la real orden de 3 del actual, la Diputación proceda desde luego, sin excusa ni pretexto alguno, á imponerla en la forma que estime más conveniente y arreglada; quedando encargados de su cobro y recaudación el Comisario regio y el Comandante general».

Esta fría arrogancia del Gobierno de Madrid, este menosprecio tan completo de la dignidad del Gobierno universal de Vizcaya, después de los innumerables servicios que tenía prestados á la causa de la Reina, obligaron á los Diputados el 4 de Noviembre á recurrir nuevamente á aquella Señora, quejándose de que no se hubiesen atendido sus súplicas, porque no podían proseguir con decoro ocupando los primeros puestos del Señorío personas, que aunque sin merecerlo remotamente, habían sido desacreditadas á los ojos de sus compatriotas por el Comandante general y el Comisario regio.—«Si la Diputación hubiese juzgado hacedero el proyecto de completar el armamento de las mil plazas de cazadores de Vizcaya, exigiendo de sus habitantes los gastos necesarios para sostenerlas, mucho tiempo há que sin ninguna vacilación habría llevado á cabo este último pensamiento, porque sabe que aceleraría la anhelada pacificación de este suelo desgraciado.» La Diputación no necesitó de excitaciones para armar tres trincaduras, cuando estaba abandonada la costa del Señorío, proporcionando por este medio á las tropas más de una vez municiones y otros efectos indispensables para la guerra, al propio tiempo que se impedía que recibiesen socorros por mar los facciosos. La Diputación no necesitó de excitaciones para abrir generosa-

mente sus arcas, y acudir á las urgencias de toda clase de las tropas «que sufrían hartas privaciones, y que no obstante su denuedo quizá habrían estado expuestas á desastres calamitosos si la Diputación no se hubiese consagrado sin reserva á auxiliarlas». No las necesitó tampoco «para costear las obras exteriores de la fortificación de esta Villa, sin las cuales la habrían quizá ocupado y destruído los facciosos».

Convencida la Diputación de que si no le era dable al Gobierno de S. M. enviar con prontitud las tropas que consideró precisas aquélla para ahogar de una vez la rebelión, «atendida la índole tenaz de los facciosos», sería la guerra sumamente larga y ruinosa, y tal vez cundiría su llama voraz por la mayor parte de España, «se atrevió á indicar á principios de este año á V. M., como un remedio seguro, y casi imprescindible, el acudir al Gobierno de vuestro aliado el Rey de los francosos, pidiendo su cooperación eficaz. V. M. tuvo razones poderosas para no acceder á esta solicitud; pero ella es la más patente prueba de que la Diputación se hallaba bien sinceramente interesada en que se terminase la guerra feroz que se ha trugado ya todas las riquezas de Vizcaya, y le promovió un porvenir que la imaginación se espanta en contemplar.»

La Diputación cree que no es posible cobrar los repartos que hayan de echarse para el aumento del cuerpo de cazadores que se pretende, y que apenas lo será recaudar lo suficiente para continuar prestando los servicios que se prestan ahora. «La riqueza territorial de Vizcaya, según el censo que se formó el año de 1823, produce una renta anual de poco más de cuatro millones de reales. Lo gastado desde el alzamiento, con todas las violentas exacciones de los facciosos, no bajará hasta el día, por los datos que se ha podido proporcionar la Diputación, de veinte millones de reales,

aun cuando no se quisiesen apreciar la pérdida de fincas taladas ó incendiadas, los robos y la total parálisis del comercio; la mayor parte de los pueblos del Señorío, en virtud de la facultad de echar derramas que les concedió la Diputación por su circular de 15 de Enero último, para atender á las subsistencias del ejército, han exigido ya más del doscientos por ciento de las rentas, y hay varios que han cobrado más del trescientos. La generalidad de los poseedores de bienes raíces se hallan emigrados en los puntos fortificados, porque son adictos á la causa de Doña Isabel segunda; no perciben renta alguna por sus fincas, y lloran en la miseria calamidades que no han provocado ciertamente. Las gruesas y frecuentes multas que imponen el Comisario regio y el Comandante general á los pueblos por omisiones y faltas voluntarias ó involuntarias, se reparten después entre los propietarios y vecinos, de manera que siempre salen los más fieles doblemente agobiados. Los leales de este país, que forman la inmensa mayoría de sus propietarios y capitalistas, bien merecen ser mirados con cierta predilección por V. M., pues son inocentes víctimas de los trastornos que han ocasionado en él los turbulentos agitadores que le han estado dominando en la última década de lamentable recordación, y además han sufrido con admirable patriotismo los gravámenes á que han tenido que ocurrir para la subsistencia del ejército, para las fortificaciones de Bilbao, Orduña, Balmaseda, Durango, Ochandiano, Bermeo, Lequeitio, Plencia y Portugalete, y las de Guernica y Zornoza que se demolieron después, para hospitales, cuarteles y alojamientos, sin dejar por eso de empuñar las armas para defender con sus propias personas decididas y entusiasmadas la causa de la Reina nuestra Señora. La Diputación ha echado mano con el propio objeto «de cuantos medios le ha podido sugerir el celo más ardiente, desinte-

resado y activo; se han empleado todos sus arbitrios en los servicios urgentes que reclamaban las necesidades de la guerra; ha vendido cuantos antiguos créditos tenía contra el Estado; celebró una transacción con varios comerciantes que le anticiparon cincuenta mil duros por la cesión de algunos derechos; contrató con la Junta de comercio de esta Villa un empréstito de un millón de reales, cediéndole también sus arbitrios ordinarios y extraordinarios; impuso al clero una contribución mensual de cincuenta mil reales; á los patronos otra de seis mil, de las cuales apenas se ha cobrado la mitad; ha recargado los artículos de consumo cuanto le ha sido posible; y finalmente, recurrió á un nuevo empréstito de dos millones de reales, garantizando el pago con toda la propiedad de Vizcaya, que no ha sido dable efectuar, porque nadie desconoce la existencia precaria de esta corporación, y de las instituciones forales á que debe su origen. Todo se ha agotado; la Diputación se halla en descubierto de la mayor parte de sus obligaciones ordinarias; no se han satisfecho las lactancias de los expósitos durante once meses, ni los recibos de cantidades tomadas á interés, y alcanzan á las cajas del Señorío sobre veinte y cinco mil duros los que por orden y cuenta de la Diputación han dado sus brazos para trabajos imperiosos, como son la confección de zapatos y reposición de trincaduras y armamento, y los que han facilitado acémilas y mozos para la brigada de esta división de operaciones.

Ya la Diputación indicó al Comisario regio en 19 de Octubre, que era de toda necesidad hacer un reparte, de cuya recaudación tendrían que encargarse él y el Comandante general que disponen de la fuerza armada, para mantener las cosas en el pie en que actualmente se hallan, y este reparto ascenderá á muy cerca de veinte mil duros mensuales, sin contar con el aumento de los cazadores. Si el

mismo Comisario regio, valiéndose de la fuerza armada, «no puede conseguir que los pueblos que están situados en el radio de legua y media de esta Villa, que son los más ricos y menos vejados, paguen al distrito de Bilbao lo que adeudan por suministros de raciones, no obstante las crecidas multas que les ha arrancado, y las violentas amenazas de incendiar sus casas», será todavía más difícil conseguir que se recauden los veinte mil duros mensuales, ni los diez mil más que se necesitan para el aumento de los cazadores. Y aunque se reuniera el dinero, será tan lento el alistamiento, que no se sacará de él ventaja alguna, como puedo decirlo el mismo Comisario regio, «quien, á pesar de pomposas invitaciones, y á pesar de lo que producen sus cuantiosas multas, apenas ha podido reunir para sus compañías de salvaguardias, al cabo de muchos meses, setenta hombres, aun trayéndolos de lejanas Provincias».

Los gravámenes de la guerra pesan principalmente sobre los súbditos leales; los empleados de la Hacienda militar se portan sin equidad cobrando, como lo hicieron en Guecho, dos reales de vellón por cada cuartillo de vino, que no cuesta arriba de diez y seis maravedís; y no es justo, ni cabe en el magnánimo corazón de la Reina, que los mejores súbditos de su hija «sean reducidos á la más desconsoladora desolación, y sacrificados por un delito ajeno que han deplorado amargamente, y de que han sido los primeros en padecer las desastrosas consecuencias.» No puede ser la intención de la Reina «que las manos de la Diputación, destinadas á proteger los intereses legítimos de Vizcaya, se empleen en acabar de desgarrar su dilacerado seno, y en destruir las moribundas fortunas de sus hijos leales y desafortunados». La Diputación ha sufrido amargas humillaciones; «y el no haber merecido ninguna contestación satisfactoria de V. M. la ha persuadido á que tal vez ha perdido vuestra augusta

confianza, que aprecia sobre todo encarecimiento»; y «espera, que puesto que todas sus atribuciones se hallan reducidas á la poco agradable facultad de echar repartos, que mejor que ella los pueden ejecutar las autoridades que no son de este país, y puesto que en la posición desventajosa y triste en que se halla no puede prestar ya ningún servicio de importancia á la causa pública;» se digne admitir la Reina «la renuncia que los Diputados tienen hecha de sus destinos, ó al menos exonerarlos de toda reconvención y responsabilidad, si en caso de que V. M. mande que ella haga los repartos, no se logra su realización, ó son funestas sus consecuencias».

En Diputación celebrada el 5, con asistencia del Corregidor, se dió el uso, de conformidad con lo expuesto por el Síndico Garaizabal, asesorado por Lotzaga, por no oponerse á los Fueros y franquicias del Señorío, á una carta orden de la sección de Gracia y Justicia del Consejo real, por la que se declara que la real orden de 16 de Marzo de 1808 no faculta á la Diputación para nombrar, como lo ha hecho, á Don Andrés de Zuricalday, para el beneficio vacante en Galdácano, en concepto de patrono, pues que el patronato se le concedió para el sostenimiento de los expósitos, después de cubiertas las cargas espirituales del patronato, y no se puede conceder á la Diputación más derecho que el de proponer á S. M., por medio de dicha sección, en el caso de que proceda la provisión de un beneficio, el sujeto que considere más digno para obtenerlo, entre los que, formado el oportuno expediente, merezcan, por sus circunstancias, la aprobación del Prelado. Se deniega al mismo tiempo una solicitud de los vecinos de Bedia para que vaya á servir en dicha Anteiglesia uno de los cuatro beneficiados de Galdácano, reservándoles su derecho de reclamar en el tribunal eclesiástico.

Fué nombrado el 7 Don Nicolás Delmas impresor del Señorío.

Dió el Comisario regio el 21 un decreto, que comprende trece artículos, en virtud de la autorización que se le había concedido por varias reales órdenes, y recientemente por una de 12 del mismo mes, para el aumento del cuerpo de cazadores de Isabel segunda, como medio «natural, conveniente y expedito para combatir la rebelión que está asolando estas Provincias». La cantidad necesaria para sufragar los gastos del aumento se repartirá entre los nueve distritos en que dividió la Diputación el Señorío en 30 de Diciembre último, cargándose á cada uno según la graduación que hizo la contaduría general en 15 de Enero. Todas las clases de riqueza quedan sujetas al reparto, con arreglo á lo resuelto por la Reina Gobernadora. Se exceptúa del reparto solamente á los que estén armados en defensa de la Reina, y á los individuos y secretarios de Ayuntamiento nombrados por las autoridades legítimas, así como á los que obtuviesen un testimonio de adhesión á la causa de la Reina, dado por el Comisario regio. Se reparten desde luego trescientos mil reales para dicho fin, conminando con apremio y costas á los inobedientes ó morosos.

Se dió cuenta el 22 en Diputación de una real orden del 12, por la cual se resuelve que el pago del servicio de entradas y salidas por la ría de los buques de las naciones aliadas que cruzan por la costa para inmedir que reciban auxilios los carlistas, sea de cargo de la Diputación. La Diputación contestó al Corregidor que acudía á S. M., pidiendo que se le dispensase del pago de este servicio, y con la misma fecha elevó á la Reina un recurso contra aquella real orden, quejándose de los conflictos que se le suscitaban sin cesar, exponiendo que en Guipúzcoa no se obligaba á la Diputación á pagar el servicio expresado, y concluyen-

do por pedir que se admitiese la renuncia que tenían hecha los Diputados de sus destinos.

Se leyó el 24 un oficio del Comisario regio, en el que preguntaba en virtud de qué prerrogativa había convocado la Diputación á su Presidente á que asistiese al salón de sesiones. Tratábase de proveer la plaza vacante de procurador del Corregimiento, y para este fin se había convocado al Comisario regio y Corregidor. Contestóle la Diputación en seguida, que el mismo Corregidor reconoce la facultad que tienen los Diputados de formar Diputación, y que en el caso presente bastaba para justificar la conducta de los Diputados el contexto de los artículos cincuenta y cincuenta y tres de la real provisión de 13 de Octubre de 1815, que aprueba los aranceles que se formaron para los juzgados de Vizcaya, diciéndose en el último de aquellos artículos que «el Corregidor ha de asistir á las Diputaciones, Regimientos y Juntas á despachar los asuntos que ocurran, sin interés alguno; y en su defecto, si siendo convocado no asistiese, se continuarán despachando, como hasta ahora, para evitar los perjuicios que resultarían de la detención».

Se dió cuenta el 25 de un oficio fechado la víspera por el Corregidor en el que dice en sustancia: que no niega que la Diputación pueda resolver por sí sola los asuntos ordinarios y comunes, ¹ pero sí la facultad de convocarle, y citar

¹ En este tiempo, y á causa sin duda en gran parte de la tirantez de relaciones con el Corregidor, empezó á observarse la práctica de celebrar Diputación sin asistencia de aquel Magistrado, lo cual, como se ha visto, era muy raro en tiempos anteriores. La nueva práctica quedó ya establecida definitivamente, después del real decreto de 16 de Noviembre de 1839, que convirtió á los Corregidores antiguos en Corregidores políticos, sin las atribuciones judiciales que tenían en el régimen foral, ó sea, en sustancia, en Jefes políticos con otro nombre, hasta que también se les dió este nombre, siguiendo el propósito constante, por parte del Gobierno de Madrid,

día y hora para aquellos asuntos en que es necesaria la presencia del Corregidor; que no conoce los aranceles, pero que basta saber á qué se reducen por su índole para concluir que no pueden determinar las prerrogativas del Corregidor; que la cita de dos artículos aislados no es suficiente para decidir la cuestión, y que él no reconocerá el nombramiento que se haga. Acordó la Diputación desestimar las observaciones del Corregidor; y persuadida á que no acudiría á la hora señalada ni á ninguna otra, proveyó la plaza de Procurador vacante en Don José de Condraondo.

Congregóse el Regimiento general el 30, en virtud de convocatoria acordada la víspera, con asistencia del Corregidor, para tratar de los medios de hacer frente á la apurada situación económica. Concurrieron los Padres de Provincia Aldecoa, Hormaza y Landocho. Se resolvió imponer el máximo de diez por ciento de contribución directa, que prescribe el párrafo cuarto del artículo doce de la escritura de conciliación otorgada en 1815 entre el Señorío, el Consulado y la Villa de Bilbao, excitando además á la Junta de comercio á que, conforme al párrafo sexto del mismo artículo, arbitre recursos capaces de cubrir las necesidades del caso extraordinario en que se hallaba el Señorío.

El 5 de Diciembre pasaron los Diputados una circular á los pueblos, acompañando la designación de la cantidad que á cada uno correspondía en el reparto del diez por ciento acordado por el Regimiento general. Debían satisfacer dos terceras partes del importe los propietarios y una los colonos é inquilinos; los cuales satisfarán desde luego el total, entendiéndose después con los propietarios. El total de la

de ir amoldando las cosas del Señorío al sistema general de España en cuantas ocasiones favorables se presentasen para hacerlo, aun cuando, como en 1844, no se pretendiera llegar á la nivelación completa.

cantidad repartida era cuatrocientos sesenta y seis mil noventa y dos reales y ocho maravedís.

Por otra circular, expedida el 8, convencida la Diputación de la insuficiencia del reglamento provisional de 19 de Marzo último que trata del derecho de veinte y cinco maravedís en quintal de vena que se extrae del Señorío, para evitar fraudes, mandaba que no se devuelva el importe de este derecho á los que al tiempo de solicitar del Alcalde de billeteros la correspondiente guía, no manifiesten que el hierro que se va á extraer se destina á ferrerías de Vizcaya, aunque hagan constar después que se había empleado en ellas. Tampoco habrá lugar á devolución en el caso de que por temporal ú otro accidente se descargue en algún punto del Señorío el mineral destinado para fuera de él, y se use en las fábricas de su distrito, por más que se justifique esta circunstancia.

No bastando todos los esfuerzos de la Diputación para allegar recursos con qué atender á las necesidades apremiantes que la rodeaban, dirigió el 13 á la Reina una instancia, pidiendo que se le anticipasen por el tesoro dos millones de reales, que satisfaría con los intereses correspondientes cuando se hiciese la pacificación.

Se acordó el 17 en Diputación á que asistía el Corregidor, prorrogar mientras duren las presentes calamidades el impuesto mensual de cuarenta mil reales que se exigía al clero, con apercibimiento de exigir el doble á los morosos.

Se dispuso el 27 hacer un contrato con Don Miguel de Larraza, por el cual aseguraba éste un ingreso mensual de sesenta y cinco mil reales por todo el año 1835 en la caja de tabacos.

De conformidad con el dictamen del Síndico, asesorado por el Consultor, se dió el uso el mismo día á una real orden publicada el 6 por la sección de Gracia y Justicia del Con-

sejo real, en la que se proviene: que la real orden de 16 de Marzo de 1808, por la que se concedieron al Señorío todos los patronatos reales de su distrito, acabadas las mercedes de los que los disfrutaban, con destino al sostenimiento de los expósitos, ha debido y debe tener efecto en lo venidero; y que por consiguiente, corresponde que entre la Diputación en el goce de los sobrantes de los patronatos, aunque se hayan provisto á favor de particulares, ó se hayan aplicado al seminario de nobles de Vergara, con arreglo á la real orden de 11 de Diciembre de 1816, pero con la condición de atender primero al culto y reparación de las iglesias; que no se concedan á particulares, bajo ningún pretexto, los patronatos de Vizcaya, y que se dé por terminada la comisión conferida en 1824 á Don Francisco Javier de Aranguren para averiguar los patronatos usurpados en Vizcaya á la Corona, porque á la Diputación es á quien corresponde é interesa el hacerlo.

Se dió también el uso este día á otra real orden, de conformidad con lo expuesto en los términos siguientes por el Síndico Garaizábal, con acuerdo de Lotzaga: «El Síndico ha visto la real orden expedida en 12 del corriente, por la cual se ha servido mandar S. M. la Reina Gobernadora que los pleitos de este Señorío, pendientes en primera instancia en el juzgado mayor de Vizcaya, ó en apelación del Corregidor ó Diputación, se sustancien y fallen por el Oidor decano de la real Audiencia de Valladolid; y las que estuviesen en súplica ante dicho tribunal se terminen ante el mismo. Y con respecto á los negocios de este Señorío que en adelante ocurriesen, teniendo en consideración que forma una parte del territorio asignado á la real Audiencia de Burgos, es la voluntad de S. M., que hasta nueva resolución, el Oidor decano de aquel superior tribunal conozca y falle los negocios que correspondían al señor Juez mayor de Vizcaya, y

dicha Audiencia conozca también de los que eran de la atribución de la extinguida real Chancillería de Valladolid. —Y dice: que puede usarse y cumplirse, sin perjuicio de reclamarse por la Diputación general el que con arreglo á los Fueros de este Señorío se restablezca definitiva y permanentemente la sala del señor Juez mayor, y la especial de suplicación de Vizcaya en la nueva Audiencia territorial de Burgos, del mismo modo que existían en la extinguida Chancillería de Valladolid.» Pero no era cosa de suprimir la Chancillería y mantener la organización especial de los tribunales de apelación de Vizcaya, porque el proceder de este modo hubiese sido desaprovechar la ocasión de dar un paso más en el camino de la uniformidad judicial, quebrantando los Fueros del Señorío. Este paso se dió ahora con el temperamento de cometer á los Oidores decanos las atribuciones del antiguo Juez mayor de Vizcaya, hasta nueva resolución, ó sea hasta que llegase el momento oportuno de dar otro paso decisivo en el mismo camino, destruyendo por completo el coronamiento de la organización judicial del Señorío.

El 31 se dirigieron los Diputados á las Justicias de los pueblos y Juntas de distrito, encargándoles que en el término de un mes remitiesen las cuentas documentadas de todos los servicios y suministros hechos hasta el día de la fecha á las tropas de la Reina y á los buques de guerra nacionales y extranjeros, de lo invertido en obras de fortificación y acuartelamiento, y lo indemnizado á los propietarios por alquileres ó perjuicios, y cualquier otro dispendio de esta naturaleza; pues por no haber cumplido los pueblos y las Juntas de distrito lo mandado por la Diputación, al aprobar en 15 de Enero último el informe de la Junta de subsistencias y socorros militares, sobre enviar sus cuentas el primero de cada mes á la Junta de distrito, y ésta la cuenta general documentada

al contador del Señorío, para que hiciese en cada cuatrimestre una liquidación sobre los nueve distritos, en la cual aparezca el alcance ó déficit de cada partido, se demora la liquidación subsiguiente de lo suministrado hasta ahora, y carece la Diputación de datos fijos para dar á conocer con exactitud el inmenso peso que sufren los pueblos de Vizcaya.



CAPÍTULO X

1835



PARA perpetuo recuerdo de las edades venideras, encargó la Diputación el 12 de Enero á los pueblos que remitiesen una nota exacta de los que hubiesen sido atacados del cólera, de los que fallecieron y de los que se curaron de esta enfermedad.

El estado angustioso y precario en que se hallaban los expósitos en Vizcaya, movió á la Diputación á elevar una instancia á la Reina Gobernadora el 14 de Febrero, pidiendo que se aplicasen á las necesidades de este ramo el indulto apostólico de carnes y la Bula de la Santa Cruzada hasta que se pudiese atender á ellas con el producto de los patronatos de la Corona que fueran vacando; que el clero contribuyese al pago del real noveno, juntamente con los patronos y preceptores de diezmos, á prorrata de lo que reciben; que la reparación de los templos se hiciese á costa de los bienes de los últimos patronos de las respectivas iglesias por haberlas descuidado, y que los vasos sagrados y ornamentos de los conventos suprimidos, se destinen con preferencia á las iglesias cuyos diezmos se hallan aplicados al sostenimiento de los expósitos. Uhagón había vuelto á ocupar su puesto de Diputado.

Resulta de esta instancia que los recursos ordinarios de la caja de expósitos habían sido el producto de la Bula cuadregesimal y el de los patronatos reales que iban vacando; pero que la comisaría de Cruzada no enviaba el dinero con regularidad, y que se calculaba que debía medio millón de reales desde la real orden de 2 de Septiembre de 1806, que creó este recurso.

El 16 se elevó otra instancia á la Reina Gobernadora, solicitando que se eximiese al Señorío del pago de los gastos de policía como en Alava. La Diputación trataba con dureza al Comisario regio, imputándole hasta falta de veracidad y delicadeza.

El 22 de Marzo comunicó el Comandante general á la Diputación una real orden del 13, por la que se suprimían los Comisarios regios de las Provincias Vascongadas, quedando autorizados los Comandantes generales para nombrar Corregidores que administrasen justicia. El Comandante general de Vizcaya nombraba Corregidor interino á Don Antonio María de Bárcena y Mendieta, encargado de la auditoría de guerra de la Comandancia general, disponiendo que la Diputación volviera á encargarse del ramo de policía.

Se dió también cuenta el mismo día del traslado de un oficio que pasaba el Comandante general al Comisario regio, mandando que corriese en adelante á cargo de la Diputación el sostenimiento de la compañía de salvaguardias, la cual, con separación de los cazadores de Isabel segunda deberá estar á las órdenes del Corregidor y de la Diputación para hacer cumplir sus providencias. Se destinaba al sostenimiento de los salvaguardias el importe de las multas que se exigiesen.

Se leyeron dos oficios del Comisario regio, dando traslado en el primero de la orden del Comandante general para

que se encargase la Diputación de la policía, y prevaleciendo por su parte que nombrase esta corporación una persona que se hiciese cargo de los papeles de dicho ramo; é insertando en el otro la real orden por la que se le relevaba del empleo de Comisario regio.

El nuevo Corregidor participó también su nombramiento.

Se contestó al primero de los oficios del Comisario regio, designando á Don Francisco de Hormaeche para hacerse cargo de los papeles del ramo de policía; y al segundo diciéndole que la Diputación quedaba enterada de la cesación de los Comisarios regios.

Se le dió posesión de su empleo al nuevo Corregidor á las cinco de la tarde, previa la exhibición de su credencial que pasó por el Síndico en la forma acostumbrada.

Por circular de 13 de Abril se previno á los pueblos, que para el 15 de Mayo próximo entregasen su cuota del diez por ciento sobre la propiedad territorial repartido en 5 de Diciembre último, admitiéndose por la tesorería general, en descargo de las cuotas respectivas, lo que hubiesen pagado los pueblos á las nodrizas de los expósitos, con arreglo á la circular de 9 de Enero, así como para la contribución de trescientos mil reales impuesta por el Comisario regio. Se excitó también á la Junta de comercio de Bilbao á que entregase en la tesorería general el importe de la séptima parte del reparto de 5 de Diciembre, con arreglo á la escritura de transacción con el Consulado de 18 de Marzo de 1815.

Tristemente impresionada la Diputación por el desgraciado combate de Guernica ocurrido el primero de Mayo, elevó el 6 á la Reina Gobernadora una exposición, pidiéndole que aceptase de sus aliados, en virtud del tratado de la cuádruple alianza, las tropas necesarias para poner término á la guerra civil. La Diputación pinta la situación angustiosa en que se ve el país, y dice que una guerra larga y sin gloria

y la escasez de oficiales han desmoralizado al ejército; que un revés hace inútiles muchas victorias; y que en el caso presente hubiera peligrado la Villa de Bilbao, si un conjunto de circunstancias felices no hubiese permitido á la Diputación hacer que llegase pronto á Vitoria la noticia del suceso, de manera que la fuerte división que allí estaba pudiese venir en socorro de los valientes encerrados en el convento de la Merced de Guernica.

Se acordó el 22 que se pagasen solamente los réditos del capital tomado para las obras de la nueva casa de la Diputación, por no poder destinar cantidad alguna á la amortización.

El 23 entró á desempeñar el cargo de Diputado, para suplir á Don Mariano de Egufá que se hallaba enfermo, el Regidor Don Manuel María de Murga, á quien correspondía por orden gradual.

El 27 se pasó á los pueblos una circular en que se dice lo siguiente: «La prolongación de la guerra civil obstruye la ejecución de las reglas y medidas indispensables para concentrar y regularizar la recaudación de los arbitrios generales del Señorío, que habían sido arrendados por el término de dos años, y cuya escritura se ha rescindido de mutua conformidad, por la imposibilidad de realizarla en todos los extremos durante la lucha fratricida que devasta á este desgraciado país.—En tan crítica situación, la Diputación ha dispuesto que los arbitrios sobre el vino foráneo de pasto común, que se hallan aplicados á la tesorería del Señorío, y á la empresa del camino de Bilbao á Durango, queden por todo el corriente año á beneficio respectivo de los pueblos que no pueden ser administrados, asignando á cada uno el contingente en metálico que por equivalencia y en metálico le corresponda, según los cálculos aproximados formados por la contaduría gene-

ral, y arreglados á los productos del último quinquenio.» Vienen en seguida en blanco las cantidades calculadas, y se manda que lo que en dicho concepto corresponde entregar á los pueblos, lo pongan por semestres en la contaduría general del Señorío y en la caja de la asociación del camino de Bilbao á Durango, bajo la responsabilidad personal de todos los individuos de Justicia y los vecinos concejantes. La Diputación está dispuesta á rectificar cualquier agravio que se hubiese padecido en los cálculos; haciéndose constar el montamiento del consumo municipal del vino foráneo de pasto común por la escritura de remate de sisas que se hayan celebrado durante el último quinquenio. Como la Diputación no tiene datos de la introducción y consumo que puede hacerse en cada pueblo de los demás artículos recargados, espera que las Justicias respectivas se esmerarán en exigir á los introductores el arbitrio que está asignado, según la nota que acompaña, siempre que el interesado no justifique haberlo pagado en cualquier otro punto del Señorío.

Con la misma fecha se autorizó á los pueblos que pueden administrarse, por cuenta del Gobierno universal del Señorío, para que cobren con arreglo á la tarifa que se les enviaba los arbitrios impuestos sobre los artículos de consumo.

Reunidos el 26 de Junio el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación general; tomando en consideración el estado de la plaza, asediada por los carlistas, poco menos que indefendible; que escaseaban ya las municiones de boca y guerra; que los Generales Latre y Espartero habían tenido que replegarse á Portugalete; que «en circunstancias críticas como las presentes es indispensable valerse de medios extraordinarios»; y que la premura del tiempo imposibilitaba contar con el Gobierno, acordaron dirigir al Rey de los franceses «con pleno conocimiento del Comandante general»,

Conde de Mirasol, una exposición del tenor siguiente:

«SEÑOR.—La Diputación general del Señorío de Vizcaya y el Ayuntamiento de Bilbao, á V. M. con el acatamiento más respetuoso exponen: que viendo á esta Villa amenazada de una ruina casi inevitable, y no teniendo otra áncora más segura para salvarla que la protección generosa de V. M., han creído de su deber acudir á solicitarla para conservar á la augusta aliada de V. M. la Reina nuestra Señora un pueblo importante y digno de mejor suerte que la que le preparan los enemigos de su trono. Asediado por los rebeldes reunidos en gran número, y provistos de morteros, obuses y cañones, ha resistido por espacio de quince días con la mayor constancia y heroísmo, y rechazado todos los ataques; pero la escasez de municiones y de víveres, la poca ó ninguna esperanza de que sea eficazmente auxiliado por las tropas de Doña Isabel segunda, y su posición antimilitar y desventajosa, pondrán á Bilbao en la cruel necesidad, ó de rendirse en breve á los carlistas, ó de dejarse reducir á escombros. Desde las alturas que le circundan han lanzado ya impunemente en las calles y plazas, no osando continuar batiendo los débiles muros de sus fuertes, ni asaltarlos, más de seiscientas bombas y granadas, que han destrozado casas y edificios públicos y llenan de consternación y luto á muchas familias apreciables y pacíficas. Todavía seguirán sin duda en su proyecto alevoso de consumir la ruina de esta hermosa Villa, que arrastrará consigo la de infinitos franceses é ingleses establecidos en ella, y aun la de los que diseminados por todo el mundo comercial tienen por sus extensas relaciones mercantiles enlazadas sus fortunas con las fortunas de sus habitantes; y desconfiando del socorro que puedan proporcionar las tropas de la Reina nuestra Señora, tanto porque el primer ensayo hecho por los Generales Latro y Espartero ha sido infructuoso, pues no atravesaron con diez



y ocho batallones los puentes del Cadagua, cuanto porque el General en jefe Valdés tampoco podrá quizá ni apoyar con sus tropas los futuros movimientos de aquéllos, ni prestar ayuda pronta y directa á Bilbao en su apuradísima situación; considerando por otra parte los funestos efectos que se seguirían si tuviese que rendirse á un enemigo implacable, que no perdonaría la gloriosa resistencia que ha encontrado, y que sacaría más recursos de este pueblo solo que de todo el país que ocupa; teniendo presente además la incomunicación en que se hallan sus autoridades con el Gobierno español; han dirigido en medio de su angustia la Diputación y el Ayuntamiento una mirada de esperanza hacia V. M., que sobre vecino y deudo es el aliado más poderoso de Doña Isabel segunda, cuyos súbditos sufrirían con la pérdida de esta plaza quebrantos irreparables. Conociendo, pues, el sincero deseo que tiene V. M. de sostener en todo su esplendor el solio de la Reina nuestra Señora, y contando con la magnanimidad de su corazón, se atreven, impulsados por la lealtad más acendrada, y persuadidos á que si el enemigo se apodera de Bilbao se haría dueño de las riquezas que encierra para alzar gran parte de la Monarquía, á—Suplicar redidamente á V. M. que se digne tomar en consideración tan poderosas razones, y determinar que entretanto se concluye la presente guerra civil, se conserven esta importante Villa y su puerto bajo la alta protección de V. M. para restituirlos á la Reina nuestra Señora Doña Isabel segunda, enviando al efecto y con la mayor celeridad las tropas del ejército de V. M. que juzgue necesarias para salvar de una ruina cierta á esta preciosa parte de la Monarquía española, con sus leyes especiales. El cielo guarde la preciosa vida de V. M. dilatados años para ventura de la nación francesa y triunfo de la civilización». Firmaron por duplicado los Diputados generales en ejercicio Ubagón y Murga,

el Alcalde de Bilbao Don Juan Ramón de Arana, los Regidores Don José Pto de Arechavala, Don Francisco de Gaminde, Don Juan Bautista de Maguregui, Don Pablo de Epalza, Don Federico Victoria de Lecea, Don Pedro de Lemonauría, Don Eustaquio de Bengoa y Don Hipólito de Jugo, los Diputados del común Don Ambrosio de Goicoechea y Don Julián de Goyarrola, el Personero Don Nicolás de Corces, el Síndico procurador general Don Eulogio de Larrínaga, el Secretario de gobierno del Señorío Don Francisco de Hormaeche y el Secretario del Ayuntamiento Don José Plácido de Castañiza.

Pocos días después, el primero de Julio, entró en Bilbao el ejército de la Reina, mandado por el General Don José Santos de la Hera. No hubo lugar por lo tanto, al socorro que habían resuelto pedir las autoridades de Bilbao al Rey de los franceses. Y es bien doloroso por cierto tener que recordar que en las contiendas civiles en que por desgracia tomaron parte tan principal los vizcaínos, hubiesen intervenido en 1823 los franceses para ayudar á los realistas, y se tratase de invitarlos á repetir su visita en 1835, bajo otra bandera, para auxiliar á los defensores de Isabel segunda.

Se dió cuenta el 7 de Julio, en Diputación, de un oficio del Comandante general, en el que incluía una nota de personas desafectas á la causa de la Reina, con el objeto de que fuesen privadas de sus destinos, y proponiendo que para evitar que se ausentasen los artesanos, no se les permitiese ejercer su oficio sin licencia, de manera que no use de los derechos de ciudadano el que no sepa cumplir las obligaciones que en tal concepto le corresponden. Acordó la Diputación, en vista del oficio del Comandante general, separar á los procuradores del Corregimiento Don Ignacio de Aguirre y Don Domingo de Arisqueta, por haberse ausentado sin

licencia, y participar al Corregidor que se hallaba en el mismo caso el escribano Don Domingo de Soparda.

En sesión del mismo día hizo presente el Corregidor, que era llegado el caso de tomar en consideración la circunstancia de que el 31 del corriente debían ser reemplazados los Diputados actuales; y en vista de las dificultades insuperables para que se hiciese la renovación con arreglo á Fuero, se acordó elevar á la Reina una instancia, pidiendo que se relevara á la Diputación de la manera más conveniente y análoga á las instituciones vizcaínas. Con motivo de este recurso, y considerando que por real orden de 5 de Enero del año próximo pasado no se estimó conveniente en el estado en que se halla el país la convocación de su Junta general, cuya celebración en San Nicolás de Bilbao se había propuesto como medida oportuna para la pacificación; se acordó que se esperase la resolución de la Reina, suspendiendo en el interin toda deliberación sobre la forma y tiempo de procederse á la renovación y reemplazo de los individuos del Gobierno universal de Vizcaya, elegibles bienalmente.

Se acordó el 8 elevar otra exposición á la Reina Gobernadora, diciendo que no le era posible á la Diputación sostener el batallón de cazadores, las trincadunas y las acémilas, y que desde el 15 de Agosto cesarían por lo tanto estos servicios. La Diputación se lamentaba de la prolongación indefinida de la guerra, de las consecuencias de los reveses de Guernica y Descarga, y de la pérdida de los pueblos fortificados; añadiendo, entre otras cosas, que se había abandonado la artillería en algunos de ellos, arrojándola en Bermeo al mar, aunque se pudo haberla embarcado, y que los carlistas la sacaron de él facilmente.

Deseosa de dar un testimonio de gratitud á la guarnición de Bilbao por su comportamiento durante el sitio, acordó

la Diputación el 21, que no obstante la escasez de sus recursos, se diese á la tropa una ración de carne y vino, y se regalase una faja al Comandante general.

Se dió cuenta el 21 de Octubre de una real orden comunicada por Don Miguel Araoz, encargado de la Comandancia general, previniendo que se procediese al nombramiento de un Procurador á Cortes para reemplazar á Romarate que había fallecido, y que bajo la presidencia del mismo Araoz se reuniese la Junta designadora de los mayores pudientes que debían intervenir en el nombramiento. El Corregidor expuso que reclamaba como tal la presidencia de dicha Junta, y que en este sentido se había consultado al Gobierno. Los Diputados por su parte, renovaron las protestas hechas anteriormente en caso análogo, cuando compelidos por la fuerza se atemperaron á ejecutar una orden parecida á la presente, á pesar de no haberse sujetado el Estatuto real á las formalidades forales para su aceptación en el Señorío; pero añadieron que reiterando sus protestas concurrirían á la elección del Procurador. Eran á la sazón Diputados generales en ejercicio Anitua y Murga.

El 4 de Noviembre se elevó una instancia á la Reina, pidiendo que se eximiese á la Diputación de suministrar carne y vino, como ya se dispuso en Mayo del año próximo pasado. Insistía la Diputación en la injusticia de que se hiciese sobrellevar tan pesada carga á los leales, cuyos sacrificios de todo género habían sido inmensos. Se acordó también el mismo día elevar otra exposición por conducto del Ministro de la Guerra, á fin de que se ocupara y fortificara á Bermeo, como puerto importante para facilitar la vigilancia de la costa por medio de las trincaduras, é impedir que recibiesen socorros los carlistas.

Se congregó el 9 el Regimiento general, con asistencia de los Padres de Provincia Retuerto, Aldecoa y Torre, con

motivo de un oficio del Comandante general, en el que dando cuenta del real decreto de 24 de Octubre, por el que se disponía el alistamiento de cien mil hombres para el ejército, se encargaba á la Diputación que prescindiendo de las exenciones de Vizcaya, en atención á la gravedad de las circunstancias, y para salvar á la Patria, propusiera, con arreglo al mismo decreto, los medios más acertados para cumplir sus disposiciones, dada la situación de la Provincia. Considerando que siempre había repugnado á los naturales de este país servir en tiempo de paz en los ejércitos; que en la actualidad los leales habían empuñado las armas en defensa de la Reina; que por no haberse tomado á tiempo las medidas oportunas había quedado entregada la juventud en gran parte á merced de los Jefes rebeldes, y que sería aventurado querer sacar de sus hogares á una parte de los que están defendiendo la causa de la Reina; se acordó hacerlo así presente á S. M. cuando se comunique directamente al Señorío el real decreto citado.

Trasladado el reglamento provisional para la administración de justicia, en lo respectivo á la real jurisdicción ordinaria, de 26 de Septiembre de 1835, á la Audiencia de Burgos, y habiendo mandado ésta que se guardase y cumplierse, circulándolo por medio de los Boletines oficiales de las Provincias de su territorio, lo comunicó el Regente interino en 10 de Noviembre al Corregidor de Vizcaya, diciéndole que sin embargo de que por real orden de 11 de Agosto último, se acordó que mientras Vizcaya, Alava y Guipúzcoa continuasen en estado de sitio, no se hiciese novedad por dicha Audiencia en las relaciones con ellas, le incluía un ejemplar certificado del reglamento provisional, á fin de lo que según en él se previene se atempere el Corregidor á la sustanciación de las causas y expedientes que penden en el Corregimiento del Señorío, acordando su cum-

plimiento en la forma que manifiesta en su oficio de 4 del corriente, bajo la aprobación de S. M., á cuya soberana consideración elevaba con la misma fecha el Regente la oportuna consulta.

Por auto del Corregidor, dado en Bilbao el 19 de Noviembre, se mandó pasar á informe del Síndico del Señorío dicho reglamento, con el oficio del Corregidor. El informe del Síndico Garaizabal, suscrito en Bilbao el 23 con acuerdo de Lozaga, que bien merece transcribirse porque presenta en resumen la organización de los tribunales peculiares de Vizcaya, poco antes de su desaparición completa, es como sigue:

«El Síndico ha visto el ejemplar certificado del real decreto y reglamento provisional para la administración de justicia, que ha sido comunicado por el señor Regente interino de la real Audiencia de Burgos, en los términos que contiene su oficio de 10 del corriente—y dice: que hallándose vigentes los Fueros de Vizcaya, deben continuar sin novedad los juzgados y tribunales forales, cuyas relaciones y procedimientos no se hallan en armonía con algunas de las reglas prescritas para la generalidad del Reino, ó inaplicables de consiguiente al país regido por una legislación especial. Mientras no sufran una alteración fundamental las antiquísimas y célebres instituciones vizcaínas, se halla el Síndico en el caso de reclamar su observancia, y con el objeto de hacer conocer las disposiciones opuestas á Fuero, y las que sin infringirlo pueden contraerse á este Señorío, expondrá las causales en que apoya su censura.

»La administración de justicia en primera instancia se desempeña por el Teniente general en las setenta y nueve Anteiglesias distribuidas en las Merindades de Uribe, Buzturiá, Arratia y Bedia, Marquina y Zornoza; y respecto de los negocios meramente civiles á prevención con los Alcal-

des llamados de Fuero en cada una de las cinco referidas Merindades.

»El Teniente de Astola entiende de todas las causas civiles y criminales en el territorio de la Merindad de Durango, que consta de once Anteiglesias.

»En la Ciudad, veinte Villas, cinco Valles y once Concejos conocen sus respectivos Alcaldes ordinarios.

»El señor Corregidor entiende en primera instancia preventivamente con todos los Jueces referidos de las setenta y nueve Anteiglesias, igualmente que con el Alcalde ordinario de la Villa en que reside.

»También el mismo señor Corregidor es Juez de alzadas de todos los juzgados de primera instancia, y á prevención con el Teniente general de las providencias civiles de los Alcaldes de Fuero.

»Existe además un tribunal superior de apelacion dentro de Vizcaya, compuesto de los señores Diputados generales presididos por el señor Corregidor, y para la decisión de las ulteriores instancias fuera de su territorio, se hallan establecidos el juzgado mayor y la sala especial de suplicación de este Señorío en la real Audiencia de Burgos.

»En cuanto se oponga, pues, el reglamento comunicado á la existencia y atribuciones de los expresados juzgados y tribunales forales, debe suspenderse su uso y cumplimiento, después de obedecerle con el más profundo acatamiento, según se ordena por la ley undécima, título primero de los Fueros.

»En cada una de las noventa Anteiglesias de Vizcaya hay un magistrado municipal denominado Fiel, que ha desempeñado funciones análogas á varias de las que se designan á los Alcaldes en el enunciado reglamento, pues que ha conocido de las demandas civiles hasta la cantidad de cien reales, y procedía á la formación de las primeras diligencias

del sumario y al arresto de los reos. Siendo cada Anteiglesia independiente de otro pueblo alguno, parece indispensable el aplicar á sus Fieles los artículos treinta y uno, treinta y dos y treinta y tres, igualmente que el conocimiento de los actos de conciliación, en concepto de Jueces de paz, del mismo modo que en las Villas, Ciudad, Valles y Concejos deben cumplir sus Alcaldes ordinarios lo prescrito en todo el capítulo segundo, por no ser opuestas al Fuero las disposiciones de sus artículos veinte y uno y siguientes hasta el treinta inclusive.

»Mas no sólo se halla en oposición con el régimen especial de Vizcaya el privar á los Alcaldes de su jurisdicción en primera instancia, sino que es impracticable el poner en ejecución actualmente el artículo treinta y seis y demás, que hacen exclusivo de los Jueces letrados el conocimiento de la primera instancia, mientras exista la demarcación judicial y política en que se halla dividido este Señorío.

»Los vizcaínos deben ser juzgados en primera instancia exclusivamente por los Jueces de su domicilio, con arreglo á las leyes primera y segunda, título séptimo de los Fueros, sin otra excepción que la de las causas de alevé, traición, reto, falsa moneda, y falsedad de carta ó sello real, á cuyos cinco delitos es de contraerse en este Señorío el artículo treinta y ocho del reglamento provisional.

»Se halla en oposición con la legislación vizcaína lo prescrito en los artículos cuarenta, cuarenta y uno y cuarenta y dos, acerca de las demandas que pasando de diez duros no exceden de veinte y cinco, y habiendo establecido las leyes cuarta, quinta, sexta y séptima del título vigésimo nono de los Fueros un método especial para la decisión de las demandas de quince mil maravedís abajo, pide el Síndico que continúen rigiendo las expresadas disposiciones forales.

»En cuanto á la remesa de autos originales ordenada por el artículo cincuenta, debe aplicarse á las apelaciones admitidas para ante los juzgados y tribunales de alzas residentes en el territorio de este Señorío y la sala de su señor Juez mayor en la real Audiencia, y á las causas que sean de las comprendidas en la ley tercera, título sexto de los Fueros.

»En el mismo sentido de contraerse al juzgado mayor de Vizcaya cuanto sea referente á la real Audiencia, pueden ponerse en ejecución el artículo cincuenta y tres y la parte final de la disposición cuarta del artículo cincuenta y uno, respecto de los delitos exceptuados en la citada ley segunda, título séptimo de los Fueros, y en las causas criminales ordinarias, mas no en las formadas sobre muertes en des poblado ó de noche, hurtos y robos, de que sin ulterior reclamación decide el tribunal criminal colegiado de este Señorío según su especial reglamento.

»En la sustanciación de los negocios civiles que excedan de quince mil maravedís, pueden observarse las seis reglas que contiene el artículo cuarenta y ocho, igualmente que lo prescrito acerca de los juicios sumarísimos de posesión en el siguiente artículo cuarenta y nueve, entendiéndose que la apelación deberá admitirse para el juzgado de alzas ó tribunal á quien competa con arreglo Fuero.

»Repugna á la naturaleza del gobierno peculiar de Vizcaya que los Regidores del pueblo concurren á la visita de cárceles en unión del señor Corregidor y sus Tenientes, y á la general que acostumbra hacer la Diputación como tribunal superior dentro del territorio de este Señorío los tres días señalados por las leyes. Igual obstáculo se presenta para que el Corregidor y Teniente general, únicos Jueces, letrados, sean sustituidos en caso de muerte, enfermedad ó ausencia, por el Alcalde del pueblo de su residencia, y para

evitar una innovación que desquiciaría la concentración del Gobierno universal de Vizcaya, se opone el Síndico á que se lloven á ejecución los artículos diez y siete y cincuenta y cuatro, y pide que se suspenda su uso y cumplimiento, igualmente que el de las demás disposiciones que puedan alterar las funciones que el señor Corregidor desempeña en concepto de Presidente nato de la Diputación, Regimiento y Junta general.

»Bajo de las precedentes restricciones, modificaciones y explicaciones, pueden usarse y cumplirse las demás disposiciones del reglamento provisional comunicado.»

El auto dado, en su consecuencia, por el Corregidor en Bilbao el 26 de Noviembre es como sigue:

«Se obedece, y por ahora guárdese y cúmplase el reglamento provisional para la administración de justicia en lo respectivo á la real jurisdicción ordinaria, con las restricciones, modificaciones y explicaciones que se refieren en la precedente censura; entendiéndose la suspensión del artículo diez y siete, sin perjuicio de que se verifique la visita general de cárceles en los días que demarca, según costumbre de este Señorío, y con la circunstancia de que conservándose, como se conserva, su jurisdicción á los Alcaldes ordinarios de los Concejos, Valles, Ciudad y de las Villas, y viniendo que las funciones de Jueces de paz se hallen separadas del conocimiento en primera instancia, se desempeñen las primeras por los Regidores decanos de los propios pueblos, según también se manda respecto á los juicios de avenencia en asuntos mercantiles y pueblos en que no hay tribunal de comercio por real orden de 15 de Enero de 1830.»

El Corregidor dispuso en 24 de Diciembre lo siguiente:

«En atención á que después de haberse dado el uso al reglamento provisional para la administración de justicia en

la jurisdicción ordinaria, en lo compatible con las instituciones y legislación especial de este Señorío, se ha mandado por real orden que no se haga novedad en los Ayuntamientos del mismo, suspendiéndose el real decreto de 23 de Julio último; y para evitar las dudas que en algunos pueblos, siguiendo la forma actual de aquéllos, podían ocurrir sobre el ejercicio de las funciones de Jueces de paz, según el auto de cumplimiento, se manda que con la misma calidad de por ahora que comprende, se desempeñen éstas por los respectivos Alcaldes ordinarios en la Ciudad, Villas, Valles y Concejos, y por los Fieles en las Anteiglesias, en los términos que expuso el Síndico del Señorío en el informe que precedió al mencionado auto de cumplimiento. Trasmítase esta resolución al Ilustrísimo señor Regente de la real Audiencia de Burgos, á quien se remitió de todo lo obrado á continuación del reglamento que se comunicó á S. S. »



CAPÍTULO XI

Se dió cuenta el 7 de Enero en Diputación de una 1836 real orden comunicada por el Ministerio de Hacienda, en la que se participa el arreglo ajustado con la Provincia de Alava, según el cual se hacía ésta cargo de las subsistencias del ejército, ahorrando al erario los dispendios que origina la intervención de los asentistas. Se proponía el ajustar igual convenio con Vizcaya.

Congregado con este motivo el Regimiento general, al que asistieron los Padres de Provincia Aldecoa y Torre, se resolvió el 8 aceptar el proyecto de arreglo, teniendo en cuenta, entre otras razones, que así se libraba al país del servicio de las raciones de carne y vino que se le exigían.

Para disponer el método que debería observarse en la ejecución de este proyecto, nombró la Diputación el 29 una comisión compuesta de los mencionados Padres de Provincia, y de Don Juan Bautista de Maguregui, Don Pablo de Epalza, hijo, y Don Pedro de Jane.

En sesión celebrada el 31 de Marzo, asistiendo Anitua y Egua como Diputados, se dió cuenta de una real orden del 12, por la que se relevaba á las Diputaciones de Navarra, Vizcaya, Alava y Guipúzcoa del pago de las raciones de

carne y vino, medio celemn de cebada por caballo, y medio real por plaza de prest, en equivalencia al suministro de zapatos, en atención á que se encargaban del servicio general de subsistencias; pero en la inteligencia de que no habría de abonárseles lo que hubiesen ya satisfecho en aquellos conceptos, y de que no sería tampoco de abono lo que tomasen las tropas en los pueblos que no estuviesen sometidos á la autoridad de la Reina.

La Diputación acordó elevar un recurso á la Reina, quejándose de esta resolución. Decía que cumplimentó la real orden de 9 de Enero de 1834, en la que se le impusieron dichos servicios, en concepto de que serían remunerados, pues de otra manera no hubiese podido prestar los servicios extraordinarios que tantas veces tenía recordados; que en virtud de sus reclamaciones se decidió en real orden de 20 de Mayo del mismo año que se le abonase el importe de aquéllos desde el primero de Julio siguiente, sin que por desgracia tuviese efecto esta resolución, y que desde el mes de Agosto cesó de suministrar los zapatos, que no volvieron á reclamársele por los Jefes militares. La Diputación se quejaba de que el contrato de suministros fuese obligatorio mientras durase la guerra; y después de exponer largamente los sufrimientos de los leales á la causa de la Reina, y de asegurar que fué preciso poner toda clase de trabas á la emigración de la mucha gente que trataba de huir de Bilbao, con gran perjuicio de la vida de esta Villa, solicitaba que se abonasen á los pueblos de Vizcaya todos los suministros que hubiesen prestado á las tropas desde que se celebró el contrato con la Provincia de Alava; que se declaren abonables después de la conclusión de la guerra los prestados hasta entonces; y que se paguen con puntualidad por la Hacienda militar todos los que en adelante se realicen, arreglándolos á precios equitativos, ora á la Diputación, si se

aprueba su propuesta, ora á los pueblos que los anticipen.

En sesión de 27 de Abril se aprobó la propuesta presentada por Don Pascual de Olábarri y Don Francisco Bergé para hacerse cargo del ramo de subsistencias, que había contratado la Diputación con el Gobierno por tres meses, y en 4 de Mayo se pasó una circular á los pueblos dando cuenta de las condiciones de este contrato.

El 24 de Mayo acordó la Diputación elevar á la Reina la exposición siguiente:

«SEÑORA.—Los Diputados generales de Vizcaya P. á L. R. P. de V. M., con la veneración más respetuosa exponen: que han visto con igual sorpresa que dolor el dictamen de la comisión especial del Estamento de Procuradores del Reino sobre el proyecto de ley electoral dado con fecha 3 del corriente, en la parte relativa á estas Provincias. La razón que se alega por ella para haber alterado las disposiciones del Gobierno es, que según la profunda convicción de los individuos que la componen, hay una necesidad urgente de uniformarlas con el resto de la Monarquía, en lo cual han acabado de confirmarlas, los Procuradores mismos de estas Provincias, cuyas luces y experiencia quisieron consultar.—Proyectos semejantes, aunque hijos de los deseos más puros y laudables, han producido las calamidades que todos deploramos; de ellos se han aprovechado hombres inquietos que en ninguna parte faltan, y que para desdicha nuestra y de la Patria nacieron en este país. Los Diputados no dejaron de preverlo, ni de poner en conocimiento de V. M. sus temores; y si se hubiesen meditado por los Consejeros de V. M. sus exposiciones de 23 de Diciembre de 1833, y de 4, 7, 10, 14 y 28 de Junio de 1834, y tomado en consideración, se habrían evitado males infinitos, y tal vez se hubiera ya extinguido el germen de la doméstica discordia. Pero se juzgaron interesadas por ventura las reclama-

ciones que el deber y el patriotismo inspiraron á los Diputados, y fueron desoídas.—La opinión de los habitantes de Vizcaya, y los efectos de las medidas que hayan de tener aplicación en su territorio, ninguno mejor que los Diputados generales puede conocer. Y por mucho que respeten las luces de los individuos de la comisión, y su amor á la prosperidad de la Monarquía española, séales permitido creer que su voto en cuanto concierne á este país merece alguna atención y aprecio, aunque sea diametralmente opuesto al voto de la comisión.—Tampoco dudan ni pueden dudar los Diputados del saber ni de las virtudes de los dignos Procuradores de Vizcaya; pero al uno de ellos no ha sido dable consultar, porque se halla ausente; el otro ha pertenecido al Gobierno de V. M., y como que suscribió el proyecto electoral presentado por éste á las Cortes, debe presumirse que sus ideas no son conformes á las de la comisión en la parte en que el proyecto ha sido modificado.¹ Además, ¿no podría equivocarse de muy buena fe, y con los talentos más privilegiados en una materia como ésta mejor quien ha estado ausente del país que le ha elegido para representar sus intereses, desde su primera juventud,

¹ Don Martín de los Heros, que era quien se encontraba en este caso, había pronunciado el 18 de Mayo en el Estamento de Procuradores un discurso, en el cual se vanagloriaba de ser vizcaíno, y de «haber venido al mundo en un país en que la libertad es inmemorial», pero advertía al propio tiempo que era «ante todo español», y que «cuantos vizcaínos, guipuzcoanos y alaveses siguen con rectitud y buen juicio la causa de Isabel segunda y la libertad, es decir, la parte más respetable de aquellas Provincias, todos piensan como yo, y desean que la unidad nacional ó gubernativa se verifique ampliando á los demás españoles la libertad de que hemos gozado, ó más bien dicho, aumentando la nuestra con esa unión.» Este modo de pensar fué el corriente entre los constitucionales vizcaínos durante algún tiempo, como queda ya expuesto en su lugar oportuno.

que una autoridad popular que reside en el punto mismo en que ha de plantearse la medida de que se trata, que se halla encargada especialmente de guardar sus leyes, y que está observando las inclinaciones, las ideas y hasta los extravíos y preocupaciones de sus administrados? Los actuales Diputados fueron elegidos por los apoderados de todos los pueblos de Vizcaya, congregados en las últimas Juntas generales, que reconocieron como legítima heredera del trono á Doña Isabel segunda, celebradas el año de 1833, con arreglo á sus leyes particulares, cuya observancia juraron al tomar posesión de sus destinos, y cuya guarda les está estrechamente encomendada. No pueden conformarse en admitir ninguna innovación que tienda á desquiciar sus instituciones mientras no se les descargue de la responsabilidad que sobre sus hombros pesa, convocando para dar cuenta de ella las Juntas generales. Así fué que en 26 de Junio de 1834 hicieron, de acuerdo con el Regimiento y Padres de Provincia, la solemne protesta que acompaña en copia, la cual se remitió al Comisario regio y Corregidor, y bajo de ella, y después de conminados con gruesas multas pecuniarias, han tomado parte en las elecciones para Procuradores á Cortes que desde entonces se han celebrado en este Señorío. Mas aunque Fueros respetabilísimos, sancionados por los siglos, jurados y observados inviolablemente por una serie no interrumpida de antecesores de Doña Isabel segunda, idolatrados siempre por sus naturales con fanatismo, no merecieron otra consideración que la que la comisión les ha dado, para ser arrancados de golpe, y sin buscar medios de conciliación y legalidad, la conveniencia pública, el estado de la guerra civil, las causas que la han encendido y siguen fomentándola, la justicia que un Gobierno paternal debe tener por norte, aconsejarían que no se pensase por ahora en proceder á la nivelación de estas Provincias con las demás del

Reino, tantas veces premeditada, y alguna llevada momentáneamente á efecto, pero con resultados poco lisonjeros. Indicaránlos ligeramente los Diputados, y aun procurarán probar el influjo que han tenido los temores, con larga mano difundidos entre estos naturales, y hábilmente aprovechados por genios turbulentos que han querido medrar á la sombra del desorden, y que justificarán sus vaticinios pérfidos si el dictamen de la Comisión de Procuradores sirviese de norma á las disposiciones ulteriores del Gobierno. Pero protestan antes que no es su ánimo disculpar ni remotamente la sublevación de este país, que tan amargamente lloran, sino exponer con lealtad y franqueza á V. M., que todo Gobierno benéfico que se quiere granjear y perpetuar el amor y obediencia de sus súbditos, procura mejorar, no empeorar la condición de los pueblos.—El germen de la libertad defendida por la República francesa en toda la superficie europea puso en grave cuidado á los Monarcas absolutos, y el Ministerio español se propuso evitar que el ejemplo doméstico del espíritu democrático, que predomina en las instituciones vascongadas, inspirase en los demás españoles el deseo de renovar los mal comprimidos acentos de las comunidades de Castilla. No sólo había obrado en este sentido el Gobierno absoluto, sino que por el órgano de una comisión central increpaba á los vascongados que mostrasen en defensa de sus Fueros los principios de una verdadera democracia ó de un Gobierno puramente popular.—No contemplando, sin embargo, oportuno el destruir por la fuerza material unos Fueros tan arraigados en la opinión pública, concibió el proyecto de extraviarla excitando la rivalidad de los demás españoles, y trastornando con argumentos sofisticos puntos nunca controvertidos en la historia. Semejante conducta había producido la exasperación, no sólo en la masa del pueblo vascongado, sino aun en todos

los que un espíritu de partido, ó una inmediata dependencia del Gobierno no les impelia á separarse del concepto general de sus compatriotas. Ni debía esperarse que se mantuviesen indiferentes al tono despreciador con que los más altos funcionarios atacaban las instituciones, y se movaban de los datos históricos y más respetables tradiciones de un pueblo reflexivo y pandonoso, al mismo tiempo que la censura prohibía la impresión de sus defensas. Tanto á la publicación, como al restablecimiento de la Constitución formada por las Cortes de Cádiz, manifestaron las Juntas generales de Vizcaya los más ardientes votos por la conservación de sus instituciones. Resonaban todavía en sus montañas los ecos de tan solemne declaración, cuando se vieron sorprendidos sus habitantes con la aparición de funcionarios nombrados por el Gobierno, que desconcertaron toda la administración vascongada. Nunca los ha arredrado el ejemplo de los pueblos, que connaturalizados con la servidumbre protestan una sumisa obediencia, al tiempo que su conciencia la condena y su corazón la detesta. El pueblo vascongado no admitió jamás este proceder hipócrita; siempre juzgó más digno de sí el reclamar con energía la conservación de su preciosa libertad. ¹—El célebre árbol de Guernica, á cuya sombra se congregaba su asamblea, recuerda la primera edad de las sociedades, y el imperio que la naturaleza tuvo en la formación de la vizcaína. Todo pensador se complace en la simplicidad de esta idea, y mira

¹ Algo queda expuesto en el curso de esta obra, al tratar de los sucesos ocurridos en 1813 y 1820, que no se halla enteramente de acuerdo con lo que aquí se afirma. Hay, pues, que referir al lector á lo que entonces se expuso, para que queden las cosas en el lugar que pide la estricta verdad histórica, que es el primer deber á que tiene que someterse el que pretende reseñar lo pasado.

respetuosamente la majestad de su primitivo pacto; la libertad le formó; la voluntad general le dió su sanción; mil juramentos le han santificado y las virtudes más heroicas le han sostenido. Su conveniencia ha sido proclamada por la felicidad misma del pueblo; su fuerza se ha aumentado en la serie de edades que ha corrido, y su estabilidad ha debido quedar asegurada en las mismas grandes dificultades que ha sobrepujado. ¿Y será justo que un Gobierno liberal, contra el sentimiento y voluntad expresa de este pueblo, le arrebatase su sagrado código? La pasión de los vascongados por sus Fueros se halla tan demostrada, que en el espacio de largos siglos no presenta la historia un sólo instante en que se haya debilitado su afección, y es forzoso que el arrancarles esta prenda les sea el más doloroso de todos los sacrificios.—Las legislaturas de los años catorce, veinte y veinte y dos, ligadas por una Constitución cuya observancia habían jurado, no se hallaron en situación de poder entrar en discusión sobre la justicia y conveniencia política de respetar las instituciones de los Estados del Norte. La sencilla administración vascongada, quizá la más libre y barata del mundo civilizado, fué trasformada durante el régimen constitucional en complicadas é inútiles oficinas. Al arrebatarse su favorita libertad de comercio, se conmovieron notablemente los ánimos, presentando síntomas de una crisis peligrosa, que finalmente estalló al someterlos al reemplazo del ejército permanente, y á las contribuciones generales del Reino. Disuelto el régimen constitucional por los acontecimientos del año de 1823, recobraron los vascongados su primitivo estado, pero fueron muy á luego renovados los ataques ministeriales, en los que se calificaban de absurdos sus Fueros, y se decía que económicamente no son otra cosa que una infracción de principios, y una burla de la razón. En un informe presentado al Gobierno poco antes de la muerte de

Fernando séptimo, se reputaba por una verdadera fábula la irritación y disgusto de los ánimos que con prudente previsión se anunciaba por una de las Diputaciones vascongadas. Se preconizaba que el clamor repetido y nauseabundo de Fueros venerandos, la idolatría con que se suponía los mira el pueblo, la desesperación que produce todo cuanto tiene apariencia de vulnerarlos, y la predisposición de matar y dejarse matar por sostenerlos, eran frases huecas sin sentido ni verdad, que no debía escuchar el Gobierno con indulgencia cuando tenía tantos medios de hacerse obedecer.— En el mismo informe se consideraban como sediciosas y subversivas del orden social las advertencias de que la restricción del libre cambio produciría unos resultados tan funestos, que tal vez no podría reprimir toda la fuerza y autoridad de las Diputaciones. Proponía entre otras cosas la traslación de las aduanas á la costa y frontera vascongada; y tratando de los medios de ejecución, aseguraba que la nube descargaría sin hacer ningún destrozo, fundándose en que sólo puede pensar en su sosiego y descanso una población dispersada en caserías y ocupada en las faenas del campo. ¡Funesta imprevisión que tanto ha influido á precipitar en la criminal carrera de las sediciones á unos habitantes sencillos pero entusiastas de sus Fueros!—La sabia y libre Inglaterra ha sabido interesar á todos sus administrados con la conservación de los diversos Estados que tienen una tendencia excéntrica, porque su nacionalidad los llamaba á otra parte, conservando tenazmente el espíritu de independencia. Las sucesiones, los matrimonios y las guerras forman los Estados que se llaman de un orden compuesto, y á cuya clase pertenecen Navarra y las Provincias vascongadas respecto de Castilla, de la misma manera que Escocia, Irlanda y el Hanover respecto de Inglaterra. Arraigados los principios de libertad en el imperio británico, no ha usado jamás

de la superioridad adquirida por las armas inglesas en las guerras civiles y de sucesión ocurridas en diversas épocas en Irlanda y Escocia para privar á sus esforzados naturales de la nacionalidad y peculiar legislación, procurando tan sólo atraerlos á la unión por medio de reformas legales y el expreso consentimiento de sus respectivos parlamentos. —No hay quien pueda desatender á la necesidad de ceder á las exigencias de un pueblo ilustrado sobre la importancia y extensión de sus derechos, y todos sus proyectos para restringirlos tropezarían en escollos que una prudente política aconseja evitar. Por más que encubra sus tentativas con el velo del beneficio general, nadie se vería engañado con tan envejecido sofisma; el espíritu público descubriría en breve el lazo, y opondría desgraciadamente una enérgica resistencia siempre que se intentase privar arbitrariamente de sus Fueros á un país, donde á la firmeza moral de los habitantes se reuna el conocimiento de la excelencia y utilidad de sus instituciones. —Los agentes realistas se aprovecharon con fatal destreza de la oportunidad que se les presentaba de inspirar en los vascongados la creencia vulgar de que se hallaban en la alternativa de someterse bajamente á una degradación social, ó de cubrir á todo trance sus instituciones con la bandera del pretendiente, que representa á sus ojos el sistema de conservación. —Vizcaya ha prestado inmensos servicios á la Monarquía española, tanto en dinero como en hombres, cuando le han sido pedidos con arreglo á sus leyes particulares. Buena prueba de esta verdad dió en la guerra con la República francesa; ninguna otra Provincia de las llamadas contribuyentes la igualó ni con mucho en sacrificios. Pero la sencillez económica y admirable de su administración hace que los gravámenes sean mucho más llevaderos, á lo que se agrega el estar libres sus habitantes del reemplazo para el ejército, y desembarazados de adua-

nas, estancos y guardas. Fácil es, pues, convencerse de que mirarán con recelo y disgusto todo lo que tienda á destruir estas ventajas, no ofreciéndosles en compensación derechos políticos superiores á los que constantemente han gozado. A desvanecer ó neutralizar los efectos de tan profunda y peligrosa sensación debían dirigirse todos los conatos, y dejar al tiempo que proporcione la oportunidad de hacer adoptar, bajo las formas parlamentarias de cada Estado, la uniformidad de un sistema general para toda la Monarquía.—La política es una ciencia conjetural; los axiomas que en ella parecen mejor demostrados, presentan graves dificultades en su aplicación. Instituciones que serían excelentes para un Estado nuevo, dejan de serlo para conservar el que se halla ya constituido, pues que la antipatía recíproca de los pueblos, el amor á su nacionalidad y libertades y mil otros principios de desunión conmueven los Estados.—La Constitución formada en Cádiz restituía y ampliaba los antiguos y olvidados Fueros á las Coronas de Castilla y Aragón, al mismo tiempo que despojaba á los vascongados de su nacionalidad y leyes fundamentales y disminuía sus goces sociales. Se presentó muy en breve la ocasión de reconocer que no es menos peligroso quitar de un golpe las instituciones que se conservan en todo su vigor, que el arrancar sin precaución las piedras angulares de un edificio.—Los absolutistas pretendían abolir los Fueros para hacer desaparecer el único Gobierno representativo que había quedado en la Península, y los liberales despedazaban tan venerables restos, por querer plantear bruscamente la teoría del sistema de nivelación de Provincias. Tan violenta variación contrariaba la marcha de la naturaleza, que no repara, cambia, ni aun destruye sino con el tiempo, y con una elaboración insensible conducida con tanto esmero, que todo se halla propenso á la variación antes que ésta se per-

ciba.—Hubiera sido impotente en las Provincias del Norte la influencia carlista por sí sola, á no hallarse apoyada con la observancia de sus Fueros, que presentaba como base de su sistema de conservación. Si bajo este pendón se conducen los vascongados en las filas del pretendiente con la bravura y tenacidad cantábrica, otros más ilustrados y no poco numerosos compatriotas suyos despliegan en grado heróico toda clase de virtudes militares, sosteniendo el trono de nuestra inocente Reina Isabel.—Útil y provechoso será, sin duda, que se tengan presentes estas consideraciones importantes cuando se trate de adoptar cualquier nuevo proyecto de inmediata aplicación á Vizcaya. Los Diputados se persuaden á que lo más conveniente y acertado, lo más legal y justo, antes de pensar en ninguna alteración radical, sería aguardar á que restituida la paz pudiesen reunirse las Juntas generales para tratar de poner en armonía el bien del Estado con el particular de este Señorío; porque de otro modo, sin beneficio del primero se aumentarían los desastres del segundo, y los Diputados se encontrarían en el conflicto más amargo, teniendo que luchar entre los deberes que sus conciencias y sus juramentos les obligan á cumplir, y el respeto y sumisión que su amor á la paz, al orden y á Doña Isabel segunda les inspiran hacia el Gobierno que en su augusto nombre ha dado V. M. á la Nación española para su ventura, la cual podrá labrarse seguramente sin consumir las ruinas de una parte no despreciable de ella.—Suplican, pues, á V. M. los Diputados generales de Vizcaya que se digne tomar aquellas disposiciones que le dicte su alta sabiduría para suspender las medidas que pueden tener roce directo con los Fueros, franquezas, buenos usos y costumbres de este Señorío, hasta que se consiga su completa purificación, y puedan ser libres y legalmente admitidas.»

Se dió cuenta el 9 de Junio de un oficio del Comandante

general Don Santos San Miguel, en el que pide que se le diga el número de individuos que componen la Diputación, para que en unión de un número igual de individuos del Ayuntamiento de Bilbao se proceda á cumplir el real decreto de 24 de Mayo y el de su aclaración del 30 sobre la elección de Procuradores á Cortes, de cuyo cumplimiento estaba encargado el Comandante general.

Contestóle la Diputación «que para que dichas reales órdenes tengan validez y fuerza en Vizcaya, es necesario que se llenen con ellas las formalidades que sus leyes peculiares prescriben, y como encargada de su conservación y guarda, mientras no obtengan el pase foral no podrá reconocerlas como obligatorias para ella.» Dice en seguida la Diputación que opuso la misma resistencia á la publicación del Estatuto real, y á la ejecución del real decreto sobre elecciones de 20 de Mayo de 1834; y que sin embargo de que en 26 de Junio del mismo año hizo la enérgica y solemne protesta de que acompaña copia, reiterándola en las elecciones posteriores de 29 de Octubre de 1835 y 26 de Febrero del presente año, y ratificándola ahora, el señor Becerra en la sesión celebrada el 18 del próximo pasado, en la sesión celebrada en el Estamento de Procuradores «ha querido deducir que el Señorío de Vizcaya había renunciado sus derechos y leyes particulares en el hecho de haber enviado sus representantes», suponiendo equivocadamente «que se allanó sin ninguna reserva á nombrarlos.» La Diputación no puede prescindir, por lo tanto, «si ha de cumplir las obligaciones delicadas fiadas á su vigilancia, y quedar exenta de toda responsabilidad legal, de manifestar que debe abstenerse de tomar parte en la elección.» Satisface por lo demás á la pregunta que hace el Comandante general sobre el número de vocales que componen la Diputación, con decir que son los dos Diputados y el Síndico.

El Comandante general en oficio dirigido el 10 á la Diputación le previno, que sin embargo de todas sus protestas deberían hallarse sus individuos el día siguiente á la una en el salón de sus sesiones para instalar la Junta que debe intervenir en las elecciones, conminando con la multa de mil duros á cada uno de los que no acudiesen.—La Diputación contestó que para evitar el castigo con que se la amenazaba asistiría á la instalación de la Junta electoral, renovando en nombre del país sus protestas anteriores.

Las relaciones de la Diputación con el Comandante general eran sin embargo amistosas, como lo prueba la circunstancia de haber acordado aquélla el 25 del mismo mes regalarle un caballo y una silla húngara, por haber apoyado la resolución favorable que alcanzaron varias reclamaciones.

El 6 de Agosto hizo la Diputación un contrato con Don Pascual de Olabarri y Don Francisco de Bergé, con arreglo al cual se les permitía introducir cierta cantidad de tabaco, libre de derechos, á cuenta de lo que se les debía, sin que se pudiese satisfacerles por la penuria de las arcas del Señorío.

Se aprobó el 10 el reglamento para la escuela gratuita de náutica, establecida á expensas del Señorío, el Ayuntamiento de Bilbao y la Junta de comercio.

A un oficio del Comandante general, que recibió la Diputación el 19, encargándole que aquel mismo día á las once asistiese á una junta de autoridades en el salón de sesiones del Ayuntamiento, se contestó del modo siguiente: «Teniendo entendido los Diputados generales que el objeto de la reunión á que V. S. se sirve convocarlos por su oficio de hoy en la sala de sesiones del Ayuntamiento de esta Villa, es para poner en su conocimiento una real orden de que se proceda á la jura y proclamación de la Constitución del año

1812, hacen á V. S. presente que las obligaciones que les ligan á las leyes particulares de este país, cuya guarda les está especialmente encomendada, les impiden tomar parte en semejantes actos, y por lo mismo que se abstendrán de concurrir á ellos, como se ha hecho en iguales ocasiones.» Se acordó también con este motivo elevar á la Reina una exposición, que es como sigue:

«SEÑORA. Los Diputados generales de este Señorío de Vizcaya á V.M. con la veneración más profunda exponen: que el Comandante general del mismo Señorío les pasó con fecha 19 del mes que rige el oficio que en copia acompaña, y que sabiendo de pública voz que había recibido el real decreto dado por V. M. en San Ildefonso, con fecha 13 del propio mes, mandando que se publique interinamente la Constitución de 1812, la cual tal vez se trataría de jurar en la reunión á que están convocados, se creyeron en la obligación de abstenerse de concurrir á ella, contestando lo que V. M. observará por el papel señalado con el número dos. Los motivos que los Diputados tuvieron para adoptar esta conducta, los sabe seguramente V. M.; pero habrán de recordarlos brevemente, á fin de que no se dude ni de su alto respeto á las órdenes que emanan de V. M., ni de su adhesión sin límites al trono de la tierna Isabel y á las libertades nacionales. En varias de las exposiciones que desde la muerte del señor Don Fernando séptimo tienen elevadas á V. M., y especialmente en la que hicieron en 24 de Mayo último, se hallan largamente explicados los deseos de los Diputados, y las consideraciones de política, de equidad y de conveniencia en que se apoyaban para pedir que no se alterasen las instituciones particulares de Vizcaya, hasta que terminada la guerra civil pudiesen ser admitidas las innovaciones que hubieron de introducirse en ellas por su Junta general. Además manifestaron patéticamente, que

hallándose por ésta encargados de la vigilancia y guarda de sus Fueros, faltarían á su principal deber, é incurrirían en una gravísima responsabilidad, si conviniesen en prestar su consentimiento á medidas que pudiesen alterar los fundamentos en que estriban, sin la concurrencia del país legítimamente congregado. En los años de 1812 y 1820 fué idéntica la marcha seguida por los que entonces ejercían la primera magistratura popular del Señorío, cuando se trató de poner en práctica el mismo código de 1812. También el año de 1834 se vieron los Diputados en la necesidad de separarse de tomar parte en la promulgación del Estatuto real, que V. M. mandó que rigiera en todos los dominios de su excelsa hija, y expusieron de una manera respetuosa los obstáculos que se oponían á que se llevase á cumplido efecto; y no por eso se ha desmentido la lealtad de que blasonan, ni han escaseado ningún linaje de sacrificios por contribuir al triunfo de la causa de la Patria. Penetrada la sabiduría de V. M. de las razones poderosas que asistían á los Diputados, ha conservado hasta ahora las leyes de este Señorío; y puesto que ni las circunstancias de él han variado por desgracia, ni la Constitución del año doce se ha mandado observar sino provisionalmente, y por acceder á los votos de varias Provincias de la Península, cortando así la excisión deplorable que había comenzado á dividir las; se atreven los Diputados generales á—Suplicar rendidamente á V. M. que se digne suspender, como lo tienen solicitado, todas las disposiciones que pueden tener roce directo con los Fueros, franquezas, buenos usos y costumbres de este Señorío, hasta que se consiga su completa pacificación, y puedan ser libre y legalmente admitidas».

El 2 de Septiembre recibió la Diputación un oficio del Comandante general, en el que participaba que había dispuesto que el 4 del corriente se jurase la Constitución de

1812, con arreglo á la orden que tenía recibida, por las corporaciones y autoridades, tanto civiles como militares. «Esa ilustre Diputación debe verificarlo á las once en punto, á cuya hora espero que V. S. S. se hallen en dicho sitio con el objeto indicado, siendo indispensable dar parte á S. M. por el Ministerio competente de haberse realizado.»

La Diputación le contestó el mismo día en los términos siguientes:

«En las mismas, y aun en más fuertes razones, se fundan los Diputados generales para no prestar el juramento á la Constitución de la Monarquía española, de que habla V. S. en su oficio de ayer, que para no haber asistido á la publicación. Y es V. S. demasiado ilustrado y pundonoroso para no convenverse de que su delicadeza les priva del placer de acceder á los deseos de V. S., y para no hacer justicia á la honrada pureza de sus sentimientos.—El deber principal, el más sagrado que su destino impone á los Diputados generales, es conservar ilesa la Constitución vizcaína por todos los medios que las leyes permiten. Al encargarse de este deber juraron solemnemente cumplirlo. Mientras existan como tales Diputados generales, sería una inconsecuencia de que no hallarían disculpa que se conformasen en jurar de nuevo otra Constitución, con arreglo á la cual no podrían ser considerados como funcionarios públicos, y que deroga la primera, fiada por Vizcaya á su vigilancia, como un depósito precioso é inviolable. Además tienen elevada á S. M. la Reina Gobernadora por el correo que el 23 del corriente salió de esta Villa una exposición. En ella decían francamente y con el más profundo decoro, que no habían concurrido el día 19 del propio mes, en virtud de la convocación de V. S., á la sala consistorial de la misma Villa, por suponer que se iba en la reunión á que V. S. los convocó á tratar de la publicación y jura del célebre código de 1812; y pedían á S. M.,

que hasta que pudiese congregarse la Junta general del Señorío, se dignase suspender cuantas gestiones tengan inmediato contacto con este punto interesantísimo. En las dos anteriores épocas constitucionales, los Diputados generales ni asistieron á la publicación de la Constitución, ni la juraron, hasta que fueron reemplazados por los Diputados provinciales. Tampoco asistieron á la promulgación del Estatuto real ni se sometieron á él, y no por eso merecieron los actuales Diputados, ni merecieron sus antecesores la menor increpación.—Añádese por otra parte, que ni el Gobierno ni las Cortes que se han reunido después de la muerte del señor Don Fernando séptimo, han tratado de suprimir los Fueros de estas Provincias, convencidos de la justicia en que se apoyaban sus Diputaciones en las varias exposiciones que han elevado á la superioridad para pedir que fuesen respetados, desde que se encendió y propagó la doméstica discordia. Tan lejos de eso, S. M. la Reina Gobernadora, en una proclama que dirigió á los rebeldes alucinados de estos países, la cual remitió el Gobierno al General en jefe, y éste por el conducto del antecesor de V. S. á la Diputación en Enero del presente año, encargándole que procurase su circulación en los pueblos de Vizcaya y en las filas enemigas, decía estas memorables palabras: *que nunca trató de abolir las antiguas y venerandas instituciones vascongadas*. Porque ansiando como ansía su corazón maternal la conclusión de la guerra atroz que nos devora, estaba seguramente persuadido á que sería aumentar obstáculos para lograrlo, y hacerla tal vez interminable, el destruir las leyes especiales á que tienen invencible apogo estos naturales, actualmente harto dignos de lástima por las calamidades que sobre todos ellos ha atraído la obcecación de muchos de sus hermanos extraviados.—Ninguna incompatibilidad hay en que se observe como hasta aquí en este Señorío su régimen foral,

y se gobierne el resto de la Monarquía por la Constitución del año doce, como no la ha habido mientras ha prevalecido el Estatuto real que regía en las demás Provincias, y no en las Vascongadas, mayormente cuando la Constitución se ha restablecido con el objeto de conciliar á algunas Provincias disidentes, como símbolo de concordia, que sólo subsistirá momentáneamente, y hasta que sea reformada ó sustituida por otra más análoga á las necesidades de la Nación. —Bastará para demostrar que el Gobierno entiende esta cuestión del modo que los Diputados la convocatoria para las Cortes revisoras del 21 del corriente. ¿Se igualan en ella acaso las Provincias Vascongadas y Navarra con las restantes del Reino? ¿No sigue considerándolas en una situación excepcional? En la circular del Ministerio de la Gobernación del Reino de 19 del corriente, inserta en la Gaceta de Madrid, se ordena que los Jefes superiores de las Provincias manifiesten los medios de suprimir cuanto no esté en armonía con la Constitución, y lo que deberá subrogarse á lo que sea preciso omitir para que el servicio público no padezca detrimento; lo que patentemente prueba que no entra en la mente de la augusta Reina Gobernadora introducir reformas y novedades que puedan causar confusión, trastornos y embarazos en la administración, sin pensar con el detenimiento y madurez que conducen al acierto. Si jurasen los Diputados generales la Constitución, deberían cesar en el instante de existir en su magistratura popular de hecho y derecho, porque rasgarían ellos propios los títulos en que se funda, se desquiciaría el sistema económico y administrativo de este Señorío, y perderían su acción las leyes especiales que le han regido tantos siglos con no pequeña gloria y prosperidad suya. Ni quedarían sus conciencias entoramente tranquilas si así procediesen, ni reconocerían su autoridad los pueblos y particulares que actualmente

la acatan y obedecen, sabiendo que se habían roto los vínculos que con ella los unían. La voluntad de la Reina Gobernadora ha sido y será acatada por los Diputados generales con la veneración debida. Pero en Vizcaya, ni la voluntad de los Monarcas ni las leyes generales del Reino se han puesto en ejecución sino en cuanto han estado en armonía con las leyes particulares, y una de ellas dice: *que los vizcatnos habían por Fuero y franquexa y libertad que qualquiera carta ó provisión real que el Señor de Vizcaya diese ó mandase dar ó proveer, que sea ó ser pueda contra las leyes y Fueros de Vizcaya, directe ó indirecte, que sea obedecida y no cumplida*. Tal ha sido la práctica observada desde que el Señorío se incorporó á la Corona de Castilla hasta nuestros días; y si los Reyes absolutos han respetado y confirmado esta disposición, base de nuestras instituciones, de esperar es que la liberal Cristina quiera afianzarla en vez de arrancarla con violencia. V. S. que conoce á los Diputados les hará la justicia de creer que no aspiran á perpetuarse en unos destinos que les han producido grandes sinsabores y grandes quebrantos en su salud y fortuna, y que sólo les anima el deseo de conservar su honor sin mancha, dejando cumplidas sus difíciles obligaciones. Dichoso será para ellos el día que cuanto antes los reduzca á la vida privada. Más dichoso aquel, en que pacificado el país puedan volver al cuidado de sus haciendas, largo tiempo abandonadas á la rapacidad de sus enemigos, y sobre las cuales acababan de poner un riguroso embargo. También puede estar V. S. penetrado de que no los mueve la menor idea de repugnancia á un código digno de veneración y gratitud para todos los españoles. Como funcionarios públicos y como particulares le han jurado y defendido en otra ocasión, y le jurarían y defenderían con igual decisión y nobleza que defienden sus respetables Fueros, si relevados de sus jura-

mentos á éstos volviesen á confundirse en la clase de simples ciudadanos, ú ocuparan algunos de los destinos que la misma Constitución establece. Los corazones de los Diputados que suscriben abrigan sentimientos altamente liberales, porque han nacido y se han educado en un suelo en que se refugiaron y han florecido la libertad práctica y las luces, cuando la desgraciada España yacía sepultada en el despotismo y la ignorancia. Ni les asustan, pues, ni miran con recelo los principios benéficos que la Constitución consagra; pero en la posición espinosa en que se hallan, faltarían á lo que se deben á sí mismos, y á lo que deben al país en que vieron la primera luz y los honró con su confianza, prestando el juramento que V. S. les exige.»

Es de lamentar el que algunas veces los Diputados generales, ó por precaución oratoria al dirigirse á las autoridades del Gobierno, ó cediendo al influjo de sus compromisos de partido, hagan ciertas concesiones como las que se apuntan en el oficio precedente sobre sus deberes de vizcaínos y de ciudadanos españoles y sobre la posibilidad de reformas ó modificaciones formales, para adaptarlas á la Constitución unitaria de la Monarquía; pero de todos modos, en la crítica situación en que se hallaban, procuraron con entereza salvar el decoro de sus personas, dejando inólume el depósito de los derechos del Señorío que habían recibido de las Juntas generales.

Reunida la Diputación el 3, con asistencia del Corregidor y del Consultor, se dió cuenta del siguiente oficio del Comandante general, fechado el mismo día:

«Por el escrito de V. S. S. de ayer veo las razones en que apoyan su oposición á prestar el juramento á la Constitución, según se ha dignado S. M. mandar por reales órdenes de 15 y 23 del mes anterior.—Lejos de mí la idea de suponer en V. S. S. siniestros intentos con esta negativa. Conoz-

co sus honrados y patrióticos sentimientos, y conozco por lo mismo que su delicadeza va hasta el punto de no prestar su asentimiento como Diputados á una cosa que destruye el juramento que anteriormente tienen hecho, ínterin destituidos de este encargo, y vueltos á la clase de simples ciudadanos puedan entrar en funciones análogas á los principios que en la actualidad rigen. Quisiera poder suspender el acto del juramento que debe celebrarse mañana; pero tomadas todas las disposiciones, y avisadas las corporaciones y autoridades que lo han de prestar, no es posible en manera alguna dilatarlo. Verificado óste por las personas mencionadas, tampoco lo es permitir ni consentir que autoridad ni corporación alguna continúe ejerciendo sus funciones sin haber prestado el juramento á la Constitución, por hallarse en oposición directa con lo que previene el artículo trescientos setenta y cuatro de la misma, no creyendo suficientes los antecedentes que V. S. S. me manifiestan en su precitado escrito, de no haber jurado la Constitución en las dos épocas anteriores ni el Estatuto real. En estas circunstancias, y siendo forzoso tomar un partido, que á la par que no fuerce á V. S. S. á obrar contra sus conciencias, no deje á la Provincia en orfandad con respecto á la administración, he tenido por conveniente disponer que desde hoy quede disuelta esa ilustre Diputación, y cese en sus funciones, nombrando en su lugar, y hasta que S. M. resuelva, una Diputación provincial provisional, análoga al código constitucional que rige, y á la que pasará la secretaría de esa Diputación con todos sus antecedentes, para que la nueva formada pueda con utilidad pública y del país desempeñar sus funciones.—Si bien el deber de mi destino me pone en el conflicto de tomar esta medida decisiva, que esquivé cuanto me ha sido posible, deseando conciliar si era dable ambos intereses, no puedo menos de manifestar á V. S. S.

mi sentimiento en que no haya podido realizarse, privándome de este modo de los auxilios que sus luces, conocimiento y patriotismo me proporcionaban. En V. S. S. encontré, interin permanecieron en el ejercicio de sus funciones, el mejor deseo y voluntad de servir á la causa pública y los intereses de S. M., que con tanto orgullo defendemos. Faltaría á la justicia, si disolviéndose esa corporación no hiciese esta manifestación explícita, así como lo haré presente á S. M. al tiempo de darle parte de esta ocurrencia».

«En su virtud, el señor Presidente declaró disuelta la Diputación general de Vizcaya, y se retiraron los individuos de ella de su salón de sesiones». Firman Bárcena, Eguía, Anitua, Garaizábal y Hormaeche.

Justo es que se haga constar que la conducta del Comandante general Don Santos San Miguel fué en este caso, sobre toda ponderación, cortés y discreta, y que contrasta con la conducta muy distinta, seguida en otros tiempos por algunos representantes civiles del Gobierno de la Nación española.

El día siguiente 4, San Miguel, que era á la vez Comandante general y Jefe superior político de Vizcaya, reunió á Don Domingo Eulogio de la Torre, Don José María de Norzagaray, Don Manuel María de Murga, Don Juan José de Lama y Don Manuel de Jane, nombrados Diputados provinciales, no habiendo asistido Don Juan José de Mugartegui y Don Federico Victoria de Lecea, por hallarse indispuesto el primero y ausente el segundo. Hizo de Secretario Don Francisco de Hormaeche, que lo había sido de la Diputación general.

Expuso San Miguel los motivos que tuvo para «crear una Diputación provincial interina, que puesta al frente de Vizcaya, pueda correr con todos los ramos económicos y administrativos que estaban cometidos á la Diputación general,

y con los demás que según el sistema que actualmente nos rige deben desempeñar las Diputaciones provinciales, en tanto que el Gobierno de Doña Isabel segunda resuelva lo que juzgue conveniente y útil», y «que para formar esta corporación de la manera más legal y análoga á lo dispuesto por las Cortes y el Gobierno constitucional, se había valido de Don Domingo Eulogio de la Torre y Don José María de Norzagaray, que habían sido Diputados provinciales en la época en que estuvo en práctica la Constitución» que se había restablecido, únicos que se hallaban en Bilbao en semejante caso, en aptitud de volver á desempeñar las obligaciones de sus nuevos cargos; y que para completar la Diputación con la indispensable premura había nombrado además á los sujetos que se hallaban presentes y á Don José de Mugartegui y Don Federico Victoria de Lecea, después de haberse informado de las cualidades recomendables que á todos adornaban, y de su adhesión á la Reina y á la libertad; por lo que el Comandante general esperaba que le ayudasen eficazmente en las complicadas y difíciles tareas que le estaban encomendadas.

Don Domingo Eulogio de la Torre dió varias razones en las que se fundaba para suplicar al General que le exonerase del cargo con que había tenido á bien honrarle; los demás señores presentes las repitieron con igual sinceridad y nobleza, según su posición respectiva; mas el General les contestó que no le era dable acceder á tales deseos, en el conflicto en que personalmente se veía y veía á la Provincia. Convinieron, pues, todos «á su pesar, en aceptar los destinos que les había conferido, sometiéndose á la voluntad decidida é inmutable del señor Comandante general y Jefe político, por haberse suprimido, no sólo la Diputación general sino el Regimiento general y Consejo de Padres de Provincia», pero á calidad, según indicó la Torre, «apoyándolo

todos sus compañeros, de que se hiciese constar en esta acta, que su inevitable allanamiento no perjudicaba á los derechos del país en que habían nacido, á las reclamaciones pendientes de la extinguida Diputación general, y á las que hiciere ó pudiere hacer la que iba á sucederle como Diputación provincial, á S. M. y á las Córtes, pidiendo la conservación de los Fueros y franquenzas, que consideraba como necesarios elementos, no sólo para la pacificación y ventura de este suelo fragoso y estéril, sino para su existencia material.» No teniendo reparo en ello San Miguel, pasó á recibir el juramento á los cinco Diputados provinciales, al contador Don José Luis de Torres y al Secretario Hormaeche.

Concluido este acto con la mayor solemnidad, declaró San Miguel instalada la Diputación provincial de Vizcaya, la cual confirmó en seguida á todos los empleados de la antigua Diputación, y nombró Vicepresidente á Don Domingo Eulogio de la Torre, por no haber en Vizcaya Intendente, acordando después varias providencias de índole administrativa y económica.

El 10 de Septiembre elevaron los nuevos Diputados á la Reina una exposición en la que dicen: «que sólo por obedecer las inevitables disposiciones de este señor Comandante general y Jefe superior político, y salvar de su inminente ruina la administración de este país, convinieron bajo legales reservas en reemplazar á la extinguida Diputación general.—No serían fieles á los deberes más sagrados, si franca y decorosamente no se apresurasen á representar á V. M. la imposibilidad de desempeñar en circunstancias tan difíciles su ardua misión, porque si bien el origen de que proceden puede ser justificado por la necesidad, no así por las leyes más respetables que han enmudecido ante ella.—La extinguida Diputación, nombrada de la manera más popular y

conforme á las antiquísimas instituciones de este país, gozaba por lo mismo del gran prestigio necesario, y los pueblos estaban acostumbrados á acatarla y á obedecerla dócilmente; los individuos que la componían, correspondiendo dignamente á la confianza depositada en ellos, han merecido las más lisonjeras y repetidas muestras del aprecio de V. M. y de todos los Jefes militares, y es indudable que restituidos al ejercicio de sus funciones, no sólo vencerían mil obstáculos que á los exponentes no será dado superar, sino que podrían influir más poderosamente á la pacificación de este suelo desventurado.—Con esta convicción, y la de que la justicia y la policía recomiendan hoy más que nunca la suspensión de toda novedad tan inútil como arriesgada para la causa pública, hasta que las Cortes, con la debida audiencia y conocimientos necesarios, adopten una resolución digna de su sabiduría—Suplican á V. M. se digno tomar en consideración estas importantes aunque ligeras indicaciones, y acceder á la deseada reposición de la extinguida Diputación general, exonerando á los suplicantes de los destinos con que se ha servido honrarlos este Comandante general y Jefe político.»

No se dió en esta ocasión por fortuna el doloroso espectáculo de que desapareciese el régimen foral del Señorío, sin más sentimiento que el que quedaba escondido en el fondo del corazón de los vizcaínos, como en otras ocasiones. La Diputación general dejó á salvo su decoro y reservados los derechos de Vizcaya. La Diputación provincial vino ahora protestando de su propia existencia; semejante conducta era un verdadero progreso para la defensa de los principios fueristas, y debe recordarse con elogio, ya que no sea siempre dable tributarlo á los que en casos parecidos han estado al frente de la representación popular en Vizcaya.

CAPÍTULO XII

LA Diputación provincial, cumplimentando la real orden de 25 de Agosto, por la que se creaban las Juntas de armamento para atender á la defensa de los pueblos, sin tocar á los recursos del Estado, nombró el 4 de Septiembre para componer dicha Junta con los Diputados provinciales, á Don Gabriel de Orbogozo, Don José Pantaleón de Aguirre, Don Antonio de Arana, Don Tomás de Epalza, Don Santiago de Ingunza, Don José Salvador de Lequerica, Don José Antonio de Ibarra, Don Tiburcio de Recacoechea, Don Antonio Cirilo de Vildósola, Don José María de Uría Nafarrondo, Don Francisco de Gamindo y Don Vicente de Ansótegui.

El 14 tomó posesión del cargo de Diputado provincial Don Francisco de Briñas, en lugar de Don Federico Victoria de Lecea, con iguales reservas á las que habían hecho los demás Diputados al tomar posesión de su cargo. Don Pablo de Epalza, hijo, que fué nombrado, en lugar de Muñártégui que se excusó, no aceptó tampoco este cargo, por razones políticas y personales que expuso al Comandante general.

En las elecciones para Diputados á Cortes verificadas

este mes, resultaron elegidos Don Martín de los Heros y Don Juan Ramón de Arana. Para estas elecciones se dividió Vizcaya en siete distritos: uno en cada una de las parroquias de Bilbao; uno en Balmaseda; uno en Portugalete; y otro en Begosía, donde votaron también los vecinos de Abando y Deusto, que vivían al amparo de las fortificaciones.

El 17 de Octubre se constituyó la nueva Diputación provincial elegida la víspera por la Junta electoral, y compuesta de Don Miguel de la Fuente, Don José María de Tellache, Don José Pedro de Echevarría y Don Antonio de Irigoyen, vocales propietarios, y Don Vicente de Ansótegui, Don José María de Villabaso y Don Manuel María de Guendica, suplentes; no habiendo asistido los otros tres propietarios Don Manuel María de Murga, Don Romualdo de Arellano y Don José Salvador de Lequerica, el primero por hallarse indispuerto, y los otros dos por creer que tenían derecho para excusarse. El Comandante general contestó á Arellano que tomase posesión, y á Lequerica que consultaría su caso. Arellano tomó posesión, pero protestando que no tenía los siete años de vecindad requeridos, y que además iba á entablar una reclamación contra la Diputación. Posteriormente fueron nombrados individuos de la Junta de armamento Don Melquiades de Echóvarri y Don José de Busturia, en sustitución de Ansótegui y Lequerica, elegidos Diputados. Don Miguel de la Fuente pidió que se le eximiese de su cargo, alegando su edad de sesenta y ocho años, el no ser natural ni vecino de Vizcaya, ni poseer bienes raíces y vivir con una pensión obtenida después de cuarenta años de servicios; pero el Comandante general no admitió sus excusas, y la Fuente quedó de Vicepresidente de la corporación, hasta el 20 de Enero siguiente, en que por fin fué exonerado.

Ocurrieron por aquel tiempo los asedios de Bilbao, cuyo relato no es de este lugar, como todo lo que se refiere exclusivamente á las reñidas luchas entre hermanos que han ensangrentado el suelo vizcaíno por efecto de sus divisiones políticas. La historia del régimen foral tiene muy poca relación con tales sucesos, á menos que no sea para deducir de aquellas divisiones consecuencias inevitables y dolorosas que han de perjudicar siempre á la causa de nuestros derechos populares, si es que no los aniquilan por completo. El espíritu que ha guiado la pluma para escribir este libro, no se complace en lisonjear á los vencedores, ni en deprimir á los vencidos, sean cuales fuesen unos y otros, siendo todos vizcaínos, sino en recordarles que el patrimonio común de sus tradiciones y libertades puede salvarse tan sólo por sus propias manos, á calidad de no confundirlo con otros intereses, que han de arrebatárnoslo al cabo indefectiblemente.

El 29 de Diciembre se nombró Secretario interino de la Diputación á Don Manuel de Barandica, durante la ausencia de Hormaeche, encargado del desempeño de una comisión en Madrid.

En vista de un memorial presentado por el Teniente general del Señorío Don Francisco de Paula Grande, acordó la Diputación el 3 de Enero contestarle, que con la supresión de la Diputación general había quedado también suprimido aquel empleo, y no procede, por lo tanto, que se abone sueldo alguno al que lo desempeñaba; ni corresponde á la Diputación provincial decidir nada acerca de la situación en que ha de quedar el expresado Teniente. 1837

Ansótegui y Guendica quedaron de Diputados propietarios, por haber fallecido Tellaeche y Villabaso durante el sitio. Arellano ocupó la Vicepresidencia de la Diputación, en lugar de la Fuente, y Lequerica tomó posesión de su puesto el día 22.

Don Francisco de Hormaeche y Don Juan Bautista de Maguregui hicieron un contrato con el Gobierno, á nombre de la Diputación, para el suministro de provisiones al ejército. Sobre la ejecución de este contrato se suscitaron graves diferencias con el General en jefe Espartero, viéndose obligada la Diputación, para salir de sus apuros, á solicitar el concurso de cierto número de las personas más acaudaladas de Bilbao.

En sesión celebrada el 22 de Febrero se leyeron las minutas de los oficios dispuestos por la Diputación para los Ministros de la Guerra y Hacienda, los Diputados á Cortes Heros y Arana y el comisionado en Madrid Hormaeche. La Diputación se quejaba en dichos oficios de haber sido tratada muy duramente por Espartero, por no haber llevado á efecto lo convenido, á consecuencia de obstáculos que no le era posible vencer con la premura que exigía el General. Y recelando la Diputación por las amenazas que de palabra y por escrito les tenía hecha aquél, que atentase á las facultades y atribuciones que la Constitución concede á la corporación, y á la libertad individual de los miembros que la componen; acordó, por si llegaba este caso, conferir el poder competente al Diputado á Cortes suplente Don Pedro de Lemonauría y al comisionado de la misma Diputación Hormaeche, juntos ó in solidum para que acudan á las Cortes, al Gobierno y á cualquier otra autoridad á quien corresponda, y practiquen todas las gestiones conducentes para conseguir reparación de los agravios que se cometiesen contra las leyes ó los individuos de la Diputación provincial.

Reunida la Diputación el 23 bajo la presidencia del Comandante general San Miguel, se dió cuenta de un oficio del General en jefe, en el que después de acriminar la conducta de los Diputados respecto al cumplimiento de la

contrata de suministros, en términos durísimos y ofensivos, resuelve que quede sin efecto dicha contrata, dando cuenta de ello á la Reina, «y que desde mañana cese en sus funciones la Diputación provincial, restableciendo la foral».

Los Diputados causaron, en su consecuencia la protesta siguiente: «Como Diputados provinciales de Vizcaya elegidos con arreglo á la Constitución política de la Monarquía, que han jurado al tomar posesión de sus destinos, así como también V. E., se ven en la indispensable obligación de pedir á V. E., como á Jefe político, la observancia de dicha Constitución, según la que no puede ser disuelta la Diputación ni aun por la Reina, y si sólo suspendida por ésta en el caso que demarca el artículo trescientos treinta y seis. Pedimos á V. E. se sirva hacerlo así presente al Excelentísimo señor General en jefe Conde de Luchana, y en el caso que trate de llevar adelante la disolución, ceden los Diputados á la fuerza, protestan la infracción de la Constitución, y piden se les dé el testimonio ó certificación competente de la disolución y protesta; así como también del oficio del mismo Excmo. señor General, que se ha leído, y que tanto ofende á la Diputación y sus miembros, para dirigir los recursos oportunos al soberano congreso nacional, al Gobierno y demás á quienes corresponda.»

Contestó San Miguel, que no había inconveniente en facilitar el testimonio que pedían los Diputados; pero que siendo terminante la orden del General en jefe para disolver la Diputación, «no podía suspenderla, y si ponerla, como lo verificaba, en ejecución, dando parte sin embargo á aquella autoridad de la protesta presentada, y de la disolución que en virtud de una orden terminante les obligaba á ceder á la fuerza á dichos señores Diputados.»

Se reunieron el mismo día, llamados por el Comandante general, Don Mariano de Eguía y Don Gil de Ugarte, Regi-

dor del Señorío, como suplente de Anitua, con el Secretario Barandica. Hizo presente el Comandante general que el objeto de la reunión era restablecer la Diputación general, en cumplimiento de una real orden del 3, según la cual, «enterada la Reina Gobernadora del expediente instruido en la Secretaría de Estado y del despacho de la Gobernación del Reino, acerca de si convendría restablecer en Vizcaya la Diputación foral, ó si debería continuar al frente de su administración la Diputación provincial, elegida en virtud de real orden de 23 de Septiembre último; y tomando en consideración que la Diputación provincial no ha sido elegida por toda la Provincia, así como también que la Diputación foral por su prestigio y simpatías hallará más fácilmente los recursos necesarios para proveer á los importantes objetos que en el día están cometidos con preferencia á su cargo; ha tenido á bien mandar que desde luego se restablezca la Diputación foral, cesando la provincial, hasta que las circunstancias den lugar á que se puedan hacer otras elecciones en debida forma.»

Reinstalada la Diputación foral, en cumplimiento de de dicha real orden, en el ejercicio de sus atribuciones forales, lo hizo saber al público por medio de una circular, y acordó confirmar á Hormaeche en el empleo de Secretario, ó interinamente á Barandica, llamar al Corregidor y al Síndico, y encargar á Murga que representase á la Diputación, en sustitución del Diputado provincial que cesaba, en la Junta creada por real orden de 28 de Enero último con objeto de liquidar las deudas de honor contraídas durante el sitio.

Se daba el caso anómalo de que el Gobierno restableciese la Diputación foral, aunque atendiendo á razones de conveniencia propia y no á otras de índole más elevada, y de que la Diputación provincial destituida viniese á protestar

el restablecimiento de la Diputación general, en concepto de infracción de las leyes constitucionales, por más que la protesta en realidad, antes que política, fuese personal y motivada por los agravios recibidos por los Diputados.

Acordó la Diputación el 25 ratificar la comisión dada á Hormaeche en Madrid, encargándole que gestionase el reintegro de las cuantiosas sumas que el Señorío había adelantado, así como el que se pusiese á Bilbao á cubierto de nuevos ataques, y se tomasen las medidas necesarias para la terminación de la guerra. Al mismo tiempo, accediendo á los deseos del General en jefe, se publicó la alocución siguiente:

«VIZCAINOS. Al ser reinstalada vuestra Diputación general, ha escuchado los acentos del vencedor de Luchana, quien se prepara á nuevos combates, recorriendo muy en breve los desfiladeros y crestas de las montañas vascongadas. Todo su ardor marcial lo quiere reservar para el campo de batalla, haciendo respetar las personas y propiedades de los habitantes desarmados. Mas por rígida que sea la disciplina militar que haga observar, dejará de surtir todo su efecto cuando fugándose la generalidad de los habitantes, no encuentre la tropa los auxilios necesarios, y cuya privación la excite al más alto grado de irritación.—Evitad, pues, que el soldado carezca de subsistencias, y confiad en que ocurriendo con puntualidad á los suministros militares, os serán abonados con la regularidad establecida para los puntos fortificados. De vuestra sola voluntad pende la seguridad del hogar doméstico, y el que las personas y bienes queden completamente garantidos. No desoigais la voz paternal de vuestra Diputación general, que vela incesantemente por disminuir los estragos de la guerra civil, mientras no vea cumplidos sus ardientes votos de reunir fraternalmente á todos los vizcaínos, depuestas las armas y calmados los enconos políticos.»

En sesión celebrada el 16 de Marzo recibió la Diputación al Diputado á Cortes por Vizcaya Arana, y al Diputado por Logroño Don Francisco de Santa Cruz, los cuales eran portadores de un pliego cerrado que contenía una real orden, comunicada por el Ministerio de Hacienda, en que se excitaba á la Diputación general al cumplimiento del contrato sobre suministros que se hizo con la Diputación provincial, autorizando á los dichos Diputados para orillar las dificultades que se suscitasen. No obstante las graves dificultades que se presentaban para ello, acordó la Diputación hacer cuanto estuviese en su mano para vencerlas, quedando en celebrar frecuentes conferencias con los Diputados á Cortes para conseguir el fin apetecido.

El 26 se adjudicó el servicio de suministros, previa licitación, á Don Miguel de Larraza y Don José Antonio de Ibarra, cuya proposición era mucho más ventajosa que otra que había presentado Don Manuel María de Uhagón. Santa Cruz salía garante de las letras que se girasen contra el Banco de San Fernando para el pago de los suministros.

Reunida la Diputación el primero de Abril, á fin de cumplimentar una orden del General en jefe acerca del establecimiento de algunos derechos en Bilbao sobre artículos en su entrada ó salida, para atender á las obras de fortificación de la Villa, se presentó Don Pablo de Epalza, á nombre de la Junta de comercio, que había sido convocada al efecto, y expuso que el estado de abatimiento en que se hallaba el pueblo no consentía nuevos gravámenes, pero que de todos modos se iba á consultar la voluntad de los comerciantes, porque la Junta no podía prescindir de consultarla. No asistió nadie en representación del Ayuntamiento del Bilbao, que también fué convocado; pero después de haber salido Epalza, llegó un oficio de aquella corporación, en el que evadiéndose de contestar directamente, pedía explicaciones

que parecieron á la Diputación intempestivas, por lo que se acordó aguardar el resultado de la reunión de los comerciantes.

La Diputación general, de acuerdo con los Diputados á Cortes Arana y Santa Cruz, considerando que debía correr á cargo de la misma el servicio de hospitales militares, resolvió el 11 abrir licitación pública para realizar dicho servicio, no pudiendo encargarse de él directamente.

En vista del decreto de las Cortes de 30 de Marzo último sobre la introducción de cereales y caldos del extranjero, en cantidad y por tiempo limitado, y con sujeción á crecidos recargos; acordó la Diputación el 18 elevar á la Reina una exposición pidiendo que se suspendiese la ejecución de dicho decreto por creerlo oneroso y vejatorio para Vizcaya, y que si esto no era posible, se comisionase á la Diputación para que cuide de su cumplimiento, autorizándole á hacer uso de los ingresos hasta que se reintegre de los haberes que legitimamente alcanza del Gobierno.

En sesión celebrada el 21 de Mayo se dió cuenta del informe puesto por el Síndico Gardizabal, asesorado por Lofzaga, sobre el nombramiento de los Jueces de hecho para calificar los delitos de imprenta. Decía el Síndico que ha visto el oficio del Comandante general de Vizcaya para que en cumplimiento de lo prescrito por la ley de 22 de Octubre de 1820 sobre la libertad de imprenta, la adicional de 12 de Febrero de 1822, y el real decreto de 17 de Agosto último, se proceda al nombramiento de los Jueces de hecho para la calificación de los abusos «que fueros denunciados en el citado ramo, y dice: que sin alterar en su esencia las antiguas y venerandas instituciones vizcaínas, no pueden innovarse las atribuciones de los Jueces y tribunales forales, á quienes compete exclusivamente el conocimiento de todos los negocios civiles y criminales. Por ven-

tajoso que aparezca el establecimiento de Jueces de hecho, deben ser respetadas las leyes de un Estado constituido como el Señorío de Vizcaya, y esperar en todo caso á que preceda el consentimiento de su congreso ó Junta general; y mientras el Síndico desempeñe las funciones que le han sido confiadas para la salvaguardia de la especial Constitución vizcaína, se halla en la obligación de oponerse á la elección de los Jueces de hecho, y á cualquiera nueva creación de juzgados y tribunales, que no estuviesen designados en los Fueros, cuya observancia tiene jurada.»

Tratábase de constituir el tribunal de imprenta con motivo de un artículo publicado por el periódico *El Bilbaíno*, bajo el epígrafe de «Anarquía», y que denunció el Ayuntamiento de Bilbao, y correspondía á la Diputación nombrar las dos terceras partes de los Jueces de hecho que compusiesen dicho tribunal, siendo de competencia del Ayuntamiento el nombrar la otra tercera parte.

«Considerando la Diputación que no puede sin graves inconvenientes suspenderse por ningún título la administración de justicia; que si se rehusase á nombrar los treinta y dos Jueces de hecho que deben completar el jurado de Vizcaya, se podrá pintar su oposición con odiosos colores, y que de ella resultarían compromisos y daños notables al país; que no se opone con este acto á ninguna de las leyes forales escritas ni á su espíritu, porque lejos de consentir en que se menoscaben sus atribuciones, adquiere una nueva, hija de una institución también nueva y desconocida á nuestros mayores, que no sustrae á los vizcaínos de sus Jueces naturales; teniendo presente además que en las trisísimas circunstancias en que se halla este suelo, declarado en estado de sitio, la Diputación no puede hacer otra cosa que luchar con energía y constancia, como lo ha hecho hasta ahora, por sostener los fundamentos de su especial

Constitución, sin empeñarse, á riesgo de acelerar su ruina, en las contiendas de corta entidad que á cada paso suscitan el Gobierno y los Jefes militares con sus providencias; ha acordado, sin embargo de lo expuesto por el Síndico en el dictamen preinserto, y sin perjuicio de elevar á S. M. en tiempo oportuno las reclamaciones que juzgue más ventajosas á la prosperidad y lustre del Señorío, ó íntegra conservación de su sistema foral, contesta al Comandante general, que la Diputación ha examinado con madurez este asunto, y teniendo presentes razones poderosas de política y conveniencia, ha creído no deber prescindir de nombrar Jueces de hecho que califiquen los abusos de la libertad de imprenta á los sujetos que á continuación se designan». ¹

El 30 de Mayo se publicó la circular siguiente:

«Las dos alocuciones dirigidas por el Excmo. Señor Con-

¹ Eran éstos: Don Francisco de Abarrátegui, Don Patricio Frías, Don José Javier de Goitia, Don Santiago de Bernaola, Don Casimiro de Ariz, Don Leonardo de Torres, Don Manuel de Careaga, Don Miguel de Medina, Don José Gil y Caño, Don José Conde, Don Alejandro Arrúa, Don Antonio del Olmo, Don Modesto Gutiérrez de la Poña, Don Gregorio de Lezama Leguizamón, Don Tomás de Epalza, Don Vicente de Ansótegui, Don Romualdo de Arellano, Don José Pedro de Echevarría, Don Cosme de Zubiria, Don Cosme Sancho, Don Gabriel María de Orbeagozo, Don Eulogio de Larrinaga, Don Félix de Lejarrategui, Don Nicolás de Villabaso, Don Juan Bernardo de Uriarte, Don Martín García, Don Juan Crisóstomo de Rada, Don Juan Antonio de Uribarri, Don Nicolás de Urcullu, Don Cosme de Palacios y Don Luis de Hurtado.

Los nombrados por el Ayuntamiento de Bilbao eran: Don Pedro de Lemonauria, Don Manuel María de Guendica, Don Juan Angel de Zorrozuia, Don Francisco de Gaminda, Don José Luis de Villar, Don José Pantaleón de Aguirre, Don José Salvador de Lequerica, Don Claudio Santos de Bayo, Don Vicente de Arana, Don José María de Uria, Don Pedro de Jane, Don Manuel de Jane, Don José de Bergareche, Don Eustaquio de Bengoa, Don Pablo de Epalza, hijo, y Don Ambrosio de Orbegazo.

de de Luchana con fecha 19 del corriente desde su Cuartel general de Hernani, una á los que con deplorable ceguedad siguen la bandera de Don Carlos, y la otra á los habitantes de Navarra y las Provincias Vascongadas, son de un interés demasiado grande y vital para que la Diputación las mire con indiferencia. Las promesas que contienen, y los sentimientos elevados y generosos que en ellas brillan, deben ser de todos conocidos. Hubiera la Diputación faltado tal vez al primero y más agradable de sus deberes sino hubiese acordado reimprimirlas y circularlas.—Por los adjuntos ejemplares se convencerán los hombres tenaces y obcecados, que aun siguen despedazando las entrañas de su Patria, que no contento el Excmo. Señor General en jefe con perdonar, en nombre de la excelsa é indulgente Reina Gobernadora, extravíos que tantas lágrimas, tanta sangre y tanta ruina y desolación han traído sobre este país, antes afortunado y pacífico, ofrece á los que depongan las armas fratricidas, reconocerles grados y distinciones proporcionados á los que tengan en las filas desleales y á las muestras que den de arrepentimiento; pero, lo que á los verdaderos vascos parecerá más lisonjero y conciliador sin duda, promete conservarles sus instituciones respetables y queridas. Así aleja con política conciliadora todo motivo de recelo; así arranca la máscara á seductores perversos, y quita á la rebelión los especiosos pretextos que la han servido de escudo. Esta conducta noble y magnánima, la que ha observado con los pueblos de este Señorío que ocuparon las tropas de su ejército en su última expedición á Durango y Elorrio, á la mayor parte de los cuales fueron religiosa y puntualmente pagados los suministros que hicieron, conforme lo serán á todos, en cuanto se concluyan las liquidaciones pendientes, contrasta de una manera singular con la de los enemigos del suelo en que nacieron, y cuyas desgracias multiplica-

das han acarreado á fuerza de desvaríos. El aspecto doloroso que presenta, angustia y estremece el corazón, porque es un recuerdo vivo de las calamidades que sobre él se han desplomado desde el aciago día en que la rebelión alzó su frente temeraria, y de las más terribles y espantosas que amenazan tragarse sus malhadados restos, si como las últimas Juntas lo acordaron, y lo tienen sábiamente establecido las leyes peculiares del Señorío, confirmadas, según se ve en todos los ejemplares impresos de las mismas, por las dos Reinas Doña Isabel la Católica y Doña Juana, no se someten los vizcaínos á la autoridad tutelar de su legítima Señora Doña Isabel segunda, heredera de las virtudes y del trono, en que supo la primera adquirir renombre perdurable.—La Diputación juró guardar y defender los Fueros, como el principal y más precioso depósito que el país puso bajo su custodia. Notoria es la entereza con que ha estado abogando en su favor siempre que ha visto la menor tendencia á vulnerarlos. Hasta ahora ha conseguido con sus esfuerzos, y la eficaz aynda de no pocos y valerosos leales, salvarlos de las borrascas consiguientes á una guerra civil larga y desastrosa que más de una vez han corrido. Y puede asegurar con íntima y profunda convicción, sin comprometer su veracidad intachable, que no serán nunca suprimidos ni hollados, porque la augusta y benéfica Reina Gobernadora, y el Excmo. señor General en jefe tienen empeñadas palabras demasiado sinceras y solemnes. Tranquilícense, pues, los ánimos de todos sus administrados acerca del porvenir, y acábense de desengañar los ilusos, poniendo á los genios turbulentos que causan su ruina con la ruina del país, y los conducen á un sacrificio igualmente bárbaro que inútil, en la imposibilidad de dañarlos con sus manejos interesados.—Inculque V. á todos los habitantes de su jurisdicción estas verdades; procure hacer que lean las ad-

juntas proclamas, y contribuya por todos los medios imaginables á que se penetren de las ventajas grandes y seguras que habrá de derramar sobre ellos la paz que tanto ansían los hombres de bien. Si los conatos de V. surtiesen el efecto apetecido; si los que han sido deslumbrados por errores involuntarios ó artificiosas imposturas depusiesen inmediatamente las armas ¡con qué placer, con qué constancia consagraría la Diputación todas sus fuerzas á reparar los inmensos quebrantos que una guerra sin justicia y sin objeto ha ocasionado á la infeliz Vizcaya!»

En sesión celebrada el 20 de Junio autorizó la Diputación al Diputado general Don Pedro Pascual de Uhagón, residente en Bayona, á gestionar el cobro de ciertos créditos contra el Gobierno francés por adelantos hechos al ejército de aquella nación durante la guerra de la Independencia, poniéndose de acuerdo con los comisionados de Alava y Guipúzcoa, que tenían igual interés que Vizcaya en este asunto.

El 27 se dió por liquidada la cuenta de suministros al ejército con los asentistas Don Pascual de Olábarri y Don Francisco Bergé, habiendo cobrado ambos sus créditos con el importe de los derechos sobre el tabaco, pertenecientes á la Diputación, por no haber sido satisfechas las libranzas giradas á cargo de la pagaduría general del ejército.

Se dió cuenta el 2 de Julio de un oficio del General San Miguel, en el que participaba que había dispuesto que el juramento á la nueva Constitución, prescrito á las autoridades y corporaciones por real decreto de 15 y real orden de 20 de Junio último, se verifique en Bilbao en la sala consistorial de esta invicta Villa el lunes 3, á las once de la mañana, á fin de que la Diputación, en cumplimiento de las disposiciones expresadas, se sirva concurrir al referido acto. La Diputación le contestó con el oficio siguiente:

«V. E. que conoce bien el espíritu de concordia y de buena inteligencia con que siempre se conduce esta Diputación en sus relaciones, no desconocerá cuán repugnante y sensible será á los Diputados que suscriben haber de recordar á V. E. los obstáculos que se oponen á que ellos puedan asistir á la jura de la Constitución política á que V. E. los convoca por su oficio de ayer. Las razones en que se fundaron para dejar de concurrir á otro igual acto á que fueron citados por V. E. cuando se publicó y juró en esta Villa el año próximo pasado la Constitución de Cádiz, están depositadas en los oficios que los Diputados tuvieron el honor de dirigir á V. E. en 19 de Agosto y 2 de Septiembre del mismo año. Su data es tan reciente, que no hay necesidad de que aquí se reproduzcan, y lejos de que desde entonces hayan perdido su vigor, se han reforzado por el contrario posteriormente con otras nuevas razones.—V. E. creyó en aquella época, que no prestándose la Diputación general al juramento que de ella exigía, la debía disolver y disolvió en efecto. Pero el Gobierno, que vió en la entereza de los Diputados el celo que los anima por el cumplimiento de sus deberes y por la prosperidad del país, y no pudiendo dudar de su constante adhesión á la causa de Isabel segunda, ni de su respeto á las órdenes de la augusta Reina Gobernadora, aprobó su franca y liberal conducta, y por real orden de 3 de Febrero del año corriente mandó que esta misma Diputación se restableciese, y fué restablecida. ¿Cuáles, pues, habrán de ser las causas que obliguen en la actualidad á los Diputados á que, abandonando la senda del deber que entonces siguieron, procedan de una manera opuesta y contradictoria? En la nueva ley electoral han aprobado las Cortes el artículo transitorio relativo á estas Provincias, y basta su simple lectura para convencerse de que las Diputaciones de Guipúzcoa, Alava y Vizcaya están considera-

das bajo de un aspecto excepcional, y enteramente distinto del de las demás Provincias del Reino. Así es, que designándose en la real orden de 20 de Junio las autoridades que deben prestar juramento á la nueva Constitución, nombra entre ellas especialmente á las Diputaciones provinciales, sin hacer la más ligera mención de las que subsisten en las tres Provincias Vascongadas, tan diversas de las demás en su origen, forma, deberes y atribuciones. Por eso es sin duda que la Diputación general de Vizcaya no ha sido avisada para la solemnidad con que se ha promulgado hoy la Constitución, y por esto también que V. E. mismo, con la franqueza que le inspiraba su íntimo convencimiento, dijo á los Diputados en su oficio de 26 de Febrero que reconocía la incompatibilidad de la coexistencia de un Jefe político y de la Diputación foral. En tal conflicto, si los precedentes enunciados no fuesen aun bastantes para decidir cual de estas dos autoridades debería subsistir, con exclusión de una de las dos, encontraríamos resuelta la cuestión por explicaciones bien claras y positivas de S. M. la Reina Gobernadora, del Gobierno de su excelsa hija, y de los Generales en jefe del Norte, que revestidos con facultades extraordinarias han hablado en su real nombre.—La primera disposición tomada por el Excmo. señor Don Pedro Sarsfield á su entrada victoriosa en esta plaza, á fines de Noviembre de 1833, fué restituir á los Diputados generales legítimos del país al ejercicio de sus funciones, asegurándoles que su Constitución peculiar sería respetada. Igual seguridad les dió su digno sucesor el Excmo. señor Don Jerónimo Valdés, en oficio que les pasó desde su cuartel general en Vitoria, en data de 10 de Enero de 1834. No satisfecha con esto la innata clemencia de la generosa Cristina, se dignó dirigir su augusta voz á los secuaces siniestros de la bandera insurreccional, para persuadirles de que nunca

trató de abolir las antiguas y venerandas instituciones del Señorío de Vizcaya, en una alocución de S. M. que á principios de 1836 remitió el Gobierno al General en jefe del ejército, y recibió la Diputación por conducto del Comandante general, con objeto de que la hiciese circular en las filas facciosas. Y recientemente, el Excmo. señor Conde de Luchana, en su proclama expedida en Hernani á 19 de Mayo último, ha dicho á los pueblos vascongados: «como General en jefe del ejército de la Reina, y en nombre del Gobierno, os aseguro que estos Fueros que habeis temido perder os serán conservados, y que jamás se ha pensado en despojaros de ellos.» Promesas tan sagradas, garantías tan respetables, consiguídas de un modo auténtico en las oficinas de la Diputación general, creyeron los Diputados que eran tan sinceras como sonaban, sin imaginarse que hubiese hombres ciegos, ó mal avenidos con las ideas de pacificación, que las interpretasen en un sentido contrario, neutralizando, como quizá le han conseguido ya, el efecto que ellas pudieran producir. Movidos de su propia buena fe, los Diputados, deseosos de cooperar á las benéficas miras del Gobierno, y á la más pronta terminación de una guerra atroz, que va acabando con este desventurado suelo, no dudaron un instante en exhortar á los habitantes de él á la paz y á la reconciliación, asegurándoles que el régimen foral les sería conservado, por circular de 30 de dicho mes; circular que ha sido mirada como una sagrada garantía de las promesas hechas y de las palabras empeñadas.—Con presupuestos de tan alta importancia y trascendencia, se convencerá fácilmente la ilustrada penetración que á V. E. distingue, de que no pueden los Diputados, sin incidir en la nota de la más infame y doble perfidia, prestarse á un juramento derogativo de la Constitución vizcaína, cuya observancia juraron, y cuya custodia legal les está estrechamente encomendada; ni des-

mentir con sus obras lo que han jurado en las palabras de la citada circular, á la faz de Vizcaya y de España, porque la palabra de la verdad ingenua es tan valedera y digna de crédito como la solemnidad del más sagrado juramento.»

En sesión celebrada el 29 se leyó un oficio del Comandante general, en el que traslada una real orden del 19, por la que se manda que la Diputación preste inmediatamente, y sin la más leve excusa, el juramento á la Cons titución política de la Monarquía española, conminándola para el caso de no prestarlo con todo el rigor de la ley. La Diputación resolvió contestar al oficio del Comandante general, diciéndole, que por el correo del mismo día elevaba á la Reina Gobernadora «una reverente exposición, demostrando la imposibilidad en que se halla como corporación foral de jurar el expresado código. V. E. conoce las fuertes razones en que para obrar así se apoya, y ha sabido hacer justicia á la pureza de sus sentimientos ó intenciones en idéntica ocasión. No le distraerá, por lo tanto, de las graves tareas que le ocupan, reproduciéndolas. Espera, pues, que tendrá V. E. á bien aguardar á que S. M. resuelva con presencia de la exposición precitada lo que estime conveniente. En caso contrario, puede V. E. adoptar las medidas que contemple más arregladas á sus deberes, porque á la Diputación no le es dado, sin faltar á los suyos, concurrir á la cita de V. E., aunque sentiría sumo placer en no hallarse nunca en la poco agradable necesidad de contrariar sus deseos.»

La exposición á la Reina era como sigue:

«SEÑORA. — Con no menos dolor que asombro recibí ayer esta Diputación un oficio del Comandante general de este Señorío, en el que le trascribió la real orden de 19 del corriente, expedida por el Ministerio de la Gobernación de la Península; encargábasele en ella que previniese á la misma

Diputación que prestase inmediatamente, y sin la más leve excusa ni pretexto, el juramento á la nueva ley fundamental de la Monarquía, pues de no hacerlo se procederá contra sus individuos con todo rigor de derecho, conforme á las disposiciones vigentes.—Severa y desusada para el corazón maternal de V. M. es en verdad semejante medida, y harto se habrá violentado al dictarla. Tal vez han dado lugar á ella poco exactos y siniestros informes; pero se hallan demasiado probados la lealtad y patriotismo de los miembros de esta corporación para que teman nunca ver mancillado su buen nombre, ni puesta en duda la pureza de sus intenciones.—Cuando en Agosto del año último se proclamó en esta invicta Villa la Constitución de Cádiz, manifestó la Diputación las razones claras ó incontrastables que tenía para no jurarla. El Comandante general creyó deberla hacer cesar en sus funciones, y sin embargo de haber intruido á V. M. de lo que á la sazón ocurrió, se dignó mandar por real orden de 3 de Febrero de este año que fuese restablecida, sin exigir de los que la componían el juramento por aquel código proscrito. ¿Ni por cuál motivo se los habría de poner entonces ni ahora en el conflicto de faltar al primero, al más esencial de sus deberes, sin necesidad, y con notable daño de la causa pública?—La Diputación general de este país debe su origen y existencia á los antiquísimos Fueros de que goza. Los individuos de ella fueron libre y popularmente elegidos por el congreso vizcaíno, con la obligación santificada por un juramento de conservarlos. No habiendo sido, pues, creada ni por las leyes generales que rigen ó han regido en el resto de la Monarquía, ni por la autoridad real; no debiendo vivir desde el momento en que este Señorío se igualase con las demás Provincias en su régimen político; no estando tampoco facultada, sin traspasar abiertamente los poderes que le fueron conferidos, á admitir las disposicio-

nes que estén en pugna con su legislación peculiar, por ventajosas que parezcan, hasta obtener la aquiescencia de las Juntas generales, ¿habría de faltar cobardemente á sus deberes, estando sentada en el solio de San Fernando Doña Isabel segunda, bajo la tutela y dirección de la restauradora de las libertades españolas? ¿Temería haber de ser condenada, ni ligeramente reconvenida, por la misma augusta Princesa en cuyo nombre se ha prometido dos veces con la mayor solemnidad respetar las instituciones vascongadas, por no hacer traición á las propias instituciones, y sostenerlas con entereza y decoro mientras se hallan en pié? La Diputación general de Vizcaya, Señora, reconoce y acata la Constitución política decretada y sancionada por las Cortes constituyentes y aceptada por V. M., como ley fundamental de la Monarquía; mas no le es permitido reconocerla como ley que ha de tener efecto en este Señorío, en tanto que los Fueros subsistan, y ejerzan los Diputados los cargos con que los honró el sufragio de los naturales de él. Si obrasen de otro modo, incurrirían en una inconsecuencia sobradamente notoria y chocante; serían considerados como traidores, y se echarían sobre sus frentes una mancha imborrable. ¿Puede entrar en la mente de V. M. ponerlos á los ojos de sus administrados en tan menguado concepto de humillarlos, hasta el extremo de exigir que destrocen con sus propias manos los títulos en que su autoridad reposa? ¹ Pues si jurasen la Constitución, ni podrían desempeñar las atribuciones correspondientes á las Diputaciones provinciales, porque su organización es esencialmente diferente, ni las peculiares á la Diputación foral, porque quebrantarían

¹ La hidalguía castellana no se ha detenido algunas veces en esta consideración, procurando encaminar más bien las cosas con el maquiavelismo italiano.

el juramento al instante mismo de haberle prestado. En 1812 y 1820 tampoco juró la Diputación el código que se proclamó en aquellas épocas, sin embargo de lo que se ordenaba en el artículo trescientos treinta y siete, que no tiene equivalente en el código que al presente rige en la Península, y subsistió hasta que fué reemplazada por una Diputación provincial, sin incurrir en ningún cargo ni censura.—La justicia que en nombre de la hija excelsa de V. M. se administra es demasiado recta é ilustrada ¿Podrá intimidar su fallo á los individuos de esta corporación, cuya conciencia está entoramente satisfecha y tranquila? La disposiciones vigentes acerca de las demás corporaciones del Reino que se nieguen á jurar la Constitución, ni pueden alcanzarlos, ni son hechas para el caso excepcional y único en que se encuentran. Su acendrado amor á la libertad, que saludaron desde la cuna, y al trono de la augusta huérfana, está bien sólidamente acreditado para que puedan tacharse de menos nobles y puras las intenciones que á esta resistencia los mueven. A su impulso han sacrificado sus fortunas y personas, y están prontos á continuar sacrificándolas; pero ruegan encarecidamente á V. M. que no les mande hacer también el sacrificio de su honor y de su fe, comprometidos en el juramento que prestaron de guardar los Fueros del país, y en la circular de 30 de Mayo que acompaña, dirigida á sus pueblos á virtud de la proclama dada en Hernani el 19 de dicho mes por el Conde de Luchana, en que dijo como General en jefe del ejército del Norte, y en nombre del Gobierno á los habitantes de estas Provincias, que aquellos mismos Fueros les serían conservados, y que jamás se había pensado en despojarlos de ellos. Si no obstante estas razones, V. M. dispusiese que se llevasen á efecto los rigores con que la expresada real orden los amenaza, no vacilarán en comparecer ante el tribunal que se sirva

designarles; ciertos están de que su proceder como magistrados populares no sería tachado; ciertos están igualmente de que los hombres imparciales y justos les tributarían alabanza.—No se imaginan los que suscriben que su conducta franca y desinteresada, la resolución con que defienden el depósito de las instituciones vizcaínas, fiado á la salvaguardia de su celo y pundonor, se atribuya á deseos de seguir ocupando unos puestos poco apetecibles en verdad en las circunstancias espinosas que los rodean, los cuales se hallan ansiosos de resignar, si así lo manda V. M. Felices se contemplarían en volver á la oscuridad de la vida privada que les permitese, ya que no recuperar sus perdidos bienes, descansar de las angustias y sobresaltos de que constantemente han sido víctimas en estos tiempos calamitosos.—Suplican, pues, rendidamente á V. M. se digne exonerarlos del juramento á la Constitución de la Monarquía española, mientras estén desempeñando sus destinos forales.»

Por este tiempo tuvo que negociar la Diputación, con el quebranto de cincuenta y dos por ciento, algunas letras aceptadas por el pagador general del ejército, á fin de cubrir sus obligaciones más perentorias, entre otras, lo que debía á los contratistas Ibarra y Larraza.

El 5 de Octubre acordó la Diputación ratificar á su Secretario, elegido Diputado á Cortes, las facultades que le había concedido en 25 de Febrero último, sustituyendo á Maguregui, y haciéndose cargo de los fondos que estuviesen en poder de éste, pertenecientes á la misma Diputación.

Recibió el 15 la Diputación un oficio del Comandante general y Jefe superior político Don Miguel de Arechavala, en el que trasladaba el decreto de las Cortes de 6 de Septiembre, sancionado el 16 por la Reina Gobernadora, que es del tenor siguiente:

«Artículo 1.º Cesarán desde luego las Diputaciones fo-

rales de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, estableciéndose en ellas Diputaciones provinciales, con arreglo á la Constitución y leyes vigentes.

»Art. 2.º Para suplir á estas Diputaciones, ínterin que se verifica su elección, y para que haga sus veces en los trabajos preparatorios para ésta, se formará en cada Provincia una Diputación provisional, presidida por el señor Jefe político ó quien le represente, y compuesta de cuatro Regidores de la capital, y uno de cada uno de los cuatro pueblos de mayor vecindario, entre los de la Provincia que estén constantemente libres de la dominación de las tropas facciosas; eligiendo respectivamente los Ayuntamientos á los Regidores que han de componer la Diputación.

»Art. 3.º Se autoriza al Gobierno para que establezca aduanas en las costas y fronteras de las tres Provincias y Navarra, dejando expedita la comunicación con las demás Provincias del Reino.

»Art. 4.º El Gobierno establecerá en los puntos en que las circunstancias lo permitiesen Jueces de primera instancia para la administración de justicia».

«Examinado detenidamente este documento, y no creyendo la Diputación que reside en las Cortes, ni en poder ninguno del Estado, la facultad de destruir ni modificar las instituciones fundamentales de este país, sin el asentimiento libre de su Junta general legítimamente convocada; sin embargo de estar convencida de que la precipitación misma con que se ha dictado esta medida trascendental y ruinosa para Vizcaya, sin discutirla, sin apropiar las fortísimas razones de conveniencia, de política y de equidad que á ella se oponen, sería motivo sobrado para suspender legalmente su ejecución y cumplimiento, con arreglo al Fuero que la propia Diputación juró conservar incólume; considerando que su resistencia sería, no sólo estéril, sino interpretada

como sediciosa, y que además produciría sin fruto alguno funestas consecuencias; acordó someterse á la dura ley de la necesidad y disolverse; pero protestó solemnemente la injusticia y la violencia, y quiso consignarlo así en esta acta, á fin de que de ninguna manera se tengan por menoscabados los derechos del Señorío de Vizcaya ni de sus habitantes, y puedan reclamar en tiempo oportuno el restablecimiento de sus leyes tutelares, cuyas ventajas positivas y reales no compensará en verdad la nueva Constitución, por benéfica que sea á las demás Provincias de España». Firmaban Gil de Ugarte, Mariano de Egufa, como Diputados, el Síndico Francisco de Garaizabal y el Secretario Francisco de Hormaeche; cuyos nombres es muy justo que pasen á la posteridad al pie del documento en que pusieron sus firmas, en el cual, menospreciando contemplaciones que de nada sirvieron en 1812 y 1820, se afirma con el lenguaje de la verdad la excelencia de la Constitución vizcaína, y se deja en el lugar que corresponde la obra de los engraisados legisladores españoles de 1837.

Cuando se pretendía de este modo borrar de una pluma la experiencia provechosa de tantos siglos, comprendida en las leyes y costumbres forales de las Provincias Vascongadas, algunos hijos de esta tierra fijaron también su atención en la suerte que estaba reservada á los Fueros, para estudiar las cuestiones con ellos relacionadas, demostrándose de este modo que en la época presente los vascongados, aunque militasen en diferentes partidos, coincidían por lo menos en el aprecio á sus instituciones forales, y no miraban con indiferencia su desaparición, lo cual, si no es todo lo que en verdad debe esperarse, vale indudablemente mucho más que el que se allanen los vascongados á someterse á la ley de la nivelación como cosa corriente y necesaria.

La proclama dirigida á los vascongados desde Hernani por el General Espartero, había dado margen á que *El Eco del Comercio*, periódico importante de aquel tiempo, publicase un artículo en el que procuraba demostrar que el General en jefe no ofrecía otros Fueros á las Provincias exentas que el régimen, las leyes y las instituciones que han de ser comunes al resto de la Monarquía. Este concepto fué refutado en un folleto, que concluía con las palabras siguientes: «Acusan á los partidarios de los Fueros de un espíritu retrógrado en materia de instituciones políticas, y procuran desacreditar sus principios gubernativos, calificándolos por opuestos á los progresos sociales que exige la civilización del siglo, pero semejante ataque ni aun merece el honor de ser repellido. Los fueristas nacieron libres, y su amor á la libertad es inseparable de su existencia, como que transmitido de una en otra generación, forma ya una necesidad natural, que no sólo les impele á conservarla para sí mismos, sino á propagarla por todas partes, unida con el amor al orden y con el respeto á las leyes. Sus enemigos aun son muy bisonños en el goce de la libertad, para pretender dictar reglas de gobierno á los que tienen resuelto el difícil problema de que puede un pueblo ser libre, á pesar de estar unido á un Gobierno absoluto. Jamás arrastraron éstos las viles cadenas de la esclavitud, ni tascaron el saludable freno del orden y de la legalidad, y tan enemigos del despotismo como de la anarquía, han sabido gozar por siglos las dulzuras de la libertad, sin experimentar las amargas de la licencia. Son por esto los primeros en congratularse con todos los españoles, ahora que el triunfo de la justicia y de la razón, no menos que las luces del siglo, les aseguran esta sabia Constitución que acaba de aceptar y jurar la inmortal Cristina, á presencia de su excelsa é inocente hija la Reina Isabel y de los dignos representantes de

la Nación. Este monumento de gloria nacional, que todos miraremos en lo sucesivo como un símbolo de unión y concordia, será también la más sólida garantía de los derechos, cuya conservación se ha prometido tan solemnemente á las Provincias Vascongadas y Navarra. Tal es nuestra convicción, fundada en la justicia y sabiduría de las Cortes y del Gobierno». ¹

Don Pedro de Lemonauria, cuyo nombre ha sonado antes de ahora en estas páginas, afiliado al partido progresista, publicó, ajustándose al espíritu de su escuela política, otro escrito en el que asentaba las siguientes conclusiones: que no pueden existir los Fueros de Vizcaya con Gobierno absoluto; que la pequeña parte privilegiada que tienen no puede existir con Gobierno representativo; que en una minoridad, en medio de una guerra civil, y en una nación en la que hay Provincias que aun recuerdan los Fueros, que perdieron por la fuerza, es antipolítico y peligroso suscitar la cuestión de la conservación de los de Vizcaya; que en tales circunstancias, el deber de todo buen español, sea de la Provincia que fuese, es reunirse, como muy oportunamente se dijo en un periódico (*El Bilbatino*, número 13) á la Constitución de 1837, que es el símbolo de unión para todos los buenos, el altar donde debemos sacrificar nuestras miserables rencillas.—Ella será la estrella benéfica que nos guíe en la noche de nuestras desgracias; por ella, por nuestra

¹ Respuesta de un guipuzcoano al artículo de fondo publicado por el «Eco del Comercio» en su número 1.126 de 30 de Mayo de 1837 sobre el sentido de la proclama dirigida por el señor General en jefe Conde de Luchana á los habitantes de las Provincias Vascongadas y Navarra en el Cuartel general de Hernani en 19 del mismo mes. San Sebastián 1837.

*sensatez y patriotismo, conseguiremos el respeto y amistad de los extraños, la quietud y bien estar de la España.*¹

El presbítero Don Juan José de Zarrabeitia, conocido familiarmente entre sus muchos amigos por el cura de Echóvarri, hizo también una entusiasta apología de los Fueros, refiriéndose á lo que había escrito el periódico citado, que tuvo corta vida, sobre esta cuestión, insistiendo en que los Fueros no podían «ser suprimidos sin mengua de la razón y de la justicia, y sin una especie de contrariedad á las soberanas intenciones que manifestó la Reina Gobernadora con restablecer la Diputación foral, y de una chocante incoherencia que supondría el declarar incesantemente la libertad, y arrebatarla al mismo tiempo de las manos á los vizcaínos leales, que tantos servicios han prestado á la justa causa.»²

El vecindario de Bilbao, por otra parte, abundando en las mismas ideas, dirigió al Congreso el 10 de Junio una exposición, en la que no pedía otra recompensa en premio de sus sacrificios y de su lealtad, que la conservación de los Fueros ofrecida solemnemente por el General Espartero en su proclama de Hernani.

¹ *Ensayo crítico sobre las leyes constitucionales de Vizcaya. Bilbao.* Imprenta de Don Nicolás Delmas 1837.

² *Defensa de los Fueros de Vizcaya.* En la misma imprenta, 1837. Don Manuel Urioste de la Herrán, de quien se hablará después, era uno de los redactores de aquel periódico. En el opúsculo titulado *Linterna mágica ó sea revista á los partidos políticos de Bilbao* por D. A. D. de M. que se publicó en Madrid en 1841, se hablaba de dicho periódico y de sus redactores. Está escrito el opúsculo en tono satírico contra los principales personajes del partido moderado en Bilbao, aunque sin designarlos por sus nombres.

CAPÍTULO XIII

Se reunieron el 20 de Octubre, bajo la presidencia del Comandante general y Jefe político de Vizcaya Don Miguel de Arechavala, Don Martín de Jáuregui, Don Hermenegildo de Belaunzaran y Don Gregorio de Lezama Leguizamón, comisionados que fueron para el escrutinio general verificado el 4 de las votaciones de Diputados á Cortes de las mesas electorales de San Antonio, Santos Juanes y San Nicolás de Bilbao, y Don José Ramón de Arteaga, Don Francisco Antonio de Gana, Don Ruperto de Calera y Don Andrés de Ereño, comisionados respectivamente en igual concepto de Portugaleta, Abando, Deusto y Begoña, no habiendo concurrido el comisionado de Santiago de Bilbao, Don Pedro de Jane.

Hizo presente Arechavala, que por obstáculos independientes de su voluntad no le había sido posible constituir la Diputación provincial en los términos dispuestos en 16 de Septiembre, y que para que no quedase desamparada la administración, creía conveniente constituir la Diputación con las personas á quienes convocó, que merecieron recientemente una muestra de la confianza de los electores.

Lezama Leguizamón, en nombre de todos los concurren-

tes, trató de excusarse, diciendo que no les competía arrogarse facultades que no se les habían conferido, ni querían perjudicar á los derechos de Vizcaya; pero que en todo caso constase su repugnancia á admitir los nuevos cargos, y que no se entendiese que reconocían como justa y legal la destrucción de las instituciones de Vizcaya. ¹ Arechavala se conformó con que constasen en el acta estas declaraciones, pero no con que no aceptasen sus cargos las personas designadas; constituyendo por consiguiente con ellas la Diputación provincial.

El 14 de Noviembre se reunió la Diputación bajo la presidencia de Lezama Leguizamón, nombrado ya Jefe político de Vizcaya, dándose cuenta de una real orden expedida el 31 de Octubre, por la que resultaba que S. M. había visto con desagrado la conducta del Ayuntamiento respecto á la ejecución de la ley de 16 de Septiembre, y se mandaba que se constituyese la Diputación como entonces se dispuso mientras se procedía á nuevas elecciones. El Presidente declaró disuelta la Diputación provincial interina, en vista de esta real orden.

El 15 se reunieron, bajo la presidencia del Jefe político, los Regidores del Ayuntamiento de Bilbao Don Teodoro López de Calle, Don José de Busturia y Don Canuto de Achútegui, y Don Juan de Urquiano, Don Julián de Unzueta y Don Andrés de Ereño, Regidores respectivamente de Portugalete, Deusto y Begoña. Constituyóse con ellos la

¹ El mismo Lezama Leguizamón, que ahora hacía tan oportunas declaraciones, sea dicho en su elogio, fué uno de los pocos apoderados que en las Juntas generales celebradas en 1820 pretendió que se jurase desde luego la Constitución de 1812; lo cual confirma nuevamente lo dicho sobre que entre los adictos á la causa de la Reina en 1837 se habían ido abandonando por completo las opiniones de los constitucionales de 1820, en cuanto á la conservación de los Fueros.

Diputación, sin perjuicio de que se agregase el Regidor del Ayuntamiento de Bilbao Don Mariano de Gaminde, que se hallaba ausente. El 16 fué nombrado Vicepresidente de la Diputación Don Teodoro López de Calle, y se agregó á ella como Regidor de Abando Don Saturnino de Cantalojas.

El 30 de Diciembre, de conformidad con lo propuesto por la Diputación de Guipúzcoa, acordó la de Vizcaya elevar una exposición á la Reina, pidiendo que las Potencias extranjeras interviniesen eficazmente para pacificar á España, en virtud del tratado de la cuádruple alianza.

El último Corregidor del Señorío Don Antonio de Bárcena, quedó, como Juez de letras, encargado de la administración de justicia.

1838 El 14 de Marzo se juntaron los Regidores Ereño, de Begoña, y Cantalojas, de Abando, con los de Bilbao Don Mariano de Eguía, Don Manuel María de Guendica y Don Tomás José de Epalza, que reemplazaban á Calle, Busturia y Gamindo, á consecuencia de la elección verificada para la renovación parcial del Ayuntamiento de Bilbao.

En la sesión celebrada el 16 consultó el Jefe político en la Diputación lo que debía hacerse respecto de unas órdenes del Comandante general, pidiendo ciertas listas de los hijos de familia de pueblos ocupados por las tropas, que estuviesen en la facción, así como del número de solteros y viudos sin hijos, de diez y siete á cuarenta años de edad, y de los que hubiesen contraído matrimonio desde el 7 de Octubre de 1833, y residiieran en las Anteiglesias de Abando, Deusto y Begoña. Acordó la Diputación, que de palabra ó por escrito se manifestasen al Comandante general los graves inconvenientes que tendría el tratar de reunir tales noticias.

El 22 reemplazó Don Manuel Antonio de Uhagón á Urquiano, como Regidor de Portugalete, á consecuencia de las

últimas elecciones, y el 26 por igual causa Don Juan Bautista de Lozano á Unzueta como Regidor de Deusto.

El 15 de Abril asistieron á la Diputación Don Manuel María de Uhagón y Don Santiago de Gorocica, en representación del Ayuntamiento de Bilbao, y Don Pablo de Epalza y Don Ambrosio de Orbeagozo, en representación de la Junta de comercio, con motivo de haberse recibido la noticia de que se hallaban en Santander el Comandante del resguardo y la ronda de carabineros destinados á la aduana que se proyectaba establecer en Bilbao. Se acordó en su consecuencia, elevar al Ministro de Hacienda una exposición en nombre de las tres corporaciones representadas en la reunión que se celebró, reclamando contra dicha medida, por considerarla injusta, después de los sacrificios hechos por Bilbao, antipolítica porque corraba la puerta á la esperanza de recuperar las instituciones queridas de todos los vizcaínos, ó inoportuna en las circunstancias actuales. Se remitió copia de esta exposición á los Diputados á Córtes por Vizcaya, que eran entonces Don Francisco de Hormaeche y Don Federico Victoria de Lecea.

Se dió cuenta el 19 de un oficio redactado por el Vicepresidente á la sazón de la Diputación Don Mariano de Egüa, contestando á otro del Jefe político, en que se trasladaban tres reales decretos relativos á una quinta de cuarenta mil hombres, en la cual correspondían trescientos setenta y seis á Vizcaya. En el oficio redactado por Egüa se repite lo que con igual motivo expuso la Diputación en 21 de Octubre de 1836, y se asienta: que la quinta sería de poco provecho para el Gobierno, causa de gran descontento para los leales, y pretexto poderoso para sembrar cizaña en manos de los carlistas. «No tardaría su prensa periódica en esparcir la palabra de la cizaña y la discordia, y disparar los tiros de su lógica emponzoñada, como lo practicó con menor ocasión: Aprove-

chándose de la que le ofrecía el decreto de las Cortes de 6 de Septiembre de 1837, por el cual se mandó que cesasen desde luego las Diputaciones forales de las Provincias Vascongadas, lo publicó y comentó en uno de sus Boletines, y apostrofando á continuación al vecindario de esta Villa, le decía: *¡Bilbatinos! Derramad ahora vuestra sangre en defensa de un Gobierno inmoral, que faltando á la fe de los tratados, da en tierra de un sólo golpe con vuestras instituciones, con vuestros Fueros y prerrogativas consagrados por la sanción de los siglos. Empeñaos ahora en defender unos muros, en cuyo recinto os oprime y vilipendia ese Gobierno de maldición. Besad ahora esa cuchilla infame con que hiere vuestro pecho, y ese terrible azote con que aflige á vuestra Patria. Si no habeis querido vivir bajo los dulces auspicios de una libertad bien entendida, sufrid ahora, desgraciados, los efectos de una tiranía insostenible. Sacrificad enhorabuena vuestros bienes, vuestra sangre y la de vuestros hijos en las aras de esa libertad ficticia que os encadena al sangriento carro de la revolución. Ahora es cuando conoceréis á fondo vuestro error, y toda la degradación, toda la torpeza y toda la miseria de vuestras ilusiones. Ahora veréis, con la parte ilusa de San Sebastián, de Pamplona y de Vitoria, la mala fe con que os hablaron vuestras pretendidas Diputaciones, saliendo garantes de la conservación de vuestros Fueros. Veréis que estas corporaciones estúpidas y degeneradas, ó eran cómplices de ese Gobierno maquiavélico, ó eran una masa inerte y un juguete miserable de que se burlaban los reformistas de la Corte. Llegó el día del desengaño, y quedan cumplidos nuestros valicínios.—Así razonaba el Boletín de Oñate cuando todavía no había más sino una medida, que cambiando las autoridades forales únicamente alcanzaba por de pronto á las poquísimas personas que la consti-*

tufan.» Excusado es que se añada lo que ha de decir cuando vea «que los efectos de aquel cambio empezaban á hacerse sentir individualmente en todos los vizcaínos fieles al legítimo trono, que se los comprendía en el sorteo de la quinta, cuyo sólo nombre les horroriza, y que se les imponía este servicio nunca conocido por ellos, el más opuesto á sus arraigados hábitos y costumbres, el más repugnante á sus inmemoriales franquizas y exenciones, con las cuales están identificados por la más firme adherencia.»

El 14 de Mayo se dió cuenta de un oficio de los Diputados á Cortes por Vizcaya, participando el buen resultado de sus gestiones contra el establecimiento proyectado de aduana en Bilbao.

Se hizo cargo la Diputación el 17 de cuanto se decía en la prensa con motivo de haberse dado el grito de «Fueros» en Guipúzcoa; y persuadida á que el medio más eficaz para combatir la insurrección carlista era el devolver y asegurar á este país el goce de sus antiguas libertades; teniendo en cuenta lo que puede la publicidad en los tiempos presentes; acordó remitir á los Diputados á Cortes por Vizcaya copias de las exposiciones que se habfan hecho en defensa de los Fueros, así como de otros documentos relacionados con este asunto, para que se imprimiesen á la mayor brevedad, á costa de la Provincia.¹

Se dió cuenta el 21 de la exposición colectiva de la Diputación, el Ayuntamiento de Bilbao y la Junta de comercio, en la que se pedía que se permitiese, mediante ciertos dere-

¹ Véase una historia sucinta de la empresa malograda, que intentó en Guipúzcoa Don José Antonio Muñagorri, bajo la enseña de PAZ Y FUEROS: en el *Ensayo sobre la naturaleza y trascendencia de la legislación foral de las Provincias Vascongadas*, por Don Julián de Egaña. San Sebastián 1850.

chos, la salida para el territorio ocupado por los carlistas de los artículos inofensivos, pues que el bloqueo de aquel territorio favorecía á los contrabandistas franceses y á los tratables rebeldes, empobreciendo al comercio de Bilbao.

El 18 de Junio se vió una real orden, comunicada el 31 de Mayo, por la que la Reina se daba por enterada de la imposibilidad de llevar á efecto la quinta en Vizcaya.

Acordó la Diputación el 2 de Julio remover los obstáculos que se oponían á la ejecución del bando del General en jefe, dado en Logroño, sobre el levantamiento del bloqueo, con ciertas condiciones, y el 26 se invitó al Ayuntamiento de Bilbao y á la Junta de comercio á reclamar contra la contribución extraordinaria de guerra.

El 31 de Agosto se quejó la Diputación al Comandante accidental de los cazadores de Isabel segunda, de que sin contar con ella que pagaba los gastos de acuartelamiento, utensilios y raciones, se hubiese aumentado aquel cuerpo con cuarenta hombres traídos de Bayona, para los cuales se pedían otras tantas camas, pues la Diputación no estaba en el caso de hacer mayores desembolsos que los que hacía por los cazadores, no obstante sus eminentes servicios. Quejábase también de que el acuartelamiento no daba los resultados que se esperaron, porque la mayor parte de los cazadores dormían en casas particulares, cometiendo desórdenes y excesos.

En sesión á que asistieron dos Regidores del Ayuntamiento de Bilbao y dos vocales de la Junta de comercio, se dió cuenta el 25 de Septiembre de un oficio del Comandante general, en que participaba que el Conde de Luchana le decía desde Villarcayo, que su bando sobre el bloqueo no debe alterar los derechos que están establecidos para la extracción y los demás impuestos destinados á las fortificaciones. La Diputación resolvió enviar comisionados al Cuartel ge-

neral del Conde de Luchana para que tratasen verbalmente de este asunto. Estos comisionados, que eran Don Miguel de Larraza y Don Manuel Urioste de la Herrán, dieron cuenta el 8 de Octubre del resultado de su comisión, reducido á que el Conde de Luchana proponía que se le entregase cierta cantidad mensual, en sustitución de los expresados derechos. Después de haber discutido este punto extensamente, se acordó el 9 entregar cuatro mil duros mensuales.

Tratándose el 10 de la cuota que correspondería á la Diputación en dicha cantidad, varios Diputados, alegando que lo eran en concepto de Regidores del Ayuntamiento de Bilbao, se negaron á discutir este punto, por no perjudicar á los intereses de la Villa, lo cual impidió que se tomase resolución alguna sobre el particular, y dió lugar á que varios Diputados pidieran que se procediese á la elección de la Diputación, y que se preguntase á Guipúzcoa cómo se había resuelto allí este asunto. El 12 se aprobó el oficio redactado por Don Manuel María de Uhagón y Don Pablo de Epalza, en nombre de la Diputación, del Ayuntamiento y de la Junta de comercio, en el que se pedían ciertas facultades sobre la exacción de los derechos que se podían percibir, y que se rebajase á tres mil duros mensuales la cantidad que se entregara. Se dieron el mismo día las gracias al Comandante general por el apoyo que prestaba á las gestiones que se hacían por la Diputación y el Ayuntamiento.

Acordó la Diputación el 25 que no se insistiese en pedir la exención de derechos en los artículos que se sacasen para los pueblos de la ría sometidos á la dominación del Gobierno, sosteniendo varios Diputados que era llegado el caso de proceder á la elección de la Diputación provincial propietaria.

Consta en el acta de la sesión celebrada el 31 que las tres corporaciones se comprometieron á cubrir las resulta s de

contrato de suministros que se les encargó, satisfaciendo el Ayuntamiento la cuarta parte de su importe, y lo restante la Diputación y la Junta de comercio por iguales partes; pero el 3 de Noviembre, en vista de un oficio del Conde de Luchana, en el que entre otras cosas decía, que no le era posible autorizar la extracción de lienzo que no fuesen finos, la Diputación, teniendo además en cuenta que los carlistas trataban de impedir la salida de géneros de la plaza de Bilbao, decidió que no podía llevar á efecto la contrata de suministros.

El 21 de Diciembre se presentaron por Don Manuel María de Uhagón las minutas de las exposiciones que dirigian las tres corporaciones reunidas al Lord Mayor de Londres y á Lord John Hay. En el primero de estos documentos, que firman los miembros de dichas corporaciones residentes en Bilbao, se felicita al Lord Mayor por haber pedido al Gobierno de S. M. B., juntamente con la mayor parte de los Aldermen de Londres, y de muchos de sus más respetables habitantes, que se pudiese término á la guerra civil de España, de acuerdo con los aliados de Inglaterra; en el segundo documento, que firmaron los Presidentes y Secretarios de las corporaciones, se suplicaba á Lord John Hay, «constante protector del país vascongado», que trasmitiese al Lord Mayor de Londres la exposición que se le dirigía, apoyándola con todas sus fuerzas.

Por acuerdo de la Diputación de 31 de Diciembre se abonaron á Don Federico Victoria de Lecea los réditos de una imposición sobre la caja del Señorío, haciendo una excepción en su favor, en consideración á los gastos que le ocasionaba su cargo de Diputado á Cortes.

1839 El primero de Enero entraron á formar parte de la Diputación, como Regidores de Bilbao, Don Manuel María de Uhagón y Don Sebastián de Arteta.

Se reunieron el 2 las tres corporaciones con motivo de un pedido extraordinario de raciones que hacía la Intendencia militar. Se dió cuenta de que Don Manuel María de Uhagón y Don Tomás de Epalza habían tratado de este punto con el Comandante general, el cual aunque reconoció el estado angustioso en que se hallaban las corporaciones, les dijo que todas sus reclamaciones para obtener recursos habían sido infructuosas, y que el estado de la guarnición de Bilbao era tan crítico que tuvo que decir al Gobierno que se vería en la necesidad de abandonar la plaza con los ciento treinta cañones de sus fuertes. En sesión extraordinaria que celebraron el mismo día los tres corporaciones, se resolvió continuar prestando los suministros y que se diese al contratista de víveres Don Romualdo Arellano la garantía de dichas corporaciones. El 4 se aprobaron las exposiciones, redactadas por Don Manuel María de Uhagón, que se dirigieron al Gobierno y al General en jefe, pintando enérgicamente la angustia y miseria en que se veía Bilbao, cuyos heroicos servicios eran tan mal correspondidos, y pidiendo que no se le agobiase con las cargas intolerables que se le imponían. También se aprobó otra exposición, redactada por el mismo Uhagón, y dirigida al General en jefe, para que se suprimiesen ó redujesen los impuestos que se exigían á los artículos mercantiles á su salida de Bilbao.

Se acordó el 24 contratar con Don Romualdo de Arellano el suministro de víveres á la tropa.

No dando resultado las gestiones que se hicieron para encontrar dinero á préstamo, y no siendo admisible la única propuesta presentada al efecto por Don José Antonio de Ibarra, tuvo la Diputación que entenderse el 4 de Febrero con los almacenistas de tabaco para que le adelantasen de seis á siete mil duros, á cambio de una rebaja de derechos.

Las tres corporaciones dirigieron el 16 otra exposición al

General en jefe, en la que después de exponer las razones que justificaba su pretensión, pedían «que se suministrase puntual y completamente á esta división por medio de contrata, ó de otro modo que se crea conveniente, libertando á estas corporaciones de los apuros en que hasta ahora se han encontrado; que se supriman los derechos á la extracción de géneros al país rebelde, y se levanten las trabas que obstruyen totalmente el comercio de esta Villa.»

En sesión extraordinaria celebrada el 26 se dió cuenta de un oficio pasado al Jefe político por la Hacienda militar, en que se pedía que se encargase la Diputación del suministro de víveres á la división, desde el 28 en que terminaba la contrata con Arollano. Se acordó decir al Jefe político que no había términos hábiles para prestar el servicio pedido, y que harto había costado á la Diputación el atender á los anteriores.

El 6 de Abril se constituyó la Diputación provincial, elegida por sufragio, compuesta de Don José Pantaleón de Aguirre, Don José Silvestre de Artaza, Don Martín de Jáuregui, Don Clemente de Iturriaga, Don Bonifacio de Vildósola, Don Casimiro de Ariz y Don Manuel Urioste de la Herrán. Prestaron el juramento prescrito por el real decreto de 15 de Junio de 1837, aunque añadiendo que se entendiese, «sin perjuicio de las reclamaciones que por el país leal se tienen hechas sobre su legislación particular.» Fue nombrado Vicepresidente Don José Pantaleón de Aguirre. El 8 se encargó á Urioste y Ariz de las reclamaciones pendientes para que cesase el impuesto de extracción que cobraba la autoridad militar, y al mismo Urioste en particular de la correspondencia extraoficial de la Diputación.

Se elevó á la Reina, con fecha del 18 una exposición, redactada por Urioste, en la que se pedía que corriesen de cuenta del Estado todos los gastos del cuerpo de cazadores

salvaguardias, pues mientras que el cuerpo de chapelgorris, creado por la Diputación de Guipúzcoa, cesó de estar á su cargo en Octubre de 1835, el cuerpo de cazadores de Vizcaya no estaba sostenido por el Estado sino en virtud de la real orden de 7 de Junio de 1836, obtenida después de repetidas reclamaciones, pero obligando á la Diputación á costear las raciones, alojamiento y utensilios. La Diputación sostenía que esto era injusto ó intolerable, y solicitaba que los cazadores fuesen declarados cuerpo franco. Resulta de esta exposición que su número se redujo á doscientos, y que se aumentaron cien, sin conocimiento previo de la Diputación, con los procedentes del extinguido cuerpo que con Muñagorri enarboló la bandera de los Fueros. El 22 se autorizó á Hormaeche para ofrecer un servicio pecuniario si se despachaba favorablemente esta solicitud.

El 31 de Mayo se aprobó el presupuesto que debía regir desde primero de Julio. Se calculaban los ingresos en un millón ciento cuarenta y siete mil doscientos reales y los gastos en dos millones novecientos ochenta y cuatro, mil trescientos cuarenta y cinco, pero sólo se cubrían las atenciones urgentes, aplazándose el pago de las demás como censos y deudas en diversos conceptos.

El 9 de Junio se firmó por las tres corporaciones una exposición felicitando al Rey de los franceses por haber dispuesto que su escuadra vigilase la costa de España contra los carlistas.

El 30 de Julio se dirigió la Diputación á la Reina, quejándose de que el Comandante general hubiese mandado dar de palos á dos paisanos sin causa justificada, y otra exposición de acuerdo con el Ayuntamiento de Bilbao y la Junta de comercio, al General en jefe, pidiendo que quedase sin efecto el bando que dió en Amurrio el 9 por el que prohibía extraer de Bilbao artículos de comercio.

El 9 de Agosto se dieron las instrucciones siguientes á los nuevos Diputados á Córtes Don Manuel María de Murga y Don Pedro Pascual de Uhagón.—Primera. Activar por todos los medios posibles la resolución á la instancia elevada á la Reina en 18 de Abril último, pidiendo que se exonere á la Diputación de la carga de raciones, hospitalidades y utensilios del cuerpo franco de Vizcaya, esforzándose para que dicha resolución sea tan favorable como es justa la solicitud; reproduciéndose para este efecto la instancia expresada por mano de dichos Diputados. Segunda. Hacer que cese el estado de sitio con respecto á esta Villa y demás pueblos que habitual y constantemente se mantienen sumisos al Gobierno legítimo de la Reina, porque en ellos no produce hoy esta situación excepcional otro resultado que el de oprimir bajo el peso de la más insoportable arbitrariedad á sus más leales habitantes y á sus autoridades y corporaciones civiles. Tercera. Hacer que cese asimismo la perjudicial acumulación de mandos que reúnen el Comandante general y el Juez de primera instancia de este partido. Cuarta. Promover el puntual y exacto cumplimiento de las resoluciones urgentes sobre indemnizaciones generales, haciendo que los bienes secuestrados á los desleales en virtud de ellas, sean administrados y sus valores aplicados por quien y en el modo y forma que por las mismas está determinado, sin distraerlos á atenciones ajenas del destino á que se hallan consignados. Quinta. Hacer cesar también los derechos que por la autoridad militar se exigen á la extracción de los géneros mercantiles de esta plaza. Sexta. Que se adopten medidas eficaces para proveer á la subsistencia de las familias que se hallan emigradas en los pueblos guarnecidos, así como de los individuos que de las filas enemigas se presentan á indulto, de los cuales no pocos han vuelto á ellas por falta de recursos para vivir.

Se acordó el 10 dar en especie las raciones del cuerpo de cazadores, con arreglo á la obligación impuesta á la Diputación por real orden de 7 de Junio de 1837, y no en dinero como pretendía el Comandante general y ¹ el 24, después de haber dado varios pasos infructuosamente con el asentista de la sexta división Don Romualdo de Arellano, para atender al pedido extraordinario de raciones, pienso y carretas, que hacía el Intendente general militar desde Durango, resolvió la Diputación contestar que le era de todo punto imposible servir por sí este pedido. El 25 se acordó proporcionar al Intendente de seiscientos á setecientos carros, así como cubrir las cortaduras que había en los caminos de Durango y Orduña. Se comisionó á Don Manuel Urioste para que fuese á ponerse de acuerdo con el Duque de la Victoria sobre las medidas que deberían tomarse para el mejor servicio público, en vista del sesgo favorable que tomaba la pacificación del país.

En sesión extraordinaria celebrada el 28 hizo constar la Diputación que había visto no sin admiración los extraordinarios acontecimientos que de pocos días á esta parte han tenido lugar en estas Provincias, la rapidez con que nuestras tropas han penetrado en ellas, sin resistencia alguna de la facción que tan tenazmente solía defender hasta ahora las fuertes posiciones en que se hallaba atrincherada, la retirada de los carlistas á Guipúzcoa á la vista de las tropas sin disparar un tiro, los repetidos parlamentos en Durango, y la larga entrevista celebrada en Abandiano entre el cau-

¹ El 15 de Agosto prevenia Urioste á Hormaeche, comisionado del Señorío, que no girara contra él algunas cantidades que había cobrado, «para no tener demasiado dinero en Bilbao, no sea que tome pié de esta circunstancia el Comandante general para justificar su empeño de que el cuerpo de cazadores se aumente hasta quinientos veinte hombres, á expensas de la Diputación.»

dillo del pretendiente y el General en jefe; sucesos todos tan inesperados como asombrosos, que justifican la idea consoladora de paz que hace días se va generalizando. Pero habiendo llegado á entender la Diputación, en medio del secreto con que se procede en estas negociaciones, que una de las cuestiones que se ventilan en ellas, quizás la vital, es la de los Fueros de estas Provincias, cuya conservación es indispensable no sólo para que se haga la paz, sino para que sea sólida y duradera; acordó elevar inmediatamente al Congreso nacional una exposición, que redactó Urioste, la cual se entregaría por los Diputados á Córtes Uhagón y Murga, enviando copia de ella á las Diputaciones de Alava y Guipúzcoa para que apoyasen las razones de la de Vizcaya.

Se dice en esta exposición, que la Diputación tiene motivos fundados para creer que en las conferencias celebradas por el General en jefe del ejército del Norte con los caudillos enemigos no se ha llegado al arreglo que el país entero esperaba con ansiedad, por no hallarse el General en jefe autorizado á estipular la conservación de los Fueros de la Provincia Vascongada; y como esto es incumbencia exclusiva de los representantes de la Nación, la Diputación, movida por sus deseos de coooperar con sus débiles esfuerzos á tan grande obra, se dirige al Congreso, exponiéndole, como conocedora de las necesidades y sentimientos de estos pueblos, que consideraba indispensable la conservación de los Fueros para que la paz sea duradera, y desaparezca el temor de que se renueve la guerra en que se halla envuelta toda España.

La Diputación no discutirá el derecho que puedan tener las Provincias para reclamar sus Fueros, porque no le es permitido hacerlo, como corporación constitucional; presentará solamente al Congreso las razones de necesidad y conveniencia pública que aconsejan acceder á las reclama-

ciones de estas Provincias. No fué origen de la guerra civil el deseo de defender los Fueros; eran pocos los que por previsión ó instinto conocieron que llegaría el momento en que fuesen atacados los Fueros; pero á medida que la guerra se hizo más encarnizada, y que la marcha imperiosa de los acontecimientos cambió completamente en España el sistema de gobierno, ese deseo se extendió por todas las clases, y cundió entre aquellos mismos que defienden el trono de Doña Isabel segunda. Así lo comprueban las diferentes exposiciones que se hicieron al Gobierno, y la que el vecindario de Bilbao dirigió al Congreso en 10 de Junio de 1837, en la cual fundándose en sus derechos, y en el solemne ofrecimiento del General en jefe desde su cuartel general de Hernani en 19 de Mayo del mismo año, no pedía otra recompensa por premio de sus sacrificios y de su lealtad. Estas ideas han sido un poderoso auxiliar para la causa de la Reina, porque los vascongados empezaron á pensar que era locura sacrificarse en defensa de su Príncipe, que tenía pocos títulos que alegar á su amor, pasando del entusiasmo á la indiferencia, y no tardaron en separar su propia causa de la del pretendiente, como lo comprueban los recientes acontecimientos de Elorrio y Elgueta.—Hoy sólo piden sus Fueros para reconocer al Gobierno de Isabel segunda; y el convencimiento de la necesidad de esta concesión ha tomado mucho vigor en pocos días entre los vecinos de la invicta Bilbao que con tanto heroismo han defendido á ese mismo Gobierno. ¿Será prudente destruir la esperanza que tiene el mismo partido rebelde de terminar la guerra, por medio de un arreglo en el que se conserven los Fueros, exponiéndose á que la guerra tome entonces un carácter de nacionalidad que hasta ahora no ha tenido, reanimando con nuevo entusiasmo el carácter tenaz y belicoso de los habitantes de estas montañas? Las Córtes tienen en sus manos la paz ó la guerra;

por eso la Diputación que debe conocer mejor que nadie la índole de estos naturales, y el vivo amor que todos indistintamente profesan á las leyes que heredaron de sus mayores, suplica al Congreso que apresure con una medida franca y generosa la pacificación de las Provincias Vascongadas, penetrada, como está, de que la concesión de los Fueros es una medida indispensable para asegurar la pacificación.

El Ayuntamiento de Bilbao publicó por bando el 30 un oficio del General jefe de Estado mayor del ejército del Norte, fechado en Oñate, que trasladaba el Comandante general de Vizcaya desde Durango, en el que se prevenía á esta autoridad que cesase toda hostilidad contra las fuerzas enemigas, por haber convenido ya con el que las manda en los medios de pacificar las Provincias de Vizcaya y Guipúzcoa, y que emplease todos sus esfuerzos en inculcar á los habitantes los beneficios de la paz y de la unión entre todos los españoles, acompañando á estas manifestaciones los efectos de la más severa disciplina. «El Ayuntamiento de Bilbao», se añadía en el bando, «lleno de júbilo, se apresura á publicar tan fausta nueva al benemérito vecindario que tiene el honor de administrar. La consoladora paz vuelve á cerrar las heridas que abrió una guerra funesta entre hermanos que siempre debieron amarse. Gracias sean dadas á la Providencia que se apiadó de nosotros, y corramos al templo á reconocer los favores del Rey de los Reyes. A las cinco de esta tarde se cantará un solemne Te Deum en acción de gracias al Todopoderoso en la insigne basílica de Santiago, con asistencia de todas las corporaciones civiles, eclesiásticas y militares.—El Ayuntamiento, con tan plausible motivo, iluminará las casas consistoriales, y espera que el vecindario imitará su ejemplo, colgando también sus balcones desde la publicación de este bando. ¡Bilbaínos!

Vuestro Ayuntamiento no quiere encargar el orden, porque vosotros habeis sabido guardarlo siempre. No os pedirá alegría, porque vuestros corazones rebosan de gozo. Acordaos que todos somos hermanos; abrazaos y victoread la paz, la paz querida, único deseo de los buenos y fuente de prosperidad de las naciones».

Tomando en consideración la Diputación que su Presidente el Jefe político Don Gregorio de Lezama Leguizamón había prestado muchos servicios al país, librándole de gabelas, hasta el punto de no obedecer algunas órdenes del Gobierno y reclamar contra ellas, sin embargo de que con el producto de impuestos que no quiso establecer hubiese podido cobrar su sueldo, que de otra manera no le pagaba el Gobierno, y que Lezama además por tener embargados sus bienes no podía mantener su autoridad con el decoro correspondiente; acordó el 31 entregarle desde luego treinta mil reales, á calidad de devolución en el caso de que cobrase del Gobierno lo que le debía.

El primero de Septiembre por la noche recibió la Diputación un oficio del Comandante general, en el que le participaba desde Durango que el General en jefe le había hecho saber, que conviene muchísimo que se traslade la Diputación á aquella Villa, cuya posición central le permitirá estar más en contacto con los habitantes de la Provincia, y habituarlos á una administración bienhechora; por lo que espera que esta corporación, dando el valor debido á los deseos del Duque de la Victoria, se trasladará mañana á Durango.

En vista de dicho oficio, y enterada además de una carta confidencial que el mismo Comandante general dirige al Jefe político diciéndole, *que es del mayor interés se venga aquí toda la Diputación para asegurar en cuanto sea posible con las circunstancias nuestros Fueros, y que interesa*

infinitamente este paso, que será nuestro iris de pax; la Diputación, siempre dispuesta á no perdonar esfuerzo alguno para cooperar al bien público, resolvió salir el día siguiente para Durango, como se le encargaba.

Arechavala, después de dar cuenta el 3 á la Diputación, reunida en Durango, del convenio celebrado en Vergara, expuso que el mejor medio para consolidar la pacificación sería el establecimiento del régimen foral; y la Diputación, abundando en el mismo sentimiento, como lo acreditaba la exposición que con este sentido había elevado á las Cortes, propuso á su vez que no hallándose en el país más que una ó dos de las personas que compusieron la Diputación general elegida en 1833, ¹ convocase la autoridad militar Juntas generales en Durango, ó en el punto que mejor le pareciere, pues tenía facultades omnímodas para ello. Se acordó al

¹ Resultó más adelante, á pesar de lo que aquí se asienta, que la Diputación provincial tenía empeño en convocar las Juntas generales, fundándose en que la antigua Diputación foral fué suprimida por una ley, y que la de 25 de Octubre de este año no podía tener efecto retroactivo para anular el causado por aquélla. Así escribió Urioste al Diputado provincial de Guipúzcoa Don Joaquín Calvetón en 8 de Noviembre siguiente: este mismo pensamiento se dejaba traslucir ya en la alocución dirigida el 10 de Septiembre, que se inserta más adelante, pues bien claro se ve en ella que la Diputación esperaba que la reemplazasen los «que sean honrados con los votos y la confianza de todo el país», y no los que merecieron esta distinción en 1833. De todos modos, parece indudable que la Diputación provincial se propuso desde el primer día resignar sus facultades en las Juntas generales, directamente, ó intervenir, por lo tanto, en las gestiones que tenían que hacerse para el restablecimiento de los Fueros. En la carta citada confiesa Urioste que «no falta aquí quien diga que deberíamos haber repuesto ya la Diputación foral», y la verdad es que el argumento presentado por Urioste respecto del valor de la ley de 16 de Septiembre de 1837 no parece concluyente, pues que más bien debía entenderse derogada aquélla por completo por la de 25 de Octubre de 1839.

fin aguardar para resolver esto punto á que regresase el Comandante general de Elorrio para donde iba á salir.

Aquel mismo día, á las cuatro de la tarde, pasó la Diputación con el Jefe político al alojamiento de Arechavala, que había regresado de Elorrio; y después de haberse leído el acta de la sesión precedente y la exposición dirigida por la misma Diputación al Congreso el 29 de Agosto, dijo el Comandante general que el objeto que se propuso al hacer que se trasladase la Diputación con tanta premura á Durango, y al indicar la conveniencia de restablecer el régimen foral, era el de que fuese llamada inmediatamente la corporación análoga á dicho régimen, la cual debía inspirar naturalmente mayor confianza á los pueblos y más principalmente á los ocho batallones vizcaínos que se hallaban en Elorrio, y que á pesar del convenio se resistían con bastante obstinación á deponer las armas, lo cual paralizaba hasta cierto punto las operaciones del ejército, que no podía continuarlas, dejando á sus espaldas tales cuerpos armados. La Diputación se apresuró entonces á manifestar al Comandante general, que si S. E. consideraba que la existencia de esta corporación era un obstáculo para el completo logro de la pacificación, se hallaba dispuesta con la mejor voluntad á dejar su puesto á la corporación que se restablecería en su reemplazo; pero el Comandante general repuso que las circunstancias habían variado ya, por haberse arreglado con los Jefes carlistas en el modo de que se prestasen los batallones á deponer las armas, y haberse adherido también al convenio el resto de los guipuzcoños; y que de consiguiente no era ya tan necesaria la mudanza de la Diputación, ó al menos tan urgente que no diese lugar á que se esperase la resolución de las Cortes sobre la cuestión foral. La Diputación hizo presente en su consecuencia, que careciendo de objeto su

permanencia en Durango, pensaba regresar sin demora á Bilbao, adonde otros asuntos graves la llamaban; más habiéndose propuesto que sería conveniente enviar antes á Vergara una comisión que sometiese al Duque de la Victoria franca y lealmente las verdaderas necesidades y deseos del país, se resolvió así con aprobación del Comandante general, y fueron nombrados para el desempeño de esta comisión Don José Pantaleón de Aguirre y Don Manuel Urioste.

De regreso ya la Diputación en Bilbao, Aguirre y Urioste dieron cuenta el 6 de su conferencia con el Duque de la Victoria, en la que se esforzaron por hacerle conocer las verdaderas necesidades y deseos del país, tanto en lo tocante á los Fueros, como en orden á la cesación de los impuestos que se exigen á la salida de géneros de Bilbao, secuestros de bienes por causas políticas y otros puntos de común interés. Se trató del pedido de quinientas mil raciones de boca y quince mil de pienso, hecho por el Intendente del ejército del Norte en 30 de Agosto último; y la Diputación, cediendo al imperio de las circunstancias, aunque bien penetrada del mal efecto que tan pesada carga impuesta á unos pueblos agobiados y exhaustos produciría necesariamente, acordó que se hiciese desde luego el reparto del pedido entre los pueblos, tomando por base la estadística de 1823, adoptada por la Diputación general en su circular de 15 de Enero de 1834.

El Diputado provincial de Alava Don León de Samaniego vino desde Durango á Bilbao con la Diputación de Vizcaya, portador de una carta de la corporación á que pertenecía, escrita con el objeto de que conferenciaran los representantes de las tres Provincias Vascongadas para tratar de los pasos que debían darse á fin de lograr la confirmación de los Fueros. Se aseguraba en la carta, que el

Duque de la Victoria, á no ser por su respeto á las formas constitucionales, hubiera estipulado solemnemente en Vergara la conservación de los Fueros. La Diputación, abundando en las mismas ideas, acordó escribir á Guipúzcoa que enviase un representante á Bilbao, como proponía Alava.

Se publicó el 10 la alocución siguiente:

«VIZCAÍÑOS. — Ha concluído la lucha que durante seis años diezmo vuestra juventud, introdujo el sobresalto en vuestras familias y destruyó vuestros hogares. Habeis sido los primeros en poner á ella un término que se presentaba aun tan lejano. De este modo habéis dado al mundo un ejemplo de sensatez y de patriotismo que la historia perpetuará. Reconocido vuestro error, no habéis titubeado un momento; habéis abandonado al hombre ambicioso que os imponía la necesidad de derramar la sangre de vuestros hermanos, y reunidos á ellos bajo la bandera de Isabel segunda, habéis depuesto vuestras armas, y fiado así vuestra suerte y la suerte del país á la palabra del Duque de la Victoria, á la prudencia del Gobierno y á la generosidad de una gran Nación. Esta noble confianza, unida al mérito contraído por los que entre vosotros permanecieron siempre fieles á aquella bandera, recibirá su recompensa. El General en jefe ha cumplido el convenio que hizo con vuestros Generales; el Gobierno lo aprueba, y ofrece apoyar con toda su influencia la conservación de vuestros antiguos Fueros; y las Cortes, al contemplar vuestra abnegación y vuestro desprendimiento, y al considerar cuanta sangre y cuantos sacrificios vuestra conducta ha ahorrado á la España, no podrán menos de aprobar aquellas miras, y de ratificar unas instituciones reclamadas por la esterilidad de vuestro suelo, y por la necesidad de curar los males profundos que la guerra civil nos ha causado.

» VIZCAÍÑOS. Esperad tranquilos su resolución. Borrada

vuestra memoria hasta el último recuerdo de nuestras pasadas discordias. Que la unión más sincera reine en todas partes, como os lo recomiendan en sus proclamas el General en jefe y el Comandante general de este Señorío. Así probaréis, que aunque una extraña complicación de circunstancias haya hecho aparecer á muchos de vosotros como defensores del despotismo, teneis sin embargo todas las virtudes que deben adornar á un pueblo libre.

»Vuestra Diputación entretanto, solicita por disminuir vuestros males y asegurar vuestra felicidad, dedica incesantemente sus desvelos á remediar el desorden inevitable en tan rápida transición, y á dar á la administración la regularidad indispensable para que el servicio público lleve una marcha justa y uniforme. Fíad también en su celo, vizcaínos. Fíad en el puro patriotismo que anima á todos sus individuos, y que les hace desear el día en que puedan ceder sus puestos y su autoridad á aquellos que sean honrados con los votos y la confianza de todo el país.»

El 15 de Septiembre escribía Urioste, encargado de mantener la correspondencia oficial de la Diputación provincial (para lo que aparte de su inteligencia le recomendaba ciertamente su extraordinaria actividad) á los Diputados á Cortes Murga y Uhagón, que la Diputación había consultado las cuestiones que aquéllos presentaban en sus comunicaciones, con las personas más versadas en los asuntos del país, y en particular con Don Casimiro de Loizaga, á quien sus dolencias no permitían salir de Bilbao.

El estado de Vizcaya, dice Urioste, no es tan satisfactorio como puede creerse, juzgando las cosas superficialmente. El convenio estipulado en Vergara no es bastante explícito en cuanto á los Fueros; de aquí la repugnancia manifestada por los vizcaínos para deponer las armas, aunque las depusieron al cabo, siguiendo el ejemplo dado por

la división guipuzcoana, y por el prestigio que parece tener la palabra del Duque de la Victoria. El profundo amor que los vizcaínos tienen á sus Fueros explica la zozobra que aquí reina, y el temor de perderlos «hace asegurar á todos sin rebozo que por defenderlos volverían á emprender la guerra, aunque no tuviesen más armas que sus instrumentos de labor». Hay, pues, que calmar con medidas eficaces la efervescencia que reina en los pueblos, para impedir que se explote por los que estén interesados en ello.

No basta que se trate á los habitantes con dulzura y que se ponga término á las exacciones y atropellamientos de algunos Jefes militares, sino que se debe levantar ya generosamente el estado de sitio, y restablecer cuanto antes las instituciones forales.

La Diputación cree que los Diputados á Cortes están en el caso de dirigir todos sus esfuerzos á que se proponga á las Cortes de un modo claro la conservación de los Fueros, «con la reserva de hacer en ellos las modificaciones que la Constitución nacional haga necesarias, y á cuyo arreglo, que se podría confiar á comisionados especiales del país y de las mismas Cortes, se podría también fijar un término que permitiese presentar un proyecto bien meditado», para evitar que discutiéndose al mismo tiempo la conservación y las modificaciones, se excitasen las pasiones, y desapareciese la tendencia favorable que se nota en las Cortes. Conviene que se logre que el país se reúna en Juntas, y nombre sus autoridades forales para que desaparezca la inquietud completamente, y puedan ir las tropas á terminar la guerra civil en Aragón y Cataluña. En esas Juntas nombrará el país sus comisionados especiales, porque ni los Diputados á Cortes ni la Diputación provincial representan más que á una pequeña parte de los habitantes del Señorío.

Si no se puede evitar que se discutan á un tiempo la

conservación de los Fueros y sus modificaciones, la Diputación lo participará á los comisionados de las tres Provincias Vascongadas para que secunden los esfuerzos de los Diputados á Cortes, cumpliendo como buenos patricios; y la Diputación espera que desaparezcan entonces las disensiones que se han suscitado entre los Diputados á Cortes de las mismas Provincias y los de Navarra, conociendo estos últimos que su interés les aconsejaba la unión, y «que en las modificaciones que hayan de hacerse en sus instituciones, se debe dejar la iniciativa al Gobierno, que demasiado exigente se mostrará en ellas, sin necesidad de que se apoyen sus miras».

La Diputación aprueba que los Diputados reservasen la exposición que dirigió á las Cortes antes del convenio sobre la necesidad de conservar los Fueros, porque puede herir el amor propio nacional, y si lo creen así los Diputados, la Diputación la rectificaría, dándole «otro giro más conciliador ó más suplicante».

La Diputación acoge con placer la esperanza de los Diputados de que la mayoría de las Cortes será favorable á los Fueros; para infundir esa esperanza al país, la Diputación le ha dirigido una proclama, «documento descolorido, como era natural en esta época de incertidumbre, en que ni se puede ofrecer demasiado ni negar todo, pero que podrá ser un calmante de algunos, aunque quizá no satisfaga á las exigencias de ningún partido». ¹

¹ Las cartas de Urioste no se escribieron ciertamente con la previsión de que viesen la luz algún día; esta circunstancia explica la crudeza de algunas especies que se advertirán en ellas; pero en lo que no se ha escrito para ser publicado es donde cabalmente se encuentran muchas veces los materiales más valiosos para escribir con entera verdad la historia, se sorprende el pensamiento íntimo de las personas que manejaron los asuntos, sin circunloquios ni precauciones oratorias, y se explican los sucesos con más fidelidad que en los documentos solemnes destinados al público.



CAPÍTULO XIV

Por circular de 18 de Septiembre previno la Diputación á los pueblos, que hiciesen cesar inmediatamente el secuestro de los bienes que por orden del Gobierno usurpador del pretendiente se impusieron en castigo de su lealtad á los que se mantuvieron fieles al Gobierno legítimo de la Reina.

Se reunieron el 19 en conferencia en Bilbao Don Joaquín Calvetón, Don León de Samaniego y Don Manuel Urioste en representación respectivamente de Guipúzcoa, Alava y Vizcaya, y abundando en las ideas de olvidar toda clase de resentimientos y extirpar la semilla de la discordia, conservando las instituciones forales según lo estipulado en Vergara, convinieron en renovar la antigua y fraternal alianza de las tres Provincias para lograr tan felices resultados, por la que las Diputaciones se comprometen á marchar unidas por este camino, dirigiéndose al efecto á sus respectivos Senadores y Diputados, enlazando sus relaciones con las personas influyentes para que de este modo la combinación de esfuerzos sea más poderosa y decisiva.

La conferencia espera que el proyecto sobre los Fueros presentado por el Gobierno á las Cortes, será aprobado en

los términos en que se presenta ó en otros equivalentes; pero si circunstancias imprevistas hiciesen variar las cosas, urge que las Diputaciones hermanas representen al Ministerio que el camino más expedito para regularizar la administración es que se reúnan desde luego las Juntas generales, con arreglo á las ordenanzas y costumbres de cada Provincia, para que se nombren las Diputaciones y demás autoridades locales. La reunión de las Juntas y el nombramiento de Diputaciones y autoridades no se opone al tratado de 31 de Agosto, ni al respeto que se merecen las Cortes, donde se halla pendiente este asunto, sino que al contrario servirá para ilustrarlo, y hacer que se estrechen los vínculos del país con el Gobierno, y manifieste aquél su gratitud y la confianza que debe tener en la justicia, generosidad y demás virtudes políticas de las Cortes; y cuando llegue el caso de tratar de las modificaciones forales, cada Provincia dispondrá sus trabajos y nombrará sus comisionados, para que procedan de común acuerdo, respecto de lo que conviene conservar de nuestras instituciones, y de lo que puede cederse en obsequio de los intereses generales de la Monarquía.

La conferencia dispuso extender los artículos siguientes, como resumen de su pensamiento, para que constasen con la debida claridad. 1.º Las Diputaciones de las tres Provincias hermanas se comprometen á marchar unidas hasta que se fije el estado político de éstas de una manera estable y satisfactoria. 2.º Las Diputaciones dirigirán un mensaje de gratitud á las Cortes, si se resuelve favorablemente el proyecto de ley sobre Fueros, manifestando «la docilidad con que se prestarán respetuosas á que se modifiquen los que se crean incompatibles con la Constitución del Estado.» 3.º Sino procede dirigir pronto el expresado mensaje por circunstancias imprevistas, urge que las Diputaciones manifiesten su gratitud al Ministerio por haber presentado dicho pro-

yecto, y pidan la inmediata convocación de las Juntas generales. 4.º Se enviará una copia del acta de esta conferencia al Reino de Navarra, por medio de la Diputación de Guipúzcoa, esperando que una sus esfuerzos á los de las Provincias hermanas, según lo ha hecho en otras ocasiones, para defender los derechos de la causa común. 5.º Se felicitará hoy mismo al Duque de la Victoria, á nombre de las tres Provincias hermanas, manifestándole su gratitud y suplicándole que continúe prestando su apoyo á las pretensiones de este país, y se le propondrá que se levante en los campos de Vergara un monumento que perpetúe las glorias de S. E., la reconciliación de los vascongados, y la nueva era de paz y ventura que debe venir á la Patria. 6.º Se le suplicará también que, si está en sus manos, levante el estado de sitio, al menos en Vizcaya y Guipúzcoa, y que contribuya en otro caso, con sus eficaces informes, á que lo mande levantar el Gobierno, atendida la seguridad que hoy se disfruta. 7.º Que tan luego como las Cortes resuelvan acerca de la modificación de los Fueros, se pongan de acuerdo los comisionados de las Provincias hermanas para uniformar sus pretensiones, á fin de que se fije lo más pronto posible el estado político del país, porque las circunstancias del día son favorables para sacar partido, y si por el contrario se dejase pasar el tiempo, y hubiese un cambio de Ministerio, «serían mayores los obstáculos que se presentasen y mayores las exigencias que se harían en contra del país vascongado». 8.º Que aunque las Diputaciones provinciales carecen de facultades para proponer ó adoptar modificaciones á los Fueros, cree la conferencia que deben fijarse las bases á que deberán sujetarse, en el caso de que las circunstancias las obliguen á entender en tales modificaciones. Podrán ser estas bases: que se conforme el país con el resto de la Nación en el sistema judicial; que suprimido así

en Vizcaya y Guipúzcoa el cargo de Corregidor, queden confiadas sus atribuciones políticas y administrativas á la respectiva Diputación, según la Constitución alavesa; que con objeto de hacer desaparecer la prevención hostil que en las demás Provincias del Reino excita contra éstas la exención del servicio militar, se convenga con el Gobierno en que le designe en cada quinta su cupo redimible con dinero ó con hombres presentados por ellas; que reconocida la necesidad de que las Provincias Vascongadas contribuyan también al sostenimiento del Estado, se fije mancomunadamente en los términos más ventajosos posibles, un encabezamiento invariable á lo menos por veinte ó treinta años, por equivalente de todas las contribuciones directas é indirectas, el cual se ha de distribuir entre ellas por las mismas Provincias; que apareciendo de este modo que lejos de ser gravosas á las restantes del Reino, contribuyen como todas las demás, sin la rebaja de los gastos de administración, se solicite la libertad de comercio con las colonias como la tienen los demás puntos de España y aun del extranjero y que no se recargue á los productos de nuestra industria más que á los de la industria española; que no se haga mención en la presente circunstancia del establecimiento de aduanas, ni de otras medidas fiscales que siempre han excitado grande antipatía en el país.

9.º Que se saquen copias triplicadas de esta acta para transmitir las á las respectivas Diputaciones, á fin de que presten el debido apoyo á lo acordado, y que convendría que los infrascritos comisionados mantengan correspondencia activa para comunicarse recíprocamente sus noticias y adelantamientos, á calidad de obrar en todo de acuerdo con las Diputaciones respectivas. ¹

¹ En esta conferencia se llevó la previsión más lejos de lo que era prudente. En ningún caso podía admitirse el supuesto de que la Diputación

De esta conferencia dió cuenta Urioste el 21 á sus colegas. Enterada la Diputación el mismo día, así por comunicaciones oficiales como por cartas particulares, del estado en que se hallaba la cuestión de los Fueros de las Provincias Vascongadas; y considerando que en esta ocasión crítica no debería omitirse ningún esfuerzo, ni se debería reparar en sacrificios y gastos, si eran necesarios, á trueque de asegurar al país sus especiales instituciones, cuya conservación es el deseo dominante de sus naturales; creyó conveniente autorizar con la mayor amplitud á los Diputados á Cortes por Vizcaya «á recompensar á los periodistas de todos matices que tomen la defensa de los intereses del país, ya pagando sus artículos, ó por otros medios que les parezcan oportunos, y á hacer los demás gastos que á dicho intento consideren necesarios.»

El 19 volvió á escribir Urioste á Murga y Uhagón, congratulándose de que el Gobierno hubiese ya presentado el 11 el proyecto de ley sobre los Fueros, y manifestándoles el agradecimiento de la Diputación por lo que hayan podido contribuir á este resultado. La Diputación, sin embargo, no está completamente tranquila, y ve corroborados sus temores por lo que dicen los Diputados en su carta respecto á las ideas de la mayoría de la comisión del examen de aquel proyecto, que son las que hicieron formular á algunos de ellos el pensamiento absurdo de que *perexa la Nación, pero sálvense los principios*. Esta misma convicción tienen

provincial tratase de un arrego foral con el Gobierno, porque es punto en que competía entonces y siempre entender privativa y absolutamente á las corporaciones ó Juntas forales, sin que en regla tan esencial cupieren excepciones por ningún título, además de que había algún peligro solamente en tocar este punto, aun solamente entre vascongados, como resultó luego, y se verá por la correspondencia del mismo Urioste.

los comisionados de Alava y Guipúzcoa, Samaniego y Calvetón, con los cuales ha celebrado Urioste una conferencia, cuyo resultado expone sumariamente, aunque cree que es bastante lo que dice para que comprendan los Diputados en qué círculo se desea ver encerradas las modificaciones, «que si se extendiesen á otras instituciones más vitales, ó á establecimientos intempestivos de aduanas, podrían hacer perder el fruto de nuestra reconciliación. Los mismos habitantes de San Sebastián están penetrados de esta verdad; y aunque deseosos de la habilitación de su puesto, nos han manifestado por boca de su representante el señor Calvetón, que no pueden menos de renunciar por ahora á la realización de sus deseos.»

Las tres Diputaciones creen que se debe solicitar el nombramiento de Diputados á Cortes y de autoridades que representen á todo el país, pero que no por eso deben abandonar sus puestos los Diputados actuales mientras no se arregle definitivamente la cuestión foral. «En la mezcla de instituciones forales y constitucionales en que nos vemos envueltos, no sabemos ni que ley ni que régimen seguir»; por eso conviene que se reúnan cuanto antes las Juntas, para que desaparezcan las anomalías que ofrece el estado político del país, y que se levante el estado de sitio, removiéndose al General Arechavala, cuyo carácter conocen los Diputados.

Decía Urioste á Murga y Uhagón el 22, que por un descuido involuntario dejó de incluir en su última carta una exposición sobre alteraciones anunciadas en el derecho del hierro extranjero, y que los rogaba que den los pasos necesarios para lograr que no se precipite una medida de tanta trascendencia, porque lejos de perjudicar á una industria que ocupa tantos brazos, se debería al contrario fomentarla, para que distraídos los hombres con el trabajo y con el

bienestar que lleva consigo, pensasen menos en asuntos públicos.

Incluye también Urioste copia de la felicitación dirigida al Duque de la Victoria, «exagerada quizás» para «halagar la vanidad y la posición del que todo lo manda», aunque ha parecido á los comisionados que la consolidación de la paz merecía la erección de un monumento destinado á perpetuar su memoria, á ver si se consigue al mismo tiempo por este medio que se levante el estado de sitio.

La Diputación ha visto con dolor lo que escriben los Diputados sobre la animosidad que excita el proyecto de ley en la comisión, y está «convencida de que volverá á estallar la guerra si esta cuestión no se arregla pronto y bien.» No tendrá que esperar entonces el Gobierno el apoyo de Francia y de Inglaterra, porque desairadas ambas naciones en la pretensión que tenía cada una de ellas de poner término con su mediación á la guerra civil, verán quizá con placer renovarse la contienda, achacándola á los constitucionales, y apoyando ocultamente á las Provincias Vascongadas, con las cuales les liga un interés comercial poderoso. Urioste asegura que tiene motivo sólido para creerlo así, «y que podría tener por resultado en una época más ó menos lejana la desmembración de la Monarquía» el seguir otra línea de conducta, é insinúa á los Diputados que hagan el uso que les parezca de estas opiniones.

Se va á dirigir una representación popular, ¹ como lo

¹ Esta representación se redactó en los términos siguientes:

«Cuando la suerte de Vizcaya y de sus antiguas instituciones están pendientes de la resolución del Congreso, y cuando hay tantos intereses encontrados y tantas preocupaciones contra ellas, mengua seria el silencio para los habitantes de esta invicta Villa, y el dejar de manifestar sus sentimientos y sus esperanzas en esta gran cuestión.—Hombres hay que, ó abusando de un supuesto conocimiento de nuestro carácter, ó arrastrados

insinúan los Diputados á Cortes, firmada por los que han seguido el bando de la Reina; pero Urioste insiste en que se debe lograr que desaparezca el estado de sitio, para lo cual y para sostener la conveniencia de mantener los Fueros, se encarga á los Diputados que no reparan en medios ni en sacrificios, pagando á los periódicos que tomen la defensa de nuestros intereses, y ganando á «personas de influencia en estas materias, porque para defenderse legítimamente es lícito echar mano de cualquier arma.»

Se prohibió el mismo día 22, por circular á los pueblos,

por las consecuencias de sus principios políticos, pretenden que entre nosotros son muy pocos los que desean la conservación de los Fueros del país. Y aquellos que nacidos lejos de él, desconocen nuestras necesidades y nuestras simpatías, acogen con favor estas ideas que halagan en algún modo las suyas propias, y les permiten seguir las sin oposición. Pero si valen nuestras palabras, cesará esa impresión equivocada que se intenta dar á la opinión pública, é ilustrada la conciencia de los representantes, esperaremos tranquilos su determinación.—El amor á los Fueros es en Vizcaya un sentimiento casi tan natural como lo es al hombre el instinto de su conservación. Apenas entre sus ciento y veinte mil habitantes se hallarían cien que no participasen de este mismo afecto; y si algunos, en los tristes años que acaban de pasar, intentaron á la sombra del Gobierno militar y de las instituciones constitucionales, esparcir, sin duda con miras interesadas, una doctrina contraria á su existencia, el disgusto que excitaron les impuso al instante silencio, y los ha obligado más tarde á dar á aquélla un colorido y una inteligencia que estaban lejos de su primera intención.—Así pues, al aprobar las Cortes el proyecto de ley que ha sido presentado por el Gobierno de S. M., relativo á los Fueros de estas Provincias, podráu lisonjearse de que su resolución ha de causar en los ánimos de todos los vascongados una impresión más grata y más profunda aun que la alegría ocasionada por el convenio de Vergara. En él ofreció el General en jefe recomendar con interés al Gobierno esta importante cuestión; y aunque persuadido de la oportunidad de esta medida, no ofreció más, retenido sin duda por su respeto y veneración á las leyes. Debíó dejar á los representantes de la Nación la gloria de concluir aquella grande obra. A ellos toca poner término con una resolución generosa á todo

imponer derramas y repartimientos sin autorización de la Diputación, y efectuar la cobranza de imposiciones anteriores, sin que esta corporación, enterada de los antecedentes y circunstancias del caso, conceda facultad para ello.

Escribía Urioste á Murga y Uhagón el 30, que su carta del 26 había causado mala impresión á la Diputación, porque no creyó que las preocupaciones y los odios envejecidos elevasen mucho su voz, si no que no se ratificarían los Fueros en las Cortes sin debates ni modificaciones. El pro-

temor de nuevas disensiones y de nuevos sacrificios. Preocindiremos para suplicárselo del derecho que podamos tener al goce de esas instituciones. Queremos deberlas á otros sentimientos. Y en vano se alegrará que al concederlas á los vizcaínos, se les daría una recompensa por la violenta oposición que han hecho al Gobierno constitucional. Porque también nosotros somos vizcaínos, y aunque menos numerosos que los que siguieron el bando de Don Carlos, hemos derramado bastante sangre para que, lejos de ser dignos del castigo que se nos impondría con la privación de nuestros Fueros, podamos aspirar á lavar con ella la culpa de nuestros hermanos. No vean, pues, la Cortes en los vizcaínos más que á los hombres que por una confianza generosa, y sin igual en la historia de los pueblos, han puesto fin en un día á la lucha que duró seis años, y que en sus montes hubieran logrado prolongar aun durante otros seis; no vean más que á los que en 1835 y 1836 opusieron un dique insuperable á todo el poder del pretendiente, y salvaron quizá el trono y la libertad. Que esta gloria baste á amparar á todos los vizcaínos; y si entre los representantes españoles existe todavía un recuerdo de la sesión del 3 de Enero de 1837, sean ahora generosos en acción como lo fueron entonces en promesas. La ocasión es propicia; destruyan de una vez el motivo de tantos temores, que han sido sin duda el más poderoso auxiliar de la rebelión; voten la conservación de los Fueros de las Provincias Vascongadas; y encadenados sus habitantes por tanta magnanimidad, jamás tendrá España ni ciudadanos más leales, ni defensores más firmes, sea que el extranjero se atreva á amenazar nuestra independencia, sea que la guerra civil intente abrir de nuevo el surco de sangre que seguimos hace tantos años. — Así lo esperan los fieles habitantes de la Villa invicta que suscriben, confiados en los nobles sentimientos y en la justicia de los representantes de la Nación.»

yecto de ley de la mayoría destruye estas esperanzas. ¿Qué es la parte municipal y económica de los Fueros despojada de toda fuerza política? Es una imprudencia reducir á estos límites el sistema foral. La parte municipal, que en las Villas, á lo menos en el método electivo, es más defectuosa que en el resto de la Monarquía, quedaría reducida en las Repúblicas al derecho de asistencia que conservarían todos los vecinos, y la parte económica encomendada á una Diputación dependiente del Gobierno, estaría de tal modo á merced de éste que dentro de pocos años anhelarían los vascos ó contrarrestarlas ó nivelarse con las demás Provincias.

Urioste sigue haciendo varias reflexiones sobre la ceguedad de los que pretenden resolver la cuestión foral en tales términos, y teme que produzca fatales resultados la conducta de los que nada han aprendido en treinta años de Gobierno, de presidios y de emigración, porque es muy difícil calcular hasta qué punto el patriotismo y la venganza pueden multiplicar las fuerzas de un pueblo. Ha ocurrido ya algún caso que pudo traer graves consecuencias, con motivo de haber pretendido un capitán de infantería poner la lápida de la Constitución en la plaza de Orozco. Nadie puede responder de que un día ú otro se reanime el fuego que duerme, y nos veamos todos envueltos en una conflagración general. Es lo peor que el mismo Arechavala contribuye el primero á alimentar estos temores, con su mezcla extraña de buenas y malas cualidades, pero no se puede pedir su remoción, porque marcha al parecer de buena fe en la cuestión foral. La Diputación se propone por ahora hacer cuantas menos exposiciones sea posible sobre asuntos que pueden suscitar dificultades, y deja, por lo tanto, á la discreción de los Diputados á Cortes el hacer el uso de la que les ha enviado. Si se deja alguna latitud al Gobierno para inter-

pretar la ley, no es dudoso que se mostrara benévolo, y en ese caso, reunido el país en Junta general, la confianza quedará restablecida, «y aunque más tarde, y poco á poco se le obligase á grandes sacrificios, éstos le parecerían más llevaderos, porque conservaría al menos los nombres y las formas sin lesión alguna, y VV. saben mejor que yo que muchas veces el amor propio de los pueblos se satisface con las apariencias, y con ellas se le hacen menos costosas importantes concesiones, que sin ellas sería inútil pedirle.»

No se extraña la Diputación de que hayan tenido tantos sinsabores los Diputados á Cortes en el desempeño de sus funciones, aunque se duelo mucho de que haya podido resentirse en su consecuencia la salud de Murga.

No reparará el país en las palabras de la ley, con tal que le sea permitido reunirse, nombrar sus Diputados y sus comisionados para las modificaciones proyectadas. Los límites á que deseaba la conferencia que se circunscribiesen estas modificaciones, no tenían más objeto que el de servir de base para el caso de que la Diputación y los Diputados actuales se viesan obligados á intervenir en tan arduo negocio. Por lo demás, repite Urioste á los Diputados que hagan uso de todas las armas. Los fondos de la Diputación, que puede contar en el momento son doscientos á trescientos mil reales, que están á la disposición de Murga y Uhagón.

Haciéndose cargo de las solicitudes con que acudieron los pueblos, en vista de lo que se les mandó el 22 de Septiembre, acordó la Diputación el 5 de Octubre prevenirles lo siguiente: 1.º Cada Ayuntamiento formará una relación ó estado individual, que comprenda todas sus deudas y obligaciones, expresando con distinción y claridad su origen y procedencia, y otra relación circunstanciada de los medios ó arbitrios con que cuenta para atender á su pago. 2.º Estas relaciones se han de formar con citación y asis-

tencia de los propietarios de cada pueblo que residan fuera de él, á los cuales se convocará para el efecto con la anticipación conveniente, que será á lo menos de seis días. 3.º Formadas de este modo las relaciones, se acordarán con intervención de los mismos propietarios forasteros las medidas que se consideren más adecuadas y equitativas para solventar los descubiertos legítimos que resulten. 4.º No se admitirá ninguna solicitud en que se pida facultad para imponer derramas, que no venga acompañada del expediente original en que conste haberse llenado puntualmente todas las formalidades expresadas.

Con la misma fecha se pasó otra circular, fijando á los Ayuntamientos el plazo de diez días para que presenten en la contaduría general del Señorío los comprobantes de los suministros hechos á las tropas, desde la última entrada del ejército en el territorio de Vizcaya hasta el 15 de Septiembre, en que empezó á correr este servicio á cargo de contratistas particulares, con objeto de hacer una liquidación general, en la que contribuyan todos los pueblos proporcionalmente.

En cartas escritas á los Diputados á Cortes el 4 y 7 de Octubre discurre Urioste nuevamente con su habitual fluencia de palabra sobre los temas que ha tratado en las anteriores. Les dice en la del 7, que no pueden abusar de la facultad que se les ha concedido para hacer cualquier gasto. «Háganlo VV. sin titubear, si lo consideran necesario. Ya saben VV. que el dinero ha sido siempre una arma empleada con buen éxito por estas Provincias. Varios periódicos han desplegado el mayor celo en nuestra defensa; fuerza es recompensarlos. *El Correo nacional* no necesitará suscripciones, pero más tarde podría hacerse un regalo á su director, como muestra de agradecimiento del país. *El Piloto* se muere de inanición; hoy mismo encargo, por orden de

la Diputación, que se suscriba el señor Hormaeche por cincuenta ejemplares para varios pueblos de este Señorío, porque ha de causar buen efecto en él ver que son defendidos los Fueros en Madrid.»

Se leyó en sesión celebrada el 9 una comunicación de los Diputados á Córtes Murga y Uhagón, fechada el 7 á las nueve de la noche, que se acababa de recibir por medio de un correo extraordinario, con la noticia de haber aprobado por unanimidad el Congreso de Diputados el mismo día el proyecto de ley en que se confirman los Fueros de las Provincias Vascongadas y Navarra. Llena la Diputación de júbilo por tan fausto suceso, de que depende la felicidad de este país, acordó que inmediatamente se imprimiese y circulase á los pueblos la allocución siguiente:

VIZCAINOS. La Diputación provincial se dirigió á vosotros en 10 de Septiembre, y dando á vuestra noble conducta los elogios que merecía, os hizo esperar que las Cortes aprobarían las miras del Gobierno de S. M., las promesas del General en jefe Duque de la Victoria, y que ratificarían vuestras antiguas leyes. Esa esperanza no ha salido falsa. El Congreso de Diputados en la sesión del 7 de este mes ha ligado para siempre la suerte de Vizcaya al trono de Isabel segunda. Ha correspondido á vuestra confianza con una magnanimidad digna de los mejores tiempos de la España, y ha ratificado por unanimidad los Fueros de este Señorío y de las demás Provincias Vascongadas en los artículos siguientes, que comunican por extraordinario nuestros dignos Diputados á Cortes Don Manuel María de Murga y Don Pedro Pascual de Uhagón; (sigue el texto de la ley).—Los sentimientos que animan á los individuos del primer cuerpo colegislador, á todos los Senadores, no deben hacer dudar un momento del resultado de sus deliberaciones; se apresurarán á poner á esta ley el sello poderoso de su aprobación.

S. M. que se ha mostrado tan generosa protectora de nuestros Fueros, los sancionará; y dentro de breves días la Diputación tendrá el placer que se prometió, de ceder su autoridad á los que obtengan los votos y la confianza de todo el país.—VIZCAINOS. Entregaos al gozo más puro. La paz queda afianzada entre vosotros sobre una base indestructible. El artículo primero del convenio de Vergara se ha cumplido. El Gobierno y las Cortes han desempeñado la palabra del soldado español. La Diputación, que conoce vuestro carácter y vuestras simpatías, está persuadida de que seréis en adelante el más firme apoyo del trono y de la libertad española. Maldito sea el que intente abrir de nuevo la sima de la guerra civil; ese solo sea nuestro enemigo. Y reunidos luego bajo el árbol, que durante tantos siglos ha dado á vuestros antepasados su sombra de libertad y de ventura, no guardéis en vuestros corazones más afectos, en vuestra boca más palabras que para amar, defender y aclamar á DOÑA ISABEL SEGUNDA, Á SU AUGUSTA MADRE LA REINA GOBERNADORA, LA CONSTITUCIÓN DE 1837 Y LOS FUEROS DE VIZCAYA.»

El 11 oscribió Urioste á los Diputados dándoles cuenta del júbilo con que se recibió la noticia de la aprobación por el Congreso del proyecto de ley sobre los Fueros; el país quedaba tranquilo; el gobierno podía disponer sin reparo de las tropas que había en él.

El 16 les expresaba el deseo de que el Senado aceptara el proyecto en los términos en que está redactado, siempre que el Gobierno vaya de buena fé, y no sea el primero en hacer uso de la «tranquilla» *de sin perjuicio de la unidad nacional*, de manera que realmente perjudique á nuestro país. Se tendrá presente la advertencia de los Diputados de conferir los honores de Padres de Provincia á algunos señores para tenerlos propicios y lisonjear su vanidad, aunque

Urioste no halla ejemplar de que este título se haya conferido más que á los Diputados generales que tomaron posesión de sus destinos. ¹ En cuanto al viaje de la Reina produciría muy buenos resultados, pero el país está cansado de gastos.—La Diputación se ha visto precisada á felicitar al Congreso, acaso prematuramente, siguiendo el ejemplo del Ayuntamiento de Bilbao, que se había anticipado á hacerlo.—Se ha tomado por pretexto el convenio de Vergara para entregar al Duque de la Victoria la espada de honor, ² que le fué ofrecida hace tanto tiempo. Fueron portadores de ella Don Martín de Jáuregui y Don Manuel María de Uhagón, los cuales llevaban también el encargo de tratar del levantamiento del estado de sitio y de la remoción del Comandante general Arechavala.

Para dar cumplimiento á una real orden comunicada por el Ministerio de Gracia y Justicia, pidió el Jefe político el 17 á los pueblos una lista de los sujetos presentados ó nombrados, durante la dominación del pretendiente, para toda clase de plazas eclesiásticas, con las circunstancias que se expresan en la circular que al efecto pasó el Jefe político.

Se recomendó por dicha autoridad el mismo día á las Justicias la mayor vigilancia y celo para evitar la repetición de robos y violencias, como los cometidos en la casa torre de Butrón en Gatica y en Baracaldo.

De estos robos y de algún otro se hacía cargo Urioste el 21 en carta á Murga y Uhagón, diciendo que la cuadrilla de malhechores que los perpetraron, ó trataron de perpetrar-

¹ Había ejemplares de Diputados generales, nombrados por aclamación, á quienes se concedieron al mismo tiempo los honores de Padre de Provincia, sin tomar posesión de los cargos.

² Costó quince mil ochocientos setenta y cinco reales.

los (porque en Mendata no consiguieron su objeto, sino que salieron mal parados) se componía de cazadores desertores y de antiguos carlistas, que no quieren sujetarse al trabajo. Para poner remedio á estos males opina Urioste que es indispensable levantar el estado de sitio, porque entonces se podrá disolver el cuerpo de cazadores, y restablecer los mi-queletes, conocedores del país y de su lengua. La Diputación vió con placer que no se entregase la felicitación que enviaba para el Congreso.

El 25 de Octubre comunica Urioste sus temores de que el Gobierno, si hay cambio de Ministerio, apoyándose en la unidad constitucional, deje á la Diputación en la ridícula posición de haber anunciado al país con aplauso y lisonjeras esperanzas un suceso de mezquinos resultados.—En cuanto al pensamiento de restablecer la Universidad de Oñate y el Seminario de Vergara, opina la Diputación que convendrá más á Vizcaya, que uno de estos establecimientos, ó otro análogo, se plantee en su propio territorio en uno de los edificios que pertenecieron á las órdenes religiosas.

El 30 participa que en el supuesto de que la ley foral, ya sancionada, se cumpla como lo entiende el país, se van á verificar las fiestas, cuyo programa acompaña, á riesgo de que el regocijo sea prematuro, porque, sea cual fuere la causa de ello, «existe una ansiedad que sino se desvanece pronto podría servir maravillosamente á ciertos hombres y ciertos planes.» La Diputación opina que los Diputados á Cortes no deben dejar sus puestos por delicadeza mientras no puedan ser reemplazados por personas elegidas por todo el país, por lo mucho que importa que conserven el carácter de tales Diputados para el buen éxito de las gestiones pendientes. La Diputación se halla en el mismo caso que ellos respecto á la interinidad de sus funciones, por falta de representación suficiente.

El 31 acordó la Diputación elevar á la Reina Gobernadora y á las Cortes las exposiciones siguientes: ¹

«SEÑORA. La Diputación provincial de Vizcaya se pone á L. R. P. de V. M., penetrada de los sentimientos más vivos de amor y de gratitud, por el generoso apoyo que el Gobierno de V. M. ha dado á los Fueros é instituciones de nuestro país. Representación imperfecta de él, no le sería permitido á la Diputación tomar su nombre si no conociese el entusiasmo que la augusta persona de V. M. excita entre sus habitantes. Y mientras reunidos todos por medio de sus apoderados, según sus usos y costumbres, bajo el árbol de Guernica, presentan á V. M. la expresión de estos mismos sentimientos, la Diputación cree deber suyo manifestarlos á V. M., y manifestarle al mismo tiempo, que ligados á la causa de V. M. por el proyecto de ley presentado á las Cortes para la confirmación de sus leyes, y por la sanción dada al decreto de éstas, hombres poco brillantes, pero hombres de acción y de resolución, emplearán con este objeto corto número de palabras. Obligados por sus Fueros á defender á su Señor y á seguirle en la guerra, todos ellos se levantarán en masa, si es necesario, al llamamiento de V. M., empuñarán de nuevo las armas, no las depondrán hasta haber destruído su último enemigo, y aquellos que engañados siguieron el bando del pretendiente borrarán con sangre la sangre que malamente vertieron por él, é igualarán á los

¹ Los documentos solennnes emanados de la Diputación provincial de aquel tiempo reflejan el carácter ardiente, inquieto y algo dado á la hipóbole de Don Manuel Urioste de la Herrán, que ora quien por común los redactaba. Además de estas circunstancias características, resulta de su correspondencia que Urioste sabía manejar también las armas de la intriga, y que se inclinaba algunas veces al principio de que el fin justifica siempre los medios.

que nunca se apartaron de la senda del deber. ¿Y qué espectáculo, qué recompensa más dulce podrá jamás lograr V. M. por sus desvelos y sacrificios, que el contemplar así el trono y la libertad de España apoyados en aquellos que fueron sus más ardientes enemigos? No en balde han aclamado los pueblos á V. M. madre de los españoles; no en balde esperan de V. M. el remedio de sus males, porque V. M. en el alto puesto en que la Providencia la ha colocado, ha desplegado todas las virtudes y las brillantes cualidades necesarias á tamaño empeño, y todos debemos esperar que el reinado de V. M. ha de ver afianzadas para siempre la libertad y la ventura de nuestra trabajada Patria.»

«La Diputación provincial de Vizcaya, en nombre de todos los habitantes del Señorío, no puede menos de manifestar á las Cortes el sentimiento de gratitud que ha excitado en ellos el decreto sancionado por S. M. en 25 de este mes, en que se confirman los Fueros de las Provincias Vascongadas y Navarra. Los vizcaínos no esperaban menos de la magnanimidad castellana. Ella los liga á todos indisolublemente á la causa de Doña Isabel segunda y de la libertad española, y esta causa contará en adelante entre sus más firmes defensores á aquellos mismos que hasta ahora fueron sus adversarios. Han desaparecido todos los temores. Vizcaya ve cumplidas todas las esperanzas que fundó en el convenio de Vergara, y donde antes no se oían más que gritos de odio y de desesperación, reina hoy la paz y la fraternidad más sincera. Las Cortes, que habrán contribuido de un modo tan poderoso á esta obra de reconciliación y de ventura nacional, podrán lisonjearse también de haber llevado á cabo con ella una conquista que no fué dado obtener al pueblo que se llamó dueño del mundo. Reunido pronto el país bajo el antiguo árbol, símbolo de su libertad, podrá manifestar á las Cortes de un modo más enérgico y más completo los senti-

mientos de que se halla poseído. Entretanto la Diputación provincial se adelanta á manifestarlos, persuadida de que no luce más que repetir el pensamiento que anima á todos los habitantes de este Señorío. Sigán las Cortes los trabajos tan dignamente comenzados; y pacificada pronto la Nación, libro y dichosa, no podrá menos de bendecir á aquellos que con tanta abnegación y tanta nobleza lo han asegurado los bienes que la paz y la libertad llevan consigo.»

El primero de Noviembre se publicó el prospecto del Colegio de Vizcaya, establecido bajo la protección de la Diputación, ó incorporado á la Universidad de Valladolid. El curso debería empezar por este año el primero de Diciembre, pero en adelante el primero de Septiembre.

Esto mismo día escribió Urioste á Murga y Uhagón que la Diputación se había reunido para tratar de la conducta que debía observar en las circunstancias actuales en vista de la carta de ellos. Ninguno de sus individuos, dice, ha echado pie atrás para que el país recoja pronto y bien los frutos de la ley que ratifican los Fueros de estas Provincias. «Pero varios han sido los pareceres sobre los medios que se deben emplear para lograr este resultado, y más diferentes aun las opiniones de otras personas, que aunque hoy no pertenecen á la Diputación han sido consultadas por ella, como más enteradas y prácticas en los asuntos ó intereses del país. Unos querían que se diera posesión inmediatamente á los antiguos Diputados forales, otros que se convocasen desde luego las Juntas generales, otros, en fin, que presentásemos hoy mismo nuestra dimisión, y que el Gobierno resolviese en vista de ella. Y como sucede siempre en estos casos, se ha acabado adoptando una medida que parece conciliar todas las opiniones.—Temerosos por un lado de que un paso decisivo fuese mal interpretado y entorpecido por la autoridad militar, que por el estado de sitio tiene aun mano

alta en nuestros asuntos, y por otro de comprometer al Jefe político, que tan dignamente y con tanta utilidad para el país, ha presidido esta corporación, y de dar quizá lugar á que la represión que intentase el Gobierno de nuestras disposiciones llegase á causar un verdadero trastorno, hemos preferido que el mismo Jefe político se dirija al Gobierno, manifestando, como ya lo ha hecho antes, la ansiedad de los pueblos, las esperanzas cifradas en la ley que ha sido sancionada, los encontrados é importantes intereses que están padeciendo por falta de una autoridad que pueda tomar las disposiciones necesarias para arreglarlos; en fin, las reclamaciones de todos los habitantes del Señorío. Añadiré que la Diputación provincial, convencida por todos estos motivos, y persuadida de que para sacar pronto al país de este estado violento, es necesario que ella desaparezca y que se reunan las Juntas de Guernica, con el sólo objeto de elegir los Diputados forales y de nombrar dos comisiones: una para entender en las modificaciones que se hayan de hacer á nuestros Fueros, y otra para el arreglo de los intereses que sufren en todos los pueblos, donde es menester hacer un estado exacto de las deudas, y fijar un método de paga que concilie los derechos de todos los que hayan de contribuir á él como propietarios, vecinos ó inquilinos; añadiré, digo, que la Diputación se había decidido por todos estos medios á presentar su dimisión, indicando al mismo tiempo la medida que juzga indispensable en este momento para asegurar la tranquilidad de Vizcaya y su administración interior; pero que cediendo á los ruegos y á la influencia del mismo señor Jefe político, ha suspendido dar este paso; que éste consulta al Gobierno, y le hace presente su modo de pensar, para que tome las medidas que le parezcan más oportunas en tan graves circunstancias. Si el Gobierno no resuelve pronto, haremos nuestra dimisión, ó

quizá convocaremos las Juntas. VV. pueden también manifestarlo así, en la inteligencia de que nosotros no tenemos compromiso ninguno personal, y lo haremos como lo decimos.—Entre tanto hemos dispuesto las dos adjuntas felicitaciones: la primera para la Reina, la segunda dirigida á las Cortes.—Esta va por duplicado para que se pueda presentar al mismo tiempo en ambos Estamentos. De consiguiente, la anterior, dirigida aisladamente al Congreso de Diputados, queda anulada y pueden VV. destruirla. En aquéllas hablamos como de una cosa natural de la reunión de los apoderados bajo el árbol de Guernica. Comprendemos las dificultades que esto ha de presentar aun; pero queremos y debemos hacernos los desentendidos, ó interpretar la unidad constitucional que en nada se opone á nuestras Juntas generales. La Diputación espera, que no obstante los tropiezos que ese terreno presenta, lograrán VV. hacer que la resolución del Gobierno á nuestra indirecta intimación nos sea favorable, y distrayéndose un poco de los graves negocios que le rodean se ocupará algo de nosotros, á quienes debe tener muy olvidados, pues ni siquiera ha pensado en comunicarnos la ley sancionada desde el 25.—Puede ser que hubiera sido mejor seguir lisa y llanamente el consejo de VV., pero encontramos por todos lados bastantes dificultades, que no todas se pueden vencer. El medio adoptado nos sacará á lo menos de la incertidumbre en que nos vemos, y como esperamos que las demás Provincias han de seguir el mismo camino, sabremos pronto á qué atenernos.»

Con fecha del 8 escribió Urioste las dos cartas siguientes, dirigida la primera á Don Joaquín Calvetón, y la segunda á los Diputados á Cortes por Vizcaya:

«Hace tiempo que conocíamos el estado de irritación en que se encontraban los ánimos de la mayor parte de los habitantes de esa Provincia contra un Diputado provincial;

pero al paso que sentíamos la situación en que ésta se hallaba, esperábamos que esa corporación lograría disipar la impresión poco favorable con que sus votos eran recibidos en el país, adoptando una marcha francamente y sinceramente vascongada; y esta esperanza era tanto mayor en mí que estoy convencido personalmente de la abnegación con que han mirado VV. los negocios de su país, sacrificando á la opinión general lo que parecía á VV. sus verdaderos intereses. Pero temo que el manifiesto que han publicado VV. en su Boletín oficial del 31 de Octubre, y que V. se sirve incluirme en su apreciable carta de primero de este mes, lejos de hacer á VV. conseguir el resultado que apetecen, no sirva más que para exasperar en mayor grado los ánimos de los que miran á VV. con desconfianza. Cuando en nuestra conferencia fijamos las bases en que las modificaciones de los Fueros debían apoyarse, las fijamos, no con objeto de entrar desde luego en esta modificación (V. lo recordará así fácilmente), no porque nosotros nos creyésemos llamados ó autorizados para llevarla á cabo, sino para que en el caso dado y posible de que las Diputaciones provinciales vascongadas, representación imperfecta de sus Provincias, se viesen arrastradas no obstante esta imperfección á tratar estas cuestiones, supiesen en qué círculo debían circunscribirlas, sin necesidad de apelar á nuevas conferencias. No nos hemos visto en este caso; de consiguiente las medidas tomadas para una eventualidad que no ha llegado á verificarse, debieron por todos nosotros considerarse como nulas, y sobre todo me parece que las ideas á que se referían ni debieron comunicarse ni extenderse por medio de la imprenta. Sin embargo, vimos que el señor de Luzuriaga, en su discurso analítico de nuestros Fueros, quiso ya encerrarlos en límites aun más estrechos, y aunque es muy fácil y natural que él por sí siguiera estas ideas, no deben VV. ex-

trañar, atendidos los antecedentes, que se haya creído que esa corporación pudo tener alguna parte en las ideas emitidas por su Diputado. Hoy corrobora esta opinión el manifiesto que nos ocupa, y que aunque no contiene más que ideas á las cuales tendremos que llegar todos poco á poco por la fuerza misma de las cosas, lleva consigo el daño inmenso de hacer conocer á la Nación los disentimientos interiores nuestros, y lo que estamos prestos á conceder; de modo que con estos datos se harán sus representantes más reservados y más exigentes. Es una verdad trivial por puro repetida, pero exacta siempre y necesaria en todas épocas, *que la ropa sucia se ha de lavar en familia*. Más vale sufrir en silencio los sinsabores domésticos que dar armas con ellas á los enemigos exteriores. Nosotros somos de esa opinión. Firmemente persuadidos de que todos nuestros conatos se dirigen á la felicidad del país, la calumnia nos halla poco sensibles. No falta aquí quien diga que deberíamos haber repuesto ya la Diputación foral, y que el sólo afán de mandar nos hace conservar aun nuestros puestos. Dejamos hablar, y seguimos nuestra marcha, sin atrasarla ni precipitarla por eso. La reposición de la antigua Diputación foral nos parece imposible, porque fué suprimida por una ley, y esta nueva no nos parece pueda tener efecto retroactivo para anular el efecto causado por aquélla. De consiguiente, lo que creemos más natural, en virtud del decreto sancionado por S. M. en 25 de Octubre, es la convocación á Juntas por la misma Diputación provincial, con el sólo objeto de nombrar Diputados forales y de proclamar á la Reina.¹ Pero como el decreto no nos ha sido comunicado aun, y por otro lado no nos parece regular dar un paso tan importante sin hacer conocer antes nuestra intención al Gobierno, hemos obteni-

¹ Véase lo que queda dicho mas arriba sobre este punto.

do del señor Jefe político que se lo comunique así, para que no le sorprenda nuestra resolución. Aun no ha tenido respuesta su comunicación, y en el caso de que no la tuviese absolutamente, la Diputación se reserva obrar como le parezca más acertado para calmar las exigencias é inquietud del país, que la prolongación del estado anómalo y complicado en que nos vemos podría arrastrar á nuevas turbulencias. Esto es lo que debemos evitar sobre todo, y espero que sobre lo que llevo expuesto y las ideas que deben dirigir nuestra conducta, iremos acordes con esa Diputación. Nosotros, por nuestra parte, cansados de la falsa posición en que estamos, de la responsabilidad que sobre nosotros pesa, y persuadidos de que el Gobierno aprobará nuestros actos, deseamos acabar pronto nuestra misión, aunque para ello se necesite algún compromiso personal, que jamás rehuiremos, en beneficio de nuestro país, de sus instituciones y de la paz general. No obstante, puede ser que haya en nuestro modo de ver alguna divergencia. La comprenderé muy bien, y me hará V. un favor muy grande en manifestármela. En materia de opiniones políticas debemos ser muy indulgentes, y nunca achacar á mala intención la diferencia que puede tener origen en diferente posición y diferentes intereses, sin que haya de por medio ni odios ni mala fe.»

«Bien conozco y conoce esta Diputación, que la medida indicada por VV. de convocar las Juntas generales del país, siempre que no fuera mal mirada y entorpecida por el Gobierno, sería la más apropiada para hacernos salir de la falsa posición en que estamos, y de la cual el país empieza ya á murmurar. Pero sin decir que al fin y al cabo no tendremos que echar mano de ella, hoy, además de las razones que expuse á VV. con fecha del primero, tenemos otras, sino para diferirla indefinidamente, á lo menos para alegrarnos de haber dado antes un paso de intimación al Gobierno,

que hará pesar sobre él las consecuencias de lo que pueda pasar sino toma á tiempo las disposiciones necesarias para que la ley quedo cumplida. Estas razones son, las pocas simpatías que semejante acto parece ha de tener, no solamente en la Diputación provincial de Guipúzcoa, sino en la misma Diputación de Alava. Cuando el Jefe político, cediendo á nuestras exigencias, comunicó con fecha del primero al Gobierno nuestra situación, nuestras ideas y la resolución que parecíamos determinados á tomar, creímos conveniente poner todo esto en conocimiento de la Provincia de Alava, instándola á imitar nuestra conducta, ó á nuevas conferencias para arreglar uniformemente la de las tres hermanas, ó á indicarnos cuál era la que pensaba seguir. La respuesta no se ha hecho esperar; la primera parte la eluden los Diputados diciendo que escriben al señor López en el mismo sentido nuestro; se niegan á la segunda so pretexto de que esas conferencias podrían parecer hostiles al Gobierno y á las Cortes, é indisponerlos contra nosotros; y en cuanto á la última dicen terminantemente, que aquella Diputación *se halla firme en no precipitarse, en no salir de la legalidad, y en no perder lo que con tanto afán se ha ganado, y se limitan á lamentar el descuido ó atraso del Gobierno en no remitir la instrucción necesaria para reponer el sistema foral, aunque saben que la culpa no es suya, y esperan de sus buenas intenciones, según avisa el señor López, que vendrá luego el oficio del Gobierno; quixá, añaden, por el correo de hoy.* Ya ven VV. que si es esencial que las Provincias Vascongadas marchen unidas en esta crisis, al seguir la inspiración de VV. ni aun podremos contar con aquélla que más simpatiza con nosotros. Esta seguridad no nos arredra sin embargo; y decididos á cumplir antes de todo nuestros deberes de vizcaínos, no tendría nada de extraño que continuando el Gobierno en su silencio, que

no ha interrumpido el día primero, aunque recibido ya el oficio del Jefe político, se decidiese la Diputación á convocar inmediatamente las Juntas, corriendo el riesgo de que las otras dos no sigan su ejemplo. Pero aun en este caso, consideraremos como una mejora en nuestra posición los pasos legales que hemos dado antes de aventurarnos á excedernos en nuestras facultades. Espero que no estaremos tan divergentes en opinión que no parezca á VV. la nuestra algo razonable; y si para el día en que tengamos que echar el guante aconsejara el señor López en igual sentido á sus paisanos, por instigación de VV., nuestra posición sería menos mala con el apoyo de Alava, y con la irritación que en Guipúzcoa reina contra los de San Sebastián. La cuestión de presidencia y todas las demás subalternas, ya se arreglarían fácilmente, y como el primer acto de las Juntas sería el nombramiento de Diputados forales, nosotros las abriríamos en cuerpo hasta que eso se verificase, y luego nos retiraríamos.» Todo esto queda sin embargo sujeto á las contingencias que ocurran. Urioste, al terminar su carta se hace cargo de lo que ha dicho la Diputación provincial de Guipúzcoa en su Boletín oficial el 31 de Octubre, y de que «parece querer que se consideren ya nuestros Fueros unas meras instituciones municipales y administrativas, y que se entre desde luego en su modificación. Con semejante apoyo en nuestra misma casa, no será extraño que nuestros enemigos quisiesen dar á la unidad constitucional toda la latitud de que es susceptible, y aunque toda Guipúzcoa clama contra los de San Sebastián, están éstos hoy, por desgracia, en posición de hacer mucho daño, no solamente á su Provincia, sino á las demás, á no ser que hallemos en el Gobierno la protección que esperamos.»

Inquieta la Diputación al ver que no se le comunicaba la ley de 25 de Octubre último, acordó el 11 elevar al Minis-

tro de la Gobernación una exposición, en la que pintó la inquietud que reina en el país por la dilación que se observa en la ejecución de aquella ley, los inconvenientes de todo género que la dilación origina, y el estado anómalo en que se halla la Diputación, elegida solamente por cuatro ó cinco pueblos que reconocían al Gobierno de la Reina durante la última guerra, y haciendo ver la necesidad absoluta que hay de convocar las Juntas generales para aquietar los ánimos, consolidar la pacificación del Señorío, y poner término al estado de violencia y sufrimiento en que se hallan los intereses de todos los habitantes.

Urioste escribió el mismo día á Murga y Uhagón, enviándoles esta exposición que consideraba el ultimatum de la Diputación, cansada de tanto esperar. «Si el Gobierno no contesta, convocamos las Juntas, y de todos modos, dejaremos unos puestos en los cuales no podemos continuar, porque no hemos sido elegidos por el país, ni siendo Diputados constitucionales alcanzamos á gobernar foralmente, ni obtenemos sobre los pueblos aquella autoridad y aquel prestigio que sólo logran los poderes constituidos.» La Diputación se hubiera decidido antes á dar este paso que le parecía aventurado, si hubiese sabido quién es la persona que lo aconsejaba, como lo sabe ahora que se le ha dicho en reserva. Urioste atribuye en gran parte á la conducta observada por los Diputados de Guipúzcoa el aplazamiento de la ejecución de la ley de 25 de Octubre.

Urioste se apresura el 15 á decir á los Diputados de Vizcaya que no creía que estuviese tan próxima como ha resultado por la carta que lo escriben la terminación de este asunto; por lo cual añade que la Diputación no sentirá que no hayan entregado al Ministro la exposición que se les envió, un sí es no es amenazadora, y que quizá exasperaría á los que están dispuestos á favorecernos. La Diputación

aprueba los términos de la resolución del Gobierno. Parecerá absurda la coexistencia de dos cuerpos políticos tan opuestos como la Diputación general y la Diputación provincial; pero como las funciones de ésta quedan limitadas á las elecciones de Diputados á Cortes y Senadores, disminuirá pronto esta idea que se forma á primera vista. Por otro lado hay que conceder algo á la posición en que se halla el Gobierno, y no deben extrañarse estas transacciones, en vista de las exigencias con que se le acosa. Se ha adelantado la Diputación á lo que indican los Diputados sobre la reconciliación con los guipuzcoanos. «Hemos recomendado su necesidad á los de San Sebastián, y en medio de recriminaciones amargas contra sus adversarios, á quienes acusan de más antifueristas que ellos, nos anuncian con fecha del 13 que también ellos han pedido seriamente la convocación de las Juntas generales. — En ellas se podrá fijar un punto céntrico para dar un impulso común á las reclamaciones y á los negocios de las tres Provincias; plan que no debe olvidarse, porque ahora más que nunca en la unión está nuestra fuerza.

»Por lo demás aquí no hay discusiones que amenacen exigir la intervención del Gobierno; y aunque los intereses están bastante complicados, será fácil inspirar á los ánimos bastante prudencia para que se arregle todo en familia, y sin necesidad de reclamar auxilio extraño para ello.»





CAPÍTULO XV

El 25 de Noviembre se dió cuenta en Diputación de un oficio del Corregidor político del Señorío, en que le transmitía la ley de 25 de Octubre y el decreto dado el 16 del corriente para la ejecución de la misma. Acordó la Diputación, en su consecuencia, citar para el 28 á todos los Padres de Provincia, residentes en el país, que eran trece, y al Consultor Don Casimiro de Loízagá.

Se reunieron dicho día en sesión extraordinaria los Diputados provinciales con los Padres de Provincia Don Manuel María de Aldecoa, Don Pedro de Albiz, Don Martín León de Jáuregui y Don José María de Gortázar, y el Consultor Loízagá. ¹ Abrió la sesión el Corregidor, exponiendo en un breve discurso que el objeto de ella, conforme á lo manifestado así en el acta de la del 25, como en los oficios de convocatoria dirigidos para la presente á los Padres de Provincia y al Consultor, era el de dictar, oyendo el respetable parecer de estos señores, las medidas más conducent-

¹ No asistió ninguno de los que formaron parte del Gobierno universal elegido en 1838, que en tal concepto ejercieron el cargo de Diputado general.

tos y adecuadas para la ejecución del real decreto de 16 del corriente, y en particular para la pronta reunión de las Juntas generales, tan deseadas por todos los vizcaínos, y acabó por proponer una cuestión preliminar que dijo conceptuaba muy conveniente se tomase en consideración, y se resolviese ante todas cosas, á saber: si se debería proceder desde luego, esto es, antes de convocar las Juntas, á la renovación de los Ayuntamientos. Habiéndose leído en seguida tanto la ley como el decreto citados, se entró en la discusión del asunto, que fué tan larga y detenida como correspondía á su importancia, versando primeramente sobre la cuestión preliminar propuesta por el Corregidor. Los Padres de Provincia, conformes con lo expuesto en un extenso discurso por el Consultor, fueron de opinión que no convenía renovar por ahora los Ayuntamientos, sino que para no alterar la antigua costumbre observada constantemente en Vizcaya de mudarlos el primer día del año, y á fin de no faltar también á lo prevenido en este punto por el artículo sexto del real decreto del 16, deberfan continuar los actuales hasta el primero de Enero próximo. La Diputación se adhirió á este parecer.

Resuelta la cuestión preliminar, convinieron todos los concurrentes en la necesidad de llevar á efecto, sin la menor demora, la celebración de las Juntas generales; y en su virtud acordó la Diputación general que se convocasen para el 10 de Diciembre próximo. Se aprobó después la convocatoria que para el efecto se había de expedir inmediatamente á los pueblos de Vizcaya, en la forma acostumbrada.

Se convino también, oyendo á los Padres de Provincia y al Consultor, en que el lugar que correspondía á la Diputación provincial en las Juntas era el que debe ocupar la Diputación general, y se acordó pedir á la autoridad mili-

tar que hiciese retirar las tropas de Guernica durante la celebración de las Juntas.

El 10 de Diciembre se colocaron en cuerpo de comunidad so el arbol de Guernica, conforme lo hacía la Diputación general, bajo la presidencia del Corregidor Don Gregorio de Lezama Leguizamón, los individuos de la Diputación provincial Don José Pantaleón de Aguirre, Don José Silvestre de Artaza, Don Clemente de Iturriaga, Don Bonifacio de Vildósola, Don Casimiro de Ariz y Don Manuel de Urioste de la Herrán, con el Secretario Don Francisco de Hormaeche, y se procedió al llamamiento acostumbrado para la entrega de los poderes. Después de este acto, se trasladó la Diputación á la iglesia juradera de la Antigua; y concluida la misa que celebró en ella Don Juan José de Zarrabeitia, cura beneficiado de Echévarri, y profesor de filosofía del real colegio de Santiago, fueron llamados los Padres de Provincia y los vocales de la Junta.

En seguida el Corregidor leyó el discurso siguiente:

«Cuando la Diputación provincial manifestó al país en 10 de Septiembre la esperanza que la animaba de ceder pronto su puesto y su autoridad á aquellos que fuesen honrados con vuestra confianza, no podía creer que se realizase tan luego esa esperanza que le inspiraban sobre todo sus buenos deseos y su patriotismo. Yo mismo que con el carácter de Jefe político tuve el honor de presidirla, estaba lejos de pensar que en tan corto plazo me estuviera reservada la dicha de abrir de orden de S. M. bajo el árbol antiguo de nuestras libertades las Juntas generales de Vizcaya. Así ha sido sin embargo. La Nación española, desempeñando la palabra de su General, los compromisos de su Gobierno, ha ratificado solemnemente los Eñeros, franquicias y libertades de las Provincias Vascongadas. Es verdad que no podía ser otra su conducta. Durante seis años la guerra

sonó entre nuestros montes, con un furor de que la historia guarda pocos ejemplos; los campos fueron talados, los hogares destruidos, y el pacífico labrador, arrancado á sus trabajos y á su familia, se hizo soldado y derramó su sangre y sacrificó su vida por una causa que creyó ser la de la legitimidad, y la de la religión de sus padres. Como en todos los hombres pundonorosos y leales, su convencimiento era profundo; por eso el desengaño debía ser lento. Pero llegó al fin, y entonces no se detuvo un momento; destruyó de un soplo el ídolo en cuya defensa había vertido su sangre, y confió sin más garantía que la palabra de un hombre, su suerte, su honor y sus leyes á aquellos que fueron hasta entonces sus más ardientes enemigos. Tan alta confianza no podía ser fallida, lo repito; la España, esta Nación igualmente desgraciada que grande, no podía menos de pagar con magnanimidad el generoso proceder que excitaba su admiración, y la ahorraba tanta sangre, tantos lutos y tantos sacrificios.—En efecto; todos los españoles han podido palpar ya los efectos del convenio de Vergara. En todas partes ha renacido la alegría; en todos lados reviven el comercio, la agricultura y la industria; la Patria respira, y apenas algunas pasiones se agitan aun en un rincón de la Península, á merced de la aspereza en que están concentradas y del rigor de la estación. ¡Gloria á todos los que contribuyeron á aquella grande obra de reconciliación! La gratitud nacional debe ser para ellos dulce recompensa de sus virtudes.—Fiado en ellas, yo no he titubeado en aceptar el difícil encargo de Corregidor del Señorío, que la bondad de S. M. me ha conferido, y en dedicar mis débiles esfuerzos á promover la dicha, la prosperidad de mi país natal, á cooperar al afianzamiento de sus venerandos Fueros. Siempre, en todas las épocas de mi vida, estos sentimientos han dirigido mi conducta, y cuando hace dos años fuí nombrado Jefe polí-

tico de Vizcaya, no pude menos de manifestarlos con esta misma franqueza á S. M. y al Gobierno que, propicio siempre á conservar ilesas nuestras instituciones, aceptó, quizás con demasiada benevolencia, mi ingenua manifestación. Hoy tengo la dulce satisfacción de ver que mis trabajos no han sido estériles, y que esta autoridad que en manos de personas apasionadas hubiera podido ser tan perjudicial, en las mías se ha ejercido siempre en beneficio de Vizcaya y de sus leyes. ¹—Pero mis esfuerzos, señores, los esfuerzos de los Diputados generales que nombrados en 1833 siguieron la bandera de la legitimidad, los de la Diputación provincial que va á cesar, los de los dignos Diputados á Cortes Don Francisco de Hormaeche, Don Federico Victoria de Lecea, Don Manuel Maria de Murga y Don Pedro Pascual de Uhagón; en fin, los de todos los distinguidos vizcaínos que con tanto amor han venido ha ofrecer sus servicios al país en el día del peligro; todos serían nulos si hoy no los apoyase francamente la Junta general; sino diese á todos los pueblos un ejemplo digno, de conciliación, de cordura y de moderación. Y así será sin duda. El primer acto, el más importante de todos los que contiene la convocatoria, y en que la Junta está llamada á interponer su influencia y sus derechos, es la elección de señores Diputados generales y demás de que se compone el Gobierno universal de este Señorío.—Ciertamente, en este rocinto, en todo el ámbito del Señorío, no podemos, no debemos ver más que vizcaínos; cualquiera que sea la bandera que hayan seguido en nuestras discor-

¹ De la conducta patriótica y prudente de Lezama Leguizamón se han visto ya testimonios más arriba; no fué siempre sin embargo tan puro su fuerismo como ahora aparece, de lo cual también se habló á su debido tiempo.

días, todos se han reunido en derredor del trono de S. M., y los maticos políticos han desaparecido. La más considerable, poblada y bella de las poblaciones de Vizcaya, Bilbao, que en nuestra contienda no ha sufrido la menor parte de las desgracias que ésta ha llevado consigo, ha dado el primer ejemplo de fraternidad, de abnegación, y su ejemplo es de esperar no será perdido para los demás pueblos. Pero si el peligro de nuestras instituciones, despertando en el corazón de todos el amor hereditario que les profesamos, ha hecho desaparecer esas diferencias, que llamaré sin titubear extrañas á nuestros intereses, que no deberían habernos dividido jamás, en el resto de la Península no se han acallado aun todos los temores, todas las desconfianzas, y en manos de los señores apoderados está el darles mayor vigor ó el destruirlas de una vez.—Para destruirlas bastará que los señores apoderados manifiesten el mismo tino, la misma cordura, la misma confianza que hasta ahora ha desplegado el país como por instinto; que se huya de toda discusión que tienda á despertar odios, á renovar excisiones que no pueden existir; que las personas que sean revestidas con el carácter de Diputados generales sean hombres de orden, de responsabilidad, de honrosos antecedentes, y que presten al Gobierno de S. M., que tanta predilección nos dispensa, las garantías necesarias para que no pueda ver en ellos la Nación enemigos en lugar de amigos, jefes de partido en vez de magistrados rectos é imparciales. No sé si mis palabras hallarán eco en este recinto; pero si un íntimo convencimiento, un deseo recto y puro pueden dar peso á las palabras de un hombre, las mías deben tenerlo para la Junta de apoderados de Vizcaya.—Me dirijo á ella en esta persuasión, y no lo dudo, mi anhelo, el anhelo de todos los buenos patricios se cumplirá; el árbol de la libertad vizcaína, cuyas ramas dobló la tempestad, volverá á elevarse más frondoso que

nunca, volverá á abrigar bajo su sombra á todos sus hijos. ¿Qué mayor satisfacción para un vizcaíno que el haber contribuido á esta obra, que el haber sacrificado en el altar de la Patria sus odios y sus preocupaciones? Por mi parte, señores, yo que me glorío, que me he gloriado siempre de pertenecer á este ilustre solar, si mis esperanzas se cumplen, si logro ver al Señorío libre, feliz y pacífico, contaré entre los días más dichosos de mi vida este en que me es permitido, tras tantos años de degracias, ver reunidos bajo la misma bandera, olvidados de sus rencores civiles, á todos los representantes, á todos los hijos de Vizcaya.

Se hizo una explicación del contenido de este discurso en vasconcelo para inteligencia de los que no comprendiesen bien el habla castellana, y la Junta se manifestó agradecida al amor del Corregidor al país y á sus instituciones.

Se nombró luego una comisión para reconocer los poderes, compuesta de dos individuos por cada Morindad y el primer Consultor vitalicio, y otra comisión, compuesta de los Padres de Provincia y del mismo Consultor para que examine los poderes de los individuos que han de formar aquélla.

Ambas comisiones presentaron sus respectivos informes el día 11. Decía la de revisión general de poderes: que se habían otorgado algunos de ellos sin tomar en consideración las cláusulas restrictivas acordadas por las Juntas generales en 1833; más como sus actas no fueron publicadas, debe respetarse el derecho electoral ejercido con arreglo al método anterior hasta que se circulen dichas actas en la forma ordinaria; que entiende de consiguiente que no obsta por ahora la falta del requisito de propiedad ó vecindad en el apoderado, y que surtiendo todo su efecto legal las sustituciones otorgadas hasta que recaiga la resolución de la Junta sobre este informe, se debe poner en debida ejecución

para lo sucesivo el acuerdo de Junta general de 13 de Julio de 1833; que Don Manuel Francisco de Foruria reúne los poderes de dos pueblos, no pudiendo representar más que á uno.

La comisión de Padres de Provincia no halló ningún defecto en los poderes sometidos á su examen.

Se suscitó la duda de si debería aprobarse lo propuesto acerca del acuerdo de la Junta general de 13 de Julio de 1833, y se suspendió la decisión de este punto, hasta que la Junta estuviese definitivamente constituida, aprobándose en todo lo restante el contenido de ambos dictámenes.

Foruria, que era apoderado por Guernica y por Guizaburuaga, optó por aquella Villa.

Se acordó que á los individuos del Gobierno universal, que iba á elegirse, se pudiese en posesión de sus honrosos cargos el día siguiente, después de celebrada la misa, y prestado el juramento de costumbre en manos del celebrante.

Descosa la Junta de manifestar la más viva gratitud al Duque de la Victoria «por los inapreciables beneficios que á su alta protección debe este Señorío, y por los que todavía se promete de sus hidalgos sentimientos», le nombró por aclamación Diputado general electo del mismo.

Se procedió por la tarde á la elección de los señores del nuevo Gobierno, y resultaron elegidos en la forma ordinaria Diputados, Síndicos y Secretarios de justicia, respectivamente, Don Federico Victoria de Lecea y Don Manuel María de Murga, Don Martín Antonio de Ozámiz Jausolo y Don José Faustino de Zubiaga, Don Pedro Ignacio de Anitua y Don Rafael de Menchaca.

El día siguiente 12 prestaron el juramento de estilo en la iglesia de la Antigua los individuos del nuevo Gobierno universal que se hallaban en Guernica, ocupando los pue-

tos de Diputados generales Don Federico Victoria de Lecea y el segundo del bando gamboino Don José Pantaleón de Aguirre, por ausencia del primero Don Manuel María de Murga.

Reuniéronse en seguida, previo el llamamiento de costumbre, bajo la presidencia de la nueva Diputación general, los representantes del Señorío, y se declaró su Junta general legítimamente constituida.

Propuso el Corregidor que se procediese inmediatamente á la proclamación de S. M. la Reina de las Españas Doña Isabel como Señora de Vizcaya, y al reconocimiento de su augusta madre Doña María Cristina como Gobernadora del Reino, y la Junta lo acordó unánimemente con igual júbilo que prontitud. La Diputación general, á invitación de la Junta, designó los individuos de la guardia de honor que custodiasen los retratos de SS. MM. que debían manifestarse al público en los solios colocados so el árbol y en las casas consistoriales de Guernica. Fueron designados al efecto los cuatro Padres de Provincia Aldecoa, Albiz, Salcedo y Anitua, los tres Regidores del Señorío, que se hallaban presentes, los Diputados provinciales que acababan de cesar Urioste, Vildósola é Iturriaga, el Mariscal de campo Don Simón de la Torre y el Brigadier Don Juan Antonio de Berástegui. «Pero observándose que muchos de los nobles y honrados labradores que asistían á la Junta con poderes de los pueblos de Vizcaya, tendrían sumo placer en participar del honor que iba á caer á los caballeros mencionados, alternando con ellos en la guardia de honor de los retratos de SS. MM. y dudándose del número de los que debían agregárseles, se resolvió por aclamación general y espontánea que los miembros todos de la Junta compusiesen la guardia de honor.»

Se hizo después la proclamación de la Reina como Seño-

ra de Vizcaya so el árbol, con el ceremonial de costumbre, se cantó un solemne Te Deum en la iglesia parroquial de Santa María de Guernica, y se trasladaron los retratos de las Reinas, que habían quedado so el árbol, á los balcones de las casas consistoriales de aquella Villa, «mezclándose y confundiéndose con la más pura y fraternal efusión militares de alta graduación con propietarios, comerciantes y labradores», y asomado á los balcones el Síndico Ozámiz Jausolo, volvió á proclamar, con el pendón del Señorío desplegado, Señora de Vizcaya á la Reina Doña Isabel segunda, arrojándose al pueblo monedas de plata y cobre.

Concluida esta ceremonia, se fijó el pendón debajo de los retratos, y tanto el Corregidor como los individuos del Gobierno universal, Padres de Provincia y apoderados «se entregaron al esparcimiento y al gozo, disfrutando de los fuegos, novillos y otros festejos agradables á los naturales del país, y tomaron una parte muy principal en las danzas con que se celebró el fausto acontecimiento, que tras largas é imponderables calamidades presagia á este solar ilustre un porvenir de prosperidades, de sólida y sincera unión (cimentada en identidad de interés y sentimientos) y de ventura, si estrechamente aunados quieren conservar, como lo querrán y sabrán sin duda con entereza, cordura y dignidad, el inmortal depósito de sus leyes especiales».

A propuesta de uno de los apoderados, se acordó el 13 imprimir el discurso de apertura leído por el Corregidor, y que se le diesen las gracias por las ideas y sentimientos que expresó, dignos de un buen hijo de este ilustre solar.

También se acordó elevar á la Reina Gobernadora una exposición, manifestándole la gratitud profunda de los vizcaínos por su maternal solicitud y por la decisión previsora que el Gobierno, inspirado por su sabiduría, supo mostrar para obtener de los cuerpos colegisladores la confirmación

de los Fueros; y dar gracias á los Ministros, á los Diputados á Cortes y Diputados generales, «y á cuantos han contribuido con sus esfuerzos y trabajos á restituir la paz á Vizcaya, reconciliar los ánimos de todos sus hijos, ulcerados por amargos padecimientos, y conservarles sus instituciones venerables y queridas.»

Urioste que venía de apoderado por los tres Concejos de Somorrostro, pidió en nombre de los individuos de la Diputación provincial, que el día anterior cesó en sus funciones económicas gubernativas, prestando del origen que tuvo su autoridad, que se reconocieran escrupulosamente las cuentas, correspondencia y libros relativos á su administración, y se ofreció á desvanecer con francas y claras explicaciones cuantas dudas pudiesen ocurrir al examinarlas, añadiendo que deseaba se hiciera mérito de su moción en el acta; todo lo cual lo acordó la Junta por estimarlo conveniente y justo.

Para revisar los papeles mencionados, y las cuentas tanto de la Diputación general como de la Diputación de Durango, se creó una comisión compuesta de dos individuos por Merindad, y otra de uno por Merindad y el Consultor para hacerse cargo de los memoriales presentados á la Junta.

Se leyeron después la ley de 25 de Octubre y el real decreto de 16 de Noviembre relativos á la confirmación de los Fueros, que son del tenor siguiente:

«Artículo 1.º Se confirman los Fueros de las Provincias Vascongadas y de Navarra, sin perjuicio de la unidad constitucional de la Monarquía.

»Art. 2.º El Gobierno, tan pronto como la oportunidad lo permita, y oyendo antes á las Provincias Vascongadas y á Navarra, propondrá á las Cortes la modificación indispensable que en los mencionados Fueros reclame el interés de las mismas, conciliado con el general de la Nación y de la Cons-

titución de la Monarquía, resolviendo entretanto provisionalmente y en la forma y sentido expresados, las dudas y dificultades que puedan ofrecerse, dando de ello cuenta á las Cortes.»¹

¹ El Ministro de Gracia y Justicia el 19 y el de la Gobernación el 20 de Octubre, explicaron en el Senado lo que debía entenderse por unidad constitucional, con relación á los Fueros de las Provincias Vascongadas. Esta es la interpretación que puedo reputarse auténtica, pues con arreglo á ella se procedió á votar el proyecto de ley presentado por el Gobierno.

El Ministro de Gracia y Justicia dijo lo siguiente: «Yo salvo la unidad de las cosas en los grandes vínculos, en los grandes principios, en las grandes formas, y creo que se salva la unidad constitucional habiendo un solo Rey constitucional para todas las Provincias, un mismo poder legislativo, una representación nacional común.»

El Ministro de la Gobernación se expresó en estos términos: «Si las Constituciones, señoras, son los códigos políticos en que se consignan las relaciones de los gobernantes con los gobernados, la forma de los Gobiernos y la división de los poderes, claro es que estando consignada en nuestra Constitución la unidad de la Monarquía, porque uno es el Monarca, porque una es la representación nacional, porque uno es el origen de la justicia que nace del Rey, porque unos son los derechos políticos cardinales, digámoslo así, de los ciudadanos, unidad constitucional será la conservación de todos los grandes vínculos bajo los cuales viven y se gobiernan los españoles. ¿Y la concesión de Fueros que propone esta ley ofende la unidad constitucional? Claro es que no.»

La ley de 25 de Octubre de 1839 alteraba, como se deduce de estas explicaciones, los principios de la Constitución de 1837, que estableció la uniformidad de leyes en toda la Monarquía, debiendo considerarse por lo tanto aquella ley un acta adicional á la Constitución de la Monarquía, como se sostuvo muy acertadamente en estas Provincias, para dar su verdadero valor á la confirmación de los Fueros, que de otro modo hubiera sido ilusoria. De esta suerte se mantenía la observancia de la Constitución en la generalidad de la Monarquía, pero limitándola en las Provincias Vascongadas, en los términos establecidos por una ley especial, que tenía el mismo valor que aquella Constitución.

Tal vino á ser, en sustancia, la opinión de la Junta general al aprobar el informe de la comisión que se nombró para hacerse cargo, tanto de esta ley como del decreto de 16 de Noviembre.

«Artículo 1.º Las Provincias de Vizcaya, Alava y Guipúzcoa procederán desde luego á la reunión de sus Juntas generales y nombramientos de sus respectivas Diputaciones para disponer lo conveniente al régimen y administración interior de las mismas y á la más pronta ejecución de la ley de 25 de Octubre último, procediendo en todo sin perjuicio de la unidad constitucional de la Monarquía, como en la misma se previene. La reunión de las Juntas se verificará en los puntos donde sea de Fuero ó costumbre.

»Art. 2.º Los Jefes políticos que actualmente lo son de Vizcaya y Guipúzcoa, quedan como Corregidores políticos, con las atribuciones no judiciales que por el Fuero, leyes y costumbres competían á los que lo eran en dichas Provincias.

»Art. 3.º Las elecciones de Senadores y Diputados á Cortes se harán en las tres Provincias en la forma establecida por las leyes para el resto de la Monarquía. Las Diputaciones provinciales elegidas por el método directo continuarán limitándose por ahora á entender solamente en lo relativo á este asunto, y se procederá á su renovación total á fin de que puedan tener parte en ella los pueblos que hasta aquí no habían podido verificarlo por circunstancias de la guerra.

»Art. 4.º La Provincia de Navarra nombrará desde luego y por el método establecido para las Diputaciones provinciales una Diputación compuesta de siete individuos, como antes constaba la Diputación del Reino, nombrando un Diputado cada Merindad, y los dos restantes las de mayor población. Las atribuciones de esta Diputación serán las que por Fuero competían á la Diputación del Reino; las que siendo compatibles con ellas señala la ley general á las Diputaciones provinciales; y las de administración y gobierno interior que competían al Consejo de Navarra; todo sin perjuicio de la unidad constitucional, según se previene en la ley citada de 25 de Octubre.

»Art. 5.º Las elecciones de Senadores y Diputados á Cortes se verificarán también en Navarra en la forma establecida por las leyes generales para el resto de la Península.

»Art. 6.º La renovación de Ayuntamientos se verificará en las cuatro Provincias según tengan de Fuero y costumbre, debiendo tomar posesión de sus destinos los nuevamente nombrados para el primero de Enero del año próximo de 1840. Los nombramientos de Alcaldes se expedirán gratis en Navarra por el Virrey.

»Art. 7.º Las Provincias Vascongadas en sus Juntas generales, y Navarra por la nueva Diputación, nombrarán dos ó más individuos que unos á otros se sustituyan, y con los cuales pueda conferenciar el Gobierno para la mejor ejecución de lo dispuesto en el artículo segundo de la ley de 25 de Octubre.

»Art. 8.º Como en la misma se previene, cuantas dudas ocurran en su ejecución, se consultarán con el Gobierno por medio de la autoridad superior del ramo de que se trate».

Vertidos al bascuence ambos documentos para completa inteligencia de los apoderados, «se promovió una discusión tan grave y detenida como lo escabroso é importante del asunto requería. El resultado de ella fué que se acordó declarar abierta la Junta, y nombrar una comisión que deberá manifestar á la propia Junta lo que acerca de la ley y real decreto mencionados estime conveniente». Se dispuso que esta comisión constase de los Padres de Provincia, del Consultor y de dos individuos elegidos por cada Merindad, y se encargó á la misma comisión que presentase una lista de candidatos, entre los cuales se elijan los individuos de que habla el punto cuarto de la convocatoria, ó sea para tratar con el Gobierno acerca de lo dispuesto en el artículo segundo de la ley de 25 de Octubre.

Se comenzó el 14 á tratar del punto quinto de la convocatoria, y el Secretario Hormaeche «dió cuenta con este motivo de las gestiones practicadas por la Diputación general para conservar ilesas las instituciones de este país, que debía defender y defendió con entereza, como guarda celosa y vigilante. En la lectura que hizo de algunos documentos, se notaron varias frases que, aunque hijas de las circunstancias en que fueron redactadas, podían, produciendo recuerdos desagradables, turbar la confraternidad feliz que reinaba entre los buenos vizcaínos; y se acordó por unanimidad, no sólo que se suspendiese dicha lectura, sino que se tildasen aquellas expresiones, y otras de índole opuesta y apasionada que habría en los libros y papeles de la Diputación de Durango; sin dejar por eso de dar las gracias á cuantos hubiesen con sus esfuerzos patrióticos contribuído á sostener y recobrar el régimen foral». El punto quinto de la convocatoria se refería á «las gestiones practicadas por la Diputación general durante su existencia, y posteriormente por la Diputación provincial, para la conservación del sistema foral de Vizcaya».

Se habló de las reclamaciones relativas á los suministros prestados á las tropas por los pueblos y particulares en la última guerra, y de la manera mejor de transigir las diferencias entre unos y otros, sin perjuicio del arreglo general que habrá de hacerse en este ramo; y se acordó que los Ayuntamientos convocasen á todos los propietarios vecinos y forasteros de su jurisdicción, para concertarse armoniosamente con ellos, y proponer á la Diputación los medios de cubrir los gastos que procedan de esta clase de servicios; autorizando á la misma para aprobarlos ó desaprobarlos, en vista de las razones de los que por no haber sido citados oportunamente ó por otras causas legítimas no se conformasen con las decisiones de la mayoría de los interesados.

Se suspendió por lo avanzado de la hora la discusión comenzada acerca de los peajes que á los bagajeros se exigían en los caminos del Señorío, en virtud de las condiciones bajo las cuales se habían rematado.

El apoderado de Bilbao Don Manuel María de Guendica, expuso el 15, por sí y en nombre de su compañero Don Santiago María de Ingunza, «que habiéndose dado cuenta en la sesión de ayer del punto quinto de la convocatoria, y recaído un justo voto de gracias en favor de todos los que han contribuido con sus esfuerzos á la defensa de las instituciones forales, se hallaba en el caso de hacer una breve reseña de los que ha empleado su comitente desde que peligró la existencia del código vizcaíno con el restablecimiento de la Constitución política de la Monarquía del año doce, ocurrido en Agosto de 1836», sin perjuicio de remitir después á la Diputación una relación más circunstanciada.

Expuso Guendica «que la Villa de Bilbao, celosa siempre por la conservación de los Fueros vizcaínos, lo había manifestado así por medio de sus autoridades locales. Que sin embargo de que el señor Comandante general de Vizcaya ordenó terminantemente á las mismas que prestaran entonces el juramento á dicha Constitución, lo rehusaron abiertamente los individuos del Ayuntamiento, Tribunal y Junta de comercio de Bilbao, interin no se cumpliera con el indispensable requisito del uso foral, ó se les permitiera al menos causar la reserva suficiente á preservar en todo evento los derechos de este ilustre solar. Que no habiéndose accedido á lo primero, y obligados de consiguiente por la irresistible fuerza de las circunstancias á prestar el juramento, lo hicieron bajo la formal protesta de que aquel acto no pudiera causar perjuicio alguno á los derechos generales del país en la conservación de los Fueros, buenos usos y costumbres con que se ha gobernado desde tiempo

lunemorial, ni en las ordenanzas particulares con que se ha regido el Ayuntamiento. Que los individuos de éste, antes de ser reemplazados, elevaron á S. M. la Reina Gobernadora una roveronte y enérgica exposición pidiendo el restablecimiento de la Diputación foral, así como posteriormente lo hizo la real Junta de comercio. Que promulgada la Contitución del año 1837, los individuos que entraron en Ayuntamiento en los años de 1838 y 1839 preservaron también los derechos de este Señorío con una solemne reserva igual á la ya referida. Que á luego de verificado el célebre convenio de Vergara, se apresuró el Ayuntamiento de Bilbao á dirigir una bien sentida representación á las Cortes de la Nación y otra á S. M. la Reina Gobernadora, solicitando la confirmación de los Fueros que han hecho la felicidad del suelo vizcaíno, proponiendo este medio como el único para conseguir una paz firme y duradera, y como una medida de política, conveniencia y justicia, y el premio á que aspiraban los bilbaínos por sus relevantes servicios á la Reina nuestra Señora». Añadió Guendica «que además se habían elevado á las Cortes y al Gobierno otras varias exposiciones en este sentido por los naturales y vecinos de Bilbao; y que aunque esta Villa estaba lejos de creer que á su sola mediación se debiera la confirmación de nuestros venerandos Fueros y la reunión del país en Junta general, habiendo otras influencias de mayor peso, se persuadía sin embargo que la suya habrá contribuído bastante á tan feliz resultado; sin que por ello apetezca otra recompensa que la gratitud de Vizcaya, que sabe ha merecido como ardiente defensora de sus Fueros, franquezas, libertades, buenos usos y costumbres, y concluyó pidiendo á la Junta general que, tomando en consideración lo que acababa de exponer, se sirviera acordar que se hiciese constar en el acta de la sesión.»

«Y la Junta, no sólo dispuso que así se ejecutase, sino que se dieran además las gracias más expresivas á las autoridades y habitantes de aquella noble Villa, por el celo eficaz que habían desplegado para evitar la pérdida de las instituciones vizcaínas».

Renovóse la cuestión que quedó por resolver el día anterior acerca de los portazgos que deberían pagar los bagajeros; y después de un corto debate, se acordó que por lo que respecta á todos los caminos que sean de propiedad del cuerpo general del Señorío, se imponga á los nuevos arrendadores de los portazgos de ellos, en cuanto terminen los contratos que tiene la Diputación pendientes, es decir, desde primero de Enero próximo, la condición de que no cobren derechos de portazgo á los bagajes destinados al servicio público; y que á las asociaciones á que pertenecen los demás caminos del Señorío, las excite la propia Diputación á que tampoco exijan semejantes derechos, por ser éste el deseo general del país, manifestado por los que en su representación han asistido á la Junta.

La comisión encargada de informar acerca del cumplimiento de la ley de 25 de Octubre y del real decreto de 16 de Noviembre propuso: que se puede proceder al nombramiento de los representantes en Cortes de Vizcaya; «que éstos deben ponerse en marcha con premura para Madrid, y conferenciando allí con los representantes de las otras dos Provincias Vascongadas, aunados todos, tratar y discutir con el Gobierno sobre los medios convenientes para dar cumplimiento al artículo segundo de dicha ley; pero sin consentir en resolución alguna definitiva que pueda alterar los Fueros, franquezas y libertades de Vizcaya, porque en toda innovación foral, por pequeña que sea, debe preceder la anuencia expresa de la Junta general, con cuyo objeto queda ésta abierta para tomar en consideración las comuni-

caciones de los señores representantes en Corte en esta cuestión»; que dichos representantes «deben reclamar del Gobierno que desaparezcan, mientras se hace el arreglo definitivo, las infracciones del Fuero que llevan consigo los artículos segundo y tercero del real decreto arriba mencionado, y las que además está sufriendo Vizcaya en su sistema judicial». Aprobó la Junta por unanimidad en todas sus partes el dictamen de la comisión, acordando que se tuviera por decreto.

Se suscitó un debate animado con motivo de la moción de un apoderado, pidiendo que se mandase realizar completamente las contribuciones y derramas impuestas por la Diputación de Durango á los propietarios y vecinos de este Señorío, hasta 31 de Agosto último, cobradas ya en parte, oyendo antes en un término breve á los que se consideren agraviados; «pero lo espinoso é importante de la materia, la dificultad de conciliar intereses opuestos, y los deseos por algunos señores apoderados manifestados de establecer con maduro consejo bases generales para un arreglo de todos los gastos y reclamaciones que traen su origen de la guerra, vinieron á complicar la cuestión, y se suspendió la Junta sin resolverla».

Fueron nombrados el 16 individuos de la comisión que deberá trasladarse á Madrid «á procurar conseguir del Gobierno, por los medios más eficaces al intento, la íntegra conservación de los Fueros, franquenzas y libertades, buenos usos y costumbres de este Señorío», el Consultor primero vitalicio, ex-Diputado á Cortes y ex-Senador Don Casimiro de Lofzaga, el ex-Diputado á Cortes y Padre de Provincia Don Manuel María de Aldecoa, el ex-Diputado á Cortes y Secretario de gobierno Don Francisco de Hormaeche y el Síndico procurador general del Señorío Don Martín Antonio de Ozámiz Jausolo.

Declaró la Junta, en virtud de indicación hecha por un Padre de Provincia y apoderado, que si concurriese alguna vez el General Don Simón de la Torre, que asistía ahora como apoderado por Villaro, á las Juntas que se celebrasen en adelante como simple espectador, tendría derecho, «atendidos los servicios señalados que había prestado recientemente á este nobilísimo solar, y con buen éxito, para restituirle la paz, á sentarse en los bancos destinados á los señores Padres de Provincia».

Volviendo á tratar el punto de las contribuciones impuestas por la Diputación de Durango, se acordó que los pueblos del Señorío quedasen autorizados para continuar recamlando las contribuciones atrasadas hasta 31 de Agosto último, que hubiese mandado exigir aquella Diputación, con arreglo á la estadística 1823; pero sin perjuicio de que las cuentas de las respectivas Justicias puedan ser examinadas por los interesados en ellas, y de que los que se consideren perjudicados puedan reclamar de la Diputación su dasagravio.

Se autorizó á la Diputación para formar un cuerpo de miqueletes, dejando á su discreción el número de plazas de qua ha de constar, según las circunstancias, pero con arreglo al espíritu de los antiguos reglamentos.

Deseosa la Junta de adoptar alguna disposición eficaz y equitativa para reparar en lo posible los daños ocasionados por la última guerra, nombró una comisión, compuesta de dos individuos por cada Merindad, para que examine todas las reclamaciones que se hubiesen hecho ó se hicieren sobre esta materia, y proponga el remedio que juzgue más oportuno y asequible.

Se acordó también:

Que la Diputación general nuevamente nombrada concluya su bienio en fin de Julio de 1841, á fin de entrar en el orden regular y acostumbrado.

Acoger bajo el amparo y protección de la Junta á las religiosas y al clero de Vizcaya, encargando á la Diputación general que active y promueva con solicitud y empeño cuantas gestiones sean necesarias para asegurar su decorosa subsistencia.

Dar las más expresivas gracias por su comportamiento patriótico y vizcaíno á los individuos de la Diputación provincial, en cuyo nombre expuso Urioste que se prestarían gustosos á no intervenir en las operaciones electorales, únicas que les estaban cometidas por el real decreto de 16 de Noviembre último, y á quedar reducidos á la clase de simples particulares, si la Junta lo juzgaba conveniente; declarándose que así debía hacerse, pues sería sobremanera útil á los intereses del país.

Pedir á la Reina Gobernadora que se autorice á la Diputación general á desempeñar las funciones cometidas á la provincial, que se había ofrecido á cesar desde el momento, pues no debía consentirse la formación de ninguna otra.

Que se reimprima y circule nuevamente el reglamento provisional para la administración de justicia, supuesto que se halla revestido del Fuero, á fin de que haya la indispensable uniformidad en esta materia en todo el territorio del Señorío.

Que las leyes, decretos, provisiones reales, y cualesquiera otras resoluciones que no obtuviesen el correspondiente uso foral, no se circulen por la Diputación ni se contemplen en Vizcaya con la suficiente fuerza obligatoria.

Indemnizar al Padre de Provincia Don Domingo Eulogio de la Torre de los desembolsos que ha hecho, y autorizarle á pagar las gratificaciones que hubiese ofrecido para el recobro de los trescientos ocho vales pertenecientes al Señorío, que estaban depositados en las oficinas del crédito público, y á que procure terminar los puntos relacionados con dicha

reclamación que aun se hallan pendientes; dándosele además las gracias por el celo é inteligencia con que manejó este delicado negocio.

Que se guarde el decreto de la Junta general de 18 de Julio de 1831, en virtud del cual deben pasar á la Diputación los memoriales que se presenten á la Junta.

No habiendo más asuntos importantes y perentorios que tratar, suspendió la Junta sus sesiones para continuarlas cuando volviese á ser convocada.

El 23 se constituyó el nuevo Regimiento en Bilbao, y se tomaron los acuerdos acostumbrados al instalarse el nuevo Gobierno, no comprendiéndose por primera vez en ellos, los relativos á las filiaciones de forasteros y á la expulsión de negros, mulatos y gitanos.

La nueva Diputación general había publicado ya la circular siguiente:

«Al encargarse esta Diputación general de administrar y regir el Señorío de Vizcaya, se propuso consagrar todos sus desvelos á labrar su bienestar y su dicha, á defender sus instituciones milagrosamente restauradas, á restañar todas las heridas abiertas por una lucha que se ha cebado en él por espacio de seis años. Sabidos deben ser los principios que profesan los miembros de esta corporación tutelar; sabido su amor á los Fueros, que todos los vizcaínos veneran. Alguno de ellos, en circunstancias algo delicadas, demostró igual constancia que entereza, llevando su inflexible respeto á las leyes especiales de este país hasta un extremo que no es preciso encarecer para que sea apreciado.—La Diputación general se dirige con la confianza que le inspira la pureza y rectitud de sus intenciones á las Justicias de este Señorío, sin dudar un momento que en todas hallará simpatía, que todas se apresurarán á ayudarla en la tarea laboriosa y difícil, pero no desnuda de gloria, que va á emprender con resolución.

Si ha de darle pronta y gloriosa cima, no sólo ha menester suma perseverancia, no sólo ha menester un tacto y una habilidad, que supliría, si le faltasen, con su celo acrisolado, sino que necesita también de la cordura de todos los hijos de este solar, en que empieza á renacer la antigua alegría, y señaladamente la cooperación de sus autoridades locales. —Después de largas guerras, en los países más morigerados suelen como residuos de ellas aparecer salteadores y malhechores. Si á fuerza de vigilancia y de actividad no se los extingue pronto, introducen la perturbación y el sobresalto en el seno de las familias, con especialidad cuando, como en este Señorío, habitan caseríos dispersos, entorpecen las comunicaciones interiores, y causan males incalculables. Además, siempre quedan por desgracia algunos genios descontentadizos y turbulentos en los pueblos, que se agitan incesantemente por encender la apagada llama de la discordia para medrar con la común ruina. --En vano la Junta había decretado crear, según el antiguo reglamento, un cuerpo de miqueletes, y en vano la Diputación se afanaría en formarlo, si las Justicias apáticas y medrosas no hiciesen cuanto estuviese á su alcance por dar partes puntuales y circunstanciados de lo que observasen en sus territorios respectivos, no estuviesen alerta día y noche por ahogar las primeras semillas de sedición ó de crimen, no trabajasen con ahinco, á fin de que la paz inapreciable y santa que hemos recobrado no se vuelva á alterar, y sobre comprometer nuestro reposo, y los cortos restos de nuestra riqueza, se comprometan las instituciones, que son prenda segura de alianza y de unión fraternal entre los vizcaínos, como lo son de prosperidad y de ventura. Así, pues, la Diputación general recomienda á V. que cuide de poner inmediatamente en conocimiento del señor Diputado general de turno cualquier acontecimiento que ocurra en su ju-

jurisdicción, y pueda conturbar el reposo de ella, ó amenazar la vida ó la seguridad de los caminantes. La Diputación sentiría tener que castigar omisiones voluntarias en este punto, porque quisiera ejercer una autoridad tutelar y templada, según á su índole popular y sus deseos corresponde; pero si ha de proteger con la energía y firmeza necesarias en el día, para que las pasiones bastardas que tal vez fermentan sorda y oscuramente no levanten su cabeza, á los habitantes pacíficos y honrados de este suelo, menester es que despliegue una severidad saludable con los que por culpable indolencia ó por olvido de sus deberes no cumplieren este precepto fácil con exactitud.—A fin de que cuanto antes pueda organizarse el cuerpo de miqueletes arriba mencionado, convendrá que á los vecinos del distrito sometido á su autoridad que quisieran servir en él, y á una honradez intachable reúnan la cualidad de ser sobrios, robustos y naturales de este país, los inviten á que eleven sus solicitudes á la Diputación general.—La Diputación está segura, de que interesado V. vivamente en que no se reproduzcan las calamidades espantosas, cuyos efectos todos los vizcaínos tienen que llorar más ó menos amargamente, en que los Fueros se salven de los peligros que puedan amenazarlos, comprenderá su verdadera posición, y nada perdonará por su parte para contribuir á que los benéficos designios que ha concebido y trata de realizar, sean coronados con el resultado más completo y feliz».

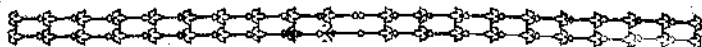
Se anunció el 20 para el 29 la celebración de los remates de los arbitrios del Señorío correspondientes á todo el año de 1840.

Pasó la Diputación el 21 una circular diziendo, que como es el primero de sus deberes guardar y hacer que se guarden las instituciones tutelares del Señorío, no debo ni puede prescindir, atendido el espíritu y letra de la ley sexta,

título primero de los Fueros, de pedir respetuosamente al Gobierno de la Reina, el cual ha comenzado á cumplir de buena fe la ley de 25 de Octubre, que no permita á sus agentes introducir la menor novedad en la manera de percibir y hacer el reparto de la prestación decimal, hasta que definitivamente, y de acuerdo con las Juntas generales de las Provincias Vascongadas, se fije la suerte de ellas.—Encarga, por consiguiente, la Diputación á todas las Justicias del Señorío, que procuren por ahora, y mientras se halle pendiente dicho arreglo, no consentir innovaciones de ninguna clase, ni en la cobranza y distribución de diezmos, ni en que se prive al clero y á las religiosas del propio Señorío de los bienes que estuviesen disfrutando.

Hizo saber el 28 la Diputación á los pueblos, que el Subdelegado de rentas de Cantabria había oficiado al Comandante de carabineros, que restablecidas las aduanas en el pie en que se hallaban en 1833, debe hacerse el servicio con arreglo al capitulado de 1727, que es la base trazada para el resguardo, en punto á registros, reconocimientos y persecución del contrabando, «así como la línea de las aduanas y territorio allende hacia Castilla el campo en que libremente podrá el resguardo ostentar su celo y vigilancia para impedir introducciones furtivas al país contribuyente.» Motivó esta advertencia la queja que se recibió de que una partida de carabineros había procedido al registro de casas, carros y personas en jurisdicción de Orozco.





CAPÍTULO XVI

1840



En circular firmada por el Comandante general, el Jefe político, y los Diputados Victoria y Murga el 3 de Enero, se previno á los vicarios, que todos los individuos de la clase de tropa, que correspondían á la extinguida división vizcaína, habían dejado de ser soldados, aunque por la complicación de los sucesos se retiraron muchos de ellos á sus casas antes de que se les expidiesen las licencias absolutas, y que, por consiguiente, no deben los párrocos negarse á casarlos por esta sola falta.

Se acordó el 13 reimprimir y poner en ejecución la circular de 4 de Octubre de 1831 sobre la mendicidad.

Para organizar la administración municipal, y disponer los justos medios de ocurrir á las obligaciones pendientes, resolvió la Diputación el 18, con arreglo á lo acordado por la Junta general en 18 de Agosto de 1831, que los Ayuntamientos que soliciten autorización para exigir un repartimiento directo, envíen los comprobantes que á continuación se expresan, formados con citación y asistencia de los propietarios de los pueblos respectivos, que residan fuera de su jurisdicción. 1.º Un estado comprensivo del producto anual de los propios y arbitrios concejiles, y del importe

de todas las obligaciones municipales ordinarias. 2.º La cuenta general del valor que representen los bagajes, propios, espías, guías y cuarteles, y de las derramas ó reparos puramente vecinales, exigidos desde Octubre de 1833. 3.º Una relación circunstanciada de los respectivos contingentes que desde Octubre de 1833 se hayan exigido á la propiedad particular, anotando el valor que cada finca representa en la estadística del año 1823, y el tanto por ciento que se le haya cargado. 4.º Un extracto de las órdenes superiores, en cuyo cumplimiento se hubiese repartido y exigido la contribución á la propiedad territorial. 5.º La cuenta documentada de las cantidades entregadas en metálico y en especie, por contribución, y el valor que con arreglo á los precios designados por la Diputación representen así dichas especies como lo suministrado á los militares.

«Todos los esfuerzos», decía la Diputación en circular del 28, «deben dirigirse ahora á la conservación de la paz, tan necesaria para cicatrizar la llaga que formaron los años pasados;» pero no deja de haber díscolos y vagabundos cuyos vicios ha fomentado el desorden de la guerra. Por eso la Junta general acordó la formación del cuerpo de miqueletes; y la Diputación general, al cumplir el decreto de la Junta, ha visto con singular placer á la juventud vizcaína correr á inscribirse en aquel cuerpo, en mayor número del que es necesario por ahora. Los miqueletes han prestado algunos servicios, sin acabar todavía de organizarse; pero para que sean eficaces sus operaciones, es preciso que cuenten con la ayuda de las personas pacíficas, y señaladamente de los Alcaldes y Justicias, á los cuales se dirige la Diputación por medio de esta circular, para que sin perjuicio de lo que se disponga cuando haya terminado la organización de dicho cuerpo, adviertan al que mande la fuerza más inme-

diata de él de cualquier delito ó alteración del orden, de que se tuviera noticia en sus respectivos distritos, á fin de que puedan los miqueletes proceder como corresponde; dándose también cuenta á la Diputación, en funciones de policía, para su gobierno, de cualquier caso grave que ocurra.

Acordó la Diputación el mismo día, mirando por el bien de los vizcaínos, que se pague de la caja del Señorío, y como adelanto á la Hacienda militar, una cuarta parte de los sueldos, correspondientes al mes de Diciembre último, á los Jefes y oficiales de la extinguida división vizcaína.

El 8 de Febrero se reunieron en Bilbao en conferencia los comisionados de las Provincias hermanas, asistiendo en representación de Vizcaya los Diputados generales y el Consultor Lotzaga. Aunque correspondía esta vez el señalamiento de sitio á la Provincia de Alava, aquella Provincia, en atención al mal estado de la salud de Lotzaga, señaló á Bilbao para celebrar la conferencia.

Se tomaron en consideración las circunstancias que promovieron la última guerra, agravadas con el recelo de la pérdida del régimen foral, y el favorable desenlace que se obtuvo con la ley pacificadora de 25 de Octubre del año próximo pasado. Convinieron todos los concurrentes en que no se pueden reparar los males padecidos sin la conservación de los Fueros, en favor de los cuales está el sentimiento popular tan decidido y unánime, «que no pudiera ser contrariado ni falsificado sin peligros espantosos»; en que no cabe en los altos fines políticos de dicha ley, ni en el espíritu del real decreto de 13 de Noviembre último, el esterizarlos con hechos posteriores; deduciendo de todos estos antecedentes que la modificación de los Fueros no podría dañar á su conservación, sin notable inconsecuencia, que no puede atribuirse á los altos poderes del Estado; que es indispensable que en la modificación prepondere el princi-

pío de que los Fueros constituyen un sistema perfecto de gobierno y administración, bajo el cual se han obtenido en estas montañas todas las ventajas sociales, sin perjuicio ajeno; y en que no pudiendo sor la mente de aquellos poderes que tales ventajas se mengüen y debiliten, podrían los comisionados de las tres Provincias, como regla de conducta, poner todo su empeño en conservar cuanto sea posible el sistema foral en cada uno de los ramos de la administración pública, por ser el medio más seguro de consolidar la paz, y corresponder á la espectación y confianza general.

Prosiguiendo la conferencia el 9 en el estudio de este asunto, fijó detenidamente su atención en el clero, tan digno de respeto, y cuya influencia es tan necesaria para mantener la paz y la debida subordinación á las leyes; y se acordó proponer, como el medio mejor para remediar la situación precaria en que se halla esta benemérita clase, que las Diputaciones generales inviten al clero de sus respectivas Provincias á que nombre una comisión de su seno que combine con ellas los medios de cubrir las atenciones del culto, y concierte con el Gobierno lo que corresponda, del cual se ha de implorar el auxilio que su religiosidad ha prometido, señaladamente á los religiosos, y más aun á las religiosas, á quienes podría devolverse la administración de sus bienes.

Los días 10, 11, 12 y 13 siguientes se acordó representar al Gobierno á fin de que atendiese á los oficiales convenidos en Vergara; que se levante en aquella Villa un monumento que perpetúe el recuerdo del convenio, y se acuñen medallas con el mismo objeto; y que la fuerza que sostienen las tres Diputaciones se ayude mutuamente, en el caso de que haya quien intente alterar el orden, á pesar del buen espíritu de los pueblos.

Se acordó el 20 por la Diputación hacer un reparto men-

sual de cuatro reales por cada vecino, que se exigirá á contar desde primero de Enero del presente año entre los nueve distritos en que está dividido el Señorío, en virtud de la circular de 15 de Enero de 1834, con arreglo á los censos de población de 1797, 1810 y 1826, tomada su tercera parte ó término medio, y sacando de éste el número de vecinos, al respecto de cinco almas por vecino. La cantidad repartida al mes entre los nueve distritos era de ochenta y nueve mil quinientos noventa y seis reales.

Se aprobó el 29 el reglamento del cuerpo de miqueletes, el cual debía constar por ahora de una fuerza aproximativa de quinientos hombres, divididos en veinticuatro trozos de veinte hombres y en ocho partidas de sesenta. Cada partida tendrá dos cabos y otros dos cada trozo. El sueldo de los miqueletes será de ocho reales diarios, descontándoseles uno para vestuario. Los cabos de trozo tendrán nueve reales los primeros y diez los segundos; los de partida diez y siete y quince respectivamente.

El 23 de Marzo resolvió la Diputación, de conformidad con lo propuesto por el Síndico, asesorado por el Consultor, que no era admisible la solicitud hecha á nombre de la asociación del camino de Durango á Bermeo de que los pueblos contribuyentes pagan una cuota duplicada de la prorrata anual de setenta mil reales hasta que satisfagan los quinientos ocho mil reales que contra ellos resultan; porque dicha prorrata es el encabezamiento de diez y seis maravedís en cántara de vino foráneo, impuestos á ciento veinte y uu pueblos del Señorío por real provisión de 31 de Mayo de 1777, aprobando lo decretado por la Junta general en 22 de Julio de 1768, y tiene el verdadero carácter de contribución general, lo mismo que el arbitrio sobre el vino foráneo aplicado al camino de Bilbao á Durango, debiendo por lo tanto, ambos impuestos participar de igual suerte que los destina-

dos á la tesorería de Vizcaya. Los accionistas del camino de Durango á Bermeo,» dice el Síndico, «no se han detenido seguramente en examinar que su solicitud desquiciaría los principios del derecho público, barrenaría las reglas de justicia y equidad, y produciría sensaciones dolorosas que debe evitar muy cuidadosamente una política previsora. Ni pueden en caso alguno desconocer que su posición es menos desgraciada que la generalidad de la población vizcaína, pues que tan sólo se les deben cuatro años de réditos, y de los que probablemente se reintegrarán con el sucesivo producto de los arbitrios hipotecados, cuando los propietarios de Vizcaya han sido compelidos á contribuir con la totalidad de sus rentas devengadas en los seis años últimos, y el inquilinato y colonato ha pagado la tercera parte de la enormísima contribución territorial, además del impuesto extraordinario vecinal é industrial que les ha exigido la Diputación de Durango. Aun en la hipótesis de que hubiera derecho de reclamar de los pueblos dominados por Don Carlos las contribuciones impuestas antes de la guerra civil por la autoridad legítima, sería, sino imposible, muy peligroso, el intentar recaudarlas cuando sus propios y arbitrios concejiles son insuficientes á cubrir la inmensa deuda municipal que han contraído en tan aciagos tiempos. El primero de Septiembre último principió la nueva era de renovación de los anteriores derechos y obligaciones de Vizcaya. Nada debe exigirse á los pueblos por las contribuciones generales devengadas y no satisfechas desde el 3 de Octubre de 1833 hasta el 31 de Agosto de 1839, así como tampoco responde el cuerpo universal de Vizcaya de las obligaciones que hayan quedado pendientes de las contraídas por la Diputación formada bajo la dominación de Don Carlos. El Señorío se halla en la obligación de apoyar á los pueblos contribuyentes contra cualquier gestión que se entable para exigirles

las cuotas devengadas, durante la guerra civil, del encabezamiento ó prorrata anual de setenta mil reales.

El primero de Abril se publicó, de orden de la Diputación, el discurso que pronunció en el Congreso de diputados el 26 de Marzo el diputado á Córtes por Guipúzcoa, D. Valentín de Olano, que tantos plácemes valió á su autor, el cual hizo una elocuente defensa de las Provincias Vascongadas. Olano usó de la palabra al discutirse el párrafo sexto del proyecto de contestación al discurso de la Corona, en el que se hacía mérito del convenio de Vergara, para contestar á lo que algunos diputados de la oposición dijeron contra la extensión que se había dado al reconocimiento de los Fueros, anunciando con tal motivo proféticamente una larga cosecha de desventuras. Tratando de este discurso el diario madrileño titulado *El Corresponsal* el 28 de Marzo decía, entre otras cosas, que Olano no era elocuente á la manera de otros oradores que nombra, los cuales «llevan un sello en la frente, por el que se echa de ver que son el resultado propio de la civilización de nuestros días,» sino que en la elocuencia de Olano «se echa de ver desde luego, que es el resultado propio de una civilización especial, de una civilización que se rige por distintas leyes que la nuestra, y se echa de ver, en fin, que Olano es la personificación de un pueblo que forma, más bien que una semejanza, un contraste con los otros pueblos del mundo... Es tan cierto que Olano no es otra cosa que la personificación de Vizcaya, que todos los caracteres que distinguen á ese pueblo de los demás pueblos son los que cabalmente distinguen á ese orador de todos los oradores. Lo que constituye el fondo, si se nos permite hablar así, de su elocuencia, es lo que constituye el fondo del pueblo vasco: un buen sentido llevado hasta los límites del genio».

La Diputación de Vizcaya mandó reimprimir el discurs-

so, y dirigió al mismo tiempo un oficio gratulatorio á Olano, el cual contestó en 25 de Abril con otro oficio en el que se leen los párrafos siguientes: «Efectivamente, V. S. puede congratularse por la seguridad de que la causa de Vizcaya encuentra donde quiera simpatías y defensores... Nuestros hechos excitan interés con sólo referirlos, y para que nuestros Fueros obtengan un respeto general, basta que sean conocidos. ¡Felices nosotros, si observándolos fielmente conservamos al país el bienestar que ha heredado de sus mayores!»

El 10 de Abril se elevó á la Reina Gobernadora una exposición de los habitantes de Bilbao, que llevaba más de setecientas firmas, en la cual, después de pintar el estado de Vizcaya, y particularmente de Bilbao, donde se ha conservado siempre el orden mejor que en otras partes, comparando el rigor que aquí se observa con la lenidad empleada en Madrid, se pide á la Reina, «que escuchando nuestros clamores se sirva mandar levantar el estado de sitio que pesa sobre Vizcaya, y particularmente sobre Bilbao, restablecer así la fuerza de las leyes, y permitir ya á los ciudadanos el goce de sus derechos y garantías que esas leyes les conceden. Si contra lo que es de esperar hay conspiraciones que comprometan la tranquilidad pública, á las autoridades toca velar para conservarla; y si no obstante sus esfuerzos, se turbase por desgracia, entonces bajo la ley marcial ó bajo otra cualquiera, V. M. recibiría sin duda una prueba más de los nobles sentimientos de adhesión á la augusta persona de V. M. que animan hoy á la generalidad de los habitantes de este Señorío, y de que los de la Villa invicta, cualesquiera que hayan sido sus servicios anteriores, no han olvidado sus juramentos de verter hasta la última gota de sangre en defensa de V. M.»

En el mismo sentido elevó á la Reina el 22 el Ayuntamiento de Bilbao una exposición, en la cual atacaba ade-

más duramente al General Arechavala, diciendo «que nada tiene de político, conciliador y cortés... y si estos defectos son trascendentales en el país que hasta ahora ha seguido el bando de Don Carlos, ¿qué efecto no producirá sobre estos leales habitantes que tras todos sus sacrificios se ven aun expuestos á los caprichos de una autoridad violenta y excepcional cuando nada parece hacerlo necesario?»

Por circular expedida el 10 de este mes se mandó depositar el hierro extranjero que se introduzca en Vizcaya en los almacenes que tiene la Diputación en Bilbao, de donde se sacará para fuera del Señorío, con las precauciones convenientes y con guía que dará el Juez de contrabando. Se fijan un derecho de almacenaje de ocho maravedís en quintal de cien libras, al año, y otros ocho maravedís por derecho de peso. Si se destinase dicho hierro á su consumo en el Señorío, pagará á la Diputación, en el acto de ser extraído de sus almacenes, con arreglo á la tarifa que se establece un derecho de treinta á setenta reales en quintal, ó de uno á ocho reales en libra, según las clases.

Se reunieron el 20 en Azpeitia los comisionados de las tres Provincias, asistiendo por Vizcaya Don Federico Victoria de Lecea y Don José Pantaleón de Aguirre. Se trató de las medidas que podían adoptarse para impedir la naturalización del hierro extranjero; y se acordó excitar á las Diputaciones, á que tomando todos los informes de que esta materia fuese susceptible, rectifiquen en lo que pueda convenir las tarifas que rigen para la introducción del hierro en lo correspondiente al consumo de su territorio, dejando al comercio todas las facilidades necesarias para que las remesas al interior tengan expedito su curso.

El 16 de Mayo se aprobó el reglamento para el cuidado y asistencia de los presos de la cárcel provisional del Señorío, y el 18 se previno á los pueblos, que los miqueletes

no se pueden apropiar regalías que corresponden á los cuerpos de tropa, pues no son sino paisanos armados, sujetos á las órdenes de la autoridad foral, y que no pueden, por lo tanto, pretender que se les rebajen derechos municipales ó señoriales.

Con motivo de haberse aprobado por real orden en 21 de Abril último el acuerdo que tomaron el 8 de Febrero los representantes de los pueblos interesados en el camino proyectado de Bilbao á Balmaseda, circuló la Diputación el 10 de Junio un estado en el que se designa lo que en cada pueblo resulta aplicable á la empresa de dicho camino, después de cubiertas las preferentes atenciones á que se hallan ligados los arbitrios destinados á caminos.

Hizo saber la Diputación el 20 á los pueblos, que desde primero de Julio próximo no se admitirá en Guipúzcoa, á fin de evitar la introducción fraudulenta de hierros extranjeros, el hierro trabajado en Vizcaya, sino le acompaña una declaración del ferrón que lo trabajó, en la que consten haberse elaborado el hierro en su ferrería y la cantidad que se lleva, con una certificación del Alcalde ó Justicia del pueblo respectivo sobre lo mismo.

En circular que suscribían también el Comandante general Puig Samper y el Jefe político, se dirigió la Diputación el 22 á los pueblos, con motivo de haberse aproximado á Vizcaya la facción que mandaba Balmaseda, diciendo que se han tomado las medidas necesarias para que los enemigos de la tranquilidad pública no realicen sus intentos perturbadores; que los horrores cometidos por aquella facción, sobre todo con los convenidos en Vergara, marcan la senda que debe seguirse para castigar severamente á tan crueles enemigos de la tranquilidad pública, si llegan á pisar el suelo vascongado. La Diputación se pondrá al frente de la juventud vizcaína, compartiendo con ella los peligros, y en

ella y en la sensatez del país, y en la hidalguía con que cumple siempre lo prometido, fia la victoria más completa. Se ha dispuesto reunir en Bilbao á los oficiales de la extinguida división vizcaína, para irlos destinando, según las circunstancias, con sus grados, á las fuerzas de naturales del país que se organicen; se les pagarán sus haberes mientras estén al servicio del Señorío y se les darán raciones diarias. Estarán bajo el mando del General Don Simón de la Torre y de los Brigadieres Don Castor de Andéchaga, Don Juan Antonio de Goiri y Don Juan Antonio de Berástegui y de los Coroneles y Comandantes de la misma división. Se darán á los voluntarios dos reales al día y la ración de ordenanza, y serán llamados por la Diputación, á medida que se necesiten sus servicios. Orduña ha dado ya el ejemplo, armando á todos sus habitantes desde diez y siete á cincuenta años de edad, y en breve se adoptará igual determinación en los demás puntos que pueden ser amenazados. Vizcaya va á demostrar su lealtad á la Reina y su amor al orden.

Balmaseda entró en Francia por la frontera de Navarra, entre Vera y Echalar, sin haber penetrado en el territorio vizcaíno.

Por circular expedida el 30, se congratuló la Diputación del buen espíritu que había animado á Vizcaya con motivo de la aproximación de las fuerzas que mandaba Balmaseda. La Diputación se complace en cumplir con el grato deber de consignar «en el libro de sus actas la memoria de un suceso, que perpetuado de esta suerte, lega á nuestros hijos otro nuevo dechado de la nobleza y lealtad que han distinguido siempre á los virtuosos moradores del pueblo vascongado... Nunca Vizcaya se separará de los juramentos prestados en los memorables campos de Vergara; no desmentirá su hidalguía, la fé de su palabra, que con tanta

gloria suya, como mengua y escarnio de sus contrarios y émulos, que ya se anticipaban el goce de verla fallida, ha manifestado y confirmado en esta ocasión.»¹

El 5 de Julio circuló á los pueblos la Diputación una real orden en la que se manifestaba el aprecio con que había visto la Reina Gobernadora la conducta de Vizcaya y las pruebas de su lealtad en los últimos sucesos, y se insertaba una proposición, aprobada unánimemente por el Congreso de Diputados, en la que Don Pedro de Egaña, Don Valentín de Olano, Don Florencio García Goyena, y el Barón de Bigüelzal, pedían que se declarase «que las Provincias Vascongadas y Navarra han cumplido bien y lealmente lo prometido en los campos de Vergara». Olano apoyó esta proposición en un breve discurso.

Se publicó el 7 de orden de la Diputación la alocución que dirigía á los vasconavarros el Virrey de Navarra y Capitán general de las Provincias Vascongadas, en la que les dice, entre otras cosas, lo siguiente: «vuestra inimitable conducta en estos críticos momentos os hace superiores á vosotros mismos; la Patria y la Reina os tributarán á su debido tiempo un testimonio de gratitud por tanta nobleza, y en el ínterin me hago un deber tan agradable como sagrado en manifestaros todo mi reconocimiento».

Con motivo de ciertos oficios redactados en términos ofensivos para la Diputación, y sobre todo para el Consultor Loizaga, que pasó el Alcalde de Guernica Don Manuel Francisco de Foruria, encargado de la Tenencia general del Señorío, mandó la Diputación el 5, que no pudiendo conformarse con que haya de quedar impune la extrema in-

¹ El libro donde debía consignarse tal recuerdo, ha desaparecido cabalmente como otras muchas cosas que desaparecen á cada paso, ofreciendo un nuevo testimonio de lo que vale la arrogancia de los hombres cuando pretenden ligar á la posteridad con sus actos y opiniones.

solencia de Foruria, sin embargo de la opinión del Síndico, de acuerdo con el Consultor, de que se miren con desprecio las palabras de aquel sujeto, pasen nuevamente al Síndico los indicados oficios, é informe por escrito, según entienda que sea el deber de su representación.

Merece transcribirse el informe que dió el Síndico Torreruri (que sustituyó á Ozámiz Jausolo), asesorado por Lotzaga, el 7 de Julio, tanto por lo que se refiere al Consultor, como por la relación que tiene con el estado en que á la sazón se hallaba la organización judicial en Vizcaya. Dice así:

«El Síndico cumple con el deber que impone el precedente decreto, no habiendo V. S. I. estimado oportuno el aceptar, como autoridad superior de Vizcaya, la indicación verbal de rechazar con un silencio despreciativo las injurias personales que no llegan á empañar el honor individual. Lograda que fué la deseada pacificación del territorio vascongado por el memorable convenio de Vergara, fueron congregadas las Juntas generales en Vizcaya, y en la celebrada el 15 de Diciembre último, se acordó que sus representantes en la Corte reclamasen del Gobierno que, mientras se hace el arreglo definitivo, desaparezcan las infracciones del Fuego que está sufriendo Vizcaya en su sistema judicial. A esta resolución de la Junta general concurrió el licenciado Don Manuel Francisco de Foruria, en el doble concepto de apoderado é individuo de la comisión que por unanimidad presentó el proyecto del referido decreto. Tanto en la comisión informante como en la Junta general, se tuvo muy presente que la suspensión de los juzgados y tribunales recientemente establecidos y el restablecimiento de los forales debía hacerse por una resolución superior, y que el proceder sin ella á separar de sus puestos á los que carecían de investidura foral, sobre producir las funestas consecuencias

de todo pronunciamiento violento, nunca surtirían efecto para reinstalar el juzgado mayor y la sala especial de suplicación de Vizcaya, que se hallan á larga distancia del territorio vizcaíno. Habiendo recaído el nombramiento de Alcalde de la Villa de Guernica en el licenciado Don Manuel Francisco de Foruria, principió á desempeñar la plaza de Teniente general del Corregidor de este Señorío, bajo el concepto de ser, como Alcalde de la cabeza del partido judicial, el suplente nato que designa el reglamento provisional para la administración de justicia. Mas en su oficio de 21 de Enero próximo pasado manifestaba que había visto con sumo placer desechado como antiformal en el informe del Síndico con el primer Consultor el artículo cincuenta y cuatro del reglamento provisional de procedimientos judiciales, en que se ordena sean sustituidos los Jueces de letras, en caso de muerte, enfermedad ó ausencia, por el Alcalde del pueblo en que residan. Que de consiguiente, no pudiendo regentar en virtud del citado artículo la Tenencia general vacante, y careciendo de nombramiento interino, ó título para continuar en su desempeño, por no ser en su concepto al efecto suficiente la circunstancia de haberla ejercido su antecesor en la alcaldía, reiteraba oficialmente la renuncia que de ella hizo escribiendo familiarmente al señor Corregidor político como Presidente de la Diputación general. Excitaba en seguida á la Diputación general para que nombrase otro letrado, que interinamente desempeñase la tenencia general, pero que si V. S. I., cuya simple amonestación era para él un decreto de pronta ejecución, no solamente por el respeto justamente debido como autoridad suprema del país, y sí también por el sagrado deber de gratitud á la que le tenían obligado las continuas y honoríficas distinciones que le dispensaba sin merecerlas, insistiese en que siguiera desempeñando las funciones de Teniente

general del Corregidor, mientras el Gobierno de S. M. haga en otra persona el enunciado nombramiento en propiedad ó interinamente, era preciso é indispensable que V. S. I., en uso de sus altas atribuciones, le nombrase interinamente sin dilación Teniente general de Corregidor de este Señorío, enviándole el conducente documento; pues que en otro caso no se ocultaba á la profunda ilustración de V. S. I. se expondría, continuando en el desempeño de la tenencia, á graves cargos y responsabilidades que su delicadeza resistía, aun cuando aquélla fuera más honorífica y lucrativa, y que se vería obligado á cerrar el tribunal.—Al contestarle la Diputación con fecha del siguiente día 24, le manifestaba que los señores comisionados en Corte nombrados en las últimas Juntas generales so el árbol de Guernica para conferenciar con el Gobierno, y procurar la conservación íntegra de los Fueros, tenían la misión de reclamar, conforme á lo acordado en la celebrada el día 15 de Diciembre próximo pasado, la innovación hecha en el sistema judicial de Vizcaya, y no omitiría por su parte la Diputación general ningún esfuerzo que esté á su alcance, ni dejará de poner en acción ninguno de cuantos medios le sugiera su celo para coadyuvar á que se realicen cumplidamente los deseos manifestados por el país en la citada Junta; pero que mientras no recaiga una resolución superior, era consiguiente á aquel acuerdo que el actual orden de administrar justicia sea respetado, sin que se haga ninguna alteración. Que limitada la Diputación general por ahora al gobierno político administrativo de Vizcaya, y suspensión de hecho en las atribuciones judiciales que anteriormente desempeñaba, no le era dable mezclarse en ellas, ni podía tampoco considerarse con las facultades, que en unión del Corregidor que la presidía, y se hallaba revestido asimismo de dichas atribuciones, de las cuales carece el Corregidor político que hoy la pre-

sido, podía ejercer.—Se abstuvo, pues, cuidadosamente la Diputación general de hacer un nombramiento interino, que realmente no la compete en caso alguno; pero dió á conocer la necesidad de respetar el actual orden de administrar justicia mientras no recaiga una resolución superior. Sin otra aclaración ni autorización especial, continuó el Alcalde de la Villa de Guernica desempeñando la tenencia general, y parecía que habiendo reconocido él mismo ser antiforal su posición, debiera, sino agradecer la política tolerancia de la Diputación general, no increpar al menos su conducta, porque seguía en la indispensable marcha trazada para él y los demás Jueces antiforales. Mas en el tiempo mismo en que V. S. I. excitaba con ardor el celo de los representantes en Corte de este Señorío para el pronto restablecimiento del sistema judicial foral, fué remitida á la Diputación general por el Teniente de la Merindad de Durango, con su voto cerrado, la causa formada por una muerte violenta, y al devolvérsela V. S. I., expuso razones idénticas á las que contenía el preinserto oficio de contestación al Alcalde de la Villa de Guernica. De la comunicación de V. S. I. se dió traslado al promotor fiscal y á los defensores de los presuntos reos, y á nombre de uno de ellos se alegó por el licenciado Foruria, increpando á la Diputación general por no haber entrado, á luego de ser instalada, en el pleno goce de sus atribuciones judiciales, y omitido el suprimir toda autoridad antiforal, amagando el hacerle cargos, interpelaciones é inculpaciones en las próximas Juntas generales.—Parece inconcebible que el mismo licenciado Foruria, quien continuaba desempeñando la tenencia general de Vizcaya, después de haber reconocido espontánea y oficialmente que no podía serlo foralmente, se presentase á gestionar como abogado en el juzgado de la Merindad de Durango para hostilizar á la Diputación general porque se veía en la precisión

de respetar el actual orden de administrar justicia y de tolerar la judicatura que en el Infanzonado ejercía el mismo licenciado Foruria.—Reconocida que fué por V. S. I. la causa criminal devuelta por el Teniente de la Merindad de Durango, se penetró de las graves consecuencias que podrían sobrevenir, y elevó la conducente exposición. Muy á luego fué presentada al uso foral la certificación de una providencia de la Audiencia territorial, y cuya ejecución correspondía al juzgado del Teniente general de este Señorío. Al informar el Síndico, creyó que en el desórden que había producido respecto de la administración de justicia criminal la devolución de la mencionada causa por el Teniente de la Merindad de Durango, era indispensable el inculcar la necesidad de respetar lo establecido. Con este objeto reprodujo las ideas contenidas en el oficio preinserto dirigido por la Diputación general al Alcalde de la Villa de Guernica, y en el mismo sentido con que el referido Alcalde ordinario se había explicado en su oficio de 21 de Enero último, extendió la cláusula que aisladamente inserta en su comunicación de 21 de Junio próximo pasado; siendo bien singular que le llame descabellado, cuando cinco meses antes afirmaba voluntaria y oficialmente que había visto con sumo placer el mismo idéntico concepto emitido por el Síndico al informar sobre el reglamento provisional. Ni el Síndico se limitó á la tenencia general, sino que la comprendió en la calificación general de la infracción del sistema judicial foral. Así es que puso en igual categoría que al juzgado de la tenencia general al Juez de letras residente en Bilbao, sin conocida demarcación y sin las atribuciones de los antiguos Corregidores, y no omitió el expresar que obraban anti-foralmente las salas ordinarias de la Audiencia territorial al juzgar á los vizcaínos, cuando de todas sus causas civiles y criminales de fuera de este Señorío deben conocer exclusi-

vamente el juzgado mayor y la sala especial de suplicación de Vizcaya. Al exponer la ansiedad de los vizcaínos por la conservación íntegra de sus venerandas instituciones, excitaba el Síndico el ilustrado celo de los jueces residentes en Vizcaya para que, aunados todos, hicieran conocer á la Audiencia territorial que no podía demorarse por más tiempo el reorganizar el sistema judicial foral; pero que en el interin debía también reconocerse como una verdadera necesidad social el respetar el actual orden de administrar justicia. —Hé aquí, pues, el contexto de un informe que ha exaltado la bilis del licenciado Foruria, cuando no contiene especie alguna que no haya sido confesada ó consentida en su correspondencia y procedimientos oficiales, al propio tiempo que en la misma calificación que se hacía de su tenencia general fueron comprendidos el Juez de letras de Bilbao y los señores Magistrados de la Audiencia territorial. —Había no obstante alguna discrepancia, pues que el actual Alcalde de la Villa de Guernica infringió á la vez el reglamento provisional de administración de justicia y los Fueros de Vizcaya. Por éstos se hallaba inhibido de ejercer jurisdicción en Anteiglesia alguna, y por aquél tan sólo se encontraba autorizado para suplir la vacante del Juez de primera instancia; y como el Teniente general del Corregidor de Vizcaya sea, no sólo Juez de primera instancia á prevención sino también Juez de alzadas de las providencias civiles de los Alcaldes de Fuero, no ha podido tampoco revestirse de esta investidura por el expresado reglamento. —Ha procedido, pues, el Alcalde de Guernica con notable inconsecuencia, faltando además á todas las reglas de urbanidad en sus tres oficios del 21 y 30 de Junio último. En la correspondencia oficial de los funcionarios públicos debe usarse un lenguaje decoroso, esforzando los fundamentos en que cada uno apoya su concepto, con racionales lógicos, y sin des-

cender jamás á la inútil vulgaridad de personalidades. Al informe razonado del Sindico, no ha opuesto el Alcalde de Guernica reflexión alguna legal ni política, esquivando el entrar en materia de asunto tan grave con la singular cláusula evasiva que le faltaban tiempo y humor para la formación de debidos comentarios, que los reservaba para días más felices so el árbol.—El actual primer Consultor tiene la dulce satisfacción de haber recibido constantes pruebas de aprecio y confianza de su amado país natal en los veinte y seis años que se halla desempeñando su empleo. Nombreado Diputado en Corte de este Señorío en los años de 1816, 1827 y 1834, y Diputado y Senador para las Cortes generales de la Nación en 1820 y 1839, mereció últimamente que las Juntas generales en Diciembre próximo pasado le hubiesen elegido por el primero de sus representantes en la Corte. El fatal estado de su salud no le ha permitido ponerse en marcha para Madrid, y se encuentra en la triste necesidad de procurar conservar con el reposo de espíritu las pocas fuerzas físicas que le restan. La gratitud á la confianza con que le ha honrado el país le impele á continuar desempeñando por ahora, aunque con mucho trabajo, el empleo de primer Consultor, porque no le permite su delicadeza el separarse de los negocios de Vizcaya en el momento crítico de ventilarse la grave y delicadísima cuestión de modificación foral.—Singularísimo es, á la verdad, que siendo el licenciado Foruria uno de los aspirantes á la plaza vacante de segundo Consultor, en la forma acordada por las Juntas generales, quiera ahora dejar sin efecto la voluntad del congreso vizcaíno, y sacar á luz la que equivocadamente llama real orden, siendo real provisión, y de la cual no ha tenido por conveniente hacer uso la misma Villa de Bilbao, á cuya instancia fué librada hace más de veinte años, y sin que en caso alguno deba dársele fuerza retroactiva. De todas ma-

neras, es muy subalterna la cuestión sobre el nombramiento y duración de los Consultores, respecto de las consecuencias que pueda producir el ultrajar el decoro de la primera autoridad de este Señorío, y pretender privarla del prestigio que goza, y que es tan necesario para conservar el orden público en las difíciles y delicadas circunstancias en que Vizcaya se encuentra. No es posible dejar de entrar en profundas y tristes reflexiones al fijar la atención en el tono amenazador y groseramente chocarrero con que el Alcalde de Guernica, deprimiendo las facultades y ultrajando el decoro de la Diputación general, amaga compelerla á la reunión de las Juntas generales durante el tiempo de su Alcaldía. Parece increíble que se exprese con lenguaje tan destemplado un letrado, y el Alcalde de una Villa que ha dado constantes pruebas de adhesión y mostrado el más vivo interés por el honor y lustre de la Diputación general.— La previsión y energía de V. S. I. sabrán desvirtuar cuantas gestiones directas ó indirectas quieran hacerse para deprimir el uso de sus facultades, mientras que se eleva todo á conocimiento de la Reina Gobernadora para que se digné resolverlo que estimase conveniente.—La oportunidad es el primer elemento en política, y no deben mirarse con indiferencia los cautelosos manejos que pueden ponerse en acción para despopularizar á V. S. I. presentando desfigurados los hechos, y á fin de que el público vizcaíno pueda adquirir un conocimiento exacto, conviene el que V. S. I. mande imprimir todo el contenido de este expediente y circularlo en la forma acostumbrada.» La Diputación se conformó con lo propuesto por el Síndico.

Se comunicó el 11 á los pueblos un oficio del Virrey de Navarra y Capitán general de las Provincias Vascongadas, en el que incluye una proclama publicada el 8 por aquella autoridad, levantando el estado de guerra, en vista de la conducta

satisfactoria observada por el país. Pocos días antes se había recibido la noticia de la entrada de Cabrera en Francia, con lo cual quedaba terminada la guerra civil de los siete años.

La Diputación de Vizcaya no se conformó con el acuerdo que tomaron los comisionados en Corte de las Provincias Vascongadas, sobre que los Diputados generales de las mismas se presentasen á la Reina en Barcelona donde á la sazón se hallaba, creyendo que era preferible invitarla á que viniese á este país, al regresar á Madrid, y felicitar al mismo tiempo al Duque de la Victoria por el triunfo obtenido por el ejército bajo su mando. Con este motivo mediaron algunas cartas con el Diputado general de Alava, aplazándose por ahora la conferencia en que se había pensado.

El 7 de Agosto se mandó guardar y cumplir la real orden de 21 de Julio último, por la que se nombra, con calidad de interino, para la plaza de Alcalde mayor de Guernica, Teniente Corregidor de Bilbao, á Don Andrés de Egaña, que desempeñaba la promotoría fiscal de Vitoria. En el informe del Síndico Zubiaga se subsana el error padecido en este nombramiento, diciéndose que debía entenderse que se nombraba á Egaña Teniente general del Corregidor letrado de este Señorío, y sin que sea extensiva su jurisdicción á Villa alguna de Vizcaya.

Se dió el uso el 12 á dos reales órdenes, expedidas el 24 de Mayo y el 22 de Julio, por las que se dispone que pueden regresar á sus casas todos los que fueron desterrados de las Provincias Vascongadas y Navarra antes del convenio de Vergara por compromisos políticos, habiéndose puesto ya en libertad á los prisioneros de guerra que se adhirieron al expresado convenio.

Se mandó formar el 24, de acuerdo con lo propuesto por la comisión creada en Junta general el 16 de Diciembre último, una razón nominal de los jóvenes naturales del Seño-

río, ó avecindados en él antes del mes de Octubre de 1833, que hubiesen quedado inutilizados por heridas recibidas ó por efecto del servicio militar en la última guerra, tanto en las filas del ejército de la Reina como en el de Don Carlos, y no hubiesen tenido el concepto de sustitutos; una razón circunstanciada de todos los edificios rústicos y urbanos arruinados en el Señorío, por demolición ó incendio, á consecuencia de accidentes de la guerra; una nota de las talas de árboles, hechas cortándolos de raíz, con ocasión de la guerra, que no procedan de excesos cometidos por los pueblos al recaudar las contribuciones; y un estado, de que ha de encargarse la contaduría general del Señorío, con presencia de los libros que llevaba la de la Diputación de Durango, de todas las obligaciones pasivas que dejó pendientes la misma en 31 de Agosto de 1833.

El 31 se reunieron en Vergara para conmemorar la celebración del convenio las Diputaciones vascongadas, los comisionados en Corte de las tres Provincias, y los Generales Rivero, Alcalá, Piquero y Puig Samper. Se acordó la erección del monumento que recordara el convenio, y que se celebrase todos los años una fiesta popular el mismo día. El cura párroco de Cestona Don Sebastián Alejo de Azpeitia pronunció un discurso en el campo del abrazo. En este discurso se encarecían las ventajas de la paz y las virtudes del pueblo vascongado, con la esperanza candorosa que reinaba entonces de que se hubiese cerrado ya la hora de las contiendas civiles en nuestro territorio. «Desearíamos», dijo Azpeitia, «que todos los españoles viniesen á observar por sí mismos como se hermanan aquí la libertad y el orden, la igualdad y respeto necesario en la jerarquía social, la fidelidad y veneración hacia el Soberano; en fin, todas aquellas cualidades que atraen hacia nosotros á nacionales y extranjeros. Desearíamos que llegasen á nuestro suelo, ya en su

prosperidad, ya en su desgracia, y verían en este último caso si hallarían la hospitalidad más cordial, como la han visto los que se han hallado en la necesidad de implorarla en repetidas ocasiones. Con razón, pues, hemos merecido al Excelentísimo señor Virrey de Navarra y Capitán general el honroso epíteto de PAÍS CLÁSICO DE LEALTAD Y HONRADEZ. Con harta razón fió últimamente en nuestra lealtad y descansó sobre nuestra palabra. —Este es, pues, señores, el local en que oímos de boca del inmortal Duque: *en guerras civiles no hay vencidos ni vencedores; vivan los Fueros, viva la Reina*; y en que los señores Diputados de las Provincias, dignos representantes de ellas, acaban de colocar las piedras angulares del monumento que ha de perpetuar el célebre convenio á que la España debe tanta dicha. Monumento que recordará á las generaciones futuras tantas virtudes cívicas, políticas y militares, y sobre todo la nueva era de la indisoluble unión del país vascongado con la Corona de Castilla»...

Con la misma fecha publicó el Virrey y Capitán general Rivero dos proclamas, dirigida una á los vasconavarros y otra al ejército, relativas al acto conmemorado aquel día.

«Reintegradas las Provincias Vascongadas», decía la Diputación en circular de 14 de Septiembre, «en sus venerandos Fueros á consecuencia del memorable convenio de Vergara, fué restablecida inmediatamente la organización político-económica-administrativa de Vizcaya. Mas como el sistema judicial foral había sido enteramente desquiciado, acordaron las Juntas generales congregadas so el árbol de Guernica en 15 de Diciembre último, que sus representantes en Corte reclamasen del Gobierno supremo que desaparezcán, mientras se hace el arreglo definitivo, las infracciones que está sufriendo Vizcaya en su sistema judicial.—El ilustrado é infatigable celo de los representantes de Vizcaya

en Corte había logrado ya el fijar la atención del Gobierno supremo sobre la gravedad y urgencia del arreglo del sistema judicial foral, y excitádole á la discusión y redacción de un proyecto de real decreto, que se disponía el Ministerio á elevarlo á S. M. la Reina Gobernadora, cuando sobrevinieron las deplorables ocurrencias de Barcelona. ¹ Posteriormente ha estallado en la capital de la Monarquía una revolución, que, para reprimirla, ha tomado el Gobierno de S. M. las medidas que exigen la seguridad del Estado y la conservación de las prerrogativas y dignidad del trono.—Por real decreto de 5 del corriente se declara la incomunicación legal con la capital de la Monarquía, al dignarse mandar S. M. que por residir en Madrid el Ministro interino de Hacienda, y mientras dure la referida incomunicación, se encargue del despacho de Hacienda el Ministro de la Guerra, que se halla cerca de S. M. En igual incomunicación que Madrid debe reputarse la Ciudad de Burgos, que ha seguido el movimiento de aquella capital.—Privados á su consecuencia los vizcaínos de comunicación legítima con la Audiencia territorial de Burgos, que provisionalmente conocía de los pleitos y causas de Vizcaya, y no pudiendo existir una sociedad sin tribunal superior de segunda instancia, se encuentra la Diputación general de Vizcaya en la urgente necesidad de entrar desde luego en el ejercicio de sus atribuciones judiciales forales, y de restablecer todo el sistema judicial interior de Vizcaya, según se hallaba or-

¹ A los gritos de viva la Constitución y viva Espartero se promovió un motín, que tuvo por resultado la mudanza del Ministerio, y la formación del que presidió Don Antonio González, bajo la influencia del Duque de la Victoria. Conviene que se tenga presente que la parte principal de los defensores de la Reina en Vizcaya era adicta al partido moderado, que se mostró por aquel tiempo más favorable al régimen foral que el partido progresista.

ganizado cuando cesó la Diputación general en sus funciones en 3 de Septiembre de 1836.—Quedando, pues, restablecido en efecto, como queda, dicho sistema judicial, y en ejercicio la Diputación de las referidas atribuciones desde este día, lo hace saber al público para su inteligencia y efectos consiguientes.» Firmaban el Corregidor político y los Diputados en ejercicio Murga y Mugártogui.

Se reunieron el 15 en Vitoria en conferencia los representantes de las tres Provincias, asistiendo por Vizcaya don Federico Victoria de Lecea, y acordaron dirigir una exposición al Virrey de Navarra, General en jefe del ejército del Norte, asegurándole que el orden público no padecería alteración alguna en este país, y que las Diputaciones responden con sus propios recursos de la tranquilidad, y que, por lo tanto, será muy conveniente que se retire el crecido número de tropas que lo ocupa; de todo cual darán explicaciones los comisionados de las Provincias Don Pedro de Egaña, Don Valentín de Olano, Don Asensio Ignacio de Altuna y Don Fausto de Otazu á quienes se encomendaba este encargo.

Otazu trajo un oficio de Rivero, contestando á dicha exposición en términos muy lisonjeros para las Diputaciones, y prometiendo que cesarán muy en breve los perjuicios que la reunión de las tropas irroga á los habitantes á quienes representan. Las explicaciones verbales que dió Otazu confirmaban los conceptos asentados por el General en su oficio; pero antes que se dieran estas explicaciones, que fué el 20, habían escrito desde Pamplona los comisionados una carta reservada á los miembros de la conferencia reunidos en Vitoria, sobre las conversaciones que habían tenido con Rivero, de las que resultaba que este General tenía el firme propósito de mantener el orden y la disciplina. Decían los comisionados en la carta: «no sólo le hemos ofrecido la coo-

peración de los vascongados, sino que le hemos dicho que el país no tolerará otra cosa, y que cualquier grito de revolución podría abrir de nuevo la sima de los disturbios.» Consecuente el General Rivero con sus promesas dirigió el 5 de Octubre una alocución á las tropas, encargándoles el mantenimiento de la disciplina, sin mezclarse en ninguna cuestión ajena á la profesión militar, y participando que el Duque de la Victoria ha sido honrado con el doble y elevado cargo de presidir y nombrar los Ministros de la Corona.—«Tal es nuestra situación», decía Rivero á las tropas: «el suelo que nos está confiado, hoy más que nunca necesita de toda nuestra lealtad y disciplina. Hombres perversos, mal contentos con la paz que disfrutamos, se esfuerzan en inquietar los ánimos é infundir temores supuestos. Para llenar sus dañados fines, pretenden hacer entender al país vasco navarro que se atenta contra sus leyes y franquicias.»

La Reina Cristina había renunciado entretanto la Regencia, con motivo de la conducta del General Espartero, el cual quedó á la cabeza del llamado Ministerio Regencia. De este Ministerio formaba parte como Ministro de Gracia y Justicia, Don Álvaro Gómez Becerra, y en tal concepto dirigió el 23 desde Valencia al Corregidor letrado de Vizcaya Don Antonio de Bárcena la orden siguiente: «En vista de la comunicación dirigida por V. S. con fecha 16 del mes próximo pasado acerca del acuerdo en que la Diputación general de Vizcaya restableció en la parte judicial el sistema foral que existía antes del 3 de Septiembre de 1836, fundada en la incomunicación de ese país con la Ciudad de Burgos y su Audiencia, se ha servido mandar la Regencia provisional del Reino, que habiendo cesado las causas que motivaron aquel acuerdo, se repongan las cosas á su anterior estado, sin perjuicio de la resolución que corresponda,

con vista de los antecedentes que hay en Madrid y del proyecto de decreto que cita la Diputación en su circular de 14 de Septiembre...»

Bárcena, que no estaba conforme con aquel acuerdo, según expresó terminantemente á la Diputación el citado día 16 de Septiembre, trasladó á la Diputación general para su cumplimiento la orden de la Regencia provisional. La Diputación decretó el 12 de Noviembre que se guardase y cumpliese la orden, en los términos propuestos por el Síndico en el siguiente informe: «que puede usarse y cumplirse en la parte que ordena el alzamiento de la incomunicación con la Audiencia de Burgos, en el mero concepto de tribunal superior de Vizcaya, mientras se restablezcan el juzgado mayor y la sala especial de suplicación de este Señorío. Mas con arreglo á la ley onco, título primero de sus Fueros, es de obedecerse y no cumplirse la referida orden comunicada, en cuanto se dirige á suspender el ejercicio de las atribuciones judiciales, que en segunda y tercera instancia competen á los juzgados y al tribunal de apelación instalados legítimamente dentro del territorio vizcaino, para llevar á debida ejecución las leyes del título veinte y nueve del código foral y el reglamento penal decretado posteriormente por las Juntas generales y sancionado por S. M...»

El primero de Noviembre se reunieron los representantes de las tres Provincias en Bilbao, asistiendo por Vizcaya los Diputados generales, el Consultor y el Secretario Hormaeche, para tratar de la mejor conservación de la paz y de las instituciones forales; y después de haberse hecho una ligera reseña del estado pacífico del país en medio de las convulsivas agitaciones que habfan ocurrido en otras partes, «no pudieron menos de dirigir un recuerdo de lealtad y gratitud á la augusta persona de la Reina madre, que tan bondadosa y benéfica se había mostrado siempre á los vas-

congados, y tanta parte había tenido en el memorable tratado de pacificación de Vergara, y en esta misma confirmación de sus instituciones forales, con los muchos beneficios que con generosa mano había derramado sobre estas Provincias como sobre todos los españoles.—Consideraron igualmente, que habiendo S. M., en la alta penetración de su sabiduría, adoptado la resolución de ausentarse del Reino, dejando sus augustas hijas... confiadas al amor y fidelidad de los españoles, era natural y muy propio de su corazón excelso haber experimentado un grave pesar con la separación de tan caros, amables y sagrados objetos; y siendo igualmente natural que en medio de esta amargura propia de madre tan cariñosa le sea algún tanto grata la manifestación de la buena memoria que ha dejado en el país, acordaron dirigir á S. M. la expresión de estos sentimientos, enteramente independientes de la política, ¹ y únicamente ceñidos á los términos de pura fidelidad y agradecimiento, por medio de la atenta y respetuosa carta siguiente:

¹ Era ilusión generosa de aquellos respetables patricios el figurarse que la política nada tenía que ver con la manifestación de los sentimientos que contenía la carta. Así lo reconoció un testigo de mayor excepción, cual era Don Antonio de la Escosura y Hevia, una de las personas que contribuyeron al levantamiento de Octubre de 1841, cuando siendo ya Corregidor político de Vizcaya, dijo en el discurso de apertura de las Juntas generales el 30 de Julio de 1844, que el haber renovado el homenaje de su gratitud á la ilustre proscrita fué «lo que atrajo sobre estas Provincias el desvío, la malquerencia, el mal trato y la furia desatada de la revolución. Hé aquí la causa, la verdadera, la única, la exclusiva causa de que en Octubre de 1841, á favor de aquellas circunstancias y con pretexto suyo, no sólo se haya vejado á este país, no sólo se hayan hecho derramas espantosas, no sólo se haya vertido sangre inocente, sino que además se hayan despojado las ramas frondosas del árbol so el cual nos hallamos reunidos é intentado extirpar, si posible fuese, con sacrilaga mano.» Así hubo, quien abundando en el mismo pensamiento, dijo el primero de

»SEÑORA.—Las Diputaciones de las tres Provincias Vascongadas, Vizcaya, Guipúzcoa y Alava, reunidas en la Villa de Bilbao, por motivos del más grande interés público para las mismas, han creído que su primer deber, antes de consagrarse á ninguna tarea, era elevar una voz de respeto y gratitud á V. M.

»SEÑORA.—Los pueblos criados en la enseñanza de la libertad, y fortalecidos con la práctica de la virtud, son de suyo reconocidos y justos. El infortunio es para ellos un título más de amor; y cuando por inescrutables designios de la Providencia hiere á caracteres tan elevados, á almas tan nobles como la de V. M., sirveles de consuelo el prosternarse ante la víctima, y miran como un culto y como una religión el compartir con ella sus deberes.

SEÑORA.—Nunca se borrará del corazón de los vascongados la memoria de los beneficios que os debieron durante vuestro generoso Gobierno, y la paz que les otorgásteis, y la mano bienhechora con que les concedísteis volver á vivir con las venerandas y queridas leyes, con las sencillas y patriarcales costumbres con que vivieron y murieron contentos, libres y felices sus padres.

»Así el Cielo guíe por buen camino los pasos de V. M. en una tierra extranjera, adonde le sigue inquieta y azarosa nuestra filial solicitud, y enjague benigno las lágrimas amargas que hará derramar á V. M. el recuerdo de mejores días.

»No nos olvide V. M.!

»Mientras V. M. piense como en una ilusión desvanecida

Agosto en aquellas Juntas que la exposición citada se había dirigido á la Reina madre por las Provincias hermanas» sin reparar en los peligros que este rasgo de hidalga adhesión y gratitud podría traer sobre sus cabezas, y sobre los habitantes de la tierra generosa, cuyos sentimientos supieron interpretar tan dignamente en aquellos días de amargura.»

en los honrados é inocentes pueblos sobre quienes derramó tantas bondades, nosotros, con todos los españoles leales, cuidaremos de que la tempestad no conmueva el tabernáculo donde descansan los dos augustas inocentes prendas que V. M. ha dejado confiadas á la lealtad de la Nación; y apaciguadas nuestras lamentables discordias, y calmada, como es de esperar, la irritante efervescencia de los espíritus, las presentaremos nuevamente á V. M. en época más bonancible y serena, para que cuide de ellas con la ternura de madre, y acompañe á la Patria en sus prosperidades, ó llore con nosotros sus desventuras.»¹

¹ La Reina Cristina contestó desde París el 7 de Diciembre con la carta siguiente:

«La exposición que me habeis dirigido en primero de Noviembre, fiel y honrosa expresión de las Provincias que representais, ha venido á derramar un bálsamo consolador sobre mi corazón ulcerado. Al leerla he conocido que Dios no había apartado de mí su mano misericordiosa, y que en el día de la adversidad encuentran consuelo los que, fieles guardadores de sus leyes en el gobierno de las naciones, enderezan sus pasos por el sendero de la justicia. —La pacificación de la Monarquía, cuya aurora amaneció en los campos de Vergara, y el afianzamiento de vuestros Fueros, son dos actos de mi vida pública en que descansará siempre con el mayor placer mi memoria. Su recuerdo es grato á mi corazón como el de las acciones buenas y santas. —He oído gozosa la voz de respeto y de gratitud que me dirigís, y acepto la palabra que me empeñais de conservar ileso en vuestros pechos hidalgos los sentimientos de fidelidad y amor hacia mis augustas hijas. —Aceptad en cambio la palabra que os empeño de no olvidaros jamás, como jamás olvidaré á los españoles leales, cualquiera que sea la suerte que me reserve la Providencia en sus impenetrables designios. Yo no puedo olvidar al pueblo magnánimo que es tan grande en la paz como en la guerra; que no cuenta á sus enemigos cuando los combate, y que los cuenta uno á uno cuando los abraza; que es fiel guardador de todos sus juramentos, y que se ha formado una religión del culto que consagra á sus purísimas costumbres y á sus venerandas instituciones. No; yo no os olvidaré jamás, nobles y leales vascongados. Vosotros ocupais en mi corazón un lugar tan grande como el que ocuparéis en la historia.»

Hicieron los comisionados el 2 muchas reflexiones sobre la necesidad de mantener en todo su vigor la fuerza moral de las Diputaciones generales; y fijándose en la orden reciente de renovación de las Diputaciones provinciales, acordaron, que la Diputación de Vizcaya siga su marcha con la consecuencia necesaria, según lo dispuesto por la Junta general del Señorío en Diciembre último respecto de la supresión de la Diputación provincial, y que Alava y Guipúzcoa representen al Gobierno, pidiendo que se suspendan los efectos de la orden de renovación de las Diputaciones provinciales, como inútiles, desautorizadas ó inaplicables al país, y que la formación del expediente electoral corra al cuidado de las Diputaciones forales, como corren todos los demás ramos de administración y de gobierno que en las demás Provincias están al cargo de las Diputaciones provinciales.

Se acordó en la conferencia celebrada el 3 dirigir á la Regencia provisional del Reino una exposición para que se librase al país de la carga que le impone el acantonamiento de un ejército numeroso, que nada justificaba, ni siquiera los rumores de que estuviese amenazada la independencia de España. La exposición concluía en estos términos: «Pero cualesquiera que sean los sucesos, el país ofrece solemnemente que perecerá en las gargantas de sus montañas quien quiera que ataque la independencia ó el trono nacional; nosotros nos armaremos padre por hijo, como manda el Fuero. Ni se crea que este es un ofrecimiento estéril de difícil realización; no; pronto estamos á verificarlo tan luego como lo exija el interés público. Ni se entienda por esto que pedimos salgan de todo punto las tropas. Permanezcan en buen hora en corto número como en los tiempos ordinarios; quédense entre nosotros para que se vea que vivimos como hermanos: estamos pagados de su conducta, y nos damos y daremos recíprocamente pruebas de estima-

ción y aprecio. Ninguna consideración política inclina en este asunto nuestro ánimo; desde la altura en que nos colocamos nada se ve que sea personal. Empero no olvidemos que cuando los pueblos han sufrido una revolución de siete años, es preciso para afianzar el sosiego variar en lo posible el cuadro de las amarguras pasadas. Sobre todo, cuando se trata con pueblos hidalgos y pundonorosos, las medidas grandes y generosas son harto más seguras que el descansar en la fuerza, la cual, si se emplea, produce al cabo grandes calamidades. En esta atención, las Diputaciones forales de las Provincias Vascongadas esperan de la justificación de la Regencia se servirá decretarlo así, á cuya resolución quedarán reconocidas.»

Tratándose en la conferencia el 7 de la importante cuestión de aduanas, se pensó que convendría fijar la opinión de las Provincias para neutralizar «la desgraciada divergencia que se había notado de la parte de Navarra, y la fatal pertinacia con que se había pronunciado en San Sebastián una opinión constante á favor» de la traslación de las aduanas, á que tanta aversión tiene el país; acordando que se esté á la mira cerca del Gobierno para dar á conocer con oportunidad el riesgo de este pensamiento, prevenir con tiempo sus efectos, y oponerse con esfuerzo foralmente á su establecimiento, empleando cuantos medios legales puedan presentarse para evitar las calamidades que su realización pudiera ocasionar en el país.

Los representantes de las tres Provincias trataron muy extensamente el 8 de la línea de conducta que habría de seguir el país, conviniendo en que debía tener por objeto la conservación de los Fueros. «El Gobierno los respetará sin duda», decían concretando su pensamiento, «y no pudiera concebirse sin delirio una política que conspirase á destruirlos. Las Provincias y sus autoridades cuidarán igualmente de

salvarlos de cualquiera tentativa que inadvertidamente pudiera tal vez asomar en diferentes negocios. Velarán en la conservación de estos preciosos bienes y pondrán toda la diligencia posible porque no reciban alteración, representando al Gobierno, y empleando todos los medios que su celo constante y fuerte pueda sugerir para evitar las calamidades que pudieran seguirse á este perseguido país, si en vez de recompensa por sus virtudes encontrase vejación y opresiones capaces de conmoverlo, en cuyo caso ningún poder ni autoridad podría responder de sus funestas consecuencias.»

Se encargó á los pueblos el 5 de este mes que entregasen el importe de la Bula de la Santa Cruzada, cuyos productos se hallaban destinados, con aprobación del Virrey y Capitán general al reintegro, en la parte á que alcancen, de los adelantos que la Diputación ha hecho y sigue haciendo para las atenciones del ejército.

En circular expedida el 21 se publicaron el Manifiesto dado por la Reina Cristina en Marsella el 8, y el que en su consecuencia dió la Regencia provisional en Madrid el 15, con la orden comunicada en la misma fecha por el Ministro de la Gobernación de la Península, encargando á los Jefes políticos que procuren por todos los medios que estén á su alcance que desaparezca la inquietud á que pueden dar lugar las interpretaciones mal intencionadas; y que hagan entender que resuelta la Regencia provisional del Reino á no desviarse de los principios que ha adoptado, está dispuesta á obrar con toda la energía que para hacerlos observar sea necesaria con el auxilio del ejército, de la milicia nacional y del pueblo todo, que no se alzó para un vano simulacro cuando seapuró la medida de su sufrimiento.

Se dió posesión el 29 del empleo de Corregidor político del Señorío á Don Pedro Gómez de la Serna, Jefe político

cesante y Magistrado honorario de la Audiencia de Burgos, después de haberle recibido el solemne juramento que prestó de guardar y hacer guardar fielmente las leyes del Fuero, buenos usos y costumbre del Señorío, á calidad de ratificarlo so el árbol de Guernica en las primeras Juntas generales que se celebren.

El nuevo Corregidor publicó con la misma fecha la alocución siguiente:

«VIZCAÍÑOS.—La Reina Doña Isabel segunda, y en su real nombre la Regencia provisional del Reino, se ha dignado conferirme el cargo de Corregidor político de Vizcaya, libre ya por fortuna de los desastres de la guerra civil. El día de Vergara terminó nuestras discusiones; la ley de 25 de Octubre, votada con tan solemne unanimidad en el Congreso de la Nación en que se sentaban los dignos representantes de este país, concilió vuestros Fueros con el interés general del Estado. Todos los pueblos saludaron esta alianza grande, eterna, sagrada, que nadie intentará romper impunemente.—Representante del Gobierno, seré religioso observador de la ley que por igual á todos nos obliga; haré que por todos sea acatada; que á todos se extienda su benéfica influencia; protegeré á los leales vizcaínos fieles á la causa nacional, así como entregaré al brazo inexorable de la justicia á los que con cualquier pretexto turben la paz, que es el primer bien y la mayor necesidad de los pueblos. Así, procurando con todas mis fuerzas el bien común, me reputaré dichoso si al separarme de vosotros consigo, como en otros puntos, por premio de mis afanes, el aprecio de los hombres de bien de este noble suelo».

Habiendo preguntado el Ayuntamiento de Bilbao el 5 de Diciembre si se había dado el uso al real decreto de 20 de Enero de 1834, sobre las asociaciones gremiales, y pidiendo que en el caso de que no se hubiese mandado cumplirlo, se

disponga se someta al uso foral la ley de 6 de Diciembre de 1836, en que se restableció la de las Cortes de 8 de Julio de 1813, para llevarla á efecto, si no hubiese reparo en su cumplimiento; se acordó pasar el oficio del Ayuntamiento al Síndico Zubiaga, el cual dijo, asesorado de Loizaga, que puede usarse y cumplirse la ley de 6 de Diciembre sobre el libre establecimiento de fábricas y ejercicio de cualquiera industria útil, por hallarse en armonía con los Fueros de Vizcaya. La Diputación, de conformidad con el dictámen del Síndico, mandó el 8 imprimir y publicar la ley decreto y decreto citados.

Se comunicó el 11 á los pueblos la orden de la Regencia de 25 de Noviembre por la cual se nombraba «Teniente de Corregidor de Vizcaya, con residencia en Guernica y calidad de interino, á Don Domingo de Santo Domingo, Juez de primera instancia de Arnedo,» el cual tomó posesión de su empleo aquel día, después de haber prestado en manos del Corregidor político el solemne juramento de guardar los Fueros y franquizas del Señorío, en los términos de costumbre.

Por circular firmada el 29 se mandó cumplir la orden del 21, en la que se dispone que el primero del año próximo, instaladas que sean las Diputaciones provinciales, se dé principio á las operaciones electorales, así para el nombramiento de Diputados como para la propuesta de Senadores que han de reemplazar á los comprendidos en la actual renovación; entendiéndose que en este Señorío desempeña el Regimiento general las atribuciones de la Diputación provincial.

Con la misma fecha se circuló otra orden de la Regencia provisional del 24, en la que se dice: que convencida la Regencia de que nada sería peor que el que en las próximas Cortes, en las cuales deben ventilarse cuestiones del

mayor interés para Vizcaya, no estuviese representada debidamente, ha acordado aprobar en todas sus partes lo que propuso la Diputación foral, debiendo, en su consecuencia, la misma, «unida al llamado Regimiento del Señorío, desempeñar todas las funciones que la ley electoral comete á las Diputaciones provinciales,» y el Corregidor las que corresponden á los Jefes políticos. En la formación de las listas y demás operaciones electorales, se ha de observar escrupulosamente lo que ordena la ley, sin que de ningún modo se ejecute lo dispuesto en el artículo transitorio, por haber desaparecido las circunstancias que lo motivaron. ¹ La Regencia, por último, autorizaba al Corregidor para alterar, en caso necesario, los plazos marcados en la orden del 21, que no se hallen señalados en la ley electoral, cuidando de que las primeras elecciones concluyan el día prefijado, para que queden hechas las segundas en los casos en que sean procedentes.

Se hizo saber el 31, que el Regimiento general, en virtud de lo dispuesto por la Regencia provisional del Reino, que se comunicó por vereda á los pueblos, ha determinado que las Justicias y Ayuntamientos se ocupen sin levantar mano en formar las listas de todas las personas domiciliadas en sus respectivos pueblos, en las cuales concurran las circunstancias necesarias para ser elector, con arreglo á la ley de 20 Julio de 1837.



¹ Este artículo transitorio prescribía el modo de formar los colegios electorales de Navarra y las Provincias Vascongadas, cuando la mayor parte de su territorio estaba ocupado por los carlistas.

CAPÍTULO XVII

1841



N Regimiento general celebrado el 2 de Enero, se dividió el Señorío en diez y nueve distritos electorales para las elecciones de Diputados á Cortes y Senadores. Por circulares de la misma fecha se publicaron los decretos de la Regencia de 19 y 30 de Noviembre del año anterior sobre indulto y amnistía.

Se dirigió el 5 por Don Alvaro Gómez Becerra, Ministro de Gracia y Justicia al «Presidente de la Diputación foral de Vizcaya» una orden de la Regencia, que era del tenor siguiente:

«Enterada la Regencia provisional del Reino de la solicitud de esa Diputación foral, fecha 19 de Julio último, para que se separase á Don Antonio María Bárcena de su destino de Juez de primera instancia de Bilbao, con motivo de haber mandado cumplir una ejecutoria de la Audiencia de Burgos, sin que constase el paso ó uso concedido por dicha Diputación, la mandó pasar al Tribunal supremo de justicia, que después de practicadas las diligencias que estimó oportunas para la mejor instrucción del expediente, propuso su parecer en una extensa y bien razonada consulta. Conformándose con él la Regencia, se ha servido resolver, que no

hay motivos para la separación del citado Don Antonio María Bárcena y Mendieta.—Al mismo tiempo ha tomado en consideración otros puntos contenidos en dicha consulta, y no ha podido dejar de observar la poca importancia para el bien y la prosperidad de esos naturales del llamado pase ó uso foral, que al cabo es del todo insignificante, supuesta la obligación de cumplir á la segunda yusión, que es opuesto á la real carta patente expedida por los señores Reyes Católicos en Medina del Campo á 24 de Marzo de 1489, que es depresivo de la potestad de las Cortes, de la autoridad del Gobierno supremo, de la fuerza de la cosa juzgada, y de la independencia de los tribunales en la administración de justicia; y sobre todo que es incompatible con la unidad constitucional, que siempre debe quedar salva, por lo dispuesto en la ley de 25 de Octubre de 1839.¹ Considerado todo detenidamente, y de acuerdo también con el parecer del Tribunal supremo, ha resuelto la misma Regencia, que se den las órdenes convenientes por los Ministerios de la Guerra, de Hacienda, de Gobernación, de Marina y Comercio y de Gracia y Justicia, para que con ningún motivo ni pretexto se sujeten al pase y uso de la Diputación foral las leyes, las órdenes y decretos del Gobierno supremo, y las providencias y ejecutorias de los tribunales, extendiéndose esta disposición á las Provincias de Alava y Guipúzcoa.

Pasada la orden de la Regencia al Síndico Zubiaga, informó éste el 11, con acuerdo de Loizaga, como sigue:

¹ Es admirable la consecuencia con que á una cosa de *poca importancia*, y del *todo insignificante*, se le da tanta importancia, como que en ella estriba nada menos que la salvación de la unidad constitucional; y no es menos digna de llamar la atención la complacencia con que los constitucionales modernos se apoyan en las órdenes del absolutismo, vengan ó no á cuento, para despojar á las libertades populares de su escudo contra la omnipotencia del Estado.

«Faltaría el Síndico á su más radical obligación si omitiese el manifestar sincera y francamente la convicción que tiene de que ha sido sorprendida la justificación de la Regencia provisional del Reino, al presentarla como exactos los supuestos equivocados ó alterados en que se apoya la orden comunicada. Lejos de ser de poca importancia para el bien y la prosperidad de estos naturales el pase ó uso foral, estriba precisamente en tan esencial requisito la conservación de sus Fueros, que desaparecerían bien presto en manos de los empleados del Gobierno supremo, que ejecutarían ciegamente cuantas órdenes les fueren comunicadas, aun cuando infringiesen notoriamente las venerandas instituciones vizcaínas. La real cédula que se cita de 24 de Marzo de 1489, confirmó las ordenanzas formadas por el licenciado Garci López de Chinchilla, Juez pesquisidor nombrado para las Villas y Ciudad de Vizcaya, á consecuencia de desórdenes públicos ocurridos en ellas, y en las cuales condenó á unos á pena de muerte, á otros á destierro ó á perdimiento de bienes y derribamiento de casas, ó á penas pecuniarias para la guerra contra los moros. Se resiente el pundonor vizcaíno de que al tratarse de la solemne palabra empeñada en la estipulación militar de Vergara, se haga alusión de una real cédula expedida á consecuencia de crímenes cometidos en algunas de las veinte Villas y única Ciudad de Vizcaya, y en las que fué derramada la sangre en los patibulos y derribadas algunas casas. Ninguna intervenció'n tuvo el cuerpo general de este Señorío en los excesos castigados por Garci López de Chinchilla ni en sus ordenanzas, y aun en las Villas y Ciudad, que componían en aquella época un cuerpo separado, y á quienes comprendieron únicamente las mencionadas ordenanzas y cédula, cesó su observancia á luego que desaparecieron las circunstancias particulares y extraordinarias que impelieron su formación.

De todas maneras, no puedo regir la mencionada real cédula en oposición con una ley posterior, y una ley eminentemente constitucional, cual es la tercera, título treinta y seis de los Fueros de Vizcaya, reformados en el año de 1527. Se ordena en ella textualmente, que todo lo que se sentenciase, determinase ó proveyese contra las leyes del Fuero de Vizcaya, sea en sí ninguno de ningún valor ni efecto, y que aunque venga proveído y mandado de su Alteza por su cédula y provisión real primera, ni segunda ni tercera yusión y más, sea obedecida y no cumplida, como cosa desahorada de la tierra.—Al ejorcerse la censura foral del pase por la autoridad popular conservadora de los Fueros, desompeña la más fundamental atribución social, cual es el evitar que el poder judicial ó el ejecutivo se extralimiten á las funciones legislativas, derogando, alterando ó suspendiendo leyes de un país constituido en gobierno representativo cual lo ha sido siempre Vizcaya, cuidando igualmente que no se ejecuten en su territorio las leyes generales del Reino que estuviesen en oposición con las vizcaínas.—La unidad constitucional no puede en caso alguno exigir la uniformidad de las leyes civiles, económicas y administrativas, porque en semejante hipótesis sería una verdadera mengua del honor castellano el haber burlado la generosa confianza de los bizarros guerreros vascongados, aparentando hacerles concesiones que no se pensaban cumplir. Finalmente, nunca ha reconocido Vizcaya en el Gobierno supremo del Reino la facultad de derogar, alterar ó suspender sus leyes forales, sin el expreso consentimiento de las Juntas generales congregadas so el árbol de Guernica.—Entiende, pues, el Síndico que debe suspenderse el cumplimiento de la orden comunicada; mas por su gravedad y trascendencia convendrá el que V. S. I. explore la opinión de las Diputaciones generales de Alava y Guipúzcoa, á cu-

yas dos Provincias hermanas comprende la decretada proscripción del pase foral, y consultando al Regimiento general de este Señorío, en unión con los señores Padres de Provincia».

La Diputación, por decreto del 13, que firmaban Murga, Victoria de Lecea y el Secretario interino Barandica, adoptó en todas sus partes el informe del Síndico, suspendiendo, en su consecuencia, la orden de la Regencia provisional del Reino «como cosa desahorada de la tierra y contraria á las leyes, buenos usos y costumbres de Vizcaya.»

Reunido el 19 el Regimiento, con asistencia del Corregidor, los Diputados generales Murga y Victoria de Lecea, los Síndicos Zubiaga y Torrezuri, los Regidores Don Gabriel María de Orbegozo, Don Eugenio de Lezama Leguizamón, Don Juan Ramón de Arana, Don José Cecilio de Artaza, Don Tomás José de Epalza, Don Francisco de Briñas y Don Santiago de Gorocica, y los Padres de Provincia Don José María de Gortazar, Don Pedro Novia de Salcedo, Don Manuel de Aldecoa, Don Domingo Eulogio de la Torre, Don José María de Jusué, Don Serapio de la Hormaza, Don Mariano de Egufá, Don Pedro María de Albiz, Don Juan Bautista de Anitua, Don Martín León de Jáuregui y Don Joaquín María de Ugarte; abrió la sesión el Presidente, mandando leer al Secretario interino de gobierno la orden de la Regencia provisional del Reino sobre la supresión del pase foral, el informe del Síndico del Señorío evacuado á su consecuencia, y los oficios dirigidos por la Diputación á las de Alava y Guipúzcoa, manifestándoles el recibo de la citada orden, é invitándolas á conferenciar acerca de los medios legales de salvar las venerandas instituciones respectivas, y de caminar unidas en un asunto de tanta gravedad y trascendencia. «Concluída la lectura de tan interesantes documentos, se suscitó una lata, leal y circunspecta discu-

sión en la que fué examinado el negocio por todos sus aspectos, sin dejar de tomar en justa consideración la ansiedad con que el país había esperado tener conocimiento de los medios legales que la Diputación general emplease á fin de que se suspendiera el cumplimiento de una orden tan inesperada, que no se concebía hubiese podido dictar la Regencia á no haber sido sorprendida su rectitud». Los Regidores y los Padres de Provincia consideraron unánimemente acertado el acuerdo que tomó la Diputación de circular á los pueblos la orden de la Regencia con el informe del Síndico, y «le dieron las gracias por su celo en mantener ilesas las libertades del país, y el nombre de leales que siempre merecieron sus naturales, y que se ha hecho proverbial en Europa desde el memorable convenio de Vergara», suspendiendo el tomar resolución alguna hasta que se hayan verificado las conferencias con las Provincias de Alava y Guipúzcoa.

También se leyeron dos oficios del Ayuntamiento y de la Junta de comercio de Bilbao, «en los cuales estas beneméritas corporaciones manifiestan su decisión de mantenerse unidas y robustecer con el apoyo de su fuerza moral las reclamaciones del Señorío al Gobierno supreme, sin mirar á que pueda ó no debilitarse la defensa de sus particulares intereses; y el Regimiento general, profundamente conmovido por tan patriótico desprendimiento, oyó con mucho agrado la indicación» de los Diputados generales de circular dichos oficios á los pueblos de este Señorío. La Junta de comercio nombró una comisión compuesta de Don Francisco de Uhagón, Don Pablo de Epalza, Don Juan Bautista de Maguregui, Don Miguel de Larraza, Don Manuel Urioste de la Herrán y Don Antero Tutor, y el Ayuntamiento otra, compuesta de Don Gregorio de Lezama Leguizamón, Don Pedro de Jane y Don Romualdo de Arellano para que obra-

sen de consuno con la Diputación, en el sentido más favorable y decidido, por la conservación de las instituciones de Vizcaya «de cuya marcha», decía el Ayuntamiento, «nunca se separará la Villa de Bilbao».

La Diputación contestó á ambos oficios con el mayor entusiasmo. En la contestación al Ayuntamiento, decía de Bilbao que, «el primero en sacrificarse por su legítima Reina y la libertad española, intrépido siempre en los combates, firme baluarte del orden público en todas ocasiones, es también en estos días de conflicto el primero que, aprobando la marcha legal de su Diputación general, ofrece su poderoso apoyo á la ley del Fuero que nos legaron nuestros virtuosos y bizarros antepasados.»

No faltan, pues, cuando se vuelve la vista á otros tiempos, ejemplos de acendrado fuerismo que imitar, dados por los representantes de las clases mercantiles y el vecindario entero de Bilbao, sobreponiéndose, como lo hacían constar, á sus intereses particulares, amenazados cabalmente, á la sazón, por otra orden de la Regencia que venía á dejar sin efecto el beneficio de bandera española que gozaba el comercio de esta Villa.

Los representantes de las tres Provincias se reunieron en Vergara el 26; asistieron por Vizcaya los dos Diputados generales y el Padre de Provincia Aldecoa; y se acordó desde luego dirigir á la Regencia una exposición que firmaron los cuatro Diputados generales y decía así:

«Los Diputados generales de las MM. NN. y MM. LL. Provincias de Guipúzcoa, Alava y Vizcaya, reunidos en conferencia según sus Fueros é inmemorial costumbre, se ven en la precisión de elevar su atenta voz á la Regencia provisional del Reino, con motivo de la orden de 5 de este mes por la que se sirve resolver que se den las órdenes convenientes por los Ministerios de la Guerra, de Hacienda, de la Gober-

nación, de Marina y Comercio y de Gracia y Justicia, para que por ningún motivo ni pretexto se sujeten al pase de la Diputación foral las leyes, las órdenes y decretos del Gobierno supremo y las providencias ejecutivas de los tribunales, extendiéndose esta disposición á las tres Provincias de Vizcaya, Alava y Guipúzcoa.

»En la orden de la Regencia se insinúa que el paso ó uso foral es de poca importancia para el bien y prosperidad de estos naturales; que es del todo insignificante, supuesta la obligación de cumplir á la segunda yusión; que es opuesto á la real carta patente expedida por los señores Reyes Católicos en Medina del Campo á 24 de Marzo de 1489; que es depresivo de la potestad de las Córtes, de la autoridad del Gobierno supremo, de la fuerza de la cosa juzgada y de la independencia de los tribunales en la administración de justicia, y sobre todo que es incompatible con la unidad nacional, que siempre debe quedar salva por lo dispuesto en la ley de 25 de Octubre de 1839.

»Los Diputados generales de las Provincias Vascongadas faltarian á sus deberes para con el Gobierno, para con la Nación y para con el país, si en esta ocasión y con tan grave motivo disimulasen la verdad, y no presentasen á la Regencia con el debido respeto sus íntimas convicciones en la materia tanto bajo el aspecto legal como bajo el aspecto político, y esperan que la Regencia tendrá á bien oírles propiamente, así por el deber de gobernar en justicia, como por la imperiosa y primera necesidad social de mantener á los pueblos en aquellos goces de tranquilidad y de orden, que forman el principal objeto de las asociaciones políticas y la primera obligación de cuantos en alta ó en baja esfera entran á constituirlos.

»Los Diputados recurrentes han visto la grave impresión que ha hecho en el país este notable decreto, y en honor del

Gobierno, en bien de la Patria, y en obsequio de sus pueblos, desearían poder transmitir con sus palabras todo el peso de sus convicciones, ó inclinar el ánimo de la Regencia á la suspensión de los efectos de esta determinación, que influye fuertísimamente en los destinos públicos.

»El uso foral ha sido considerado siempre en estas Provincias como la base conservadora del régimen especial con que han sido gobernadas desde su primitiva instalación social, y efectivamente, es imposible que éste se sostenga sin que aquél se guarde y observe religiosamente bajo de una ú otra forma. Los Fueros constituyen el sistema más libre de gobierno que se conoce en Europa; éste reposa sobre leyes y prácticas que requieren estudio especial, intenso y filosófico; por eminentes que sean en ciencia y sabiduría los hombres llamados en el transcurso de los tiempos á dirigir los destinos de la Patria, sería un milagro que todos supiesen y entendiesen el derecho foral y las costumbres que lo fijan y determinan; y si sin audiencia de las Provincias se han de cumplir sus resoluciones, es preciso que sean víctimas constantes de las equivocaciones ó inadvertencias ó caprichos de los hombres que se hallen en posición de ejercer autoridad sobre el país.

»Agrégase á esto que por regla general se circulan á las Provincias todas las leyes y órdenes generales del Reino, y si sin intervención del uso foral se han de ejecutar, es forzoso reconocer que con esta práctica viene necesariamente la disolución de esta administración especial, y la nivelación absoluta y completa con todas las demás Provincias de la Monarquía.

»Este es el punto de vista bajo el cual considera el país la cuestión, y no hay poder ni artificio posible en la lógica para hacérsela considerar como de poca importancia para el bien y prosperidad de estos pueblos. El uso foral es esencial

á las instituciones forales, y no pueden existir las unas sin el otro.

»Se dice que es depresivo de la autoridad de las Cortes, de la autoridad del Gobierno supremo, de la fuerza de la cosa juzgada, y de la independencia de los tribunales en la administración de justicia.

»Los Diputados oyen con sentimiento que se tenga por depresivo del Gobierno lo que es necesario para gobernar, por depresivo de las Cortes lo que es indispensable para dar leyes justas, por depresivo de los tribunales lo que está en la práctica común y en la regularidad de los procedimientos. El pase bien analizado, al paso que es la primera condición conservadora de la administración foral, no puede deprimir á nadie, porque entra en las fórmulas regulares del cumplimiento de las leyes; y el pase, uso ó cosa equivalente se encuentra con más ó menos fuerza en todas las dependencias de la administración pública general del Reino, siendo realmente necesidad, garantía y orden, en vez de depresión.

»El uso de las Juntas ó Diputaciones en las Provincias Vascongadas no es más que uno de los anillos que forman la cadena regular de la subordinación en la escala social.

»No puede ponerse á la sociedad á cubierto de la anarquía ni del despotismo, sino se reconoce una gradación legal en el cumplimiento de las órdenes que emanen desde la primera autoridad del Estado hasta la última.

»El Soberano no obliga al cumplimiento de sus disposiciones, si no acompaña el pase, ó sea la firma, que en el hecho es lo mismo, de alguno de los Secretarios del despacho. El Gobierno á ninguno de sus subordinados dirige sus mandatos, sino es por medio de sus superiores ó jefes que tienen que acordar su cumplimiento. Los tribunales superiores nunca ejecutan sus providencias en los pueblos sin el uso

del que en ellos ejerce la justicia. La voluntad misma de las Cortes no puede ser cumplida sino recibe la sanción real, ó interviene el uso, ó sea la firma de un Ministro. Aun aquellos despachos dirigidos á exonerar á una autoridad del mando que ejerce, con justicia ó sin ella, se anuncian y ponen al uso de la misma autoridad exonerada. Las formas pueden variar; el hecho es éste.

»Este encadenamiento gradual y progresivo de subordinación es lo que forma la armonía social, y sin él no puede haber orden y libertad ni sistema. Sólo confusión y caos pudiera concebirse, si fuese lícito á un poder más ó menos elevado saltar por las potestades subalternas, encaminarse á un súbdito inferior, y exigirle el cumplimiento de una cosa que puede tal vez perjudicarlo. Un método semejante destruye todas las reglas de gobierno, acaba con las garantías de la libertad, sofoca la protección natural de los ciudadanos y reduce la sociedad á una coalición informe y peligrosa.

»No parece, pues, que el uso de las Provincias Vascongadas debe causar alarma, ni envuelve ideas de depresión. El gobierno absoluto lo admitió como una necesidad, y siendo al mismo tiempo una prerrogativa popular, sería bien chocante que el gobierno representativo lo aniquilase. En un gobierno libre y popular, en hombres de principios filosóficos, en entusiastas de la libertad, á quienes placen y placer deben los juramentos pedidos á los Reyes de respetar las libertades públicas, no puede decirse depresivo lo que es necesario para que los derechos establecidos no se vulneren, y lo que salva el peligro de convertir el régimen legal en un juguete, pronto á echarlo abajo sin medio alguno de defensa, cuando mejor agrada á quien guste mandarlo por la célebre razón de *tal es mi voluntad*. Esto no es decir que las potestades del Estado abusen; es decir que

pueden abusar, que pueden equivocarse; y esto es bastante para que las garantías y precauciones regulares se justifiquen, aprecien y mantengan, porque al fin, el Gobierno de la libertad es Gobierno de garantías, y si éstas se quitan, aquélla tiene que desaparecer más tarde ó más temprano.

»Se insinúa en la precitada orden que este uso es opuesto á la real carta patente expedida por los señores Reyes Católicos en Medina del Campo á 24 de Marzo de 1489. Los Diputados de las Provincias Vascongadas se abstendrán de entrar en la historia minuciosa de esta cédula por evitar una prolijidad inútil, y sólo sienten verla citada como fundamento de gobierno en este siglo de la civilización y de la libertad. Los Diputados no harán á la Regencia el agravio de creer que este documento histórico propendere, en su superior ilustración, sobre una ley de fuero y costumbre inmemorial antecedente, continuada después un siglo tras de otro sin interrupción, y apoyada en todas las tres Provincias sobre otras infinitas declaraciones anteriores y posteriores, que forman un cuadro completo de legalidad y destruyen del modo más decisivo cualquiera impugnación que quiera hacérseles con esta cédula real, que no llegó á tener efecto en las tres Provincias, ni aun en Vizcaya, en el particular que se examina.

»Esta carta patente con el capitulado del licenciado Garci López de Chinchilla, que por ella se aprueba, con algunas modificaciones, sólo tuvo por objeto atajar los disturbios y desórdenes que sobrevinieron en la Ciudad y algunas Villas del Señorío. El licenciado Chinchilla formó procesos, pronunció sentencias, impuso penas de muerte, de destierro, de perdimiento de bienes y derribamiento de casas; y celebró un capitulado con los Alcaldes, Regidores y otros oficiales, Procuradores y vecinos de la Ciudad y de las Villas, que no formaban sino una pequeña parte de Vizcaya; no fué capi-

tulado con el Condado y Señorío de Vizcaya; lo fué únicamente con una fracción pequeña que había sido teatro de los bullicios y escándalos que era urgente reprimir; y como para aquellos procedimientos importaba el cumplimiento pronto é inmediato de las cartas de justicia, convinieron que no se juzgasen ni diesen por desaforadas en ninguna Junta que se hiciese de Villas ni de Tierra llana, general ni particular, sino que únicamente fuese permitido que la parte contra quien fuesen las tales cartas, pudiese responder á ellas, alegar sobre su justicia, poner las objeciones, y apelar y suplicar de ellas en los casos en que de derecho hubiese lugar. Esta disposición es visto que se diferencia sustancialmente del Fuero general del uso; ella por otra parte sujetaba las cartas reales al juicio de los Jueces que administraban justicia en los casos ocurrentes; ella no quitó el uso; lo separó por entonces de las Juntas tumultuarias, y lo sometió al examen y resolución de los tribunales, autorizando la contradicción, y desprendiéndola de la fuerza ejecutiva, si estos no se la declaraban, después de cumplidos los recursos de apelación y súplica. Ninguno de estos casos se verificó, porque los tumultos y desórdenes se corrigieron y cesaron sin necesidad de nuevas cartas, que no llegaron á expedirse.

»Esto es muy en compendio lo que sucedió con la real carta patente, y en lo demás, la verdadera legislación del asunto está en otras muchas cédulas de los mismos Reyes de 1473, 1475, 1476, 1477, 1486, y en la ley once, título primero, y en la tercera, título treinta y seis del Fuero de Vizcaya, reformado y aprobado en 1526, treinta y siete años posterior á la carta patente, en el capítulo segundo, título veinte y nueve de los Fueros de Guipúzcoa, en la real provisión de 22 de Diciembre de 1780, expedida con audiencia de los Fiscales, en la real provisión confirmatoria de 1793, expedida á la Provincia de Alava, y otras pos-

teriores; Fueros, órdenes y cédulas que reposan en prácticas inmemorables, principios inconcusos, y costumbres venerandas reconocidas en cumplida observancia desde la más recóndita antigüedad, y selladas con sangre en épocas aciagas, en que se ha querido vulnerar la libertad que ha convertido en morada cómoda de la humanidad estas montañas, destinadas más bien al parecer por la naturaleza para asilo de fieras por su escabrosidad y desabrigo.

» Los Reyes Católicos reconocieron este y todos los demás Fueros, usos y costumbres, franquezas y libertades, con la mayor solemnidad, habiendo expedido cédula de ello la Reina Doña Isabel en 14 de Octubre de 1473, y el Rey Don Fernando en 30 de Julio de 1476. Estos Reyes no pudieron faltar á sus juramentos en 1480; el Fuero continuó, y confirmado posteriormente por todos los Reyes sus sucesores existe aun hoy vivo, no solamente en Vizcaya sino igualmente en Guipúzcoa y Alava. Todos los Reyes absolutos lo han respetado, y un Gobierno liberal no puede vulnerarlo por un golpe de Estado, que no entra ciertamente en las ideas del siglo.

» Añádese que esta garantía del uso es del todo insignificante, supuesta la obligación de cumplir á la segunda yusión. La Regencia permitirá á las Diputaciones hacer presente que esta obligación se contradice en los Fueros textualmente. En la ley tercera, título treinta y seis de los de Vizcaya se dice que todo lo que en contrario de ellos se sentenciase y se determinase ó proveyese, sea en sí de ningún valor y efecto, y aunque venga proveído ó mandado de su Alteza, por su cédula ó provisión real, primera, segunda ó tercera yusión, ó más, sea obedecida y no cumplida, como cosa desaforada de la tierra. El Fuero de Guipúzcoa se halla todavía concebido en términos más fuertes, y llega hasta el punto de autorizar la resistencia material hasta el último extremo.

»Pero aún prescindiendo de esto, nunca puede decirse insignificante el uso, porque de él depende esencialmente la audiencia indispensable para que el negocio sobre que verse se juzgue y determine con conocimiento de causa; el régimen foral requiere una instrucción particular que no es común fuera del país, y menos con la profundidad que se necesita para dictar providencias de administración; y ningún agravio se hace al Gobierno con decir que no es posible que haya siempre en él hombres que posean este conocimiento de la ley escrita, de la tradición, de la costumbre, como es necesario para que en las determinaciones no se envuelva el atropellamiento de los derechos. Para que estas resoluciones generales lleven consigo la recomendación de la equidad y de la justicia, es indispensable el conocimiento de antecedentes, y para que no resulte en la práctica un desorden que deshonraría los buenos principios, es de necesidad que en los casos, muy fáciles y demasiado frecuentes por desgracia, de alguna sorpresa, imprevisión ó precipitación, se oiga á la parte interesada antes que merezca carácter ejecutivo la determinación que se dicte. Si se quiere que el régimen foral pactado en Vergara sea una verdad; si aquel acto á que la Nación debe en gran parte su existencia no ha de ser una miserable mistificación, un ludibrio que escandalice el pundonor nacional, evítese en honor del Gobierno el desorden que resultaría de ejecutar hoy una disposición que trastornase los métodos existentes, para mañana deshacerla á virtud de las reclamaciones que se dirijan por todas partes. ¡Cuánto más sencillo no es, cuánto más propio de los buenos principios, dar tiempo y lugar para que los inconvenientes, los perjuicios de una disposición se aclaren antes de hacerlos efectivos, previniéndose un daño inútil!

»Los Reyes absolutos no han sido menos celosos de su

autoridad que el Gobierno representativo, y sin embargo dieron leyes repetidas para que las órdenes, mandatos ó providencias que se dictasen en perjuicio de tercero, en despojo de la propiedad, de la posesión, ó otro derecho, no se cumpliesen; todas las doctrinas de los vicios de obrepción y subrepción no tienen otra causa ni otro resultado que el evitar los daños que pueden causar mandatos dados sin todo el conocimiento de las circunstancias que influyen en su justicia. Desde la excelsitud del trono hasta los últimos Concejos de los lugares, en todas partes, en todos los cuerpos hay hombres que pueden equivocarse, y el instinto de la justicia ha inspirado á todos el deseo de ser oídos antes de causar el daño; y esta audiencia debe ser sólida, debe ser una verdad; si no es suficiente, es peor el remedio que la enfermedad, como en todas las cosas, cuando los medios no corresponden con el fin.

»Aun en los casos de ley, la concurrencia de Diputados á Cortes no es un medio suficiente, por que puede haber mil circunstancias que lo inutilicen contra la voluntad del mismo Congreso. Pueden faltar en la discusión por mil accidentes involuntarios; puede no alcanzarles la palabra; pueden no encontrarse con toda la instrucción del caso; pueden hallarse faltos de antecedentes; pueden ocurrir otras muchas causas, que en circunstancias dadas sofocan la explicación cumplida de la verdad; además de que sería hasta cierto punto incongruente haber de mezclar en todas las leyes cláusulas respectivas á estas Provincias, siendo lo más sencillo y justo, que cuando hay motivo fundado para suponer gravemente dañosa en el país una determinación, quede en las Diputaciones el derecho de representar antes de causar el daño, para que se resuelva sobre ello con todo conocimiento. Así lo quisieron los Monarcas absolutos en favor de los pueblos y en obsequio de la verdad y de la justicia, y

las Provincias no pueden presumir que en un sistema de libertad se tengan en menos estos caros y venerandos objetos.

»¿Pero cómo se ha de suponer irregular ni exorbitante el uso de las Provincias Vascongadas, cuando reducido á la expresión de una obediencia respetuosa á la autoridad, que lo manda, y á la suspensión de los daños que envuelve, entra en las franquezas y libertades del derecho común? ¿No están atestados nuestros códigos de leyes generales que prescriben la suspensión del cumplimiento de las leyes mismas, cartas y reales órdenes, en casos de agravios conocidos? El Rey Don Enrique segundo en Toro en 1369 y 1371, y Don Juan primero en Burgos en 1379, dieron leyes por las que mandaban que no valiesen ni se cumpliesen las reales cartas ó albalás libradas contra derecho ó contra ley ó Fuero usado, con la prevención de que no sean cumplidas, aunque contengan cualesquiera cláusulas derogatorias de Fuero, ley ú ordenamiento.

»Don Alonso oncenno en 1325 expidió una ley para que las cartas desaforadas de la Chancillería, á cualesquiera Alcaldes ó Jueces, en que mandasen lisiar ó matar, ó prender personas, ó tomar sus bienes, ó desterrar ó desheredar, ú otra cosa desaguizada, que las tales cartas no sean cumplidas sin la formalidad que indica para asegurarse de su justicia.

»Don Alonso en Valladolid en el mismo año, Don Enrique en Burgos en 1373, Don Juan primero en Briviesca en 1387, Don Enrique cuarto en Toledo en 1462, en Ocaña en 1469 y en Nieva en 1473, dieron leyes para que se obedeciesen y no se cumpliesen las cartas contra derecho, en perjuicio de partes, aunque contuviesen cualquier cláusula derogatoria.

Don Juan segundo en Valladolid en 1442, después de

mandar que la ley titulada de Briviesca de 1387, comprendida entre las anteriores, se guardase en todo según que en ella se contenía, por ser justa, ordenó además que las tales cartas ó provisiones se obedeciesen y no se cumpliesen, aunque se diesen por segunda yusión, y cualesquiera que fuesen las penas y cláusulas derogatorias y firmezas y abrogaciones y derogaciones y disposiciones generales ó especiales que contuviesen, aunque se dijese en ellas que procedían del propio motu del Soberano y de ciencia cierta y poderío real absoluto. Sin embargo de todo, dice aquel Rey ilustre, que era su merced y voluntad que la justicia floreciese, y fuese dado y guardado á cada uno enteramente su derecho, sin permitirse agravio ni perjuicio alguno.

»Este mismo Don Juan segundo en Valladolid en 1448 expidió una ley para que no se cumpliesen las reales cartas dirigidas á desapoderar á alguno de sus bienes y oficios, sin ser antes oído y vencido. Y si acaeciese, dice la ley, que Nós hubiéramos dado y diésemos tales cartas, sean obedecidas y no cumplidas, y no entendemos hacer merced de bienes ni de oficios de personas algunas, sin que primeramente sean llamadas y vencidas, y se guarde lo que las leyes de nuestro Reino en tal caso mandan.

»Don Enrique tercero, Don Juan segundo, Doña Juana en Burgos, y Don Carlos y Doña Juana en Valladolid y en Madrid, dieron leyes para que no se cumpliesen las provisiones y cédulas reales en que se diesen por ningunos los procesos pendientes en las Audiencias, ó se mandase sobreseer en ellos. Don Enrique cuarto, no solamente mandó que se obedeciesen y no cumpliesen la cartas, cédulas y provisiones que se expidiesen en perjuicio de tercero, sino que revocó todas cuantas se habían dado en el espacio de los nueve años anteriores y habían sido ejecutadas, por lo fuerte y exorbitante de las cláusulas con que fueron extendidas.

»Todas estas leyes que entran en el derecho común y forman las más brillantes páginas de nuestros códigos, estas leyes benéficas y justas dan bien á conocer lo que es verdaderamente depresivo de los Gobiernos. Esta depresión se ve por estas leyes que sólo se encuentra en la injusticia, en la precipitación y violencia que caracterizan las determinaciones. Las leyes injustas deprimen, contaminan cuanto se les acerca; las leyes reparadoras, al contrario, aunque envuelvan una reforma ó retractación, honran á sus autores hacen las delicias de los ciudadanos. A esto se encamina, en esto se resuelve el uso foral; es un medio de audiencia para que no haya despojo; tiende á evitar trastornos y desórdenes en la administración, y se apoya sobre Fueros y leyes, que si el despotismo ha podido invadir en otras partes, aquí se han sostenido, se han salvado de sus penetrantes filos, y las Provincias Vascongadas no pueden persuadirse que vengan á perecer en manos de un Gobierno libre.

»No es una sola la ocasión en que el Gobierno absoluto ha intentado asaltar esta barrera para destruir las libertades del país; pero las Provincias la han sostenido con constancia, y el Gobierno al fin ha respetado siempre sus justas reclamaciones. Sin retroceder á épocas más remotas, en el año de 1742 ocurrió un suceso grave en la Provincia de Guipúzcoa y Ciudad de Fuenterrabía; intervino el Gobierno; expidió una real orden; la autoridad provincial la creyó opuesta á los Fueros; se trató de llevarla á efecto sin el uso foral, y mediaron demostraciones serias. La Provincia acudió en queja al Gobierno en 14 de Octubre del mismo año; y el Gobierno oyó la reclamación, reparó el agravio y desaprobó la conducta del funcionario que infringió el Fuero, habiendo expedido con este motivo una real orden, en el sitio de San Ildefonso el 22 del mismo mes y año, con declaraciones decorosas y satisfactorias en favor de la Provin-

cia, á la que se le reconoció el derecho del pase, como conforme al capítulo segundo, título veinte y nueve de los Fueros, y demás determinaciones análogas.

» En época más reciente, en el imperio ministerial de Calomarde, en el año de 1827, en esta misma Villa de Vergara, se presentó el Capitán general de Guipúzcoa, decidido á llevar á efecto una real orden en que se determinaba la formación y armamento de cuerpos de voluntarios realistas. El Alcalde de esta Villa se opuso al cumplimiento de la real orden, por no haber tenido el uso de Fuero. El Capitán general de Guipúzcoa llevó su empeño hasta decretar el arresto del Alcalde. La Provincia recurrió al Gobierno, y no tan solamente acordó S. M. por real orden, dada en Aranjuez en 12 de Junio de 1827, la libertad del Alcalde y su reposición, sino que aprobó su conducta, fundándose explícitamente en el derecho con que se había opuesto al cumplimiento, por la falta del oportuno pase foral que no había obtenido la orden de armamento. Esto sucedió en tiempo y bajo del mando ministerial de Calomarde, que refrendó la real orden, y el Gobierno representativo no sea menos justo, ni que respete menos los derechos de los pueblos.

» Dicese finalmente que el uso foral es incompatible con la unidad constitucional, que siempre debe quedar salva, por lo dispuesto en la ley de 25 de Octubre de 1839. Los Diputados de las Provincias recurrentes no pueden comprender que el uso foral concedido como medio de defensa de la administración especial del país, de esta administración reconocida como buena y excelente, como fecunda en felicidad y en costumbres públicas, como digna de protección, como precioso y verdadero modelo en su línea, tenga nada que ver con la unidad constitucional de la Monarquía, aun cuando se quisiera dar á ésta un sentido más lato del que en sí tiene.

»Si la unidad constitucional de la Monarquía se ha de extender á destruir el uso foral, porque éste no está en práctica como tal en otras Provincias, sin embargo de que de hecho lo ejerzan con más ó menos virtud en los casos ocurentes todos los tribunales y autoridades del Reino, y se halle consagrado en los códigos y leyes generales, entonces la unidad constitucional significa una perfecta nivelación, pone á la ley en contradicción con ella misma, la imprime una nota degradante, envilece la honradez y franqueza nacional, la convierte en un lazo de perfidia, denigra y escarnece el convenio de Vergara, y la Nación española, que ha sido siempre grande y generosa, ejemplo de pundonor y de virtudes, arroja sobre su historia una mancha que el honor español repelerá siempre con indignación.

»La ley de 25 de Octubre tiene en su primer artículo una explicación, una interpretación auténtica, dada expresamente para votarse en uno de los cuerpos colegisladores, dada por el Gobierno que la admitió en el Congreso de Diputados, y fué interpelado á ello en el Senado; interpretación que decidió al Senado en su favor, que atrajo muchos votos discordantes, que hizo retirar un voto particular que la excluía, que influyó sustancialmente en su existencia, que constituye el verdadero espíritu de la ley, y que después fué el alma de la sanción real. En esta interpretación verdaderamente auténtica, porque proviene de la autoridad legislativa, está el verdadero sentido de la unidad constitucional, y cuanto de ella se salga no puede tener otro carácter que el de una opinión privada, que se sabe que en las leyes no vale más que la opinión en que se funda, y si esta opinión se encamina á destruir el fondo de la ley, la ley misma la repele, y los hombres encargados de su ejecución no pueden adoptarla sin la más grave responsabilidad.

» Esta unidad constitucional se explicó por el Gobierno; se adoptó en el Senado; se dijo solemnemente que consistía en los principios fundamentales que la constituyen, en los grandes vínculos, en las grandes formas características del sistema constitucional, y de ningún modo en los pequeños detalles que son varios, que lo son efectivamente en infinitas materias y en muchos puntos de la Monarquía, sin que por eso se entienda destruída su unidad, su vínculo de cohesión constitucional. Estos supremos principios, estos vínculos, estas formas, esta unidad se dijo solemnemente que estaban en el trono y en los cuerpos colegisladores, bajo de cuyo sagrado manto y constitucionales auspicios las Provincias Vascongadas eran idénticas, se hallaban niveladas con todas las restantes, que entraban á componer la grande y respetable Monarquía española. Este pensamiento se halla consignado en el diario de las sesiones del Senado de la legislatura de 1839; se anunció para la ley en el acto de su formación; acogió los votos; decidió la sanción; y la Nación entera la recibió con aplauso, como prenda de la buena fe y del entusiasmo nacional que había producido el convenio de Vergara, al que en las Cortes mismas se querían erigir monumentos que perpetuasen su memoria, que trasmitiesen á la posteridad el tratado y reconciliación de los dos ejércitos beligerantes, el acuerdo firmado por los dos Generales que hicieron tan insigne servicio á la humanidad, y una inscripción nacional en que se diese á conocer á las generaciones futuras, que sólo la sensatez española, sin otro apoyo ni intervención extranjera, había sabido terminar con honor é independencia una guerra atroz, que por seis años asolaba toda la Península. Este monumento se dijo solemnemente que haría honra á la Nación, y enseñaría á todos los pueblos de la tierra el modo de terminar los españoles dignamente sus desavenencias interiores. Este pensamiento su-



blime se redujo á proposición que hizo uno de los ilustres Senadores, y fué recibida con señales evidentes de aclamación. Este pensamiento giraba entonces por toda la Nación con entusiasmo; vive siempre en los espíritus; fué el alma de la ley; y las Provincias Vascongadas esperan que no se marchitará, que no se aniquilará, y menos en los tiempos presentes, en que hay una gran necesidad de unión, de olvido, de reconciliación, de confraternidad, de honor y de decoro.

»Las Provincias Vascongadas no dudan que la Regencia provisional del Reino, animada de toda la dignidad de las grandes ideas que circundan por todas partes el memorable convenio de Vergara, le dispensará aquella protección y auxilio sin el que podría quedar mancillado, infecundo y desacreditado en la Nación y en la Europa; y lo espera tanto más, cuanto el ilustre guerrero que por su medio proporcionó tan inmensos beneficios á la Patria está al frente y en la presidencia del supremo poder del Estado.

»Los Diputados de las Provincias Vascongadas suplican á la Regencia provisional del Reino se digne disimularles la molestia con que ocupan por tanto tiempo su atención. El asunto es muy grave y de mucha importancia bajo de todos conceptos, y no hubieran podido ser ligeros sin incurrir en la más severa responsabilidad para con el país, y aun la hubieran contraído con la Patria, sino hubieran manifestado francamente sus convicciones con todo el apoyo sobre que descansan.

»Los Diputados de las Provincias Vascongadas no pueden menos de reclamar de la Regencia provisional del Reino un momento más de atención. Un inmenso interés general les impone el sagrado é imprescindible deber de hacer presente á la Regencia el estado del espíritu público con motivo de las novedades que se han observado en el país en estos últimos tiempos. Este conocimiento merece influir en las

resoluciones que en estas y otras materias llevan siempre un carácter político de suma importancia. Los pueblos vascongados aman sus Fueros, y falta á la verdad el que diga otra cosa. Los aman por conveniencia, por hábito, por inclinación, por principios de libertad, que están en ellos muy adelantados, y tienen sus raíces en una antigüedad desconocida. Ellos tuvieron parte en la guerra de la Independencia, en la de la libertad; la han tenido en ésta; y en el convenio de Vergara nadie puede desconocer que ejercieron influencias esenciales. La honradez vascongada confía en la palabra de Vergara, y bajo de esta confianza todo el mundo sabe hasta qué punto ha llevado su sinceridad y su pundonor. Su conducta se ha proclamado como modelo de lealtad y de costumbres públicas. Posteriormente se han advertido novedades que han difundido el recelo de que su régimen foral se deprime aun en aquello que es peculiar á sus métodos paternales, y no interesa en nada á las demás Provincias de la Monarquía. Los Diputados no pueden ni deben ocultar á la Regencia que el espíritu público se resiente con este motivo, y aquel afecto decidido ó intenso que abrigan los vascongados después del convenio de Vergara hacia el Gobierno y hacia todos sus hermanos, se entibia desde que se contempla ofendido, y de recelo en recelo va caminando á una situación que es urgentísimo desvanecer por los medios únicos que existen para ello, y se reducen á hacer justicia á sus sentimientos honrados, á dejarles vivir con sus hábitos, con sus costumbres, con sus autoridades paternales, como sus mayores vivieron, trasmitiéndoles una felicidad y una libertad que en ninguna parte se reconoce tan extensa, tan grande y popular, sin que nada perjudique ni trate de perjudicar al resto de la Monarquía, en cuyo favor han hecho siempre y están dispuestos á hacer servicios eficaces.

»Los Diputados de las Provincias Vascongadas deben llamar sobre esto muy particularmente la atención de la Regencia; interesa á la paz pública; y si á los elementos que prescindiendo de esto intentan perturbarla, si á los combustibles extraños que existen dentro y fuera del Reino, se agregase por una inmensa calamidad la irritación y desesperación de estos pueblos, la imaginación se aparta de los males que aún podrán reproducirse en esta desgraciada Nación. Las Diputaciones cumplen un sagrado deber en advertirlo; salvan una terrible responsabilidad; emplean y emplearán todos sus esfuerzos en evitarlo; pero necesitan que el Gobierno las auxilie, restableciendo la confianza que la palabra de Vergara les inspiró. En esta virtud,

»Suplican encarecidamente á la Regencia provisional del Reino se digne dejar sin efecto la real orden de 5 de este mes, manteniendo sus Fueros en la fuerza y vigor en que han estado desde los más remotos siglos hasta el día. Así lo esperan de la superior ilustración de la Regencia que ejercerá en ello un grande acto de justicia y conveniencia pública.»


Se hizo cargo la conferencia el 27 de la orden de la Regencia del 21, por la que suponiéndose que había dilación en el nombramiento de comisionados para tratar con el Gobierno, se dispuso que si no se presentan desde luego en la Côte, procederá la Regencia á efectuar el arreglo de los Fueros, después de oír sobre el particular á naturales de las Provincias Vascongadas residentes en Madrid; y se acordó que los comisionados ya nombrados aceleren sus trabajos para que puedan terminar este negocio durante la presente legislatura, y que se indique á la Regencia que no se llenan los requisitos que exige la ley de 25 de Octubre de 1839, con oír á los vascongados residentes en Madrid.

Reflexionando el 28 sobre el estado del país, convinieron los individuos de la conforencia en elevar á la Regencia una nueva representación, exponiéndole todos los peligros que engendraban las novedades que se iban advirtiendo en los procedimientos del Gobierno. Los Diputados actuales, se dice en la representación, se han comprometido durante la guerra con sus personas é intereses; «no hacen alarde de talento ni de perspicacia teórica; pero siete años han estado sobre el país desde las primeras trubulencias generales; desde antes lo han examinado y estudiado; en el Gobierno deberá existir algún documento, en que ocho meses antes de la muerte del Rey se tuvo la previsión y valor de decirle que la resolución parecía inevitable después de su fallecimiento; no se apreció suficientemente este anuncio, y la guerra vino, y el mundo entero ha visto cual ha sido.» Los Diputados deseaban que no se realizasen otra vez sus pronósticos funestos, añadiendo que se indicaron al Rey los medios necesarios para evitar la catástrofe, y que hoy se está en el caso de atender á las circunstancias, haciendo iguales advertencias; que el remedio consiste en devolver la tranquilidad á los espíritus, restablecer la confianza y evitar la tirantez que se nota en las medidas del Gobierno, porque hay que temer de lo contrario la irritación que puede promoverse en un pueblo que se vea vilipendiado ú oprimido, «con más ó menos acierto ó equivocación.» Los Diputados esperan que la Regencia no desechará sus insinuaciones, y que cuente con ellos para asegurar la tranquilidad, «disipando los gérmenes del descontento público con providencias reparadoras, en lo que harán todos un servicio inmenso á esta desgraciada Nación, sobrado tiempo desgarrada por la discordia.»

Se dió el uso por la Diputacion general el 15 de Febrero, de conformidad con lo expuesto por el Síndico Zubiaga, con

acuerdo del licenciado Bernaola, por no poder intervenir en este asunto el primer Consultor del Señorío, á una orden de la Regencia acerca de la elección de Senador para reemplazar á Don Casimiro de Loizaga en la segunda renovación del Senado.

En circular que se pasó el 11 de Marzo se recordaba á los pueblos, que por real orden de 14 de Febrero de 1833 se aprobaron los arbitrios destinados á caminos en todo el Señorío; que por otra real orden de 30 de Diciembre del mismo año, dada á instancia de las Encartaciones y otros pueblos, quedó sin efecto, bajo ciertas condiciones, el arbitrio sobre el chacolí; y que por la complicación que esta novedad produjo, y por causa de la guerra que entonces sobrevino, fué imposible que se realizaran las miras beneficiosas para el país, adoptadas por las Juntas generales de 1831 en el plan de iguala. Restablecida la paz, ha visto con gusto la Diputación, que por los mismos pueblos por donde han de pasar las carreteras proyectadas, se promueve su ejecución, y que algunos de ellos han nombrado Juntas especiales con tan laudable objeto; y no sólo han llegado hasta el máximum de la iguala en los arbitrios sobre el vino y el aguardiente, sino que se han impuesto aun mayores recargos. La Diputación ha resuelto, en su consecuencia, para fomentar tan utilísimas empresas, que se generalicen desde luego dichos impuestos en todos los pueblos, desde primero de Abril próximo; entendiéndose solo por ahora con respecto al vino y el aguardiente, y sin perjuicio de lo que en cuanto á su subrogación se determine por las Juntas generales. Se fija en la circular á cada Ayuntamiento lo que se le recarga en el concepto expresado.



CAPÍTULO XVIII

EL 22 de Marzo ratificó el Corregidor Don Pedro Gómez de la Serna so el árbol de Guernica, con arreglo á lo acordado en Junta general el 24 de Julio de 1748, el juramento que tenía prestado el 29 de Noviembre último, de defender el misterio de la Purísima Concepción de María Santísima, y guardar y hacer guardar las leyes del Fuero, privilegios, libertades, franquezas, exenciones, prerrogativas é inmunidades, buenos usos y costumbres, que ha tenido y tiene el Señorío de Vizcaya.

Constituida después la Junta dentro de la iglesia de la Antigua, pronunció el Corregidor un discurso que empezaba con los párrafos siguientes:

«Un sentimiento moral y religioso se ha apoderado de mi alma al saludar el árbol de Guernica, monumento ilustre que simboliza la historia de un pueblo distinguido. A su sombra los antiguos patriarcas de Vizcaya, dictando reglas dignas de ellos y dignas de la posteridad, conservaron la existencia política de este país con su cordura, al mismo tiempo que alardes generosos pero imprudentes la hundían en el resto de la agobiada Monarquía. Loor á su memoria; y al tributarles este homenaje de gratitud y de respeto ele-

vémonos á su altura; bendíganos Vizcaya como á ellos. ¡Que no se grave en nuestra frente el terrible anatema de que no hicimos el bien que pudimos á la Patria!—Diez y seis meses sólo han pasado desde las últimas Juntas, periodo corto pero fecundo en los sucesos políticos y en la administración interior del país. Unidos todos á beneficio del célebre convenio que dió paz á estas Provincias y fué precursor de la tranquilidad de España, la administración debía ser recta, igual, superior á envejecidos odios; debía mirar al porvenir y volver la espalda á pasadas disensiones; la Diputación general así sólo creyó que podía cumplir la misión ardua que en este augusto santuario le impusiera la ley y el voto de las Provincias. Así cree que lo ha cumplido, y como siempre ha procurado lo mejor; en sus buenos deseos encuentra la justificación de sus actos. La noble conducta de Vizcaya ha hecho más fácil el gobierno del país; la tea de la guerra civil, aun no del todo apagada en otras Provincias, fué arrojada de nuevo en las Vascongadas; un hombre, célebre por sus crímenes, quiso otra vez enarbolar aquí su bandera ensangrentada; ¡pero en vano! Había lucido ya el día de Vergara, y los vizcaínos cumplen sus palabras. Los pueblos, sus autoridades, la juventud, las clases todas, rivalizaron entonces en noble emulación; el deseo de aniquilar al enemigo fué unánime, la gloria que cupo al país inmensa, porque acreditó al mundo que no bastaba una lucha cruel y prolongada para arrancar las virtudes de este pueblo valiente y generoso. La Nación dió entonces un tributo de admiración á tan nobles habitantes; los cuerpos colegisladores declararon por unanimidad que habían cumplido bien y fielmente lo prometido en los campos de Vergara; el Gobierno de S. M. dijo que aunque esperaba mucho de la lealtad vizcaína, hechos tan heroicos habían sobrepujado á sus esperanzas. Séame lícito, señores, manifestar cuan

satisfactorio me es ser representante del Gobierno al hacer en su nombre esta manifestación en recinto tan augusto.»

El Corregidor expuso en seguida las disposiciones administrativas tomadas por la Diputación; que se han cubierto con regularidad las atenciones públicas; la creación del cuerpo de miqueletes, que aunque compuesto casi por partes iguales de individuos que antes pertenecieron á tan opuestas filas, no presenta ningún síntoma de resentimientos ni venganzas; la protección que se ha dispensado al clero y á la religión, y á los oficiales procedentes de la división vizcaína; lo conveniente que sería crear un instituto de segunda enseñanza; la necesidad de mejorar la suerte de los expósitos y el estado de los presos en la cárcel del Señorío, edificio incómodo é indigno de la humanidad; lo que se ha hecho acerca de los suministros y bagajes para el ejército; y el lisonjero aspecto que presenta la ejecución del plan de iguala para facilitar las comunicaciones en el Señorío. El Corregidor terminaba así su discurso:

«Nada, señores, debo decir de ciertas cuestiones que preocupan los ánimos, y que los partidos explotan á su placer; mis palabras quizá no serían bien interpretadas por todos. Al pie del árbol de Guernica, cuando sus ramas nos cubren, cuando estamos reunidos en Juntas generales, como lo estaban los que elevaron á la aprobación del solio castellano los Fueros revisados en la Naja; cuando no vemos al rededor nuestro ni aun la guarnición que solía tener la vecina Villa; cuando vamos á ocuparnos de tantos intereses concernientes al gobierno de la Provincia; damos una respuesta solemne á los que nos calumnian, á los que pintan al país y al Gobierno en una lucha abierta, en una lucha inconciliable. No; no la habrá, á su pesar; la unidad constitucional y los Fueros no son incompatibles; se hermanarán, y esta alianza será eterna, porque se cimentará en el interés recí-

proco de la Nación y de Vizcaya. Dichoso me creería, señores, si tuviera la suerte de poder contribuir, aunque en pequeña parte, á hacer este servicio á mi Patria.»

Este discurso fué explicado en idioma vascongado para inteligencia de los que por no poseer bastante el habla castellana no hubiesen podido comprenderlo bien.

Se nombró una comisión compuesta de dos individuos por cada Merindad y de los dos asesores nombrados provisionalmente por la Diputación, Don Santiago de Bernaola y Don Manuel de Carcaga para suplir la falta del Consultor, que entendiera en el examen y reconocimiento de los poderes; y otra comisión, compuesta de los Padres de Provincia que se hallasen en Guernica y de los referidos asesores, para que examinasen los poderes de los señores que componían la primera comisión.

Ambas presentaron el 23 sus respectivos dictámenes. La de los Padres de Provincia no encuentra reparo alguno que poner á los poderes sometidos á su examen. La de revisión general de poderes, se limitó á proponer que Don Juan Ramón de Arana y Don Domingo Eulogio de la Torre, que habían obtenido poderes de dos pueblos, optasen por uno de ellos, como lo hicieron, «pues ningún vizcaíno puede representar á un tiempo á dos pueblos del Señorío.»

Conforme á lo acostumbrado en ocasiones en que han concurrido como meros espectadores á las Juntas generales algunos personajes distinguidos ó altos funcionarios del Estado, se ofreció asiento entre los Padres de Provincia á Don Antonio Alcalá Galiano, Ministro que fué de Marina, y se hallaba en la galería; el cual aceptó el ofrecimiento, suplicando al Corregidor que manifestase la profunda gratitud con que había recibido esta distinción honorífica.

Se leyeron las reales órdenes de 29 de Junio y 8 de Julio del año próximo pasado, relativas al comportamiento de

Vizcaya en particular la primera, y de las Provincias Vascongadas y Navarra la segunda, con motivo del paso por ellas de las facciones de Aragón y Castilla; y la Junta, habiendo leído esta lectura con mucha satisfacción, mandó que se insertasen dichas reales órdenes en el acta.

Se leyó en seguida la memoria presentada por los tres individuos existentes de la comisión nombrada en Juntas generales para conferenciar con el Gobierno y procurar la conservación íntegra de los Fueros, que era como sigue:

«Los comisionados nombrados por V. S. I. en sesión de 16 de Diciembre de 1839 para acercarse al Gobierno de S. M. la Reina Doña Isabel segunda, en cumplimiento de la ley de 25 de Octubre de 1839, faltarian á sus deberes sino diesen á V. S. I. una cuenta puntual y exacta de las gestiones que han practicado para conservar, según los deseos claramente manifestados por V. S. I., intérprete legítimo de la opinión de los vizcaínos, las instituciones benéficas que sus padres les legaron en toda su integridad y pureza. Ardua ha sido la tarea que se les encomendó; cortos sus talentos para desempeñarla con acierto, mayormente careciendo de la ayuda poderosa de su digno compañero el señor Don Casimiro de Loizaga, á quien sus habituales dolencias no le permitieron trasladarse á la Corte, y cuya reciente pérdida lloran, como llorará seguramente el país por largo tiempo, con lágrimas amargas. Pero ni las dificultades abatieron su constancia, ni los disgustos que hubieron de experimentar entibiaron su celo; y aunque no puedan presentarse á V. S. I. con el noble lauro á que aspiraban, aunque se hayan desvanecido sus generosas ilusiones, no desconocerá V. S. I. que acontecimientos igualmente graves que imprevistos han venido á complicar sobremanera la situación, y á aumentar los obstáculos con que tenían que luchar, sin que por eso se haya desmentido nunca su lealtad, sin

que ni por un instante hubiesen faltado á la alta confianza que los representantes de Vizcaya, en este recinto mismo congregados, depositaron en su patriotismo.—La prudencia que se han propuesto tomar por guía les aconseja que sean sobrios y mesurados en sus palabras. No callarán, sin embargo, por afectar una falsa modestia, algunos de los servicios que la suerte más bien que su habilidad les ha proporcionado la ocasión de prestar á este solar ilustre. Tampoco por una timidez que seotaría mal á la entereza de que blasonan, ocultarán ó disfrazarán hechos de que V. S. I. deba tener cabal conocimiento. En el mes de Febrero de 1840 se reunieron en Madrid. Todavía no habían concurrido todos los comisionados de las dos Provincias hermanas, más así que lo efectuaron se apresuraron á conferenciar con ellos y acordaron formar una Junta. Desde que esta Junta se instaló, convencióronse los que la componían de que deberían apoyar y sostener particular y colectivamente todos los pasos, todas las diligencias que se enderezasen á salvar los Fueros vascongados, por que eran á sus ojos harto patententes las ventajas que de caminar estrechamente unidos habrían de resultar. Se convencieron además de que convenía sobre manera al éxito feliz del arreglo, para el cual habían sido nombrados, acelerarlo en lo posible, aprovechando el concurso de varias circunstancias favorables. Obróse pues como esta convicción íntima lo requería. Nada perdonaron para conseguir que los Consejeros de la Corona se prestasen á oírlos y á preparar el proyecto de ley que debía someterse á la aprobación de las Cortes. Pero temiendo que el Gobierno eludiese sus instancias, como en efecto aconteció, y que se malograra la ocasión de afirmar sobre cimientos indestructibles las instituciones vascongadas, decidieron pedir al propio tiempo sin descanso que la administración de justicia que desde el convenio de Vergara quedó desquiciada y sin

trabazón, se restableciese en la forma en que se hallaba antes de que la guerra civil estallase, lo cual estaba á punto de lograrse cumplidamente, como que se extendió el correspondiente decreto, y se remitió á Barcelona á la firma de S. M. la Reina Gobernadora, cuando los acontecimientos que en aquella Ciudad ocurrieron, cambiando el aspecto de los negocios públicos y el personal del Gobierno, impidieron que las esperanzas de los comisionados se realizasen.—No pasarán en silencio los que suscriben el primer embarazo con que en su carrera tropezaron. Los elegidos por la Diputación provincial de Navarra con igual objeto que ellos, les invitaron, así como á sus colegas de Alava y Guipúzcoa, á solicitar el levantamiento del estado de sitio que sobre las tres Provincias Vascongadas y aquel antiguo Reino pesaba. Con este motivo se entablaron amistosas relaciones entre unos y otros, y se trató de que se combinasen los esfuerzos de todos, al menos en los puntos capitales que debieran ser objeto del arreglo. Del apoyo eficaz de los comisionados de Navarra, de la alianza de miras é interés con ellos se lisonjearon los comisionados vascongados sacar no poco fruto. Vanos fueron por desgracia los conatos que para cimentar tan útil alianza emplearon los últimos, y tuvieron que resignarse con el dolor más vivo á ver separadas causas, que si hubiesen estado íntimamente unidas se habrían prestado mutua é incontrastable fuerza.—En cuanto la guerra civil, que á la llegada de los comisionados á Madrid ardía en Aragón, Valencia y Cataluña, se concluyó, les manifestaron los Ministros su intención de ocuparse de la cuestión foral. No rehusaron los comisionados entrar en ella, porque existían aun algunas de las condiciones ventajosas que les estimularon anteriormente á instar á que se ventilase. Delegó el Gobierno, para oírlos y discutir y preparar los trabajos pre-

liminaries de la ley que había de fijar los destinos de los vascongados, personas de su confianza; mas los acontecimientos mismos que fueron causa de que el decreto sobre la administración de justicia arriba mencionado no se firmase por S. M., produjeron un cambio en el Estado, que inutilizó todo lo que laboriosamente se había preparado. Sobre la mesa de la presidencia se hallan la correspondencia que los comisionados de Vizcaya han seguido con la Diputación general, las actas de las conferencias que con sus apreciables compañeros de Alava y Guipúzcoa celebraron, y otros documentos importantes relativos al honroso encargo que este Señorío les confirió. Ellos comprueban y explican con extensión y claridad las indicaciones aquí rápidamente enunciadas. Comprueban también la pequeña parte que les cupo en los acuerdos de los dos cuerpos colegisladores, por los cuales se dignaron declarar que las Provincias Vascongadas y Navarra habían cumplido fielmente el pacto de Vergara, y patentizan otros hechos que gustosos someten al examen de la Junta.—Los sucesos de Barcelona, de Valencia y de Madrid, no sólo paralizaron las negociaciones que se habían entablado, sino que colocaron la cuestión vascongada en terreno más resbaladizo y escabroso. Contribuyeron tal vez á agriarla prevenciones políticas infundadas, desconfianzas y recelos que, aunque se hayan en gran parte desvanecido, han dejado en los ánimos huellas perniciosas.—Regresaron los comisionados de Vizcaya á su país, como lo hicieron los de las otras dos Provincias hermanas, con el propósito de trasladarse á la Corte al instante que la borrasca que la Nación corría se serenase. Moviélos á ello: el ver que de nada se podía tratar mientras la autoridad suprema del Estado no se constituyese de una manera legal y permanente y se hiciese obedecer; el deseo de ponerse de acuerdo con la Diputación acerca de la marcha que cuando esto se veri-

ficase habrían de adoptar, y el de recibir sus consejos é instrucciones.—La Diputación, por su parte, celebró, conforme en casos análogos se ha verificado desde muy antiguo, varias conferencias con las Diputaciones de las otras dos Provincias Vascongadas; y tanto por cumplir lo que en ellas se resolvió, como á virtud de excitaciones de la Regencia, volvieron sucesivamente á la capital de la Monarquía dos de los comisionados que suscriben. Acometido de una enfermedad el tercero no pudo seguirlos, y sintieron verse privados de su útil asistencia en momentos en que, á la verdad, creyeron que les sería necesaria, aunque duraba la ausencia de cuatro de los comisionados de Alava y Guipúzcoa, y no se presentaron al Gobierno con el carácter de tales comisionados hasta muy pocos días antes que la Diputación les manifestara sus deseos de que concurriesen á las Juntas.—No obstante, en las conversaciones confidenciales que han tenido con uno de los señores Ministros, se les han explicado con entera franqueza algunos de los designios de la Regencia con respecto á las Provincias Vascongadas. Estos designios y las resoluciones que ha dictado, sorprendida sin duda por informes inexactos y apasionados, ó arrastrada de ciertas sugestiones malévolas, que suelen emborzararse con el manto de la pública conveniencia, han hecho indispensable la reunión del país á la sombra del árbol simbólico de su libertad.—Los comisionados se complacen en creer que han cumplido escrupulosamente con sus deberes, y en someter por lo tanto todos sus actos á la censura imparcial de los representantes de Vizcaya. Dígnese V. S. I., si así lo estima acertado, elegir una comisión de su seno que reconozca y examine prolijamente los papeles que presentan, y les exija cuantas explicaciones considere necesarias para formar su juicio é ilustrar el de la Junta, en orden á lo que en las espinosas circunstancias en que nos encon-

tramos debe resolver, á fin de asegurar la ventura de este noble Señorío y el porvenir de sus libertades sabias y antiquísimas leyes especiales.»

Se nombró una comisión compuesta de cuatro individuos por Merindad, los Padres de Provincia y los asesores que suplen la falta del Consultor, para que proponga lo que le parezca sobre este grave asunto.

En atención á que el punto relativo á las gestiones hechas con motivo de la supresión del pase foral, se hallaba íntimamente ligado con la resolución que acababa de tomarse, se acordó que pasase á la comisión referida el expediente relativo á dicho punto, para que propusiese también sobre él lo que estimase conveniente.

Resolvió la Junta el 24 que se diesen las gracias á la Diputación por el acierto con que obró en el curso de la autorización que se le había concedido para proteger al clero y á las religiosas en Vizcaya; encargándole que continúe con igual celo que hasta aquí sus gestiones en el mismo sentido, y que á este efecto se le pase un memorial que han presentado las religiosas del convento de la Encarnación de Bilbao, en el que piden que se las ampare para que el comisionado de bienes nacionales no las desposea del corto resto que aun les queda de sus bienes.

Se leyó el informe de la comisión nombrada en la última Junta general para examinar las cuentas de la Diputación provincial y de la Diputación de Durango, diciendo: que ha hallado en ellas varias informalidades que le han impedido ofrecer á la consideración de la Junta un informe definitivo acerca de la administración de las mencionadas Diputaciones, y que juzga que convendrá nombrar otra comisión revestida de mayores facultades que se ocupe en este asunto, para lo cual está ya hecho el principal trabajo en los extractos y observaciones que la actual tiene bastante adelanta-

dos; y que se adopto alguna medida, bien para subsanar las faltas que se notan en los libramientos que carecen de las formalidades necesarias, ó para determinar el valor y consideración que deben tener en los respectivos cargos y datas.

Se promovió primero un debate sobre si se debía enlazar este asunto con el de las reclamaciones procedentes de daños ocasionados en la última guerra, y se resolvió negativamente; se discutió en seguida si continuaría la comisión informante en el desempeño de su cargo, con amplias facultades para subsanar por los medios de prueba que estime las faltas que en dicho informe se enunciaban, ó se nombraría otra nueva; y con este motivo, al tomar la palabra uno de los apoderados suplentes por Arrancudiaga, se le objetó que no habiéndose dado conocimiento á la Junta de que tenía acreditado el derecho á ser miembro de la misma, no se le podía conceder voz ni asiento en ella, antes de llenar esta formalidad. Se determinó, al cabo, oído el dictamen de los Padres de Provincia, fundado en precedentes de otros casos análogos, que para que pudiese ser admitido el indicado suplente como vocal de la Junta, debía presentar en la secretaría de gobierno los comprobantes de su legítima personalidad, á fin de que los examinase para la resolución correspondiente la comisión revisora de poderes.

Se hizo constar el 25, á solicitud de un individuo de la comisión de cuentas, la manifestación que el mismo había hecho el día anterior, respecto de que por ser tan largas y voluminosas las cuentas que tuvo que examinar dicha comisión, y haberse anticipado la reunión de las Juntas generales, no pudo examinar más cuentas que las de la Diputación de Durango, sobre las cuales versaba solamente el informe.

Se resolvió, por vía de adición al acuerdo relativo al clero y á las comunidades religiosas, que se hiciesen por la Diputación las gestiones más activas y eficaces, no sólo para

que se suspenda toda enajenación de bienes de dichas comunidades, sino para que se las reintegre en la posesión de los que las pertenecían; y que en cuanto á los bienes correspondientes á los exclaustros, se dejen á cargo del país para su administración, con calidad de aplicar sus productos al socorro y asistencia de los mismos exclaustros.

Se nombró una nueva comisión para examinar las cuentas de la Diputación provincial y la de Durango, compuesta de un individuo por cada Merindad, disponiendo que no pudiese pertenecer á esta comisión ninguna persona que tuviese interés en aquellas cuentas; y se acordó que cuando la comisión tropezase con algunas dificultades para subsanar los defectos indicados por la comisión anterior, las proponga á la Diputación, la cual deberá resolverlas, en uso de sus atribuciones administrativas, ó en su caso someterlas á la decisión de la Junta general.

Se nombró otra comisión, compuesta de dos individuos por cada Merindad, para el examen de las cuentas presentadas por el tesorero general del Señorío, relativas á la caja de su cargo desde que fué instalada la actual Diputación.

La comisión creada en 16 de Diciembre de 1839 para examinar las reclamaciones pendientes sobre los daños causados por la guerra, propuso lo siguiente: que á los individuos comprendidos en el primer caso de la circular que pasó la Diputación á los pueblos en 24 de Agosto de 1840 sobre este asunto, totalmente inutilizados por heridas ó fatigas, se les asista con una pensión de dos á cuatro reales diarios, según el mayor ó menor grado de inutilidad en que se encuentren, haciendo la clasificación por el medio que la Junta general crea más conveniente, y que la comisión no puede indicar por falta de todos los datos necesarios; porque si es cierto que uno de los artículos del convenio de Vergara quiso asegurar la suerte de algunos de esos infelices, lo es

también que el mal estado de la Hacienda pública, las revueltas políticas y las graves atenciones de la Nación, han impedido hasta ahora palpar los resultados de aquella recomendación, y que entre tanto hay un crecido número de individuos que gimen en la miseria; que se incite á los pueblos y particulares á que presenten los datos que se pidieron en la expresada circular en un término improrrogable, para que la desidia de los morosos no perjudique á los que cumplan á tiempo las órdenes que reciban. Hay sin embargo ciertos perjuicios que en concepto de la comisión deben ser comprendidos en el decreto de la Junta de 16 de Diciembre de 1839; pero interpretado su sentido por el Consultor en las bases que fijó, no quiso excederse de ellas la comisión, concretándose á su tenor literal.

Volviendo á tratar el 26 del informe que quedó pendiente de discusión el día anterior, resolvió la Junta, de conformidad con lo propuesto por la comisión, en cuanto al primer punto, ó sea en cuanto á los que hubiesen quedado inutilizados de resultas de la última guerra con arreglo á lo dispuesto por la Junta general en 16 de Diciembre de 1839; y que volviese á la misma comisión el punto relativo á la subsanación de los daños materiales, para que presentase otro dictamen, teniendo en cuenta las observaciones que se hicieron.

Propuso, en su consecuencia, la comisión el 27 lo siguiente: que se reúnan por la Diputación general todas las noticias de los perjuicios materiales, en los términos que fijó el Consultor, de modo que no pare perjuicio á los que cumplan exactamente lo que se prevenga, por desidia de los morosos, ó por separación de alguna corporación; y que teniendo presente la real orden de 11 de Enero último sobre esta misma indemnización en todo el Reino, y añadiendo á aquellas noticias las que abracen otros perjuicios que el

Gobierno parece dispuesto á indemnizar, se dirijan estas reclamaciones al Gobierno, solicitando para toda Vizcaya los beneficios de la medida expresada. La comisión debe llamar seriamente la atención de la Junta sobre esto; «porque como si lo da á entender el informe presentado en 28 de Febrero por la comisión nombrada con este objeto en la Corte, se estableciese una medida general para indemnizar paulatinamente á los perjudicados, Vizcaya se expone á tener que admitir una contribución, que además de gravosa podría mirarse como un funesto precedente para la completa conservación de nuestras franquicias. De todos modos opina la comisión, que si por el sentido dudoso que puede tener la real orden fuesen rechazadas algunas de las reclamaciones de los pueblos ó particulares, que no salgan de los límites arriba citados, tampoco debe parar á éstos perjuicios, y que podían volver á reclamar del cuerpo general del Señorío la indemnización cuyo principio adoptó la Junta en su debate de 16 de Diciembre de 1839.»

Resolvió la Junta, después de una detenida discusión, que por de pronto, formase la Diputación, valiéndose de los datos y noticias que obraban en el expediente, y adquiriendo los que además considere necesarios, un estado general del valor de todas las pérdidas, daños y perjuicios materiales, exacciones, gastos de cualquiera clase que haya habido en Vizcaya por causa de la guerra; pero en cuanto á su indemnización, no pudiendo la Junta aventurarse á decretarla hasta conocer su montamiento, ó tener á lo menos una idea aproximativa de él, suspendió para más adelante el decidirlo definitivamente, y autorizó á la propia Diputación á reclamarlo de la Hacienda nacional en todo ó en parte, si lo considerase conveniente.

Se suscitó después un largo y animado debate sobre si se comprendería en el mismo acuerdo la proposición de un

apoderado, reducida á que se declarase que el cuerpo universal de Vizcaya reconocía las obligaciones que dejó pendientes la Diputación de Durango, y resultasen de los libros de su contaduría, con sujeción al resultado que ofreciera el exámen de ellos, que se encargó á la comisión especial nombrada el 25, es decir, si esas obligaciones seguirían la misma suerte que los daños ocasionados por la guerra, y se decidió afirmativamente por sesenta y ocho votos contra treinta y ocho, habiéndose abstenido de votar los apoderados de Maruri, Bermeo, cuatro Concejos, Zamudio, Bilbao y Plencia.

Se aprobó el 28 el acta de la sesión del día anterior, después de haberse desestimado la solicitud de los apoderados de Bilbao, dirigida á que se hiciese constar el motivo que tuvieron para haberse abstenido de tomar parte en la votación nominal.

Se aprobó todo lo obrado por la Diputación respecto al cuerpo de miqueletes, declarando subsistente la facultad que se concedió á la misma en las últimas Juntas generales para conservar, aumentar ó disminuir la fuerza de que consta dicho cuerpo.

Se dió conocimiento del curso que han llevado los diversos expedientes de caminos, y se leyó un informe que con el objeto de ilustrarlos se había pedido al Padre de Provincia Don Pedro Novia de Salcedo; y aunque se trató de explicar este asunto en idioma vascongado, se desistió de hacerlo, en vista de la dificultad que ofrecía una traducción improvisada de escritos extensos, en que por otra parte había diferentes cálculos y operaciones aritméticas; y se decidió que por de pronto se dejaran sobre la mesa para que los examinasen los vocales de la Junta á quienes se encomendó su versión, y los demás que quisieran examinarlos.

Se leyó el 29 el informe de la comisión nombrada el 23

para hacerse cargo de la conducta de la que se nombró en las últimas Juntas generales para conferenciar con el Gobierno y procurar la conservación de los Fueros, que terminaba con los párrafos siguientes:

«El Gobierno de entonces se desentendió de reparar y reponer los contrafueros que sufría Vizcaya, en manifiesta contradicción á la ley de 25 de Octubre y mencionado real decreto de 16 de Noviembre; sin embargo, los esfuerzos de los comisionados obtuvieron al cabo de muchos meses una medida satisfactoria sobre nuestra administración de justicia, que los acontecimientos de Septiembre y las agitaciones anteriores en Barcelona y Valencia impidieron llevar á cabo. El Gobierno de ahora procede en sentido opuesto con respecto á disimular su decidida resolución de abolir enteramente los Fueros, porque el paso avanzado, con más precipitación que oportunidad, de suprimir el pase foral su más firme apoyo y garantía, lo pone en evidencia para los cuerpos colegisladores, la España y la Europa toda.—En situación tan amarga y aflictiva no queda á las Provincias Vascongadas, en sentir de la comisión, otro ni más recurso que el de manifestar á las Cortes de la Nación, con toda la energía que permita el debido decoro, los procedimientos de ambos Gobiernos, pero sin desviarse jamás por su parte de la senda legal que les asegurará parecer, si ya fuese llegado su tiempo, dejando sellada con el último acto de su existencia la bien merecida reputación de lealtad en cumplimiento de lo que pactan y prometen, y acaso también conseguir que, recordando los españoles que á este mismo pundonor debieron el renombre de sus mejores tiempos, prevalezca en el Congreso nacional el voto de guardarles cumplidamente justicia.—Abundando en estos sentimientos la comisión propone á V. S. I., que para que jamás pueda imputarse á Vizcaya haber faltado á lo que de sí

reclama el cumplimiento de dicho real decreto de 16 de Noviembre de 1839, se sirva acordar pasen sin demora á la Corte comisionados que obren en todo de acuerdo con los que fueren de las Provincias hermanas Alava y Guipúzcoa; que sin perjuicio se voto por todos los señores que han concurrido de apoderados de los pueblos á estas Juntas generales que la Ilma. Diputación dirija en época oportuna de acuerdo con las mismas Provincias cuantas reclamaciones y representaciones sean necesarias para la conservación de nuestros Fueros á las Cortes y al Gobierno, entendiéndose que tendrán igual fuerza y valor por este voto de confianza que si hubiesen sido firmadas por el cuerpo general del Señorío.—Y últimamente que V. S. I. se sirva aprobar todo lo actuado por la Diputación general, de que también se ha hecho el examen conforme al acuerdo, y por los referidos comisionados en Corte, dándoles gracias por su conducta. —Así opina la comisión, descansando siempre en que V. S. I. apreciará sus trabajos como estimase que puedan merecerlo, y resolverá como siempre lo justo y más conveniente.»

«Entablóse una discusión viva y animada á la par que solemne, y tan detenida y profunda como la alta importancia del negocio requería. Leyéronse también y se vertieron al vascuence los más interesantes» de los documentos presentados sobre el particular, «y no fué dable á los representantes de Vizcaya reprimir en ciertos instantes de prueba los sentimientos, hondamente grabados en sus pechos, de amor á las instituciones benéficas que sus mayores les legaron, pues resonaron varias veces en el salón unánimes aclamaciones que manifestaban, así el derecho como los ardientes deseos que tienen de conservar sus Fueros, buenos usos y costumbres, y la constancia con que los sabrán defender sin traspasar sus deberes legales, faltar á sus pala-

bras ni desmentir su lealtad, contra todas las agresiones que se enderecen á destruirlos y menoscabarlos.

»Concluído el debate, después que hablaron todos los miembros de la Junta que quisieron hacerlo con extensión completa y libertad, se pusieron á votación sucesivamente los tres puntos dispositivos que el referido informe abraza, y fueron aprobados con la adición al final del primero de ellos, *siempre que éstas, como es de esperar, continúen pidiendo la íntegra conservación de sus Fueros.*»¹

Nombró después la Junta comisionados, con arreglo á lo que se proponía en el informe, al Padre de Provincia Don Manuel María de Aldecoa y al Secretario de gobierno Don Francisco de Hormaeche, ambos á dos Diputados á Cortes por Vizcaya.

Leída el 30 el acta de la sesión precedente, se ofrecieron algunas dudas sobre la inteligencia de su redacción; y en vista de las observaciones que se hicieron y de las explicaciones dadas por Don Manuel María de Aldecoa, acerca de la perfecta conformidad que reinó constantemente entre los representantes de las tres Provincias hermanas en la cuestión vital sobre que versa el informe inserto en el acta, se acordó que en lugar de la adición que se puso respecto á la conservación de los Fueros, quedase redactado el párrafo correspondiente en estos términos: *que pasen sin de-*

¹ Fué llamada de este fuego patriótico, que con tanta intensidad ardía en los corazones vizcaínos en 1841, el acuerdo tomado por las Juntas generales, reunidas en Bilbao el 4 de Octubre de 1876, y que no debe ciertamente echarse en olvido, al recordar los ejemplos de entereza que tienen dados la representación del Señorío, aunque en este último año, por desgracia, no concurrió al acuerdo la universalidad de Vizcaya, como sucedió en 1841, cuando podía decirse que el convenio de Vergara era el iris de paz que aseguraba la concordia en el suelo vascongado, bajo la enseña sagrada de los Fueros.

mora á la Corte comisionados que obren en un todo de acuerdo con los que fueren de las Provincias hermanas Alava y Guipúzcoa para la íntegra conservación de los Fueros.

Se nombró también comisionado en Corte, á propuesta de un apoderado, á Don Martín Antonio de Ozámiz Jausolo, el cual trató de excusarse, sometién dose al cabo á la voluntad de la Junta, aunque añadió que acaso no le sería dable pasar á la Corte á causa de los achaques que padecía.

Acordó la Junta ratificar las gracias dadas por la Diputación al Ayuntamiento y á la Junta de comercio de Bilbao por sus pruebas inequívocas de desprendimiento con ocasión de las disposiciones del Gobierno relativas á la supresión del beneficio de bandera, y por su lealtad y generosa adhesión á las instituciones de este Señorío, mostrándose pública y oficialmente decididos á seguir la suerte del mismo en la cuestión de los Fueros.

Se resolvió que no se diesen por ahora instrucciones á los comisionados en Corte; «pero que si por las gestiones que practiquen los comisionados, ó por cualquier otro motivo cambiase el Gobierno de opinión y se acercase á los deseos del país, la Diputación reuniese de nuevo la Junta general» que al efecto quedaría abierta; debiendo instruirse en la convocatoria á los pueblos de los puntos que se hubiesen de someter á la deliberación de aquélla, y de que podrían conferir además sus poderes á otras personas distintas de los actuales apoderados.

Aprobó la Junta el 31 una proposición concebida en estos términos:

«Se propone á la Junta que para reemplazar al difunto Consultor Don Casimiro de Loizaga, y dar cumplimiento á la real provisión de 12 de Febrero de 1820, que tiene el correspondiente pase foral en Diciembre de 1824, se proceda

al nombramiento de primero y segundo Consultor en la forma siguiente: que haga la Junta ambos nombramientos, y que para que los elegidos no sean perpetuos ni bienales, concluya el primero en su encargo el 31 de Julio de 1843, en cuyo día entrará el segundo do primero, procediéndose entonces á nombrar otro segundo en su lugar, que á su vez habrá de pasar á ser primero, y así sucesivamente, de modo que en adelante se elija únicamente al fin de cada bienio el segundo Consultor, y sean así cuadriennales, adoptándose también por decreto que ningún primer Consultor pueda ser reelegido para segundo sin un intermedio de un bienio.» Se nombró, en su consecuencia, una comisión compuesta de dos individuos por cada Merindad para que propusiera los Consultores.

La comisión nombrada el 25 para la revisión de las cuentas anteriores á la Diputación actual, propuso que se aprobasen las relativas al tiempo que medió desde el 25 de Noviembre de 1833 hasta 28 de Febrero de 1834, en que fué tesorero Don Leocadio de Olabarria, y desde primero de Marzo de 1834 hasta 30 de Noviembre de 1839, en que desempeñó la tesorería el actual tesorero Don Juan de Gordia. Como las oficinas de contabilidad han seguido la misma marcha, se expone en el informe, tanto bajo la Diputación general como la Diputación provincial, no puede hacerse una particular separación de las cuentas correspondientes á cada una de las diferentes corporaciones que han regido desde 1833. La comisión, sin embargo, debe decir que las enormes sumas que se han invertido en gastos de guerra y otros extraordinarios, sin omitir los ordinarios y el pago de réditos de capitales sobre la caja, que con generalidad se han satisfecho hasta el año de 1839 inclusive, mientras no podía contarse con el ingreso de los arbitrios sobre consumos del país, que se redujeron á los de Bilbao y poco

más que los de las tres Anteiglesias colindantes, son una prueba del tino y del acierto con que han dirigido la hacienda pública las diferentes autoridades que han estado á la cabeza del país en dicha época.

También se aprobaron las cuentas dadas por el mismo tesorero concernientes al período transcurrido desde que empezó á administrarle la actual Diputación hasta fin de Febrero último, de conformidad con lo propuesto por la comisión que se nombró para examinarlas.

Resultando de estas cuentas que el Secretario de gobierno Don Francisco de Hormaeche no había recibido más remuneración que su sueldo ordinario por el desempeño de su comisión en Córte, autorizó la Junta á la Diputación general para que recompensase sus trabajos según le pareciese.

Se nombró una comisión compuesta de dos individuos por Merindad, que oyendo á los interesados ó representantes de las diferentes rutas y empresas de caminos que se hallan ya contruídos ó en proyecto, presente en la misma Junta su dictámen sobre la construcción de caminos en el Señorío.

La comisión relativa al nombramiento de Consultores propuso el primero de Abril para primer Consultor á Don José María de Lámbarri, y para segundo á Don Casimiro de Ariz, haciendo constar que uno de sus individuos votó para primer Consultor á Don José Miguel de Arrieta Mascarua y para segundo á Don José María de Antúñano, que tres votaron para segundo Consultor á Don Pedro Pascual de Echevarría, y uno reservó su voto.

Resolvió la Junta que se procediese al nombramiento de Consultores en votación nominal, siendo nombrado primero Don José María de Lámbarri por ochenta y nueve votos, y segundo Don Casimiro de Ariz por sesenta y ocho. Admitidos uno y otro por tales Consultores, se acordó que se res-

tableciese la silla para el asiento del primer Consultor á la derecha de la mesa de la presidencia, y que se colocase al segundo Consultor Don Casimiro de Ariz, á quien se le avisó que viniera, en otra silla igual á la izquierda de dicha mesa. Lámbarri, que era apoderado del Valle de Orozoo, y cesó en aquel momento como tal, en virtud de su nombramiento, se presentó acto continuo en la Junta, y quedó en posesión y ejercicio de su empleo, dando las gracias más expresivas por la señalada muestra de confianza que se le había dispensado.

La comisión encargada de discurrir los medios de arreglar las diferencias relativas al plan general de caminos del Señorío, propuso que se procediese á nombrar una nueva comisión, para que juntamente con la Diputación, y llevando á efecto el plan de iguala de caminos, aprobado por real orden de 4 de Febrero de 1833, dirima las dudas ocurridas con motivo de la real orden que obtuvieron los pueblos de las Encartaciones en 30 de Diciembre del mismo año, previa audiencia de ellos; facultándosele también para que si hallare convenir á los intereses generales del Señorío y á los particulares de los pueblos empresarios de las mismas Encartaciones el establecimiento para éstos de una empresa de caminos, independiente de los restantes del país, pueda ponerlo por obra.

Dos de los individuos de dicha comisión presentaron un voto particular, en el que proponían que se autorizase á la comisión que se nombre para que juntamente con la Diputación orille las diferencias que ocurran con motivo de las dos reales órdenes mencionadas; pero con calldad de que sus trabajos se presenten á las próximas Juntas generales para la aprobación, si la mereciesen, suspendiéndose entre tanto la ejecución del plan de iguala, en atención al estado de penuria á que han quedado reducidos los pueblos del

Señorío á consecuencia de la última guerra.

Se aprobó el dictamen de la mayoría de la comisión, y se nombró una comisión compuesta de un individuo por cada Merindad para llevar á efecto lo propuesto. Protestaron esta resolución los apoderados de veinte y dos pueblos, entre ellos Bilbao.

Se dió cuenta de una petición suscrita por los representantes de los tres Concejos, dirigida á que se repongan inmediatamente los caminos que conducen á las veneras desde los puertos donde se depositan las venas, y á que tengan cumplido efecto las leyes hechas para evitar los perjuicios que causan los rebaños de ovejas en los pastos.

Se dieron las gracias á Don Santiago de Bernaola y Don Manuel de Careaga por los buenos servicios que prestaron al país como asesores nombrados por la Diputación para suplir la falta de Consultor.

Se aprobó el 2 el acta del día anterior, con una adición propuesta por un apoderado al dictamen de la mayoría de la comisión de caminos, y reducida á que para dirimir las dudas y cuestiones que se ofrezcan en este punto, se ha de oír á las partes interesadas.

Se acordó que la Diputación recomiende á la Junta del camino de Pancorbo la solicitud de un apoderado para que se permita en aquel camino el uso de carros de llanta estrecha, cuando se ocupen en el transporte de las producciones agrícolas del país.

Tratándose de la petición presentada por los tres Concejos del Vallo de Somorrostro, se resolvió, en cuanto á la reparación de los caminos de las veneras, que se cumpla lo determinado sobre este particular en Junta general el 15 de Julio de 1831; y en cuanto á los perjuicios que causen los rebaños, se resolvió que se haga guardar estrictamente lo prescripto, así por las leyes primera y segunda del título

treinta y cuatro del Fuero, como por repetidos acuerdos de Juntas, y señaladamente por los de 21 de Mayo de 1823 y 8 de Julio de 1825; teniendo además presente el capítulo tercero de la ordenanza de Montes, aprobada por real orden de 27 de Noviembre de 1784, en que se manda cumplir lo dispuesto por la citada ley primera so las penas establecidas en ella y demás impuestas por resoluciones de Juntas, que se extienden á que cualquiera pueda matar las cabras que se encontrasen sin los requisitos prevenidos en la misma ley.

Se autorizó á la Diputación para que por los medios más eficaces, y usando de todas las atribuciones que residen en la Junta, procure evitar los frecuentes incendios que se observan en los montes; y para que ponga en ejecución un proyecto que presentó, por el cual se establecía un depósito de aguardientes y licores en Bilbao, en el cual quedarían almacenados, sin pagar los arbitrios establecidos, tanto por el Señorío como por la Villa, mientras no se extrajesen para fuera del Señorío.

Se leyó un informe de la Diputación relativo á la enseñanza pública de Vizcaya. Exponía la Diputación que no pudo menos de fijarse en este punto después de extinguida la guerra civil, durante la cual se cerraron algunos establecimientos útiles, y quedó la instrucción entregada á los esfuerzos privados, y débiles por lo mismo, de particulares celosos, por efecto de las disensiones domésticas, y precisada la juventud vizcaína á alejarse de su país para adquirir los conocimientos que no se cultivaban en él. La Diputación principió por prestar su apoyo al colegio de Vizcaya, que se trató de plantear en Bilbao, se comprometió á satisfacer el alquiler del edificio donde se establecía y pagó además generosamente las máquinas é instrumentos de física y aparatos de química que se consideraron necesarios; pero obstáculos

los insuperables, hijos de las circunstancias, no le han dejado prosperar, sin embargo de todo lo que se ha hecho para removerlos. Concibió por otra parte el proyecto de formar un museo de pinturas y una biblioteca, aprovechando los cuadros y los libros de los conventos suprimidos, para lo cual contaba con el patriótico desprendimiento de no pocos amantes de las artes, de la ilustración y de las glorias de Vizcaya, que se prestaron á aumentar las colecciones con objetos de su propiedad particular; pero también este pensamiento benefico ha encontrado dificultades, aunque la Diputación espera vencerlas, si la Junta le autoriza á sufragar los gastos que sean precisos para llevarlo á cabo. —No le pareció imposible á la Diputación, que combinando sus esfuerzos con los del Ayuntamiento de Bilbao y la Junta de comercio podría fundarse un instituto completo de segunda enseñanza, para lo cual celebró al efecto muchas conferencias con los representantes de dichas corporaciones, calculándose que costaría cien mil reales al año el sostenimiento del instituto, y conviniendo en sufragarlos por terceras partes con ellas la Diputación, en el caso de que el pensamiento llegara á realizarse. —La Diputación no se ha determinado á seguir adelante en este camino, sin el asentimiento de la Junta general, y no puede menos de hacer presente que la realización del proyecto de que se trata no es tan oneroso como á primera vista podría imaginarse. Se pueden aplicar al nuevo instituto los diez y seis mil reales con que Vizcaya concurría al sostenimiento de la Universidad de Oñate, pues la Diputación entiende que ha caducado la obligación que el país contrajo, según las condiciones de la escritura que se otorgó en 1830, por haberse abierto una Universidad en Vitoria, porque la Provincia de Alava rehusa seguir contribuyendo con sus diez y seis mil reales, y porque se trata de erigir en Bilbao un instituto de

segunda enseñanza.—Agregando á los diez y seis mil reales, con que contribuía Vizcaya, los doscientos ducados que hoy se pagan por su tesorería al maestro de náutica, cuya clase se refundirá en el nuevo colegio, el aumento de gastos que se originen con la creación del instituto apenas excederá de ocho mil reales cada año.

La Junta, penetrada de la utilidad de este proyecto, facultó ampliamente á la Diputación para ponerlo desde luego por obra en los términos que se proponían.

Dióse cuenta en seguida de un expediente formado á consecuencia del acuerdo de Regimiento general de 30 de Noviembre de 1834, en que se mandó recaudar el impuesto máximo de diez por ciento sobre la propiedad, en la forma acostumbrada, para cubrir las extraordinarias atenciones de que se veía cercada la Diputación; y se resolvió que quedase derogada dicha imposición, y que á los pocos pueblos que la tenían ya realizada en todo ó en parte, se les devolviese lo que entregaron, sea en la caja general del Señorío, ó á las nodrizas de expósitos á cuenta de sus labores, según se dispuso en el año citado. Mas teniendo presente al mismo tiempo la Junta, así el desfalco que este reintegro produciría en la caja del Señorío, como la necesidad de auxilio pecuniario en que se halla el establecimiento de niños expósitos, acordó autorizar á la Diputación, á que con título de contribución de expósitos, repartiese entre todos los pueblos de Vizcaya, tomando por base su respectiva población, la cantidad que conceptuase necesaria, con la circunstancia de que quedará cada pueblo en plena libertad de valerse al efecto de los medios que le parezcan menos gravosos, bien sea por imposición sobre consumos, bien por derrama vecinal, ó de otro modo, sin que se pueda recargar á la propiedad territorial.

Presentó la Diputación, en cumplimiento de lo acordado

por la Junta general en 16 de Diciembre de 1839, un informe sobre los antiguos empleados del Señorío, empezando por asentar que estos «al ser agraciados por el país con sus plazas respectivas, contrajeron la estrecha obligación de obedecer los preceptos de la Diputación legal y libremente elegida por él, y de seguir su suerte. Cuando en Octubre de 1833 ocurrieron en Bilbao los sucesos de todos sabidos, la Diputación fué desamparada por sus dependientes,» y sin decidir ahora «si la marcha que entonces observó la Diputación fué ó no prudente y acertada en todo, lo que no puede ponerse en duda es que sus empleados subalternos no estaban autorizados á calificar sus actos ni á abandonarla.» De este abandono resultó que el Corregidor Mota al volver á encargarse de su empleo, y en virtud de las facultades que le concedió el General en jefe, declaró vacantes los destinos que desempeñaban los empleados que siguieron á una Diputación creada por las circunstancias, y se separaron voluntariamente de la que los representantes legítimos del país habían nombrado, poniéndola en la imperiosa necesidad de proveer aquellos destinos, á calidad de someter á la aprobación de las Juntas generales los nombramientos que hizo. Los nuevos empleados han cumplido con sus deberes desde entonces á satisfacción completa de la Diputación. «¿Sería ahora razonable, sería político, podría tolerar el Gobierno ni el encargado de representarle, que fuesen lanzados los últimos de sus puestos para acomodar en ellos á los primeros?» La Diputación, lejos de tener prevenciones contra los antiguos empleados, se ha apresurado á colocar á uno de ellos en la contaduría, en cuanto lo ha sido posible, y se complacerá, si se lo recomienda la Junta, en dar cabida en las oficinas á los más dignos é idoneos, graduando la oportunidad y sus circunstancias especiales, porque á su juicio, ni el comportamiento ni los derechos de todos son idénticos;

aunque se abstendrá de toda especie de recriminación, por dar una prueba de sus vivos deseos de contribuir á la reconciliación de todos los vizcaínos, acabará por proponer á la Junta que en su generosidad señale á los interesados en los memoriales que sobre este particular se han presentado, hasta que puedan utilizarse los conocimientos que han adquirido en la práctica de los negocios, y en recompensa de servicios anteriores á las tristes vicisitudes que han dividido los ánimos de los vizcaínos, la asistencia moderada y proporcional, que sea compatible con los recursos del Señorío.

No sólo aprobó la Junta lo propuesto por la Diputación, sino que le autorizó para llevarlo á ejecución y señalar á los individuos á quienes se refería el informe el situado con que serán asistidos, teniendo en cuenta las circunstancias de cada uno de ellos y los recursos y obligaciones del Señorío; acordando al propio tiempo confirmar los nombramientos de los empleados actuales, en atención á lo manifestado por la Diputación.

Se encargó á la comisión nombrada para examinar las cuentas correspondientes á la actual administración del país que informarse sobre las renunciaciones y tanteos de los oficios de escribanos públicos.

Teniendo presente el acuerdo de la Junta general de 11 de Julio de 1833, por el que se creó una comisión económica permanente para que formase un presupuesto de gastos, á fin de fijar los precisos y los eventuales, y conseguir alguna economía, aliviando en lo posible á los pueblos; se acordó restablecerla, y que la compongan ahora los Padres de Provincia, el primer Consultor y un individuo por cada Merindad, en lugar de los dos que entraron en la primitiva, procediéndose á nombrarlos de nuevo; y se dispuso que pasasen á esta comisión los expedientes formados sobre las reclamaciones de diferentes pueblos relativas á la rectifica-

ción de las estadísticas de población y territorial del Señorío, para que, tomando los datos y noticias que estime útiles ó necesarios, proponga á la Diputación lo que considere conveniente á fin de reformar las referidas estadísticas, más defectuosas que nunca en el día en razón á que los pueblos han sufrido con desigualdad los desastres de la guerra.

Se acordó que pasen también á la comisión económica permanente los expedientes formados á instancia de varios pueblos, que solicitan se les conceda voz y voto en Juntas generales, según lo determinado en la celebrada el 12 de Julio de 1833.

El 3 entró en la Junta y ocupó el asiento que le estaba señalado el segundo Consultor Ariz, después de dar gracias por la muestra de confianza que había merecido.

La comisión encargada de examinar el expediente general sobre renunciaciones y tanteos de escribanías, procurando atenerse al espíritu del reglamento de 1824 sobre la reducción de su número, y de lo decretado en esta materia en 13 de Julio de 1833, propuso las medidas siguientes: 1.ª Quedan válidas y subsistentes las renunciaciones de numerías hechas hasta ahora por los escribanos que se hallaban en el ejercicio de sus oficios en 27 de Mayo de 1824, y en aptitud de renunciarlas ó permutarlas, en el improrrogable término de un año contado desde esta fecha. 2.ª Los dueños de las numerías vacantes, y que han de suprimirse en conformidad del reglamento de 1824, podrán arrendarlas ó enajenarlas libremente, siempre que la caja general del Señorío no se halle en posibilidad de tantearlas y satisfacer en seguida su precio. 3.ª Si los escribanos meramente reales quisieron tantear ó arrendar alguna numería vacante de las que según el reglamento de 1824 deben suprimirse, podrán hacerlo satisfaciendo en el primer caso al propietario su justo valor, con arreglo á lo prevenido en el artículo octavo del mismo re-

glamento. 4.^a Para remover algunas dudas suscitadas en punto á la firmeza de los artículos comprendidos en el reglamento de 1824, se encomendará á la Diputación el cuidado de solicitar la soberana aprobación, si ya no la hubiese recibido. En el caso de que la Diputación apruebe estas reglas, podrán pasársele las solicitudes que se han presentado sobre este particular, á fin de que en cada caso determine lo que corresponda.

La Junta adoptó por decreto las reglas propuestas por la comisión.

Se acordó después:

Que pase á la Diputación la orden de la Regencia, expedida en 26 de Enero último sobre el establecimiento del registro civil de nacidos, casados y muertos en las secretarías de los Ayuntamientos de las capitales, las cabezas de partido y los pueblos que excedan de quinientos vecinos, para que oyendo á la comisión económica determine lo que tenga por conveniente acerca del uso y cumplimiento de dicha orden.

Que se guarde y cumpla la orden de la Regencia, comunicada en primero de Enero, relativa al establecimiento de un periódico con el título de Boletín oficial de instrucción pública, sin perjuicio de los Fueros de Vizcaya, y con la circunstancia, por lo tanto, de que las disposiciones que en dicho periódico se inserten, no se cumplirán sin el previo pase foral.

Que no hay medio adecuado para sufragar los veinte y ocho mil reales, que por orden de la Regencia de 13 del expresado mes, se piden á cada Provincia del Reino para coadyuvar á la rectificación de su mapa, por no ser bastantes los recursos con que cuenta el Señorío para cubrir sus obligaciones más urgentes y sagradas.

Que se proceda á una liquidación general que abrace

todos los suministros y gastos ocasionados por la guerra. Se tomó este acuerdo en votación nominal, con motivo de la diversidad de opiniones que hubo sobre si el reparto de quinientas mil raciones de boca y quince mil de pienso que hizo la Diputación provincial entre todos los pueblos de Vizcaya en 1839, entraría en la nivelación parcial de los suministros de aquella época, ó se procedería á la liquidación y arreglo general, que es lo que se resolvió por mayoría de votos.

Que pase á la Diputación para que resuelva lo que le parezca un memorial de Don Andrés García Urefia, Juez mayor que fué de Vizcaya, solicitando que en concepto de jubilación ó cesantía se le asista con la tercera parte del situado.

Que se autorice á las Justicias ó Ayuntamientos á convocar á los respectivos vecinos y á los propietarios de dentro y fuera de su jurisdicción, para presentarles las cuentas de todos los gastos ocasionados por la guerra, á fin de que, á semejanza de los vecinos y propietarios de Mendeja, puedan entenderse entre sí armoniosamente acerca de la manera de satisfacer dichos gastos, ó de que en otro caso, hecha la debida separación de los que sean meramente vecinales y de los que no lo son, tomen las medidas convenientes para cubrirlos con los arbitrios y contribuciones que de común acuerdo establezcan; y que no habiendo conformidad entre los interesados, resuelva definitivamente la Diputación lo que crea más equitativo.

Que pasen á la Diputación dos instancias de los representantes de Sopuerta, Galdames, Güeñes, Zalla y Arcenales sobre que se remueva á otra parte la cadena que existe en el barrio de Avellanoda en el camino de Castro á Bercedo, y sobre ciertos abusos, en contravención á disposiciones forales, en el transporte y depósito de venas, para que

resuelva lo que estime conveniente, con presencia de los antecedentes relativos á ambos puntos.

Que pase con especial recomendación á la comisión permanente de caminos creada el primero del corriente, un memorial suscrito por varios apoderados, pidiendo la apertura del ramal de Zugastieta á Zornoza.

Que se una al expediente relativo á la rectificación de la estadística territorial una moción del apoderado de San Andres de Echevarría sobre que no se impongan contribuciones hasta que se reforme la estadística.

Pasaron también á la Diputación otros varios memoriales con pretensiones de interés personal.

El apoderado de Lujua Don Manuel María de Aldecoa expuso el 4, que había leído con pesar en uno de los periódicos que se publican en Bilbao la narración de lo ocurrido en la sesión de 29 de Marzo, porque se supone en ella, que al tratarse de lo que el país haría en el caso de que el Gobierno enviase para imponerle su voluntad y alterar sus instituciones treinta á cuarenta mil hombres, se respondió de los bancos en que se hallaban sentados los representantes de Vizcaya *ill*, que significa morir ó matarlos; que él estaba intimamente convencido de que no era esto exacto, pues sólo oyó la voz *euqui*, tenerlos, harto menos dura y alarmante; y que sí, como creía, la Junta abundaba en su opinión, no debía dejar sin correctivo un hecho equivocado, que sino se rectificara de una manera solemne podría tal vez dar ocasión á no pequeños males. Sometió, por lo tanto, á la deliberación de la Junta la proposición siguiente, que después de un breve debate fué aprobada: «Pido que la Junta se sirva declarar que en la sesión que celebró el día 29 de Marzo último, no se pronunció la palabra *ill*, sino *euqui* que quiere decir tenerlos».

Se dió cuenta de una petición de Don Pedro María de

Recalde, en la que expone que habiendo rematado el impuesto del real y cuartillo y el de ocho maravedís en cántara de vino, destinados respectivamente á la caja general del Señorío y á la del camino de Bilbao á Durango, correspondientes al año 1834, en algunos partidos del mismo Señorío, le fueron exigidas por la Diputación de Durango las cantidades en que causó el remate; y como el director de la asociación de dicho camino le pedía nuevamente el pago del importe de los remates, solicitaba Recalde que se declare que no está obligado al pago. Resolvió la Junta, que en atención á que este asunto se halla pendiente ante los tribunales de justicia, se dejasen á Recalde á salvo los derechos que pudiese tener para repetir en su caso contra la caja general del Señorío.

Habiendo ocurrido durante la última guerra el caso de que faltasen á un tiempo los Diputados generales primero, segundo y tercero de un bando, y ejerciesen este cargo honorífico algunos de los Regidores, se propuso á la Junta si estos señores debían ser considerados Padres de Provincia. La Junta resolvió afirmativamente, y en su consecuencia fueron declarados Padres de Provincia los que se hallaban comprendidos en esta resolución.

Acordó la Junta que hasta que tuviese efecto la liquidación y arreglo general de suministros y gastos, ocasionados por la última guerra, se suspendiesen las reclamaciones y demandas de unos pueblos contra otros por cantidades procedentes de los expresados suministros y gastos.

Se adoptó por decreto una proposición del apoderado de Güeñes Don José Miguel de Arrieta Mascarua, en la que pedía que se autorizase á la Diputación para que realice, en la parte que pueda, los créditos que á su favor dejó pendientes la Diputación de Durango, y que con éstos se paguen, en la parte que alcancen, y según su preferencia, las obli-

gaciones de la misma.

Anunciándose varias mociones por parte de algunos apoderados, se determinó que se observase respecto á ellas lo que estaba resuelto en cuanto á memoriales por la Junta general en 18 de Julio de 1831, supuesto que militaban las mismas razones, y que de consiguiente pasasen á la Diputación general para los efectos expresados en aquel acuerdo, no sólo las mociones ya anunciadas en esta sesión, sino las que quisiesen presentar los apoderados en la secretaría durante todo el día.

Adoptando la Junta, sin embargo de la resolución precedente, la moción de un apoderado, acordó que en adelante no pudiese representar á los pueblos en Juntas generales ningún empleado que goce sueldo, ya sea del Gobierno, ya del país.

Tomando en consideración lo manifestado por la Diputación sobre la insuficiencia de los arbitrios ordinarios y demás recursos de que disponía para dar frente á sus obligaciones, se le autorizó ampliamente á que, contando con la Junta de comercio de Bilbao, en el caso de que fuese menester hacerlo, duplicase el impuesto de dos reales que actualmente se cobran en fanega de sal á su introducción en Vizcaya.

Resolvió la Junta consignar en sus actas un voto solemne de gracias al Corregidor, por las muestras inequívocas que en el discurso de su mando, y con especialidad durante estas sesiones ha dado, así de su afecto al país como de sus deseos de contribuir á su prosperidad, suplicándole que hiciera cuanto estuviese de su parte en favor de él en el honoroso puesto que iba á ocupar. Así lo prometió el Corregidor, manifestando á la Junta en una breve peroración lo mucho que este voto honorífico le lisonjeaba.

Se dió igual voto de gracias á los Diputados generales

por el tino y acierto con que ha manejado los negocios públicos, y sobre todo por la energía y tesón que desplegaron para sostener las instituciones del país; al decano de los Padres de Provincia Don Joaquín María de Ugarte, que en medio de su avanzada edad ha tomado una parte tan activa en las tareas de las Juntas; y á Don Gregorio de Lezama Leguizamón, por las muestras que siendo Jefe y Corregidor político del Señorío dejó consignadas de su acendrado amor al país, trabajando decidida ó incansablemente por la conservación de los Fueros.

A indicación de un apoderado, se volvió á tratar de los daños que causa el fuego en los montes y arbolados; y sin perjuicio de lo decretado sobre el particular el día 2, y de las disposiciones que en su virtud se dicten por la Diputación, se determinó que todo ganado que se encontrase paciendo en terreno á que hubiese llegado el fuego, durante dos años después de la quema, fuese prendado y cayese en comiso.

Resolvió asimismo la Junta, que al ponerse en planta, en virtud de lo acordado en la sesión del 2, el instituto de segunda enseñanza, cuidase la Diputación general de que se establezca en él una cátedra de lengua vascongada.

Se acordó finalmente consignar en el acta el desagrado que causaron á la Junta ciertas manifestaciones de aplauso, nunca acostumbradas en sus sesiones, que se habían observado de parte de algunos espectadores; y se prohibieron absolutamente toda clase de demostraciones públicas, ya fuesen de aprobación, ya de vituperio, como tan contrarias á la dignidad y decoro del congreso vizcaíno,

Fueron elegidos Diputados, Síndicos y Secretarios respectivamente Don Domingo Eulogio de la Torre y Don Martín de Izaguirre, el Conde de Montefuerte y Don Mateo de Incháurraga, Don Juan de Carranza y Don Luis de Basterra.



CAPÍTULO XIX

Por haber sido elegido Diputado á Cortes Don Pedro Gómez de la Serna, fué nombrado Corregidor político de Vizcaya Don Salvador Reina Rodríguez, el cual tomó posesión de su destino el 10 de Abril en la forma de costumbre. Uno y otro se dirigieron á los vizcaínos el mismo día con las respectivas alocuciones siguientes:

«Corto, pero dificultoso, ha sido el periodo de mi administración en esta Provincia; al separarme de ella para cumplir la misión que me impusiera la de mi origen, nada debo decir de la marcha que he seguido en los negocios públicos; á vosotros toca juzgarme, y yo me someto á vuestro fallo.—Constante en procurar por todos los medios la conciliación de los intereses de Vizcaya con los del resto de la Monarquía, sólo he oído mis propias inspiraciones; mi convicción no ha variado; hoy es más profunda que nunca.—Representando en esta Provincia el pensamiento del Gobierno, y siendo su agente responsable en días en que tanto se le ha calumniado, y en que las banderías políticas que dividen á la Nación han fijado su vista en Vizcaya, como en su teatro predilecto, debo destruir al despedirme las

prevenciones que algunos fraguan en su beneficio y en daño del país.—El Gobierno se ha hecho superior á los partidos y á sus apasionadas acriminaciones; en medio de la agitación de los ánimos, no se ha impuesto un confinamiento, una prisión, un arresto, ni una multa; jamás ha sido tan amplia la libertad de escribir; nunca se ha dado mayor latitud á las discusiones so el árbol de Guernica; no se ha exigido impuesto alguno, y siempre ha sido escuchada la voz de los representantes del país emitida legalmente. Compare Vizcaya estos días con los de las épocas más felices de su historia, y haga justicia á la administración que preside los destinos de España; en esto se interesa su nombre, su suerte y la de su posteridad.»

«Nombrado por la Regencia provisional del Reino para desempeñar interinamente el destino de Corregidor político de este M. N. y M. L. Señorío, (de que acabo de tomar posesión) no me dirigiría desde luego á vosotros en circunstancias ordinarias, porque entonces bien podrían suplir por la profesión de fe política, que en tales casos se acostumbra, los recuerdos de la que ostensiblemente me visteis profesar en los años de 1825 y 1826; los lazos de amistad que en aquella fatal época me unieron á los liberales; los servicios que tuvo la fortuna de prestar á muchos de ellos; y la persecución que muy luego me acarrearon.—Pero en los momentos en que se trata del modo de cumplir lo dispuesto por la ley de 25 de Octubre de 1839; cuando vuestros Diputados pasan á la Corte á exponer y defender los intereses de este privilegiado país; debe ser imprescindible para mí, como representante del Gobierno, reproducir y confirmar lo que en la apertura de las Juntas generales de Guernica os manifestó mi dignísimo antecesor sobre la conveniencia y posibilidad de conciliar los Fueros con la unidad constitucional; aconsejaros no prestéis oídos á los que

por error ú otro cualquier motivo quisieran sacaros de la senda que vuestro buen juicio y vuestro verdadero interés os tienen marcada; y prometeros que todos mis actos tendrán por único objeto contribuir á vuestro bien, en la parte que esté á mi alcance.—Para mejor conseguirlo, me propongo por modelo la conducta política de mi distinguido antecesor; y me lisonjeo cooperarán al mismo fin la Ilustrísima Diputación general, el Excmo. Ayuntamiento, la Junta de comercio, mis compañeros de milicia nacional de esta invicta Villa (á la cual me glorio de pertenecer), y todos los Ayuntamientos, Alcaldos, Fieles y verdaderos vizcaínos que deseen de corazón la felicidad de su país. ¡Ojalá que al terminar mi cometido las esperanzas que ahora concibo se hayan convertido en realidades!»

Los comisionados Aldecoa y Hormaeche comunicaban á los Diputados generales desde Madrid el 7 los pasos que dieron con buen éxito para evitar que en el proyecto de ley de aranceles, presentado al Congreso, se introdujesen novedades perjudiciales á este país, porque la ley de 25 de Octubre, cuando se aplicase, era la que debía servir de regla para la modificación de los Fueros. El señor Sagasti, Diputado por Navarra, «se permitió nuevamente hablar de las Provincias Vascongadas, en términos que no nos toca de calificar; habló con pasión é inexactitud; á su vez pidieron la palabra para impugnarle todos los Diputados de esas Provincias»; el Gobierno se creyó también en el caso de terciar en el debate; pero habiéndose acordado por mayoría de votos que estaba el punto suficientemente discutido, no hubo lugar á las impugnaciones que se propusieron hacer los Diputados vascongados á cuanto pudiese ser perjudicial al país en las explicaciones provocadas por Sagasti. Las explicaciones que se dieron con este motivo por el Presidente de la comisión y el Ministro de Hacienda, dejaron entrever cierta tenden-

cia á aplicar al comercio ó industria de dichas Provincias las leyes y condiciones de extranjería, cuyas consecuencias no hay para qué encarecer. Así es que, aun cuando por de pronto se conjuró el peligro, las explicaciones posteriores envuelven una amenaza tanto más temible cuanto que las escuchó con señales de aprobación el mayor número de los Diputados presentes. Esta circunstancia, y el deseo de precaver los males que se indican, han hecho concebir á los comisionados la idea, que no es nueva, de resolver la dificultad por medio de un capitulado que se celebre con el Gobierno. Los aranceles se van á plantear por Septiembre; y aunque no se llevaran las aduanas á las costas y fronteras, por lo tocante á las Provincias Vascongadas, mientras esté pendiente el punto de la modificación de los Fueros, se las amenaza con el rigor del tratamiento extranjero. Los comisionados proponen al juicio de las Diputaciones la cuestión de si, dejando las cosas como están hasta que se verifique la modificación, no será conveniente impedir el perjuicio que el tratamiento indicado ocasionaría, mediante un donativo de dos, tres mil ó más duros mensuales, para ayuda de las necesidades públicas.

Se reunieron el 28 en Bilbao en conferencia los representantes de las tres Provincias, asistiendo por Vizcaya los Diputados generales, y se acordó que, supuesto que dentro de pocos días se iba á nombrar la Regencia en propiedad, se preparase una exposición razonada de agravios que habría de dirigírsele, y que entretanto se excite á los Senadores y Diputados de estas Provincias á que por medio de interpelaciones, ó de otra manera, defiendan la causa de los Fueros, que es la causa de la justicia, de la libertad, del honor y de la opinión pública, estando en correspondencia Diputaciones, representantes y comisionados para la conservación de los Fueros y su restablecimiento en la parte vulnerada.

Escribieron los Diputados generales el 30 á Aldecoa y Hormaeche, diciéndoles que si la candidatura de Espartero para Regente ofrece probabilidades de triunfo, deben votar por ella, asegurándose antes de que su administración ha de sernos favorable; hay que apoyar al que más nos ofrezca, exigiendo de la manera que se pueda la seguridad del cumplimiento de lo ofrecido. Las Diputaciones y los Diputados á Cortes ven las cosas del mismo modo, pero creen aquéllas que si ni Espartero ni los que han de componer el Ministerio inspiran confianza, no se debe votar por nadie para la Regencia.

Al circularse á los pueblos del Señorío el 12 de Mayo el acuerdo de las Cortes por el cual se nombraba á Espartero Regente del Reino, se les decía que al llegar á su noticia que la persona colocada al frente de la Nación española por el voto de las Cortes, es la misma que las Juntas generales del país en 1839 nombraron por su Diputado general, tengan la esperanza, que hoy alimenta la Diputación, de que se cumplirá por el Gobierno fiel y lealmente, como lo han ejecutado hasta ahora los vascongados, lo pactado en los campos de Vegara.

Considerando que se debían por el Señorío al establecimiento de niños expositos millón y medio de reales próximamente, que recaen sobre personas pobres y desvalidas, y sobre los mismos expósitos; y que aunque la Diputación quisiera pagar de una vez esta deuda, no le es posible hacerlo, porque para las atenciones corrientes de dicho establecimiento, y el reintegro, ordenado por la Junta general en 2 de Abril último, de lo que pagan los pueblos por el impuesto repartido á la propiedad, se necesitan quinientos mil reales, que son los que se han distribuido entre los pueblos, tomando por base el vecindario de cada uno; como la Diputación conoce el estado angustioso de los pue-

blos, por efecto de las circunstancias de la guerra, determinó el 25 de Junio que los pueblos satisfagan la cantidad que les corresponde en el concepto expresado en tres plazos, que serán: el primero en todo el mes de Julio próximo en el que deberán entregar la mitad; el segundo para el 15 de Octubre y el tercero en fin de Diciembre; pagando en estos dos últimos la otra mitad por iguales partes.

Se pasaron el 7 de Julio dos circulares á los pueblos. Por una de ellas se advertía, que sin perjuicio del derecho que asiste á todo particular para matar cabras, y reclamar daños y perjuicios contra el dueño de cualquier ganado que pastase en propiedad ajena, se iba á dar orden á los miqueletes para que desde el 25 del corriente maten las cabras que hallaren sueltas, conforme á lo dispuesto en Junta general el 2 de Abril último. Por la otra circular se dictaban las medidas siguientes: 1.^a Las Justicias remitirán á los mendigos forasteros al pueblo de donde proceden, si son del Señorío, y á disposición del Diputado general encargado de la policía, si son de fuera. 2.^a Se permitirá mendigar en cada pueblo á los mendigos que residen en él, mediante una papeleta firmada por el Alcalde ó Fiel y el cura párroco. 3.^a No se permitirá mendigar á los de fuera de su respectiva jurisdicción, con pretexto de romería ni otro alguno. 4.^a Las papeletas para poder mendigar se renovarán todos los años. 5.^a Los miqueletes quedan encargados de exigirlos á los mendigos.

Los Diputados generales y los Diputados á Cortes y comisionados de Vizcaya, Aldecoa y Hormacche, siguieron carteándose durante todo este tiempo. Dicen los últimos á los primeros en una de sus cartas, que entregaron al Regente la exposición en que las tres Diputaciones le felicitaban por su nombramiento, y que los recibió muy bien, pero sin soltar palabra alguna favorable ni adversa; que la exposi-

ción que se hizo sobre el beneficio de bandera ha sido mal acogida por la Junta de aranceles, aunque uno de sus individuos presenta voto particular, fundado en altas consideraciones políticas, que no es hostil á los intereses de Bilbao.

El 24 de Junio se apresuraban los mismos á participar á los Diputados para su gobierno, y tal vez para que se reanimen un poco, que uno de los miembros más influyentes de la Junta de aranceles les ha asegurado que seguirá para las Provincias Vascongadas el régimen anterior, después de establecido el nuevo arancel en el Reino, hasta que se haga el arreglo pendiente con ellas; en una palabra, que seguiremos siendo considerados, no como extranjeros sino como semiextranjeros, pues á los frutos y efectos que queramos introducir en el interior del Reino, se les exigirán derechos basados en el antiguo arancel. También les dijo el mismo vocal de la Junta de aranceles, que si la Junta de comercio de Bilbao eleva, cuando empieza á regir el arancel que se acaba de aprobar, una exposición pidiendo que se restablezcan los depósitos para las mercancías procedentes de lejanos puertos extranjeros, sin que las rentas sean monoscabadas por los fraudes, influiría cuanto pudiese en el resultado satisfactorio de dicha petición, no sin alguna confianza. El Presidente del Consejo de Ministros les ha avisado que vayan á tratar del derecho de Prebostad que se exige en Bilbao, contra el cual hay algunas reclamaciones. Los Ministros de Estado y de Gobernación han manifestado ya sus deseos de que empiecen los trabajos para el arreglo ó modificación de los Fueros. Una de las personas que probablemente representarán al Gobierno en la comisión en que se trata de este asunto será la Serna. Los comisionados compañeros de Aldcoa y Hormaeche, opinan que se debe dar largas, evitando el presentarse formalmente en la comisión en número suficiente; pero los comisionados vizcaínos, aunque creen que

conviene ganar tiempo, hasta ver si mejoran las circunstancias, creen también que hay peligro en esquivar siempre el cuerpo, sin pretextos decorosos para ello. El Gobierno parece que está conforme en no presentar proyecto de arreglo foral en esta legislatura; pero si en la próxima no ocurre alguna novedad que motive la disolución, no le será fácil dejar de presentarlo, por más que se quisiera dilatarla. Será preciso al fin obrar, evitando que tengan armas las Cortes y el Gobierno para someternos á la nivelación que apetecen. Los comisionados vizcaínos dicen que les sería sensible disentir de sus compañeros, ó tener que separarse de sus propias convicciones, aunque todavía esperan no verse en semejante disyuntiva, y creen que habrá conformidad entre todos.

Les decía Murga el 28 que los comerciantes de Bilbao piden á la Diputación una conferencia, (que Murga ha excusado hasta ahora, pretextando la ausencia de su compañero Victoria de Lecea) para estrechar á la Diputación á que cuanto antes contribuya al arreglo de la cuestión pendiente; pero que á la Diputación no le toca apresurarlo, aunque tampoco sea prudente ni posible esquivarlo. Se pregunta Murga si Sagasti querrá granjearse el lauro de destruir nuestros Fueros como destruyó los de Navarra, porque así resulta directa ó indirectamente de la interpelación que ha anunciado, á la cual espera Murga que se contestará victoriosamente.

El mismo día participaban los comisionados de Vizcaya á los Diputados generales, que el 27 se había comunicado á Aldecoa de real orden, por considerársele el decano de los comisionados de las tres Provincias Vascongadas, que estaba ya nombrada la comisión que ha de entender por parte del Gobierno en el arreglo foral, compuesta de Fernández Gamboa, Tena, Fernández de los Ríos, Luzuriaga y Bartolomé y Haedo, el primero Presidente y el segundo Secretario.

Los infrascritos han hablado con el Ministro de Hacienda acerca de la exposición elevada á la Regencia provisional para que se mantenga á Bilbao en la posesión del beneficio de bandera hasta que se arregle la cuestión foral, sabiendo que el Presidente de la Junta de aranceles y el Director de aduanas los apoyaban; pero aunque el Ministro se mostró benévolo, no les inspira confianza, porque recelan que se deje influir por el temor á las Cortes y á la prensa.

Decían el 2 de Julio que sus compañeros de las otras Provincias insisten en que conviene dilatar el arreglo porque las circunstancias nos favorecen muy poco, pero los infrascritos creen que los pretextos plausibles se agotarán pronto, y que cuando esto suceda convendrá presentarse de buena fé y ver hasta donde se extienden las exigencias del Gobierno para tomar lealmente nuestro partido; que Aldecoa ha contestado al Gobierno que faltan todavía algunos de sus compañeros, y que tenemos que ir de acuerdo con los comisionados de las otras Provincias. Los infrascritos no han dejado de gestionar para que se restituya á Bilbao la posesión del beneficio de bandera, previendo la impaciencia natural de los comerciantes de Bilbao y los disgustos que puede ocasionar; pero nada han conseguido hasta ahora, y les duele pensar que acaso en adelante no puedan estar en completo acuerdo con Bilbao, porque sus deberes están claramente trazados, y no les es dable prestar su conformidad á ninguna pretensión, por útil que por otros conceptos parezca, que se enderece á menoscabar las instituciones de nuestro país. El Gobierno quiere plantear á todo trance las aduanas en nuestras costas y fronteras. Sabido es también que los comisionados tienen que resistirlo con todas sus fuerzas; así es que no está en su mano seguir, como hombres honrados, otra línea de conducta más contemplativa.

Escriban el 14 que no participan de la opinión que tiene

la Junta de comercio de Bilbao sobre la fuerza que va adquiriendo el Ministerio, y que aun de lejos se puede conocer la poca influencia que tiene en las Cortes, dejándose dirigir por ellas; y que éstas nos serían más favorables si fuese mayor la influencia del Ministerio. No les parece exacta á los comisionados la inteligencia que dió la Junta de comercio á lo que escribieron en la carta del 24, pues según entendieron al vocal de la Junta de aranceles, los frutos y efectos que pagarán á su introducción en las Provincias contribuyentes derechos basados en el arancel antiguo, son los que produzcan las exentas, y no el bacalao ni los demás artículos de procedencia extranjera, á los cuales se exigirán en las aduanas de Balmasoda, Orduña y Vitoria los derechos que se fijan en el nuevo arancel. Los comisionados repiten con este motivo que no les es lícito hacer otra cosa que cumplir con la obligación que los impuso la Junta general de velar por la conservación de los Fueros, y que en este sentido no pueden admitir el establecimiento de las aduanas, como base de un arreglo, sin expresa autorización de la Junta. Mucho ganaría Bilbao en que su puerto se habilitase, como lo indica la Junta de comercio; pero en épocas más felices se ha considerado esta medida como preliminar para someternos al sistema general de resguardos, y no cabe la menor esperanza de que se otorgue ahora semejante pretensión sin que se admita la aduana al propio tiempo.

Participaba Hormaeche á Murga el 16, que en la sesión celebrada el día anterior se aprobaron los quince primeros artículos del proyecto de ley de arreglo de los Fueros de Navarra, y que se suspendió la aprobación del siguiente, en virtud de una enmienda de Sagasti para que mientras no se estableciesen las aduanas en las costas y fronteras de las Provincias Vascongadas, se retirasen las nuevamente puestas

en los Pirineos á los puntos del Ebro en que anteriormente existieron. Sagasti ha retirado su enmienda, en vista de las explicaciones que ha dado el Gobierno sobre las medidas que tiene tomadas para que se trabaje activamente en el arreglo de los Fueros. Importa á la suerte de nuestro país que se estudien las palabras pronunciadas por el Presidente del Consejo de Ministros y aun las de Sagasti, pues de ellas y de la enmienda se deduce que no todos los navarros están contentos de la decantada modificación de sus Fueros, y que el despecho inspira los ataques que alguna vez se nos dirigen.

Escriben los comisionados á los Diputados generales el 19 que el Presidente de la comisión de arreglo de los Fueros los ha citado separadamente, y que han resuelto contestarle que aun se hallan ausentes algunos de sus compañeros, á quienes se tiene concedido para presentarse el plazo de cuarenta días, á contar desde el primero del corriente, y que es indispensable su concurrencia para tratar de tan vital negocio.

Se publicó el 20 de Julio el reglamento general de caminos de Vizcaya, redactado por la comisión permanente de este ramo y aprobado por la Diputación general. Se establece en este reglamento la Dirección general de caminos, compuesta de la misma Diputación, y de los directores de todos los caminos que enumera el artículo veinte y dos del plan de igualdad, á excepción del de Bilbao á Balmaseda, si su Junta directiva y su asociación persisten en el estado de aislamiento y separación en que por su propia voluntad están hoy colocadas; y se determinen las facultades de la Dirección, y todo lo relativo á la instrucción de los expedientes del ramo.

Se reunieron en Vergara los representantes de las Provincias Vascongadas el 27, asistiendo por Vizcaya el Diputado

general electo Don Domingo Eulogio de la Torre y el segundo Consultor Ariz. Después de tratar de la reorganización de la Sociedad vascongada y de la fundación de escuelas industriales, se acordó elevar al Regente del Reino una exposición que dice así:

«Las Provincias Vascongadas, representadas por medio de los comisionados que suscriben, se han reunido en conferencia, según su antiguo uso y costumbre, para tratar de los puntos que comprende la orden del 14 del corriente, que le fué dirigida por el Excmo. señor Ministro de Hacienda, excitándolas al pago de un donativo, de la contribución extraordinaria de guerra, y de la parte que corresponde al Estado en las prestaciones decimales. El primer acuerdo de la conferencia ha sido elevar á V. A. una exposición sumisa, confiando en que sus razones nadie puede apreciarlas mejor que V. A. mismo, que conoce las costumbres de estas Provincias, dirigió en ellas por muchos años y con gloria de la Nación la suerte de sus ejércitos, y presencié los infinitos sacrificios y calamidades que sufrieron sus pueblos en tan penosa lucha.—Estas Diputaciones saben que el donativo que les pidió el Gobierno en el año 1824 figuró en el presupuesto de 1836; pero también recuerdan que entonces se reclamó con energía contra esta determinación por los señores Próceres y Procuradores de este país y de Navarra, según resulta de las actas contemporáneas; debiendo añadirse que si estas Provincias aceptaron el pago del donativo, fué bajo de ciertos capítulos condicionales en favor de los Fueros, industria y comercio vascongados, que no fueron cumplidos ni observados por el Ministerio de aquella época, por lo que quedaron libres de toda responsabilidad. Sin embargo, habiendo crecido los apuros del tesoro con motivo de los acontecimientos de Cataluña, estas Provincias acreditan su constante fidelidad y el interés que las une á la causa

nacional, ofreciendo un donativo que fué aceptado con particular aprecio y puntualmente realizado.—Por lo que respecta á la contribución extraordinaria de guerra, estas Provincias, con arreglo á su legislación particular, deben contribuir al Estado con servicios personales, creando cuerpos de naturales armados, equipados y sustentados á sus expensas durante la guerra; este deber lo han cumplido con mucho exceso en atención á su limitada población, como V. A. misma lo ha visto, habiendo operado dichos cuerpos bajo de sus inmediatas órdenes; por lo que no puede obligar á estas Provincias la precitada contribución extraordinaria, además de hallarse en oposición con los Fueros de las mismas, confirmados por la ley de 25 de Octubre de 1839, como asimismo lo conoció y manifestó el Gobierno.—No desconocen los que suscriben las cargas de justicia á que estaban afectas las pretensiones decimales; mas tampoco ignora V. A. que en el día, por efecto de particulares circunstancias, su producto es muy ténue ó insignificante, y se hubiera reducido á la nulidad sino por las medidas y disposiciones oportunas adoptadas para su recaudación por las Diputaciones de estas Provincias, invirtiendo dicho producto en atender y cubrir urgentes y superiores obligaciones inherentes al Estado, como lo demostrará el resultado de su liquidación. Después del memorable convenio de Vergara es una verdad que amaneció para estas Provincias y para la Nación entera una época nueva de felicidad y ventura; pero desgraciadamente, los males que dejó en pos de sí la guerra fueron inmensos y urgentísimos, y son necesarios muchos años para repararlos, por más esfuerzos que se hagan. Puentes destruidos, caminos arruinados y lugares enteros reducidos á cenizas se presentaron por todos lados á los ojos del viajero, y estas Diputaciones se ocuparon y ocupan con preferencia de su reparación. Por otra parte, después de una

lucha de siete años y de tantas devastaciones, los pueblos han contraído compromisos, obligaciones y deudas de la mayor gravedad y justicia, que es preciso reconocer y arreglar según lo exige el orden y conveniencia pública. Finalmente, la necesidad de conservar á todo trance el bien precioso de la paz obliga á estas Diputaciones, entre otros muchos gastos, á sostener cuerpos de naturales armados que felizmente estrechan la unión política del país, y conservan en él el mayor orden y una inalterable tranquilidad. A estas medidas y al buen espíritu de estos habitantes se deben los triunfos del año último sobre las facciones de Leguina y Balmaseda, que desaparecieron al momento, sin que desde aquella época se hayan repetido sucesos tan desagradables. Tales son las razones que se elevan á la ilustración de V. A. sobre la citada orden de 14 del corriente, y al efecto—Suplican rendidamente á V. A., que tomándolas en su superior consideración se sirva acogerlas con su característica benignidad, suspendiendo los efectos de la mencionada orden, seguro de que estas Provincias se prestarán siempre á hacer los servicios que sean compatibles con su actual situación y conformes á su sistema social.»

El mismo día se hizo constar en acta reservada aparte, que «se leyeron después con este motivo varias cartas de los comisionados en Corte acerca del estado de sus relaciones con el Gobierno y de sus vivas y constantes solicitudes para conservar en su integridad las instituciones forales del país, amenazadas en las sesiones de la presente legislatura con el proyecto de trasladar las aduanas á la frontera, ó, en otro caso oprimir el comercio é industria vascengada con el gravísimo derecho de extranjería;» y se aprobaron cuantas gestiones han hecho hasta ahora los comisionados, dándoles un voto de gracias. «Teniendo presentes las indicaciones que se hacen en sus cartas, en las que con objeto

de aplazar la modificación definitiva de los Fueros para más adelante, é impedir en el interin toda novedad perjudicial al comercio é industria y demás prerrogativas del país, se recomienda un capitulado nuevo y provisional, garantido con un servicio pecuniario que puede cubrirse mensualmente, se acordó por medio de esta acta reservada autorizar ampliamente á dichos señores para que en la ocasión más oportuna y ventajosa lleven á cabo esta idea con el Gobierno, adoptando por base indispensable que las aduanas no se muevan de su línea actual; que se conserve el beneficio de bandera al comercio de Bilbao; y que el nuevo capitulado no perjudique ni disminuya los Fueros, ni las regalías mercantiles que hasta ahora han disfrutado y disfrutan el comercio é industria de estos naturales, sino que únicamente se limite á reprimir el fraude con medidas de vigilancia, ofreciendo al efecto el apoyo de las Diputaciones y demás autoridades forales, y reservando para más adelante, luego que lleguen algunos de los señores comisionados que se esperan de la Corte, y sean oídas sus opiniones en la materia, extender ó variar las instrucciones que fueren necesarias para dar la última mano al pensamiento indicado, que por ahora se considera prudente y ventajoso... para conservar nuestras preciosas regalías.»

El 2 de Agosto escribe Hormaeche al nuevo Diputado general Don Domingo Eulogio de la Torre, diciéndole que se alegrará de que pueda vencer las dificultades y peligros que le esperan, y que se ha suspendido la entrega de la exposición dirigida al Regente sobre el donativo y la prestación decimal, que ha reclamado el Gobierno, hasta que los comisionados alaveses López y Egaña, que han salido para Vitoria, escriban lo que debe hacerse después de tocar con los Diputados generales de Vizcaya. Supone Hormaeche que sus compañeros Aldecoa y Ozámiz Jausolo, que se hallan

en este Señorío, tendrán conocimiento de la orden del Ministro de Gobernación de 24 del mes próximo pasado, en la que se previene que sino se presentan en el término señalado en 27 de Junio los comisionados por las Provincias para el arreglo de los Fueros, el Gobierno procederá á hacerlo inmediatamente.

Avisa Hormaache al mismo la Torre el 9 que ha entregado ya al Ministro de Hacienda la exposición redactada con motivo de la orden de 14 de Julio. El infrascrito ha hecho entrever al Ministro que tal vez se le puedan conceder algunos auxilios pecuniarios, que contribuyan á aliviar la penuria del tesoro, si el Gobierno accede á las justas pretensiones de los comisionados. El Ministro no sabe cual es la inteligencia genuina de la orden sobre el beneficio de bandera, porque parece que es asunto en que ha tomado poca parte. En la secretaría del Ministerio la entienden por desgracia de un modo contrario á nuestros deseos.

En carta del 13 recomienda Hormaache á los Diputados generales que vayan pronto á Madrid Aldecoa y Ozámiz Jausolo, especialmente el primero, cuya salud es más robusta que la del segundo, porque se verá él en otro caso en lugar poco decoroso, agotados ya todos los medios dilatorios para excusarse de tratar del arreglo de los Fueros con los comisionados del Gobierno, que le han citado ya.

El 14 se hizo cargo del Corregimiento el Secretario de la jefatura política Don Miguel Rodríguez Ferrer. Con este motivo reprodujo el Síndico, que lo era á la sazón el tercero del bando oñacino Don José Angel de Torres Vildósola, por ausencia del primero y del segundo, lo que expuso su antecesor en 18 de Noviembre de 1840, asesorado por Lotzaga, y es como sigue: «Que con arreglo á lo que se prescribe en el artículo segundo del real decreto de 16 de Noviembre de 1839, no puede ejercer el Corregidor político de Vizcaya

otras atribuciones que las no judiciales, que por el Fuero, leyes y costumbres competían al anterior Corregidor letrado, quien presidía las Juntas, Regimientos y Diputaciones generales, y administraba la justicia en primera y segunda instancia en los casos y forma prescritos por las leyes forales. Mas el Corregidor político con atribuciones no judiciales se encuentra limitado á la mera presidencia, sin poder tomar parte en las deliberaciones, ni votar las resoluciones, á no ser en el único caso de dirimir la discordia que pueda haber entre los dos Diputados generales. La Diputación general desempeña el poder ejecutivo dentro del territorio vizcaíno, y bajo cuyo concepto es la única autoridad encargada de hacer circular y cumplir las órdenes, de tomar por sí y hacer ejecutar directamente cuantas disposiciones sean convenientes al régimen político, económico, administrativo y gubernativo de este Señorío, sin que el Corregidor haya intervenido ni deba intervenir en la correspondencia oficial de los señores Diputados generales con el Gobierno supremo, ó cualesquiera funcionarios público del Reino.» Reproduciendo ahora el Síndico este informe, añade que puede tomar posesión de su cargo el nuevo Corregidor político, sin perjuicio de las reclamaciones acordadas por las Juntas generales en Diciembre de 1839 y Marzo último para que desaparezca la infracción del Fuero que lleva consigo el artículo segundo del mencionado decreto de 16 de Noviembre. Rodríguez Ferrer prestó el juramento de costumbre sin reserva ni restricción alguna. Como resultado de la alteración del carácter del antiguo Corregidor convertido ya en Jefe político, dejó de tomar parte este representante del Gobierno en las deliberaciones de la Diputación general, á que asistía constantemente, como se ha visto, cuando se observaba en toda su pureza el régimen foral.

En otras cartas dirigidas por Hormaeche á Don Domingo

Eulogio de la Torre, le recomienda la suscripción al periódico semanal titulado *El Español* que se iba á publicar bajo los auspicios de Don Joaquín Francisco Pacheco, y dice que entregó la exposición en que se pide la aclaratoria relativa al beneficio de bandera; que el Ministro de Hacienda la recibió con algun desabrimiento, quejándose de la resistencia que encontraban en esto país todas sus disposiciones, sobre todo de la negativa á satisfacer el donativo que había pedido con tanta moderación, ó indicó que iba á proponer en el Congreso medidas serias para obligarnos á cumplir con lo que él llama nuestros deberes, concluyendo con decirle que de ningun modo pensaba en acceder á su pretensión de aclaratoria. Hormaeche rebatió facilmente los cargos del Ministro, demostrándole que los servicios prestados por las Diputaciones después del convenio de Vergara valían más que todo lo que pudiera prometerse del donativo, y que importaban muchas docenas de millones de reales; que nunca se pagarán probablemente los sacrificios hechos por el país, y sin los cuales no hubiera sido acaso tan favorable el éxito de la guerra, y que el Gobierno cometía errores funestos de graves consecuencias, inducido por sus injustas preveniciones contra estas Provincias. Le contestó el Ministro que e importaba poco «que los Fueros fuesen más ó menos amplios» y que «lo que le interesaba realmente era que le ayudásemos á salir de apuros.» Hormaeche se aprovechó de esta declaración, y dijo que no dudaba que cuando se reuniesen los comisionados de las Provincias, se trataría de hacer algunos sacrificios pecuniarios, siempre que se respetasen nuestras instituciones, y que en estos sacrificios seríamos más generosos de lo que podría esperarse de nuestra pobreza; pero el Ministro no quiso entrar en esta materia por eludir compromisos. Se asegura «que infaliblemente se piensa presentar para la próxima legislatura el proyecto de arreglo

de Fueros que, sino hace un milagro la Providencia, será idéntico al de Navarra.» El 30 de Agosto participaba Hormaeche al Secretario interino Don Manuel de Barandica, suponiendo que los Diputados generales habrían ido á Vergara, como fueron, á solemnizar el aniversario del convenio, que se había resuelto desfavorablemente el asunto de la aclaratoria sobre el beneficio de bandera.

Teniendo en consideración el estado económico del Señorío, se fijó la Diputación en los gastos enormes que ocasionaba el sostenimiento del cuerpo de miqueletes, y después de consultar el caso con la comisión económica permanente creada por las Juntas generales, resolvió el 27 dividir en activo y pasivo el servicio de dicho cuerpo; que la cuarta parte del número de miqueletes en la actualidad existente, quedase en servicio activo, pasando las otras tres partes al servicio pasivo con el sueldo que se señala. A los que quedaban en servicio activo se les rebaja la cuarta parte del sueldo.

Los Diputados Aldecoa y Hormaeche, escribían á los Diputados generales el 6 de Septiembre, pidiéndoles su consejo en las difíciles circunstancias en que se hallaban en Madrid; no saben si se presentarán sus compañeros de comisión, y aunque no dudan de que el deseo general del país será que se conserven ilesas nuestras instituciones, no pueden adivinar qué medios le parecerán mejores para defenderlas, y si deberán abandonar el campo, como parece que lo hacen ya los alaveses y guipuzcoanos. Hay que reconocer, por muy doloroso que sea, que si el partido que hoy manda se mantiene en su puesto ha de someternos tarde ó temprano á una ley semejante á la que se ha dado á Navarra.

Participaban en otras cartas que el Gobierno mantenía la resolución de la Regencia provisional de no admitir á Don Pedro de Egaña por comisionado de las Provincias, y que

insistía en tratar separadamente con cada una de ellas del arreglo de los Fueros.

Daban cuenta el 27 de la conferencia que tuvieron con los delegados del Gobierno, después de haberse puesto de acuerdo con sus compañeros Egaña y el Conde de Santa Ana, en la que, como era de esperar, hubo discrepancia en todos los puntos que se tocaron; quedando en entregar un papel en que pondrían sus razones, que no sin trabajo y desagradable discusión consiguieron que se les recibiese. De toda la correspondencia de los comisionados de Vizcaya se conoce que no había términos de avenencia con los delegados del Gobierno, y que los pasos que se daban para arreglar armoniosamente la cuestión foral en el estado á que habían llegado las cosas eran de todo punto inútiles.

La última carta dirigida á los Diputados generales por Aldecoa y Hormaeche, que hay en el expédiente de esta comisión, lleva la fecha del 4 de Octubre, y está firmada también por Don Blas López y el Conde de Santa Ana. Versa sobre una conferencia que tuvieron los cuatro con el Ministro de Hacienda para cumplir con el encargo que les dieron las Diputaciones de las tres Provincias de que viesan de conseguir del Gobierno que se mitigasen los efectos de las reales órdenes sobre el pago del donativo, de la contribución extraordinaria de guerra y de las prestaciones decimales. Los comisionados sentaron como preliminar el pensamiento que tenían las Provincias de entrar en algun arreglo, por medio de un servicio mensual, ó como se acordara, interín se verificaba el arreglo de los Fueros. El Ministro oyó con suma deferencia las explicaciones que le dieron los comisionados, y manifestó que sin prejuzgar cuestiones que no estaban decididas, aceptaba el arreglo que se ofrecía. Los comisionados quedaron en comunicar el resultado de esta conferencia á las Diputaciones, excitándolas á proponer

el servicio ó donativo que podía hacerse para llevarlo á cabo en la forma más conveniente.

Mientras conferenciaban los representantes de las Provincias con el Ministro de Hacienda, había estallado ya en ellas y en Navarra el movimiento que tenía por objeto derrocar al General Espartero y restituir la Regencia á la Reina madre Doña María Cristina. El relato, que á continuación se inserta, dará cumplida idea de lo que ocurrió en Bilbao entonces.¹

«Noble alzamiento de Navarra y Provincias Vascongadas.

—En lugar del número que no ha sido posible componer por falta de brazos, publicaremos una breve reseña de los sucesos importantísimos de los días de ayer y hoy.—Día 4. Muy de madrugada se recibió la fausta noticia de que el intrépido General O'Donnell se había hecho dueño de la plaza y ciudadela de Pamplona, con muy poca resistencia, poniéndose al frente del ejército de Navarra. Se aseguraba también que Vitoria y toda la Provincia de Alava se alzaría proclamando á la Reina Doña Isabel segunda, á su augusta madre la Reina Gobernadora y á los venerandos Fueros del país.—Tan noble alzamiento forzosamente había de encontrar en toda la Provincia de Vizcaya las más vivas simpatías. Así es que desde las seis de la mañana se reunieron en el paseo del Arenal varios y numerosos grupos de personas de todas clases, que significaron muy á las claras su entusiasmo y decisión de unirse á la bandera levantada por Navarra y Alava, bajo las órdenes, dirección y prestigio de un General valiente y entendido.—Reunidas con este motivo las autoridades del Gobierno revolucionario en el alojamiento

¹ Lo imprimió por suplemento el periódico que con el título de *El Vascongado* se publicaba en Bilbao. Lleva la fecha del martes 5 de Octubre de 1841.

to del Comandante general Santa Cruz, sin duda su primer acuerdo fué enviar un pliego al General Alcalá, pues con este objeto salía al parecer de esta Villa el Secretario del Gobierno político, acompañado de dos lanceros. Pero habiéndoselo indicado que de ningún modo le convenía marchar, se resignó á permanecer y volvió á casa de Santa Cruz.—Se trató poco después de tocar llamada para reunir la milicia, y se suspendió el hacerlo, porque se dijo que las autoridades forales, en las cuales tiene Bilbao así como todo el país depositada su confianza, iban á ocuparse del asunto. Mientras tanto, se esparció la voz, no sabemos si con fundamento, de que el Comandante general, conociendo que la resistencia sería inútil y costosa, encargaba moderación y templanza y recomendaba á los empleados del Gobierno para que con ellos no se cometiesen excesos ó tropelías.—Por la tarde, la mayor parte del vecindario se hallaba en el Arenal y en las calles inmediatas, y creció mucho la efervescencia, llegando al más alto grado al saberse con sorpresa que el Comandante general intentaba resistir el movimiento en caso de ser obedecido por las tropas. Entonces, y para evitar el derramamiento de sangre, se dirigían á casa de aquel Jefe, sita en el mismo Arenal, algunas personas distinguidas, con objeto de hablarle y desengañarle; pero su guardia tomó disposiciones hostiles, y para que no se creyese que se intentaba atropellarla, se adelantó una sola persona bien conocida á hablar con su jefe. En estos momentos se presentó el Brigadier Larrocha, Coronel del regimiento de Borbón, con todos los demás dignísimos Jefes y oficiales, y subió el Brigadier á verse con el Comandante general. Durante esta entrevista se recibió noticia del alzamiento de Vitoria, celebrado con entusiasmo, y á poco de haber salido el señor Larrocha, y de haberse dado á conocer como Comisario regio el señor

Don Manuel Urioste de la Herrán, nombrado por el Gobierno de S. M. la Reina Gobernadora, ¹ se tocó llamada para reunir la milicia, que desde el pronunciamiento de Septiembre no había formado una sola vez, y se encargó del mando militar el señor Larrocha, después que le dimitió el señor Santa Cruz, convencido por sí mismo de la noble resistencia de la tropa.—La milicia de esta invicta Villa quedó sobre las armas, así como unos cuatrocientos miqueletes de la Diputación.—El Jefe político la Serna ² fué depuesto por el Comisario regio. Es digno de notarse que al reconvenir la Serna á una de las autoridades de esta Villa porque consentía la sublevación contra el Gobierno, le contestó: ¿Y VV. no se sublevaron contra una augusta Persona, á quien debemos tantos beneficios, no la arrojaron VV. del suelo español, dejando en triste orfandad á la Nación y á sus inocentes hijas?—Día 5. A la una y media de la noche salieron de esta Villa el ex-Comandante general Don José de Santa Cruz, Gómez de la Serna, el ex-Secretario del Gobierno político Ferrer, y otras dos ó tres personas con pasaportes para Orduña. El administrador de correos Roldán fué depuesto por el Comisario regio.—A las ocho de la mañana se esparció la noticia positiva de haberse unido á la guarnición de Vitoria un regimiento provincial de los destacados en las inmediaciones, y se esperaba que siguiesen su ejem-

¹ El nombramiento de Urioste no pareció muy bien. Así resulta de un oficio que le pasó la Diputación el 15, en el que le dice que el Síndico, con acuerdo del Consultor, ha informado que el destino de Comisario regio se consideró siempre incompatible con los Fueros, y se ha mirado con repugnancia, por no estar comprendido entre los Jueces que debe haber en Vizcaya, y que lo haga presente á la superioridad para que sin apelar á los recursos forales quede sin efecto el nombramiento, esperando la Diputación del amor de Urioste á las instituciones que procederá de este modo.

² Había vuelto á encargarse de la jefatura poco antes.

plo otros dos batallones. El país, según los partes recibidos, se ha alzado con entusiasmo para sostener y secundar el levantamiento de Bilbao, señalándose entre otros puntos la Merindad de Durango.—A las doce del día la Diputación del M. N. y M. L. Señorío se reunió en el salón de sesiones, con un numeroso cortejo y lucido acompañamiento, entre el cual se encontraban los Grandes de España Marqués de Valmediano, de Santa Cruz, Conde de Corres, Vicario y Prior del cabildo eclesiástico, el Alcalde y varios individuos del Ayuntamiento, los señores Brigadieres Larrocha, Mazarredo y Arana, y los señores Alcalá Galiano, Valero y Arteta, Benavides, Escosura y Hevia, Peñuelas de Zamora, Arana, Zulueta, Jugo, Herrero, Lezama Leguizamón, el Jefe de E. M. y señores Jefes y oficiales del regimiento de Borbón y el vicecónsul francés.—Colocados todos estos señores en los balcones, el señor Diputado general Don Domingo Enlago de la Torre, acompañado del Regimiento y de la autoridad militar, dirigió una alocución enérgica á la milicia y al inmenso vecindario de esta Villa invicta, manifestándoles que la Diputación iba á proclamar el augusto nombre de la Reina nuestra Señora Doña Isabel segunda (Q. D. G.) y de su excelsa madre Doña María Cristina de Borbón, Reina Regente y Gobernadora del Reino, y los venerandos Fueros vascongados. «Hijos predilectos de la invicta Bilbao», les decía, «para el triunfo de tan noble causa cuentan la corporación y las demás autoridades forales con vuestro noble ardimiento y heroica decisión. La Diputación os asegura que vuestros votos y los suyos se verán gloriosamente cumplidos y satisfechos. Viva la Reina Doña Isabel segunda, viva su augusta madre la Reina Gobernadora, vivan los venerandos Fueros vascongados.» Estos vivas fueron respondidos por la milicia y un inmenso pueblo que ocupaba los balcones y todos los ángulos é inmediaciones de la

Plaza nueva. El Comandante de la milicia dió nuevos vivas, añadiendo uno al General Don Leopoldo O'Donnell, otro al Brigadier Larrocha, Comandante general de la Provincia y otro al regimiento de Borbón.—En seguida trasladados la Diputación y el Regimiento con el lucido cortejo al paseo del Arrenal, presenciaron el desfile de la milicia y miqueletes, retirándose después al salón de sesiones. — Esta tarde se formará el regimiento de Borbón con el Comandante general á la cabeza.

El mismo día 5 publicó la Diputación la alocución siguiente, sobre las razones que tuvo para tomar parte en el alzamiento.

«VIZCAÍÑOS: Después de tantos ataques que habéis presenciado contra vuestros Fueros, se ven estos amenazados de una destrucción completa. Los comisionados nombrados en Guernica para tratar con el Gobierno de Madrid sobre este punto han tenido que retirarse. A su tiempo la Diputación general publicará todos los documentos que patentizan nuestra noble conducta y la falta de fe de ese Gobierno. Las Juntas generales que van á reunirse muy pronto aprobarán aquélla sin duda. El convenio de Vergara ha sido indignamente violado en las leyes y en los individuos; así lo prueban las violentas disposiciones tomadas con los oficiales ilimitados del país; así los impíos ataques dirigidos á la Religión en todo el Reino; así los demás agravios recibidos.— La Diputación general no puede sufrirlos por más tiempo, y ha creído que no es posible diferir ya el resistirlos con las armas. En Pamplona se ha proclamado á S. M. la Reina María Cristina, Reina Gobernadora de España. Esta bandera se levanta en todo el Reino en los días 3, 4 y 5 de este mes. Las Diputaciones Vascongadas á las cuales ofrece el nuevo Gobierno establecido la conservación íntegra de los Fueros, como se ve en la adjunta proclama, han debido adoptarla, y

salvar nuestras venerandas instituciones ó perecer con ellas. Vitoria se ha alzado ya con todas las tropas de su guarnición; Bilbao acaba de hacerlo del mismo modo con el aguerrido regimiento de Borbón al mando de su benemérito Brigadier Don Ramón Larrocha.—Desde este momento quedan los Fueros en toda su fuerza y vigor, y el tribunal del Corregimiento restablecido. ¡A las armas vizcaíños! Vuestra Diputación general se halla á vuestro frente; ella os guiará en las difíciles circunstancias que nos rodean, y jamás os abandonará. La ley quinta del título primero de nuestros Fueros manda que todo vizcaíno acuda con las armas en defensa de su Señor. ¿Qué haréis cuando se trata de defenderle y de defender nuestros Fueros? Si durante la guerra civil reciente habéis dado, aunque divididos, tantas pruebas de heroísmo ¿qué haréis hoy unidos bajo la misma legítima bandera y guiados por vuestras autoridades?—Manda, pues, la Diputación, que los Fieles y Justicias de las Anteiglesias, Villas y Ciudad alistén inmediatamente á todos los vizcaíños en estado de llevar las armas, nombrando los jefes subalternos y hasta capitán inclusive en Ayuntamiento general, en proporción de la gente alistada. Todos los Jefes, Comandantes y oficiales que existen en el país se pondrán á disposición de esta Diputación general.—La Diputación encarga que todo el que tenga armas se presente con ellas para tan sagrado servicio. Conservemos á nuestros hijos la noble herencia de nuestros padres.—Viva Isabel segunda, Viva la Reina Gobernadora. Vivan los Fueros.»

En la proclama del Gobierno provisional, á que aludía la Diputación, firmada el 4 en Vitoria por Don Manuel Montes de Oca, se decía á los vascos y navarros, entre otras cosas las siguientes: «YO OS PROMETO EN NOMBRE DE AQUELLA EXCELSA SEÑORA VUESTROS FUEROS EN TODA SU INTEGRIDAD. Vosotros los habeis ganado con la sangre de vuestras venas, con el sudor

de vuestra frente, con la lealtad de vuestros corazones. El comercio de la invicta Villa de Bilbao volverá á florecer con la restauración de leyes sabiamente protectoras. Las industrias de todo el país serán admitidas á los beneficios de la industria nacional, procurándose medios de que el favor concedido á vuestra laboriosidad no degenero en fraude y granjería perjudicial al resto de los españoles. La ley que modifica las instituciones de Navarra, será declarada de ningún valor ni efecto. Ni ahora ni después, vascongados y navarros, tendreis más modificación ni arreglo en vuestros Fueros seculares, que aquellos que vosotros mismos, porque así os convenga, querais establecer, por medio de la sola, exclusiva y legítima representación del país, por vuestras Juntas generales y vuestras Cortes.»

O'Donell, por su parte, en su proclama dirigida también á los navarros y vascongados desde la ciudadela de Pamplona el día 2, les aseguraba «que bajo el Gobierno de una ley, que tantas pruebas tiene de su amor á los españoles, vuestros venerandos Fueros serán conservados íntegros.» Montes de Oca empezó á cumplir sus promesas, dando el 6 en Vitoria un decreto por el que se restablecía el beneficio de bandera para el comercio de Bilbao, y otro decreto por el que se restablecía la antigua organización judicial de las Provincias Vascongadas, y se suprimían sus Jefes políticos. A inculcar en el ánimo de los vizcaínos la utilidad que les proporcionaba el adherirse al movimiento en favor de la Reina Cristina contribuía desde sus columnas *El Vascongado*, en donde colaboraban personajes de cuenta y escritores distinguidos que del interior de España fueron á Vizcaya por aquel tiempo á preparar indudablemente el camino que condujo las cosas al estado en que se hallaban ahora.

Se reunieron el 12 las Juntas generales, á fin de continuar

las que quedaron abiertas por acuerdo del 30 de Marzo último, bajo la presidencia de Don Domingo Eulogio de la Torre, Diputado general en funciones de Corregidor, y Don José Joaquín de Arguinzóniz, segundo Diputado del bando oñacino y Don Matías de Izaguirre como Diputados generales; é instalada ya la Junta en la iglesia de la Antigua, se expresó el Diputado-Corregidor en estos términos:

«En el momento presente, crítico y también lleno de halagüeñas y fundadas esperanzas, cuando Vizcaya está añadiendo una página más de alta y pura gloria á tantas que cuenta en sus anales, la Diputación general, en uno de cuyos señores ha venido asimismo á recaer el ejercicio del Corregimiento, ha juzgado tanto cuanto oportuno obligatorio consultar al país convocando las Juntas que en Abril último quedaron abiertas.—No puede haber olvidado Vizcaya el estado de en que dejó hace seis meses la impertantísima cuestión relativa al arreglo definitivo de sus instituciones, que ha de dar el debido y puntual cumplimiento á la ley de 25 de Octubre de 1839, hecha á fin de llevar á efecto los pactos celebrados en el 31 de Agosto anterior en los siempre memorables campos de Vergara. El país, fiel como lo es en todas ocasiones á la fe prometida, había cumplido exactamente todo aquello á lo cual por el convenio y la ley quedaba obligado. Abrazándose como hermanos los que habían sido por espacio de seis años nobles enemigos, ante las aras de su ídolo, la veneranda y antigua ley del país, no solamente habían depuesto los antiguos odios, sino que habían confundido en un interés único, justo, legítimo, saludable, los diversos principios que llevaron á los vizcaínos bajo distintos y opuestos pendones. Cuando Balmaseda, al frente de un considerable número de tropas, atravesó la tierra donde antes había militado con próspera fortuna, encontró en ella no tibieza sino valiente oposición, así de sus

anteriores amigos como de sus constantes adversarios. Cuando otras tentativas de menor cuantía amenazaron la paz pública, el país se apresuró á sofocarlas, guardador leal de sus promesas y de la fidelidad á su Reina y á sus leyes. Cuando en Septiembre y Octubre del año próximo pasado un levantamiento en casi todas las Provincias de España conmovió la Nación, y arrebató la Regencia de manos de la augusta Princesa que la había ejercido tan en provecho de la Monarquía y de las Provincias Vascongadas, Vizcaya con sus hermanas Alava y Guipúzcoa lamentó tan dolorosos acontecimientos, pero no tuvo en ellos la menor parte. Su lealtad y amor á la justicia la inclinaban á favor del legítimo trono y de las leyes; pero su prudencia y religiosidad en no quebrantar lo pactado, la retrajeron de manifestar sus afectos por otro medio que el de nobles y lícitas demostraciones de amor y gratitud á una excelsa Princesa en la hora de su desventura. Cuando en Abril y Mayo últimos fué constituida nuevamente la suprema potestad del Estado, Vizcaya, unida con las Provincias hermanas, vió con alguna esperanza puesto el poder en las manos que por ser dueñas de más fuerza podrían ejercerle con justicia, y reclamó la que le asistía con templanza, si bien con firmeza. El país en todos sus actos ha mezclado y confundido en uno derechos antiguos y nuevos. La ley de 25 de Octubre, aceptada por él, ha sido su norte, y su cumplimiento es lo que ha solicitado. — La decisión de las presentes Juntas, pidiendo la conservación de nuestros Fueros en su integridad, señalaba á la Diputación el camino que debía seguir, recto, estrecho, inequívoco. Pero si bien nunca pensó apartarse de senda tan positiva y claramente demarcada, creyó que debía caminar por ella con prudencia y espíritu conciliatorio. Al país tocaba, visto el sesgo que tomasen los negocios y la situación á que llegasen, resolver lo que más convinie-

se á sus deseos, á su utilidad y á su honra.—Los comisionados en Corte, en quienes el país más de una vez ha depositado toda su confianza, se presentaron cumpliendo con su encargo ante el Gobierno para tratar sobre el modo de llevar á efecto el arreglo por el cual había de quedar resuelta nuestra suerte futura. Una comisión nombrada para entenderse con ellos, fué, en vez de un medio de allanar dificultades, un obstáculo á que se entablase trato alguno claro y formal, y á que se divisasen los deseos del Gobierno, sus intentos ó sus esperanzas. Los documentos que se van á comunicar á las Juntas, enterarán al país de lo que mal puede expresarse sin dar de ello exacto y cabal conocimiento. Al cabo nuestros comisionados, ora despedidos, ora llamados de nuevo, siempre con precipitación, nunca sin deblez, no pudiendo ni empezar lo que deseaban y debían concluir, hubieron de convencerse de que Vizcaya no obtendría justicia, si bien, contentos con exponer lo que pasaba, nunca han informado cosa que sirva de encender ó exacerbar las pasiones, ó de extraviar el juicio.—Al mismo tiempo, los quebrantamientos de los Fueros y las tropelías y actos declaratorios de odio al país se multiplicaban.—Como si hubiesen sido cortos nuestros sacrificios y padecimientos, se nos piden tres millones de reales de un supuesto donativo, contribuciones extraordinarias de guerra y prestaciones decimales.—Se comunican de oficio al país los decretos de las Cortes sobre contribuciones ordinarias y reemplazo del ejército, designando las cuotas que á estas Provincias corresponden, así como á las demás de la Monarquía, lo cual equivale á una declaración de que en tan graves puntos nuestras leyes son tenidas en nada, estando resuelto igualarnos con los demás españoles, sujetos hasta aquí á una legislación diferente.—Se nos comunica la contribución decretada para sostenimiento del culto y clero.—Se nos exige que entreguemos al

Gobierno central nuestros presupuestos municipales y las existencias de fondos de obras pías, memorias y otros de semejante naturaleza.—Y si bien la Diputación no debe dar por realidades rumores, aun cuando sean acreditados, tampoco puede ocultar al país que corre con grandes probabilidades de ser cierta la voz de que para el mes próximo venidero se tenía resuelto poner en el puerto de Bilbao la aduana.—Ni deja de merecer la atención la noticia de que sin esperar la resolución de las Cortes, interinamente pensaba el Ministerio de Madrid plantear en las Provincias Vascongadas el sistema que había meditado, y quería adoptar como arreglo y modificación de nuestras instituciones.—Y conociendo, como conocer debemos, qué espíritu anima á las actuales Cortes, con cuán excesivo desfavor es allí mirado cuanto toca á este nuestro país y á sus leyes, y cuán vivo deseo se ha visto de ponernos bajo el nivel extendido sobre el resto de la Monarquía, mal podremos esperar que lo resuelto por el Gobierno en nuestro daño no encuentre en los cuerpos legisladores, ó apoyo para llevarlo á efecto, ó aprobación, si anticipadamente se hubiera hecho, aun quebrantando una ley general del Reino, hecha por las fórmulas y con las solemnidades competentes.—La invicta Villa de Bilbao ha sido privada del beneficio de bandera, necesario á la prosperidad y aun á la vida de su comercio, y sin el cual, desfalleciendo nuestra principal plaza mercantil, resultan graves perjuicios á Vizcaya entera. Tal recompensa se da á los esfuerzos y sacrificios de una población benemérita de la causa de la Reina y de la Patria, sin duda para desunirla de lo demás del país, obligándola á solicitar el establecimiento de un sistema fiscal que á nuestros campos y pueblos del interior ofendería y se repugna.—En suma, señores, nada aventura la Diputación en repetir lo que solemnemente ha dicho y publicado en su alocución de 5 de este mes, á la cual

ha correspondido el país con entusiasmo innegable.— *Vuestros Fueros estaban amenazados de una destrucción completa.*—En situación tan amarga resistir á la violación de las leyes y de los pactos, era en nosotros un derecho incontestable.—Pero la Diputación no ignora que la acción más justa es digna de vituperio si de ella se originan males graves y perjuicio considerable del bien público. Juntamente con la voz de la justicia suena en los oídos y gobierna las acciones del hombre recto el consejo de la prudencia; y proseguir una justa demanda cuando de hacerla valer resultasen daños superiores á los que produciría la sumisión, sería no solamente yerro, sino delito.—Por fortuna del país no nos hemos visto obligados á elegir entre llevar un indigno yugo, ó arrojarnos á una resistencia imprudente.—Con el acto de injusticia que nos preparaba el Gobierno de Madrid, ha coincidido un gran suceso cuyas consecuencias han de ser altamente provechosa á estas Provincias y á la Nación de que son ellas una parto.—Las demasías de los que gobernaban á España han conseguido apurar el sufrimiento de los gobernados, que veían reinante el desorden, humillada la autoridad de la ley, olvidada la moral, insultada la Religión, mendigando sus ministros, sin decoro el culto, el ejército descuidado y escarnecido, la libertad individual mal protegida, la dignidad nacional ajada, y dominando á los escandalizados y afligidos pueblos una turba de los entes más osados y perversos que la sociedad española encierra; turba que voceando ilimitada libertad ejerce el más duro despotismo. Los amantes del orden, de la moral, de las leyes, de la libertad verdadera, de un trono protector y de un Gobierno fuerte y justo, se han concertado y unido, alzando el grito y tremolando la restauración de la Regencia de la inmortal María Cristina, madre de la Reina nuestra Señora y Princesa excelsa, á la cual tanto debe

la Nación y de que tanto tiene que esperar el país vascongado.—La Diputación tuvo noticia cierta de que la augusta Regente se dignaría reconocer nuestros Fueros en toda su integridad, satisfaciendo así á cuanto pedía este país por la voz de sus apoderados en estas mismas Juntas.—Las benéficas intenciones de S. M. eran ya conocidas de la parte más numerosa de los bilbaínos, así como constan á la Diputación y al país la malevolencia é intentos enemigos á nuestras instituciones y prosperidad de que el Gobierno de Madrid estaba próximo á darnos evidentes y fatales pruebas.—La población de Bilbao se sentía conmovida sabiendo que en Pamplona tremolaba ya la bandera de la augusta Regente y de los Fueros vasco-navarros. La emoción creció al saberse que la Provincia hermana de Alava iba á declararse por una causa tan noble y justa. En esta circunstancia uno era el interés de Bilbao con el resto de Vizcaya; una la opinión de los vizcaínos todos de que la población bilbaína aparecía representante. La Diputación, cerciorada además de que las tropas acantonadas en el país sostendrían la causa unida de la Regencia de la Reina madre y de los Fueros, no titubeó en ponerse al frente de sus compatriotas, y entre aplausos arrobados del pueblo alzó el pendón que hoy gloriosamente ondea sobre el suelo de la leal Vizcaya.—El país ha manifestado que aprueba la conducta de su Diputación general, adhiriéndose con entusiasmo á sus ideas, y prestándose pronto y gustoso á cuanto se ha solicitado de su patriotismo. Resta sólo que la aprobación ya dada con hechos, sea ratificada de un modo solemne y por las vías legales en esta Junta.—La Diputación asimismo va á dar cuenta del estado actual del país y de las providencias dictadas para el sostenimiento del orden y la conservación y defensa de nuestros Fueros, buenos usos y costumbres.—No descuidará tampoco el manifestar qué uso ha hecho de

las diferentes autorizaciones que en las últimas sesiones de las Juntas le fueron concedidas, ni informar sobre los demás negocios que convenga proponer, tratar, resolver y acordar, concernientes á la administración interior del Señorío; bien que ante la causa mayor que nos ocupa, desaparezcan materias de inferior importancia, las cuales ni deben ser desatendidas, ni distraernos de nuestro principal objeto en la hora presente.—La Diputación, señores, se presenta á las Juntas llena de confianza de que le será favorable su fallo. Se trata de la justicia, del bien público, del honor vascongado; y los hijos de Vizcaya no pueden mirar con indiferencia tan sagrados objetos. Aclamando, pues, el nombre de la Princesa ilustre que sonó entre vivas en el instante mismo del abrazo de Vergara, invocando el auxilio divino, que no faltará á quienes defienden el interés de la moral y de la Religión, y contando con el poder inmenso de los esfuerzos de los vascongados unidos, ya que divididos tanto valían y pudieron, la Diputación general, ufana de serlo en estos dias de crisis y de gloria, aunque lamentando el doloroso extremo á que nos han traído la injusticia y la perfidia de nuestros contrarios, se abandona tranquila al juicio y resolución del país y á los decretos de la Providencia.»

Después de explicado este discurso en vascuence para inteligencia de los que no poscyesen el habla castellana, acordó la Junta imprimirlo.

No siendo la actual nueva Junta, sino continuación de las últimas que quedaron abiertas, se dispuso que pasasen los poderes que se habían presentado á la comisión revisora nombrada en ellas, procediéndose por las respectivas Merindades al reemplazo de los individuos de dicha comisión que faltasen.

Para no perder un tiempo precioso en las circunstancias presentes, se dió cuenta en seguida, sin aguardar al resul-

tado del reconocimiento de los poderes, no sólo de las gestiones y trabajos de la comisión nombrada en Juntas generales para conferenciar con el Gobierno y procurar la conservación íntegra de los Fueros, sino también de las causas que habían obligado á la Diputación á expedir las circulares del presente mes; de la situación en que se hallaba el país, y de las medidas y disposiciones adoptadas con el doble objeto de mantener el orden y asegurar sólidamente las instituciones del país en toda su pureza, y se leyeron los documentos más importantes que obraban en los respectivos expedientes, explicándolos también en vascuence. Después de una detenida y profunda discusión, no sólo fué aprobada la conducta de la Diputación en circunstancias tan espinosas, sino que se acordó darle un voto de gracias, haciéndolo extensivo al Alcalde y Ayuntamiento de Bilbao, y á los individuos de la Junta de armamento que se había creado por la parte que tuvieron en los sucesos de que se trataba. Los apoderados de Bilbao expresaron lo mucho que á aquella Villa lisonjearía esta honorífica demostración en su favor, pero que sus deseos quedarían colmados con que se declarase que había llenado cumplidamente su deber en esta ocasión memorable, omitiéndose el voto de gracias.

Igual manifestación hizo el apoderado de Aránzazu Don Bonifacio de Vildósola, en calidad de vocal de la Junta de armamento. La Junta, sin embargo, ratificó su acuerdo, aplazándose el tomar otra resolución sobre el particular para cuando estuviesen aprobados los poderes de los nuevos apoderados.

Antes de que se aprobase el 13 el acta de la sesión anterior, uno de los apoderados de Bilbao insistió en que se omitiese el voto de gracias que se dió á aquella Villa, concluyendo con pedir que constase esta insistencia en el acta

de la presente sesión. La Junta oyó la manifestación del apoderado, y aprobó el acta.

Se resolvió en seguida que se trajese diariamente á la Junta en lengua vascongada, por escrito, el extracto del acta de la sesión precedente, y quedó á cargo de la Diputación el nombramiento entre los vocales de la misma Junta de los que hubiesen de hacer la versión de las actas de una lengua á otra.

La comisión nombrada para revisar los poderes de los nuevos apoderados, no tuvo que poner otro reparo sino que uno de los tres que nombró la Anteiglesia de Arrieta debía quedar como suplente, por no poder pasar de dos el número de los apoderados de cada pueblo. La comisión de Padres de Provincia encargada de examinar los poderes de los tres nuevos individuos nombrados para formar parte de la de revisión general, no encontró reparo alguno que poner á dichos poderes. La Junta se conformó con ambos dictámenes.

Se ofreció asiento entre los Padres de Provincia al Duque de Castro Terroso, el cual aceptó el ofrecimiento profundamente agradecido.

Se dió cuenta de una comunicacion dirigida á la Junta por la Provincia de Guipúzcoa, participando que había comisionado á Don Joaquín Francisco de Aldamar, para que se entendiese con la misma Junta respecto de todo lo que pudiese convenir á ambas Provincias; y recibiendo con agrado la comunicacion, se admitió á Aldamar, que era portador de ella, como comisionado por Guipúzcoa, y se le dió asiento entre los Padres de Provincia.

Se nombró después una comisión compuesta de dos individuos por cada Merindad, los Padres de Provincia y el segundo Consultor, para que propusieran á la Junta cuanto creyesen conveniente acerca de los medios más oportunos y

eficaces de llevar prontamente á efecto el armamento general del Señorío, y atender á su equipo y sostenimiento, con el objeto de afianzar la conservación de los Fueros, y conseguir el triunfo de los principios proclamados en el noble alzamiento á cuya cabeza se puso la Diputación general del Señorío.

Continuando la Junta sus tareas el 14, se leyó el informe de la comisión nombrada el 13 en el que se propone: que siendo urgentísimo que volviese la Diputación á Bilbao para atender á la defensa del Señorío, y no pudiendo en medio de sus muchas ocupaciones llenar este cometido por sí sola, debía nombrarse una comisión auxiliar para que juntamente con la misma Diputación adopte los medios conducentes al feliz resultado del alzamiento; que dicha comisión se ha de componer de un individuo por Merindad con un suplente; que sus individuos no tendrán necesariamente que ser elegidos entre los vocales de la Junta general, asignándoseles veinte reales diarios cuando tuviesen su residencia en el pueblo en que se encuentre la Diputación; que en el armamento general del país se ha de alistar á todos los comprendidos entre los diez y ocho y cuarenta años de edad, destinándose los solteros al servicio activo y los casados al pasivo; que el nombramiento de jefes hasta capitán inclusive, se hará por los mismos alistados, con aprobación de la Diputación, la cual nombrará los demás jefes, como Capitán general que es del Señorío; que se destinarán al servicio marítimo los que se hallen matriculados para él; y que queda al arbitrio de la Diputación general y de la comisión auxiliar el fijar el número de los mozos que se han de poner sobre las armas, y el método que ha de observarse en el servicio, teniendo presente para ello lo acordado por las Diputaciones hermanas y el Reino de Navarra acerca de este particular.

Después de un largo debate sobre la edad á que debería extenderse el alistamiento, se aprobó por unanimidad el informe precedente, con la adición de que todos los jefes que se nombren han de ser vizcaínos arraigados ó decentemente acomodados, y elegidos con preferencia entre los pueblos mismos de que se forme cada batallón, siempre que haya en ellos personas que tengan la aptitud necesaria para el mando.

No tuvo la Junta por conveniente admitir la renuncia que había hecho de su destino el primer Consultor Don José María de Lámbarri, por causa de su quebrantada salud y ocupaciones, ordenando que el segundo Consultor supliese al primero durante su enfermedad, y autorizando á la Diputación para que se valga del asesor ó asesores que le pareciesen para llenar á su vez las funciones del segundo Consultor, á los cuales se han de pagar sus honorarios del situado correspondiente al primero.

Se aprobó la reforma del cuerpo de miqueletes hecha recientemente por la Diputación, en uso de la autorización que se le concedió en las últimas Juntas generales, y se dió cuenta de la contribución vecinal, destinada al establecimiento de expósitos que había repartido la Diputación á los pueblos, en virtud asimismo de lo determinado en dichas Juntas.

Se resolvió que continuase abierta la Junta, después de suspendidas las sesiones, para que la Diputación pudiese consultarla en los casos graves que era harto probable que se ofreciesen.

A solicitud de un apoderado se leyó, con gran satisfacción de las Juntas la carta autógrafa que dirigió la Reina Cristina desde París en Diciembre último á las Diputaciones de las tres Provincias hermanas; acordándose que se insertase en el acta de la sesión presente con la exposición que dirigieron á la Reina las mismas Diputaciones.

CAPÍTULO XX

El alzamiento de Octubre fué sofocado muy pronto. El ejército no secundó entonces generalmente á los que se habían alzado en favor de la Reina Cristina; los esfuerzos que se hicieron en las Provincias Vascongadas para armar su juventud fueron infructuosos; y no hubo tiempo ni medios suficientes para contrarrestar al enemigo, que se vino encima rápidamente. Zurbano se apoderó en pocos días de Vitoria y de Bilbao, ahogando en sangre todo conato de resistencia y dictando ciertas medidas que tuvieron algún tiempo sometidos al imperio del terror á los pueblos de Vizcaya.

Zurbano nombró en Bilbao el 24 una Diputación provincial, la cual se dirigió el 26 á los vizcaínos, recomendándoles muy particularmente la necesidad de mantener la tranquilidad pública.

El Regente se trasladó á Vitoria, donde expidió varios decretos de carácter meramente político, como el de la disolución de la milicia nacional de aquella Ciudad y Bilbao, y dos que merecen especial mención, porque tocaban á la organización foral de Vizcaya en puntos importantísimos.

Por el primero de ellos, dado al 27, que consta de cinco artículos, se establecen Jueces de primera instancia en Vizcaya «los cuales en su organización, dependencia gradual y procedimientos se arreglarán á la Constitución, á las leyes y á los reglamentos como los demás del Reino;» se divide la Provincia en cinco partidos judiciales, cuyas cabezas serán Bermeo, Bilbao, Durango, Marquina y Balmaseda; se fijan los límites de estos partidos de manera que entran en Vizcaya Llodio y Oquendo y queda fuera de ella Orduña; se indican los pueblos que han de componer cada partido, según una lista que acompaña al decreto; y se dispone que rija éste hasta que las Cortes «acuerden lo que estimen mas conforme.»

El otro decreto dado el 29 es como sigue:

«Exposición.—Sermo. Sr. La rebelión que se alzó contra los poderes legalmente constituidos está ya vencida; deberes del Gobierno dar estabilidad al triunfo, y cerrar para lo sucesivo la sima de nuevas reacciones. Las atribuciones que la Constitución de la Monarquía da al poder ejecutivo, y las especiales que le fueron conferidas por la ley de 25 de Octubre de 1839, marcan la línea de conducta que conviene seguir, libre de obstáculos opuestos antes legítimamente y que ya han desaparecido. Desmintiendo sus continuas protestas de lealtad, las Diputaciones de las tres Provincias Vascongadas levantaron la bandera de la insurrección; pero aterradas con el grito de horror lanzado por toda la Monarquía, han abandonado al país que querían comprometer, llevando la convicción de que los vascongados no hacían causa común con los rebeldes. La administración ha quedado huérfana, y las autoridades superiores políticas se han visto en la necesidad de adoptar medidas provisionales para que no se paralizase la acción del Gobierno, y para que se evitasen graves males á los pueblos. En estas cir-

cunstancias es preciso pensar en la reorganización. El Ministro que suscribe, después de una meditación detenida, cree que se está en el caso de que tenga entero efecto la aplicación del principio de la unidad constitucional, y que á él se sometan cuantas instituciones se le opongan.—Encargado el Gobierno por el artículo cuarenta y cinco de la Constitución de la conservación del orden público en lo interior, no puede abandonar este cuidado á agentes que se jactan de una independencia absoluta y de una oposición á sus determinaciones, sistemática, no interrumpida y que ha llegado á ser rebelde. El Gobierno, si bien no profesa los principios de una centralización extremada que ahogue los intereses provinciales y los municipales bajo el peso de la mano fiscal, proclama la unidad administrativa y la dependencia efectiva de sus agentes en todo lo que concierne á las funciones que la Constitución le confiere; de otro modo ni el Gobierno sería posible ni lo sería tampoco la responsabilidad ministerial. De aquí la necesidad de que el ramo de protección y seguridad pública en las Provincias Vascongadas se confíe exclusivamente á los agentes del Gobierno.—No es sólo la acción del poder ejecutivo la que sufre obstáculos; el legislativo recibe un nuevo *veto* que la Constitución rechaza, las leyes sancionadas por la Corona después de votadas por las Córtes, á que asisten los representantes de las Provincias, del mismo modo que las disposiciones del Gobierno, se sujetan al pase foral, que obtienen las que son del gusto de los partícipes del mando. Ni se exime el poder judicial del requisito del pase; sus providencias son fiscalizadas por la intervención extraña de la administración provincial que pretende poder impedir la ejecución de los fallos de la justicia. Así el pase conspira contra la armónica división de los altos poderes del Estado, contra la dignidad de la Corona y de las Cortes, contra las atribucio-

nes del Gobierno y contra la independencia judicial y la autoridad de la cosa juzgada; debe cesar, pues, del todo como incompatible con la ley fundamental de la Monarquía.—El artículo sesenta y nueve de la Constitución previene que los Diputados de Provincias sean nombrados por los mismos electores que los Diputados á Cortes; en las Provincias Vascongadas el derecho de elegir se limita á muy pocos, y estos no representan al país; en la de Vizcaya se confia á la insaculación y á la suerte; lo absurdo de semejantes sistemas vincula en castas y familias los cargos públicos, que han llegado á ser patrimonio de algunos. En los Ayuntamientos no es la cualidad de español y vecino la que da derecho electoral, activo y pasivo; porque ya es necesario ser hidalgo, ya vecino concejante, ya vizcaíno originario. Los métodos de elección son tantos como los pueblos, según sus ordenanzas y prácticas peculiares; así es que desde la elección hecha en Concejo hasta la que cae por suerte ó toca por turno, hay diferentes formas de organización municipal; mas por regla general vence el privilegio, los oficios municipales se perpetúan en muy pocos, que al parecer están en posesión de transmitirlos á sus descendientes, y queda hollado el artículo constitucional que hace á todos los españoles admisibles á los empleos y cargos públicos, según su mérito y capacidad.—Tiempo es ya de que cese este monopolio; V. A. ha prometido librar á los pueblos de la vergonzosa tutela en que se les ha tenido; el cumplimiento de los artículos sesenta y nueve y setenta de la Constitución lo realizará.—El Ministro que tiene el honor de hacer estas observaciones propone su aplicación á las Provincias Vascongadas, como medida necesaria para que sea salva la unidad constitucional, y emancipado el pueblo de privilegios que le abrumen.—La organización judicial, ya á instancia de los pueblos, ya por la obligación, que tiene e

Gobierno de cuidar de que pronta y cumplidamente se administre la justicia, ha tenido notables mejoras á pesar de la obtenada resistencia de las Diputaciones; preséntase, sin embargo, en Alava aun por ejecutarse la formación de partidos ya decretada, y Vizcaya, donde la división y atribuciones de los juzgados son un caos, ofrece la anomalía de tener alcaldías de Fuero patrimoniales; es decir, que aun existe allí aplicado el absurdo principio de que la obligación de administrar justicia es un derecho que se compra y que se transmite como las cosas que constituyen la propiedad de los particulares. La creación de los partidos judiciales es una exigencia social que ya no puede dilatarse.—El establecimiento de las aduanas en las costas y fronteras ha sido siempre considerado como conveniente; los buenos principios de administración y de economía le recomiendan; la agricultura, la industria y el comercio le reclaman de consuno; es también exigido por la unidad nacional. No es nueva esta medida; en el reinado del señor Don Felipe quinto y en la anterior época constitucional tuvo efecto; conveniente es restablecerla, consultando al bien de todas estas Provincias y al de toda la Nación. —Pero no basta esto; es menester mientras se reorganice la administración del país crear otra provisional; el ensayo hecho en Guipúzcoa ofrece buenos resultados; la elección de una Comisión económica y consultiva debe hacerse extensiva á las Provincias de Alava y Vizcaya, para que de este modo se asegure la recaudación, distribución é inversión de los fondos públicos, y pueda consultarse á las necesidades políticas y materiales de los pueblos.—Estas consideraciones me hacen someter á la aprobación de V. A. el siguiente proyecto de decreto. Vitoria 29 de Octubre de 1841.—Facundo Infante.»

«Decreto. Siendo indispensable reorganizar la administración de las Provincias Vascongadas por las razones que

me habeis expuesto, del modo que exigen el interés público y el principio de la unidad constitucional sancionado en la ley de 25 de Octubre de 1839; como Regente del Reino, y en su nombre durante la menor edad de la Reina Doña Isabel segunda, vengo en decretar lo siguiente:

»Artículo 1.º Los Corregidores políticos de Vizcaya y de Guipúzcoa tomarán la denominación de Jefes superiores políticos.—Art. 2.º El ramo de protección y seguridad pública en las tres Provincias Vascongadas estará cometido exclusivamente á los Jefes políticos y á los Alcaldes y Fieles, bajo su inspección y vigilancia.—Art. 3.º Los Ayuntamientos se organizarán con arreglo á las leyes y disposiciones generales de la Monarquía, verificándose las elecciones el mes de Diciembre de este año, y tomando posesión los elegidos en primero de Enero de 1842.—Art. 4.º Habrá Diputaciones provinciales nombradas con arreglo al artículo sesenta y nueve de la Constitución y á las leyes y disposiciones dictadas para todas las Provincias, que sustituirán á las Diputaciones generales, Juntas generales y particulares de las Vascongadas. La primera elección se verificará tan luego como el Gobierno determine.—Art. 5.º Para la recaudación, distribución ó inversión de los fondos públicos hasta que se verifique la instalación de las Diputaciones provinciales, habrá en cada provincia una Comisión económica, compuesta de cuatro individuos, nombrados por el Jefe político, que la presidirá con voto. Esta Comisión será también consultiva para los negocios en que el Jefe político lo estime conveniente.—Art. 6.º Las Diputaciones provinciales ejercerán las funciones que hasta aquí han desempeñado en las Provincias Vascongadas las Diputaciones y Juntas forales, y las que para las elecciones de Senadores, Diputados á Córtes y de Provincia y Ayuntamientos, les confían las leyes generales de la Nación. Hasta que estén instaladas, los

Jefes políticos desempeñarán todas sus funciones, á excepción de la intervención en las elecciones de Senadores, Diputados á Cortes y provinciales.—Art. 7.º La organización judicial se nivelará en las tres Provincias al resto de la Monarquía. En la de Alava se llevará á efecto la división de partidos prevenida en orden de 7 de Septiembre de este año; y para la de Vizcaya se hará inmediatamente la demarcación de partidos judiciales.—Art. 8.º Las leyes, las disposiciones del Gobierno y las providencias de los tribunales se ejecutarán en las Provincias Vascongadas sin ninguna restricción, así como se verifica en las demás Provincias del Reino.—Art. 9.º Las aduanas desde primero de Diciembre de este año, ó antes si fuese posible, se colocarán en las costas y fronteras, á cuyo efecto se establecerán, además de las de San Sebastián y Pasajes, donde ya existen, en Irún, Fuenterrabía, Guetaria, Deva, Bermoo, Plencia y Bilbao.—Art. 10. Los Ministerios de Gracia y Justicia, Gobernación y Hacienda, adoptarán las medidas convenientes á la entera ejecución de este decreto.»

Las disposiciones que preceden interpretaban la unidad constitucional de una manera abusiva, y opuesta á la interpretación que se le había dado por el Gobierno al empezar á plantear la ley de 25 de Octubre de 1839 por medio del decreto de 16 de Noviembre siguiente. Infringían además el artículo segundo de la misma ley, en cuanto por ellas se resuelven de plano asuntos muy importantes, sin la audiencia previa de las Provincias Vascongadas. Y es tanto más de notar esta circunstancia cuanto que según las palabras del preámbulo del presente decreto «los vascongados no hacían causa común con los rebeldes»; y siendo esto así no había siquiera la excusa de castigarlos por haberse rebelado, sino que antes bien merecía alguna consideración su conducta á los ojos de los vencedores. La verdad es que

el Gobierno del Regente se aprovechó de las circunstancias, y se encontró muy á su gusto, como también se dice en el mismo preámbulo «libre de obstáculos opuestos antes legítimamente, y que ya han desaparecido», para satisfacer su sed de venganza ó llevar á cabo sus doctrinas sobre la unidad constitucional y la nivelación de las Provincias Vascongadas con el resto del Reino. No es mucho, pues, que á la caída de Espartero se reclamase como medida de estricta justicia el restablecimiento de las cosas al ser y estado que tenían antes de Octubre de 1841.

Con respecto á las observaciones que se hacen en el preámbulo del decreto del 29 acerca de la organización de las Provincias Vascongadas, sólo es oportuno decir ahora, que el triste cuadro que desde entonces ha ofrecido la administración española, por confesión de los que no tienen interés en desacreditarla como vascongados, sería la más cumplida contestación que pudiera darse á los supuestos abusos que señalaba Infante, porque otros mayores nos los harían olvidar por completo.

El primero de Noviembre se encargó de la jefatura política Don Pedro Gómez de la Serna, manifestando su deseo de dulcificar la amarga situación en que se encontraba el pueblo. Se acordó circular á los pueblos el decreto de 29 de Octubre. Se dió cuenta el día siguiente de que el Jefe político había nombrado, en virtud de dicho decreto, individuos de la Comisión económica por el mismo establecida, á Don Pedro de Lemonauria, Don Nicolás de Urizar, Don Lorenzo Hipólito de Barroeta y Don Pedro de Villar como propietarios, y como suplentes á Don Julián de Ugarte, Don Julián de Goyarrola y Don Miguel de la Fuente, que compusieron la Diputación provincial interina, nombrada por Zurbano, quedando constituida la Comisión en el acto. Procedióse en seguida á organizar las oficinas de la Diputación

con arreglo á la ley de 3 de Febrero de 1823, dejando cesantes á todos los empleados, y se revocaron los poderes de los comisionados en Corte Aldecoa y Hormaeche.

El 29 de Diciembre encargó la Comisión económica á su vocal Lemonauría la redacción de un «proyecto de arreglo, introduciendo en él las reformas con sujeción estricta á la unidad constitucional y alianza del Reino para con Vizcaya, que no lastime los intereses de la Nación ni los provinciales.»

1842

El 21 de Enero aprobó la Comisión con una ligera enmienda el proyecto de arreglo que le presentó Lemonauría. Precede á este proyecto, que se publicó con la firma de los individuos de la Comisión, un preámbulo en el que se dice que las leyes forales, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos, antes que escritas fueron practicadas, y que las leyes que se fundan en las costumbres son las más duraderas y las que hacen más felices á los hombres. Por eso los buenos publicistas reconocen en el día como prenda segura de estabilidad en las constituciones la base robusta de las costumbres de los pueblos; por eso recomiendan á los legisladores que respeten las costumbres de los pueblos y toleren hasta sus caprichos, siempre que no perjudiquen á la comunidad social; por esto sin duda los sabios legisladores de 1839 confirmaron los Fueros de Vizcaya, sin perjuicio de la unidad constitucional. Aquella ley solemne, complemento del convenio de Vergara, presagio de felicidad para España, ordena en su artículo segundo que el Gobierno, tan pronto como la oportunidad lo permita, y oyendo antes á las Provincias Vascongadas y Navarra, proponga á las Cortes la modificación indispensable que de los mencionados Fueros reclame el interés de las mismas, conciliado con el general de la Nación y con la Constitución de la Monarquía. La oportunidad ha llegado, y la Comisión económi-

ca faltaría á una de sus más sagradas obligaciones si no presentase al Gobierno su opinión en un asunto tan vital para Vizcaya.—La Comisión no quiere recordar los méritos que contrajo Vizcaya desde Agosto de 1839, hasta que en la rebelión de Octubre de 1841 la voluntad bien abiertamente significada del país fué el azadón que abrió la honda tumba en la que se sepultaron los maquiavélicos planes de los traidores.—Tampoco se extenderá en encarecer los sacrificios heroicos de Bilbao, reconocidos solemnemente por el decreto de las Cortes de 17 de Enero de 1837. Vizcaya, pues, se presentó á la generosa Nación española escudada con títulos muy apreciables.—El convenio es un hecho reconocido y encomiado por toda la Nación; la ley de 25 de Octubre es clara y terminante, por más que en opuestos sentidos y con diversas miras se haya querido oscurecerla, haciéndola servir de caballo de batalla para embroquelarse con él los enemigos del reposo público, para quienes la mágica palabra de Patria es sólo un nombre vano, y únicamente se dejan arrebatar por un mezquino espíritu de partido.—La Comisión económica no molestará la atención del Ministro de la Gobernación de la Península, (que es á quien se somete el proyecto) explanando razones de alta política internacional que recomiendan sea favorablemente interpretada en beneficio de los vizcainos la ley de 25 de Octubre.—Sus palabras son claras. Se confirman, dice el artículo primero, los Fueros sin perjuicio de la unidad constitucional. Así, pues, todos los Fueros que no se opongan á la unidad constitucional son confirmados; y tan sólo nos resta saber qué es lo que se entiende por unidad constitucional. Unidad constitucional significa, á no dudarlo, que una ha de ser la Constitución que rija en toda la Monarquía española. Esta inteligencia lógica y natural de las palabras de la ley, se halla confirmada y sancionada por el artículo segundo,

que, al tratar del proyecto de modificación de Fueros, dice que esta modificación será la *indispensable* que en los Fueros reclame el interés de las Provincias Vascongadas, *conciliado* con el general de la Nación. De la ley se deduce: primero; que la Constitución de 1837 debe regir en Vizcaya: segundo; que se hallan confirmados todos los Fueros que no se opongan á la Constitución: tercero; que para hermanar la Constitución con los Fueros debe hacerse la correspondiente modificación: cuarto; que esta modificación sea la más estricta, y usando de las mismas palabras de la ley la que se juzgue solamente indispensable; y quinto; que en la modificación se ha de conciliar el interés de la Nación con el de la Provincia de Vizcaya.—De esta manera, resultará hecha naturalmente la modificación del régimen especial de Vizcaya, abriendo con una mano la Constitución del Estado y con otra el código foral, y examinando cuidadosamente todos los artículos de la ley fundamental así como las leyes forales. Pero como entre las leyes forales hay muchas que son secundarias, deben quedar en su fuerza y vigor hasta que tenga efecto el artículo veinte de la Constitución de la Monarquía (que es el que dispone que en toda ella han de regir los mismos códigos.) En base tan sencilla como equitativa se apoya la comisión económica para asegurar que en su proyecto quedan *confirmados los Fueros de la Provincia de Vizcaya sin perjuicio de la unidad constitucional*.—Tiene que hacer únicamente algunas observaciones sobre el artículo veinte del proyecto, porque además de que por las leyes del Fuero corresponden á Vizcaya muchos patronatos, la ley de 25 de Octubre ordena también que en la modificación foral se concilie el interés de Vizcaya con el general de la Nación, y este artículo concilia ambos intereses. La Hacienda pública debe á Vizcaya, sin remontarse más allá del año 1793, más

de ciento veinte y cinco millones de reales; y por otra parte, los patronatos suprimidos estaban consignados para pago de lactancia de los niños expósitos, los cuales recibían una sentencia de muerte si se los dejara sin este recurso.

El articulado del proyecto de modificación de Fueros de la Provincia de Vizcaya es como sigue:

«Artículo 1.º El Gobierno político de Vizcaya estará á cargo de un Jefe superior nombrado por el Rey. Una misma persona no podrá reunir nunca el mando político y militar.

»2.º El jefe superior político ejercerá en la Provincia de Vizcaya las mismas atribuciones que en las demás del Reino, siempre que no se opongan á la que en esta ley se conceden á la Diputación provincial y demás autoridades populares.

»3.º El mando militar de mar y tierra se ejercerá en Vizcaya en la misma forma que en las demás Provincias del Reino. No habrá, sin embargo, capitanes de puerto, ni se establecerán matrículas en su territorio, y el servicio de mar se hará en la misma forma que se ha hecho hasta el día.

»4.º Los tribunales de Vizcaya tendrán la misma organización que los demás del Reino, y la ley de enjuiciamiento será también la misma.

»5.º Las leyes del Fuero especial, uso y costumbre de derecho privado, continuarán en su fuerza y vigor en Vizcaya, como actualmente se observan, en cuanto no sean contrarias á las leyes hechas en Cortes desde 1834, y que en adelante se hicieren; y en este concepto los tribunales arreglarán á ellas sus fallos y determinaciones hasta que tenga efecto el artículo cuarto de la Constitución de la Monarquía, en cuyo caso se tendrá presente para el arreglo la singular localidad del país, los intereses creados y derechos particulares adquiridos de tan antiguo.

»6.º Se establecerán las aduanas en los puertos y aldeas de la Provincia de Vizcaya, con sujeción á los aranceles que rijan ó rigiesen en las otras de la Monarquía, menos en lo que se opongan á la presente ley. No habrá contrarregistros en Vizcaya, resguardo fijo ni volante en ninguna parte de la Provincia, fuera de los puntos en que estén situadas las aduanas.

»7.º Los frutos y producciones de la Provincia de Vizcaya circularán en toda la Monarquía libres de derechos como los demás del Reino.

»8.º Igualmente desde primero de Enero de 1843 se pondrá expedita en la Provincia de Vizcaya la circulación y venta de los frutos y producciones de las demás de la Monarquía, haciendo que los frutos indígenas paguen por derechos provinciales en justa proporción con los conocidos en el país por foráneos. En todo el presente año no se hará novedad alguna en este punto, y para la que se hiciere en adelante se tendrán en consideración los intereses creados bajo la garantía del antiguo régimen y las razones de pública utilidad, para evitar que una mudanza repentina y absoluta disloque y hunda el sistema administrativo de la Provincia.

»9.º La Diputación provincial de Vizcaya se elegirá con arreglo á la ley general. Será presidida por el Jefe político, y á falta de éste por el vocal que la misma Diputación á mayoría de votos eligiera para Vice presidente.

»10. La Diputación provincial de Vizcaya ejercerá, además de las funciones que corresponden á las de las otras Provincias de la Monarquía, todas las que han desempeñado las Juntas generales de Guernica, la Diputación general, el Regimiento general y Junta de Padres de Provincia, en cuanto sea compatible con lo determinado en esta ley.

»11. La Diputación provincial de Vizcaya podrá por sí

misma establecer los impuestos que juzgue necesarios á fin de cubrir con ellos los reemplazos del ejército, el pago de la contribución directa y única, el de réditos y amortización de su deuda, mejora y reposición de caminos, gastos de administración y demás que fuese útil y necesario para la prosperidad de la Provincia.

»12. La Diputación Provincial de Vizcaya nombrará bajo su responsabilidad dos vocales de entre los mismos individuos que la componen; estos dos vocales, en las épocas que por la ley general no se halle reunida la Diputación provincial, despacharán por sí mismos todos los asuntos pertenecientes á la administración económica de la Provincia. El primer vocal nombrado será Diputado de turno desde primero de Enero hasta 30 de Junio; y el segundo desde primero de Julio hasta 31 de Diciembre. Los Diputados de turno no podrán verificar pago ni cobranza alguna, sin la toma de razón del contador, y sin la intervención del tesorero.

»13. Corresponde á la Diputación provincial, y cuando no se halle reunida, á los Diputados administradores: primero; administrar los productos de propios, arbitrios y propiedades de los pueblos de la Provincia, con las mismas facultades que tenían sobre estos ramos la Junta general y Diputación foral; y segundo; exponer al Gobierno lo concerniente acerca de las órdenes que expida; pedir la reparación de cualquier agravio que entendiéndose se cause á la Provincia, sin suspender el cumplimiento de lo mandado, y acudir en queja á las Cortes, para que en su caso se exija la responsabilidad del Ministro que se creyese hubo infringido la Constitución ó las leyes.

»14. Cada colegio electoral nombrará un comisionado al hacer la elección de Diputados provinciales. Los comisionados de los colegios electorales y los Diputados nueva-

mente elegidos, residenciarán en sesión pública á la Diputación saliente, y particularmente á los dos Diputados administradores, quienes deberán presentar las cuentas, datos y documentos originales y demás comprobantes de su especial encargo.

»15. Los Ayuntamientos y Alcaldes de Vizcaya se nombrarán como los demás de la Monarquía.

»16. Los Ayuntamientos y Alcaldes de Vizcaya tendrán las mismas facultades y obligaciones que los actuales y las demás que la ley general señala.

»17. Queda al arbitrio de la Diputación provincial el adoptar el medio de contribuir al servicio militar de tierra, con tal que presente oportunamente los cupos de hombres que correspondan á Vizcaya, ó la cantidad de mil quinientos reales por cada uno de ellos. Se tomará en cuenta, según previene la ley de reemplazos, el servicio que prestan á la Marina los puertos y aldeañas.

»No habrá en Vizcaya milicia provincial; pero queda en su fuerza y vigor la ley del Fuero por la que todo vizcaíno está obligado á acudir al llamamiento del Rey en caso de invasión enemiga.

»18. La Provincia de Vizcaya pagará en calidad de única contribución la cantidad anual de seiscientos mil reales de vellón.

»19. Los gastos del culto y clero se pagarán por todos los habitantes de Vizcaya, sin distinción de clases ni personas, en proporción de sus haberes, en la forma y cantidades que la ley común determina. La Diputación provincial hará los repartimientos, y cuanto sea necesario para que esta disposición tenga su entero cumplimiento.

»20. En compensación y pago de las gruesas sumas que la Hacienda pública debe á la Provincia de Vizcaya, se le adjudican todos los bienes nacionales consistentes en mue-

bles, raíces, acciones y derechos que se hallen en el territorio de la misma. La Diputación provincial, á la que en nombre de la Provincia se hará la adjudicación, queda obligada, y los bienes especialmente hipotecados: primero; para el pago de pensiones de los religiosos de ambos sexos exclaustrados, procedentes de los conventos suprimidos en el territorio de la Provincia; y segundo; para cubrir las sagradas atenciones á que estaban exclusivamente destinados los suprimidos patronatos.

»21. Las religiosas exclaustradas continuarán viviendo en comunidad como hasta aquí, y además de no exigírseles renta alguna por la casa que ocupan, se les asignará cuatro reales diarios para las de coro y tres para las legas.

»22. Los habitantes de Vizcaya conservarán el libre uso del papel común, tabaco y sal, observando las reglas siguientes. 1.ª El mes de Septiembre de cada año la Diputación provincial remitirá al Gobierno para su aprobación el presupuesto de la cantidad de tabaco y sal que necesite la Provincia para el consumo del próximo. 2.ª El Gobierno aprobará ó modificará el presupuesto en todo el mes de Octubre. 3.ª La Diputación provincial, por sí ó por medio de sus arrendadores, tendrá la facultad de introducir, libre de derechos, las cantidades de sal y tabaco aprobadas en el presupuesto. 4.ª La Diputación provincial cuidará de repartirlas á los pueblos, quedando á su cargo que se expenda á los consumidores y no á otras personas. 5.ª En las operaciones mencionadas en las reglas 1.ª, 3.ª y 4.ª intervendrá precisamente el Jefe político de la Provincia. 6.ª Los arbitrios provinciales con que están gravados el tabaco y la sal y cualesquiera otros que la Diputación creyese conveniente conservar, afectos al pago de la deuda procedente de los capitales impuestos á censo sobre las cajas de la Provincia de Vizcaya, continuarán exigiéndose como hasta aquí».

No se dirá, después de leídos estos artículos, que justifican el título de modificación de los Fueros con que se encabeza el proyecto de la Comisión económica. Este proyecto sería digno de estudiarse tan sólo en el caso de que se tratara de establecer un sistema de administración especial, independiente hasta cierto punto del que rija en el resto del Reino; pero no cuando se trate de llevar á cabo reformas forales, conservando el espíritu, la esencia de nuestras leyes y costumbres políticas. Interpretada la ley de 25 de Octubre de 1839, como lo hacía la Comisión económica, no cabe sostener con verdad que se confirman los Fueros, con el artículo primero de aquella ley, sino que en lugar de los Fueros que regían en las Provincias Vascongadas, se establece un régimen especial administrativo en el que podrán conservarse parcialmente algunas de las disposiciones que estuvieron en uso durante el régimen foral. Pero el proyecto de la Comisión económica merece llamar la atención en otro concepto. El partido progresista vizcaíno lo acogía como la expresión de su pensamiento político administrativo, renunciando consiguientemente á la uniformidad absoluta que los constitucionales sus predecesores aceptaron en 1813 y 1820. El partido moderado, como se ha visto, iba todavía más lejos, pues no admitía siquiera que se entendiese incompatible la Constitución de la Monarquía con la conservación de los Fueros en toda su integridad. De lo que resulta que unos y otros, moderados y exaltados, acabaron por apartarse por completo de la nivelación absoluta que cuando rigió la Constitución de 1812 era por todos aceptado, toniéndola por el remedio específico que debía regenerar á España. Los mismos progresistas vizcaínos, algunos años después de proclamada la mayoría de Isabel segunda, vinieron también á admitir de lleno el régimen foral, y se mostraron en muchas

ocasiones sus celosos defensores. ¹ Señálese, pues, el proyecto de la Comisión económica de 1842 como un paso dado en este camino, como un homenaje tributado al espíritu foral por los que parecían serle más hostiles en aquel año, por efecto de las circunstancias, y se dirá todo lo que puede decirse en su elogio.

Por lo demás, el Gobierno del Regente había ya resuelto el 29 de Octubre del año anterior lo que más le urgía respecto de la situación en que iban á quedar las Provincias Vascongadas; así es que en todo el presente año no hizo otra cosa que establecer las Diputaciones provinciales en ellas, en la forma que lo estaban en las demás Provincias del Reino, en virtud de la ley sancionada el 23 de Abril, por la cual se le encargaba también que resolviese «lo conveniente acerca de sus facultades, en conformidad de lo dispuesto en el artículo segundo de la ley de 25 de Octubre de 1839», y expedir el decreto de 14 de Julio, por el que se mandaba que las Diputaciones provinciales de estas Provincias tuviesen las atribuciones «que por las leyes competen á las demás de la Monarquía, las que en la administración de los productos y arbitrios provinciales ejercían las extinguidas Juntas generales y particulares y Diputaciones forales y las de recaudar los donativos y cuidar que oportunamente ingresen en el tesoro público.»

El autor del proyecto, Lemonauria, fué nombrado el 23 comisionado para tratar de este proyecto de arreglo econó-

¹ Basta citar, omitiendo otros nombres, al antiguo Secretario de la Comisión económica Don Víctor Luis de Gaminde, persona bien significada en el partido progresista, que dió en los últimos años de su vida no pocas muestras de adhesión al régimen foral y publicó en 1852 un opusculo en sentido fuerista con el título de «Impugnación al proyecto llamado arreglo de los Fueros de las Provincias Vascongadas, presentado por la comisión del Gobierno á la de las mismas Provincias».

mico-administrativo con el Gobierno, juntamente con otro comisionado que debía nombrar la Junta de comercio.

El Jefe político en comisión, Don Francisco González Ferro, suspendió por aquel tiempo á la Comisión económica con motivo de ciertas diferencias que tuvo con ella, nacidas de las dificultades que puso aquél á que volviera á publicarse el periódico progresista titulado *El Vizcatno originario*, suprimido en Octubre de 1841. Pero el Gobierno repuso á la Comisión económica, por orden del Regente comunicada por el nuevo Jefe político Don Julian de Luna el 19 de Febrero.

El 23 de Marzo se excusó la Comisión económica de suministrar al Jefe político ciertos datos que le había pedido, con arreglo á lo dispuesto en la ordenanza para el reemplazo del ejército. La Comisión económica decía que no era conveniente, en su concepto, prescindiendo por un momento de la aversión con que contemplan estos naturales toda idea de contribución de sangre, que hasta tanto se fijen de una manera positiva y estable las modificaciones forales, por virtud de la disposición legal que se está ventilando, se suscite el punto de reemplazo en esta Provincia ni aun en sus menores incidentes.

Habiendo mandado el Gobierno que se devolviese el importe de las multas exigidas en virtud de un bando del Capitán general de las Provincias Vascongadas, que se publicó en 27 de Octubre de 1841, de los donativos correspondientes á Vizcaya en 1841 y 1842, representó la Comisión económica que no había ni hubo nunca tales donativos anuales en Vizcaya, explicando cual era el estado económico de la Provincia, y pidiendo, aunque aplaudía los sentimientos nobles y conciliadores que dictaron aquella medida, que mientras no defina una ley de Cortes las contribuciones sucesivas de la

Provincia, se entienda que el reintegro á los multados se verifique por otros medios.

El primero de Julio se constituyó la Diputación provincial elegida por los cinco distritos de Bilbao, Durango, Balmaseda, Bermeo y Marquina en que se había dividido Vizcaya. Los Diputados elegidos eran Don Pedro María de Villar y Don Teodoro López de Calle, por Bilbao; Don Anacleto Díaz de Mendibil y Don Pedro de Lemonauría, por Durango; Don José María de Jado, por Balmaseda; Don Manuel Francisco de Foruria, por Bermeo; y Don José Manuel de Oar Arteta, por Marquina. No asistió Lemonauría por hallarse ausente. ¹

Después de prestar juramento los Diputados, leyó el Jefe político Don Julián de Luna un largo discurso de estilo gerundiano en el que hacía una pintura lamentable del estado de la administración en Vizcaya. Del espíritu que reinaba en este discurso, puede formarse juicio por la lectura de algunos de los párrafos con que terminaba, que son como sigue: «¿Qué falta para que esta Provincia pueda sostener doblada población que la que tiene? Falta que acabe el desorden foral que á tan deplorable estado la tiene reducida. Tiempo es ya, señores, de que los vizcaínos tengan verdadero gobierno y sean verdaderamente libres. Tiempo es de que adviertan, que reconociendo un Señor se confiesan esclavos; y dado que pudiera acreditarse con documentos auténticos, no desmentidos por la historia, haber sido los Fueros un pacto con el Rey y Señor, harto sabido es lo que significan pactos entre Señores y siervos, y la fianza que ofrecen la palabra y juramento de los Reyes absolutos. Bien deben ya haberse apercebido de que la palabra Fueros sólo

¹ Con arreglo á la ley de 23 de Abril de este año se establecían en Vizcaya el Gobierno político y la Diputación provincial.

ha servido para vincular el mando y la riqueza en unos cuantos oligarcas; para conservar á Vizcaya como Provincia francesa y foco de enemistad y de injustas guerras con sus hermanas las Provincias de España; para agobiar á los pueblos con inmensas y perennes deudas, aniquilarlos con pleitos y ejecuciones, y sacrificarlos con impuestos inicuos; y en fin, sólo ha servido para estorbar que Vizcaya fuese constitucional, ilustrada y venturosa.»¹

¹ Con este mismo espíritu está escrita una memoria sobre la estadística de Vizcaya, que dirigió Luna al Ministro de Hacienda, y se imprimió aquel año en Bilbao.

Con no menor dureza que Luna, pero con más aparato de erudición impugnó después la organización foral Don Rafael de Navascués, Jefe político que fué también de Vizcaya en sus *Observaciones sobre los Fueros de Vizcaya*, impresas en Madrid en 1850. Los argumentos de Navascués no ofrecerán novedad alguna, sin embargo, al que haya seguido paso á paso la historia foral del Señorío que va reseñada, porque no son sino reproducción de los que tantas veces se han expuesto para destruir los derechos de Vizcaya; baste saber que Navascués encuentra el fundamento de sus doctrinas y el arsenal de sus armas en las *Noticias históricas* de Llorente y en la *Colección de cédulas* publicada por González. Lo más digno de recordación que hay en el escrito de Navascués, es un informe suscrito por Don Faustino de Romentería, como miembro del Consejo provincial de Vizcaya, en 12 de Noviembre de 1847, sobre el origen, naturaleza y circunstancias de la Diputación general de Vizcaya.

Romentería, apoyado en los mismos textos forales, procura demostrar que la Diputación es una entidad moderna en la Constitución de Vizcaya, y de importancia secundaria. Esta proposición es exactísima. La Diputación general de Vizcaya no es creación de un día, sino obra del tiempo, como todas las instituciones del Señorío; se ha desarrollado, conforme lo pedian las necesidades públicas, y no nació de una vez reglamentada y provista de todos los adinículos que acompañan á las corporaciones que deben su existencia á las teorías, más ó menos originales, de los gobernantes que pretenden regir al Estado, con arreglo á su capricho ó á la moda de su tiempo, que también son muchas veces las leyes modas como los trajes, imitación de figurines introducidos por la frontera de Francia. Lo que cabalmente caracteriza á la Constitución de Vizcaya es su espíritu

No consta que hiciesen manifestación alguna respecto de este discurso los Diputados provinciales cuando se leyó, pero sí que uno de ellos, Lemonauría, que á la sazón se hallaba ausente, en una proposición que presentó el 19 de

consuetudinario; la circunstancia de que las reformas no se anticipan en ella á las necesidades del pueblo como en las Constituciones doctrinarias y radicales. Tal es el verdadero progreso de los pueblos que no rompen su historia para mejorar su gobierno; de suerte que lejos de que deban causarnos extrañeza las mudanzas que se adviertan en la práctica y costumbres forales de Vizcaya, estas mudanzas, en la forma en que aquí se han verificado, son ni más ni menos que las consecuencias legítimas del desarrollo natural de la Constitución vizcaína en el curso de los siglos, no por imposición ajena ni por tema ó capricho personal sino por el consentimiento reflexivo del pueblo. Todo esto es obvio, claro é inconcuso para el que ha seguido con atención la historia foral de Vizcaya durante los tres últimos siglos.

Rememoria, ateniéndose siempre á los textos legales que halla pertinentes al asunto asegura, «que sin infringir el Fuero de 1526, único que ha llegado hasta nosotros, puede en actualidad la Diputación provincial sustituir á la foral.»

Resuelto así este primer punto, Rememoria examina el segundo de los dos que se proponen tratar, reducido «á averiguar los inconvenientes y ventajas administrativas que de esta sustitución pueden provenir. Los cuerpos provinciales de origen popular están destinados á representar la rivalidad de los intereses locales y á estatuir sobre ellos por la convicción adquirida en una discusión razonada; así es que la gestión de estos intereses no puede perfectamente desempeñarse sino por los hombres de la misma localidad, ó por los que gozan de su confianza; por los que representan las convicciones ó intereses de las fracciones que componen el cuerpo general. La Diputación foral y el Regimiento general han obedecido constantemente á este principio, puesto que por mitades ó iguales partes corresponden á los bandos oñacino y gamboino, que en la época de su vigor absorbían todas las demás fracciones políticas, y representaban los intereses prevalentes del país; hoy estos bandos no son más que nombres vanos que recuerdan nuestras discordias civiles, y sólo pueden ser útiles al que quiera estudiar la historia de las guerras intestinas del Señorío. Es, pues, claro que en su organización actual se echa de menos ese elemento fecundo de discusión y contraste, que, conduciendo al acierto, vigoriza las resoluciones por la con-



Octubre á la Diputación contra los procedimientos del Jefe político en sus relaciones con ella, calificó el discurso de «mal concebido y peor ordenado», diciendo que Luna «ó no tenía los suficientes conocimientos de administración, ó se hallaba animado de un espíritu hostil contra Vizcaya.»

vicción de su importancia y necesidad. La Diputación provincial, producto de la época presente, se acomoda á los intereses de la actualidad; sus elecciones por distritos tienen la ventaja de reunir la representación de todas las localidades para que la gestión de los negocios sea desacompañada por agentes de una competencia incontestable, y no puede dudarse que en este sentido es ventajosa la sustitución. Si además por un momento nos detenemos en los respectivos métodos de elección, se verá que la expresión de la voluntad de las mayorías es muy remota y casi nula en la foral, y terminante y clara en la provincial; aquélla procede de la indirecta en cuarto grado, siendo dos de éstos producto de la suerte. Primero, se nombra el Ayuntamiento por los sufragios del pueblo; el Ayuntamiento nombra uno ó dos apoderados de la Junta; estos individuos en los bandos gamboino y oñacino por suerte sacan seis electores, tres por cada bando, quienes también por suerte sacan los primeros Diputados, Sindicos, Secretarios de justicia y demás. La elección de la provincial es, como se sabe, directa é inmediata, mucho más conforme á la ciencia política y más expresiva de la voluntad de los electores. Para resolver el sentido económico de la cuestión, basta saber que los Diputados, Consultores, Sindicos y Secretarios de justicia están ampliamente dotados de los fondos provinciales, y que los Secretarios referidos, suprimidas las atribuciones judiciales de la Diputación, no tienen absolutamente ocupación ni representación en ella. Parece, pues, que administrativa y económicamente estaría más en los principios de la ciencia y en los intereses del país la sustitución de la Diputación foral en la provincial.»

Sería incompleta la historia de las ideas políticas y forales en Vizcaya sino se recordase la apología de la Diputación provincial y el rebajamiento de la Diputación general que se comprenden en el informe trascrito en parte. Cuando se escribió aquel informe, se creía sin duda en España en la eficacia de las Diputaciones provinciales para promover la buena administración pública, en virtud de las razones que expuso Rementería en este sentido. Hoy que todo el mundo sabe enanto ha variado aquel concepto, no deja de tener algún valor el informe de Rementería, como una de tantas censuras que se han hecho del régimen foral, en nombre de la ciencia

El 4 de este mes de Julio pasó la Diputación una circular á los pueblos, encargando que con arreglo á la ley de 14 de Agosto de 1841 se atendiese á los gastos del sostenimiento del culto y clero por medio de una contribución, clasificando al efecto á los vecinos en cinco categorías.

Las diferencias con el Jefe político á que se refiere la citada proposición, versaron principalmente sobre la orden que dió para que no se pagase ni tomase razón de los libramientos no firmados por él, y se reducía á que, formándose «un expediente de los oficios notables» que desde el 20 de Septiembre último dirigió el Jefe político á la Diputación y de las contestaciones que se le dieron, se eleve con copia certificada de él la correspondiente queja al Regente del Reino. La Diputación aprobó el mismo día 19 de Octubre la proposición de Lemonauría, y consignó además en un acuerdo las facultades que correspondían á la Diputación.

Sobre este asunto recayó una orden del Regente del Reino, que se leyó el 31, comunicada al Jefe político, y es como sigue: «He dado cuenta al Regente del Reino de las contestaciones suscitadas entre V. S. y esa Diputación provincial, con motivo de no asistir V. S. á las sesiones, y de pretender la Diputación, que no hallándose presente el Jefe político, debe firmar la correspondencia y los libramientos uno de los Diputados como Presidente. Enterado de todo su Alteza, se ha servido resolver, después de haber oído al Consejo de Ministros: 1.º Que V. S. haga entender á la

política, la cual, ensayada en la piedra de toque de la experiencia, ha producido con el tiempo resultados mucho menos halagüeños que el régimen consuetudinario que se trataba de deprimir y echar por tierra con tanta injusticia, negando ó desconociendo hasta la legitimidad de las consecuencias que su mismo carácter de régimen consuetudinario traía consigo en el curso del tiempo.

Diputación provincial que sus atribuciones están limitadas á lo que previene el decreto de 14 de Julio de este año. 2.º Que en cumplimiento del artículo doscientos cuarenta y cuatro de la ley de 23 de Febrero de 1823, asista V. S. á las sesiones de la Diputación provincial, como ha debido hacerlo y con mayor razón cuando se hacía más necesaria su presencia; y que cuando V. S. no pueda asistir, dé cuenta al Gobierno con expresión de las razones que justifiquen su conducta. 3.º Que en cumplimiento de los artículos ciento veinte y uno y ciento sesenta de la expresada ley de 3 de Febrero, á V. S. sólo corresponde, como á Presidente, firmar los oficios, órdenes y libramientos de la Diputación provincial, cuyas resoluciones de otro modo no serán ejecutivas, ni podrán ser obedecidas.»

Las Diputaciones de las tres Provincias Vascongadas suscribieron el mes de Noviembre, cada una de ellas en día distinto, una exposición dirigida al Regente del Reino, pidiendo que se estableciese en Vitoria una Audiencia con siete Magistrados y un Fiscal, como medio de mejorar la administración de justicia en ella, de «encaminar sus afectos al centro común, y dulcificar las novedades introducidas... en obsequio de la unidad constitucional de la Monarquía, consignada en la ley de 25 de Octubre de 1839»..

El 19 de este mes se juntaron en Bilbao los comisionados de las tres Provincias, representando á Vizcaya Jado y Lemonauría, para tratar de la suerte futura del país, pendiente de la ley de modificación de Fueros, y acordaron por unanimidad que se enviasen á la Corte comisionados «á fin de procurar que en la ley que va á discutirse se conserve la mayor parte posible del régimen foral con el quo de tan antiguo se han gobernado las Provincias Vascongadas y en que cifran siempre su felicidad.» ¹

¹ No se trataba en realidad de salvar el régimen foral, como hubo oca-

El 31 de Enero publicó la Diputación una alocución dirigida á los electores vizcaínos, recomendándoles la candidatura para Diputados á Cortes de Don Pedro de Lemonauría, Don Julián Campo de la Cuadra y Don Bernabó Díaz de Mendibil. El 27 de este mes había tomado posesión Don Laureano Muñoz del empleo del Jefe político. Por haber sido elegido Muñoz Diputado á Cortes, le substituyó en comisión Don Dionisio de Echegaray, pero Muñoz volvió á encargarse de la jefatura y la desempeñó hasta la caída de Espartero.

Al aprobarse el 15 de Febrero los expedientes de indemnización de los perjuicios ocasionados durante la guerra civil, con arreglo á la ley de 9 de Abril de 1842, se suscitó la cuestión de si los procesados con motivo de los acontecimientos de Octubre, y condenados á pena corporal, se calificarían con la nota de encausados y ausentes ó con la expresión de la sentencia. El Jefe político, Foruria y Mendibil opinaron que debía hacerse esta expresión; Jado, Oar Arteta, Lemonauría, Villar y Calle, opinaron en contra. Discutiéndose luego si respecto de otras personas no procesadas por dichos acontecimientos, se harían algunas observaciones sobre la parte que hubiesen tomado en ellos, todos los asistentes menos Jado votaron afirmativamente.



sión de decirlo cuando se transcribió más arriba el proyecto de modificación de la Comisión, económica sino de establecer un régimen especial administrativo para Vizcaya; pero entonces, lo mismo que en otras ocasiones, se ha observado la singular anomalía de que se tome en boca aquel régimen para proponer ó admitir las novedades más opuestas á su verdadera naturaleza.



CAPÍTULO XXI

Se reunieron el 4 de Julio en el salón del Ayuntamiento de Bilbao muchas personas que representaban á todas las clases del pueblo, después de verificado el pronunciamiento contra el General Espartero. El Comandante general Don Ramón Solano hizo presente la necesidad de nombrar una Junta de gobierno que se pusiese al frente de la administración pública; y aprobada esta idea por unanimidad, fueron nombrados por aclamación para componer la Junta, el mismo Solano, Don Pedro de Jane, que se hallaba ausente en Francia, el Comandante del regimiento de Soria Don Salvador Damato, Don Manuel María de Uhagón, el Marqués de Villarías, Don Ambrosio de Goicoechea, Don Manuel de Jane, Don Pedro Pascual de Uhagón y Don Ceferino de Boneta como Secretario. Se publicó el mismo día una proclama, que terminaba diciendo que los intereses de Vizcaya no serán olvidados por los individuos que componen la Junta, y que se reclamarán enérgicamente las consecuencias de la ley de 25 de Octubre de 1839. Se aclamaba, al terminar, á Isabel segunda, á la Constitución de 1837, á la Independencia nacional, al Ministerio López

y al Gobierno supremo de Barcelona. Se nombró el mismo día por la Junta nuevo Ayuntamiento, se dieron las gracias á los Alcaldes que formaban parte del anterior Don Juan Echevarría y la Llana y Don Faustino de Rementería por su conducta al verificarse el pronunciamiento, y se nombró á Rementería Juez de letras interino.

La Junta de gobierno fué más explícita sobre sus intenciones respecto á la suerte de Vizcaya en otra alocución que dirigió el 8, y en la cual se leen los párrafos siguientes: «La espada rasgó la ley en Octubre de 1841, y las arbitrariedades entonces cometidas colocaron al país en una posición que á todas luces puede llamarse violenta é ilegal. Verificado el alzamiento de 1843, natural era que Vizcaya volviese al estado en que se hallaba en aquella época de triste recordación, hasta que tuviesen cumplido efecto las disposiciones de la ley de 25 de Octubre de 1839. Hubiéranse colmado con este cambio los deseos de la Junta de gobierno, que en este momento dirige al país su voz sincera y amiga; pero consideraciones poderosísimas, complicaciones de mucha gravedad, y sobre todo razones de prudencia elevada, aconsejan que se deje al tiempo y á la discusión la realización de un proyecto tan agradable á los buenos vizcaínos.—Antes de mucho ondeará en el último pueblo de las Provincias Vascongadas la hermosa bandera del pronunciamiento; entonces, y aun antes si fuese posible, las tres Provincias hermanas, escudadas por la ley y fuertes con su justicia, reclamarán la observancia de los pactos que les aseguran la conservación de sus Fueros, franquezas, usos y libertades.—La Junta de gobierno no perderá un momento, ni perdonará fatiga para el logro de tan justos como sagrados fines; y el país puede descansar en el celo y buena voluntad de los individuos que la componen».

La Junta de gobierno, consecuente con los principios es-

tablecidos en su programa, y juzgando que había llegado el tiempo de que empezaran á cumplirse las generosas ofertas del Ministerio López, acordó el mismo día conceder amnistía completa, sin excepción alguna, á cuantos hayan sido ó pudieran ser procesados á consecuencia de los acontecimientos políticos ocurridos en la Península ó islas adyacentes desde el 4 de Julio de 1840 hasta el 15 de Mayo último, ó por cualquier otro hecho de carácter político ocurrido también en el mismo periodo, con la salvedad de poder exigirse por la autoridad competente la responsabilidad pecuniaria á los que se hubiesen idizado con caudales públicos ó de particulares.

En vista de un manifiesto publicado en San Sebastián por dos de los ex-Diputados provinciales de Vizcaya, acordó la Junta de gobierno el 10 publicar otro manifiesto, censurando que la Diputación, menos dos de sus individuos, Lemoaurría y Jado, hubiesen salido de Bilbao la noche del 3 al 4 de este mes, cometiendo la extraordinaria ligereza, cuando menos, de sacar los caudales de la Provincia, que fueron robados. Para que la Diputación se instalara en algún punto de Vizcaya, según lo prevenido en la real orden de 19 de Junio, debió acompañarla y presidirla el Jefe político, el cual quedó oculto en Bilbao hasta el día 6.

Se reunieron el 13 Don Braulio de Zubía y Don José María de Ezpeleta, Regidores, el Conde de Montefuerte, y Don Mateo de Incháurraga, Síndicos del Señorío, los Padres de Provincia Don Joaquín María de Ugarte, Don Martín León de Jáuregui, Don Pedro Novia de Salcedo, Don José María de Jusué, Don Serapio de la Hermosa, Don Juan Bautista de Anitua, Don José Ramón de Salcedo, Don José María de Gortázar y Don Gil de Ugarte, con la Junta de gobierno y hasta diez y siete personas más como notables por ella convocadas, para tratar de la forma de reem-

plazarla por una que fuese elegida por todo el país; y se resolvió después de discutir largamente este asunto, que se hiciese la elección por distritos, sirviendo de base la demarcación que rigió para la última elección de Diputados á Cortes, y nombrándose dos comisionados por cada distrito, los cuales han de elegir la nueva Junta. También se acordó que se renovasen los Ayuntamientos, con arreglo al sistema foral ó la costumbre de cada pueblo, y donde ésto no fuese posible con arreglo á la ley de 3 de Febrero de 1823.

Decretó la Junta de gobierno en su consecuencia que se renovasen en su totalidad los Ayuntamientos de Vizcaya, por pedirlo así las circunstancias del día; y deseando al mismo tiempo restablecer, en cuanto fuese posible, los usos y costumbres de este ilustre solar, sin traspasar los límites de la prudencia, ni suscitar embarazos al Gobierno supremo de la Nación, dispuso que la renovación se efectuase con arreglo á los artículos siguientes: 1.º Serán renovados todos los Ayuntamientos de la Provincia. 2.º Los nuevos Ayuntamientos se nombrarán en la mañana del domingo 16 del presente mes, entrando inmediatamente en el ejercicio de sus funciones. 3.º Las Anteiglesias nombrarán en cruz parada, según uso y costumbre, sus Fieles y Justicias; y las Villas, Concejos y Valles se regirán para la elección por sus ordenanzas particulares, entendiéndose que en aquellos pueblos en que los Ayuntamientos deban nombrarse por sus antecesores se llamarán al efecto los concejales que cesaron á fines de 1841. 4.º Los nuevos Ayuntamientos darán á esta Junta sin pérdida de tiempo aviso de su instalación.

El 16 se pasó una circular para llevar á efecto lo acordado respecto á la elección de nueva Junta de gobierno previniendo: 1.º Que se nombren en cada uno de los veinte y cuatro pueblos cabezas de distrito, que señala la división hecha en 8 de Febrero último por la Diputación provincial,

un comisionado y un suplente que le reemplace en caso necesario. 2.º Que estos nombramientos se hagan por mayoría de votos en los pueblos que son cabezas de los respectivos distritos el 19 del corriente: 3.º Que los comisionados se reúnan el 21 en el salón de la Diputación para elegir la nueva Junta de gobierno que se compondrá de nueve individuos.

Se admitió el 17 la renuncia del Juez de primera instancia interino, y se nombró en su lugar á Don Ceferino de Boneta.

Reunidos dicho día 21 los comisionados, propuso el del distrito de Orozco, que en lugar de proceder al nombramiento de la Junta de gobierno, se llamase á los individuos que formaron parte del Regimiento general elegido en 1841; y que si parecía excesivo su número, se llamase á nueve de ellos, tomándolos por el orden de precedencia. No fué admitida esta proposición, y fueron elegidos para componer la nueva Junta Don Ramón Solana, Presidente, Don Pedro Novia de Salcedo, Vice-presidente, Don Pedro de Jano, Don José María de Lámbarri, Don José Miguel de Arrieta Mascarua, Don Juan Santos de Orúe, Don Gaspar de Beláustegui, y Don Victor de Munibe, vocales, y Don José Manuel de Villar, Secretario.

Don Pedro Novia de Salcedo ofició el 22 á la Junta, manifestando las poderosas razones que le impelían á huir de todo destino público á que no le obligue la ley, y que no encontrándose en este caso el cargo de Vice-presidente para que había sido nombrado, no lo admitía en manera alguna. Fundaba Novia su resolución en «las continuas desgracias personales y de familia, que me han originado los sucesos políticos de muchos años atrás, causando la completa ruina de mis intereses». Novia pasó dos oficios para participar su resolución. Al primero de ellos contestó el Presidente de la

Junta, previniéndole que tomase posesión de su cargo sin excusa alguna, y conminándole con las consecuencias á que pudiera dar lugar su negativa.

No se instaló la nueva Junta hasta el 24, por no haber asistido antes suficiente número de vocales. Concurrieron este día el Presidente, Jane, Arrieta Mascarua, Beláustegui y Villar, y acordaron que mientras no asistiesen los demás vocales no se podían tomar otras determinaciones que las necesarias para mantener el orden y restablecer la última Diputación foral, en atención á que la provincial había abandonado su puesto. Se recibieron oficios de Orúe, Lámbarri y Munibe, en que se excusaban de aceptar sus respectivos cargos, fundándose principalmente en el estado de su salud.

La nueva Junta publicó la alocución siguiente:

«Vizcaínos: La Junta de gobierno que habeis nombrado para reemplazar á la provisional creada en esta invicta Villa el glorioso día de su pronunciamiento, cumple el primero de sus deberes haciendooos saber que ha comenzado ya á ejercer la suprema autoridad que le conferisteis.—Privada la Junta de las luces, prestigio ó influencia de cuatro de sus principales individuos, que por razones que respeta se han excusado de pertenecer á ella, y persuadida al mismo tiempo de que sin su concurrencia carece de los elementos necesarios para dominar la situación presente, está en el caso de manifestaros con franqueza que no ha aceptado vuestro voto sino para evitar al país los males que la anarquía, consiguiente á la falta de toda autoridad provincial, podría haberle acarreado.—Alzada en masa la Nación entera para sostener sus leyes fundamentales, su independencia y su Reina, se inauguró una lucha nacional, en la que no pudiendo permanecer mera espectadora esta Provincia, que de muy noble y muy leal blasona, se lanzó con ardor, secundada por las fieles y valientes tropas que la guarnecián, con-

tra una pandilla inmoral y egoísta, que apoderada del Gobierno comprometía tan caros y sagrados objetos.—La Junta provisional que en tan críticos momentos se encargó del gobierno de Vizcaya, y que tan dignamente ha sabido llenar su espinosa misión, trazó la línea de conducta que debíamos seguir, tan conforme á los intereses generales de la Patria como á los de esta Provincia. Ahora que es llegado el día de la reparación y de la justicia, por la ruina de un poder entre cuyos desmanes debemos contar el decreto de 29 de Octubre de 1841, por el cual el mismo que en el campo del abrazo os hiciera promesas tan justas como halagüeñas, destruyó de una sola plumada las garantías que se os consignaron en la ley de 25 de Octubre de 1839, deber nuestro es unir al santo grito del pronunciamiento el respetable de aquella ley vigente. Las autoridades legítimas que con arroglo á ella se van á colocar al frente de vuestra administración huérfana, consultando del modo que juzguen más oportuno la opinión del país, decidirán lo que á sus intereses cumple; y vuestra Junta de gobierno, al mismo tiempo que velará por ellos, se esforzará en que se realicen las grandiosas miras del pronunciamiento nacional, para cuyo objeto cuenta con la cooperación de todos los buenos.—Vizeafnos: Viva la Reina Doña Isabel segunda; Viva la Constitución de 1837; Viva la independencia nacional; Vivan los leales del ejército; Viva la ley de 25 de Octubre de 1839.»

El decreto por el cual se restablecía la Diputación, se publicó el 25, y está redactada en estos términos:

«LA JUNTA SUPREMA DE GOBIERNO DE VIZCAYA.—Considerando que la primera necesidad del país es tener á su frente una Diputación, que al mismo tiempo que promueva los intereses provinciales y administre sus fondos, merezca la confianza pública y conduya á sostener el glorioso pronunciamiento nacional, tan decididamente secundado por todos

los pueblos de este ilustre solar, y la ley de 25 de Octubre de 1839, ha tenido á bien decretar lo siguiente:

» Artículo único. Se establece la última Diputación general, y en su consecuencia se avisará con esta misma fecha á los señores que la componían, á fin de que reunidos á la mayor brevedad en el salón de sus sesiones, comiencen desde luego á ejercer sus respectivos cargos.»

Por otro decreto dado el 26, dispuso la Junta que durante la ausencia de los primeros Diputados generales ocupasen sus puestos los individuos del Regimiento general á quienes correspondiese por orden. Entraron en consecuencia á ejercer el cargo de Diputados Don José de Jane y Don Ambrosio de Goicoechea, haciendo de Secretario el oficial mayor de la secretaría Don Blas Vicente de Urúburu.

Constituida la Diputación el 27, se acordó aguardar la llegada de los primeros Diputados residentes en Francia para tomar cualquier resolución extraordinaria, llamando entre tanto al Consultor Lámbarri. Se presentó y juró el Síndico Conde de Montefuerte.

La Junta de gobierno dió cuenta el 28 al Ministro de la Gobernación de todo lo ocurrido en Vizcaya con motivo del pronunciamiento, y de los festejos con que se celebró el suceso de Torrejón de Ardoz, y pidió que se devolviese el importe de las multas exigidas á consecuencia del alzamiento de Octubre de 1841.

Por decreto expedido el 29 mandó que las comunidades de religiosas se hicieran cargo de sus bienes no vendidos y cobrasen lo que les adeuda el Estado.

El primero de Agosto autorizó á la Diputación para recaudar desde el 15 del corriente el derecho de veinte y cinco maravedís en quintal de vena que se exporte, «suprimido con harta injusticia y ligereza por orden del ex-Regente de 7 de Septiembre de 1842.»

Dispuso el 3 que cesara Don Manuel María de Uhagón en el empleo de Jefe político, que había estado desempeñando, y que se encargase del Corregimiento el Diputado general de turno Don Domingo Eulogio de la Torre.

El 4 se constituyó definitivamente la Diputación con Don José de Jane, hasta la llegada de Don José Joaquín de Arguinzóniz, á quien correspondía ocupar el puesto de Diputado en lugar de la Torre, y Don Matías de Izaguirre. Fueron llamados los letrados Don Santiago de Bernaola y Don Manuel de Careaga para suplir á los Consultores. Ocuparon ya sus puestos el Secretario Hormacche y el Síndico Incháurraga. Se tuvo en cuenta la conveniencia de convocar las Juntas generales, y de proceder á la elección de nuevo Gobierno del Señorío, en atención á que había terminado ya el bienio, sin olvidarse de lo que la prudencia aconsejaba en las presentes circunstancias. Se repuso en su destino á Don Manuel de Barandica, que se hallaba en Zorroz, y se dió cuenta de una comunicación del Corregidor político relativa á la elección de Diputados y á la terna de Senadores para las Cortes que se iban á reunir en Octubre; acordándose que con arreglo á lo dispuesto por el Gobierno central en Diciembre de 1840, desempeñe en este punto el Regimiento general las funciones que competen á las Diputaciones provinciales.

Se dió cuenta el 5 en Diputación de un oficio de la Diputación provincial de Guipúzcoa, en el que proponía que las tres Provincias hermanas se pusiesen de acuerdo «para lograr en la próxima legislatura un arreglo definitivo, cual corresponde al grandioso acontecimiento por el cual se terminó en los campos de Vergara la guerra civil.»

Aunque la invitación procedía de una Diputación provincial, á fin de contribuir decorosamente, de un modo indirecto á que se restableciese la Diputación general de Guipúz-

coa, por medio de la Junta de gobierno, que aun existía en aquella Provincia, se acordó contestar á dicho oficio con el siguiente, de que se dió traslado á Alava.

«Con indecible placer ha leído esta Diputación general el atento oficio de V. E. de 4 del corriente, por el cual se sirve excitarla á abrir conferencias entre las Diputaciones de las tres Provincias hermanas, ó las corporaciones que desempeñen sus funciones, á fin de ocuparse inmediatamente de cuanto fuese oportuno para lograr en la próxima legislatura un arreglo definitivo, correspondiente al acontecimiento que dió fin en los campos de Vergara á la guerra civil, á cuyo fin tiene nombrados V. E. á los señores Don José Emmanuel de Emparan, Don Manuel de Ozaeta Barroeta y al doctor Don Miguel de Garinondia, vocales de su seno. Sensible sería, como V. E. dice muy acertadamente, que se malograra la ocasión favorable que las circunstancias presentes puedan ofrecer para que de una vez se fije la suerte futura de las tres Provincias Vascongadas. Y no lo será menos el que no pudiesen marchar en todo uniformes sus Diputaciones, porque si aun estrechamente unidas y con caracteres análogos no deberían lisonjearse de que triunfasen cumplidamente sus esfuerzos de las injustas prevenciones que contra sus legítimos derechos militan, de tomar fuera que divergencias tal vez irremediablos, pero muy de lamentar, las presentasen á los ojos del Gobierno de una manera débil y poco digna, y se desoyesen sus reclamaciones. Igualmente que V. E. reconoce esta Diputación, que el decreto funesto de Vitoria ha producido en los veinte y un meses que ha dominado intereses que merecen ser mirados con consideración. Así os que procura también evitar reacciones innecesarias ó desacordadas, y hasta ahora de ninguna se le podrá acusar. Pero esta palabra, más quizá que otras que se emplean con éxito seguro en casos semejantes al actual,

inspirando temores exagerados, ha impedido la reparación de grandes injusticias, y ojalá no impida que las Provincias Vascongadas, tomando sin perder un instante la actitud respetable y pacífica que les conviene, saquen el fruto que deberían prometerse de la hidalga elevación de sus naturales, y de los sacrificios que en las pasadas como en la actual generación han hecho para salvar sus derechos de los embates de la malevolencia.—Abundando, no obstante, esta Diputación en la idea de V. E., no ha vacilado en adoptarla, y ha señalado esta Villa para la celebración de las reuniones á que ha sido invitada desde el 10 del corriente. La razón que la ha movido á designarla con preferencia á otro punto, que hubiera sido acaso más cómodo para los comisionados de V. E. y los de la Provincia de Alava, á cuya Diputación se traslada este oficio y el de V. E. á que sirve de respuesta, es que, como V. E. no ignora, son pocos los individuos que componen esta corporación, y se hallan tan ocupados en preparar la Junta general, que piensan convocar en breve, y otros trabajos urgentísimos, que no le sería posible ausentarse en estos momentos á ninguno de ellos sin grave perjuicio del país.»

Determinó el 6 la Junta de gobierno disolverse, participándolo al Gobierno central en los términos siguientes:

«Terminada felizmente la crisis en que habían colocado á esta Nación magnánima las repetidas infracciones de la Constitución y las prácticas parlamentarias, sostenidas por una fracción mezquina, á cuyo frente se hallaba el hombre de quien más derecho tenía la España á esperar justicia y ventura; salvadas la Patria y la Reina por el favor del Cielo y los esfuerzos de los buenos patricios; restablecido en la capital de la Monarquía un Gobierno supremo, reconocido y aclamado unánimemente por todos los que en algo estiman la independencia, las instituciones y el trono; colmado, en fin,

el primordial objeto del glorioso alzamiento nacional; considera esta Junta llegado el día de cesar en sus funciones, dejando de este modo más expedita, uniforme y robusta la acción del Gobierno supremo. Ahora que con el restablecimiento de la pública tranquilidad volvemos á entrar en la senda del orden y de la justicia, ningún otro medio contempla más á propósito esta Junta para asegurar las consecuencias del pronunciamiento, que el adoptado por V. E., convocando inmediatamente las Cortes, únicas que legalmente pueden y deben expresar la soberanía y la voluntad del pueblo, cuando no se ve éste en la triste necesidad de acudir al estruendo de las armas para hacer oír su voz respetable y majestuosa. Pero antes de abandonar sus puestos los que por la voluntad de Vizcaya fueron nombrados para formar esta Junta de gobierno, creen que su propia dignidad y decoro les imponen la obligación de manifestar á sus comitentes, á V. E. y á la Nación entera, todos los pasos de su conducta y las razones que la abonan. Si la España toda tenía que vengar ultrajes y reparar injusticias y castigar ingraticudes contra el hombre á quien había elevado á la cumbre de la magistratura, Vizcaya, la muy noble, la muy leal, que se veía herida en lo más hondo de su corazón por el soldado sin fe, que tan indignamente se burlara de los generosos sentimientos vascongados al pronunciar las lisonjeras palabras del campo del abrazo, no podía sin mengua de su pundonor y españolismo dejar de unirse á sus hermanos para derrocar al enemigo común. Al verificarlo, y al lanzar el grito de salvación, le era indispensable añadir el viva de la ley de 25 de Octubre de 1839, complemento del grandioso día de Vergara, y protestar con todas sus fuerzas contra el ilegal decreto de 29 del propio mes y año de 1841, atentatorio y depresivo de la autoridad de las Cortes. Este clamor universal que resonaba en

todos los ángulos de la Provincia, que inundaba sus valles y repetían sus escabrosas montañas, que hacía estallar á un tiempo de esperanza y de coraje las fibras del pueblo vascongado, ¿cómo habían de olvidarle sus representantes, sus elegidos para la Junta de gobierno? No, mil veces no, Excmo. señor; por eso en su programa lo habían comprendido. Esta Junta estaba persuadida que si la causa del pronunciamiento necesitaba más y más adalides; si la salvación de la Patria exigía más sangre y más sacrificios; aquí, entre estos riscos, con aquel programa por enseña, hubieran vuelto á aparecer los que en seis años de combates dieron larga prueba de lo que valen. Por estas razones aclamaron aquella ley, y protestaron la nulidad de aquel decreto. Consecuencia inmediata y natural parecía destruir al punto todas las invasiones que ilegalmente había introducido el último, y acaso tal era la más justa determinación; pero los intereses creados que de por medio existían, los grandes intereses nacionales que con una medida tan súbita podían lastimarse, y el espíritu de unión, de confianza en el porvenir, y de respeto al supremo Gobierno establecido en Barcelona (y reconocido desde el primer momento de su fundación por la Junta provisional) que animaba á este país, y que V. E. y las Cortes sabrán apreciar dignamente, determinaron desde luego la marcha prudente y reparadora de la Junta.—Hallábase huérfana la administración de Vizcaya por haber desaparecido la Diputación provincial; no había tiempo que perder para colocar al frente una autoridad de confianza que la reemplazara; y como el medio más rápido, más sencillo y más conforme á los deseos del país, se estimó por la Junta el restablecimiento de la última Diputación general, que había merecido los votos del pueblo vascongado so el árbol augusto de Guernica; allí donde, sin ejemplar en el mundo, había existido sin inte-

rrupción el gobierno representativo desde un tiempo cuyo origen no alcanzan las noticias de los hombres. Dado este paso conforme con la renovación de los Ayuntamientos por el método antiguo, que había acordado la Junta provisional, y cambiada en su consecuencia la denominación de Jefatura en Corregimiento político, con arreglo al artículo segundo del decreto de 16 de Noviembre de 1839, vigente como la citada ley de 25 de Octubre que la ocasionó, quedó sin lastimar interés de ninguna especie, y con universal aplauso, legalmente constituida la Diputación general en la plenitud de sus atribuciones. V. E. se habrá convencido ya por los estados, que con arreglo á sus instrucciones se le han remitido, de la parsimonia con que tanto esta Junta como la provisional han caminado en las destituciones y nuevos nombramientos de empleados, pudiendo asegurarse que con muy leves excepciones continúa el mismo personal en los diferentes ramos de la administración que anteriormente al glorioso pronunciamiento.—También por los presupuestos y estados, que le remitirán sus respectivas oficinas, se penetrará V. E. de la exquisita delicadeza con que ha procedido en el manejo de los fondos públicos, no tomando en ellos más intervención que la de saber los ingresos y expedir las ordenes para que se atendiese exclusivamente á las beneméritas clases del ejército y empleados de la Nación que estaban al cuidado de la Junta. Igualmente, y por razones que á V. E. no se ocultan, y al considerando de su respectivo decreto expone, acordó esta Junta que desde primero del corriente mes se entregase á las infelices religiosas la administración de sus bienes no vendidos, para que con el producto se hiciesen cobradas de su mezquina y no pagada asignación, y depositasen el sobrante en la caja de la Diputación general, encargada de ejercer una intervención al efecto. Faltaría esta Junta, Excmo. señor, á su deber, si al

dar cuenta al supremo Gobierno de esta medida, no recomendase con toda eficacia la suerte de estas víctimas inocentes. Tan pocos son los bienes por vender que los han quedado, que no pudiendo sufragar ni con mucho lo indispensable para su sostenimiento, duda esta Junta si les habrá perjudicado con la disposición que lleva referida, porque acaso servirá solamente de pretexto para que cese la caridad pública que á duras penas las sostenía, y reducidas al insignificante producto de sus expresadas fincas, se vean, si cabe, en más estrechez y angustia que hasta el presente. Algunas disposiciones también se ha visto esta Junta en la dura necesidad de adoptar para mantener el reposo público y conllevar su indignación, expidiendo pasaportes á varias personas cuya permanencia en los diversos puntos de donde se les ha hecho salir no creía conveniente. Muy pocas son por fortuna, y V. E. que el primero enarboló la bandera de unión y reconciliación, sabrá oportuna y prudentemente usar con ellas la generosidad que sea compatible con la justicia. Excusa esta Junta robar á V. E. un tiempo precioso, refiriéndole otros actos de menor interés, consiguientes al ejercicio de la suprema autoridad de que estaba encargada. —Pero antes de terminar, Excmo. señor, no puede esta Junta menos de insistir, aun á peligro de ser molesta, en reclamar la ley de 25 de Octubre de 1839, y protestar contra la nulidad del decreto de 29 de Octubre de 1841 y la situación por él creada. Las Cortes y V. E., así lo esperamos, harán justicia á este país, y la referida ley y la unidad constitucional, que en ella se invoca, recibirán la interpretación natural y generosa que deben recibir, para que no crea la Europa entera que fué un lazo tendido á nuestra buena fe, á nuestra hidalguía, que se nos quiso halagar cuando infundíamos temor, y que el león de España, de cuyas garras formamos parte, usó de una superchería bien

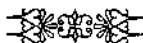
indigna por cierto de su renombre. De sutileza, con mengua del pundonor español, podrá quizás hacer alarde en el Congreso algún ingenio agudo para torcer el sentido de aquella ley; pero las Provincias Vascongadas, de lenguaje toscó aunque franco y varonil, que saben obrar mejor que discutir, rechazan completamente los epigramáticos sofismas, que más bien cuadran en una academia teológica que en un Congreso español. Si conforme esta Junta lo desea y tiene derecho á esporar, V. E. y las Cortes hacen sólo aquellas modificaciones en los Fueros de las Provincias Vascongadas que reclame el interés de las mismas conciliado con el general de la Nación, se habrá extinguido para siempre el fuego que los enemigos de la paz pública tratan de encender otra vez; y mientras que la España cruza la ponosa crisis de vida ó muerte para el matrimonio de su Reina Doña Isabel segunda, las tres hermanas sabrán respetar y hacer respetar las inspiraciones de un Congreso magno, augusto y enteramente nacional, que con absoluta independencia de extrañas ambiciones decida lo que más convenga.»

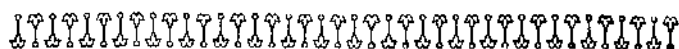
Se publicó al mismo tiempo la alocución siguiente:

«Vizcaíños.—Vencido el tirano, y seguro ya y completo el triunfo de la causa nacional, instalado en Madrid, y obedecido y respetado en toda la Monarquía el Ministerio López, que por las Juntas de todas las Provincias alzadas ha sido proclamado y reconocido como supremo Gobierno de la Nación, y encargada de la administración de este M. N. y M. L. Señorio la Ilma. Diputación que en las Juntas generales de 1841 mereció vuestra honrosa confianza, y que so el árbol santo de Guernica os juró guardar y hacer guardar vuestros antiguos venerandos Fueros y buenos usos, faltaría vuestra Junta de gobierno á sus principios y al más sagrado de sus deberes, sino cesara como cesa hoy mismo

en sus funciones, y en el ejercicio de la suprema autoridad con que la honrásteis, y que no podría conservar más tiempo sin invadir las atribuciones, y entorpecer y debilitar la acción del Gobierno de la Nación, que ahora más que nunca convicne robustecer.—Al resignar su poder, vuestra Junta confía que las autoridades legítimas que ha restablecido, colocadas ya al frente de la Provincia, y contando como deben contar con vuestro firme y seguro apoyo, alcanzarán la merecida reparación de los desafueros y desagravios que habeis sufrido durante la ominosa Regencia de Espartero.—Vuestra noble y desinteresada conducta en las últimas críticas circunstancias, y la muestra que en ello habeis dado de vuestra proverbial fidelidad y de vuestro acendrado patriotismo, os dan derecho á creer y esperar que el supremo Gobierno y los representantes de la Nación serán nobles, justos y generosos con vosotros, respetando la ley vigente de 25 de Octubre de 1839. Sí, vizcaínos; vuestra madre la magnánima y pundonorosa España cumplirá su promesa, y no faltará á la palabra que solemnemente os tiene empeñada. Así lo cree al menos, y lo reclama de la hidalguía y nobleza castellana vuestra Junta de gobierno, que por su parte ha procurado vuestro bienestar, y satisfecho vuestros deseos hasta donde ha alcanzado y permitido la prudencia, y que al despedirse de vosotros y dejar su puesto, quisiera solamente poder deciros que ha correspondido á vuestra confianza y cumplido dignamente su difícil misión.»

Están firmados ambos documentos por Solano, Jusuó, Arrieta Mascarua, Beláustegui y Villar.





CAPÍTULO XXII

REUENDO el 7 Regimiento el general, con asistencia de los Padres de Provincia Don Marcos Joaquín de Retuerto, Don Joaquín de Ugarte, Don Pedro Novia de Salcedo, Don Pedro Antonio de Ventades, Don José Ramón de Salcedo, Don José María de Jusué, Don Mariano de Eguía y Don Gil de Ugarte, expuso el Corregidor interino la conveniencia de reunir las Juntas generales para que se hagan cargo del estado del país, elijan nueva Diputación por haber terminado ya su bienio la actual, y nombrar comisionados que vayan á Madrid, con arreglo á la orden comunicada el primero del corriente al mismo Corregidor por el Ministro de la Gobernación, que es como sigue: — «Enterado el Gobierno de la comunicación de V. S., participándole el restablecimiento de la Diputación foral y otras disposiciones gubernativas, que pudieran suscitar graves conflictos en las actuales circunstancias, se ha servido disponer prevenga á V. E., en nombre de S. M. la Reina D.^a Isabel segunda, que no permita se altere por ningún concepto el orden de las cosas establecido en ese país, ni que se susciten cuestiones aventuradas que sólo servirían á complicar la si-

tuación del Gobierno en los momentos que más necesita de la cooperación franca y leal de todos los buenos españoles. El Gobierno se ocupará por los trámites regulares, y sin perder de vista la unidad constitucional, del arreglo de que trata la ley de 25 de Octubre de 1839, y obrará con la justicia y circunspección que se ha propuesto observar en todos sus actos. A esto efecto nombrará esa Diputación general tres comisionados que pasen á esta capital á ponerse de acuerdo con el Gobierno, para proponer los medios que conduzcan á terminar las cuestiones pendientes.» El Corregidor dió cuenta en seguida del oficio que había pasado la Diputación provincial de Guipúzcoa y de lo que se le contestó.

Acordó el Regimiento que se autorizase á la Diputación para convocar las Juntas generales, salvando su voto los Regidores Goicoechea y Arana, los cuales opinaron que debía verse primero el resultado de las conferencias que se iban á celebrar por los comisionados de las Provincias Vascongadas.

Habiéndose ausentado después los Padres de Provincia, se trató de una orden comunicada por el mismo Ministro en 30 de Julio, relativa á la elección de Diputados á Cortes y Senadores; y considerando qué por orden del Gobierno de 24 de Diciembre de 1840 se habían concedido al Regimiento general las facultades qué competen á las Diputaciones provinciales en otras Provincias en materias electorales, se acordó atenerse á dicha resolución, mucho más no habiendo tiempo hábil para consultar con el Gobierno dudas infundadas sobre el particular.

Las Juntas generales fueron convocadas el 7 por el Corregidor para el 15 del corriente en virtud de lo acordado por el Regimiento general. Se trataría en las Juntas, según la convocatoria: 1.º—De examinar la administración de la actual Diputación durante el corto periodo que ha corrido á

su cargo. 2.º—De averiguar el paradero de los caudales que desaparecieron al disolverse la última Diputación provincial y fugarse parte de sus individuos, y adoptar las medidas más eficaces para repararlos. 3.º—De las gestiones legales que convendrá practicar, tanto para obtener la conservación de las instituciones vizcaínas, como para salvar los intereses con ellas ligados en cumplimiento de la ley de 25 de Octubre de 1839; y del nombramiento de los tres comisionados en Córte indicados por el Gobierno de S. M. en real orden de primero del corriente. 4.º—De asegurar la decorosa subsistencia del clero de este Señorío y del culto de Dios. 5.º—De proceder á la elección de señores del nuevo Gobierno para el inmediato futuro bienio; y de todos los demás asuntos que convenga y se ofrezca proponer.

No considerándose la Diputación suficientemente enterada de la conducta política, en general, que han observado los empleados de su secretaría, acordó el 9 aplazar toda resolución sobre cambios ó remociones, destituyendo solamente á un celador de tabacos de Marquina, á uno de los porteros por su mal comportamiento en Octubre de 1841, y á otro por no ocupar plaza señalada en el reglamento de las oficinas.

En vista de una instancia del archivero Don Francisco María de Vildósola, repuesto recientemente, sobre el abandono en que se hallaba el archivo, se acordó el 10 nombrar un oficial para dicha dependencia, además del auxiliar que estaba ya nombrado.

Se nombró á Don Domingo Eulogio de la Torre y á Don José María de Lámbarri para que asistiesen en representación de Vizcaya á las conferencias que se iban á celebrar con los comisionados de Guipúzcoa y Alava.

Recordando la Diputación con dolor el desleal comportamiento observado por muchos de los individuos del cuerpo de miqueletes de este Señorío, en los momentos de amargu-

ra que precedieron y siguieron á la evacuación de esta Villa en Octubre de 1841, y cuando más acrisolada debía aparecer la subordinación de los que estaban destinados á hacer respetar y obedecer á la autoridad de la misma Diputación, contra la cual dirigieron amenazadoras las armas que habían empuñado con bien distinto objeto; é informada de que al reorganizarse este cuerpo han ingresado en él los veinte y cuatro que se expresan nominalmente, sin estar enteramente libres de la sospecha de haber tomado parte, más ó menos directamente, en aquel acto de indisciplina; acordó que se les recojan desde luego las armas y chapas que se les entregaron, despidiéndolos del cuerpo; mas si alguno de los comprendidos en esta resolución desea sincerarse, podrá admitirsele otra vez al servicio, acreditando suficientemente su inocencia.

Se reunieron en Bilbao el 11 los Diputados provinciales de Guipúzcoa, que antes se citaron, con los de Alava Don Antonio Bea Murguía y Don Pedro Varona, y los dos representantes que había nombrado la Diputación general de Vizcaya para conferenciar con ellos sobre cuanto considerasen oportuno acerca del arreglo pendiente de los Fueros de estas Provincias, teniendo á la vista la situación en que los recientes acontecimientos políticos habían dejado al país vascongado y á la Nación.

Se leyó, por la estrecha relación que tenía con este asunto, la real orden comunicada el primero del corriente al Corregidor del Señorío de Vizcaya, acerca del nombramiento de tres comisionados que fuesen á la Corte á tratar con el Gobierno de dicho arreglo; y considerando que convocada ya la Junta general de Vizcaya, hasta que su voluntad se declarase explícitamente, no podía ser interpretada sino por sus anteriores acuerdos, se juzgó prudente suspender toda resolución sobre el fondo del negocio, con objeto de que se

ventilara en nuevas conferencias, así que aquella voluntad fuese conocida; pero se convino en que la ley de 25 de Octubre de 1839 estaba en todo su vigor, y que el decreto de Vitoria de 29 de Octubre de 1841 fué ilegal y atentatorio á los derechos de que se hallaban en posesión las Provincias Vascongadas, depresivo del honor acrisolado de sus naturales, é hijo de la arbitrariedad y de la saña de un poder injusto y rencoroso; de lo cual se derivaba como consecuencia precisa la necesidad de que desapareciesen las innovaciones repugnantes y vejatorias que por él se establecieron, con menosprecio de la citada ley de 25 de Octubre, que el Gobierno tenía la estrecha obligación de respetar para que fuesen acatadas sus disposiciones. Se resolvió, por lo tanto, que por cada una de las tres Provincias se practicasen las gestiones más eficaces á fin de obtener del actual Gobierno, que se propone obrar con equidad y circunspección, el restablecimiento del sistema foral de las tres repetidas Provincias hermanas al ser y estado en que se hallaban antes del ominoso decreto expresado de 29 de Octubre de 1841.

Los Diputados de Guipúzcoa expusieron que el asunto que la Diputación de aquella Provincia deseaba ventilar en unión con los representantes de las otras dos Provincias está expresado en el oficio que dirigió á las mismas el 4 del corriente; que mediante que la Diputación del Señorío de Vizcaya no se considera por los motivos que alega suficientemente facultada para tratar del asunto á que tendían las miras de la Diputación provincial de Guipúzcoa, y aplaza por tanto para otra ocasión la discusión del indicado punto, se hallan también ellos igualmente precisados á suspender del mismo modo la resolución del nuevo punto que se ofrece á su atención, en el ínterin que no reciban de la corporación á que pertenecen las instrucciones oportunas so-

bre el particular, en vista de la presentación que hagan á la misma del acta del día de hoy; que, por ahora, tan sólo pueden limitarse á manifestar, conformemente á lo que tiene expresado aquella corporación por su circular de 4 del presente mes, que reputan sobremanera ilegal el modo violento, en que á pretexto de reorganizar la administración de las Provincias Vascongadas se hicieron en su sistema foral las más graves y trascendentales alteraciones, con notabilísimo perjuicio de los habitantes de las mismas Provincias; motivo por el cual se persuaden que los constituyentes todos de la Diputación provincial de Guipúzcoa abundan en la idea de remediar en cuanto sea posible y conveniente á sus administrados las consecuencias desastrosas del inconstitucional decreto de 29 de Octubre de 1841, haciendo cuanto puedan para recuperar y conservar la parte mayor posible de su antiguo sistema foral.

La clave para explicar estas reservas de los Diputados provinciales de Guipúzcoa, hay que buscarla en el siguiente párrafo de la mencionada carta del 4 de este mes, que dice así: «Verdad es, sin embargo, y no puede menos de reconocerlo así esta Diputación, que la situación creada violentamente por Octubre de dicho año de 1841 ha producido en los veinte y un meses que han dominado ciertos intereses dignos de ser mirados con consideración; motivo por el cual esta corporación ha rechazado y rechaza toda idea de una reacción, en cuya virtud se repusieran las cosas en el ser y estado que tenían cuando se verificó la pretendida reorganización». Claro es, por lo tanto, que se trataba de dejar en pie algo de lo que se estableció violentamente por el decreto dado en Vitoria por Espartero en 29 de Octubre de 1841; no siendo aventurado presumir por los antecedentes de esta materia, que en otras ocasiones quedan ya expuestos, que la Diputación provincial de Guipúzcoa se refería

principalmente á la traslación de las aduanas á las costas y fronteras de las Provincias Vascongadas dispuesta por aquel decreto.

Hallándose el 14 en Galdácano de camino para las Juntas que debieron celebrarse el día siguiente en Guernica el Diputado general que hacía de Corregidor, los Diputados en ejercicio Arguinzóniz é Izaguirre, el Síndico Inchaurraga, el Consultor Ariz y el Secretario Hormaeche, se recibió una orden del Gobierno comunicada el 10 al Corregidor, que era del tenor siguiente:

«El Gobierno provisional de la Nación ha sabido con disgusto las alteraciones hechas en el orden público y administrativo por la Junta que se instaló en esa Villa para secundar el alzamiento nacional. Nunca hubiera podido creer el Gobierno que cuando más necesario era para salvar la integridad del trono y la Constitución una completa uniformidad de miras, esa Junta, arrastrada de un celo poco meditado, se aventurase á llevar á cabo, aprovechándose de los conflictos en que se ha visto envuelto el país, reformas gravísimas, y que no pueden tener estabilidad mientras no sean producto de una discusión madura, reflexiva y debidamente autorizada. No contenta esa Junta con restablecer la Diputación foral de 1841 y el Corregimiento político, no ha tenido reparo en confiar á las religiosas la administración de los bienes que por las leyes vigentes pertenecen hoy al Estado, sin considerar que semejante medida envolvía un pensamiento reaccionario en contradicción con el objeto del alzamiento nacional.—Grave sería la responsabilidad del Gobierno si permitiera continuasen subsistentes semejantes reformas, hechas en los primeros momentos de efervescencia con el fin de favorecer los intereses especiales de esa Provincia, los cuales no pueden ponerse en consonancia con los generales de la Nación hasta tanto que no se haga el arreglo de

que trata la ley de 25 de Octubre de 1839. En consecuencia de todo, el Gobierno provisional se ha servido disponer, en nombre de S. M. la Reina Doña Isabel segunda, que vuelvan las cosas en esa Provincia al ser y estado que tenían antes de estos sucesos, y que no permita V. S. bajo su más estrecha responsabilidad que siga tomando disposiciones gubernativas esa Diputación general, y mucho menos que se lleve á efecto la reunión en Guernica de los apoderados de Vizcaya de que V. S. habla en su comunicación de 5 del corriente.»

En vista de esta orden, y después de oír el parecer del Consultor, se acordó suspender la reunión de las Juntas, sin perjuicio de que el Síndico diese su dictamen sobre la materia para entablar gestiones activas á fin de conseguir la reparación de esta injusticia, arrancada sin duda por sorpresa, y de otras que se habían cometido en perjuicio de los leales habitantes del Señorío.

Leyóse el 18 el dictamen del Síndico asesorado por el Consultor, en el cual se exponían las poderosas razones que movieron á la Junta de Gobierno, soberana en Vizcaya como en las demás Provincias del Reino, á restablecer la Diputación general, después de la huida de la Diputación provincial, que había dejado huérfano al país, siendo el restablecimiento medida reparadora de justicia; y se dispuso, con arreglo á este dictamen, elevar al Gobierno provisional de la Nación la exposición siguiente:

«La Diputación general de Vizcaya se persuade haber dado al Gobierno provisional de la Nación un convencimiento irresistible, por muy fuertes que sean las prevenções que contra su lealtad jamás desmentida está manifestando la extrema dureza de la comunicación del Ministerio de la Gobernación de la Península al Corregidor político con fecha 10 del que rige. A ciencia cierta de

haber de ser alguna vez reconvénida por no haber hecho todo lo que pudiera sin salir del círculo de la legalidad, prefirió apresurarse á desvanecer tan fatal impresión con el inmediato regreso desde la Anteiglesia de Galdácano, que fué el punto donde recibió la comunicación indicada.—Pero también se propuso llenar en seguida sus deberes para con el país de una manera que nunca se pudiera atribuir siniestramente á debilidad la prudencia, al paso que ésta la hubiese de recomendar al mismo Gobierno provisional, si recomendación necesitara, después de su solemne compromiso de gobernar con el más profundo respeto á la justicia. Consultados los venerandos Fueros, usos y costumbres en que idolatran los vizcaínos, no puede limitarse la Diputación general á sola una reverente exposición para reclamar su desagravio. Molestaría mucho la atención del Gobierno, y sin embargo no quedaría todavía satisfecha de haber dicho lo bastante.—Este ilustre solar reunido en Juntas generales en casos semejantes, ha superado siempre tal dificultad autorizando con toda amplitud comisionados especiales que de viva voz suplieran cerca del Gobierno todo lo que pudiera faltar al papel en la expresión de sus leales sentimientos y de los fundados motivos de su queja. Acomodándose la Diputación á tan respetable práctica, se lisonjea de que por lo menos el Gobierno provisional de la Nación apruebe que haya sido elegido el licenciado Don José Miguel de Arrieta Mascarua para representarla con tan amplia autorización como lo exige lo perentorio y delicado del encargo, y según que le es á él debido en la distinción con que por su propio mérito le mira el país.—No se trata de sólo el interés de las Provincias Vascongadas, cual parece suponer el Gobierno provisional de la Nación; mas aunque así fuese, tampoco pudiera ser desatendida la notoria justicia de su propia causa. Confirmados los Fueros por la

ley de 25 de Octubre de 1839, sin perjuicio de la unidad constitucional de la Monarquía, obligada estaba la España entera á sostenerlos, aun cuando se pudiese suponer para gracia y concesión gratuita lo que la Europa toda sabe que fué consecuencia y cumplimiento del célebre convenio de los campos de Vergara. Jamás el sin perjuicio de la unidad constitucional autorizará ni hará cohonestable que se contraríe lo esencial del pacto; porque choca y pugna con el buen sentido que un tal pretexto sirva para que la confirmación de los Fueros se haya de entender por el contrario su total abolición.—Lo que á cualquiera ocurriría, caso que la misma ley no lo explicara con toda claridad en el artículo segundo, es que en toda exención ó franquicia, cuyo uso ofendiera en algún modo la unidad constitucional de la Monarquía, se habría de conciliar el medio ó modo de que salvado este inconveniente continuaran disfrutando los vascongados el mismo beneficio ú otro que se le pudiera sustituir. Fuera todo lo demás admitir un engaño que haría poco honor á la Nación española, y de que muy justamente se resentirían las Cortes que decretaron la dicha ley.—Ella no deja campo alguno para tan injuriosa sospecha; y en apoyo de la buena fe que en todo había presidido, apareció prontamente el real decreto de 16 de Noviembre, al cual se ajustaron las Provincias Vascongadas tan estricta como respetuosamente. Vizcaya, por lo que á sí toca, está segura de no sólo haberse mantenido dentro de los límites que se le fijaron, sino de haber dado además pruebas repetidas de sensatez y cordura cuando el Gobierno parecía olvidarse de la mencionada ley en las novedades que por momentos intentaba.—Llegó, por fin, el del Duque de la Victoria á todos los extremos á que pudiera avanzar una mal disimulada sed de venganza, que está respirando su decreto de 29 de Octubre de 1841 en la Ciudad de Vitoria; y como las Cortes le

prestaron su apoyo, aprobando su conducta, no quedó á este afligido país ni aun el triste recurso de quejarse. Hoy que el Gobierno provisional de la Nación, que se ha propuesto por norte el más profundo respeto á la Constitución y á la justicia, propende sin embargo á restablecer por de pronto aquel mismo mísero estado en que gemía Vizcaya al tiempo del alzamiento nacional, y le imputa también como crimen haberse acomodado á las bien meditadas y juiciosas disposiciones de la Junta, cuando legalmente hubiera podido pretender aquella misma posición en que le colocaran la ley y real decreto de 25 de Octubre y 16 de Noviembre de 1839; se considera en muy distinto caso; porque si bien continuará distinguiéndose por la lealtad y obediencia, obediencia y sumisión que caracterizan á sus habitantes, tampoco omitirá nada en la defensa legal de su santa causa, concluyendo, si tuviese la desgracia de que todo sea en vano, con la honrosa protesta que siquiera perpetúe su memoria.— Obrando en justicia el Gobierno provisional de la Nación, como se lo promete la Diputación exponente, no podrá menos de penetrarse de que será infringir abiertamente la ley si la priva de cualquiera de las atribuciones que están marcadas en el real decreto de 16 de Noviembre, y señaladamente de la de convocar la Junta general del país, ya en la actualidad decretada, teniendo por uno de los objetos principales la elección de los tres comisionados, que reconoce el propio Gobierno de la Nación ser indispensable que se presenten en la Corte para que pueda tener puntal y cumplido efecto la disposición del artículo segundo de la referida ley de 25 de Octubre. Con más extensión procurará demostrarlo el digno apoderado, por cuya favorable acogida ruega y suplica la Diputación.»

Se autorizó ampliamente á Arrieta Mascarua, en vista de las recomendables circunstancias de todo género que en él

concurrieran, para gestionar en la Corte así la reparación de los agravios cometidos por el Gobierno derrocado como el que no se cometan los que amenazan al país ahora.

Se reunió el 22 el Regimiento general, con asistencia de los Padres de Provincia Don Martín León de Jáuregui, Don José María de Gortázar, Don José María de Jusué y Don Gil de Ugarte. El Corregidor interino Don Domingo Eulogio de la Torre expuso lo ocurrido con motivo de la orden que se recibió en Galdácano, y que aunque la Diputación procuró asesorarse con letrados competentes, antes de tomar la resolución de suspender las Juntas convocadas, sólo pudo por causas independientes de su voluntad oír el dictamen de Don Casimiro de Ariz; que para hacer las reclamaciones que correspondían, envió á Madrid con una representación á Don José Miguel de Arrieta Mascarua, habiéndose recomendado el asunto á los Generales Don Manuel de la Concha y Don José Santos de la Hera. Leyóse después el acta de las conferencias celebradas en Bilbao con los representantes de las Diputaciones provinciales de las Provincias hermanas el 11 del corriente, y se explicó la oposición que mostraron los que concurrieron en nombre de Guipúzcoa á entablar de consuno con Alava y Vizcaya las reclamaciones más activas para obtener la reposición de las instituciones vascongadas al ser y estado que tenían antes del funesto decreto de Vitoria de 29 de Octubre de 1841, á que se enderezaron en vano los esfuerzos reiterados y constantes de la Diputación de este Señorío, porque de la situación en que se hallaban entre sí las tres Provincias Vascongadas temía que se derivasen males incalculables; pero que sólo se obtuvo la aquiescencia de los delegados de la Diputación provincial de Alava.

El Regimiento discutió largamente el asunto, lamentando que no hubiesen asistido algunos de los señores que fue-

ron convocados; aprobó en términos entusiastas el comportamiento de la Diputación, y le recomendó que redoblara sus conatos, dentro del círculo de las leyes, para que se colmaran los deseos de los vizcaínos, afianzándose sus instituciones.

Habiendo preguntado el Presidente lo que se haría si el Jefe político nombrado que iba á llegar en breve se negaba á prestar el juramento de guardar los Fueros, y á ceñirse á las facultades que le correspondían por el real decreto de 16 de Noviembre de 1839; se resolvió que no se le diese en tal caso posesión de su destino, pero que si era inútil esta negativa se consignase una solemne protesta para que en tiempo hábil se pudiesen reivindicar los derechos hollados del país.

No pudiendo la Diputación reunir las Juntas generales para darles cuenta de todos sus actos, rogó que los examinara el Regimiento, el cual, declarándose incompetente para este examen, aplaudió la delicadeza de la Diputación, y aseguró que le merecía confianza ilimitada.

Salieron los Padres de Provincia, y se constituyó de nuevo el Regimiento para proceder á la división del Señorío en distritos electorales, con arreglo á la ley de 20 de Julio de 1837, y á la real orden de 24 de Diciembre de 1840, relativa á las elecciones en las Provincias Vascongadas.

No habiendo podido tratarse en Juntas generales del desfalco que resultaba en las arcas del Señorío, á consecuencia de la fuga de la Diputación provincial, acordó la Diputación el 24 que el Síndico hiciese las reclamaciones necesarias para conseguir del tesorero de aquella Diputación y de sus fiadores el reintegro de la cantidad que ha desaparecido, sin perjuicio de la causa que se sigue en el juzgado.

Se presentó el 27 en la Diputación el Jefe político nuevamente nombrado Don Juan de la Tejera, manifestando que

deseaba entenderse armoniosamente con ella para encargarse de su destino. Entablóse con este motivo una larga y amistosa conferencia, y le hicieron conocer los Diputados con mucha cortesía, que en cumplimiento fiel de sus deberes, y correspondiendo con lealtad á la confianza con que habían sido honrados por el país que administraban, no les era dable acceder á los deseos de Tejera sino convenía en aceptar la denominacion de Corregidor político, y no prestaba el juramento de costumbre de guardar y hacer guardar los Fueros, buenos usos y costumbres, franquezas y libertades de Vizcaya, conforme lo habían hecho sus cuatro antecesores Don Gregorio de Lezama Leguizamón, Don Pedro Gómez de la Serna, Don Salvador de Reina Rodríguez y Don Miguel Rodríguez Ferrer. Tejera, con palabras muy urbanas y lisonjeras, y prometiendo desvelarse en bien del país como oriundo de él, y encargado por el poder supremo del Estado de contribuir á su prosperidad y ventura, después de proponer algunos medios conciliadores, que no podía aceptar la Diputación de ningún modo, no obstante su anhelo de evitar conflictos desagradables, á no desviarse de la senda estrecha y escabrosa, pero legal y honrada, que se había propuesto seguir como norma de su conducta; fatigado de una discusión estéril y prolija, porque tampoco podía conformarse por su parte, cumpliendo estrictamente con las órdenes que había recibido del Gobierno, en lo que de él esperaba la Diputación, entregó al Corregidor político interino el oficio de su nombramiento, que era lacónico y se limitaba á decir que había sido nombrado Jefe político de Vizcaya.

La Diputación deseó entonces oír el parecer del Consultor Ariz y de los letrados Don Manuel de Careaga y Don Santiago de Bernaola, los cuales, después de haberse hecho cargo del acuerdo del Regimiento general del 22, de la posición é investidura de los miembros de la Diputación, y de

todos los antecedentes que con el caso actual tenían analogía, opinaron que no era posible á la Diputación, sin rebajar su alta dignidad, y sin faltar á sus más sagradas obligaciones, consentir por ningún título en dar posesión á Tejera con el nombre de Jefe político, mientras no se allanase á prestar el juramento de costumbre, prestado por sus antecesores siempre que ha existido la Diputación general, y á adoptar la denominación de Corregidor. La Diputación, en su consecuencia, acordó pasar á informe del Síndico el oficio en que Tejera comunicaba su nombramiento, y continuar en la marcha legal, pero firme y resuelta, que había adoptado con arreglo á las inspiraciones de su conciencia, y á los consejos del Regimiento general y de los Padres de Provincia y asesores mencionados.

Se dió cuenta el 29 del dictamen presentado por el Síndico, con acuerdo del Consultor, que era del tenor siguiente:

«El Síndico se ha enterado del precedente oficio del señor Corregidor político de Vizcaya, trasmitiendo la real orden de 7 del actual del Ministerio de la Gobernación de la Península, que así bien le ha sido trasladada por el señor Don Juan de la Tejera, nombrado por el Gobierno de S. M., Jefe político de Vizcaya, poniéndolo en conocimiento de V. S. I., para su inteligencia y efectos correspondientes; y dice:—Que á consecuencia del memorable y grandioso acto del abrazo de Vergara, se decretó por las Cortes y sancionó por la Corona la ley de 25 de Octubre de 1839; por ella se confirmaron los Fueros de este ilustre solar, sin perjuicio de la unidad constitucional de la Monarquía, estableciéndose en su artículo segundo que tan pronto como la oportunidad lo permitiese, y oyendo antes á estas Provincias, propusiese el Gobierno á las Cortes la modificación indispensable que en los mencionados Fueros reclame el interés de las mismas, conciliado con el

general de la Nación y de la Monarquía española, resolviéndose provisionalmente en la forma y sentido expresados las dudas y dificultades que pudieran ofrecerse, dando de ello cuenta á las Córtes. Conforme á esta disposición legal se decretó por el Gobierno en 16 de Noviembre inmediato la reunión de Juntas generales, nombramiento de Diputación general y Ayuntamientos, y que el Jefe político que existía en aquella época quedase como Corregidor político, con las atribuciones no judiciales que por el Fuero, leyes y costumbres competían al que lo era en dicha Provincia. Nombrado por real orden de 12 de Noviembre del siguiente año de 1840 Corregidor político de este país el señor Don Pedro Gómez de la Serna, fué reconocido y se le dió posesión, previo el informe del Síndico general y juramento prestado conforme á él, y lo mismo se verificó con sus sucesores los señores Don Salvador de Reina Rodríguez y Don Miguel Rodríguez Ferrer. Este era el verdadero estado en que se encontraban el régimen y administración de este ilustre solar hasta los desagradables acontecimientos del mes de Octubre de 1841; en el que estando declarado en un estado excepcional, dominado por la fuerza y el terror, y abusando de su poder el ex-Regente del Reino, con menosprecio y hollando las disposiciones de la ya referida ley de 25 de Octubre por su decreto de 29 de igual mes y año de 1841, varió el régimen gubernativo y administrativo de este país, introduciendo y planteando innovaciones y reformas contrarias á su legislación particular, buenos usos y costumbres, que las autoridades de aquella época no pudieron contrariar, ó no lo tuvieron por oportuno conveniente. Los demás decretos y órdenes emanados á consecuencia del referido decreto del 29, bajo la influencia y poder del mismo ex-Regente, confirmaron en parte las innovaciones y reformas que estaban ya de hecho adoptadas y puestas en

práctica. Derrocado el Gobierno del ex-Regente por el pronunciamiento general de la Nación, efecto necesario de su marcha arbitraria é injusta, debían volver en este país las cosas al ser y estado que tenían antes de los acontecimientos de Octubre del año 1841; así lo creyó y juzgó en parte la Junta de gobierno de Vizcaya, restableciendo la Diputación general, mas obrando en otros puntos con la prudencia y circunspección que exigían su crítica posición y la en que se hallaban la Nación y su Gobierno provisional. A luego de instalada la Diputación general, halló ésta de necesidad, conforme á los buenos usos y costumbres, la convocación á Junta general del país so el árbol de Guernica para la renovación de sus individuos, rendir la cuenta de su administración, y más principalmente para el nombramiento de los tres comisionados que pedía el mismo Gobierno provisional, y expidió con efecto la convocatoria para el día 15 del actual; pero recibida, estando en camino para aquella Villa en la Anteiglesia de Galdácano, la inesperada real orden de 10 del corriente trasladada por el señor Corregidor político de Vizcaya, V. S. I. tuvo por conveniente suspender su reunión, previa audiencia del Síndico general y dictamen del Consultor, obrando así con la prudencia y lealtad que le distinguen. De este modo de conducirse y acatar la referida orden del 10, arrancada sin duda al Gobierno provisional por sorpresa, amañós ó falsos informes, era de suponer se tuviesen con este país las consideraciones de justicia á que es acreedor, y que se le respetasen sus derechos adquiridos, en cuya posesión se halla, y que están confirmados por la ley. Así lo creía seguramente V. S. I., mas la llegada del señor Don Juan de la Tejera, nombrado Jefe político de Vizcaya, ha desvanecido todas sus fundadas y justas esperanzas, y puéstole de manifiesto que el Gobierno provisional trata de conservar las inno-

ciones de este país, conforme estaban á fines de Junio último; por lo que ha llegado ya el caso de mirar por el bien y felicidad de este ilustre solar y conservación de sus Fueros, buenos usos y costumbres. — Las atribuciones de los Corregidores políticos eran limitadísimas, y se hallaban coartadas por el juramento que prestaban á la toma de posesión; mas las de los Jefes políticos son extensas y amplísimas, según la legislación general del Reino, las que no pueden ejercer en este país, sin que sus Fueros, buenos usos y costumbres queden reducidos á una sombra ó á la nulidad. En la última sesión del Regimiento general y señores Padres de Provincia, se trazó á V. S. I. la línea de conducta que debía observar y seguir en la cuestión presente, y de la que entiende el Síndico no debe apartarse ni desviarse para corresponder dignamente á la confianza con que el país le ha honrado. — Por las consideraciones que lleva expuestas, opina el Síndico que V. S. I. puede reconocer y dar posesión al señor Don Juan de la Tejera, siempre que se limite á ejercer las atribuciones de Corregidor político, y con el carácter y concepto de tal, conforme al informe emitido por el finado Consultor Don Casimiro de Lóizaga en 18 de Noviembre de 1840, prestando previamente el juramento de guardar, cumplir y observar inviolablemente los Fueros, franquicias, libertades, exenciones, prerrogativas, buenos usos y costumbres de Vizcaya, mientras no se haga el arreglo definitivo de los Fueros en armonía con las disposiciones de la ley ya mencionada de 25 de Octubre de 1839; y de no conformarse y allanarse á ello de este modo, suspender su reconocimiento interín el Gobierno provisional no resuelva otra cosa, en vista de las reclamaciones que al efecto se le han elevado y elevaren, y sean inútiles ó infructuosas las gestiones de su comisionado especial en la Corte el señor Don José Miguel de Arrieta Mascarua, resistiéndose dentro del circulo

lo legal al reconocimiento de Jefe político de Vizcaya; y no siendo suficiente este medio, protestar con decoro, dignidad, energía y justicia la infracción de los Fueros, buenos usos y costumbres de este país, para que en ningún tiempo pueda serle perjudicial su aquiescencia, ni la violencia ejercida con él y sus autoridades legítimas para llevarla á efecto.»

En oficio de este mismo día trasladó la Diputación á Tejera el informe precedente del Síndico, añadiendo lo que sigue:

«La Diputación, en cumplimiento religioso y fiel de sus deberes, no ha podido menos, habiendo oído también la opinión de personas respetables, que han confirmado lo expuesto por el Síndico, de conformarse, como se ha conformado, con este dictamen. Y al ponerlo en conocimiento de V. S., debe manifestarle con la mayor sinceridad, según lo ha hecho en las conferencias verbales celebradas con V. S., que tendría singular satisfacción en que V. S. se sirviese acceder á sus deseos, tomando posesión de la presidencia en los términos mismos en que la tomaron los señores Lezama Leguizamón, la Serna, Reina Rodríguez y Rodríguez Ferrer, pues ha formado ventajosa idea de la circunspección de V. S., y el conflicto en que muy á su pesar se encuentra, pero del cual, si ha de corresponder á la confianza con que este país la distinguió, no puede salir de otra suerte con honra, le es, y V. S. lo reconocerá sin duda, sobremanera desagradable».

La Diputación elevó al mismo tiempo al Ministro de la Gobernación la exposición siguiente, por conducto de Don José Miguel de Arrieta Mascarua.

«El Jefe político Don Juan de la Tejera, nombrado por V. E. con fecha 7 del mes que rige para ejercer el cargo de tal en este país, llegó á él en 26 del propio mes, y se presentó en la sala de sesiones de su Diputación general con el

designio de convenir armoniosamente en la forma en que había de posesionarse de su destino. La Diputación le manifestó con franqueza cuáles eran los deberes que su magistratura popular le imponía; le hizo ver por los antecedentes que obraban en sus libros de actas de qué manera se había procedido siempre que ha existido aquella corporación con el carácter que ahora tiene; y no le ocultó sus vivísimos deseos de colocar en el lugar preeminente de su presidencia al representante del Gobierno provisional de S. M. la Reina Doña Isabel segunda, como no se opusiese á seguir el ejemplo de sus cuatro predecesores, que desde la publicación de la ley de 25 de Octubre del año de 1839 había tenido. El señor Tejera, con mucha atención y cortesanía, dijo que de ningún modo podía prescindir de ejecutar fielmente las órdenes é instrucciones que había recibido del Gobierno, y que con arreglo á ellas y á los rígidos principios que como empleado suyo se había propuesto por norte de su conducta, ni podía consentir en que se le diese otra denominación que la que aquél le había dado, ni en someterse al juramento que la Diputación juzgaba preciso. Aquí está fijada, Excmo. señor, en términos claros y sencillos, la cuestión insoluble que trae su origen de la orden de V. E. del 7, y del concepto harto diferente y contrapuesto, por desgracia, en que se interpreta la ley referida de 25 de Octubre, por los naturales de este suelo de una parte y el poder central del Reino de otra. Así es que ni las sinceras y grandes simpatías que hacia las personas de los que por aclamación de los pueblos lo ejercen en la actualidad siente la Diputación que suscribe, ni su vehemente anhelo de ayudarle con su débil apoyo á triunfar de los obstáculos que encuentra en su marcha generosa para con todas las Provincias de la Monarquía menos para la desgraciada Vizcaya, han sido bastantes á inspirarla una salida decorosa del conflicto en que se la ha puesto sin ne-

cesidad ni objeto útil á su entender. Encerrados la Diputación y el Jefe político cada uno en un círculo inflexible, ni á la primera le era permitido, sin faltar á compromisos inviolables para los que se precian como los individuos que la componen de pundonorosos caballeros, romperla, ni tal vez el señor Tejera podía aceptar los medios que se le indicaron, sin saltar por el que la mano de V. E. le trazó. La discusión, pues, más luminosa y detenida, la más exquisita dialéctica usada en ella, se perdieron esterilmente. El señor Tejera le dejó al Diputado de turno, que estaba desempeñando el cargo de Corregidor político, una comunicación trasladándole su nombramiento para reemplazarlo, y se retiró á esperar la resolución definitiva de la Diputación. Ésta, siguiendo la práctica constantemente observada en ocasiones semejantes, y ardientemente deseosa, no sólo del acierto en asunto tan delicado y trascendental, sino de acatar y cumplir al punto, si le era posible, lo dispuesto por V. E., desconfiando de sus propias luces pidió consejo á su Consultor y á los letrados más experimentados y de más nota en el país, como ya de antemano se había tomado de su Regimiento general y Padres de Provincia. Todos contestes opinan que la Diputación abandonaría cobardemente y sin legal defensa los legítimos derechos de los vizcaínos, se suicidaría y sería exocrada su memoria desde el momento en que consintiese en aceptar un Jefe político con el nombre y atribuciones de tal, que no prestase el juramento que prestaron los señores Lezama, la Serna, Reina y Rodríguez Ferrer.—Triste y desagradable por demás es el apuro en que la Diputación se ve. Había creído, como creyeron sus administrados, que el pronunciamiento que acaba de derribar á un tirano justamente detestado, elevando á V. E. y á sus dignos compañeros al supremo Gobierno de la Nación, tenía principalmente dos objetos. Primero: remediar las con-

secuencias de las demasías consumadas por aquel tirano y sus satélites, reparando en cuanto eran reparables sus injusticias. Segundo: inaugurar una época de olvido, de concordia, de fraternidad entre todos los españoles. Por eso se aprestaron á la pelea los belicosos hijos de este suelo montañoso; y si por desgracia se hubiese prolongado la amarga crisis en que la Patria se encontró envuelta, no habría sido ni inútil ni menospreciada su cooperación. El Gobierno (no le hará nunca el agravio esta Diputación de suponerle prevenido en contra de ella), oyendo consejos insidiosos quizá, empezó á mirar con recelo las disposiciones de la Junta suprema de Vizcaya, porque ésta, producto del voto de sus pueblos y expresión genuina de su espíritu, reinstaló la Diputación general, y le manifestó con el acento de la convicción que la ley de 25 de Octubre estaba todavía en su vigor, á pesar del inícuo decreto de Vitoria de Octubre de 1841, y de las disposiciones que fueron emanación suya. ¿Y qué podía hacer de más prudente y acertado aquella Junta, ni que mejor calmara la pública ansiedad, cuando la Diputación provincial, que se resistió con impotente rabia al pronunciamiento, se fugó al juzgarlo inevitable con los caudales de la Provincia, y buscó huyendo de la general indignación un asilo en tierra extranjera? Sin embargo, procurando la Junta, por un exceso de delicadeza, evitar la nota de reaccionaria, y sobre todo ansiosa de remover embarazos al Gobierno naciente, en vez de creárselos, dejó en pie muchas de las novedades repugnantes que en la administración de este país se habían introducido con violencia, y resignó su autoridad así que aquel Gobierno, al cual quería robustecer sin reserva, se estableció en Madrid. La Diputación siguió las huellas de la Junta ó hizo más; mostrando una deferencia y sumisión sin ejemplo tal vez en los anales de Vizcaya, suspendió á virtud de una simple orden de V. E. la reunión de la Junta general

convocada para el 15 del corriente. Esta conducta leal y respetuosa era compatible con el cumplimiento estricto de sus deberes; y aunque se defraudaban las esperanzas que los nobles infanzones de este maltratado solar habían concebido de congregarse bajo el árbol de Guernica, símbolo de la libertad más antigua y venerable del mundo, á tratar de sus negocios domésticos y arreglarlos armoniosamente, sin infringir ninguna ley, se persuadía la Diputación que la nobleza misma de su proceder la haría á los ojos de V. E. y de sus apreciables colegas acreedora á ser oída con benevolencia. Pero observa con dolor que hasta ahora no ha sucedido así, ni tiene el menor motivo para reconocer que se trate al Señorío de Vizcaya con consideración y equidad, cuando nada se solicita por él ni para él, que no le hubiese sido confirmado por una ley solemne, debatida con calor en los dos cuerpos colegisladores, entendida y aplicada por el espacio de más de dos años por el Gobierno, á ciencia y con consentimiento de los mismos, de un modo natural, y conculcada después, á pretexto de un acontecimiento que se quiso explotar por el encono del militar sin fe, sin palabra y sin lealtad, que ha pretendido esclavizar á una Nación generosa, y usurpar el trono á una Reina huérfana, no satisfecha su imbecil ambición con haber lanzado de él á la madre de esta augusta niña.—En efecto, Excmo. señor, la Diputación sólo pretende que las cosas de este país vuelvan hasta que el arreglo de las cuestiones pendientes se verifique al ser y estado que tenían en Octubre de 1841. Así solamente podrá decirse que ha sido tratado con justicia, y que no han sido vanas y fascinadoras las promesas que se le hicieron á la faz del cielo y de la tierra por el General que mandaba en Vergara las tropas nacionales, por el Gobierno, por el Congreso y por el Senado, ya cuando unánimemente dijeron que las Provincias Vascongadas habían cumplido fielmente lo conveni-

do en aquellos campos memorables, ya en otras ocasiones solemnes, y sobre todo cuando se hizo la tantas veces repetida ley confirmatoria de los derechos de Vizcaya. Así solamente podrá completarse de una manera digna de la Nación, las riendas de cuya gobernación están á V. E. encomendadas, el acto que finalizó la guerra civil, sin que nunca pueda ésta reproducirse. De otra suerte, Excmo. señor, se resignarán sin duda los vizcaínos, y sufrirán las consecuencias de las disposiciones que apoyadas por la fuerza se adopten, aunque les parezcan injustas, pero considerarán vivos sus derechos, porque los conservarán grabados en lo más hondo de sus corazones, y se aprovecharán de las vicisitudes que para reivindicarlos puedan serles favorables. La Diputación cree que hace un servicio señalado al Gobierno hablándole con esta ingenuidad, y excitándole á volver á la senda que por desdicha abandonó su antecesor. Y los miembros de ella que abajo firman, protestan por su parte con la mayor sinceridad que no ansían más que volver á la vida privada, de que salieron para experimentar notorios trabajos y amarguras; pero quieren dejar con honor sus puestos, y mientras los ocupen, resueltos á encerrarse en las inocentes y pacíficas vías de la ley, para cumplir sus poco gratas y espinosas obligaciones, no faltarán á su conciencia, ni consentirán voluntariamente en ninguna medida que se oponga á lo que juraron observar inviolablemente, sin elevar sus quejas al Gobierno y á las Cortes de la Nación, y sin consignar sus sentimientos con solemnidad, y sus deseos de alejar las calamidades que preven sin culpa suya.—No quiere la Diputación molestar más la atención de V. E., extendiéndose en consideraciones elevadas de política, de utilidad y conveniencia, ni la angustia del tiempo se lo permitirían. Su comisionado especial en esa Corte se las expondrá verbalmente al presentar á V. E. este escrito;

y concluye rogándole se digne escucharle benévolamente, y disponer que el señor Tejera imite la conducta de sus cuatro citados predecesores, tomando la denominación de Corregidor político, y prestando igual juramento ante la Diputación general, y sobre todo que contribuya además V. E. con su poderoso influjo en el Consejo á que se repongan las cosas de este país al ser y estado que tenían en Octubre de 1841.»

Tejera contestó el 30 á la Diputación en estos términos:

«He recibido la atenta comunicación de V. S. I. de fecha de ayer, contestando á la que dirigí al señor Presidente de esa corporación en 27 del actual, participándole para su conocimiento y el de V. S. I. haber sido nombrado Jefe político de esta Provincia en 7 del presente mes por el Gobierno de la Nación á nombre de S. M. la Reina Doña Isabel segunda, y mi llegada á esta capital para los efectos convenientes á la toma de posesión de este destino.—Esa corporación enterada de todo, y después de haber oído al Síndico procurador general del Señorío, Consultor y otros letrados respetables, y hecho cargo de varios antecedentes, se sirve manifestarme que le será satisfactorio que accediendo á sus deseos tomase posesión de su presidencia, previas las formalidades con que lo hicieron los Corregidores políticos la Serna, Reina y otros que cita, de lo que no puede V. S. I. prescindir sin faltar á los deberes que con el país ha contraído al distinguirlo con su confianza. Siento profundamente el convencimiento de que esa Diputación se halla poseída en este asunto, porque á mi ver no puedo menos de manifestar sinceramente á V. S. I. el alto concepto que tengo formado de los dignos individuos de esa corporación; pero los respetables deberes que contraí por mi parte con el Gobierno de la Nación al aceptar el destino con que fui honrado, me impiden admitir la presidencia de esa Diputación como

Corregidor, y en cumplimiento de mi deber he resuelto constituirme desde hoy Jefe político ó Intendente de esta Provincia. Al participar á V. S. I. esta resolución, conforme á lo mandado por el Gobierno de la Nación, en nombre de S. M., creo corresponder dignamente al favorable concepto y distinciones que he merecido de esa Diputación general, asegurándole que hasta que el Gobierno, á quien he dado cuenta de todo, resuelva lo que tenga conveniente, no haré innovación alguna en mi administración.»

Pasado el oficio de Tejera de orden de la Diputación al Síndico, informó éste el primero de Septiembre, diciendo que se debe contestarle, «reproduciendo la comunicación que con fecha de 29 último se le dirigió sobre el particular, teniendo el mayor pesar y sentimiento en no poder acceder á sus deseos en reconocerle como Jefe político ó Intendente, puesto que ambos destinos son incompatibles con la conservación de los Fueros, buenos usos y costumbres de este país y de la solemne convención celebrada con el Gobierno supremo de la Nación en el año de 1727, que V. S. I. debe observar, guardar y cumplir como autoridad legítima al efecto.»

La Diputación se conformó con el dictámen del Síndico, «y para que los leales habitantes de este Señorío tengan exacto conocimiento de tan grave asunto,» mandó que se imprimiesen las dos comunicaciones de Tejera con los decretos, informes del Síndico y contestaciones á que han dado ocasión, y se circularasen por vereda en la forma acostumbrada á los pueblos del Señorío.

Se trasladó el mismo día á Tejera el dictamen del Síndico, poniendo á continuación lo siguiente:

«La Diputación que ha convenido en todas sus partes con el dictamen preinserto, debe añadir que hubiera deseado que V. S., antes de apresurarse á constituirse por sí

propio, hubiese tenido á bien aguardar las nuevas órdenes que el Gobierno provisional de la Nación era de esperar que dictase de un momento á otro, á virtud de las reclamaciones entabladas, y de las gestiones que por su comisionado especial en Madrid se están practicando, según de palabra se lo expuso á V. S., manifestándole además su correspondencia oficial y particular, con la franqueza ilimitada que le inspiró la ventajosa opinión que V. S. le había merecido. La razón primera en que se fundaba aquel deseo, y de que nace el pesar que experimenta ahora la Diputación, es, entre otras cosas de sumo peso y gravedad que al claro talento de V. S. no se ocultarán, la siguiente, á saber: que mientras la autoridad que representa al Gobierno en este país, no sea reconocida formal y solemnemente con arreglo á sus Fueros y costumbres, no debe lisonjearse de obtener, por muy altos y recomendables que sean los títulos y prendas que la adornen, la consideración, el respeto y obediencia, que en el caso de haber cumplido previamente con aquel requisito esencial en esta más que en otra parte cualquiera de la Monarquía se le tributan, y se da lugar á conflictos frecuentes y desagradables entre el representante del poder supremo de la Nación y las corporaciones que debían estarle subordinadas; lo cual siempre redundaba en perjuicio de su dignidad y del servicio público.»

Reunido el 6 el Regimiento general, con asistencia de los Padres de Provincia Don José María de Jusué y Don Gil de Ugarte,¹ dió cuenta la Diputación de todo lo que había obrado con respecto al nombramiento del Jefe político; y se aprobó su conducta, dándosele las gracias. Leyóse en seguida una real orden comunicada por el Ministro

¹ No fué en verdad numerosa la asistencia de Padres de Provincia á un Regimiento en que se iba á tratar de un asunto tan importante.

de la Gobernación con fecha 31 de Agosto al Jefe político y trasladada por éste el 5 del corriente, que es como sigue:

«El Gobierno provisional se ha enterado de cuanto contienen las comunicaciones de V. S. de 27 y 29 del corriente, de la exposición de esa Junta que se titula Diputación general, y de las razones que en su apoyo ha hecho presente el comisionado nombrado por la misma para transmitir al Gobierno sus deseos; y como de todo ello se desprende el empeño que tiene esa Junta en que se satisfagan exigencias, que por más atendibles que parezcan contrarían la unidad constitucional, y las leyes que rigen acerca de la administración económica y gubernativa de esa Provincia, el Gobierno no puede acceder á las pretensiones de los individuos que componen hoy la Diputación de Vizcaya porque incurriría en una gravísima responsabilidad. El Gobierno no tiene facultades para derogar lo dispuesto en la ley de 21 de Abril de 1842, por la cual se restablecieron en esa Provincia los Gobiernos políticos y Diputaciones provinciales; y el reconocer como legítima la existencia de una Diputación foral y de un Corregimiento, sería una infracción abierta, no sólo de la citada ley, sino del artículo sesenta y nueve de la Constitución del Estado. ¹ En este

¹ Poca fuerza tiene este escrúpulo de legalidad en boca de los que habían derrocado á Espartero, que era con arreglo á la ley Regente del Reino. Tampoco es muy atendible el argumento tomado del artículo sesenta y nueve de la Constitución de 1837, por el que se dispone que haya en cada Provincia una Diputación provincial, porque ese artículo regía también en 1839 cuando se hizo la ley en virtud de la cual se restablecieron en las Provincias Vascongadas las Diputaciones forales que habían sido suprimidas por la ley de Septiembre de 1837, y por último, el decreto de Espartero de 29 de Octubre de 1841, por el que se volvió á suprimirlas, era una medida arbitraria, y opuesta á la ley de 25 de Octubre de 1839, que no había sido derogada, ni podía serlo gubernativamente, tal como se había ejecutado hasta Octubre de 1841, con arreglo al decreto de 16 de

concepto, el Gobierno previene á V. S., que entrando en todo el lleno de la autoridad que como á Jefe político le corresponde, cumpla y haga cumplir en esa Provincia las leyes y disposiciones superiores, no permitiendo que esa Junta lleve otro título ni ejerza otras funciones que las marcadas en la real orden de 14 de Julio de 1812 respecto á las Diputaciones provinciales de las Provincias Vascongadas, cuyas veces podrá seguir haciendo siempre que sus individuos se avengan á prestar este servicio con el carácter de Diputados provinciales, quedando V. S. autorizado para restablecer en caso contrario la Diputación que existía en esa capital antes de los últimos sucesos. Al propio tiempo es la voluntad del Gobierno, que V. S., de acuerdo con esa Junta, y en su defecto con la Diputación provincial, proponga á la mayor brevedad los medios con que deberá procederse al nombramiento de los tres comisionados, mandado en la orden de primero del actual, para tratar del arreglo de que habla la ley de 25 de Octubre de 1839.»

El Jefe político trasladaba esta orden á la Diputación «para su conocimiento y cumplimiento en cuanto le corresponde», y á fin de que lleve á efecto en un todo la resolución del Gobierno, esperaba que la Diputación le contestase «si acepta la honrosa proposición de seguir administrando el país como Diputación provincial, sin pérdida de tiempo.»

Se leyó también el informe del Síndico sobre la orden

Noviembre de 1839, mientras no se llevase á cabo la modificación prevenida por el artículo segundo de la mencionada ley de 25 de Octubre. El puritanismo, como dijo muy bien el Reglamento general, se limitaba á Vizcaya; en todo lo demás se procedía con libertad absoluta, prescindiendo de las leyes existentes buenas ó malas, y consultando el interés de los gobernantes, que es la doctrina constitucional más segura que se ha seguido en España desde que empezaron á modificar las Constituciones los pronunciamientos nacionales.

del Gobierno y lo que añadía el Jefe político. Decía el Síndico: «que cumpliendo con el deber que le impone su cargo, y mirando por el bien y felicidad de este ilustre solar, expuso cuanto creyó oportuno, útil y conveniente á sus intereses en los informes del 29 último y primero del actual, sin que se le ofrezca hacer ninguna modificación en ellos, que los da por reproducidos en éste; así entiende el Síndico debe contestarse al precitado oficio; y si la autoridad del Gobierno provisional trata de llevar á efecto la preinserta orden del 31, deberá V. S. I. protestar solemnemente su cumplimiento, consignando esta protesta en una acta formal para que en ningún tiempo pueda perjudicar tal acto á los derechos del país.»

El Regimiento hizo consignar en el acta su extrañeza al ver el modo con que se trataba á Vizcaya, afectando aquí un puritanismo que no se observaba en otras partes ni en Ayuntamientos ni en Diputaciones, no habiéndose respetado al Senado, lo cual parecía demostrar un propósito perseverante del Gobierno hostil á este país, pero que debía oponerse á esta conducta la calma y la prudencia, sin salir de la senda legal, insistiendo en las reclamaciones entabladas mientras hubiese lugar para ello, y debiendo dejar consignado al cabo en una solemne protesta que se resigna la Diputación á separarse de su puesto compelida por la coacción, á la que ni puede ni debe resistir, porque desea evitar calamidades á las que no dará motivo ni pretexto.

La Diputación pasó al Jefe político el oficio siguiente: «Ayer por la tarde recibió esta Diputación el oficio de V. S. del mismo día en el cual se sirvió V. S. transmitirle, para su inteligencia y cumplimiento, la orden del Excmo. señor Ministro de la Gobernación de 31 del próximo pasado, y por ahora se limita á acusar á V. S. su recibo y prometerle que contestará á V. S. según desea, sin pérdida

de tiempo y categóricamente, después de meditar el negocio sobre que la referida orden versa, y llenar las formalidades que exigen, no sólo su alta gravedad y trascendencia sino los miramientos que al Gobierno de S. M. se deben y debe la Diputación á sí misma y al noble país á cuyo frente se halla.»

No satisfecho el Jefe político con la respuesta de la Diputación, le pasó con fecha del 7 un oficio que dice así:

«He recibido la contestación que V. S. I. da á mi oficio del 6, en el que le trascribía la real orden de 31 del pasado Agosto, y por ella me he enterado de cuanto manifiesta. V. S. I. habrá podido también hacerse cargo de las consideraciones que he tenido en nuestras conferencias sobre tan delicado asunto; pero como éstas han de ceder el campo á la obediencia que tanto yo como V. S. I. debemos al Gobierno, es indispensable que el tiempo que V. S. I. tome para manifestarme si acepta la oferta de seguir administrando el país con el carácter de Diputación provincial, se limite á todo el día de hoy. Lo que digo á V. S. I. para que en este improrrogable término se sirva contestarme clara y explícitamente, sin tomar nuevas dilaciones que sólo sirven para entorpecer la marcha de la administración de esta Provincia.»

Contestóle la Diputación el mismo día, insertando el informe del Síndico que se había leído en el Regimiento general y añadiendo lo que sigue:

«La Diputación, antes de aprobar este informe, reunió el Regimiento general con los señores Padres de Provincia, y lo sometió á su examen. Conviniendo el Regimiento con los principios sentados por el Síndico, los adoptó por decreto la propia Diputación. No es del caso explanar estos principios, ni defenderlos con razones incontrastables en el presente escrito, porque V. S., mero y fiel ejecutor de las órdenes del Gobierno, no retrocedería ante ellas. Tampoco

demostrará la equivocación con que ha procedido el señor Ministro al dictar una disposición bien poco en armonía por cierto con otras que él propio ha dictado recientemente y con lo que han sostenido y proclamado los pueblos que se alzaron para colocarle en el puesto elevado que hoy ocupa. Bástele manifestar á V. S. que no se conforma en cambiar el título de Diputación general, que los Fueros de este solar nobilísimo y el voto de los pueblos le dieron para conservarlo con honra, por el de Diputación provincial con que el señor Ministro quisiera bautizarla; y que se reserva representar á S. E. como cumple á su posición y á su derecho, directamente, para hacerle patentes las injusticias, involuntarias sin duda, que envuelve su orden en cuestión, y en trastornos y calamidades que se originarán de ella, como la experiencia se encargará de acreditar, en este país digno de mejor fortuna.—Tenía ya extendida esta respuesta la Diputación cuando ha recibido el oficio de V. S. de hoy acerca del cual no puede menos, aunque le sea enojoso, decirle dos palabras. Reconoce, y complácese en confesarlo, las atenciones que ha debido á V. S., y le da por ello las gracias. Pero á su vez puede también preciarse de habérselas guardado á V. S., y de haberse portado sin doblez y con la lealtad que ha distinguido siempre á los individuos que componen esta corporación.—V. S. asienta además que estas circunstancias han de ceder el campo á la obediencia, que tanto V. S. mismo como la Diputación deben al Gobierno. Hay que hacer una importante distinción, sin embargo. Las obligaciones de V. S. para con él son de diversa naturaleza, de otra índole diferente que las de esta corporación popular, que se rige por instituciones y costumbres especiales, todavía vigentes de derecho, las cuales juró guardar inviolablemente. Según ellas, está obligada á obedecer y acatar cuanto el Gobierno mande, pero no á cumplirlo como las

quebrante. Así es, que ni el poder absoluto cuando estaba en su apogeo, se asombraba de la oposición respetuosa pero firme que encontraban sus mandatos, si estaban en pugna con aquellas instituciones y costumbres, y el poder actual, encerrado en los estrechos límites constitucionales, no exige, ni le sería decoroso exigir, que ciegamente se le sometan sus subordinados á lo que, traspasándolos, hubiese dictado el capricho ó la arbitrariedad. Es más; hasta debe agradecer que se suspenda prudentemente la ejecución de sus disposiciones, cuando son evidentemente absurdas y pueden acarrear males irreparables.—Concluye V. S. por reclamar una contestación clara y explícita á su oficio de anteayer por la tarde, sin que se tomen nuevas dilaciones dirigidas sólo á entorpecer la administración. V. S. declara antes espontáneamente que el asunto es delicado, y la Diputación no vacila en añadir que es además de la más alta trascendencia; que dependen de él el porvenir, la vida ó la muerte de los Fueros y franquezas de Vizcaya, y de Vizcaya misma. Y después de haber asegurado á V. S., que sin pérdida de tiempo adoptaría su partido y se lo haría saber, le ha afectado vivamente la dureza inmerecida de aquellas expresiones, no sólo por lo que significan en sí mismas, sino porque atendido el porte cortés usado hasta ahora por V. S., revela á su juicio la violencia con que de un instante á otro pueden ser atropelladas las consideraciones de pública conveniencia y de política, que la circunspección aconseja que se observen. Permítale V. S., por tanto, en justo desahogo de su sentimiento, asegurarle que ni la dilación ha sido proporcionada á la madurez y calma que el examen detenido de un negocio de tanta importancia reclamaba, ni se entorpecía ni paraba la administración de este país, pues continuaba administrado con regularidad y del modo mismo que lo ha sido desde tiempo inmemorial, con aplauso y conten-

tamiento de los honrados vizcaínos. ¡Ojalá que la realización de los proyectos que V. S. estará tal vez encargado de plantear, la simplificaran y mejoraran en vez de desquiciarla!»

En sesión celebrada por la Diputación general el 8, se dió cuenta de un oficio pasado aquel mismo día por el Jefe político, que es del tenor siguiente:

«He recibido el oficio de V. S. I., fecha de ayer, en el que se sirve contestarme á los míos que le dirigí en 5 y 6 del actual, trascribiendo en el uno para su inteligencia y cumplimiento la orden del Gobierno provisional de la Nación fecha 31 de Agosto, en la que se me prevenía que entrase en el lleno de la autoridad que como á Jefe político me corresponde, y que cumpliese ó hiciese cumplir en esta Provincia las leyes y disposiciones superiores, no permitiendo tampoco que esa Diputación ejerza otras funciones que las marcadas en la real orden de 14 de Julio de 1842 respecto de las Diputaciones de las Provincias Vascongadas; y diciendo en el otro lo indispensable que era el que V. S. I. limitase el tiempo á todo el día de ayer para contestarme si se avenía á continuar con el carácter de Diputación provincial, según así se previene en la orden citada; y en vista del todo de su contenido, y que V. S. I. me manifiesta que no se conforma en cambiar el título de Diputación general por el de Diputación provincial por las razones que expresa, no conviniendo tampoco en una obediencia voluntaria para cumplir las superiores órdenes del Gobierno de la Nación en este asunto; por más sensible que me sea el que haya llegado el caso que he tratado de evitar por todos los medios posibles, en cumplimiento de mi deber, y de las órdenes é instrucciones que me han sido comunicadas por el Gobierno provisional de la Nación, he resuelto que en todo el día de hoy quede disuelta esa Diputación general, sirviéndose V. S. I. participarme oportunamente el cumplimiento de esta disposición

emanada directamente del Gobierno, de cuyas órdenes, como V. S. I. reconoce, soy un fiel ejecutor.»

«Teniendo presente la Diputación general lo expuesto por el Síndico sobre las ordenes del Ministro de la Gobernación de la Península del primero, 7, 10 y 31 del mes de Agosto próximo pasado; teniendo presente también lo manifestado por los letrados respetables á quienes consultó, y sobre todo los acuerdos de los Regimientos generales celebrados en 22 del mismo mes de Agosto y 6 del que rige, relativos á aquellas ordenes; y viendo con dolor además que ni las exposiciones comedidas que había elevado oportunamente al Gobierno, ni las activas diligencias practicadas por su comisionado en Madrid para obtener su modificación ó reforma, producían otro resultado que empeorar más y más cada día la triste suerte de este país, bien acreedor á ser tratado con equidad; resolvió dejar el honrosísimo y nunca mancillado puesto que por la voluntad de los vizcaínos ocupaba, no prolongando la esteril lucha de la razón contra la fuerza, cuyo brazo estaba levantado, por no dar pretexto con una resistencia sin esperanza á escándalos siempre de lamentar, ni á que se creyese que traspasaba los límites de la legalidad y la prudencia, con el objeto de provocar movimientos sediciosos; pero resolvió igualmente causar y causó la protesta más clara y solemne contra lo decretado por el Gobierno provisional, á fin de que nunca de estos actos suyos, á todas luces injustos y evidentemente opuestos, tanto á las leyes especiales de este país, que la propia Diputación juró conservar inviolables, cuanto á la de 25 de Octubre de 1839 que las confirmó, pudiese derivarse el menor perjuicio á las instituciones, franquezas y libertades, buenos usos y costumbres de este solar ilustre, ni á los derechos de sus naturales, habitantes y moradores, los cuales derechos ó instituciones

ningún Gobierno, por grande y fuerte que sea, tiene la facultad de restringir ni menoscabar, sin el consentimiento libre de sus Juntas generales legítimamente congregadas. Y para que pudiesen reclamarlos en la forma y tiempo que les parecieren convenientes ante las Cortes de la Nación, ó ante la imparcial posteridad, si en la época presente se les negase justicia, lo consignó así la Diputación en esta acta, que se transcribirá á dicho señor Don Juan de la Tejera en contestación á su preinserto oficio, y se imprimirá, encargando al Secretario de gobierno la entrega de los documentos, expedientes, libros y efectos de las oficinas.»

Merecedores son, á decir verdad, de especial memoria en la historia de Vizcaya los nombres de Don Domingo Eulogio de la Torre, Don José Joaquín de Arguinzóniz y Don Matías de Izaguirre, Diputado general de turno el primero, en funciones de Corregidor, y Diputados generales en ejercicio los otros dos, así como las demás personas, que con su voto ó consejo contribuyeron á que se mantuviese incólume en aquel tiempo la dignidad de la primera corporación foral de Vizcaya, dejando reservados sus derechos, sin degradante humillación, ni extemporánea arrogancia. Y esta conducta fué tanto más digna de aprecio cuanto que por desgracia, como queda ya dicho, y es necesario repetirlo, porque la verdad histórica tiene sus exigencias indeclinables, no hubo igual entereza y valentía por parte de los representantes de Vizcaya ni en 1813 ni en 1820, al imponerse á este Señorío la malhadada Constitución de 1812, encarecida como la panacea de todos los males de España, y abandonada algunos años después por sus más ardientes fautores y secuaces, como impracticable y caduca, sin haber podido resistir á la piedra de toque de la experiencia. Los constitucionales vizcaínos de los años citados, los que soñaban también como otros españoles en la edad de oro

futura de su Patria común, merced á aquella Constitución exótica, enemiga de las verdaderas libertades populares de las regiones españolas, rescataron al cabo la honra de su nombre comprometido, volviendo resueltamente por las leyes peculiares de su país y por su régimen especial contra las novedades que querían imponérsele desde 1834 hasta 1843; y ahora sobre todo, dieron cima á tan laudable defensa, dejando sus puestos antes que consentir que fuese mancillada la pureza de su investidura.



CAPÍTULO XXIII

TEXERA convocó para el 10 de Septiembre á la mayor parte de los individuos que componían la Diputación provincial que cesó en 1839, y eran Don José Pantaleón de Aguirre, Don Casimiro de Ariz, Don Clemente de Iturriaga y Don Martín de Jáuregui, de los cuales sólo el último dejó de asistir dicho día. Leyóse en esta reunión la real orden de 31 de Agosto, y otra de 6 del corriente, dirigida al Jefe político, que decía así:—«En ninguna de las comunicaciones del Gobierno relativas á la que hoy se titula Diputación general, ha sido tratada ésta más que como una de las muchas Juntas que se establecieron en la Península para secundar el alzamiento nacional, ni se reconoció nunca la existencia del Corregimiento político, que con otras novedades se apresuraron á restaurar los partidarios de los antiguos Fueros de ese país, siendo por consiguiente infundadas las pretensiones que pudieran hacer éstos en el día, bajo el supuesto de que había sido sancionado por el Gobierno el restablecimiento de la referida Diputación. Puede V. S., por consiguiente, sin temer que el Gobierno aparezca en contradicción consigo mismo, hacer que sean puntual-

mente obedecidas sus órdenes, para lo cual hará V. S. uso, si necesario fuese, de todo el lleno de su autoridad; y en caso de que esa Junta general se niegue á desempeñar las funciones de la Diputación provincial disuelta, y no fuera posible reunir á ésta por los motivos que V. S. expresa en su comunicación de 30 de Agosto, es la voluntad del Gobierno que V. S. proceda á formar una Diputación provincial que se ocupe de los trabajos electorales, componiéndola en parte los individuos de la disuelta Diputación, que no se hallen incapacitados por la ley para ejercer este cargo, y en parte con otros nombrados por V. S. hasta completar el número que se requiere para que haya mayoría legal, pertenecientes á la Diputación provincial de los años anteriores.»

No se podía decir más claro que se equivocaban completamente respecto de las intenciones de aquel Ministerio los que creyeron que la caída de Espartero llevaría también consigo la anulación de las medidas por él tomadas contra los derechos é intereses de Vizcaya, y que no se la comprendería en las ventajas del alzamiento de 1843, cuando fué de las más perjudicadas por el Gobierno derrocado.

«Los congregados hicieron presente al Jefe político que habían sido elegidos en época muy distinta de la actual, y por una parte mínima de la población de Vizcaya, y que teniendo que suceder á una corporación legítima y popular, serían mal vistos si aceptaban los cargos que se les confiaban, por lo que pedían que se les relevase de esta obligación; pero el Jefe político insistió en que sería mayor su responsabilidad si dejaban huérfana la administración del país, y se negó á admitir sus excusas, declarando formal y legalmente instalada la Diputación provincial. Los Diputados hicieron presente que debía aumentarse su número para que pudiesen funcionar desembarazadamente, y el Jefe po-

lítico se reservó disponer lo conveniente sobre esta materia.»

La Diputación interina no fué reemplazada hasta el mes de Diciembre, habiéndose suspendido por real orden de 18 de Octubre los efectos de la elección de Diputados provinciales, á consecuencia de ciertos disturbios ocurridos en Bilbao los días de las elecciones.

El 8 de Noviembre fué declarada mayor de edad por las Cortes la Reina Isabel segunda, y el 14 le dirigía la Diputación provincial de Vizcaya la exposición siguiente:

»SEÑORA.—No es decible el placer, el júbilo purísimo de que esta Diputación provincial de Vizcaya se ha sentido poseída al saber, no sólo que las Cortes generales del Reino han declarado á V. M. mayor de edad, sino que V. M., á consecuencia de esta declaración, ha prestado en su seno el juramento que la ley política de la Monarquía prescribe, entrando desde luego á ejercer la regia autoridad bajo los más lisonjeros auspicios, con la visible protección de Dios y las bendiciones de todos los españoles dignos de tal nombre. V. M. desde su excelsa cuna ha sido objeto de esperanzas halagüeñas y de adoraciones sin límites, así como de terribles y pérfidos ataques. Si en este país alzaron el pendón de la discordia los primeros algunos ambiciosos deslumbrados; si lograron fascinar con artificiosas imposturas á muchos incautos; si armaron sus brazos para disputar los claros é incontrovertibles derechos que á V. M. le daban su nacimiento, las leyes fundamentales de la Monarquía, la voluntad de los pueblos, los Fueros de este solar antiguo, y hasta el reconocimiento de su Junta general congregada so el árbol de Guernica en Julio de 1833, á la herencia del trono de San Fernando y del Señorío de Vizcaya; también juraron entonces otros nobles y esforzados hijos suyos luchar hasta morir en defensa de aquellos derechos, ó salvarlos del

naufragio inminente que los amenazaba.—La España y el mundo vieron con admiración de qué manera cumplían los últimos su juramento, y en el número de ellos se cuentan con sumo orgullo los que suscriben esta felicitación reverente. Bien puede fiar V. M. en su amor probado en amargas vicisitudes y agonías y purificado en el crisol del infortunio. Bien puede creer en la constancia invencible de su fe, en el celo desinteresado y ardiente con que consagrarán su existencia entera, ora ocupen puestos públicos, ora descendan, como es de esperar y desean, á la vida privada, á hacer que los habitantes de esta tierra infecunda, pero libre siempre, adoren las virtudes de V. M. y las altas dotes que hermocean su persona angusta. Y se persuaden á que eficazmente apoyados por casi todos los hombres de influencia por sus riquezas, por su saber, por su valor y patriotismo, cualquiera que haya sido la bandera que la suerte les obligó á abrazar en la acabada contienda civil; mas eficazmente apoyados todavía por la benignidad con que V. M. se dignará acoger á la sombra protectora del solio á esta Provincia, contribuyendo á que se cumpla religiosamente lo pactado en los campos de Vergara, y á que se reparen las injusticias inauditas con que un poder rencoroso selló su dominación en ella, se secarán las semillas maléficas que pudieron quedar en sus entrañas después de aquellos acontecimientos, y llegará á ser Vizcaya el baluarte más firme de la libertad é independencia de la Patria, del trono de V. M.; de ese trono augusto, que mientras corrían en la inocencia serenos y apacibles dos días de V. M. ha sido lo único que no han osado mancillar, lo único que sin quererlo miraban como santo los que soñaban en usurpaciones quiméricas, igualmente que las pasiones desatadas de los partidos; de ese trono que se ostenta ahora radiante, puro, espléndido, rodeado de todos los hombres de bien, de todos los que al-

ternativamente desengañados de ensayos impotentes ó de generosos extravíos, y heridos por la vara del escarmiento, se arriman fraternalmente á su abrigo como á seguro puerto de salvación y de fortuna en las borrascas. La Providencia, Señora, le encumbrará, sin duda, durante el reinado de V. M. á mayor altura que le encumbró, cuando se sentó en él la inmortal abuela de V. M., primera de su esclarecido nombre, no sin haber atravesado en sus primeros años circunstancias harto calamitosas y tristes. Plegue al Cielo que así sea, y que los votos de la Diputación se cumplan, concediendo á V. M. una larga y no interrumpida serie de prosperidades para descanso y gloria de la fatigada familia española.»

El primero de Diciembre, en vista de una comunicación que pasó el Senador Don José Santos de la Hera, en la que indicaba la conveniencia de que hiciese la Diputación un recurso pidiendo el restablecimiento del régimen foral, como lo había hecho ya la de Guipúzcoa, ó iba á hacerlo la de Alava, se acordó elevar á la Reina una exposición en estos términos:

«SEÑORA.—La Diputación provincial de Vizcaya P. á los R. P. de V. M., con el más profundo acatamiento expone: que desde el momento feliz en que V. M. se sentó en el trono de San Fernando, declarada mayor de edad por las Cortes de la Nación, se propuso llena de confianza en la rectitud y pureza de su hermosa alma, acudir á reclamar la reparación de una notoria y grande injusticia hecha á este país.—Esta injusticia, Señora, que ha producido y sigue produciendo sus efectos perniciosos, es el decreto dado en Vitoria el 29 de Octubre de 1841 por el que ejercía á la sazón el poder real. La ley de 25 de Octubre de 1839, consecuencia del convenio de Vergara, largamente discutida en el Congreso, explicada después en el Senado, y sancionada por la

madre augusta de V. M., había confirmado los Fueros de las Provincias Vascongadas, y estatuido los trámites solemnes que habrían de observarse al modificarlos en la parte indispensable para conciliar el interés de las mismas con el de la Nación. Un movimiento popular, adrede provocado acaso para reprimirlo, precursor del que habría de salvar en coyuntura más propicia los derechos de V. M. de las alevos asechanzas que contra ellos se fraguaban, estalló en este suelo, ofreciendo al soldado tan desleal como ambicioso que disponía de la fuerza pública la ocasión y el pretexto de escarnecerle y oprimirle. — Parecióle poco aun, viendo que por evitar los horrores de la guerra civil se sometió sin resistencia á su autoridad, declararle en estado de sitio, enviar de procónsules suyos con ilimitadas facultades de hacer su antojo, á hombres del carácter de Zurbano y Alcalá, para quienes los eternos principios de la justicia, la Constitución del Estado y los fueros de la humanidad eran menos dignos de veneración que los caprichos de su vengativo jefe. No hay en esto nada que sea exagerado. La simple narración de los inauditos atentados que se cometieron en Bilbao, atestiguada por todos sus habitantes, que los presenciaron estremecidos de espanto, y comprobada por los bandos mismos que dictaron los satélites queridos de Espartero, bastaría para hacer ver patentemente á V. M. que en los tiempos más bárbaros no ha pesado sobre ningún pueblo de la tierra tiranía más vandálica y feroz. Sin respetar ninguna de las fórmulas que sirven de escudo á la inocencia; sin respetar nada de cuanto es respetable y santo para los hombres, despojaban á los ciudadanos de sus bienes, los sepultaban en los calabozos, ó los fusilaban en la plaza pública, como por mero entretenimiento. Pero no se extenderá la Diputación á hacer una pintura de estas escenas sangrientas, porque por pálida que fuera helaría de horror el bondadoso y tierno corazón de

V. M.—No quedó todavía satisfecha la saña rencorosa del poder que entonces dominaba. Érale preciso consignar en un documento auténtico los sentimientos que abrigaba, y burlarse sin pudor de todos los empeños. Dictó, pues, el famoso decreto de Vitoria, cuyo preámbulo tal vez no encierra un periodo, no tiene una palabra sola que no sea contraria á la verdad, y al buen sentido; que no esté dictada con el propósito deliberado de ofender á los naturales de las Provincias Vascongadas en lo más vivo de su alma. ¿Quién no se ríe con la risa amarga del desprecio, al leer en él, entre otras cláusulas chocantes, la siguiente: *tiempo es ya de que cese este monopolio. V. A. ha prometido librar á los pueblos de la vergonzosa tutela en que se les ha tenido*, dictada por el mismo hombre que substituyó á la paternal y suave administración de las Diputaciones generales la arbitraria, la despótica, la bárbara de su sable?—La parte dispositiva de aquel documento se halla en consonancia completa con esta muestra de la política previsora y blanda que inspiraba al Gobierno, que trató sin que hubiese combatido contra él á este país peor que á tierra enemiga conquistada. Con el pretexto de restablecer la unidad constitucional, suprimió las Diputaciones generales, y creó Comisiones llamadas económicas, de nombramiento de los Jefes militares y políticos, burlándose de esta misma unidad; suprimió los Ayuntamientos, planteó las aduanas, acabó en fin, con el antiguo y respetable régimen foral, dislocando la administración que regía en las Provincias Vascongadas, y conculcó lo que acordado por las Córtes con aplauso universal sancionó después la Corona. Estas medidas funestas, tan contrarias al honrado carácter castellano, esta fe púnica, de que se hacía inmoral alarde, produjo bien lamentables resultados, lastimando intereses muy legítimos é importantes. Los vascongados sufrían en silencio tantos y tan grandes

ultrajes, lloraban de rabia y de dolor, y perdiendo toda esperanza de obtener por las vías pacíficas y legales lo que de justicia se les debía, se propusieron algunos de ellos en el fondo de su corazón aprovechar la primera ocasión favorable de reivindicar sus violados derechos. Triste y terrible recurso de un pueblo pundonoroso, al cual sin necesidad ni objeto, por un mezquino espíritu de venganza se reduce á la desesperación. No tardó la coyuntura en presentarse. La Nación abrió los ojos, y vió el abismo en que iba á ser precipitada, á la voz de alarma y de angustia que dió el Congreso de sus Diputados, y se levantó casi en masa contra las duras ó irrecusables pruebas de usurpación y tiranía que por donde quiera asomaban la frente. El nombre augusto de V. M., la reconciliación de todos los españoles honrados, de todos los partidos leales, la reparación de las injusticias, la libertad y el trono; tan santas fueron las palabras que se invocaron al acometer la empresa. Vizcaya que tenía más justos motivos de queja que ninguna otra Provincia de la Monarquía, así como también más motivos de esperanza, no pudo quedar pasiva espectadora en la hora del combate. Se lanzó, pues, á él con resolución y denuedo, triunfó en un momento en su suelo de todos los obstáculos, y prestó al Gobierno provisional, no completo todavía, recursos y ayuda eficaz cuando en otros puntos se obraba con independencia de él. No podía olvidarse la Junta que entonces se formó en Bilbao de los agravios recibidos por los nobles vascongados, y de la necesidad de poner á ellos remedio. Restableció, pues, la Diputación general, los Ayuntamientos y otras ruedas indispensables de la máquina administrativa, pero procedió con la circunspección y cordura que muchos han tachado de excesiva, respetando las aduanas y la Intendencia, y resignando sumisamente su autoridad al instalarse formalmente el Gobierno proy-

sional. Desgracia es, Señora, común á los que proceden con abnegación generosa en nuestra Patria ser mal recompensados. El Gobierno que confirmó las disposiciones violentas quizá y apasionadas de otras Juntas, se complació en desaprobar las tomadas por la de este país, y en derribar piedra por piedra el edificio que en él se reedificó. Ni una sola medida, ni un solo nombramiento, ni el más insignificante acuerdo suyo ha quedado en pie. Lo primero, lo más chocante que hizo fué prohibir la reunión de la Junta general que estaba convocada so el árbol de Guernica. La Diputación, aunque podía considerarse en su derecho, no sujetándose á semejante prohibición, quiso dar una prueba más de su prudencia y de su respeto; quiso evitar nuevas y funestas colisiones en la situación harto complicada y difícil de suyo en que la Nación se hallaba, y se resignó á su suerte acatando tan impolítico mandato. Su docilidad fué pagada con habérsela puesto en la dura precisión, ó de faltar á sus deberes con la Provincia que la había colocado á su frente, ó de ser disuelta. Prefirió, como era de suponer, cesar en sus funciones á hacer traición á sus juramentos, y se contentó con consignar una solemne protesta que se circuló á todos los pueblos de Vizcaya. Lo que tales y tan repetidos desaires han producido es la desconfianza, la división, el despecho. Ha reaparecido el bando antiguo carlista y se ha presentado con su estandarte reaccionario y feroz. A los que han sido constantes y celosos defensores de la causa de V. M. les motejan de débiles ó traidores á la causa de los Fueros; les tachan de hipócritas, y les preparan largos sinsabores, deslumbrando con pretextos sobrado valederos y seductores á la sencilla é incauta muchedumbre.—Los individuos de la Diputación actual se atreven á hablar á V. M. con la más profunda convicción, con el desinterés más acendrado. Cualquiera que sea la suerte que el destino

les reserve, cualesquiera que sean las medidas que V. M. y los supremos poderes del Estado dicten al fijar definitivamente el porvenir de esta Provincia, serán fieles y perseverantes á la causa de V. M. y de su trono; serán los súbditos más sumisos y leales. Demasiado ligada tienen su fortuna, su seguridad, la fortuna y seguridad de sus familias con la existencia de aquel trono excelso, para que puedan retroceder ante ningún sacrificio nuevo por defenderlo, si vuelve á verse amenazado. No dudan en este concepto ser oídos con benevolencia.—La equidad aconseja, á juicio de la Diputación, que se restituyan á las Provincias Vascongadas las instituciones de que fueron despojadas arbitrariamente, restableciendo en su fuerza y vigor la ley de 25 de Octubre de 1839, que no es una ley común sino una acta adicional á la Constitución de la Monarquía, como se dijo acertadamente en el Congreso de Diputados por una persona que no será sospechada de adicta á nuestras instituciones. La política aconseja también que el arreglo de que trata el artículo segundo se haga sin precipitación; se haga por todos los trámites que en él se señalan; se haga, en fin, partiendo de la base de la posesión pacífica y tranquila en que las Provincias Vascongadas quedaron de sus antiquísimas leyes tutelares. La probidad, la hidalguía, la magnanimidad castellana aconsejan asimismo que se cumplan generosamente las promesas solomnes que se hicieron por el Jefe de los ejércitos, por los cuerpos colegisladores, por la Corona misma. La pacífica, la sólida, la duradera y acertada solución de las graves cuestiones pendientes entre las Provincias Vascongadas y el Gobierno aconseja, en fin, que reintegradas aquéllas en sus derechos, y reunidas sus respectivas Juntas generales, comisionen las personas que merezcan su confianza para que se acerquen á este último, el cual, después de haberlas oído formal y detenidamente, deberá proponer el proyecto

de arreglo que le está encomendado. Así, Señora, resultará una cosa igualmente digna del convenio memorable de Vergara y de la Nación grande y heroica en cuyo nombre se firmó; no se dirá que se ha abusado de la fuerza, y se cegará la sima de futuros desmanes.—Objetaráse acaso que habiéndose establecido en virtud de una ley las Diputaciones provinciales, no tiene el Gobierno facultad de alterarla. Preciso es tener presente en qué circunstancias, por qué causa se hizo esta ley. Proscritas las Diputaciones forales, y habiéndolas sucedido unas corporaciones tan contrarias á la Constitución como á los Fueros, creyeron las Cortes que era mejor plantear las provinciales que seguir consintiendo semejante escándalo, y así lo acordaron, no con la idea de faltar á lo prometido, sino con la de llenar el monstruoso vacío del momento. Y ya que felizmente se hallan reunidos los cuerpos colegisladores, y V. M. reconocida y acatada en todos los ángulos de la Monarquía por su Reina y Señora legítima, no vacilarán en otorgar al Gobierno la necesaria autorización para restituir á las Provincias Vascongadas al estado legal en que se hallaban en Septiembre de 1841. Esto es lo único que piden, lo único que reclaman con los más fervientes votos los que suscriben esta reverente exposición al descender á la vida privada, y V. M. no les negará de su parte un acto tan grande y benéfico de reparación al inaugurar su gloriosísimo reinado, esperando el cual quedan rogando al Cielo conserve los preciosos días de V. M. dilatados años.»

El 15 de Diciembre se reunieron bajo la presidencia del Jefe político, Don Vicente de Ansótegui, Don Manuel de Jane, Don Francisco Borja de Salazar, Don Carlos Adán de Yarza y Don José Francisco de Eguía, que con Don José Maria de Lámbarri y Don Francisco de Astarloa componían la nueva Diputación provincial elegida. No fué admitido Eguía, por ser sacerdote, con arreglo á lo dispuesto en el real decreto

de 21 de Septiembre de 1835, aunque Egüa citó en su defensa los casos de otros sacerdotes que fueron admitidos como Diputados provinciales, y se llamó en su lugar á su suplente Don Pedro Novia de Salcedo. Tampoco fué admitido más tarde Astarloa por la misma causa que Egüa.

Teniendo noticia la Diputación de la próxima llegada de 1844 la Reina Cristina á España, acordó el 22 de Enero elevarle la exposición siguiente:

«SEÑORA:—Mal podía olvidarse la Diputación que suscribiera de acudir á los R. P. de V. M. á prestar el homenaje de su respeto y de su afecto profundo á su persona augusta, ahora que declarada mayor de edad la Reina Doña Isabel segunda, puede V. M. venir, si su alto discernimiento lo juzga así conveniente, á su patria adoptiva, á estrechar á su corazón maternal á esta hija de sus entrañas, y á su otra no menos amada hija la Infanta Doña María Luisa.—Tiempo hace que esta corporación se hubiera apresurado á llenar un deber tan grato para ella, á no haberse hallado manca é incompleta por dificultades meramente accidentales que acaban de ser removidas. V. M. sabe, y no hay jactancia en decirlo, que en esta tierra rica en virtudes, aunque de otros dones pobre, se venera la memoria de V. M., porque su mano bienhechora se complació mientras rigió, no sin gloria y sabiduría, las riendas del Estado, en favorecerla con singulares distinciones. Por eso al ausentarse V. M. de las playas españolas, sacrificando en el altar de la paz los más santos é irresistibles afectos, le acompañaron en su ostracismo sublime las simpatías y votos de los vizcaínos, pública y solemnemente emitidos por el órgano de sus Diputados generales. Entonces fueron los únicos que con sus hermanos de Alava y Guipúzcoa, estrechamente unidos, osaron llorar la desgracia inmerecida de una Reina y de una carifiosa madre. Y cuando han tonido el consuelo de ver sus vaticinios

realizados; cuando notan con júbilo indecible el cambio de la opinión, que se complace en reparar el extravío ó la sorpresa de que fué víctima en un momento funesto, ¿se habría de retraer esta Diputación de rogar á V. M. con el más vivo encarecimiento, que se dignara acelerar su regreso, si á él no se oponían miras previsoras que nunca podrían tender á otro fin que á la mayor ventura de los súbditos de vuestra excelsa hija, hallándose en esto perfectamente de acuerdo su deseo é interés?—Los dolorosos sacrificios que á este país se le impusieron á consecuencia de los sucesos desgraciados de Octubre de 1841, habrían sido harto menos amargos á sus altivos naturales si se hubiesen respetado las instituciones venerables que de sus progenitores heredaron. Mas se les condenó á perderlas, y la remuneración única que de ellos esperan es tan evidentemente justa que no se la rehusaría el alma recta, elevada y magnánima de V. M., si de su voluntad sola dependiese. Hálos mencionado la Diputación sin otro ánimo que el de manifestar á V. M. ingenuamente, que contando con que V. M. será siempre su protectora y su escudo, contando con que en el caso de haber de regresar á la península española, interpondrá benigna la influencia poderosa que legítimamente deberá ejercer en su porvenir y en sus destinos, á fin de que sea restituída esta Provincia á la posesión en que se hallaba de sus Fueros y libertades antes de aquellos acontecimientos lamentables, no podía menos su Diputación de ansiar más que otra ninguna del Reino esta venida. Ni podrá tampoco dejar de insinuar á V. M. respetuosamente sus ardientes deseos de que se realizara. Así, pues, llena de confianza en ser oída con benevolencia—Suplica á V. M. con el mayor rendimiento que si en sus altos designios juzga oportuno, como lo cree y anhela esta Diputación, volver al suelo de España, se digne favorecer á su paso con su regia y

consoladora presencia á las Provincias Vascongadas, honrando también al Señorío de Vizcaya.»

A consecuencia de ciertas noticias que se tenían de que los partidarios de Don Carlos trataban de suscitar nuevamente la guerra civil, aprobó la Diputación el 3 de Marzo un manifiesto que dispuso de acuerdo con el Capitán general de las Provincias Vascongadas Don Bartolomé Amor y el Jefe político Don Antonio de la Escosura, que había sucedido á Tejera. Dice así:

«VIZCAÍÑOS.—No es amiga, bien lo sabéis, vuestra actual Diputación provincial de dirigiros su voz por hacer un mero alarde de celo y de patriotismo. Sus trabajos, su perseverancia asidua en cuidar de vuestros intereses y defender vuestros derechos, sus obras os lo dirán mejor que sus palabras. A aquéllas apela y á la experiencia que las habrá de aquilatar en lo que valgan. Pero hay ocasiones en que es el silencio dañoso y una necesidad romperle. Sin desmentir, pues, su acostumbrada circunspección, se ve hoy precisada á hablaros; así se lo ordenan su deber, y el deseo de precaveros de disgustos y desgracias; y lo hará con la franca y acendrada lealtad que á su conducta sirve de norte.—Ambiciosos y perturbadores de oficio, que quisieran especular con revueltas y trastornos, modrando á su maléfica sombra, han elegido vuestro país para teatro de sus planes.—Desde la tierra extranjera á que se acogieron, y donde se aburren y desesperan, atizan la apagada llama de la discordia, sueñan dormidos y despiertos en dominar y satisfacer pasiones rencorosas, y despachan misteriosos agentes que con mentidas y halagüeñas promesas pretenderán seduciros y arrastraros á lamentables desmanes.—No cree la Diputación que sorprendan vuestra sencillez. Aunque vuestra proverbial cordura no bastara por sí sola para ponerlos á cubierto de pérfidas asechanzas, sobrado reciente está la memoria de los desastres

de que habéis sido víctimas; todavía humean vuestros hogares incendiados, y la sangre de vuestros hijos queridos; y no es de temer que os fascinen, ni que haya ningún buen vizcaíno que se preste á ser dócil instrumento de nuevos infortunios y lástimas, de la ruina inevitable de una Provincia tan crudamente castigada por intestinas luchas, que tanto ha menester de la paz para reponerse de quebrantos y desventuras sin término.—La Diputación, sin embargo, os amonesta seria y encarecidamente, no sólo á que miréis con desprecio y horror las insinuaciones que directa ó indirectamente propendan á privaros del reposo y bienestar que disfrutáis, sino á que déis cuenta inmediatamente á vuestras autoridades locales de cualquier tentativa que á semejante fin se encamine; y á éstas, señaladamente á los Alcaldes, les encarga que observen á su vez la más exquisita vigilancia sobre las personas que los inspiren la menor sospecha; que sigan sus pasos, y contribuyan por cuantos medios estén á su alcance á desbaratar sus manejos criminales, comunicando pronta y exactamente cuanto observen y ocurra en su jurisdicción á las autoridades superiores. La menor falta en este punto interesante del servicio público será severamente reprimida.—Impotentes y raquíticos le parecen en verdad á la Diputación los esfuerzos de los apóstoles de las maquinaciones que se fraguan, para que se sobresalte ni pierda la confianza ilimitada y serena que funda en vuestra sensatez, en vuestra utilidad bien entendida, en la firmeza y rectitud del Gobierno de la Reina nuestra Señora Doña Isabel segunda, cuyas disposiciones os exhorta á continuar, siguiendo su ejemplo, acatando y obedeciendo inviolablemente. Descansad en que vela noche y día vuestra autoridad provincial en asegurar vuestra prosperidad presente y futura, la conservación de vuestras antiguas y venerables instituciones; y convenceos, sobre todo, os lo dice con la convic-

ción más íntima y sincera, de que la manera cierta de perderlas, y hasta de perder la razón para sustentarlas digna y legalmente, de inutilizar el efecto que debe promoverse de sus gestiones eficaces y activas, es apelar á la violencia y á la sedición, en pos de las cuales vienen siempre largas calamidades y crímenes.—Mas á pesar de aquella confianza, quisiera impedir á todo trance vuestra Diputación que algún incauto se precipitara en las celadas que se preparan, y expiara su imprudencia ó su delito con el castigo inevitable que amenaza á su cabeza. Doleríale sobremanera que se derramase una gota sola de sangre, una lágrima en Vizcaya por causas políticas, que tanto se han vertido estérilmente, y su voz grave y solemne advierte á todos sus administrados del peligro cuando está lejano aun, para que de él se aparten. En Vergara se abrazaron cordialmente los hijos de este solar ilustre, y no habrá poder en el mundo que les haga aborrecerse y maltratarse. ¹ Cegóse entonces el abismo de civiles disensiones entre nosotros, pues reconocimos unánimes á Doña Isabel segunda por nuestra Señora y Reina, y desde lo alto de su trono esperamos tranquilos que su real munificencia se complazca en dispensarnos justicia, en restituírnos y confirmarnos las leyes que de nuestros progenitores heredamos. Nosotros, modelos de sumisión, de honradez y de hidalguía, nunca faltaremos á nuestros compromisos y palabras. Desistan, pues, de sus proyectos temerarios los discolos que en la ruina de esta tierra privilegiada fundan sus esperanzas, ó caiga sobre sus cuellos la segur del escarmiento».

El 25 de Marzo dió cuenta verbalmente Don Pedro de Egaña á la Diputación del desempeño de la comisión que se le había confiado para que entregase á la Reina Cristina la exposición que se le hizo en 24 de Enero. Egaña repitió

¹ No fué profeta, por desgracia, la Diputación provincial al asegurarlo.

las palabras de consuelo y esperanza que había oído de los labios de la Reina, en la larga audiencia que tuvo, y entregó una carta escrita por el secretario particular de aquélla, Don José del Castillo y Ayensa, en París, en primero de Febrero, que era del tenor siguiente:

«El señor Don Pedro de Egaña ha tenido la honra de poner en manos de la Reina madre Doña María Cristina de Borbón, mi Señora, la exposición de V. E. fecha 24 de Enero último, dirigida á suplicar reverentemente á S. M., que en su fausto y próximo regreso á España se digne honrar con su presencia esas leales Provincias que siempre le han conservado la más pura adhesión. Esta súplica ha sido esforzada de palabra en los términos más respetuosos por dicho señor Don Pedro de Egaña, quien habrá podido decir á V. E. la grande emoción con que S. M. le oyó, y el vivo sentimiento que afligía su real ánimo por no poder en esta ocasión, como quisiera, acceder á los deseos del noble pueblo vascongado. S. M., con efecto, no puede olvidar las reiteradas pruebas de fidelidad que de él ha recibido, y en circunstancias bien difíciles; y al mandarme que dé á V. E. en su real nombre, como tengo la honra de hacerlo, las más expresivas gracias por la que acaba de recibir con la presente exposición, es su real voluntad, que repitiendo cuanto tuvo la complacencia de decir al señor de Egaña, asegure á V. E., que si no accede hoy á la afectuosa súplica de esa leal Provincia, es porque no se lo permiten fuertes consideraciones de conveniencia pública, que V. E. en su conocida ilustración y cordura no podrá menos de respetar; que en no acceder á ella tiene S. M. el más vivo sentimiento; y que agradecida sobremanera á los fieles y constantes vascos, se reserva mostrarles toda su benevolencia y aprecio en cuantas ocasiones puedan presentarse.—S. M. se ha servido también mandarme que ponga esta contestación en conoci-

miento del Gobierno de su augusta hija, ¹ para que haga de ella el uso conveniente, no satisfecha con que yo la dé directamente en su real nombre; y cumpliendo como debo sus reales órdenes hago con esta fecha la comunicación correspondiente al dignísimo Embajador de España en esta Corte Don Francisco Martínez de la Rosa, y lo participo á V. E. para su completa satisfacción».

Egaña entregó al mismo tiempo, en prueba de la benevolencia de la Reina Cristina, un retrato litografiado de ella, que se dispuso poner en el salón de sesiones; y teniendo en consideración el celo extraordinario de Egaña, y sus servicios á la causa del país, se acordó darle las más expresivas gracias, haciéndolo constar en el acta.

A Castillo y Ayensa se acusó el recibo de su carta y del retrato, añadiendo: que «la Diputación conserva tanto aquel documento como este regalo en la más alta estima, y no olvidará seguramente las consoladoras palabras siguientes estampadas en el primero, á saber: *que agradecida á los fieles y constantes vascongados, se reserva mostrarles toda su benevolencia y aprecio en cuantas ocasiones puedan presentarse*; y á V. E., por haber tenido como depositario de la confianza de V. M. la buena suerte de redactar tan acertada y elegantemente este escrito, y de firmarlo, y por la parte además que habrá sin duda tomado y tomará para inclinar el real ánimo de S. M. á que proteja á este malaventurado país, con su benéfica intercesión, de todos los quebrantos que le asedian, le tributa las más cordiales gracias, y le ruega se sirva recibir el homenaje de su más distinguida consideración.»

Se reunieron en Bilbao el mismo día los comisionados de

¹ Era Presidente del Consejo de Ministros desde principios de Diciembre del año anterior Don Luis González Brabo.

las Diputaciones de las tres Provincias, asistiendo por Vizcaya Don Vicente de Ansótegui y Don Pedro Novia de Salcedo, para tratar del regreso á España de la Reina Cristina; y acordaron elevarle una exposición gratulatoria para tenerla propicia, y que se la entregasen los Diputados á Cortes y Senadores de las respectivas Provincias, los comisionados de ellas, un individuo de cada una de sus Diputaciones, y Don Pedro de Egaña, que tan satisfactoriamente se condujo cuando entregó en París las exposiciones de las mismas.

También se acordó que cada una de las tres Diputaciones se dirigiese separadamente á la Reina Isabel, pidiendo la anulación de todo lo que se hubiese mandado en contravención á la ley de 25 de Octubre de 1839 y al real decreto de 16 de Noviembre del mismo año, interesando principalmente á Egaña para que gestionase el buen resultado de dichas peticiones.

De conformidad con lo acordado en esta conferencia, nombró el 30 la Diputación provincial á Don Manuel de Jane para que en representación de Vizcaya felicitase á la Reina Cristina; y cumpliendo también lo dispuesto en la misma conferencia, se redactó la exposición siguiente, que se remitió á Don Pedro de Egaña, dirigida á la Reina Isabel:

«SEÑORA.—Importuna tal vez parecerá á V. M. la voz de la Diputación provincial de Vizcaya, porque insiste reiteradamente en el mismo clamor y en las mismas súplicas; pero ni sus deberes más estrechos é imperiosos le permiten callar, ni podría resistir la ansiedad y la zozobra en que se halla sino desahogara respetuosamente su dolor, sino esperara de la elevada solicitud de V. M. la justicia, que desde la caída de un poder, que se mostró en extremo adverso al país cuya buena administración le está encomendada, se apresuró reverente á reclamar del Gobierno reparador de

V. M.—Declarada la mayoría de S. M., y empuñado por su hermosa y bienhechora mano el cetro esclarecido de San Fernando, debió creer la Nación española que iba á reposar de las fatigas inauditas, de las vicisitudes amargas, de los sangrientos azares de guerras y revoluciones, porque veía alzarse radiante, puro, acrisolado el trono de V. M., como puerto de salvación y de fortuna, en medio de la confusión y del choque terrible de pasiones impetuosas.—El país vascongado, como el que más había padecido en la borrasca, era también el que más fruto se permitía sacar de la bonanza. Sus alegres ilusiones estarían á pique de desvanecerse si V. M. no le inspirase una confianza ilimitada. Heredó de sus primeros y briosos pobladores leyes y costumbres especiales, que estima al par de su existencia misma, porque son buenas y santas, porque han labrado su prosperidad y bienestar en todas las edades.—La guerra civil, que amenazaba con su duración y sus estragos secar todas las fuentes de la riqueza, y deverar á los mejores hijos de la Patria común, terminó por un convenio, de cuyo cumplimiento generoso y fiel no dudaron un momento los hidalgos vascongados, tan incapaces de faltar á sus palabras como de concebir el menor recelo de que los honrados castellanos faltaran á su fe.—Las Córtes del Reino, partiendo de aquel convenio, base de la paz, por todos los españoles saludada entonces con el más sincero y ferviente entusiasmo, discutieron solemnemente y votaron por unanimidad la ley de 25 de Octubre de 1839, después de haber con claras explicaciones fijado su genuina inteligencia; la madre augusta de V. M. la sancionó; las Provincias Vascongadas la recibieron con júbilo indecible, contando con que en este pacto nuevo, en esta acta adicional á la Constitución política de la Monarquía, se habían refundido y asegurado sus Fueros inmortales. Para que la

ley tuviese inmediata aplicación, el Gobierno encargado de ejecutarla expidió el real decreto orgánico de 16 de Noviembre del mismo año 1839; y en aquella ley y este decreto reposan los indisputables derechos del suelo vascongado, aun mirados bajo el prisma de las teorías modernas más severas y exclusivas; en aquella ley y este decreto se funda también la situación legal del país.—Conocida es de V. M. la dirección extraviada que tomaron los negocios públicos después que sucesos de tristo recordación alejaron á la madre amorosa de V. M. de las playas de Valencia. Conocidos le serán igualmente los malogrados esfuerzos que se hicieron en Octubre de 1841 para desagraviar á la excelsa proscrita y restablecer los principios que se habían conculcado en Septiembre del año anterior. El Señorío de Vizcaya participó no poco de aquellos esfuerzos, juntamente con sus hermanas Guipúzcoa y Alava. Volviéronle el rostro la fortuna, y el General Espartero, que á la sazón ejercía el supremo poder ejecutivo, dictó en Vitoria, con fecha 29 de Octubre del expresado año 1841, el sañudo decreto por el cual desquició ó hizo trizas la máquina administrativa de las Provincias Vascongadas, con notoria usurpación de las facultades de los cuerpos colegisladores, con vilipendio de la legalidad existente, y de cuanto había de más sagrado y respetable. De la voluntad rencorosa de un hombre que contaba con el apoyo de la fuerza material nació aquel mandato injusto, y la fuerza sola le ha sostenido. El ex-Regente, contra una ley expresa, solemne, fundamental, puede decirse así, destruyó de una plumada nuestras instituciones especiales. Si las demás usurpaciones suyas, si todos sus desafueros y demasías se han ido reparando con general contentamiento y aplauso, desde que se le privó por el voto nacional de su efímera autoridad, y se sentó V. M. en el solio de sus claros progenitores, no le cabe duda á la Diputación que suscribe

de que S. M. se dignará fijar su alta consideración en el estado aflictivo en que las Provincias Vascongadas se encuentran, y les restituirá lo que la más rígida equidad no les podría negar, y les fué inicuaamente arrebatado. Las ordenes y decretos posteriores al funesto decreto de Vitoria han sido, como consecuencia necesaria de él, estériles para la Nación, dañosísimos á los habitantes de esta tierra infortunada y nulos á los ojos de la razón y de la luz.—Ofendería la Diputación la penetrante y previsora inteligencia de los Consejeros responsables de V. M., si se ocupara en explicar estas ideas tan sencillas como ovidentes. Limitarase por lo tanto á suplicar rendidamente á V. M., se digne declarar en toda su fuerza y vigor la ley de 25 de Octubre de 1839 y el real decreto de 16 de Noviembre del mismo año, derogando todas las disposiciones que desde Septiembre de 1840 hasta el día se hayan en contravención de aquéllas mandado ejecutar, y estuviesen en la actualidad vigentes.»

En vista de un oficio que pasó la Diputación de Alava respecto á la ejecución del monumento conmemorativo, que estaba acordado levantar en Vergara, resolvió la Diputación de Vizcaya el 4 de Mayo no contribuir por su parte á que se active la erección de dicho monumento, mientras no se fije definitivamente la suerte de estas Provincias, y no se sepa si se da una interpretación equitativa y regular al convenio de Vergara y á la ley de 25 de Octubre de 1839, que fué su consecuencia inmediata; pues que lejos de sentir que SS. MM. extrañen la falta del monumento proyectado en el viaje á esta Provincia que se anuncia para el próximo verano, se felicitaría la Diputación de ello, «porque así se explicaban de una manera muda y respetuosa, pero elocuente, los pesares que los vascongados experimentan al ver burladas sus más lisonjeras y justas esperanzas y escarnecida su fe.»

Dió cuenta Don Manuel de Jane el 15 de Julio «de todas las diligencias por él y sus dignos compañeros de las otras dos Provincias hermanas, en unión con el señor Don Pedro de Egaña practicadas en la Corte, tanto para poner en manos de S. M. la Reina madre la felicitación de que fueron portadores, como para obtener en favor del país vascongado cumplida justicia del Gobierno. Leyóse con este motivo la extensa correspondencia de dicho señor Don Pedro de Egaña y la suya, en que se explican menuda y circunstanciadamente el curso y vicisitudes de sus gestiones y el término final obtenido por el real decreto publicado por S. M. en Barcelona el 4 del corriente, y publicado en la Gaceta de Madrid el 10 del mismo, que aunque incompleto y no enteramente satisfactorio, reintegra hasta cierto punto en su posición foral á las Provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, para continuar desde ella con más vigor y mayores probabilidades de éxito las reclamaciones entabladas. La Diputación se manifestó alta y cumplidamente satisfecha del celo, tino y perseverancia con que se habían conducido las delicadas y difíciles negociaciones que al señor Egaña le fueron cometidas, y en las cuales le habían ayudado tan activa y eficazmente, con tan acendrado patriotismo, el mismo señor Jane y sus colegas, pues si el resultado no ha correspondido ni á las esperanzas lisonjeras que al principio se concibieron, ni á la habilidad suma con se ha trabajado por los encargados de defender los derechos del suelo vascongado, ni á la santidad de éstos, culpa ha sido de tristesísimas circunstancias, y no por eso merecen menos gratitud y elogio los que con fuerzas desiguales, y con una voluntad é inteligencia superiores á todo encarecimiento, han luchado esforzadamente contra ellas, obteniendo cuanto era dable obtener de favorable en los momentos actuales. Acordóse por tanto consignarlo así en esta acta como un tributo débil

pero sincero de reconocimiento.»

Expuso el mismo Janc, que en virtud de las facultades que tenía, convino con los otros comisionados en regalar á Egaña una escribanía de plata, con las armas de las tres Provincias hermanas, que se estaba fabricando en la platería de Martínez en Madrid; y que ya que Egaña rehusaba admitir remuneración alguna, se le debían abonar los gastos de carruajes, gratificaciones y demás que tenía hechos. La Diputación, ignorando el importe de estos gastos, dejó y encomendó el satisfacerlos «al honor de su sucesora.»

La Diputación examinó en seguida el mencionado decreto de 4 del corriente, haciéndose cargo de las comunicaciones de Egaña sobre el particular del 8 y del 10, así como de las que habían mediado con las Diputaciones de Alava y Guipúzcoa; y resolvió cesar en sus funciones en el momento mismo en que le fuese comunicado el decreto, «sin dar lugar á que algún acontecimiento imprevisto y remoto tal vez, pero posible, viniese á impedir que el país se constituyese foralmente.»

Se reunieron el 18 bajo la presidencia del Jefe político «en funciones del Corregidor político» Don Antonio de la Escosura, los Diputados generales Don Domingo Eulogio de la Torre y Don Matías de Izaguirre, el Síndico Don José Angel de Torres Vildósola y el Secretario Hormaeche, convocados para cumplimentar el decreto del 4, quedando instalada la Diputación. Los Diputados y el Síndico expusieron, «que deseando ardientemente contribuir á que se congregase inmediatamente el país á la sombra del árbol de Guernica, símbolo de sus franquezas y libertades, convenían en volverse á colocar al frente de su administración por cortos días, no para que le parase el menor perjuicio en sus derechos, sino para ponerle en el camino legal de reivindicarlos.»

Se reunió el 22 el Regimiento general, con asistencia de

los Padres de Provincia Don Marcos Joaquín de Retuerto, Don Joaquín de Ugarte, Don León de Jauregui, Don Manuel María de Aldecoa, Don Pedro María de Albíz, Don Pedro Antonio de Ventades, Don Federico Victoria de Lecea, Don Pantaleón de Aguirre y Don Gil de Ugarte.

Después de haber expuesto el Presidente el objeto de la reunión, que era el oír el dictamen de las personas congregadas sobre la convocación de las Juntas generales y los demás puntos conexiónados con esto, se leyó el real decreto del 4, que dice así:

«En atención á las razones que me ha hecho presentes, y de acuerdo con el parecer de mi Consejo de Ministros, he venido en decretar lo siguiente:

»Artículo 1.º Conforme á lo prevenido en la ley de 25 de Octubre de 1839, se procederá desde luego á la formación del proyecto de ley que se deberá presentar á las próximas Cortes para hacer en los Fueros de las Provincias Vascongadas las modificaciones que en dicha ley se previenen.

»Art. 2.º Para que las expresadas Provincias puedan ser oídas, conforme á lo dispuesto en el artículo segundo de la citada ley, nombrará al efecto cada una de ellas dos comisionados, que deberán presentarse inmediatamente á mi Gobierno á disponer cuanto en el particular juzguen oportuno.

»Art. 3.º Para el nombramiento de dichos comisionados se reunirán las Juntas generales de las Provincias de Vizcaya, Alava y Guipúzcoa en la forma que lo han solido hacer anteriormente.

»Art. 4.º Los Jefes políticos de las expresadas Provincias, con el caracter de Corregidores políticos, presidirán las Juntas generales, y no les permitirán ocuparse de otras cosas que las designadas en este real decreto, y en las demás de costumbre que no estén en oposición con él.

»Art. 5.º Se nombrarán asimismo en dichas Juntas generales las Diputaciones forales en el modo y forma que han solido hacerse.

»Art. 6.º Las Diputaciones provinciales actualmente nombradas, subsistirán, sin embargo, con arreglo al real decreto de 16 de Noviembre de 1839 y á la ley de 23 de Abril de 1842, pero sólo entenderán por ahora en los asuntos designados en el artículo tercero de dicho real decreto, y en el cincuenta y seis de la ley vigente sobre libertad de imprenta. En lo demás entenderán las Diputaciones forales luego que estén nombradas.

»Art. 7.º Los Ayuntamientos, interín se hace el arreglo definitivo de los Fueros, tendrán las atribuciones que gozaban antes del decreto de 29 de Octubre de 1841, en cuanto no se oponga á este real decreto, y exceptuando los de aquellos pueblos en que á petición suya se ha establecido ó estableciere la legislación común.

»Art. 8.º No se hará novedad ninguna á consecuencia de este decreto en el estado actual de las aduanas, en lo tocante á las rentas públicas, ni en la administración de justicia.

»Art. 9.º Quedará asimismo á cargo de los Jefes políticos, en el modo y forma que en las demás Provincias del Reino, todo lo concerniente al ramo de protección y seguridad pública.» Siguen las fórmulas de costumbre.

«Hízose cargo el Regimiento de las importantes disposiciones que el supremo mandato preinserto abraza, se mostró agradecido á lo que de favorable y benévolo para este país contiene, sin dejar de acatarlo profundamente en la parte de él que mantiene todavía en pie algunas de las innovaciones en oposición á sus antiguas leyes y costumbres introducidas, acerca de las cuales el propio país, á quien se le debía reunir inmediatamente, por medio de sus represen-

tantes legítimos, so el arbol de Guernica, podría entablar las gestiones respetuosas que juzgase oportunas.»

Uno de los Padres de Provincia llamó la atención sobre la necesidad de que se variasen los Ayuntamientos antes de hacer la elección de apoderados para las Juntas; pero teniendo presente «que habían sido elegidas las actuales corporaciones municipales con arreglo á Fuero, aunque en su personal constitución se habían hecho algunas reformas; teniendo también presente, que de cambiarlas totalmente se originarían complicaciones y trastornos, que podrían no sólo entorpecer y dilatar, sino impedir quizá la celebración de la Junta, y que en la esencia no habría diferencia capital, supuesto que se les habían reintegrado sus atribuciones forales, se acordó que se expidiese la convocatoria según la costumbre constantemente observada, sin alterar su organización hasta que la repetida Junta decida la marcha que en esta materia habrá de adoptarse.

Este es el relato auténtico de lo ocurrido la última vez que se restableció el régimen foral en Vizcaya, aunque con las restricciones que quedan expresadas, siendo á la sazón Don Pedro Pidal Ministro de la Gobernación y Don Ramón Narvaez Presidente del Consejo de Ministros, ocho meses después que las Cortes habían declarado mayor de edad á la Reina Doña Isabel segunda.

Y en verdad que es en sumo grado satisfactorio no tener que tributar sino aplausos con este motivo á todos los que intervinieron en tan memorable suceso en defensa de los derechos de Vizcaya. Sus nombres están ya escritos y no deben olvidarse nunca. Entre ellos ocupa un lugar eminente Don Pedro de Egaña, infatigable y constante en sus levantados propósitos, que supo además utilizar hábilmente para bien de su país la influencia que alcanzó en el ánimo de la Reina Cristina. La gratitud de la posteridad no debe

escatimarse nunca á los buenos servidores de la Patria, porque es muchas veces la única recompensa que se les otorga, y siempre el título más digno con que se puede honrar su memoria, ya que en cambio otras veces tan sólo complacencias, flaquezas y apego excesivo á los provechos particulares son los recuerdos que nos dejan de su vida política los hombres que han influido en el gobierno de los pueblos.

Lo que ha ocurrido desde Julio de 1844 hasta Julio de 1876 pertenece ya á la historia contemporánea, ó tiene con ella estrecho enlace. Vizcaya resistió durante algunos años unida á sus hermanas, cuanto pudo las tentativas que se hicieron para destruir sus ya mermadas instituciones; hubo algunos periodos de calma; pero de nuevo se advertían señales inequívocas de gravísimos peligros hasta que llegó la catástrofe final, cuyas consecuencias duran todavía, y que no es ésta ocasión oportuna de juzgar serenamente.

Los siglos transcurridos desde Felipe segundo á Isabel segunda abrazan el periodo de la historia de Vizcaya, en que puede asegurarse que el régimen foral se ha desarrollado á la luz del día, sin que sea necesario ilustrarlo con investigaciones prolijas y conjeturas más ó menos plausibles; los documentos auténticos que de ese periodo nos quedan hablan con clarísimo lenguaje, que no deja lugar á dudas, sobre su verdadera naturaleza é importancia. De ellos resulta evidentemente que los principios fundamentales de la Constitución vizcaína, antes y después de escribirse, esto es, que así sus leyes como sus usos y costumbres muestran los caracteres distintivos del gobierno democrático directo que fué poco á poco, como lo pedían las necesidades públicas, convirtiéndose en gobierno democrático indirecto. De las reu-

niones al aire libre bajo el árbol de Guernica, donde permanecían en pie los concurrentes á la Junta, se pasó al cabo de algún tiempo á deliberar bajo techado con asientos que se prepararon para los que venían con poder de sus pueblos á la Junta. Y esta circunstancia, que parece trivial á primera vista, encierra por el contrario un sentido característico que sirve para explicar cumplidamente la trasformación que el gobierno democrático de Vizcaya ha tenido en el curso de los siglos.

A la manera que en los palimpsestos que nos han quedado de la Edad media, cuando se borra la escritura superpuesta, aparecen los rasgos de la escritura primitiva, del mismo modo en las costumbres políticas de Vizcaya, cuando se prescinde de las novedades que por una ú otra causa se han introducido en ellas, resulta de una manera expresiva el carácter democrático que inspiró nuestra Constitución antigua.

Mucho se ha controvertido sobre el origen del Señorío de Vizcaya y es litigio que nunca ha de cerrarse, porque así cuadra á los opuestos intereses que en él se ventilan. Ni es ahora ocasión oportuna para disertar extensamente sobre este punto. Lo que sí cabe afirmar, con el testimonio de todo lo ocurrido en Vizcaya durante los tres últimos siglos, es que el espíritu que ha resistido, con varia fortuna, en verdad, pero con inquebrantable constancia siempre, á las influencias poderosas que conspiraron á destruirlo, no nació por concesión ni merced de los Reyes, como los privilegios y diplomas que algunos autores han puesto por origen á nuestras libertades, y que ese espíritu no se ha encerrado nunca en tumbos y cartularios, como pretenden los enemigos de nuestra independencia histórica.

No es dable confundir, cuando serena é imparcialmente se examinan las cosas, el origen de un pueblo con los su-

cesos de su historia, en que la fuerza y la violencia marcan su acción de una manera indeleble. En todas partes, desde el principio del mundo, se advierte la misma lucha del más poderoso contra el más flaco, y la misma tendencia del más poderoso á destruir la independencia del más flaco, y hasta á borrar los títulos en que semejante independencia se apoye, como si fuese pretensión injustificable y punible el reclamar derecho alguno al que tiene medios suficientes para negar á los otros toda clase de derechos. No debe extrañarse, por lo tanto, que en Vizcaya hubiese regido también esta ley general de la sociedad humana.

Que la Constitución vizcaína no es parto de legisladores teóricos á la manera de algunas antiguas y de todas las modernas desde la revolución francesa acá, nadie lo ignora; que los vizcaínos fundamos un título de gloria en esta circunstancia, es también universalmente conocido; por eso vivió tanto tiempo nuestra Constitución, y se arraigaron sus principios tan hondamente en los habitantes de este suelo. Lo cual no quiere decir que nuestra Constitución no haya variado mucho en sus accidentes y hasta en algunos puntos esenciales. ¿Cómo negarlo, si la variación procede de la naturaleza misma de las cosas, porque nada hay estable en la sucesión de los siglos? Lo único que debe permanecer invariable es el espíritu de las leyes de cada pueblo; el concepto de su origen político y de su independencia; y estas circunstancias, en verdad, que no cabe negarlas tratándose de Vizcaya, ni aun por el ánimo más preocupado contra las pretensiones desmedidas que se nos achacan.

La Constitución de Vizcaya se ha desarrollado en el curso del tiempo, como todas las Constituciones del mundo que han vivido largos siglos, creando nuevos órganos y medios de gobierno siempre que eran necesarios, y dejando que caducasen los que resultaban inútiles; pero de modo que se

obedeciese constantemente en las reformas, antes á la ley de la experiencia que modifica las costumbres que á la teoría caprichosa del filósofo que las tiene en poco sino se sujetan al molde que imaginó su fantasía, y no se avasallan á la arrogancia del sabio que pretende corregir las obras de la Providencia. No era la Constitución de Vizcaya, como tantas otras, un *homunculus* formado artificialmente en la redoma de un alquimista, sino un cuerpo robusto y vigoroso que tuvo su tierna infancia, que llegó á la virilidad expuesto á grandes peligros, y que no morirá todavía caduco y extenuado si sus propios vicios no le degradan y consumen prematuramente, antes de que logre reponerse de la dolencia que hoy le aqueja.

Vizcaya ha vivido mucho tiempo participando de los vicios políticos de España. El estado poco lisonjero de cuanto se refiere á la vida pública en esta nación salta á los ojos de todo el mundo; hay en ello unanimidad completa de pareceres; los llamados órganos de la opinión hacen coro para rebajar el concepto que el Gobierno nacional les merece; sólo se olvidan del descrédito en que le conceptúan cuando el descrédito trasciende fuera de España y los extranjeros repiten lo que los mismos españoles aseguran, porque entonces asoman algunos rasgos de españolismo que nunca contribuirán ciertamente á curar los males de España. Si esta nación, pues, ha errado el rumbo que debía llevarla á la restauración de su grandeza; si sus gobernantes no aciertan á sacarla de su postración y abatimiento; si el sistema político que se le ha impuesto no llena sus necesidades, ni remedia sus males; claro está que habrá que buscar el remedio en otra parte que en lo ya conocido, y marcar nuevo derrotero á la nave del Estado.

Contribuyan los vizcaínos cuanto esté en su mano, que no sería poco, si lo hiciesen de buena voluntad y de común

acuerdo, para que el nuevo derrotero se siga resueltamente, y no se habrá perdido la esperanza de que coincida el restablecimiento de los Fueros con ventajas generales para la nación entera.

«Puesto que la revolución triunfó extirpando las instituciones regionales, venzámosla á nuestra vez, restaurándolas, que es viejo y certísimo adagio el de tomar del enemigo el consejo.»¹

Hé aquí trazado en breves palabras muy expresivamente el camino que debe seguirse. Mas para que sea asequible tan magna empresa, es indispensable corregir primero los vicios que se han fomentado en nuestro propio territorio, que son los peores, porque están encarnados en nuestro cuerpo mientras que los otros son relativamente fáciles de prevenir. Es indispensable deponer errores, nacidos de una idea generosa, si se quiere, pero opuestos hoy de todo punto á la salvación de la Patria; es indispensable que no se interponga empeño ni compromiso alguno para el pueblo vizcaíno, que embarace en lo más mínimo la defensa de su fe, la restauración de sus Fueros, por sus propios méritos, como causa bastante elevada por sí sola para no necesitar de otros estímulos que han de conspirar siempre, cuando menos, á entorpecer su progreso, ya que no frustren por completo toda esperanza de buen éxito.

La historia de Vizcaya de los tres últimos siglos encierra ejemplos que no deben olvidarse; lecciones provechosísimas que pueden enseñarnos á evitar los errores preferitos é impedir que se reproduzcan los desastres que tan lamentables huellas han dejado.

No todo ha sido patriotismo en nuestra historia, amor

¹ Discurso leído por Don Arturo Campión en el Círculo regional tradicionalista de Pamplona el día 20 de Mayo de 1892.

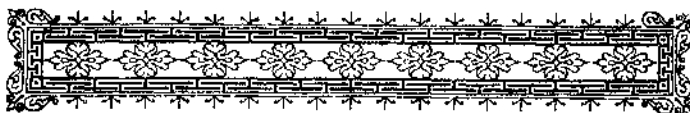
acendrado al Fuero, tesón y energía en defenderlo; ha habido faltas y flaquezas en Vizcaya como en todas partes; de nada serviría el tratar de ocultarlas, ni siquiera de atenuarlas, como no sea para contribuir á que vivan las generaciones futuras completamente engañadas respecto al comportamiento de las que las precedieron. Mas si hay algo en la historia de Vizcaya que no es plausible ni excusable, hay en cambio muchísimo que honra á nuestra estirpe y la hace digna de que se perpetúe su memoria como ejemplo de lo que valen y lo que son los pueblos libres limitados á estrecho territorio, y expuestos constantemente, sin contar con un día seguro de reposo, á las asechanzas, á los ombates de poderosos enemigos, que disponen de toda clase de remedios para ahogar el espíritu de su gloriosa independencia. Vizcaya vive todavía, y un pueblo que vive no debe desesperar de la recuperación del bien perdido, si las virtudes cívicas que fueron su más preciso ornamento no la abandonan por completo, y sabe aprovechar con su antigua tenacidad y fortaleza todas las circunstancias favorables que concurren en España al renacimiento del espíritu regional, reciamente combatido por las Constituciones modernas y por el gobierno parlamentario que es su consecuencia necesaria.

La desaparición de las leyes y Fueros regionales no ha dado á España honra ni provecho; la unidad nacional no es ciertamente hoy más firme que lo era en 1808 cuando todas las Provincias de España se levantaban contra los franceses, y organizaban la resistencia que preparó la caída de Bonaparte; ni es hoy tampoco España más respetada ó temida que lo era en los reinados de Carlos cuarto y de Fernando séptimo, no obstante el decantado acabamiento de la unidad nacional á la francesa, de que tantas maravillas se prometían los partidos liberales, y á que tanta eficacia atribuyeron para curar

los males de España, causados, según decían, por los abusos y privilegios del régimen absoluto, siendo harto evidente, por desgracia, que han hallado traza de sustituir á los abusos y privilegios antiguos otros de no menor magnitud y trascendencia. No sería, pues, cuerdo, en vista de esta postura de las cosas, dejar que se extinguiese el amor á los Fueros y á su régimen inolvidable, contribuyendo con funestas discordias á que extienda constantemente su predominio el enemigo común de nuestras tradiciones. Aun es tiempo de conseguir que se preserve el carácter vizcaíno de la corrupción que le amenaza. Para ello no hay otro medio que el de trabajar incesantemente porque Vizcaya vuelva á ser la tierra apartada de que nos habla la historia, y dándose la mano con las regiones que aspiran á igual restauración de sus derechos, hacer cuanto esté á nuestro alcance con fe viva y tesón inquebrantable para que recobre nuestra tierra el beneficio de sus leyes y costumbres forales, con el amor á la Religión de nuestros mayores y á las libertades que nos legaron por única bandera.

FIN





ÍNDICE

CAPÍTULO I.—El nuevo código de comercio y la supresión del Consulado de Bilbao.—Exposiciones al Rey en defensa de los Fueros.....	7
CAPÍTULO II.—El recemplazo del ejército.—La sucesión de la Corona de España.—Medidas de vigilancia.....	52
CAPÍTULO III.—Invasión de los emigrados españoles.—Disposiciones que toma el Señorío para contrarrestarlos.—La Princesa de Asturias..	69
CAPÍTULO IV.—Los Padres de Provincia.—Los caminos del Señorío.—La industria del hierro.—Los constitucionales no son admitidos á los empleos públicos.—El tribunal de comercio.—La fuerza armada del Señorío.....	90
CAPÍTULO V.—Los arbitrios para la construcción de caminos.—Las tachas políticas.—El plan de iguala.—La casa del Señorío en Bilbao.—Los paisanos armados de Vizcaya.—La seguridad pública.—Las fincas de propios y comunes.—La amnistía.—El Capitán general de Guipúzcoa.—La real pragmática sanción de 29 de Marzo de 1830.—La habilitación de San Sebastián para el comercio de América.—El General Castañón.....	128
CAPÍTULO VI.—El Corregidor Mota.—Los poderes para las Juntas generales.—El Reglamento interior de las Juntas y el de elecciones del Gobierno universal del Señorío.—El reintegro de la plata recogida de las iglesias en 1795.—El puerto de Elanchoba.—La reducción de numarias.—Felicitación á Fernando séptimo por sus medidas de gobierno..	163

CAPÍTULO VII.—El alzamiento carlista.—La Diputación general restablecida en Bilbao.—El Obispo de Calahorra.—La Junta de subsistencias.—La creación de la Audiencia de Burgos.—El Comisario regio Alonso y sus medidas.....	208
CAPÍTULO VIII.—Diferencias de la Diputación general con el Comisario regio.—El Estatuto real.—La Diputación se niega á admitirlo.—Situación apurada en que se encuentra aquella.....	235
CAPÍTULO IX.—Nuevas diferencias con el Comisario regio y con la autoridad militar.—Se desatienden las reclamaciones de la Diputación.	265
CAPÍTULO X.—Supresión de la Comisaría regia y nombramiento de Corregidor interino.—El primer sitio de Bilbao.—La administración de justicia.....	297
CAPÍTULO XI.—Las contratas para las subsistencias del ejército.—Exposición de los Diputados generales á la Reina sobre la conservación de los Fueros.—Restablecimiento de la Constitución de 1812 y disolución de la Diputación general por negarse á jurarla.—Nombramiento de una Diputación provincial, que reserva los derechos de Vizcaya.....	313
CAPÍTULO XII.—Se disuelve la Diputación provincial y se restablece la general.—El jurado para los delitos de imprenta.—Las alocuciones de Espartero en Hernani.—La supresión de la Diputación general.—Escritos favorables á los Fueros.....	339
CAPÍTULO XIII.—La Diputación provincial y su conducta hasta el fin de la guerra.—El convenio de Vergara.....	366
CAPÍTULO XIV.—Los antecedentes de la ley de 25 de Octubre de 1839.—Representación del vecindario de Bilbao á las Cortes.—La correspondencia del Diputado provincial Urioste.....	391
CAPÍTULO XV.—La ley de 25 de Octubre y el decreto de 16 de Noviembre de 1839.—Reunión de las Juntas generales.—Proclamación de Isabel segunda.—La unidad constitucional.—Los apoderados de Bilbao en las Juntas.—Los comisionados en Corte.—La nueva Diputación general	419
CAPÍTULO XVI.—Conferencias de las tres Diputaciones vascongadas.—Las contribuciones atrasadas.—El discurso de Olano.—El hierro extranjero.—La facción de Balmasoda.—El Teniente general interino Foruria.—La conmemoración del convenio de Vergara.—El pronunciamiento de Septiembre.—Las atribuciones de los juzgados del Señorío.—La carta de las Diputaciones generales á la Reina Cristina.....	444
CAPÍTULO XVII.—La supresión del pase foral.—La conducta de la Regencia del Reino con respecto á las Provincias Vascongadas.....	480
CAPÍTULO XVIII.—Exposición que hacen los comisionados en Corte en la Junta general.—Los Consultores.—La segunda enseñanza.—Los em-	

pleados del Señorío.—Medidas de administración y gobierno	507
CAPÍTULO XIV.—La correspondencia de los comisionados en Corte con los Diputados generales sobre los proyectos del Gobierno.—El reglamento de caminos del Señorío.—El pronunciamiento de Octubre.—Se reúnen las Juntas generales	542
CAPÍTULO XX.—Entrada de Zurbano en Bilbao.—Los decretos de 27 y 29 de Octubre de 1841, dados en Vitoria.—La Comisión económica y su proyecto de arreglo de la cuestión foral.—La Diputación provincial hasta la caída de Espartero.	580
CAPÍTULO XXI.—La Junta de gobierno.—Restablecimiento de la Diputación general	606
CAPÍTULO XXII.—Prohíbe el Gobierno la celebración de Juntas generales y disuelve la Diputación general.	623
CAPÍTULO XXIII.—Conducta laudable de la Diputación provincial.—Sus gestiones para el restablecimiento del régimen foral.—El decreto de 4 de Julio de 1844.—Reflexiones finales.	660

Entre algunas erratas é incorrecciones que se advertirán en la lectura de esta obra, ha parecido necesario salvar las que se expresan á continuación:

Tomo VI, página 313, donde dice «por él patrocinado», debe leerse «por el Gobierno supremo patrocinado.»

Idem, página 329, donde dice «pasó otro», debe leerse «pasó otro oficio.»

Tomo VII, Capítulo XIX, debe leerse «Cavanilles» donde dice «Cavanillas.»

Tomo VIII, página 367, donde dice «pretendió que se jurase», debe leerse «pretendieron que se jurase.»

